

TESIS DOCTORAL

PROGRAMA DE DOCTORADO EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA

DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA



# **NACIÓN ESPAÑOLA Y ESTADO AUTONÓMICO EN EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (1974-1982)**

**Presentada por:**

Vega Rodríguez-Flores Parra

**Dirigida por:**

Dr. Ismael Saz Campos

Dr. Ferran Archilés Cardona

**Mayo 2017**



## **ABSTRACT**

This doctoral thesis addresses the question of how the Spanish Socialist Party contributed to the definition of the model of nation and State that succeeded in Spain during a crucial stage of our recent history: The Transition and democratic construction. In particular, we have focused on the period between October 1974, the celebration of the XIII Party Congress in Suresnes and the socialist victory in the October 1982 general elections, reaching the party to power. Apparently, between those dates there was a radical change, going from the defense of the right of self-determination in the Resolution on nationalities and regions, of the 1974 congress, to the culmination and closure of an autonomous model that was rationalized from mid-1981 and which saw that policy sanctioned with the approval of LOAPA in July 1982.

Furthermore, this research aims to observe socialist influence in defining the State of Atonomies and analyze the continuities and changes that were taking place in socialist thought. Issues such as what they understood by federalism, self-determination, autonomy, nation, nationalities, regions, or solidarity and how they imagined the application of such concepts in the Spanish context cannot be disconnected from the concrete conjuncture in which they were used. The PSOE, adapted to each circumstance based on its ideological tradition and a changing framework that required adapting some theoretical approaches to the practice of an autonomous development surpassing the expectations of the main political parties. From this point of view, we have understood the Constitution as a turning point but not a breakthrough, which in fact connects seemingly many more radical postulates with the harmonization that gradually underwent the process of construction of the State of Autonomies, the culmination of which produced the Autonomous Agreements of July 1981. Agreements established between the Socialist Party and the Union of Democratic Center, prevailed the state stability and unity over the recognition of the national difference.





## ÍNDICE

ABSTRACT .....	1
INTRODUCCIÓN.....	5
I. DE SURESNES A LA CONSTITUCIÓN. IMAGINANDO ESPAÑA .....	27
1. PSOE, derecho de autodeterminación y federalismo .....	27
La cuestión nacional en la tradición socialista española .....	27
El PSOE de congreso a congreso (1974-1976) .....	34
2. Más allá del programa máximo .....	46
3. El debate constitucional.....	70
II. LA CAMPAÑA «MARIDO» Y EL MODELO DE ESTADO DE UN PARTIDO «SERIO».....	93
1. Una campaña seria.....	94
2. De la teoría a la praxis de la campaña .....	106
3. El análisis postelectoral .....	118
4. Euskadi, Andalucía y el peligro nacionalista.....	132
III. EL «VIEJO Y NUEVO PARTIDO» ANTE EL XXVIII CONGRESO .....	147
1. La Constitución como punto de partida. Una resolución acorde a los nuevos tiempos.....	152
2. El abandono del derecho de autodeterminación .....	170
Hablan las agrupaciones .....	171
El debate en la Comisión y en el Pleno del Congreso .....	185
3. Un modelo de Estado y un modelo de Partido .....	194
IV. LA AUTONOMÍA COMO SOLUCIÓN A LOS AGRAVIOS. PERO, ¿QUÉ AGRAVIOS?.....	207
1. La puesta en marcha de una política autonómica .....	207
2. Los Estatutos de dos nacionalidades históricas .....	225
3. El Congreso Extraordinario y la sanción de la alternativa realista.....	246

V. ¿REFORZAR LA UNIDAD?: LA CONSTRUCCIÓN AUTONÓMICA TRAS LOS REFERENDOS VASCO Y CATALÁN .....	265
1. Galicia, un problema no tan urgente.....	265
2. La urgencia del Estatuto andaluz.....	276
3. La quiebra del consenso .....	305
4. El discreto encanto del pragmatismo: el caso valenciano .....	325
5. ¿Consolidación o viraje hacia la simetría? .....	346
VI. EL ESTADO ARMÓNICO Y LA LOAPA .....	369
1. Un equilibrio inestable .....	374
2. A la espera de Andalucía.....	394
3. Sin obstáculos para el pacto.....	405
4. Un golpe frustrado y una nueva oportunidad para la armonización.....	422
5. Aprobar la LOAPA y hacer frente al «nacionalismo insolidario» .....	440
CONCLUSSION .....	465
BIBLIOGRAFÍA .....	475

## INTRODUCCIÓN

Con la presente Tesis Doctoral, «Nación española y Estado Autonómico en el Partido Socialista Obrero Español (1974-1982)», tenemos la intención de analizar cuál fue la actitud del PSOE ante una de las cuestiones más problemáticas y que más interés y polémica generaron en el período de tránsito entre la dictadura y la democracia. El objetivo de este trabajo es preguntarnos acerca del modelo de nación y de Estado que imaginó el Partido Socialista para España a inicios de la Transición, y observar cómo fue evolucionando con los cambios coyunturales y ante la concreción de los postulados teóricos que supuso la construcción del Estado Autonómico.

Esta es, por tanto, una Tesis que no ignora la coexistencia dentro del Estado de identidades nacionales diferenciadas, a pesar de que se centra en estudiar la correspondiente al Estado-nación español, que fue para la que el Partido Socialista Obrero Español diseñó un proyecto estatal y nacional soberano. El objeto de estudio prioritario de esta investigación es en consecuencia el comportamiento de los órganos centrales socialistas y no de las posiciones que cada Federación o Partido federado mantuvo en relación a sus respectivas identidades nacionales o regionales. Sin embargo, la influencia en las estructuras federales de las dinámicas territoriales hace necesario no perderlas de vista por completo, del mismo modo que sin observar la ascendencia que ejerció la dirección socialista en los órganos territoriales, el estudio de los mismos quedaría mutilado. Así pues, a pesar de no obviar estas cuestiones, las hemos analizado sólo en cuanto eran necesarias para entender la actuación del Partido como un todo, entre otras cosas porque ya existen excelentes trabajos que se han ocupado de ello, especialmente en los casos más relevantes para el problema nacional<sup>1</sup>. Del mismo modo, no nos hemos ocupado del conjunto del socialismo, de grupos como el Partido Socialista Popular o de los partidos integrantes en la Federación de Partidos Socialistas, que acabaron integrados en el PSOE, y que hemos contemplado únicamente desde la perspectiva de la influencia que pudieron ejercer en el seno de este Partido una vez fueron asimilados.

---

<sup>1</sup> Así, por ejemplo para el caso catalán destaca Carme MOLINERO y Pere Ysàs: *La cuestión catalana. Cataluña en la transición española*, Barcelona, Crítica, 2014. Para el vasco Andrea MICCICHÈ: *Euskadi socialista. El PSE-PSOE y la Transición en el País Vasco (1976-1980)*, Madrid, Pablo Iglesias, 2009; o Eider LANDABEREA: *Los “nosotros” en la Transición. Memoria e identidad en las cuatro principales culturas políticas del País Vasco (1975-1980)*, Madrid, Tecnos, 2016.

Para abordar los objetivos descritos, el periodo de investigación se acota entre 1974 y 1982, dentro del cual la promulgación de la Constitución supuso un decisivo punto de inflexión, aunque no de ruptura, como defenderemos más adelante. La primera etapa (1974-1978), la hemos trazado a partir de la *Resolución sobre nacionalidades y regiones*, aprobada en el XIII Congreso del Partido celebrado en Suresnes, momento en el que por primera vez los socialistas defendieron abiertamente el derecho de autodeterminación; y concluye con la promulgación de la Constitución, cuando los grandes principios esgrimidos a comienzos de aquel periodo quedaron eliminados o aplazados hasta nueva orden, sancionándose un texto constitucional que impedía de facto que aquellos planteamientos pudieran materializarse. Por otra parte, nos hemos detenido especialmente en la segunda etapa (1979-1982), menos analizada por la historiografía hasta la fecha, por lo que respecta a la actitud socialista frente al problema de la articulación territorial y nacional, y que a nuestro juicio es muy reveladora de las convicciones del Partido al respecto. Además, fue en esta fase cuando el proyecto nacional del PSOE para España, no sólo se mostró en toda su amplitud, sino que resultó decisivo para construir el sistema autonómico (que en muchos territorios quedó en manos de los propios socialistas, aunque no en Cataluña ni el País Vasco). Observar cómo fue evolucionando la idea y el proyecto nacional del PSOE y qué factores intervinieron en las modificaciones, o qué cambios y continuidades existieron entre ambos periodos, son objetivos preferentes de esta investigación.

En cuanto a los principios teóricos que encuadran este trabajo, hay que comenzar diciendo que asumimos la definición de nación como una «comunidad imaginada» que formulara Benedict Anderson<sup>2</sup>. Así pues, otorgamos un peso importante al hecho de cómo imaginaron los socialistas su nación y cómo contribuyeron a construir España en el proceso siempre inacabado del *nation-building*. Esta perspectiva tiene muy en cuenta, por tanto, los mecanismos de transmisión de la identidad nacional y el protagonismo de las culturas políticas como actores fundamentales en la creación, redefinición y difusión

---

<sup>2</sup> El trabajo de Anderson produjo la apertura a perspectivas culturales de los estudios alrededor del nacionalismo y se situó con la idea de la nación como constructo socio-cultural, como producto de la modernidad, Benedict ANDERSON: *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*, México, Fondo de Cultura Económica, 2006. Otras importantes aportaciones en este sentido han sido las de Ernest Gellner o Eric Hobsbawm, véase Ernest GELLNER: *Nacionalisme*, Cararroja, València, 1998; o Eric HOBSEBWM: *Naciones y nacionalismo desde 1870*, Crítica, Barcelona, 2004.

del «nosotros» nacional a través de sus discursos y prácticas también en el periodo cronológico que nos ocupa<sup>3</sup>.

Cuando se investiga cómo se transmite la identidad nacional entre las culturas políticas de izquierdas en la transición democrática española, uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos es el del rechazo consciente al nacionalismo español por parte de las mismas, o más bien, al discurso oficial de este nacionalismo. Para entender el porqué de este rechazo, debe atenderse a la larga duración y a la herencia que recibieron sobre estas cuestiones, especialmente los legados de la dictadura Franquista y su hiperinflación de nacionalismo español. Sin embargo, hay una profunda imbricación histórica entre las culturas políticas obreristas y de izquierda y la identidad española, una herencia que en muchas ocasiones ha permitido que esta misma izquierda rehúse identificarse como *españolista*.

En este sentido consideramos muy útil recurrir al estudio sobre el nacionalismo de Michael Billig, que centra la atención en el «nacionalismo banal», aquel que consigue pasar inadvertido, especialmente en las naciones con Estado<sup>4</sup>. Uno de los mayores logros de este autor ha sido demostrar que el nacionalismo habita también en las manifestaciones cotidianas que se desarrollan en los Estados-nación; que no es propiedad exclusiva de aquellos movimientos que reclaman para sí una soberanía y un Estado del que no disponen; y que lo que hay tras el Estado-nación es también nacionalismo, y no cualquier otra cosa menos desprestigiada que se esconde tras un nombre más respetable. A veces, reconocer la existencia del nacionalismo en los Estados-nación requiere observarlos sin muchos de los prejuicios que inundaban el estudio de este fenómeno cuando Billig hizo su aportación. Desde este punto de vista, podría plantearse la posibilidad de aplicar el marco interpretativo del «nacionalismo banal» al discurso político de la izquierda española, en concreto del Partido Socialista, que estaría en posición de difundir, de manera más o menos consciente, una identidad nacional asumida banalmente<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Ferran ARCHILÉS: “Nacionalismos y culturas políticas en España (C. 1975-2012)”, en Manuel PÉREZ LEDESMA e Ismael SAZ (coords.): *Del Franquismo a la democracia, 1936-2013*, Madrid, Marcial Pons, pp. 141-174.

<sup>4</sup> Sobre cómo la «habitación» hace que los nacionalismos de las naciones con Estado pasen inadvertidos ver Michael BILLIG: *Nacionalismo Banal*, Madrid, Capitán Swing, 2014, p. 175.

<sup>5</sup> En este sentido Ferran Archilés ha defendido que: «Tanto a izquierda como derecha es habitual a lo largo de todo el periodo que analizamos que se produzca la negación de autoadscripción nacionalista (...).

Cabe señalar que en España la conflictiva relación entre la izquierda y la nación, especialmente durante el periodo de transición y de construcción democrática, y respecto a los partidos de obediencia estatal, no ha sido tratada en profundidad por la historiografía<sup>6</sup>. Es por ello que consideramos que esta investigación contribuye a ahondar sobre un tema poco abordado, y desde una perspectiva que matiza algunas de las conclusiones a las que se había llegado en estudios previos<sup>7</sup>.

---

Cabe afirmar como hipótesis que en gran medida el nacionalismo español habita en lo implícito, en lo “banal” en el sentido que acuñó Michael Billig, también en la interiorización por parte de los ciudadanos españoles. Aunque el nacionalismo español no es, ciertamente, solo un nacionalismo banal», Ferran ARCHILÉS: “¿Atada y bien atada? La cuestión nacional y las culturas políticas españolas (197-1978)”, en Aurora BOSCH e Ismael SAZ (eds.): *Izquierdas y derechas antes el espejo. Culturas políticas en conflicto*, València, Tirant Humanidades, 2016, p. 143. El mismo autor ha indicado con posterioridad que cierta invisibilidad del nacionalismo español en su conjunto después de 1975 en ningún caso debería ser interpretado como ausencia del mismo: «La visibilidad del nacionalismo español era irrelevante y aun contraproducente en el periodo de 1975-1977 e innecesaria en el fondo, a partir de 1978, cuando el Estado-nación ya estaba refundado. Su eficacia, por otra parte, se situaría en definitiva, en su banalidad». Del mismo modo, argumentaba que el franquismo podría haber provocado un distanciamiento en el conjunto de la sociedad del discurso nacionalista franquista, «pero no respecto de una subyacente (auto)identificación con la identidad nacional española», algo que bien podría aplicarse al socialismo, Ferran ARCHILÉS: “75, modelo para (des)armar. Ideas de nación y modelos de Estado antes y después del 20-N”, en ARCHILÉS, Ferran y SANZ, Julián (eds.): *Cuarenta años y un día. Antes y después del 20-N*, València, PUV, 2017. Véase también Xosé Manuel NÚÑEZ SEIXAS: *Patriotas y demócratas: el discurso nacionalista español después de Franco*, Madrid, La Catarata, 2010, pp. 15-19. Sobre el éxito de los mecanismos informales de nacionalización durante el Franquismo, Carlos FUERTES: “La nación vivida. Balance y propuestas para una historia social de la identidad española bajo el Franquismo”, en Ismael SAZ y Ferran ARCHILÉS (eds.): *La nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea*, Valencia, PUV, 2011, pp. 279-300.

<sup>6</sup> Tampoco la historiografía internacional ha desarrollado en exceso este tema, con excepciones tan destacables como el excelente trabajo de Vincent Martigny para el período de gobierno socialista en Francia, Vincent MARTIGNY: *Dire la France. Culture(s) et identités nationales 1981-1995*, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2016. Sobre la importancia del discurso nacional en Gran Bretaña durante los ochenta y noventa, aunque no sólo de la izquierda, véase Richard WEIGHT: *Patriots: National Identity in Britain 1940-2000*, London, Macmillan, 2002, pp. 665 y ss. De todos modos, la relevancia de esta cuestión ha provocado que en los últimos años se le haya comenzado a otorgar un mayor protagonismo, como demuestra la celebración de un congreso internacional dedicado a estos asuntos, *The Left and Nationalism in Europe*, Sciences Po-CEVIPOF, París (9-11 de junio de 2016).

<sup>7</sup> Esto ha sido común en el estudio de la cuestión nacional de los dos partidos mayoritarios de la izquierda española, tanto el PCE como el PSOE. Sin obviar la cuestión, pero otorgándole un peso menor encontramos dos obras clásicas sobre el Partido Socialista como son Santos JULIÁ: *Los socialistas en la política española, 1879-1982*, Madrid, Taurus, 1996; o Richard GILLESPIE: *Historia del Partido Socialista Obrero Español*, Madrid, Alianza Universal, 1991. Sin referencias a este problema encontramos la reciente obra, Juan José DE LA FUENTE: *La “invención” del socialismo. Radicalismo y renovación en el PSOE durante la dictadura y la transición a la democracia (1956-1982)*, Gijón, Trea, 2017. Escrita en un período en el que la atención al problema nacional no era habitual, tenemos por ejemplo para el PCE Gregorio MORÁN: *Miseria y grandeza del PCE 1939-85*, Barcelona, Planeta, 1986. Sin embargo, tampoco en obras más recientes se ha dedicado a esta cuestión un peso relevante, Jesús SÁNCHEZ RODRÍGUEZ: *Teoría y práctica democrática en el PCE (1956-1982)*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 2004; José Antonio ANDRADE: *El PCE y el PSOE en (la) transición. La evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político*, Madrid, Siglo XXI, 2012; o Fernando NISTAL: *El papel del Partido Comunista de España en la Transición*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2015. Por otra parte, tampoco son habituales las referencias a la relación entre la identidad española y la izquierda durante la Transición en volúmenes dedicados íntegramente a la cuestión nacional, como muestra otra publicación reciente: Javier MORENO LUZÓN y

Sobre las obras que sí han trabajado la cuestión de la izquierda y el tema nacional durante la Transición, cabe destacar los trabajos de Andrés de Blas, pionero en esta materia y que inició una línea de investigación que explicaba a partir del oportunismo la postura tanto del PSOE como del PCE. Exponía que si se habían posicionado a favor de las demandas de los nacionalismos «alternativos» al comienzo de la Transición, había sido por razones estratégicas y electoralistas<sup>8</sup>. Por el contrario, otras investigaciones se han situado en el campo opuesto, considerando que sí se habían asumido de forma sincera aquellos postulados, y aduciendo por tanto que su abandono, producido a partir de la elaboración de la Constitución, supuso una renuncia inevitable

---

Xosé Manoel NÚÑEZ SEIXAS (eds.): *Ser españoles. Imaginarios nacionalistas en el siglo XX*, Barcelona, RBA, 2013.

<sup>8</sup> Andrés DE BLAS: “El problema nacional-regional español en los programas del PSOE y PCE”, *Revista de Estudios Políticos*, 4 (1978), pp.155-170; ÍD.: “El problema nacional-regional español en la transición”, en José Félix TEZANOS, Ramón COTARELO y Andrés DE BLAS (eds.): *La Transición democrática española*, Madrid, Sistema, 1989, pp.587-611; ÍD.: “El partido socialista y la cuestión nacional”, *Cuadernos republicanos*, 61 (2006), pp.165-168; ÍD.: “Cuestión nacional, transición política y Estado de las Autonomías”, en Antonio MORALES, Juan Pablo FUSI y Andrés DE BLAS (dirs.): *Historia de la nación y del nacionalismo*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013, pp. 934-947. En una línea similar, apuntando al oportunismo, se encuentran los trabajos de Abdón Mateos, aunque matizando los presupuestos anteriores, ya que reconoce la tradición republicana federal del PSOE, que puede remontarse hasta 1918, en Abdón MATEOS: “La Transición del PSOE durante los años setenta”, en Rafael QUIROSA-CHEYROUZE (coord.): *Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 285-299; o Abdón MATEOS y Giulia QUAGGIO: “Nación y Estado en el socialismo español hasta 1992”, en J. Daniel MOLINA: *La España del pueblo. La idea de España en el PSOE. Desde la Guerra Civil hasta 1992*, Madrid, Sílex, 2015, pp. 15-54. Véase también Sebastian BALFOUR y Alejandro QUIROGA: *España reinventada*, Ediciones península, Barcelona, 2007; David SÁNCHEZ CORNEJO: “De la república federal de las nacionalidades que integran el estado español a la idea de España como nación de naciones: el discurso del PSOE sobre la cuestión nacional entre el congreso de Suresnes y la Constitución de 1978”, en Carlos NAVAJAS y Diego ITURRIAGA (eds.): *Crisis, dictaduras, democracia: I Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo*, Logroño, Universidad de la Rioja, 2008, pp. 363-373; Santos JULIÁ: “Nación, nacionalidades y regiones en la transición política a la democracia”, en Antonio MORALES, Juan Pablo FUSI y Andrés DE BLAS (dirs.): *Historia de la nación y del nacionalismo*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013, pp. 886-902; J. Daniel MOLINA: *La España del pueblo. La idea de España en el PSOE. Desde la Guerra Civil hasta 1992*, Madrid, Sílex, 2015. Una visión que defiende la inexistencia de cualquier idea definida de qué es España que no se rija por el oportunismo se ofrece en Jorge DEL PALACIO: “¿Nación o nación de naciones? El PSOE y la cuestión nacional, 1975-2011”, en *Cuadernos de pensamiento político FAES*, 35 (2012), pp. 39-54. Por otro lado, Alejandro Quiroga asumiría parte de la interpretación del oportunismo pero con importantes matices. Este autor consideraba que la connivencia inicial entre el PCE y el PSOE y los nacionalismos catalán y vasco se daba a causa de una combinación de ideología y pragmatismo político; y creía al mismo tiempo, que conforme fue avanzando la Transición estos partidos fueron abandonando por motivos estratégicos unos principios que sí habían llegado a calar en su ideario (al menos en parte), en Alejandro QUIROGA: “Amistades peligrosas. La izquierda y los nacionalismos catalanes y vascos (1975-2008)”, *Historia y Política*, 20 (2008), pp. 97-127; ÍD.: “Coyunturas críticas. La izquierda y la idea de España durante la Transición”, *Historia del presente*, 13 (2009), pp.21-40.

pero penosa para estas formaciones, que se vieron abocadas a ello en aras de conseguir el ansiado consenso y la estabilidad democrática<sup>9</sup>.

Si nos guiamos por estas perspectivas, la actitud del PSOE se habría basado en el «oportunismo» o en las «renuncias», lo que significaría restar importancia tanto a los factores coyunturales concretos, como aquellos que actuarían a largo plazo y que explicarían una evolución de sus posiciones en armonía con su desarrollo histórico (pese a que *a priori*, sus manifestaciones pudieran parecernos ambiguas y contradictorias)<sup>10</sup>. Entre las «renuncias» o el «oportunismo», existe un amplio abanico de matices que encuentra su origen en una trayectoria de largo recorrido<sup>11</sup>. Y es que es precisamente en el largo recorrido, donde se condicionan las identidades políticas y nacionales que definen y han definido al Partido socialista –un análisis aplicable

---

<sup>9</sup> A este respecto, Carme Molinero rechaza el argumento reduccionista que atribuye la defensa de los derechos de las nacionalidades a mera táctica o estrategia: «un objetivo prioritario de los redactores de la Constitución era asegurar la estabilidad de la democracia, antes que elaborar una constitución satisfactoria para sus redactores (...)», en Carme MOLINERO: “La oposición al franquismo y la cuestión nacional”, en Javier MORENO LUZÓN (ed.): *Izquierdas y nacionalismos en la España contemporánea*, Madrid, Pablo Iglesias, 2011, p. 255.

<sup>10</sup> Como ha expuesto Pere Ysàs, la Transición fue un proceso complejo condicionado por una multitud de factores, en el que los diversos proyectos políticos, sociales –y añadiríamos nacionales–, se condicionaron e influyeron mutuamente. Sin entender esto, sigue este autor, no podría explicarse el Estado de las Autonomías, que no estaba previsto al inicio de la Transición, pero que tampoco «puede presentarse, como a veces se ha hecho, como una construcción en el vacío, o como el malévolo “café para todos” para desnaturalizar o para encorsetar las reivindicaciones nacionales catalanas y vascas», Pere YSÀS: “El proceso hacia el Estado de las autonomías” en Javier UGARTE: *La transición en el País Vasco y España*, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1998, pp. 60-61. Consideramos que este argumento de la interacción y de la evolución que se fue sufriendo durante el proceso de la Transición y que explicaría un modelo autonómico que no nacía de la nada ni de la mera improvisación, sería válido para la actuación socialista en torno a la cuestión nacional. Incidiendo en la idea de una Transición en la que el devenir de los sucesos fue imponiendo en gran medida las respuestas, a veces ambiguas, Manuel Alcaraz ha definido la Transición, más que como un «producto coherente y ajustado a una estrategia previamente definida», como «un sistema de tensiones que se resolvieron en pactos yuxtapuestos e incluso contradictorios», Manuel ALCARAZ: “Construcción y decadencia del Estado Autonómico”, en Ferran ARCHILÉS e Ismael SAZ: *Naciones y Estado. La cuestión española*, València, PUV, 2014, p. 54.

<sup>11</sup> Fue novedoso en este sentido el enfoque que imprimió Ferran Archilés, demostrando que el PCE no había «olvidado» a España, teniéndola muy presente en su discurso durante la Transición, Ferran ARCHILÉS: “El «olvido» de España. Izquierda y nacionalismo español en la Transición democrática: el caso del PCE”, *Historia del Presente*, 14 (2009), pp.103-122; véase también Xosé Manuel NÚÑEZ SEIXAS: *Patriotas y demócratas: el discurso nacionalista español después de Franco*, Madrid, La Catarata, 2010; Vega RODRÍGUEZ-FLORES: “PSOE, PCE e identidad nacional en la construcción democrática”, en Ismael SAZ y Ferran ARCHILÉS (eds.): *La nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea*. València, PUV, 2011, pp.323-339; o Ferran ARCHILÉS: “Nacionalismos y culturas...”, pp. 141-174; o Jaime PASTOR: *Los nacionalismos, el Estado español y la izquierda*, Madrid, La oveja negra, 2012. En sentido contrario Carmelo ADAGIO y Alfonso BOTTI: “L’identità divisa: nazione, nazionalità e regioni nella Spagna democrática (1975-2005)”, en Alfonso BOTTI (ed): *Le patrie spagnoli. Spagna democrática e questioni nazionali (1975-2005)*, Milán, Bruno Mondadori, 2007, pp. 3-90.



también al PCE—. Este punto de vista pone en valor esas identidades, considerando que ofrecen en gran medida las claves para entender la actuación de los partidos.

Pero no todos los autores otorgan la misma importancia a la existencia de un marco asumido de identidad nacional que en nuestra opinión definiría en gran medida el proyecto político del Partido, aunque fuera desde los planteamientos esgrimidos para el «nacionalismo banal». Así por ejemplo destaca por su claridad la posición que defiende Carme Molinero, probablemente representativa de una muy extendida visión en la historiografía, que utiliza una definición del concepto de nacionalismo que pondría el énfasis en el lugar explícito que ocupan estas demandas en el discurso de los partidos:

Como es bien sabido, todos los movimientos nacionalistas se caracterizan por propugnar la primacía del hecho nacional sobre el resto de propuestas (...) La identidad y –a partir de ella– la reivindicación nacional puede ser un fenómeno distinto al nacionalismo como ideología política (...) <sup>12</sup>.

Esto significa que para un partido, no autodefinirse explícitamente como nacionalista, o no posicionar la reivindicación nacionalista como el rasgo distintivo y el eje central de sus políticas, serían motivos suficientes para no ser considerado como tal. Pero si acudimos a las herramientas conceptuales que ha ofrecido Billig, se pueden reinterpretar estos problemas poniendo en el centro el alcance de la identidad nacional. Según Billig, el sentimiento identitario que invadía las lógicas de cualquier partido sería tan poderoso que el nacionalismo banal estaría presente siempre, pese a que los partidos no se autodefinieran como nacionalistas. Por ello apuntaba que en cualquier contexto nacional sería común el uso de retóricas nacionalistas por parte de todos los grupos políticos, no sólo de aquellos que lo hacían sin complejos: «el nacionalismo no es una estrategia política particular, sino las condiciones en que se dan las estrategias convencionales, cualesquiera que sean las políticas particulares que se defiendan» <sup>13</sup>.

Por tanto, dentro del marco que proporciona el Estado-nación, sería suficiente con apelar a un «nosotros», el pueblo, el país, la nación, para generar identidad. No aplaudir rabiosamente a la gloriosa nación que lo fundamenta, ni reivindicar su orgulloso patriotismo, no significaría quedarse al margen del nacionalismo, ya que para

---

<sup>12</sup> Carme Molinero: “La oposición...”, p. 240.

<sup>13</sup> Michael BILLIG: *Nacionalismo Banal...*, p.168.

Billig: «Incluso en los momentos en los que las banderas no se ondean, siguen todavía izadas en los pequeños mástiles de los estereotipos inadvertidos»<sup>14</sup>.

Esta interpretación supone como mínimo un revulsivo para las investigaciones sobre el nacionalismo y amplía el objeto de estudio. Por un lado, implica preguntarse si la asunción del marco nacional por parte de algunos partidos a lo largo de la historia, tiene una mayor relevancia de la que se le había otorgado hasta ahora; y por otro, conlleva cuestionarse si esa pasividad aparente cumple o no un papel activo en la transmisión de la identidad nacional.

En este sentido, resulta especialmente interesante la propuesta de Craig Calhoun, que tampoco reduce el nacionalismo a aquellos movimientos que priorizan conscientemente el hecho nacional frente a cualquier otra cuestión. Para Calhoun, la dimensión del nacionalismo que se ve materializada en el discurso, se distingue en realidad por la existencia de una serie de rasgos que presenta toda retórica de la nación. Los más característicos serían: límites territoriales; el convencimiento de que la nación es indivisible; una noción «ascendente» de la legitimidad, en la que el gobierno debe tener el soporte popular o servir a los intereses de la «nación»; una población movilizadora sobre la base de la pertenencia nacional; la idea de que cada individuo es considerado como parte directa de la nación; una cultura compartida; o la creencia de que la nación existe a través del tiempo y vincula a los individuos del presente con los de otras generaciones, es decir, tiene una historia y un futuro<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, p. 175.

<sup>15</sup> Craig CALHOUN: *Nacionalisme*, Catarroja, Afers, 2008, pp. 13-21. En este sentido, Ferran Archilés también ha afirmado que aunque el nacionalismo español debe analizarse desde su «pluralidad intrínseca», existiría «un núcleo básico común, independiente de las diversas versiones de la idea de *nación*» basado en «un enunciado discursivo que afirme la existencia (...) de la nación, como voluntad de presente y futuro, enraizada en el pasado, y que se traduce en sujeto político soberano (o que aspira a serlo). A partir de ahí, todo lo demás puede y suele ser objeto de pugna», en Ferran ARCHILÉS: «Nacionalismos y culturas...», p. 142. Esto estaría en relación con lo dicho por Billig, y es que cuando se da por supuesto el *topos*, es decir, cuando el «nosotros» como nación está fuera de discusión, la retórica es necesariamente nacionalista: «Rivales políticos y facciones antagónicas exponen sus diferentes concepciones de la nación a su electorado nacional. Para que la discusión política se desarrolle en el seno de la nación, debe haber elementos que estén más allá de la discusión. Facciones distintas pueden argumentar cómo deberíamos pensar “nosotros” de “nosotros mismos” y cuál debe ser “nuestro” destino nacional. Al hacerlo, darán por supuesta la realidad del “nosotros” (...) En la retórica del nacionalismo consolidado hay un *topos* que queda más allá de la discusión», en Michael BILLIG: *Nacionalismo Banal...*, p. 163. Por tanto, uno de los componentes más característicos de ese *topos* es la idea de la indivisibilidad de la soberanía, cuestión que sería clave también para historiadores como José Luis de la Granja, Justo Beramendi y Pere Anguera, quienes se refieren al nacionalismo español de la siguiente manera: «entendiendo por tal el conjunto de tendencias políticas para las cuales sólo hay en España un sujeto legítimo de soberanía que es, tal como lo define la Constitución, esa nación española formada por

A partir de esta idea, los partidos y su discurso político pueden entenderse como elementos que contribuyen a difundir la identidad nacional, a reinventarla, redefinirla y consolidarla entre la población. La cuestión es si este análisis podría ser aplicable también al PSOE; si podría ser estudiado como un partido que habría contribuido a difundir la identidad española desde los presupuestos de la nacionalización informal expuestos por Thomas Eriksen, aportando elementos propios de su cultura política, opuestos o diferentes a los transmitidos por el discurso del nacionalismo oficial ejercido por el Estado<sup>16</sup>. Este punto de vista entiende a las culturas políticas como agentes de nacionalización de primer orden, que construyen relatos de nación propios y que pugnan por imponerlos en la medida de su relación de fuerzas<sup>17</sup>.

La idea de que los partidos puedan actuar como agentes nacionalizadores con discursos nacionales alternativos al estatal es reforzada por Alejandro Quiroga, quien establece un modelo basado en tres esferas: la pública; la semipública, a la que pertenecían los partidos políticos; y la privada. Este autor considera que en la esfera semipública, puede reproducirse el discurso oficial del Estado-nación o bien uno

---

todo el conjunto de los ciudadanos del Estado», entre la que incluyen a la izquierda española, José Luis DE LA GRANJA, Justo BERAMENDI y Pere ANGUERA: *La España de los nacionalismos y las autonomías*, Madrid, Síntesis, 2001, p. 204.

<sup>16</sup> Este autor señaló la importancia de distinguir, entre el «nacionalismo formal» ejercido desde el Estado, y el «nacionalismo informal» relacionado con las prácticas que contribuirían a generar una identidad determinada desde la sociedad civil. Consideraba que esta división podía ser muy útil como herramienta de análisis, aunque en la práctica las divisiones no podían ser tan nítidas y en cualquier caso ambos tipos resultaban igual de auténticos y complementarios a la hora de construir la nación. Por otra parte, aunque en realidad Eriksen teorizó basándose en un contexto muy distinto al que se plantea en este trabajo, creo que podría ser aplicable a este caso salvando algunas diferencias. Cuando se refería a la posibilidad de que los partidos políticos reaccionaran al «nacionalismo formal» del Estado con un «nacionalismo informal», estaba pensando en partidos que buscaban la independencia de la nación en base a un nacionalismo alternativo al promulgado desde el Estado; no a partidos que tenían un discurso alternativo de la nación, el propio de sus culturas políticas, pero que no cuestionaban la nación en sí sino los valores que le eran propios. Pese a esto, hablar de «nacionalismo informal» me parece igualmente útil como herramienta de análisis, ya que los mecanismos por los que se difunde esa identidad (alternativa sólo en algunos aspectos) por parte de los partidos que no tienen el control del Estado, serían muy similares a los de los partidos nacionalistas alternativos, sobre todo, como en este caso, en el proceso de transición de un dictadura a una democracia. Thomas ERIKSEN: “Formal and Informal Nationalism”, *Ethnic and Racial Studies*, 16, 1 (1993), pp. 1-25.

<sup>17</sup> Ferran Archilés señala que las culturas políticas –también las de izquierdas– ocuparían un papel preeminente en la nacionalización de las masas: «Sin duda uno de los agentes decisivos de nacionalización de las masas han sido las culturas políticas (...) Las diversas culturas políticas desplegaron instituciones, y prácticas propias, pero en contextos nacionalmente definidos (lo cual está sólo matizado, no desmentido, en el internacionalismo obrerista) (...) Muchos trabajadores ingleses, alemanes, españoles o franceses aprendieron la nación a través de los discursos y las prácticas de sus adscripciones ideológicas, ya fueran socialistas u obreros católicos», en Ferran ARCHILÉS: “Lenguajes de nación...”, p. 108. Véase también, sobre la nacionalización «desde abajo» o desde el margen, Ferran ARCHILÉS y Marta GARCÍA CARRIÓN: “En la sombra del Estado. Esfera pública nacional y homogeneización cultural en la España de la Restauración”, *Historia Contemporánea*, 45 (2012), pp. 483-515.

alternativo<sup>18</sup>. Y este podría ser perfectamente el caso del Partido Socialista, que sumergido dentro de su propia narración de la nación, de su «nosotros»<sup>19</sup>, contribuiría a construir y redefinir una identidad, también española, pero asociada a los valores propios de su cultura política, ajenos a los que el nacionalismo oficial dominante había impuesto durante el Franquismo<sup>20</sup>.

Por otra parte, concebir a los partidos como agentes que acabaron transmitiendo una idea propia de qué era España, nos puede ayudar a comprender mejor las motivaciones del PSOE a la hora de desplegar su modelo de Estado, ya que este sería producto de una determinada concepción nacional. Así pues, en el presente trabajo, analizaremos el discurso socialista sobre la nación española y trataremos de clarificar en relación a lo anterior, cuál fue el modelo de Estado que diseñaron, y si el que estuvieron dispuestos a aceptar finalmente distaba mucho de aquel. Preciado el referente nacional del socialismo, estableceremos algunos criterios muy básicos sobre el federalismo, no con el ánimo de definirlo, cosa que se aleja por completo del objetivo de esta Tesis, ni siquiera con la intención de plantear el complejo debate que acerca de tal término existe entre los especialistas. En realidad nuestra intención es únicamente la de contextualizar la opción federal o «federalizante» de los socialistas para la incipiente democracia española.

Qué es un Estado federal no supone una pregunta sencilla, ya que no existe un modelo aceptado universalmente para definirlo. El propio Estado de las Autonomías podría pasar, según muchos autores, por una especie de forma híbrida que demuestra la dificultad de encorsetar la realidad en unos paradigmas teóricos que se revelan

---

<sup>18</sup> Según el autor: «La esfera semipública es aquella en la que actúan las instituciones privadas en espacios públicos. Nos referimos a partidos políticos, sindicatos, asociaciones culturales, grupos deportivos e instituciones religiosas. Se trata de agentes fundamentales en el proceso de nacionalización, ya que pueden reproducir el discurso oficial pero también crear espacios de sociabilidad distintos a los oficiales, donde se transmiten identidades nacionales muy diversas y en ocasiones abiertamente enfrentadas a las oficiales», en Alejandro QUIROGA: «La nacionalización en España. Una propuesta teórica», Ayer, 90 (2013), p. 25.

<sup>19</sup> No se debe ignorar que la construcción del «nosotros» provenía también de sujetos previamente nacionalizados, que además de competir como dirigentes y militantes con otros grupos por la transmisión de una determinada imagen de la nación, eran herederos –siguiendo a Billig– de una identidad nacional no consciente en muchos de los casos.

<sup>20</sup> Tal y como afirma Tim Edensor, «la tradición es dinámica, refutada, es reivindicada por grupos diferentes en momentos diversos y es continuamente *reinventada* en el presente», lo que nos daría una imagen de hasta qué punto las identidades pueden adaptarse a diferentes tradiciones y narraciones para ser redefinidas en ese proceso de negociación, consiguiendo al fin generar las «experiencias de nación» que permitan la identificación del grupo y del individuo. Tim EDENSOR: «Reconsiderant les temporalitats nacionals», en Ferran ARCHILÈS (ed.): *La persistència de la nació*, Catarroja, Afers, 2015, p. 243.

demasiado estrictos<sup>21</sup>. Según Ferran Requejo estaría a caballo entre un Estado regional, que lo habría inspirado constitucionalmente, con algún aspecto más propio de los modelos centralistas y con otros que lo acercarían más a los Estados federales, concluyendo que «és un model presidit per una lògica més “regionalitzadora” que genuïnament federal»<sup>22</sup>. El jurista Juan José Solozábal ya lo definió en 1980 como un Estado en el que predominaba el carácter unitario, al no reconocer el origen compartido de la soberanía, pero altamente descentralizado, y en el que la práctica política podría decidir un «juego político cuasi-federal»<sup>23</sup>. Por su parte, Xosé Manoel Núñez Seixas, muy consciente de la polisemia de estos conceptos, califica a España como «Estado regionalizado»; «modelo federalizante», en lo que respecta a la distribución del poder pero no de la soberanía; o «Estado democrático ampliamente descentralizado»<sup>24</sup>. Otro especialista, José Antonio Piqueras, se refería al sistema de autonomías generalizadas que se fue plasmando entre 1979 y 1981, como un «federalismo funcional», porque descentralizaba las funciones «sin crear dos esferas separadas de gobierno» y establecía la primacía constitucional del Estado central<sup>25</sup>.

Sin embargo, autores como Eliseo Aja, prefieren no prestar demasiada atención al nominalismo en la Constitución de 1978, de manera que, pasando por alto que esta no se define como federal, considera que en el Estado Autonómico se dan los elementos esenciales que deben encontrarse en el federalismo, reconociendo sin embargo que existen algunas diferencias reseñables, por lo que lo califica como «sistema federal con hechos diferenciales»<sup>26</sup>.

Miquel Caminal hablará de «estat compost», en el que «dues concepcions d'Espanya radicalment oposades es posaven d'acord malgrat mantenir el desacord de

---

<sup>21</sup> De hecho, autores como Gumersindo Trujillo, han considerado inapropiada la denominación de Estado de las Autonomías, prefiriendo otra que pondría en valor ese modelo híbrido: Estado «federo-regional», Gumersindo TRUJILLO: “El Estado y las comunidades autónomas ante la exigencia constitucional del voto igual”, *Revista Española de Derecho Constitucional*, 2 (1981), p. 15.

<sup>22</sup> Ferran REQUEJO: *Federalisme, per a què? L'acomodació de la diversitat en democràcies plurinacionals*, Barcelona, 3 i 4, 1998, pp.157-164.

<sup>23</sup> Juan José SOLOZÁBAL: “Nación, nacionalidades y autonomías en la Constitución de 1978. Algunos problemas de la Organización territorial del Estado”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 10 (1980), pp. 279-281.

<sup>24</sup> Xosé Manoel NÚÑEZ SEIXAS: “Proyectos federales de los nacionalismo subestatales en España, o el discreto encanto de la asimetría” en Manuel CHUST: *Federalismo y cuestión federal en España*, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2004, pp. 200-217.

<sup>25</sup> José Antonio PIQUERAS: *El federalismo. La libertad protegida. La convivencia pactada*, Cátedra, 2014, p. 399.

<sup>26</sup> Eliseo AJA: *El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales*, Madrid, Alianza, 1999, pp. 36-39.

fons». Las dos posiciones nos son explicadas por este autor a través de las palabras del ponente constitucional Jordi Solé Tura: aquellos que compartían la visión de España como una nación única e indivisible y por otra parte quienes pensaban en un conjunto de pueblos, nacionalidades y regionalidades<sup>27</sup>. Aquí subyace la cuestión de fondo, y por ese motivo nos hemos detenido en describir qué se entiende en muchas ocasiones por el Estado de las Autonomías. En ningún caso pretendemos responder a esta pregunta, pero nos interesa remarcar que su indefinición se debe a que fue el producto de un compromiso entre diferentes concepciones y visiones que colisionaron, que dialogaron y que debieron converger, dando como resultado el Estado de las Autonomías<sup>28</sup>. Entonces ¿cuál fue la postura del Partido Socialista Obrero Español? ¿Se convirtió en el adalid de alguna de estas dos concepciones? Desde luego, Solé Tura tenía la intención de reducir al máximo un panorama que él sabía mucho más complejo, pero debemos tener cuidado de no descontextualizar una afirmación como ésta, ya que existe el riesgo de que se simplifique tanto que tan sólo se muestre la anécdota o la caricatura. Los propios socialistas se ubicaron en muchas ocasiones en una posición intermedia, «federalizante», reconocedora de la pluralidad, pero también de la unidad de España.

En las siguientes páginas trataremos de observar cuál fue la postura federal o «federalizante» de un partido que fue clave y decisivo en el diseño de la estructura estatal con la que se dotó a la nueva democracia. Es decir, pretendemos ver cómo se defendió el principio federal que esgrimían de forma muy evidente en los inicios de la Transición y de una manera más sutil hacia finales del proceso; y de nuevo, igual que nos cuestionaremos respecto a su concepción nacional, intentaremos responder si sobre esta cuestión se sufrieron renunciaciones importantes debido a la coyuntura histórica, a la necesidad del pacto constitucional o al mero oportunismo; o si por el contrario existió una evolución lógica de este pensamiento dentro de la dinámicas propias del momento, del Partido y de la ideología que siempre habían defendido<sup>29</sup>. Porque en definitiva, el

---

<sup>27</sup> Miquel CAMINAL: “L'Estat autonòmic espanyol: entre la resistència nacionalista y l'horitzó federal” en Miquel CAMINAL y Ferran REQUEJO: *Federalisme i plurinacionalitat. Teoria i anàlisi de casos*, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Institut d'Estudis Autonòmics, 2009, p. 486.

<sup>28</sup> Sobre la importancia del consenso a la hora de elaborar un modelo relativamente indefinido, véase José VILAS: “La organización territorial del Estado”, en Ramón COTARELO (coord.): *Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986)*, Madrid, CIS, 1992, p. 224; o Javier TUSELL: “El entierro del centralismo”, en Santos JULIÁ: *Memoria de la Transición*, Madrid, Taurus, 1996, p. 432.

<sup>29</sup> Apoyando la idea de que el PSOE no modificó de forma sustancial sus planteamientos, estaría Richard Gillespie. Aunque este autor no se sirve de este razonamiento para referirse a la cuestión nacional, sí la defiende respecto a la existencia de una cierta coherencia en la «derechización» que habría sufrido el Partido con el tiempo: «A juicio de casi todos los observadores, Felipe González era igual de sincero a

modelo de Estado tiene mucho que ver, por otra parte, con la cuestión de si en el PSOE se situaban con los de la España única e indivisible; con los que preferían una España plural de nacionalidades y regiones; o si se trataba más bien de una postura híbrida, como el propio Estado de la Autonomías, del que se convirtieron en fervientes defensores.

Así pues, partiendo de los criterios anteriores, la presente Tesis Doctoral se divide en seis capítulos, organizados fundamentalmente por orden cronológico. Por otra parte, hemos atendido a las especificidades territoriales conforme estas adquirían especial relevancia, o cuando hemos considerado que ofrecían matices reveladores que merecían ser explicados y que habían sido pasados por alto por gran parte de la historiografía española, como consideramos que ha sucedido por ejemplo con el caso valenciano.

En el primer capítulo se desarrolla el arco temporal más amplio, desde el Congreso de Suresnes en octubre de 1974, hasta la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978. Este es quizá el periodo sobre el que la historiografía ha trabajado con mayor profusión respecto al tema que nos ocupa, sobre todo en relación al debate constitucional. Es por este motivo por el que hemos decidido centrar nuestra atención en los aspectos menos trabajados, aquellos que tienen que ver con las posiciones previas a los debates para elaborar la Constitución. Hemos tratado de observar el punto de partida respecto a la definición de nación, del modelo de Estado, sobre el derecho de autodeterminación, o en torno al federalismo, en diferentes ámbitos del discurso socialista, incluyendo los propios del «programa máximo» y del «programa mínimo», entre los que se ofrecen visibles contrastes que permiten una interpretación menos reduccionista y mucho más compleja y dual de lo que podría parecer a simple vista. De esta manera nos parece que es posible adquirir una mayor y mejor perspectiva para responder a la pregunta de hasta qué punto existía arraigo de las posiciones previas más favorables a la defensa de la «nacionalidades oprimidas», y si los valores aprobados con la Constitución de 1978 eran ajenos o no a la tradición y la imagen de España que se había construido en la cultura política socialista durante aquellos años.

---

principios del decenio de 1970, cuando aparecía como un fogoso revolucionario, como a fines del mismo decenio, cuando su imagen se convirtió en la de estadista. Su evolución se debió en gran parte a las circunstancias de la transición política, pero su comportamiento también mostró una cierta coherencia. Desde el principio del decenio de 1970 sus discursos se caracterizaron por tentativas de analizar la verdadera situación española y por las exhortaciones al realismo en el enfoque del PSOE», Richard GILLESPIE: *Historia del Partido...*, p. 381.

El segundo capítulo se sitúa en un contexto distinto al anterior, pues la Constitución había supuesto un punto de inflexión tras el que se favorecía el abandono de las posiciones más radicales en torno a la cuestión nacional. Esta etapa se inauguraba además con las elecciones generales y municipales, y se fue haciendo patente la voluntad del PSOE de representar una opción más moderada y seria que les permitiera pasar de ser el principal partido de la oposición a gobernar España. Esto afectó a la que se convirtió en la «cuestión autonómica», ya que ejercer de partido de Estado requería, desde la perspectiva socialista, optar por primar la estabilidad y la unidad del mismo; aunque por otra parte, los resultados de las elecciones, en los que los grupos nacionalistas escalaron posiciones en territorios como Euskadi y Andalucía, y el convencimiento de la importancia de seguir defendiendo las libertades nacionales, provocaron que se mantuviera una marcada dualidad en los planteamientos.

La tónica iniciada en 1979 se mantuvo prácticamente hasta 1981, con mayor peso de una u otra opción según la coyuntura, y por ello, como se podrá ver en el tercer capítulo, en el XXVIII Congreso del PSOE se clarificaron algunas posiciones pero se mantuvieron vivas muchas de las reivindicaciones, incluyendo la defensa, podríamos decir en abstracto, del federalismo y la discusión sobre la conveniencia de mantener el derecho de autodeterminación al menos como principio ideológico. Todo ello en un congreso marcado por la polémica entre los que querían decantarse por la moderación para ensanchar el espacio electoral eliminando la defensa del «marxismo», y los que se negaban a tal renuncia.

El capítulo cuarto se centra en el periodo en el que hubo que poner en marcha una política autonómica digamos más realista, tratando de definir unas posiciones que se reconocían ambiguas y erráticas, ante la necesidad de adaptar las ideas a la materialización que suponía la construcción efectiva del Estado Autonómico. Esta situación se prolongó como decimos hasta 1981, pero en concreto en estas páginas, nos referimos a los inicios de aquella postura más pragmática, regidos por una Gestora precaria y por una coyuntura marcada por la elaboración de los Estatutos vasco y catalán. Era pues el momento de dar salida al problema nacional, encarnado por estos dos territorios, para los que se había generado una respuesta que conciliara la defensa de la nación española y de los derechos identitarios diferenciados.



Es en este punto en el que comienza el capítulo quinto, en el que el Partido Socialista se replanteó muy seriamente sus convicciones al respecto del tema autonómico. Con una dirección fortalecida, y con el problema nacional resuelto respecto a Euskadi y Cataluña, los dos partidos mayoritarios comenzaron a cuestionarse seriamente si la generalización autonómica que se había ido imponiendo era razonable. Estas preocupaciones no eran nuevas, del mismo modo que tampoco lo era relacionar la solución autonómica con cuestiones que tenían más que ver con la igualdad, la solidaridad y la redistribución interregional, pero cobraron más fuerza entonces. Ante la coincidencia en algunos diagnósticos, Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista Obrero Español entablaron conversaciones al respecto para diseñar una estrategia conjunta que recondujera el proceso. Pero la radicalidad en las maneras de los centristas frenó la posibilidad de unos acuerdos que buscaban armonizar la construcción autonómica ante el temor de que el sistema se viese desbordado. En medio de esta situación se encontraron territorios como el gallego, el andaluz o el valenciano, en los que nos hemos detenido un poco más, por considerarlos decisivos o reveladores en aquella batalla estratégica en la que se convirtió la vía de acceso a la autonomía y la cuestión competencial para socialistas y centristas. En juego estaba, por otra parte, cómo se materializaba el Título VIII y qué modelo de Estado se imponía.

Debe señalarse que en aquel momento, con el permiso de Galicia, fue en Andalucía donde existió una mayor polémica, hegemonizando la atención mediática y política en torno al problema del acceso a la autonomía. Un contexto propicio permitió que aquella tierra representara el agravio comparativo respecto a las nacionalidades históricas, y el socialismo aprovechó la baza estratégica que esta situación le ofreció en bandeja, aunque no sin tensiones internas. Indecisos y divididos entre los planteamientos proclives a defender una generalización autonómica que respetara la voluntad popular, y aquellos que ponían el énfasis en la racionalización, el socialismo se fue decantando por la última opción mientras alentaba en Andalucía la primera. El contrapunto a esta posición se vivió en el País Valenciano, motivo por el cual hemos creído era importante poner de relieve su caso. Allí, fue precisamente un contexto convulso y complicado el que convenció poco a poco a los socialistas sobre la necesidad de ir abandonando la lucha por los derechos nacionales de un pueblo que había cumplido con los requisitos constitucionales para acceder por la vía privilegiada hasta entonces.

Por último, el capítulo sexto intenta dar cuenta de cómo se fue reconduciendo aquella problemática hacia una armonización deseada tanto por el PSOE como por UCD, aunque diseñada con diferencias notables en cuanto a su contenido por cada partido. En él nos interrogamos acerca de cómo se pactaron y cómo fueron vividos por los socialistas los *Acuerdos Autonómicos* de julio de 1981; en qué posiciones dejaba esto a los territorios que habían elegido la vía del 151 con anterioridad, si hubo resistencias a la reconducción en ellos, y de ser así cómo afectaron a la posición de las estructuras federales; cuál era el modelo de Estado y de nación que habían buscado los socialistas al pactar la racionalización; o qué peso tuvo en todo aquel proceso el Golpe de Estado del 23-F. En esta fase final del proceso fue el País Valenciano el territorio que adquirió un mayor protagonismo en la cuestión autonómica, siendo el único en el que la los socialistas no se decidieron por la reconducción hasta las negociaciones autonómicas hasta principios de 1981.

Por otra parte, debe mencionarse que esta Tesis es el resultado de una beca predoctoral de *Formación del Profesorado Universitario* del Ministerio de Educación, que ha permitido que este trabajo se desarrollara en el Departamento de Historia Contemporánea de la *Universitat de València*, asociado a los proyectos de investigación *La identidad nacional española en el siglo XX: discursos y prácticas* (HAR2008-06062) y *De la dictadura nacionalista a la democracia de las autonomías: política, cultura, identidades colectivas* (HAR2011-273292). Gracias a este apoyo institucional hemos podido realizar estancias en la *Universidad Autónoma de Madrid* o en el *International Institute of Social History* de Ámsterdam, que nos han posibilitado entrar en contacto con valiosas fuentes primarias y bibliográficas del socialismo.

Entre las fuentes de diversa índole a las que hemos acudido para elaborar la presente Tesis, comenzaremos por aludir a la prensa diaria. Periódicos como *El País*, *La Vanguardia*, *ABC* o *Avui* nos han permitido reconstruir algunos pasajes de esta historia y acercarnos a opiniones y discursos expuestos en los medios de comunicación con la intención de lanzar un mensaje que conectara con la tradición socialista y con los potenciales electores, los convencidos y los que el giro más moderado iniciado a partir de 1979 quería captar. Y aunque esta no sea una Tesis que pretenda trabajar la recepción del discurso, la lectura de la prensa nos recuerda que este se elabora siempre pensando en el receptor, estableciéndose una especie de diálogo que no podemos ignorar. Nos ayuda, en definitiva, a conocer la imagen que querían ofrecer al público destinatario de

su mensaje (o en todo caso la que fue objeto de recepción). Por tanto, pese a que no aspiremos a hacer un análisis «desde abajo», la interacción entre el Partido y la sociedad está presente en el discurso público que se ofrece a través de estos medios. Además, observar el contexto de cada afirmación ha contribuido también a poner de relieve muchos matices que explican unas posiciones en muchos casos cambiantes.

En este sentido, la prensa del Partido es decisiva y –desde un marco un tanto distinto, destinado a la militancia y al electorado más fiel– nos habla de las posiciones de la dirección pero también incorpora otras voces. Por ello, hemos realizado un estudio lo más sistemático posible del órgano portavoz del PSOE, *El Socialista*. Además, hemos completado el análisis de la prensa socialista con publicaciones territoriales, como *L'Opinió Socialista*, del del Partit dels Socialistes Catalans, por considerar que esta formación ejerció una potente y decisiva ascendencia en el PSOE a la hora de plantear los problemas nacionales. O una revista como *Valencia Semanal*<sup>30</sup>, muy vinculada a la dirección del Partit Socialista del País Valencià, territorio al que hemos concedido una atención preferente al haber sido poco tratado por la historiografía y al ofrecer un ejemplo magnífico de las contradicciones y dificultades que supuso para el socialismo la construcción del Estado Autonómico.

Pero si ha habido un tipo de documentación que hemos primado en esta Tesis ha sido la generada de manera oficial o institucional por el Partido Socialista Obrero Español, que respondía a diversas funciones. Por un lado se encuentra la escrita y editada por este, destinada a ser publicada para difundir por tanto un mensaje meditado, que sin embargo no era uniforme y dependía en muchos casos del objetivo con el que fuera creado. Por ejemplo, no respondía a los mismos intereses la documentación elaborada al calor de los congresos del Partido, que la que tenía que ver con la propaganda electoral, aunque existiera una intencionalidad muy clara en ambos casos. De todos modos, es clave la importancia de cualquiera de estos documentos, entre los que también destacan los libros de aquella época editados por el PSOE y escritos en la mayoría de las ocasiones por dirigentes socialistas; o las publicaciones relacionadas con la Secretaría de Formación, por ejemplo en las Escuelas de Verano, nacidas para debatir y aclarar posturas sobre cuestiones que preocupaban en el Partido, pero también para formar y aleccionar a la militancia sobre las mismas. Pero más importante que

---

<sup>30</sup> Esta revista no fue el portavoz oficial del PSPV-PSOE, pero sin embargo, fue fundada y controlada por sectores de su dirección.

analizarlas de forma aislada es poder compararlas y contrastarlas, pues los mensajes llegan a ser complementarios y nos ofrecen una visión mucho más compleja y por tanto completa, del posicionamiento socialista, sobre todo en un tema en torno al que siempre existió cierta ambigüedad e indefinición. Dar por bueno el «programa máximo» e ignorar el «mínimo», o viceversa, no parecería por tanto razonable.

Dicho lo cual, creemos que hay que resaltar la valía de la documentación de tipo interno, a la que concedemos un apartado especial, aunque siempre contrastada con la anterior. Fuentes emitidas por el Comité Ejecutivo, el Comité Federal, la Secretaría de Política Autonómica, la de Organización, la de Prensa y Propaganda, la de Formación, o las relacionadas con el Grupo Parlamentarios Socialista, entre otras, han sido vitales en una investigación destinada sobre todo a arrojar luz sobre cuál fue el modelo de Estado y de nación que diseñó el PSOE para España y cómo influyó en la construcción del mismo en la nueva etapa democrática. Desde luego, contemplar la heterogeneidad del Partido es necesario, del mismo modo que no puede ignorarse la interacción con la sociedad con la que pretendía conectar, sin ello no entenderíamos la postura socialista sobre estas cuestiones. Pero acceder a los debates e informes internos nos acerca más a las decisiones ejercidas desde la estructura, desde una élite política que tuvo un peso decisivo en todo aquel proceso, y nos permite conocer mejor los retos y los límites a los que se enfrentaron, las aspiraciones que fueron frustradas, o las victorias que obtuvieron. Nos ayuda, en definitiva, a acercarnos más a la respuesta de qué pudieron o quisieron hacer según las circunstancias y su convicción ideológica.

Así pues, documentación como la multitud de informes internos –en muchos casos confidenciales–, que se preocupaban por definir la cuestión nacional, por establecer un esquema de prioridades o un calendario autonómico (sobre todo a partir de 1979), son realmente valiosos para esta investigación. Junto a esto, se encuentran también actas de reuniones, como la de Sigüenza o las muchas que se celebraron organizadas por la Secretaría de Política Autonómica; informes sobre los resultados electorales; o sobre la marcha del proceso autonómico, las negociaciones, o en torno a cómo afectaba éste a la imagen pública del Partido.

Todos ellos, ejemplos que pueden encontrarse en archivos personales de dirigentes socialistas, entre los que queremos destacar el donado por Alfons Cucó al *Arxiu Històric de la Universitat de València*. El fondo referido es de gran riqueza al

tratarse Cucó de un destacado miembro de la Ejecutiva del PSPV-PSOE, además de un reconocido historiador que preservó meticulosamente la documentación generada tanto por la Federación valenciana, como por los órganos centrales. Algo similar sucede con el *Fondo José Antonio Maturana* del Archivo de la *Fundación Pablo Iglesias*, denominado así por el dirigente vasco, quien formara parte de la Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi.

En cuanto a la documentación del PSC-PSOE, pese a que no hemos tratado de realizar un análisis individual de este Partido federado, hemos creído necesario llevar a cabo un estudio algo más pormenorizado de las fuentes que generó (del mismo modo que hemos hecho con el PSPV-PSOE y en menor medida con el PSE-PSOE), y para ello hemos acudido al *Arxiu Històric de la Fundació Rafael Campalans* y al *Arxiu del Partit del Socialistes de Catalunya*. Nos ha resultado también muy útil consultar documentación del Partit Socialista Unificat de Catalunya, decisivo en el acercamiento de la izquierda catalana y española a la cuestión nacional, y lo hemos hecho a través del *Arxiu Històric de Mollet del Vallès*, en concreto del *Fons Jordi Solé Tura*.

Pero una mención especial merece el fondo de la Secretaría de Política Autonómica, de acceso muy restringido, que pudimos consultar en el Archivo de la *Fundación Pablo Iglesias*, con una ingente cantidad de documentación relativa a aquella Secretaría desde su creación, en su mayoría oculta hasta ahora. En su Biblioteca, por otra parte, se encuentra la colección más extensa a la que hemos accedido sobre publicaciones editadas por el Partido Socialista Obrero Español y en menor medida por las distintas Federaciones. Otros archivos de gran valía para este trabajo han sido el de la *Fundación Francisco Largo Caballero*, en el que hemos encontrado tanto publicaciones elaboradas por el PSOE como documentación interna; o el *Archivo de Historia del Trabajo de la Fundación 1º de mayo*, con una magnífica colección de propaganda política de 1970 a 1985.

No podemos dejar de mencionar el *Archivo Histórico del PCE*, con amplísimas fuentes sobre el Partido Comunista de España y sus Federaciones territoriales; así como el *Arxiu Històric Sindical José Luis Borbolla* y su fondo donado por el que fuera el Secretario General del Partit comunista del País Valencià, Antonio Palomares, que nos han servido para contextualizar la actitud socialista en torno a la cuestión nacional en un marco más amplio, en el que se situó el conjunto de la izquierda española.

Precisamente, para profundizar en las actitudes del conjunto de la izquierda han resultado muy útiles el *Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante*; y el *International Institute of Social History* de Ámsterdam, con los fondos *Spain Documentation* y *Spanish Resistance Collection*.

Por último, no queremos olvidarnos de la consulta de las siguientes bibliotecas y hemerotecas, comenzando por la red de la *Universitat de València*; la *Hemeroteca Municipal de València*; la *Hemeroteca de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu*; la *Biblioteca Nacional de España*; la *Biblioteca Universitaria de la Universidad de Alcalá de Henares*; la *Amsterdam University Library*; el *Centre Documental de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona*; el *CRAI Biblioteca Pavelló de la República*; y el *Arxiu Ncional de Catalunya*.

\* \* \*

No querría terminar sin recordar a todos aquellos que han contribuido, en lo académico y personal, a la elaboración de esta Tesis doctoral. En primer lugar, a mis directores, Ismael Saz y Ferran Archilés, por ser un ejemplo inspirador de rigor, capacidad y trabajo. Ellos han guiado esta investigación desde el inicio, suscitando preguntas y favoreciendo la reflexión, orientándome en el proceso –a veces duro– que supone la elaboración de una Tesis doctoral, poniendo orden en mi caos. A Ismael le agradezco su comprensión y el apoyo que obtuve de él desde el inicio y que me ha permitido llegar hasta aquí; a Ferran, su infinita paciencia, haber creído en mí más que yo misma, y haberme acompañado en un esfuerzo que ha sido compartido.

También han hecho posible esta Tesis, profesores e investigadores que no han dudado en ayudarme cuando lo he solicitado, como José Luis Martín Ramos, a quien recurrí en diversas ocasiones aprovechando mi condición de ex alumna; a Carme Molinero y Pere Ysàs; a Manuel Ruiz; o a Abdón Mateos, gracias al cual he podido acceder a documentación especialmente valiosa para mi investigación. También a Pilar Folguera y a Titia van der Werf–Davelaar con quienes realicé sendas estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid y en el International Institute of Social History de Ámsterdam. Además, respecto a la tarea de recopilación de fuentes, quiero reconocer la labor del personal de archivos y bibliotecas, resaltando la

colaboración del grupo que forma parte del Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, gracias a los cuales consulté fondos de acceso restringido, pero necesarios para mi Tesis doctoral. Merece una mención especial Víctor Fuentes, ex dirigente del PSPV-PSOE, quien ha estado disponible para aclarar muchas de mis dudas con su testimonio y me ha posibilitado acceder a su archivo personal.

Debo mencionar también a los miembros del Departamento de Historia Contemporánea de la *Universitat de València*, que han contribuido a mi formación y que han influido en el trabajo que ahora presento, pero también en lo personal. Profesores y compañeros como Manuel Martí, responsable en buena medida de que descubriera en la investigación una vocación, Teresa Carnero, M<sup>a</sup> Cruz Romeo, Javier Navarro, Ana Aguado, Aurora Bosch, Julián Sanz, Marta García Carrión o Mónica Granell, con los que he podido contar en esta andadura que empecé como estudiante de la Licenciatura de Historia. Y por supuesto, no puedo olvidarme del nutrido grupo de becarios con el que me he ido encontrando en estos años, pero especialmente quiero referirme al grupo del «aula 2»: Javi, Melanie, Francesco, Carlos, Juan Carlos y Aurelio. En eternas jornadas de trabajo, entre las que no faltaron las risas, nos convertimos en amigos.

En lo estrictamente personal, me habría sido imposible finalizar este proyecto sin el apoyo de mis familiares y amigos, a los que deseo mencionar. Gracias a mis amigas de siempre, especialmente a Raquel, por motivarme. A Carmen y a Majo, con las que me inicié en la historia hace mucho ya. A Dani, con el que puedo contar absolutamente siempre, y con el que he hablado largo y tendido sobre esta Tesis, a la que ha aportado mucho. A mi hermana, a la que me unen casi todos mis buenos recuerdos. A Miguel, que ha compartido conmigo este proceso, comprendiéndolo y haciendo que fuera más fácil. Pero sobre todo, gracias a mis padres, que me enseñaron a no rendirme y que se merecen el mayor de los reconocimientos, por estar siempre ahí, incondicionalmente.





## **I. DE SURESNES A LA CONSTITUCIÓN. IMAGINANDO ESPAÑA**

Hay una realidad histórica, política, socioeconómica, que se llama ESPAÑA. Que a algunos les puede gustar y a otros no, pero que el concepto está ahí, cristalizado, y que en realidad lo que no podemos hacer es dejar que ese concepto lo utilicen las fuerzas reaccionarias y centralistas. Y un concepto que responde a algo, que no es una invención de hoy y ahora<sup>31</sup>.

La existencia de un referente nacional en clave española dentro del Partido Socialista Obrero Español durante la transición democrática hasta la etapa constitucional es difícilmente cuestionable. Pero para analizarlo ha de entenderse que fue defendido desde una tradición propia, en la que el componente ideológico tendría una importancia capital, como también lo tuvo el estratégico. El discurso socialista sobre la cuestión nacional, igual que su manera de concebir la misma, no fue plano, e incorporó la herencia marxista, una identidad nacional española progresista propia de su cultura política y una solidaridad respecto a los nacionalismos alternativos al español que impregnaron y condicionaron su ideario y sus planteamientos. Estos factores supusieron que el problema nacional se proyectara en ocasiones de forma errática e incluso ambigua y contradictoria, sobre todo a partir de los debates constitucionales, traicionando en apariencia unas posiciones iniciales que en el fondo, como iremos desgranando, no se encontraban tan alejadas del modelo que pactaron en 1978 y que se fue construyendo con posterioridad.

### **1. PSOE, derecho de autodeterminación y federalismo**

#### ***La cuestión nacional en la tradición socialista española***

Para entender la forma en la que el PSOE se acercó a la cuestión nacional durante los años de la Transición no pueden ignorarse determinadas herencias de su trayectoria histórica que condicionaron en parte su perspectiva sobre estos asuntos. Uno de estos factores fue el legado marxista y la recepción que de este se hizo en el socialismo español.

Comencemos por hacer un brevísimo recorrido sobre el binomio marxismo/nacionalismo en el contexto internacional. Lo primero que debe decirse es

---

<sup>31</sup> Felipe GONZÁLEZ: “Línea política del PSOE”, en Felipe GONZÁLEZ (*et alii*): *Socialismo es Libertad. Escuela de Verano del PSOE*, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1976, pp. 42-43.

que la historiografía ha ido desechando progresivamente la idea de su incompatibilidad. De hecho, la existencia de discursos nacionales desde el socialismo puede datarse desde finales del siglo XIX y es innegable en el primer tercio del XX, cuando el movimiento obrero se fue organizando e incorporando al sistema parlamentario. Aunque en muchos casos con planteamientos un tanto improvisados y poco sistemáticos, los líderes históricos del socialismo teorizaron sobre estas cuestiones con posiciones como las de Marx o Lenin, que sin defender visiones equiparables, tuvieron en común el hecho de poner el movimiento nacionalista al servicio de la revolución. Otro importante referente se encuentra en los *austromarxistas*, representados principalmente por Otto Bauer y Karl Renner, quienes eran favorables a la *autonomía nacional-cultural* y defendían la existencia de dos niveles de identidad no subordinados entre sí, el de clase y el nacional. Existían también otras visiones más negativas respecto al hecho nacional, como la de Rosa Luxemburg, quien contraponía mecánicamente la lucha de clases a la lucha nacional, por lo que creía que aquel no era el combate de la clase obrera<sup>32</sup>.

Aunque con diferencias teóricas, lo que parece claro es que en su conjunto, en la izquierda obrera –incluyendo aquella que utilizaba un concepto restrictivo del internacionalismo– la identidad de clase no era excluyente respecto a otras categorías, como la nacional. De hecho, la asunción del marco del Estado-nación era la norma de los movimientos socialistas de aquella época, asumiendo y reproduciendo su referente nacional en lo político y en lo cultural, sin que ello significara el abandono de sus objetivos de transformación social<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Hélène CARRÈRE: “Comunisme i nacionalisme”, *Quaderns d’alliberament*, 1 (1977), pp. 25-65; Yvon BOURDET: “Proletariado universal y culturas nacionales”, en Miquel BARCELÓ: *Comunistas y/o nacionalistas*, Barcelona, Anagrama, 1977, pp. 117-153; Horace B. DAVIS: *Nacionalismo y socialismo*, Barcelona, Ediciones Península, 1972; o George H. HAUPT, Michael LOWY y Claudie WEILL: *Los marxistas y la cuestión nacional: la historia del problema y el problema de la historia*, Barcelona, Fontamara, 1982.

<sup>33</sup> Eric HOBSBAWM: “Traditions massificadores: Europa 1780-1914”, en Eric HOBSBAWM y Terence RANGER (eds.): *L’invent de la tradició*, Vic, Eumo, 1988, pp. 247-288; ID: “Working-class internationalism”, en Frits VAN HOLTHOON y Marcel VAN DER LINDEN (eds.): *Internationalism in the labour movement 1830-1940*, Leiden, Brill Archive, 1988, pp. 3-16; George L. MOSSE: *La nacionalización de las masas: simbolismo político y movimientos de masas en Alemania desde las Guerras Napoleónicas al Tercer Reich*, Madrid, Marcial Pons, 2005; Patrick PASTURE y Johan VERBERCKMOES: “Working-Class Internationalism and the Appeal of National Identity: Historical Dilemmas and Current Debates in Western Europe”, en Patrick PASTURE y Johan VERBERCKMOES (eds.): *Working-Class Internationalism and the Appeal of National Identity: Historical Debates and Current Perspectives*, Oxford, Berg, 1998, pp. 1-41; o Stefan BERGER y Angel SMITH (eds.): *Nationalism, Labour and ethnicity 1870-1939*, Manchester, Manchester University Press, 1999.

Volviendo a España, debe señalarse que el movimiento obrero adoptó la interpretación más estrecha del internacionalismo, según la cual, el nacionalismo aparecía como un elemento disgregador, que alejaba a la clase obrera de una supuesta y deseada unidad universal, necesaria para la revolución social. No hubo una reflexión profunda sobre aquellos debates, y se asumieron, como defendiera Miquel Barceló, las visiones étnicas y perennes de las naciones<sup>34</sup>. Esto se traducía en un *monismo internacionalista*<sup>35</sup>, que suponía en realidad, la asunción pasiva y acrítica del nacionalismo dominante, que le llevaba a reaccionar de forma hostil contra la pluralidad nacional, en concreto contra los nacionalismos vasco y catalán<sup>36</sup>. Bajo la hegemonía de un pensamiento que presuponía la preeminencia cultural y social de la nación española, rechazaron a los «nacionalismos periféricos», el catalán y el vasco, especialmente este último (algo que fue facilitado por el discurso aranista). En cualquier caso, el PSOE se situaba entonces en la tónica de los Partidos socialistas de otros países europeos en los que también se inició un progresivo desplazamiento de los presupuestos internacionalistas más clásicos para elaborar políticas de clase nacionales<sup>37</sup>.

Esta asunción de la identidad nacional española, que no era sin embargo reconocida por sus protagonistas, estuvo presente en la cultura política socialista, como lo hizo en otras, desde la Restauración, en la que los partidos políticos ajenos al poder participaron de una identidad nacional que contribuyeron a difundir también desde abajo a través de dinámicas «informales». Como han estudiado Marta García Carrión y

---

<sup>34</sup> Miquel BARCELÓ: “Una nota sobre la cuestión nacional «española»”, en Miquel BARCELÓ: *Comunistas y/o nacionalistas*, Barcelona, Anagrama, 1977, pp. 155-166.

<sup>35</sup> José Luis MARTÍN RAMOS: “Marxisme i qüestió nacional a Catalunya, de les formulacions doctrinals fins a la Guerra Civil”, en Joaquim ALBAREDA (et. al.): *Catalunya en la configuració política d'Espanya*, Reus, Centre de Lectura de Reus, 2005, pp. 189-202.

<sup>36</sup> Sobre la reacción «antinacionalista» hacia el catalanismo o el vasquismo desde perspectivas identitarias españolas además del autor anterior véase Angel SMITH: “Spaniards, Catalans and Basques: Labour and the challenge of nationalism in Spain”, en Stefan BERGER y Angel SMITH (eds.): *Nationalism, Labour and ethnicity 1870-1939*, Manchester, Manchester University Press, 1999, pp. 64-92; Antonio RIVERA: *Señas de identidad. Izquierda obrera y nación en el País Vasco, 1880-1923*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003; Antonio RIVERA: “El PSOE, la cuestión territorial y los nacionalistas”, en Javier MORENO LUZÓN (ed.): *Izquierdas y nacionalismos en la España contemporánea*, Madrid, Pablo Iglesias, 2011, pp. 119-140; Xavier CUADRAT: “El PSOE i la qüestió nacional catalana (fins l'any 1923) (I)”, *L'Avenç* 5 (1977), pp. 58-66; o ÍD: “El PSOE i la qüestió nacional catalana (fins l'any 1923) (II)”, *L'Avenç* 6 (1977), pp. 56-63.

<sup>37</sup> Forcadell argumentaría que esta dinámica se reforzó a partir del siglo XX con el ascenso de la sociedad de masas, que requeriría la asimilación de la nación como marco de referencia en la conciencia de dirigentes, militantes y votantes para la gestión de demandas, acuerdos o conflictos políticos, entre los representantes de la clase con los gestores del Estado, en Carlos FORCADELL: “Los socialistas y la nación”, en Carlos FORCADELL, Pilar SALOMÓN e Ismael SAZ (eds.): *Discursos de España en el s. XX*, Universidad de Valencia, Valencia, 2009, pp.15-34.

Ferran Archilés, los socialistas, del mismo modo que los republicanos, «siempre aceptaron el marco del Estado y de la nación como el fundamento de sus reivindicaciones y de su identidad» y consiguieron convertirse en agentes nacionalizadores a través de sus espacios de sociabilidad, creando o difundiendo una cultura fuertemente nacionalizada que se transmitiría a través de conferencias, de la prensa, el teatro, los orfeones, el cine o las Casas del Pueblo, nutridas de una literatura y una cultura filtradas por el tamiz «del canon cultural español»<sup>38</sup>.

Una muestra de esta asunción aporreada de la identidad española es perfectamente visible a través del discurso patriótico del Partido Socialista en la guerra de Cuba en 1895, ya que su veleidad en contra del conflicto y del ejército no debe interpretarse como una debilidad del nacionalismo español, sino como la demostración de visiones alternativas de España, que sin embargo contribuían también a la construcción de su imaginario<sup>39</sup>.

Pero no sería hasta la I Guerra Mundial cuando la izquierda se replanteó su interpretación del internacionalismo, al ponerse de relieve la importancia del sentimiento nacional también entre los militantes socialistas. Además, el triunfo de la revolución en Rusia obligó a hacer frente a los problemas que generaba un Estado multinacional<sup>40</sup>. Todo esto influyó en la política española y en el PSOE, que se posicionó en el XI Congreso de 1918, a favor de la «Confederación republicana de las nacionalidades ibéricas». Pero en ello tuvo también que ver el revulsivo que había supuesto la penetración de los planteamientos catalanistas en la izquierda de aquel territorio, además de los intereses estratégicos y electoralistas de los socialistas, que buscaban ampliar su espacio político en Cataluña<sup>41</sup>.

---

<sup>38</sup> Ferran ARCHILÉS y Marta GARCÍA CARRIÓN: “En la sombra del...”, pp. 502-508. Véase también Marta GARCÍA CARRIÓN: “Cultura nacional y nacionalismo español”, en Carlos FORCADELL y Manuel SUÁREZ CORTINA: *La Restauración y la República: 1874-1936*, vol. III, pp. 169-200. Sobre la tradición republicana y el nacionalismo español, véase Andrés DE BLAS: *Tradición republicana y nacionalismo español (1876/1930)*, Tecnos, Madrid, 1991; Pilar SALOMÓN: “Republicanism and national identity in Spain: The republic as ideal salvific of the nation”, en Carlos FORCADELL, Pilar SALOMÓN e Ismael SAZ (eds.): *Discursos de España en el s. XX*, Universidad de Valencia, Valencia, 2009, pp. 35-64.

<sup>39</sup> Carlos FORCADELL: “Los socialistas...”.

<sup>40</sup> Hélène CARRÈRE, “Comunisme i nacionalisme...”.

<sup>41</sup> Un recorrido en este sentido se puede encontrar en José Luis MARTÍN RAMOS: “La dinamización del socialismo catalán” en Víctor ALBA (et. al.): *Andreu Nin i el socialismo*, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1998, pp.11-22; Xavier CUADRAT: *El PSOE i...* De hecho, la Federación

Pese a esta maximalista declaración de intenciones, no pretendieron en ningún caso menoscabar la unidad nacional española, y su federalismo sería prontamente rectificado. En el Congreso Extraordinario de 1919 modificaron la anterior declaración limitándose entonces al reconocimiento de autonomías, demostrando que no hacían más que transitar del unitarismo al regionalismo. El PSOE no quiso ir más allá de una descentralización política que racionalizara y superara en sentido progresista el Estado centralista, sin cuestionar en ningún caso el origen de la soberanía<sup>42</sup>.

Estas posiciones volverían a ser desafiadas con el advenimiento de la II República, aunque no se modificaron sustancialmente. Si bien con tensiones, el PSOE mantuvo su rechazo al federalismo, inclinándose por un autonomismo de inspiración krausista e institucionista, que se veía como más adecuado al preservar intacta la unidad del Estado, sustituyendo sin embargo un sistema que consideraban caduco y reaccionario, el centralista. En cualquier caso, como ha demostrado recientemente Aurelio Martí Bataller, tanto aquellos que eran favorables al federalismo como los que se posicionaron en contra, compartían una visión de España en la que la soberanía nacional era indivisible y respondía a un discurso «fortament impregnat per un llenguatge nacional espanyol, cultural i essencialista de base castellanocèntrica» que no reconocía la pluralidad cultural «més enllà de la seua consideració d'accessoris»<sup>43</sup>.

Con la Guerra Civil, la identidad nacional, como no podía ser de otro modo, cobró más fuerza<sup>44</sup>. Ambos bandos apelaron a la retórica nacionalista para movilizar a la población, y así lo hicieron tanto el PSOE como el PCE<sup>45</sup>. En este sentido, Xosé Manoel

---

socialista catalana, dirigida por Josep Recasens i Mercadé, había aprobado en 1914 una propuesta en estos términos.

<sup>42</sup> Daniel GUERRA SESMA: *Socialismo español y federalismo (1873-1976)*, Oviedo, Fundación José Barreiro-KRK, 2013.

<sup>43</sup> Aurelio MARTÍ: *Discursos de nació i identitat nacional espanyola en la cultura política socialista: el Partido Socialista Obrero Español a la II República*, tesis doctoral, Universitat de València, 2015, pp. 91-131. En un sentido similar, Antonio Rivera escribía: «“españolizar” y “republicanizar” la demanda y la elaboración de los estatutos, subordinando siempre estos a los principios políticos del cambio republicano. Tal fue la “tesis Prieto” y la posición más peso y trayectoria en el socialismo español de esos años», Antonio RIVERA: “El PSOE...”. Sobre las contradicciones de sus posiciones en pro de las autonomías véase, Francisco ASENSIO RUBIO: “El PSOE ante el hecho regional y autonómico”, *Universidad abierta: revista de estudios superiores a distancia*, 20 (1998), pp. 3-129.

<sup>44</sup> José ÁLVAREZ JUNCO: “Mitos de la nación en guerra”, en Santos JULIÁ (coord.): *República y Guerra Civil. Historia de España Menéndez Pidal vol. XL*, Madrid, Espasa Calpe, 2004, pp. 635-682; Xosé Manoel NÚÑEZ SEIXAS: *¡Fuera el invasor! Nacionalismo y movilización en la Guerra Civil española (1936-39)*, Madrid, Marcial Pons, 2006; Rafael CRUZ: *En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936*, Madrid, Siglo XXI, 2006.

<sup>45</sup> Aunque el PCE a nivel estatal mostró durante los años de la II República un planteamiento plural de la organización del Estado, la realidad era que esta cuestión no obtenía un consenso claro, y las

Núñez Seixas ha señalado: «la Guerra Civil, con su combinación de amenaza exterior (...) e interior constituyó un laboratorio privilegiado para comprobar cómo la nación y el nacionalismo eran ingredientes político-ideológicos y culturales también presentes en la cultura política y el repertorio discursivo de las izquierdas hispánicas»<sup>46</sup>.

Tras la guerra, el Partido Socialista se abstuvo en gran medida de realizar planteamientos importantes sobre la cuestión nacional<sup>47</sup>. Con una organización muy debilitada en el interior, los militantes del exilio pensaron España con añoranza<sup>48</sup>, y con muy pocas excepciones, como la de Anselmo Carretero, no abordaron la problemática de la pluralidad española<sup>49</sup>. El autor castellanoleonés, sin conseguir influir en esta cuestión entre sus contemporáneos, teorizó desde una perspectiva plural poco común en el socialismo –más aun en los socialistas de origen castellano–, desde la que conceptualizó España como una «nación de naciones», pese a que de nuevo no se puso en tela de juicio la soberanía nacional española ni la unidad del Estado<sup>50</sup>.

---

contradicciones se hacían evidentes, sin que las demandas territoriales ocuparan un lugar importante hasta los años sesenta. Pero en todo caso, con la guerra se constituyó el Partit Socialista Unificat de Catalunya, fundado en julio de 1936. Se presentó desde el primer momento como un partido nacional y de clase, pero a pesar de esto, no puso la cuestión nacional en el centro de sus preocupaciones y se ocupó de tratar de restablecer las instituciones republicanas, de acuerdo con las instrucciones generales de la Internacional Comunista a la que se había adherido desde su constitución. Durante la Guerra nunca planteó como principio la defensa de la soberanía nacional de Cataluña, aunque sí la del partido, respecto a los intereses del PCE que trataba de subordinarlo. Fue después de la caída de Cataluña, cuando adquirió una clara orientación nacional, véase José Luis MARTÍN RAMOS: *Els orígens del Partit Socialista Unificat de Catalunya*, Barcelona, Ariel, 1977; ÍD.: *Rojos contra Franco. Historia del PSUC, 1939-1947*, Barcelona, Edhasa, 2002; Josep PUIGSECH: *Nosaltres, els comunistes catalans*, Vic, Eumo Editorial, 1999; o Joan COMORERA: *Socialisme i qüestió nacional*, Barcelona, Undarius, 1977.

<sup>46</sup> Xosé Manoel NÚÑEZ SEIXAS: “Las izquierdas y la nación durante la guerra civil española (1936-1939)”, en Javier MORENO LUZÓN (ed.): *Izquierdas y nacionalismos en la España contemporánea*, Madrid, Pablo Iglesias, 2011, p. 204.

<sup>47</sup> La derrota provocó que este se convirtiera en un tema propicio para las recriminaciones entre el bando «perdedor», que extendió la desconfianza hacia los «nacionalismos» como uno de los factores que habían conducido al fracaso. Para esta cuestión y para un recorrido sobre la cuestión nacional en los partidos de la izquierda hasta los tiempos del antifranquismo, véase José Luis Martín RAMOS: “La izquierda obrera y la cuestión nacional durante la dictadura”, en Ismael SAZ y Ferran ARCHILÉS (eds.): *La nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea*, Valencia, PUV, 2011, pp. 301-321.

<sup>48</sup> Un ejemplo de ello se encuentra en la obra de Jorge de Hoyos, quien ha estudiado el exilio mexicano afirmando que «buscaron espacios donde sentirse españoles en México», Jorge DE HOYOS: *La utopía del regreso. Proyectos de Estado y sueños de nación en el exilio republicano en México*, México-Santander, Colegio de México-Universidad de Cantabria, 2012.

<sup>49</sup> Anselmo CARRETERO: *Las nacionalidades españolas*, San Sebastián, Hyspamérica Ediciones, 1977.

<sup>50</sup> Aurelio MARTÍ: *Discursos de nació...*, pp. 132-136; Andrea GENIOLA: “El hilo enredado de las nacionalidades. Las Españas de Anselmo Carretero entre el exilio y la Transición”, en Ángeles BARRIO (coord.): *Nuevos horizontes del Pasado*, Santander, Universidad de Cantabria, 2011; o Carmelo ADAGIO y Alfonso BOTTI: “L’identità divisa: nazione, nazionalità e regioni nella Spagna democrática (1975-2005)”, en Alfonso BOTTI (ed): *Le patrie spagnoli. Spagna democrática e questioni nazionali (1975-2005)*, Milán, Bruno Mondadori, 2007, pp 16-18.

Durante el Franquismo, la cuestión de la organización territorial del Estado no fue en absoluto prioritaria para la oposición española<sup>51</sup>, que tuvo que esperar a los años sesenta y setenta para recobrar protagonismo. Con una izquierda muy influida por los movimientos de liberación nacional tercermundistas, y por las revoluciones cubana y vietnamita, que hacían más visible la contradicción entre naciones oprimidas e imperialismo, fue el PCE el que tomó la delantera, planteando no sólo un marco de descentralización, sino también el reconocimiento del derecho de autodeterminación y una concepción «multinacional» de España<sup>52</sup>. Aunque desde la década de los sesenta se debatía entre los comunistas sobre estos aspectos, gracias al impulso que ofrecía en su seno la formación del PSUC, posiblemente el documento que supuso la culminación de aquella trayectoria sería el del informe de Dolores Ibarruri, presentado en 1970 y que sería publicado en 1971 con el título de *España, Estado multinacional*<sup>53</sup>. En él, se declaraba que los «comunistas nos pronunciamos por el reconocimiento, sin ninguna limitación y con todas sus consecuencias, del derecho de las nacionalidades a la autodeterminación». Hay que aclarar que con nacionalidades se refería únicamente a Cataluña, Euskadi y Galicia: «De aquí que la clase obrera de nuestro país, como la clase más consecuentemente revolucionaria, y que lleva en sí misma el futuro de una España socialista, debe ser la más interesada en la defensa del derecho de estas nacionalidades a la autodeterminación»<sup>54</sup>.

Los socialistas, por su parte, hicieron una pequeña incursión en estos asuntos en la temprana fecha de 1964, durante su IX Congreso, en el que en una declaración anexa se recuperaba la fórmula de 1918 «Confederación republicana de nacionalidades ibéricas», sin excesiva trascendencia<sup>55</sup>. La cuestión no volvió a adquirir importancia hasta el XII Congreso de agosto de 1972, en el que Felipe González se refirió a la necesidad de tener en cuenta el «problema de las nacionalidades» porque en muchas

---

<sup>51</sup> Santos JULIÁ: “Nación, nacionalidades y regiones en la transición política a la democracia”, en Javier MORENO LUZÓN (ed.): *Izquierdas y nacionalismos en la España contemporánea*, Madrid, Pablo Iglesias, 2011, pp. 259-260.

<sup>52</sup> Ferran ARCHILÉS: “75, modelo para...”

<sup>53</sup> Se trataba de la reproducción de un informe presentado por Dolores Ibarruri ante el Pleno del Comité central del Partido Comunista de España, en septiembre de 1970.

<sup>54</sup> Dolores IBARRURI: *España, Estado Multinacional*, París, Editions Sociales, 1971, pp. 8 y 12.

<sup>55</sup> Luis GÓMEZ LLORENTE: *Aproximación a la historia del socialismo español*, Madrid, Cuadernos para el diálogo, 1976, pp. 346 y ss. Carmelo ADAGIO y Alfonso BOTTI: “L’identità divisa: nazione...”, p. 12.

zonas era un «elemento de movilización y lucha contra el sistema político», aunque esto no se tradujo en ninguna declaración de principios, todavía<sup>56</sup>.

### ***El PSOE de congreso a congreso (1974-1976)***

No fue hasta el Congreso de Suresnes, en octubre de 1974, cuando los socialistas, además de apostar por el Estado Federal, defendieron por primera vez en su historia el derecho de autodeterminación<sup>57</sup>. Lo hacía una generación joven de socialistas que renovaba aquella organización, no sólo en la dirección sino en gran parte de las federaciones, cuya militancia había visto interrumpida su continuidad hasta los años setenta, en los que comenzó a nutrirse de nuevos jóvenes que heredaban la tradición histórica de aquellas siglas pero que iban a dotar al PSOE de un aire nuevo<sup>58</sup>.

Esta combinación entre tradición y renovación se observaba en la *Resolución sobre nacionalidades y regiones*, del XIII Congreso celebrado en Suresnes, que aludía a la tradición marxista sobre la cuestión nacional de la siguiente manera:

2. Al analizar el problema de las diversas nacionalidades, el PSOE no lo hace desde una perspectiva interclasista del conjunto de la población de cada nacionalidad, sino desde una formulación de estrategia de clase que implica que el ejercicio específico del derecho de autodeterminación para el PSOE se enmarca dentro del contexto de lucha de clases y del proceso histórico de la clase trabajadora en la lucha por su completa emancipación.

---

<sup>56</sup> Citado en Santos JULIÁ: “Nación, nacionalidades y regiones...”, pp. 263-264.

<sup>57</sup> El retraso fue en todo caso mayor en otras fuerzas socialistas como el Partido Socialista Popular, en el que en 1974 tan sólo reconocían la «personalidad política de las comunidades histórica, económica y culturalmente diferenciadas, que constituye el Estado español» y defendían para ellas la posibilidad de «definirse libremente» en democracia. Sin embargo en 1975, arrastrados por la corriente mayoritaria que ya se había impuesto en la izquierda —entre otras cosas gracias también al impulso que sobre estos asuntos propició la Federación de Partidos Socialistas, fuertemente territorializada y con presencia de partidos socialistas valencianos, catalanes, aragoneses, andaluces, etc.—, se pronunciaron por el derecho de autodeterminación. Véase respectivamente Francisco BOBILLO: *PSP. Partido Socialista Popular*, Barcelona, Avance, 1976, p. 57; PSP: *Por un socialismo responsable (El Partido Socialista Popular ante el futuro español)*, Madrid, Túcar, 1977, p. 72; y Enrique BARÓN: *FPS. Federación de Partidos Socialistas*, Barcelona, Avance, 1976.

<sup>58</sup> Fue también entonces cuando sin embargo el PSOE renovado apostó decididamente por hegemonizar el camino hacia la unidad socialista e iniciar una política de alianzas antifranquistas que sirvieran a este fin. Como consecuencia de ello, abandonó la Confederación Socialista Ibérica y reafirmó su modelo de partido federal y no de partidos federados, pese a su reciente postura favorable al Estado federal para España, José Luis MARTÍN RAMOS: *Historia del socialismo español, vol. 5*, Barcelona, Conjunto Editorial, 1989, p. 225. Sobre la renovación del PSOE desde el interior véase también, Jorge DE ESTEBAN y Luis LÓPEZ GUERRA: *Los partidos políticos en la España actual*, Barcelona, Planeta, 1982, pp. 115-119; o Juan Antonio ANDRADE: *El PCE y el PSOE en...*, pp. 112-124.



3. El PSOE se pronuncia por la Constitución de una República Federal de las nacionalidades que integran el Estado español por considerar que esta estructura estatal permite el pleno reconocimiento de las peculiaridades de cada nacionalidad y su autogobierno a la vez que salvaguarda la unidad de la clase trabajadora de los diversos pueblos que integren el Estado federativo<sup>59</sup>.

En estos planteamientos están presentes los principios básicos de la argumentación marxista en defensa de las reivindicaciones nacionalistas: se reclamaba el protagonismo de la clase obrera desde una estrategia de clase, que tenía como fin la movilización de las masas en favor de la emancipación social; y se enunciaba el principio de autodeterminación, pero con la intención de construir un Estado Federal, sin poner en peligro la unidad de la clase trabajadora, pues de otra manera estaríamos ante una estrategia interclasista, que de momento rechazaban, al menos teóricamente.

La conciliación entre la apuesta por tales derechos y el mantenimiento de una política de clase coherente, se vería reforzada en la *Resolución sobre nacionalidades* del XXVII Congreso, de diciembre de 1976. En un apartado específico sobre *La cuestión nacional y la lucha de clases*, indicaban que el sometimiento de las nacionalidades y regiones era una faceta más de la opresión de la clase dominante hacia los trabajadores; y añadían que la burguesía de los territorios subyugados, o no había sabido defender sus intereses, o se había plegado directamente al servicio de la oligarquía centralizadora; por lo que la única clase que podía liderar la liberación era el proletariado, vinculándola al proceso de lucha de clases, y al internacionalismo. Se pretendía, por tanto, recabar el potencial movilizador del nacionalismo en favor de su objetivo final, el establecimiento del socialismo en España, sin que la unidad de la clase obrera, fuera puesta en entredicho<sup>60</sup>. Así se observa en los siguientes extractos de la resolución:

---

<sup>59</sup> PSOE: “Resolución sobre nacionalidades y regiones”, en *Resoluciones. XIII Congreso*, ABFPI, Fbb 431.

<sup>60</sup> En este sentido, en mayo de aquel mismo año, se había publicado una colección por parte de la editorial Avance para que los partidos políticos se presentaran ante la ciudadanía. En él, a esta cuestión se había referido el Partido Socialista en términos similares, explicando la compatibilidad del socialismo y el nacionalismo de la siguiente manera: «tampoco se debe reducir el nacionalismo a capitalismo mientras que el socialismo se identifica con abstracta unidad. Las nacionalidades y el socialismo son temas planteados a diferentes niveles e implicados en su solución. El nacionalismo tiene mucho que ver con autonomía personal, política, cultural, lingüística. El socialismo, con liberación económica. Nacionalidades y socialismo no se excluyen. Se exigen y se complementan», en Francisco BUSTELO, Gregorio PECES-BARBA, Ciriaco DE VICENTE y Virgilio ZAPATERO: *PSOE. Partido Socialista Obrero Español*, Barcelona, Avance, 1976.

El PSOE es plenamente consciente de que el proceso revolucionario al que presta su concurso en el seno del Estado español está íntimamente relacionado con la lucha por la conquista de las libertades de los pueblos que componen este Estado, y que el logro de este objetivo prioritario permitirá la concentración de esfuerzos imprescindible para el establecimiento del socialismo en España.

(...)Para los socialistas, la autonomía debe entender en cualquier caso a la coordinación permanente de esfuerzos entre los trabajadores de los distintos pueblos del Estado español. Los movimientos nacionalistas y regionalistas, asumidos por la clase obrera y el campesinado, elevan cualitativamente sus objetivos con la dialéctica marxista.

(...)Estos principios son los que llevan al PSOE, como organización de clase, a incrementar sus esfuerzos para conjugar el principio socialista de la libre autodeterminación de los pueblos con el de la imprescindible acción coordinada y unitaria de la lucha que la clase obrera ha mantenido, desarrolla y reforzará en el camino hacia su total emancipación<sup>61</sup>.

Estos argumentos respondían a aquella tradición socialista, internacional y nacional, de defensa de las pretensiones nacionalistas en la que podían refugiarse frente a los ataques de los escépticos. Pero esto no quiere decir que en el PSOE, como en el conjunto de la izquierda estatal, se mantuvieran canónicamente los postulados que se derivaban de ella. Influencia no significó copia mimética, y el discurso adquirió matices muy importantes. La reinterpretación fue enorme, destacando el cariz interclasista que progresivamente se dio a estas demandas, tanto en el Partido socialista como en el comunista, muy vinculado con el objetivo que se buscaba, que de forma inmediata era la democracia, lo que modificaba en gran medida la forma de plantear la problemática y las soluciones que serían aceptadas finalmente.

Además, en la reelaboración del discurso sobre la cuestión nacional influyeron decisivamente las consecuencias que el Franquismo y la Guerra Civil produjeron en la memoria de la izquierda española durante la Transición. La demanda de libertad se convertiría en omnipresente tras los años de la dictadura, y los derechos adquiridos con la II República pasarían a ser objetivos prioritarios tras la experiencia de la guerra y del Régimen. Así, los Estatutos de Autonomía de las tres nacionalidades históricas,

---

<sup>61</sup> *Resolución sobre nacionalidades* del XXVII Congreso del PSOE de diciembre de 1976, en Alfonso GUERRA: *XXVII Congreso PSOE*, Avance, Barcelona, 1977, pp.126-128.

ocuparon un lugar preferente en la oposición antifranquista, que reaccionaba ante una política destinada a acabar con cualquier tipo de identidad diferenciada. Se convirtió en víctima al nacionalismo no estatal, y la asimilación de esta lucha con la lucha antifranquista fue total, acabando por aparecer como inseparables, sobre todo gracias a la influencia que ejerció la izquierda catalana en los partidos estatales<sup>62</sup>.

Por otra parte, el nuevo contexto, en el que los objetivos inmediatos de los partidos de izquierda se limitaban a alcanzar y consolidar la democracia, afectó también al discurso. Fue especialmente destacable en el PCE, partido que en la Transición pretendía deshacerse de su imagen de extrema radicalidad ante la población, y que por tanto hizo más concesiones en este sentido, también por las mayores trabas que iban a ir apareciendo en el camino hacia su legalización. Por ello, trataba de eliminar cualquier temor ante la posibilidad de que su actitud reprodujera de nuevo una guerra entre los españoles, y se proclamaba defensor de la democracia, relegando la implantación de la

---

<sup>62</sup> Pere YSÀS: “El proceso hacia el Estado de las autonomías”, en Javier UGARTE(ed): *La transición en el País Vasco y España. Historia y Memoria*, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1998, pp. 64-65; Josep M. VALLÉS: “La política autonómica como política de reforma institucional”, en Ramón COTARELO: *Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986)*, p. 368; Josep Maria COLOMER: *Espanyolisme i catalanisme: la idea de nació en el pensament polític català (1939-1979)*, Barcelona, L’Avenç, 1984; Pere YSÀS: “Construcción democrática y construcción nacional en Cataluña”, en Ismael SAZ y Ferran ARCHILÉS (eds.): *La nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea*, Valencia, PUV, 2011, pp.341-360; o Carme MOLINERO: “La oposición al...”. Por otra parte, autores como Isidro Sepúlveda atribuyen la actitud socialista de «defensa de los criterios nacionalistas» a una «firme orientación doctrinal sobre el tema» –que nosotros pondríamos en duda– y que habría permitido al PSOE «aglutinar a la mayor parte de los pequeños partidos y grupúsculos socialistas repartidos por toda la geografía española e integrantes de la Federación de Partidos Socialistas». Aunque en nuestra opinión, la absorción de la mayor parte de los grupos socialistas se debió fundamentalmente a una estrategia por hacerse con la hegemonía del campo socialista, pese a que la integración de muchos de estos grupos le dotara de una mayor comprensión del hecho nacional en España, Isidro SEPÚLVEDA: “La eclosión nacionalista: regionalismos, nacionalidades y autonomías”, en Javier TUSELL y Álvaro SOTO (eds.): *Historia de la Transición (1975-1986)*, Madrid, Alianza Editorial, 1996, pp. 429-430. Respecto a la influencia catalana y vasca, hay que decir que como venimos planteando, la primera fue especialmente destacable, pero pronto, los socialistas vascos se sumaron a la defensa de las libertades nacionales. Eider Landaberea ha escrito a este propósito que: «la recuperación y recuerdo de los orígenes y primeros postulados del partido se hizo desde un presente, el de la Transición, en el que la centralidad que la cuestión nacional estaba adquiriendo en el debate político del momento resultaba crucial. El partido socialista lo asumió y tomó posición sobre el mismo, intentando aunar esta reivindicación con su corpus ideológico más tradicional. En la definición del «nosotros» que el PSE-PSOE realizó en los inicios de la Transición, además de unir a distintas generaciones vinculándolas a una lucha común en pro de las libertades y de recordar y recuperar a razón de las constitución del partido en 1879, parecía ineludible la inclusión de un elemento más, que no era otro que la cuestión nacional. Y aquí radica la principal novedad que el PSE-PSOE presentó en los primeros momentos del proceso constituyente», Eider LANDABEREA: *Los “nosotros”...*, pp. 171-172. Véase también, José Antonio PÉREZ: “La izquierda vasca en la complicada transición hacia la democracia”, en Carme MOLINERO y Pere YSÀS: *Las izquierdas en tiempos de Transición*, València, PUV, 2016, pp. 199 y 205-207.

sociedad comunista hasta que la voluntad mayoritaria así lo decidiera<sup>63</sup>. En este nuevo marco, dominado por la voluntad de consenso y de negociación, por la tradición ideológica, y como no, por las cuestiones electoralistas, es en el que se produjeron las estrategias de los partidos, que trataban de delimitar su espacio en el nuevo sistema político que debía implantarse. Ya fuera en el contexto de la *ruptura democrática* que comenzaría a agotarse hacia finales de 1976, quizá un poco antes en el caso del PCE<sup>64</sup>; o de la *reforma democrática*, que inauguraría una nueva etapa, marcada por la necesidad de consenso y la perspectiva electoral<sup>65</sup>, las políticas en relación a la cuestión nacional no podrían ser ajenas a todos estos factores.

En lo que respecta al PCE, la vía hacia el socialismo pasaba por la *vía democrática*, y para ello era necesaria la colaboración de todas las fuerzas antifranquistas, por lo que propugnaban desde hacía años la necesidad del *pacto para la libertad*. Esto tenía una relevancia trascendental para su posición frente a la cuestión nacional, ya que, si el horizonte inmediato era la democracia, y se propugnaba la unidad de todas las fuerzas que querían acabar con el régimen dictatorial, era importante recabar el potencial movilizador de los nacionalismos. Si, como diría Carrillo en 1976, «Ya no es función exclusiva del proletariado, la lucha contra el fascismo y la democracia», debían integrarse todas las demandas que sumaran apoyos a esta causa, aunque implicara una tendencia interclasista, sobre todo si, como era el caso, eran consideradas además demandas justas<sup>66</sup>. Y por ello trataban de inculcar estas ideas en la militancia, explicando que una de las tareas para llevar a cabo con éxito el *pacto para la libertad*, era «Hacer todo por enraizarlo en las masas ciudadanas (...) Conseguir que sea

---

<sup>63</sup> Aunque quizá se hiciera más evidente durante la Transición, como han puesto de relieve Carme Molinero y Pere Ysàs, ya entre los años cincuenta y sesenta el establecimiento de un régimen democrático se convirtió en el objetivo prioritario y fundamental del PCE, Carme MOLINERO y Pere YSÀS: «El PCE y la democracia», en Carme MOLINERO y Pere YSÀS: *Las izquierdas en tiempos de Transición*, València, PUV, 2016, pp. 115-137.

<sup>64</sup> Como explica Jesús Sánchez Rodríguez para el caso del PCE, ya en el documento aprobado en la reunión del Comité Ejecutivo de 20 de marzo de 1976, titulado «Cuatro Posiciones del PCE para resolver el problema político», se planteaba la solución para llegar a la «ruptura democrática pactada», y en el Pleno del Comité Central en Roma, de julio de 1976, Carrillo se refería abiertamente a la apuesta por la «ruptura pactada», en Jesús SÁNCHEZ RODRÍGUEZ: *Teoría y práctica democrática en el PCE (1956-1982)*, Fundación de Investigaciones Marxistas, Madrid, 2004, pp. 271-272.

<sup>65</sup> Según el esquema de Alejandro Quiroga, estaríamos ante la primera de las tres coyunturas críticas del período, que habría tenido lugar entre finales de 1976 y mediados de 1977, momento en el que «los socialistas y los comunistas comenzaron a modificar sus posturas republicanas y federalistas» en el marco de la negociación y el consenso, desplazando a la *ruptura democrática* en beneficio de la *reforma democrática*, en Alejandro QUIROGA: «Coyunturas críticas...», pp.25-26.

<sup>66</sup> En el Informe al Pleno del Comité Central (Roma 1976) en Dolores IBARRURI y Santiago CARRILLO (et. al.): *La propuesta comunista*, Laia, Barcelona, 1977, p.274.

un centro de actividad, (...), capaz de ligar en el momento vivo las reivindicaciones nacionales, regionales, provinciales, y locales, con la alternativa democrática global»<sup>67</sup>.

Y lo mismo sucedía con el PSOE, ya que, el hecho de que utilizaran un lenguaje menos interclasista en las resoluciones sobre nacionalidades de sus Congresos, no impedía que en sus programas y en su práctica política, se persiguiera igualmente la democracia y la unidad del frente antifranquista para lograrla. En el tratamiento de la cuestión nacional se observarían posiciones que no siempre serían coincidentes en todos los ámbitos del discurso. Volvamos primero a la *Resolución sobre nacionalidades y regiones* del Congreso de octubre de 1974. Mucho más escueta y concisa que la de 1976, tuvo la importancia de establecer por primera vez la defensa del principio del derecho de autodeterminación, como ya hemos visto:

1. La definitiva solución del problema de las nacionalidades que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas que comporta la facultad de que cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español<sup>68</sup>.

Destaca en primer lugar, cómo para el PSOE se partía, al menos en la teoría, de dos presupuestos: España no era una nación, sino un Estado; y en él se integraban diversas nacionalidades y regiones marcadamente diferenciadas, lo que implicaba una distinción entre las dos últimas. La pregunta clave es qué se entendía por nacionalidad, ¿una nación? La postura oficial era la de que nación y nacionalidad eran sinónimos. Pero estos conceptos implican problemas teóricos que complican tales afirmaciones, como se verá en el debate constitucional.

Otro aspecto de la resolución es que pese a que se concebía la autodeterminación como solución al «problema de las nacionalidades», se consideraba que de ésta se derivaría la coexistencia voluntaria en el Estado español, donde las peculiaridades de cada pueblo serían respetadas, demostrando que el marco de referencia para los

---

<sup>67</sup> Se trataba de una cita literal del libro de Santiago Carrillo, *Hacia el post-franquismo*, de 1974, que aparecía en una publicación de 1976 concebida como material de estudio para uso interno de los militantes, en la que recopilaban textos relevantes emitidos por el partido, PCE: *Partido Comunista de España. PCE*, Madrid, 1976, p. 76.

<sup>68</sup> “Resolución sobre nacionalidades y regiones”, en PSOE: *Resoluciones. XIII...*

socialistas no era otro que España: «3. El PSOE se pronuncia por la Constitución de una República Federal de las nacionalidades que integran el Estado español (...)».

Comparémoslo ahora con la *Resolución sobre nacionalidades* del Congreso del PSOE de diciembre de 1976. En su introducción trataba de justificar y explicar su posición. En primer lugar se observaba la huella que la memoria de la represión había dejado también en este aspecto: «En los últimos cuarenta años, el régimen surgido de la guerra civil ha intentado negar la evidencia de que históricamente España es una realidad configurada por una pluralidad de nacionalidades y regiones que hoy integran el Estado español». El hecho de que esas identidades diferenciadas hubieran tratado de ser aniquiladas por el Franquismo hacía que las fuerzas antifranquistas, tomaran como suyas muchas de sus reivindicaciones, no sólo para hacer frente común contra la dictadura, sino porque se trataba de una violación de las libertades y porque acabaron solidarizándose con sus exigencias. Asimismo, seguían manteniendo una postura clara frente a la unidad del futuro de España; una cosa era apoyar la lucha nacional como lucha libertaria, y otra, menoscabar la solidaridad de todos los trabajadores. Por otra parte, en lo que respecta a la comparación con el Congreso de Suresnes, ha de decirse que no se produjeron cambios importantes, volviéndose a proclamar los mismos principios. Quizá, las posibles diferencias se encuentren más bien en las formas, en el acento que se pondría en el ejercicio del derecho de autodeterminación, respetado pero relegado a un segundo plano. Esta vez, la importancia recaía en el modelo que pretendían imponer, un Estado en el que la autonomía de todas sus nacionalidades y regiones estuviera garantizada:

1. El PSOE propugna la instauración de una República federal, integrada por todos los pueblos de España.
2. El PSOE propugna que un parlamento constituyente, elegido por todos los ciudadanos, elabore una constitución de carácter federal en la que se garantice a todos los pueblos del Estado español el principio de autonomía, en uso del cual pueden crear sus propias instituciones, dentro de un marco constitucional abierto. La constitución garantizará el derecho de la autodeterminación.
3. El PSOE propugna que, con el pleno ejercicio de las libertades democráticas, se reconozca el hecho histórico de los estatutos de autonomía que fueron establecidos constitucionalmente, y se restablezcan las instituciones representativas previstas en dichos estatutos, de forma que puedan ser cauce de expresión de la voluntad de los respectivos pueblos; que, del mismo modo, se consideren las restantes

formulaciones autonómicas surgidas democráticamente en otros entes territoriales del Estado, así como que se abra un proceso mediante el cual todas las nacionalidades y regiones que lo deseen puedan dotarse de sus propios regímenes de autonomía, sin perjuicio de lo que en definitiva resulte de la Constitución y del ejercicio del derecho de autodeterminación<sup>69</sup>.

Incluso parece que estuvieran prefigurando el modelo abierto que acabó imponiéndose con la Constitución, en el que cada región o nacionalidad podría sumarse al proceso en función de su conciencia diferenciada y sus propios intereses. Por último señalar que idearon un Estado federal que tendría delimitadas tres esferas: la federal, la federada, y la local; en las que solo la primera gozaría de soberanía, negándosela así a las nacionalidades y regiones.

En cualquier caso, en estos temas el PSOE no llevaba la delantera, sino que se veía muy influido por un Partido Comunista que había elaborado sus posiciones con anterioridad. En el PCE, en cambio, fueron textos ajenos a los Congresos los que otorgaron una importancia mayor al problema nacional. Pese a que, en el Informe presentado por el Secretario General en el VIII Congreso, de 1972, el derecho de autodeterminación fue reafirmado para las tres nacionalidades históricas, no se le dio una importancia trascendental, enmarcándolo únicamente dentro de la estrategia del *pacto para la libertad*<sup>70</sup>. Sin embargo, el ya mencionado libro de Dolores Ibarruri, había supuesto, poco antes, toda una declaración de intenciones. En él, la opresión nacional no se entendía al margen del contexto de la dictadura Franquista, por lo que la liberación de las nacionalidades era fundamental para la construcción de una España democrática, lo que implicaba necesariamente, otorgar el derecho de autodeterminación. Así se muestra en las siguientes líneas:

os comprometo u obligo, a añadir, a los múltiples motivos que impulsan y animan nuestra lucha contra la dictadura, uno más: el de la defensa del derecho de las nacionalidades existentes en nuestro país a la autodeterminación (...) que es en sustancia el derecho de Cataluña, Euzkadi y Galicia a disponer libremente de sus destinos<sup>71</sup>.

---

<sup>69</sup> PSOE: «Resolución sobre nacionalidades», en Alfonso GUERRA: *XXVII Congreso PSOE*, Avance, Barcelona, 1977, pp. 125-134.

<sup>70</sup> “Hacia la libertad”, Informe del Comité Central presentado por Santiago Carrillo al VIII Congreso del PCE, en Santiago CARRILLO y Dolores IBARRURI: *Hacia la libertad. Octavo Congreso del Partido Comunista de España*, París, Editions Sociales, 1972, pp. 44-46.

<sup>71</sup> Dolores IBARRURI: *España, Estado Multinacional...*, p. 7.

De todos modos, ni siquiera a estas alturas se pensaba en otra cosa que no fuera la unidad, *en la diversidad*, de una España Federal; apelando incluso a un discurso de la España y la antiespaña, en el que los comunistas eran los auténticos patriotas<sup>72</sup>. Así, argumentaba que el reconocimiento de estos derechos «no significaría la disgregación y la ruina de España, como pretenden los monopolizadores actuales del poder, sino su fortalecimiento y desarrollo industrial, político, económico y cultural», y añadía después:

Éramos la antiespaña quienes luchábamos por la libertad y el progreso de los pueblos de nuestra patria.

Y eso nos decían quiénes se servían de los ejércitos fascistas extranjeros contra el pueblo español (...) nos lo decían quienes ceden hoy, por un puñado de dólares, trozos del territorio español al imperialismo yanqui para establecer sobre ellos bases militares que constituyen una mediatización de la soberanía española y una permanente amenaza contra nuestro pueblo y nuestra patria...

El discurrir de los años y los acontecimientos ha demostrado, de manera incontestable, dónde estaba la antiespaña y quiénes eran los verdaderos defensores de España<sup>73</sup>.

En la misma tónica se mantendría la II Conferencia Nacional del PCE, en la que se aprobó el Manifiesto-Programa de 1975. En el Informe Central de Santiago Carrillo, se incluía un apartado denominado *Los problemas nacionales y regionales en España*, donde, igual que había hecho Pasionaria, se ligaban los problemas nacionales al centralismo y a la opresión que había impuesto el Franquismo, y trataban de deshacerse por completo del apelativo de «separatistas». Para ello, hablaban sólo de formas federativas y autonómicas, que únicamente reforzarían la unidad, una unidad puesta en peligro por la dictadura. Estos postulados volverían a ser reforzados en el discurso de Carrillo, «Resumen de la discusión», en el que declararía: «Es evidente que los comunistas debemos levantar con toda energía la bandera de la lucha nacional (...) de la misma manera tenemos que asumir algo que también es un componente de nuestra estrategia: la existencia de una comunidad que históricamente se ha formado y que es

---

<sup>72</sup> Otros partidos comunistas europeos, como el italiano o el francés, también se preocuparon por cuestiones similares y plantearon soluciones descentralizadoras sin que por esto se pusiera en cuestión en ningún caso la unidad de su nación de referencia. Véase por ejemplo para el caso francés Claude ARLANC (*et alii*): *Regionalismo y Capitalismo*, Madrid, Akal, 1978.

<sup>73</sup> *Ibid.*, pp.15-19.



España»<sup>74</sup>. Porque además, la unidad de la clase dependía de ello, y si no eran capaces de «tomar también en sus manos la bandera de esa comunidad que es España, no sé quién, (...) podrían encontrar una base de masas predispuestas para una política nacionalista, anticatalana o antivasca, es decir, podría haber ahí el germen de una futura división de la clase obrera»<sup>75</sup>. Reconocía así, no sólo el potencial movilizador del nacionalismo no estatal sino también el del español. Además, Carrillo, hablaba de autodeterminación, pero de algún modo le otorgaba un ejercicio restrictivo: si no era utilizado para permitir la convivencia consentida de todos los pueblos en el Estado español, no se realizaría de forma real, pues las nacionalidades que se independizaran, perderían su autonomía frente a las potencias imperialistas.

En cambio, el Manifiesto-Programa, que se aprobó en esta misma Conferencia, establecía que la democracia tendría que resolver, entre otras, la siguiente tarea fundamental:

1. Respetando el inalienable derecho de los pueblos a decidir libremente sus destinos, la democracia política y social reconocerá el carácter multinacional del Estado español y el derecho de autodeterminación para Cataluña, Euskadi y Galicia, garantizando el ejercicio efectivo de este derecho por los pueblos. Los comunistas propugnamos la libre unión de todos los pueblos de España en una república federal<sup>76</sup>.

Se mencionaba además el caso de «situaciones específicas» entre las que se encontraban, Navarra, el País Valenciano, Baleares y Canarias; y sin referirse a la autodeterminación, se hablaba de soluciones autonomistas basadas en «la voluntad libremente expresada de sus respectivos pueblos». A estos territorios se sumaba un tercer grupo de «regiones» que se dotarían igualmente de órganos autónomos. Suponía el establecimiento de tres niveles en la categorización de los territorios españoles, sin derivarse diferencias reales, excepto entre las primeras y el resto, aunque sólo de una manera *abstracta*, pues no parece que se apostara realmente por una autodeterminación efectiva.

Es interesante ver cómo los postulados defendidos por los comunistas, además de servir para apostar por los derechos de los pueblos con identidades diferenciadas

---

<sup>74</sup>Dolores IBARRURI y Santiago CARRILLO (et. al.): *La propuesta comunista...*, p.102.

<sup>75</sup>*Ibid.*, p.104.

<sup>76</sup>*Ibid.*, pp.176-177.

dentro del Estado español, servían también para reforzar la identidad de la nación dominante, la española. En el Pleno ampliado del Comité Central del PCE, en 1974 se emitió un comunicado en el que se primaron los intereses particulares de cada Estado frente al interés universal del comunismo. Mantenían para ello la lógica del «nuevo» concepto de internacionalismo, en el que el trabajo por el socialismo debía realizarse en la esfera nacional, pues esto contribuiría al bien global de todo el movimiento. De hecho, éste sería un aspecto que afectaría decisivamente a las relaciones del PCE con la URSS y el PCUS. Para el primero, la nueva situación internacional, caracterizada por la distensión y por la proliferación de las luchas contra el imperialismo desde el ámbito nacional, modificaba irremediabilmente el contenido del internacionalismo. La coexistencia pacífica y la multiplicación de Estados socialistas, hacía innecesaria la defensa incondicional de la Unión Soviética; y las luchas revolucionarias de liberación nacional, demostraban el poder movilizador del nacionalismo cuando era puesto al servicio del socialismo<sup>77</sup>. Además, consideraban que para acabar con la dictadura franquista era indispensable elaborar una estrategia nacional española:

Y no es que neguemos que los Partidos de los países socialistas no sigan con simpatía nuestra lucha; pero los compromisos de Estado, lógicos, les obligan a actuar con cautela. Por eso nosotros estimamos que el interés de **todo** el movimiento, incluidos los Partidos y los Estados socialistas, es que los Partidos de los países capitalistas tengamos

---

<sup>77</sup> Así pues, junto a la defensa por parte del PCE del ideal internacionalista, existió desde entonces, tanto en la práctica como de forma teórica, una estrecha relación con la nación. Algo que, por otra parte, no era ajeno a los partidos comunistas de su entorno. Tanto el Partido Comunista Italiano, como el Partido Comunista Francés, o el Partido Comunista Portugués tenían como referencia identitaria indiscutible sus respectivas naciones, como ha demostrado la historiografía que se ha ocupado del tema, haciendo compatibles la lealtad al marxismo, a la URSS y al internacionalismo con la lealtad incuestionable a su nación, aunque el énfasis que dedicaban a cada una de ellas variaba según las coyunturas y el momento histórico. Así lo han demostrado entre otros Marc Lazar, quien afirmaba para el PCF: «D'un côté, il est considéré comme un parti internationaliste, l'un des plus dévoués à l'URSS parmi les partis communistes. De l'autre, il est perçu comme un parti nationaliste, ou mieux nationalitaire, l'un des plus nationalitaires parmi les partis communistes», en Marc LAZAR: *Le communisme, une passion française*, París, Perrin, 2005, p. 64. Para el caso del PCI, Emilio Gentile explicaría que tras la II Guerra Mundial, el Partido sería un ferviente defensor de la unidad de la nación: «Il Partito comunista divenne così uno dei più intransigenti paladini dell'unità nazionale», Emilio GENTILE: *La Grande Italia. Il mito della nazione nel XX secolo*, Roma-Bari, Laterza, 2009, p.320. José Neves, por su parte, imbricaría la cultura política comunista del PCP con el nacionalismo, señalando lo siguiente: «a história do nacionalismo comunista dever ser em parte lida à luz da *persistência* de uma série de traços nacionalistas que se prolongam das culturas políticas dominantes até à cultura política comunista; e que, por outro lado, essa história pode ser igualmente lida como resultado da *adesão* comunista aos tópicos nacionalistas», en José NEVES: *Comunismo e nacionalismo em Portugal. Política, cultura e história no século XX*, Lisboa, Tinta-da-China, 2010, p. 391.

un tipo de articulación internacional específica (...) para desenvolver nuestra acción revolucionaria sin comprometer sus relaciones de Estado. Que esta es la mejor forma de **preservar la unidad de todo el movimiento.**<sup>78</sup> [s.o]

Esto se evidenció de nuevo en el Manifiesto-Programa de 1975, aprobado en septiembre de 1975 en la II Conferencia del PCE, que esgrimía que la nueva situación «crea condiciones objetivas más favorables para la lucha por el socialismo (...) porque restituye más netamente a la lucha de clases su forma nacional»<sup>79</sup>. El ámbito más efectivo para el triunfo de la revolución, era pues, el nacional, pero ello no eliminaba la importancia del «internacionalismo proletario», únicamente le daba un nuevo significado. Internacional y nacional eran ahora dos dimensiones necesarias para la obtención del objetivo final, porque ambas caminaban hacia el triunfo mundial de la revolución socialista. En el mismo Manifiesto se establecerían las bases de la nueva estrategia revolucionaria, afirmando lo siguiente:

En estas condiciones, la victoria mundial del socialismo no toma la forma de la derrota de unos Estados por otros sino una forma real, natural: la victoria de cada pueblo sobre sus propias clases explotadoras. El factor nacional se convierte así, de obstáculo en componente de la revolución socialista<sup>80</sup>.

Pero fue en el Informe Central de Santiago Carrillo a la II Conferencia, donde las posiciones se hicieron más explícitas y la retórica patriótica se tornó un poco más evidente, echando mano del recurso al inconsciente colectivo y de esa dialéctica de recuerdo/olvido a la que se refería Michael Billig, «creando» nación a partir de un discurso que no aparenta ser nacionalista, al mismo tiempo que cala en la sociedad al apelar a sentimientos que ya existían<sup>81</sup>:

---

<sup>78</sup> PCE: “Comunicado del Pleno ampliado de la reunión del Comité Central del P. C de España” (marzo de 1974), Archivo Histórico del Partido Comunista de España (AHPCE), Documentos del PCE, carpeta 55, p. 111.

<sup>79</sup> Y en otro pasaje añadían: «para el triunfo de nuevas revoluciones **hace falta que cada Partido se funda estrechamente con su pueblo, con el momento concreto que éste vive.** Que los Partidos Comunistas sean, y así lo vean las masas de su país, **totalmente independientes de cualquier otro Estado, incluso socialista**» [s.o.], PCE: “Manifiesto-Programa del Partido Comunista de España” (septiembre de 1975), Archivo Histórico Sindical José Luis Borbolla (AHSJLB), Fondo Antonio Palomares.

<sup>80</sup> Dolores IBARRURI y Santiago CARRILLO (*et. al.*), *La propuesta comunista...*, p. 145.

<sup>81</sup> El nacionalismo banal se naturaliza según Billig en los actos cotidianos, a través de una bandera que ondea de forma repetida pero que no se homenajea; a través de las competiciones deportivas internacionales; o gracias a la repetición del «nosotros», por ejemplo, en los discursos políticos. Se recuerda así «nuestra» identidad sin que seamos conscientes, olvidando de esta manera el recuerdo. Michael BILLIG: *Nacionalismo banal...*, pp. 71-105.

Los Partidos Comunistas serán tanto más fuertes, cuanto más enraizados se hallen entre su propio pueblo, cuanto más claramente comprendan e interpreten los problemas y los intereses de su clase obrera y de las corrientes progresistas de la sociedad, cuanto más sepan identificarse con los intereses fundamentales de su nación, que no son los de la pequeña capa explotadora que usurpa hoy las funciones dirigentes.<sup>82</sup>

Lo que se traslucía de todos estos testimonios en los que la tónica general era la defensa de la soberanía del Partido, era la asunción de la idea de España como nación soberana, algo que trascendía también a los socialistas. Si se legitimaban en algo era en esta soberanía nacional que les daba el derecho de defender como partido español a su pueblo, un pueblo constituido por todos los españoles, y que tenía derecho a gobernarse a sí mismo sin injerencias extranjeras. Existía un «nosotros», que suponía el marco de referencia que se desprendía de su discurso; y un «ellos», y aunque otras identidades les acercaban a ese «ellos», prevalecía la que delimitaba las fronteras nacionales, la que les otorgaba el derecho y la obligación de luchar por los intereses de los españoles en su conjunto. Este discurso no apelaba directamente a la lengua, a la historia, a los símbolos –aunque lo haría en ocasiones–, pero construía una identidad que pasaba desapercibida aunque podía reclamarse cuando se veía amenazada. Una identidad que se observaba mejor en el ámbito del «programa mínimo» que en el del «programa máximo», como veremos a continuación<sup>83</sup>.

## 2. Más allá del programa máximo

El derecho a decidir se enmarcaba para los socialistas dentro de una concepción en la que la existencia de libertad sería suficiente para construir un futuro común en el que cada pueblo se integraría voluntariamente una vez se le hubieran otorgado sus respectivos derechos y se respetaran sus peculiaridades nacionales. Era acorde además a la estrategia de *ruptura democrática* que se consideraba imprescindible para salir del Franquismo. Un mes antes del XIII Congreso, en septiembre de 1974, su *Declaración política* ya lo tenía en cuenta, aunque todavía no se pronunciaba abiertamente por la

---

<sup>82</sup> Santiago CARRILLO: “Informe Central”, en PCE: *Manifiesto-Programa del Partido Comunista de España. II Conferencia Nacional del Partido Comunista de España*, París, Ebro, 1975, p.15.

<sup>83</sup> El ex dirigente comunista Manuel Azcárate, escribió así sobre la izquierda y el nacionalismo español en 1986: «la izquierda tradicional, socialistas y comunistas, ha generado una cultura política, sobre todo en las últimas décadas, fuertemente nacionalista y *estatalista*: su objetivo esencial era tomar en las manos el gobierno del país –por la insurrección o por los votos– para luego transformar desde arriba, la sociedad. Esa confianza mítica en el poder de los Estados nacionales ha dado lugar a fuertes decepciones», Manuel AZCÁRATE: *La izquierda europea*, Madrid, Ediciones El País, 1986, p. 8.

defensa del derecho de autodeterminación. En este documento, que definía la *ruptura democrática* como «el restablecimiento definitivo de un sistema de libertades y la constitución de un sistema de gobierno que emane de la voluntad soberana del pueblo», imponía la necesidad de un Gobierno provisional que adoptara inmediatamente nueve medidas entre las que se encontraba el «Reconocimiento de los derechos de las nacionalidades ibéricas como base del proceso constituyente»<sup>84</sup>.

Pero como ha señalado Santos Juliá, en el PSOE coexistían ya por entonces dos almas, la que él calificaba como máxima o revolucionaria, y la mínima o reformista<sup>85</sup>. La primera, como ya se ha planteado, era visible en las resoluciones de los congresos, y la segunda tendría otros escenarios privilegiados que se irán desgranando, comenzando por aquel que apelaba directamente a este espíritu, el *Programa mínimo*, presentado también en 1974. En él, el tercero de los puntos atendía a las cuestiones mencionadas, pero sin referirse a la autodeterminación proponía un Estado en el que la unidad era remarcada, pero construida, no desde la imposición, sino desde la libertad, constituyendo así una «Confederación Republicana de Nacionalidades Ibéricas», en la que el énfasis se ponía en la recuperación de los Estatutos de Autonomía aprobados durante la II República:

Nuestra aspiración a que el Estado se configure como una Confederación Republicana de Nacionalidades Ibéricas, supone que el establecimiento en España de las libertades democráticas ha de coincidir con el de los Estatutos de autonomía aprobados por las Cortes Republicanas, hasta que las diversas nacionalidades establezcan mediante la pertinente consulta popular el contenido definitivo de los mismos.

Solamente así, la unidad de España se consolidará sobre el libre consenso de los pueblos que la integran<sup>86</sup>.

Además, pronto sustituirían aquella aspiración de configurar una «Confederación Republicana de Nacionalidades Ibéricas» para decantarse por la República Federal, prefiriendo este término, seguramente por considerarlo más adecuado a sus planteamientos y por ser, como se planteaba en la Ponencia aprobada por la Federación Socialista de Cataluña (PSOE) ante el XIII Congreso, más congruente. Esta conclusión la extraían tras definir los términos Estado nacional, nacionalidad, federación y

---

<sup>84</sup> PSOE: “Declaración política del Partido Socialista Obrero Español”, ABFPI, Fa 3233.

<sup>85</sup> Santos JULIÁ: *Los socialistas en la política...*, p. 427.

<sup>86</sup> PSOE: “Programa del PSOE”, AFFLC, Fondo UGT. Federación de comunicaciones, 000203-017.

confederación. Según la Federación catalana, las nacionalidades debían articularse a través de una fórmula federativa dentro de un Estado nacional que respetara sus peculiaridades culturales e identitarias, pero no se les suponía la soberanía, que tendrían restringida, y que se atribuía únicamente al Estado nacional:

Nacionalidades: cuando dentro de un Estado Nacional soberano existen regiones, comunidades importantes, etc., que a pesar de que participan de muchas características similares a las demás del Estado Nacional, poseen, además, una lengua propia, una cultura original y, en suma, una conciencia diferenciadora, que puede ser ampliamente variable, se puede aplicar el término Nacionalidad.

Pero la cuestión básica reside en que ésta no es incompatible con su pertenencia al Estado Nacional, siempre que este tolere, a nivel de fórmula federativa, la supervivencia y el respeto por las nacionalidades (...). Podemos decir entonces que la idea de Nacionalidad representa una entidad política propia con ciertas restricciones fundamentales de soberanía<sup>87</sup>.

La Confederación la definían en realidad como «una reunión de Estados soberanos para concertar determinados acuerdos, pero conservando cada uno de ellos su plena soberanía», por lo que ellos mismos ponían de relieve la contradicción que suponía el *Programa mínimo* a este respecto, exponiendo que el marco más adecuado para el Estado que se quería construir desde el PSOE debía de ser el de una «República Federativa avanzada»<sup>88</sup>.

Por otra parte, la Ponencia era en sí misma un intento por conciliar la lucha de los pueblos oprimidos con la lucha por los intereses de clase, justificando la primera como una parte más de la segunda, en la que la supeditación de los intereses nacionales a los de clase quedaba totalmente asegurada. Se concebía este tema como una oportunidad para penetrar en otros sectores sociales progresistas que de otra manera quedarían a merced de los intereses de la burguesía. Así pues, esgrimían que podrían rectificar «el tratamiento que históricamente ha hecho el Partido de este problema» que «además de escaso, ha carecido de visión política por la insuficiente comprensión de su importancia en España». En el texto, además de observarse estos intereses estratégicos,

---

<sup>87</sup> PSOE: “Ponencias aprobadas en Asamblea por la Federación Socialista de Cataluña (PSOE), ante el XIIIº Congreso del PSOE”, en *Suplemento Memoria XIII Congreso. Propositiones no insertadas en la memoria*, ABFPI, Fa 241, p. 12.

<sup>88</sup> *Ibid.*, p.13.

se aludía también a la necesidad de enfrentarse a la opresión nacional para conseguir la verdadera libertad política, que englobaba la libertad nacional; y apostaban por la concienciación del pueblo sobre «el derecho inalienable que cada nacionalidad tiene a elegir su propio grado de soberanía, que puede ir desde la misma separación hasta las más diversas formas de federación o confederación». Pero por encima de esto, consideraban que el proletariado debía mantener una «política solidaria del uno para con el otro, apoyando, ambos, como clase, la lucha de la nacionalidad subyugada, pero realizando una política de condicionamiento de la cuestión nacional a los intereses de clase y a la mutua solidaridad», y negaban la idoneidad de esta lucha si no se enmarcaba desde una perspectiva de lucha de clase, atendiendo a la capacidad movilizadora del nacionalismo<sup>89</sup>.

Según todo esto, afirmaban explícitamente que la alternativa del PSOE al problema de las nacionalidades en España estaba subordinada a su estrategia de clase, y que preocupados sobre todo por la lucha de clases y por mantener «la unidad de esta lucha a nivel de toda España» se pronunciaban por una República Federativa, manteniendo una postura que se resumía en los siguientes puntos:

- 1) Apoyar el derecho de las nacionalidades del Estado español a iniciar un proceso popular de integración federativa;
- 2) La forma específica que este derecho habrá de adoptar, estará subordinada a los intereses de la lucha de clases por el socialismo y de la unidad obrera a nivel peninsular;
- 3) Defenderemos la estructuración de una República federativa, con igualdad de derechos entre todas las comunidades libremente federadas;
- 4) Propugnar una amplia descentralización política y económica del país, como base primordial de gestión preferentemente potencializada a partir de los municipios<sup>90</sup>.

De esta forma, sin negar el derecho de autodeterminación, no lo concebían más que enmarcado dentro de una estrategia de clase para la que la «integración federativa» era indispensable. El Estado español que proponía la Federación catalana era soberano y debía mantenerse unido, primando la igualdad y la solidaridad, pero respetando la diferencia a través de un sistema descentralizado en el que las nacionalidades se integrarían libremente, ejerciendo consecuentemente sus derechos nacionales y de clase.

---

<sup>89</sup> *Ibíd.*, pp. 11-16.

<sup>90</sup> *Ibíd.*, p. 17.

En cambio, la soberanía española no era cuestionada, atribuida en este caso a ese Estado nacional que debía agrupar a las diferentes nacionalidades, sería reafirmada también en otros textos. La lógica que apostaba por la unidad de la clase obrera se aplicaba sólo de puertas para adentro de ese Estado español, como sucedía por ejemplo en el *Programa mínimo*, en el que se decantaban por una reorganización técnica de las Fuerzas Armadas para «mantener la integridad de su soberanía»; o cuando decían que el PSOE lucharía por: «cancelar todos aquellos arrendamientos del solar patrio, que implican comprometidas hipotecas de evidente riesgo y un menoscabo a la independencia y a la soberanía nacionales. También reclamará que España concierte con la Gran Bretaña la devolución de Gibraltar»<sup>91</sup>.

Estos argumentos no fueron extraños al PSOE, y la defensa de la independencia y la soberanía nacional de España sería una constante a lo largo de la Transición, sobre todo en aquellos ámbitos del discurso en los que no se estaba discutiendo el modelo de encaje para ese Estado nacional y sus nacionalidades. En términos similares se pronunció la Comisión Ejecutiva del PSOE en una circular de 1975 en la que se proponía aclarar algunas dudas sobre la política del Partido a las Secciones y Federaciones del mismo. En concreto, en relación a la política internacional mencionaban:

En realidad para nosotros socialistas, el nacimiento de un estado soberano, basado en la libre voluntad popular tras la caída de la dictadura, supone, necesariamente la facultad de negociar con plena libertad sus compromisos con los demás países. Pero desde el punto de vista de la eficacia, sólo puede ser excluido el tipo de compromisos que afectan a la soberanía nacional y que hipotequen la independencia de nuestro país<sup>92</sup>.

Todo parece indicar que la República Federal que hasta el momento defendían desde el PSOE no suponía un desafío a la unidad del Estado, sino que desde su punto de vista ésta era la única vía que aseguraba en realidad un Estado fuerte construido a partir de la voluntad de los pueblos y no a través de la opresión, lo que a la larga sí constituiría el mayor desafío para España, convirtiéndose en el germen de futuros movimientos separatistas. Por otro lado, este no era un pensamiento original y exclusivo de los socialistas, sino que la mayor parte de la izquierda que se había pronunciado por la

---

<sup>91</sup> PSOE: “Programa del PSOE...”

<sup>92</sup> Comisión Ejecutiva del PSOE: “Respuesta de la C.E. a las Secciones y Federaciones. Circular nº112”, (Madrid, 14 de octubre de 1974), ABFPI, Fondo José Antonio Maturana Plaza, CJAMP-1005-14, p. 2.



solidaridad con los derechos de los pueblos oprimidos como una más de las causas a defender frente a la dictadura, compartía argumentos similares<sup>93</sup>. De hecho, la Junta Democrática de España, impulsada por el PCE como organismo de oposición al Franquismo, incluía las demandas en favor de los derechos nacionales pero en un tono muy moderado. En su primera declaración de julio de 1974 se pronunciaba por el «Reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política de los pueblos catalán, vasco, gallego, y de las comunidades regionales, que lo decidan democráticamente»<sup>94</sup>. Sin embargo, un año después la Plataforma de Convergencia Democrática, organismo unitario en el que se había integrado el PSOE tratando de competir por hegemonizar el liderazgo de la izquierda, se refería al problema nacional en su Manifiesto, en unos términos que reconocían mejor el hecho diferencial y que eran muy similares a los utilizados por el Partido Socialista desde 1974. Defendían el Estado federal y el derecho de autodeterminación, aunque como medio para preservar la unidad a partir del reconocimiento de las libertades nacionales:

La Plataforma de Convergencia Democrática consciente de la existencia de nacionalidades y regiones con personalidad étnica, histórico o cultural propia en el seno del Estado español, reconoce el derecho de autodeterminación de las mismas y la formación de órganos de autogobierno en las nacionalidades del Estado desde el momento de la ruptura democrática y propugna una estructura federal en la Constitución del Estado español<sup>95</sup>.

En este marco, la reflexión acerca del federalismo en el Partido Socialista Obrero Español se mantuvo viva durante todo el proceso de la transición democrática. Y decimos viva, porque no se teorizó sobre esta problemática desde una posición estática

---

<sup>93</sup> Para la izquierda radical, José Vicente MARQUÉS (*et alii*): *Clase obrera y cuestión nacional*, Madrid, Zero, 1978; Carlos TUYA: *Aspectos fundamentales de la revolución española. (La vía al socialismo en un país desarrollado)*, Madrid, Partido Comunista de los Trabajadores, 1978; Consuelo LAIZ: *La lucha final. Los partidos de la izquierda radical durante la transición española*, Madrid, Los libros de la Catarata, 1995; José Manuel ROCA (ed.): *El proyecto radical. Auge y declive de la izquierda revolucionaria en España (1964-1992)*, Madrid, Los libros de la Catarata, 1993; Fermí RUBIRALTA: *Orígens i desenvolupament del PSAN (1969-1974)*, Barcelona, La Magrana, 1988; ÍD: *El nuevo nacionalismo radical. Los casos gallego, catalán y vasco (1959-1973)*, Donostia, Tercera Prensa, 1997; o Vega RODÍGUEZ-FLORES: “Nació i classe. L’esquerra radical en la Transició valenciana”, *Afers*, 67, 2010, pp. 665-682. Un ejemplo de ello puede verse en los anteproyectos de Estatuto de Autonomía que presentaron estos grupos para el País Valenciano, Lluís AGUILÓ: *Els Avantprojectes d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana*, València, Corts Valencianes, 1992.

<sup>94</sup> Junta Democrática de España: “Declaración de la Junta Democrática de España al pueblo español” (Madrid, 29 de julio de 1974), AHPCE, Fondo Nacionalidades y Regiones, Serie País Valenciano, 78/9, p. 6.

<sup>95</sup> *El Socialista*, 44 (segunda quincena de julio de 1975).

que desarrollara fielmente unos dogmas bien aprendidos y extendidos entre la militancia del Partido. Podríamos decir, que esto ni siquiera sucedía entre la élite dirigente encargada de conducir y alentar el debate. La discusión estaba viva, pero también se apreciaba la inexperiencia entre la mayoría, además de que no parece que este tema estuviera entre las preocupaciones más importantes del grueso de los miembros del PSOE. Probablemente por todo esto, sabían de la necesidad de apresurarse en la elaboración de una alternativa meditada que ofreciera una respuesta lo más coherente y consecuente posible.

Cuando nos referimos a que reflexionaban en torno al federalismo quizá deberíamos matizar, ya que no abundaban sesudas teorizaciones sobre este complejo concepto de forma abstracta, sino que durante esta etapa se esforzaron por dotar de contenido concreto su opción federal para España. Pese a que la defensa de un Estado federal no era en absoluto una novedad para los socialistas, se impuso en estos momentos la necesidad de ahondar en esta alternativa, entre otras cosas por el protagonismo creciente que esta formación tenía en la elaboración de la estructura del nuevo Estado democrático; y por la intensidad, cada vez más acusada, con la que la izquierda española se solidarizaba con las reivindicaciones de autonomía de las nacionalidades y regiones.

El debate sobre el federalismo dejaba ver un partido en el que se pretendía ahondar y profundizar acerca de una materia no consensuada, más aún, sobre la que no se tenían opiniones claras ni muy formadas. En cualquier caso, estuvo siempre marcada por el deseo de permitir la convivencia de unos pueblos, nacionalidades o regiones en una unidad superior estatal y española, clave que nos permitirá entender la lógica del pensamiento socialista en estas materias. El concepto en el PSOE sobre la estructura de Estado no puede desligarse del concepto de España y de nación española que imperaba en el Partido.

A partir del Congreso de Suresnes, a priori parecía que se había decidido apostar por una fórmula federalista que estableciera el doble nivel de gobierno, entre el Estado federal y los Estados federados, con el reconocimiento previo de la soberanía de las nacionalidades. Si bien al partir de una unidad previa que iba a proceder a su descentralización podría haberse optado por un modelo de construcción del nuevo Estado concebido de arriba abajo, en este caso no fue así. Considerando la

plurinacionalidad del Estado y el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades, que debían decidir integrarse voluntariamente en una unidad superior, se optó desde el socialismo por una fórmula según la cual eran estas quienes cedían parte de su soberanía en favor del Estado federal, configurando un modelo de federalismo construido de abajo arriba. Pero este principio que se esgrimía en el «programa máximo», no se mantuvo en todos los ámbitos del discurso, de hecho, entre el XIII Congreso y el XXVII Congreso de diciembre de 1976, se produjeron ciertos debates con los que se quería determinar si la *Resolución sobre nacionalidades y regiones* aprobada en Suresnes en 1974 seguía siendo adecuada o suponía unos planteamientos demasiado radicales para los nuevos tiempos. La dictadura había terminado con la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, y la transición a la democracia impondría un nuevo contexto al que los partidos antifranquistas debían irse adaptando.

Y así sucedió tanto en las *Jornadas de estudio sobre el problema de las nacionalidades y regiones en el contexto del Estado español*, de abril de 1976, como en la conferencia colectiva *Las nacionalidades y regiones del Estado español*, pronunciada en la *Escuela de Verano*, de agosto de ese mismo año. Los debates giraron sobre todo en torno a si era adecuado seguir apostando por un modelo federal, inclinándose la mayor parte de los ponentes por modificar la terminología enunciada en 1974. En cualquier caso, independientemente de ésta, lo que prevaleció ante cualquier otra cuestión era la idea de que el Partido socialista debía defender ante todo la convivencia dentro de España de los pueblos que la integraban, sin cuestionarse en absoluto la descentralización, pero sin poner tampoco en peligro la igualdad de la clase trabajadora de toda España y la solidaridad entre regiones.

Comencemos por el «documento de trabajo para uso interno» de la Secretaría de Formación, *Jornadas de estudio sobre el problema de las nacionalidades y regiones en el contexto del Estado español*, de abril de 1976, en el que intervinieron Luis Gómez Llorente (como Secretario de Formación de la Comisión Ejecutiva), Francisco Rubio Llorente, Enrique Moral Sandoval, Carlos Solchaga, Baltasar Aymerich, José Félix Tezanos y algunos delegados de varias de las federaciones del partido. En estas jornadas se advertía que se trataba de desarrollar los supuestos de la resolución del Congreso de Suresnes para disponer de «elementos de juicio suficientes para pronunciarse sobre los diversos aspectos que plantea su definición de principios sobre el tema federal» ante la

inminencia del XXVII Congreso del PSOE<sup>96</sup>. Esta manifestación de falta de una respuesta bien elaborada y fundada se observa en varias de las intervenciones de las jornadas, en las que se reclamaba una postura unívoca por parte del partido, pero que estuviera exenta de oportunismo. En este sentido incidía la ponencia de Félix Tezanos, *Actitudes ante el regionalismo: las Regiones y las clases sociales*<sup>97</sup>, en la que su autor advertía de que el «rótulo federalista» no era muy popular entre los españoles y especialmente entre la clase trabajadora, exceptuando claro está, a catalanes y vascos. Sin embargo, admitía la necesidad de recoger las inquietudes federalistas y sobre todo las regionalistas –a las que sí reconocía una mayor aceptación entre la población– a través de la elaboración de una fórmula «no amedrentadora en la denominación» que de paso aumentara la popularidad y la implantación del partido. Cabe pensar que comenzaran a plantearse la posibilidad de que el término Estado regional fuera más adecuado para el momento, ya que ésta supuso la dinámica dominante entre las ponencias. Quien lo expresaba de una forma más clara era Rubio Llorente, decantándose abiertamente por esta fórmula para concluir una ponencia que había mantenido hasta ese momento un tono formativo y bastante aséptico, tratando de describir las características de un Estado federal y de un Estado regional (al que también llama Estado de nacionalidades o Estado plurinacional):

Personalmente, entiendo que en nuestras circunstancias actuales, la única opción posible y deseable es la del Estado Regional o Plurinacional. La opción Federal no sólo me parece producto del oportunismo, sino de un oportunismo torpe, por estar destinado al fracaso<sup>98</sup>.

A pesar de esta conclusión, no se observaban grandes diferencias entre un modelo y otro, sino que se subrayaba que los objetivos finales que se obtendrían serían muy similares pero a través de diferentes métodos. Lo cierto es que se desprendía de estas jornadas la necesidad de una descentralización, que bien podía ser ofrecida por un Estado simplemente regional; pero en el que el carácter unitario no fuera cuestionado, pues la redistribución interregional, indispensable para la igualdad de la clase trabajadora en toda España, debía ser asegurada por un plan de desarrollo coordinado y supervisado por el Estado central. Estaba presente la defensa de la descentralización y

---

<sup>96</sup> PSOE: *Jornadas de estudio sobre el problema de las nacionalidades y regiones en el contexto del Estado español*, ABFPI, Fc 189, pp. 2-3.

<sup>97</sup> *Ibid.*, pp. 19-20.

<sup>98</sup> *Ibid.*, p.13.

del autogobierno, pero se mantenía la cautela ante situaciones que pudieran atentar contra principios como la igualdad o la solidaridad de clase. Parece como si prefirieran dejar para otro momento las fórmulas plenamente federales, como expresaba Aymerich Corominas cuando apostaba por:

Una profunda descentralización a través de la constitución de un Estado regional, definido por su carácter unitario, con situaciones de autonomía a nivel nacional y regional, como punto de partida para que, en el futuro, se pueda crear, si se considera oportuno, un Estado federal<sup>99</sup>.

Pese a que de momento no se trataba de una postura tajante, es obvio que al menos amplios sectores tenían algunos recelos sobre radicalizar unos planteamientos «federalizantes» que pudieran erosionar intereses más acuciantes para el socialismo. No sería sin embargo el caso de los firmantes de las *Conclusiones de los delegados de las nacionalidades y regiones*<sup>100</sup>, quienes ratificaban plenamente tanto el principio federal como el derecho a la autodeterminación, poniendo de relieve las diferentes sensibilidades existentes en el partido sobre una materia acerca de la que cuál no se había definido sin fisuras la línea de actuación. Así lo demostraban estas jornadas de las que se esperaban «líneas generales de orientación» y no «conclusiones de carácter programático».

Poco después, en agosto de 1976, se celebró en el partido la *Escuela de Verano*, donde uno de los temas tratados fue el de la «cuestión nacional». La conferencia *Las nacionalidades y regiones del Estado español*, de carácter colectivo, fue elaborada por muchos de los que participaron también en las jornadas anteriores. En ella se mantuvo el carácter formativo que indicaba de nuevo la inexistencia de una posición definida y homogénea a este respecto. Sin embargo, sin observar ninguna voz que destacara por su radicalidad en la defensa de los principios que regían al Partido desde su último congreso, sí se apreciaba una tendencia, al menos entre algunos ponentes, a rectificar la posición que el PSOE había hecho oficial en 1974, si así lo requería la coyuntura y el proyecto estatal democrático, unitario y solidario, que sí era una prioridad. Así pues, sin

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, p.14.

<sup>100</sup> Los delegados asistentes a estas Jornadas fueron Josep Maria Triginer, José Antonio Álvarez e Ignacio Planas por Cataluña; Enrique Iparraguirre por el País Vasco; Francisco López Peña por Galicia; José Luis Albiñana por el País Valenciano; y Jerónimo Saavedra por Canarias.

abandonar las reivindicaciones de autogobierno de las nacionalidades y regiones, uno de los ponentes expresaba:

Hay que tener ojos críticos para nuestras ideas establecidas (...) el espíritu de la resolución del Congreso anterior sigue siendo el mismo espíritu que nos anima. Pero refleja unos estados de reflexión sobre el asunto de hace dos años. Y la política española ha cambiado tremendamente (...) hay que replantear el problema federal, no ya simplemente como la defensa de la libertad de unas nacionalidades oprimidas, sino de una manera mucho más rica, como una reorganización de todo el Estado, de tal manera que se pueda potenciar esta acción de masas que hemos estado describiendo anteriormente<sup>101</sup>.

Estas palabras de Gómez Llorente enlazan con un principio asociado al federalismo que siempre había estado en la ideología del PSOE, pero que fue tomando cada vez más fuerza, hasta que acabó por ser hegemónico en el discurso oficial –aunque no todavía–. Cuando mencionaba la acción de masas, se estaba refiriendo a las ventajas que desde esta perspectiva ofrece el federalismo en cuanto a instrumento democratizador, ya que al descentralizar el poder lo acerca al pueblo, facilitando así la política de masas. Se trata del principio de subsidiariedad, que propugna la aproximación del poder a los ciudadanos, incidiendo en una mayor democratización y en un aumento de la eficacia y el desarrollo de la gestión administrativa y política. La vinculación de estos objetivos con el federalismo no es extraña, ya que en ambos casos la descentralización es necesaria, pero en cambio no se persigue el mismo resultado, por lo que, como señala Ferran Requejo, esta confusión en los conceptos «pot, fins i tot, revertir en l'erosió del principi federal (...) En altres paraules, l'equiparació de les lògiques implícites en el federalisme i en la subsidiarietat no repara en el fet que la separació de poders constitueix el punt de partida del federalisme i no pas el seu punt d'arribada»<sup>102</sup>. Esta erosión y contradicción se manifestaba en la tendencia que ejemplificaba Gómez Llorente en su intervención, en la que anteponía una política de masas que tuviera su fuerza en la unidad de la clase trabajadora, a los objetivos genuinos de un federalismo que reivindicaba los derechos de las nacionalidades. Se demonizaba el centralismo uniformizador y antidemocrático de la derecha, del

---

<sup>101</sup> VV.AA.: “Las nacionalidades y regiones del Estado español”, en Felipe González (et alii): *Socialismo es Libertad. Escuela de Verano del PSOE*, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1976, pp. 251-252.

<sup>102</sup> Ferran REQUEJO: *Federalisme, per a què? L'acomodació de la diversitat en democràcies plurinacionals*, Barcelona, 3 i 4, 1998., pp. 29-30.

Franquismo, pero no la unidad. De hecho, según este pensamiento, la clase trabajadora tenía la obligación y la necesidad de luchar unida por unos objetivos comunes y por tanto esta unidad no podía ser socavada en aras de la libertad de las nacionalidades oprimidas. En este punto, la contradicción es evidente: siempre que los derechos de la clase trabajadora y los propios de las nacionalidades no colisionaran, no tenían por qué ser incompatibles, de hecho podían favorecerse mutuamente, pero si se atentaba contra la solidaridad, la igualdad y la unidad, el federalismo debía hacerse a un lado.

Pese a lo dicho, no hay que pasar por alto la influencia de los socialistas catalanes, que introdujeron la perspectiva más consciente y firme ante el federalismo, la autodeterminación y la defensa de los derechos de las nacionalidades. Por ejemplo, José Antonio González Casanova, un influyente teórico del socialismo catalán cuya autoridad sobre estas cuestiones acabó siendo muy tenida en cuenta también dentro de la Ejecutiva del PSOE<sup>103</sup>, aun decantándose por una especie de sistema de autonomías en lugar de preferir un Estado federal, se alejaba de la lógica de la subsidiariedad, al menos en gran medida. Lo hacía al poner en un lugar destacado los derechos de las nacionalidades o de lo que prefería denominar como «regiones autónomas», por ser una fórmula jurídica que permitiría dar una respuesta común tanto a nacionalidades como a regiones.

Como hemos comentado, un posible Estado Federal en España partiría de la problemática de cómo establecer el pacto de cesión de soberanía, si como un Estado unitario que se descentralizaba y concedía a los Estados miembros el derecho al autogobierno; o como un Estado que por el hecho de ser plurinacional otorgaba a las nacionalidades o regiones la plena soberanía y estas, a través del ejercicio del derecho de autodeterminación decidirían libremente ceder parte de esta soberanía al Estado. En principio, esta última fórmula se adecuaría bastante bien al concepto que González Casanova tenía en mente cuando a finales de 1976 escribía lo siguiente:

el Estado democrático futuro sólo puede surgir –para ser verdadero, para no ser una ficción jurídica y superestructural– de esa realidad popular, plural y específica, que pasa por los pueblos y regiones de España (...) De ese modo, la lógica culminación de un proceso federativo de abajo arriba sería la Constitución

---

<sup>103</sup> Formó parte del Consejo nacional PSC-C y aunque no obtuvo excesivo poder y protagonismo político en el PSC-PSOE, si ejerció una gran influencia intelectual, tanto en el socialismo catalán como en el español. Por ejemplo, colaboró como asesor de los socialistas en la elaboración de la Constitución.

democrática de un Estado español que reconociera y consagrara simplemente la realidad: la autonomía de unas fuerzas políticas que son carne viva del esqueleto estatal<sup>104</sup>.

Aunque esta construcción la planteaba de forma simbólica, pues era consciente de los peligros para la unidad de España si se hacía de forma efectiva<sup>105</sup>. Por tanto, desde una perspectiva un tanto diferente, los socialistas catalanes también veían en la unidad una condición necesaria de la democratización española. Existía la profunda convicción de que España era real a través de su pluralidad y de que Cataluña había tenido siempre una vocación española; de que España no era sin Cataluña y de que Cataluña quería permanecer en España, siempre desde la libertad, desde una unidad real y no ficticia<sup>106</sup>.

Se observa que, aunque con matices importantes, la unidad era clave entre los socialistas, independientemente de la existencia de diferencias en las concepciones sobre España. Desde luego, las prioridades entre la élite dirigente del PSOE priorizaban no cuestionarla, como lo demostraba Felipe González en la *Escuela de Verano*, en su conferencia, *Línea política del PSOE*, en la que decía hablar sin limitaciones porque estaba en un acto interno del Partido. Arengando al público en favor de la unidad y estableciendo de forma clara los objetivos principales del PSOE, afirmaba:

El socialismo tiene que fundamentarse en la lucha de clases, tiene que responder a los intereses de unas clases y tiene que unir solidariamente a esas clases por la base. (...) A veces creemos que hay quienes sucumben a la tentación de crear su propio grupo y buscar justificación para la creación de su propio grupo. Y no estamos dispuestos a caer en esa demagogia (...) porque esa demagogia centrífuga, que tiene una explicación, pero no una justificación, por la existencia de un aparato burocrático centralizador y dictatorial, puede conducir en estos momentos históricos, en esta coyuntura histórica a una grave involución política (...) Autonomía, toda la que sea necesaria; solución

---

<sup>104</sup> J.A González Casanova: *¿Qué son los Estatutos de Autonomía?*, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1977, pp. 14-15

<sup>105</sup> *Ibid*, p.64. En un sentido similar se había pronunciado en una ponencia de 1971, véase José Antonio GONZÁLEZ CASANOVA: "Federalismo", en Jordi AMAT (ed.): *Els "Coloquios Catalunya-Castilla"* (1964-1971). Debat sobre el model territorial de l'Espanya democràtica, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2010, pp. 69-89.

<sup>106</sup> El mismo autor veía cumplidas estas premisas en la etapa que se iniciaba tras la Constitución, cuando esta había descartado la posibilidad de cualquier Estado federal, incluso uno construido de arriba abajo, J.A González Casanova: *Federalismo y autonomía. Cataluña y el Estado español (1868-1938)*, Barcelona, Curial, 1979, p.365



autonómica de los problemas específicos de cada regionalidad y de cada nacionalidad, pero a la vez alternativa socialista para el Estado de todo el conjunto de los socialistas<sup>107</sup>.

Por otra parte, estos debates deben entenderse contextualizados en un momento en el que la oposición antifranquista adoptaba posiciones más pragmáticas, para favorecer la negociación con el Gobierno, embarcándose en la estrategia de la «ruptura negociada»<sup>108</sup>. En el campo de la cuestión nacional se traducían en una significativa moderación, perceptible a través de declaraciones como la que haría la *Platajunta*, el nuevo organismo unitario que fundía la *Junta Democrática* y la *Plataforma de Convergencia Democrática* en marzo de 1976, limitándose a abogar por: «El pleno, inmediato y efectivo ejercicio de los derechos y de las libertades políticas de las distintas nacionalidades según las exigencias de una Sociedad Democrática»<sup>109</sup>. De esta confluencia surgiría la *Comisión de los nueve* que debía negociar con Suárez los términos de la restauración de la democracia<sup>110</sup>, con un programa en el que el punto dedicado al problema nacional decía así: «Reconocimiento de la necesidad de institucionalizar políticamente todos los países y regiones integrantes del Estado español y de que los órganos de control de los procesos electorales se refieran también a cada uno de sus ámbitos territoriales».<sup>111</sup> No había mención alguna al derecho de autodeterminación ni al federalismo, ni siquiera se referían explícitamente a las nacionalidades.

La delegación de la *Comisión de los nueve* se reunió con Suárez en enero de 1977, quien dejó claro desde el inicio que esta cuestión —que en todo caso era para él la de las regionalidades— no era prioritaria. Pese a esto, se creó una subcomisión que elaboró un documento en el que se consideraba imprescindible la descentralización del Estado para adecuarlo a las características del «carácter plurinacional o plurirregional de España»; y en el que se especificaba la necesidad de restablecer las instituciones autonómicas de Cataluña, Euskadi y Galicia, pero también se comprometían en esforzarse «por conseguir cauces de expresión representativos de los intereses y

---

<sup>107</sup> Felipe GONZÁLEZ: «Línea política...», pp. 39-40.

<sup>108</sup> Santos JULIÁ: *Los socialistas en la política...*, p. 453.

<sup>109</sup> *El Socialista*, 60 (10 de abril de 1960).

<sup>110</sup> La Comisión estaba formada por Felipe González (PSOE); Enrique Tierno Galván (PSP); Simón Sánchez Montero (PCE); Francisco Fernández Ordóñez (socialdemócratas); Joaquín Satrustegui (liberales); Antón Canyellas (democristianos); Jordi Pujol (Cataluña); Julio Jáuregui (País Vasco); y Valentín Paz Andrade (Galicia).

<sup>111</sup> *El País*, 5 de enero de 1977.

aspiraciones de otros países y regiones en los que la problemática autonómica se haya planteado por fuerzas políticas y sociales de carácter democrático»<sup>112</sup>. La ambigüedad en este asunto, por cálculo estratégico o por la convicción de que la moderación en un tema tan delicado era necesaria, era evidente<sup>113</sup>. Aunque en el mismo febrero estas propuestas fracasaron en apariencia y el problema de las nacionalidades no fuera negociado, para Carme Molinero y Pere Ysàs, la influencia del contenido de este documento sería nítida en la Constitución de 1978<sup>114</sup>.

Finalmente, a pesar de los debates por suavizar los principios en torno al problema nacional y la estrategia de moderación que el PSOE mantenía con el resto de la oposición democrática, lo establecido en la resolución del XXVII Congreso de diciembre reflejó el espíritu del «programa máximo». Aunque, como se ha visto, no se trataba de una postura totalmente definida ni compartida por todo el Partido, no se decidió que fuera éste el momento para moderar los planteamientos y para hacer más coincidentes los postulados de los denominados «programa máximo» y «programa mínimo». Lo que tampoco debe perderse de vista es que esta dualidad se mantuvo ante este y otros problemas, sin ser la cuestión nacional una excepción. Santos Juliá ha descrito la posición durante el Congreso como el «gran descubrimiento de Felipe González» que ya empezara a practicar meses atrás<sup>115</sup>, y que suponía:

no renunciar a los principios, e incluso afirmarlos enfáticamente, a condición de que los principios no se inmiscuyeran en la acción. Como lo explicaba al presentar el balance del congreso, «la tendencia hacia la transformación total de la sociedad se expresa mucho más en el nivel ideológico que en el táctico», lo cual le permitía afirmar con absoluta seriedad que no «es verdad, dicho así», que el PSOE «propugne la República federal» (...). Eran, una vez más, pero no todavía la última, los milagros de la dialéctica que permitían propugnar en el plano ideológico y no propugnar en el práctico la misma cosa al mismo tiempo por la misma persona<sup>116</sup>.

---

<sup>112</sup> Transcripción del documento en Carme MOLINERO y Pere Ysàs: *La cuestión catalana...*, pp. 142-143.

<sup>113</sup> Ferran ARCHILÉS: “75, modelo para...”.

<sup>114</sup> Carme MOLINERO y Pere Ysàs: *La cuestión catalana...*, p. 144.

<sup>115</sup> En la Escuela de Verano, ya propugnaba mantener al mismo tiempo dos estrategias, la de la «negociación con el poder» y la de la «movilización responsable de las masas», Santos JULIÁ: *Los socialistas en la política...*, p. 454.

<sup>116</sup> *Ibid.*, pp. 470-471.

Pero que existiera una estrategia dual y que se plantearan dudas significativas sobre la solución que debía darse al problema nacional en España, no convierte automáticamente estas resoluciones en la prueba del oportunismo que sobre estos temas habría desplegado esta formación al inicio de la Transición. Si bien los factores estratégicos tienen un peso nada desdeñable, de la misma manera tampoco puede negarse que en este tema, como en muchos otros, los socialistas plantearon soluciones en las que también creían. Federalismo y autodeterminación suponían dentro de la lógica socialista conceptos que para nada estaban reñidos con el resto de los valores que conformaban su ideario, ni siquiera con la manera en que se entendía España desde su cultura política. Otra cosa sería que conforme avanzara la coyuntura política, éste y otros temas se vieran enfrentados a una realidad que hacía muy difícil imponer el programa máximo, haciendo que el PSOE se fuera decantando, a partir de la jerarquización de intereses, por un «programa mínimo» más moderado que también había estado presente desde el principio en los ámbitos más divulgativos, y que fue adquiriendo cada vez más presencia<sup>117</sup>.

De momento, este programa más moderado podía verse también de forma privilegiada en las campañas electorales. En ellas, el discurso político debía pasar por el filtro, al menos, de sus posibles electores, por lo que necesitaban apelar a una narración que conectara con el público al que iba destinado, a través de elementos que les resultaran familiares y con los que pudieran vincularse; de temas que les interesaran; y de un lenguaje que les resultara atractivo<sup>118</sup>. Así pues, el diálogo que se realizaba entre las fuerzas políticas y la sociedad era quizá más fuerte en el período electoral, momento en el que esta formación debía recoger las aspiraciones y creencias de la población adecuándolas a su propia ideología. Y en este momento, algunas ambigüedades o contradicciones del discurso podían clarificarse. Es decir, cuestiones que habían sido defendidas pero que podían parecer incompatibles, encontraban una jerarquización.

---

<sup>117</sup> Como afirma Santos Juliá, «las resoluciones de los congresos podían decir lo que quisieran, pero los programas electorales y, más importante, las políticas desarrolladas decían que el PSOE sólo pretendía consolidar la democracia», en Santos JULIÁ: *Los socialistas en la política...*, Madrid, Taurus, 1996, pp. 516-517.

<sup>118</sup> Esta perspectiva tendría en cuenta cómo la difusión de la nación no se realiza únicamente de arriba hacia abajo, sino que el proceso de nacionalización se basa en realidad en un diálogo permanente entre las partes. Es importante tener en cuenta cómo los procesos de mediación o de «negociación» intervienen condicionando el propio discurso político, permitiendo así generar, como explica Ferran Archilés, las llamadas «experiencias de nación» que necesitan los individuos para conectar con el mensaje que reciben, e identificarse por tanto con la nación que se está construyendo, Ferran ARCHILÉS: «Lenguajes de nación. Las «experiencias de nación» y los procesos de nacionalización: propuestas para un debate», *Ayer*, 90 (2013), pp. 91-114.

Muchos de los principios eran matizados y se hacían compatibles entre sí al entender qué lugar ocupaban realmente dentro de su ideario. Por supuesto, los procesos electorales no estaban exentos de estrategias electoralistas y oportunistas, y la nueva definición de muchos temas respondía también a intereses electorales. Pero en cualquier caso, observar cómo se reformularon determinados planteamientos ayuda a entender más acerca de los posicionamientos de los partidos en torno a estos asuntos. Ayuda a comprender qué movilizaba al sector de la población al que apelaban; pero también a saber qué se jerarquizaba desde las formaciones, a veces influidos por cuestiones más oportunistas, y otras sencillamente como ejercicio de clarificación sobre sus prioridades.

El tono general de la campaña ponía el énfasis en la conquista de la democracia; en la libertad; en la paz; y en la oportunidad que para «cambiar la vida» significaba votar socialista también en el plano socio-económico, en el que el PSOE acabaría con la crisis<sup>119</sup>. Los socialistas se presentaban como los más adecuados para liderar ese cambio porque en gran medida lo encarnaban, ya que como enunciaban en su programa electoral, para una nueva política era necesario elegir hombres nuevos, que además tuvieran tras de sí la trayectoria de un Partido con unas siglas históricas que los convirtieran en una opción sólida, segura y honesta.

Por lo que respecta al tema que nos ocupa, no hablaban de autodeterminación ni de federalismo, del mismo modo que no hablaban de marxismo. La moderación se hacía evidente y no diseñaban un modelo muy distinto del que se aprobaría con la Constitución: un texto legal abierto que permitiera la descentralización y que otorgara autonomía sin menoscabar la solidaridad de las nacionalidades y regiones:

España está constituida por una serie de nacionalidades y regiones diferenciadas.

(...) Sólo un centralismo inoperante y corruptor ha impuesto una uniformidad institucional forzada.

Hoy día los pueblos de España reclaman el ejercicio de su derecho a tener instituciones propias, y los socialistas compartimos esa demanda.

El PSOE afirma el derecho a la autonomía de los pueblos de España.

---

<sup>119</sup> PSOE: “Programa del PSOE. 77 Elecciones”, ABFPI, Fa 282, pp. 2-9.

El PSOE defiende la unidad del Estado Español, unidad que no puede basarse en la fuerza. La unidad del Estado Español ha de articularse mediante una fórmula constitucionalmente libremente pactada y abierta tanto a las diferencias entre las distintas nacionalidades y regiones como a la flexibilidad necesaria para su progresivo desarrollo y concreción.

Para ello el PSOE propone una Constitución abierta, que pueda complementarse con los diversos Estatutos de Autonomía, y adaptarse a las necesidades que exijan las circunstancias concretas.

El PSOE propugna una fórmula que combine la autonomía de cada nacionalidad y región con unas instituciones en plano político y en el plano económico capaces de asegurar la solidaridad entre todos los ciudadanos del país, de tal suerte que los derechos básicos queden solidariamente garantizados<sup>120</sup>.

En el mismo programa, hacían gala de un patriotismo español que reclamaba una apertura de España al mundo, sacándola de su papel secundario dentro de la escena internacional. Y en su versión reducida e ilustrada afirmaban entre otras las siguientes obligaciones que debería adoptar la nueva España democrática: «luchar por la descolonización de Gibraltar y su devolución; y abrirse al mundo ocupando el lugar que le corresponde por su historia, su cultura y su realidad política y económica»<sup>121</sup>.

En otros ámbitos de la campaña electoral, la matización de conceptos como el de la autodeterminación se realizaba de forma aún más explícita. Un ejemplo, posiblemente un tanto extremo, aparece en el seno del socialismo vasco, por parte de Enrique Múgica, quien afirmaba:

somos partidarios de la afirmación de estas características políticas, culturales y sociológicas de nuestro pueblo, a través de un estatuto de autonomía y de unas formas de autogobierno. Naturalmente consideramos que hoy el separatismo es inviable y que conduce a posiciones desmesuradas y radicales que no son admisibles; que hay que tener en cuenta que los vascos no son sólo los allí nacidos sino los que allí se han instalado y viven, y pienso, por todo ello, que a lo que hay que llegar es a soluciones

---

<sup>120</sup> *Ibíd.*, pp. 6-7.

<sup>121</sup> PSOE: “Programa electoral del PSOE”, Archivo de Historia del Trabajo de la Fundación 1º de Mayo (AHT), Colección Propaganda Política y Social (1970-1985), 02/15/007.

federales. Pienso también como socialista que el punto de partida debe radicar en la unidad inquebrantable de toda la clase trabajadora, sin ningún tipo de escisión<sup>122</sup>.

Aunque debamos tener en cuenta que la actitud respecto al vasquismo de este político no representaba a todo el PSE-PSOE, en el que había sectores que empatizaban más con estos sentimientos, no puede negarse su relevancia en aquel momento, dentro de una formación instalada en uno de los territorios donde este problema tenía una importancia capital. No sólo no mencionaba la autodeterminación, ni siquiera como derecho, sino que rechazaba la posibilidad de que se ejerciera. No es extraño que calificara el separatismo como inviable, pues el PSOE propugnó siempre la construcción de un Estado federal, lo que llamaba la atención era el hecho de considerarlo inadmisibile. Esta declaración, aunque más llamativa que otras, no suponía un caso aislado. Eran habituales las opiniones, que desde posturas menos extremistas, demostraban no estar a favor del ejercicio de este derecho, si implicaba una solución separatista.

Durante 1977 se observa esta tendencia que matiza enormemente los grandes enunciados del «programa máximo». Otra muestra de ello sería la publicación del libro *La alternativa socialista del PSOE. (Algunas contribuciones)*, desde la Secretaria del Equipo de Trabajo Jaime Vera, que pretendía ampliar y concretar algunos aspectos del programa del PSOE que nacía del último Congreso. Nos interesa en este sentido el capítulo de Baltasar Aymerich, *La transición al federalismo*, en el que podría decirse que fusionaba la visión más cercana a unas autonomías vinculadas al principio de subsidiariedad, con un interés real por los derechos de autogobierno de las nacionalidades y regiones. En el texto, el sistema que se describía sería un sistema cercano al federalismo, con una significación política muy diferente a la de cualquier tipo de Estado unitario descentralizado, y con un nivel de competencias muy similar al del Estado federal. Admitiendo que la diferencia fundamental estribaba en el reconocimiento de la soberanía de los Estados federados y en la constitución del poder central de abajo arriba, elegía sin embargo una «fase previa de un Estado integral descentralizado». El motivo era que en su táctica de conquista progresiva de parcelas de poder y por tanto de niveles de democracia superior, se prefería: «la disponibilidad

---

<sup>122</sup> Se trataba de un libro, basado en una entrevista a Enrique Múgica, editado en la colección «Políticos para unas elecciones», que debía servir para dar a conocer el programa del partido y a sus candidatos: Álvaro SANTAMARINA: *Enrique Múgica. Perfil humano y político*, Madrid, Cambio 16, 1977, p.86.

inmediata de una capacidad de autonomía, quizá menos amplia, a la promesa de una constitución federal más perfecta pero que demoraría el ejercicio de autogobierno»<sup>123</sup>.

Sin embargo, en otra publicación de 1977, escrita por Felipe González y Alfonso Guerra de cara a las elecciones, restaban importancia al origen de la soberanía y a si la construcción se realizaba de abajo hacia arriba o si lo hacía a la inversa, defendiendo en este caso un Estado federal sobre el que se entraba en muchas menos distinciones teóricas, pero que bien podría representar ese modelo a caballo entre el federalismo y el regionalismo, que quería asegurar la igualdad pero de un modo racional, sin imposiciones y sin obligar a la uniformización:

Un Estado federal es una estructura perfectamente idónea para hacer compatibles los intereses solidarios del conjunto de los ciudadanos españoles más allá de la nacionalidad o regionalidad de la que procedan o en la que habiten, con los intereses propios de las colectividades nacionales y regionales.

En un país como España interesa menos el problema de si los pueblos que lo integran son los que ceden parte de su soberanía en beneficio del conjunto o si es el conjunto el que cede parte de su soberanía en favor de cada colectividad diferenciada. El problema básico es el de definir, entre todos, cuáles son las competencias que corresponden al poder central y cuáles las correspondientes a cada una de las entidades autonómicas.

(...)

El federalismo respeta la diversidad y crea un marco igualitario para cubrir las diversas aspiraciones de los pueblos que integran el Estado Español. No se trataría siquiera de imponer autonomías a regiones o zonas cuya conciencia aún no las exija; ni tampoco de imponerlas en el mismo grado a las que la poseen de forma también diversa. Más bien la necesidad consiste en crear un marco flexible que haga posible ir cubriendo las aspiraciones de nuestros diferentes colectivos<sup>124</sup>.

Aunque con el tiempo, ese marco flexible, y no tanto los principios que se defendían entonces, se fue considerando un problema, o al menos se pensó que era necesario establecer unas pautas más estrictas para ordenar el proceso, en el que en todo caso, podrían establecerse algunas excepciones, pero esta es una cuestión sobre la que se trabajará en posteriores capítulos. De todos modos, una visión menos concienciada

---

<sup>123</sup> Baltasar AYMERICH: "La transición al Federalismo" en Equipo Jaime Vera: *La alternativa socialista del PSOE. (Algunas contribuciones)*, Madrid, Cuadernos para el diálogo, 1977, p.50.

<sup>124</sup> Felipe GONZÁLEZ y Alfonso GUERRA: *Partido Socialista Obrero Español*, Bilbao, Albia, 1977, pp. 39-40.

con la cuestión de los derechos de las nacionalidades afloraría paradójicamente en el mismo libro, donde González y Guerra respondían a un cuestionario en el que «contestar y ofrecer alternativas» en el marco de la campaña electoral. Llama la atención que pese a haberse referido explícitamente al Estado federal unas páginas antes –aunque ya se ha mencionado que de una forma poco precisa–, ante la pregunta directa sobre si la solución para España podía ser el federalismo se respondía que «requeriría un gran esfuerzo para vencer las resistencias de los sectores que no comprenden –no quieren comprender– la reivindicación autonomista, y para reorganizar política y económicamente las actuales provincias y regiones». Así pues, parecía descartar este sistema que decían incrementaría los problemas para instaurar y consolidar la democracia, y se postulaban favorables a un sistema que aun así continuaban llamando indistintamente Estado federal o «Estado multirregional». En él la importancia recaía en la solidaridad y en la cooperación territorial para acabar con los desequilibrios regionales, buscando impedir que las consideradas hasta entonces como regiones ricas se lucran aún más con una «federación de regiones» que agravara las desigualdades. Unos planteamientos que no tardarían en acaparar buena parte de los debates sobre el desarrollo autonómico:

La constitución de una nueva sociedad con estabilidad democrática exige la puesta en práctica, desde ahora, de una estrategia política tendente a la creación y potenciación de instituciones políticas descentralizadas que parcelando el poder concentrado en el Estado lo acerque a los ciudadanos y hagan posible su participación real en la gestión de asuntos sociales, políticos y económicos.

(...)

La concepción que propugnamos, el Estado federal, implica el desarrollo de una solidaridad nacional de las regiones más desarrolladas a las más necesitadas.

Una interpretación ingenua de la federación de regiones supondría un nuevo incentivo para desarrollar las regiones industrialmente en punta que vienen abasteciéndose de la riqueza material y humana de las regiones subdesarrolladas.

La descentralización económica es factor clave de una estructura federal, debiendo sustentarse sobre el principio de gestión regional, y solidaridad interregional. Sin unas transferencias de renta de unas regiones a otras, la autonomía regional no pasaría de ser una concesión formal.

La conformación del Estado multirregional se sostiene sobre la pluralidad y sobre la unidad, dado que la clase obrera necesita mantener una cada día más estrecha



vinculación que le garantice la ascensión de la hegemonía de clase en lucha contra el sistema capitalista<sup>125</sup>.

Tras la campaña, los comicios del 15 de junio de 1977 arrojaron un resultado inesperado por muchos, con si se quiere, una victoria moral para el Partido Socialista, como señalara Pedro J. Ramírez, por lo espectacular de su ascenso<sup>126</sup>. Los 118 escaños y el 29,27% de los votos emitidos, frente a los 165 y el 34,61 % de UCD habían sido un logro imponente para los socialistas<sup>127</sup>, pero no permitían que la izquierda liderara el proceso de construcción democrática<sup>128</sup>.

Y partiendo de aquellos resultados, pero también del modelo nacional y de Estado desplegado por los socialistas desde 1974, incluyendo la más moderada de la campaña electoral, deben interpretarse las conclusiones de la reunión de Sigüenza de agosto de 1977, en la que el PSOE estableció las líneas maestras a seguir en la redacción del proyecto constitucional<sup>129</sup>. El título destinado para la estructura del Estado recogía «como elemento fundamental la AUTONOMÍA contemplada como principio, como regla general y como derecho de las nacionalidades y regiones». Además, se diseñaba que los principios básicos del proceso de «federalización» serían: la democratización, la solidaridad, la autonomía y la racionalidad; y se establecía la

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, pp. 77-78.

<sup>126</sup> Pedro J. RAMÍREZ: *Así se ganaron las elecciones*, Barcelona, Planeta, 1977, p. 279. La campaña más «vistosa» la ofreció posiblemente el PSOE. Organizada por Alfonso Guerra, tuvo en Felipe González el líder más sobresaliente, Miguel Ángel GIMÉNEZ: *Un Parlamento en transición. Las Cortes Constituyentes (1977-1979)*, Ediciones UAM, 2014, pp. 119-120.

<sup>127</sup> El PCE había obtenido 20 escaños; la coalición PSP-FPS 6; y AP 16. Lourdes LÓPEZ: “Las elecciones de la transición”, en Ramón COTARELO (coord.): *Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986)*, Madrid, CIS, 1992, p. 103. El PCE había obtenido 20 escaños; la coalición PSP-FPS 6; y AP 16.

<sup>128</sup> Este aspecto debe ser tenido en cuenta, como otros, para entender los límites que la oposición democrática tuvo a la hora de pactar el tránsito a la democracia. Véase entre otros Ismael SAZ: “Y la sociedad marcó el camino. O sobre el triunfo de la democracia en España”, en Ismael SAZ: *Las caras del franquismo*, Granada, Comares, 2013, pp. 169-185; Ismael SAZ: “No sólo élites. La lucha por la democracia en España”, en Ferran ARCHILÉS y Julián SANZ (eds.): *Cuarenta años y un día. Antes y después del 20-N*, València, PUV, 2017; o Pere YSÀS: “La Transición española. Luces y sombras”, *Ayer*, 79 (2010), pp. 31-57. Para un estado de la cuestión sobre los debates en torno a los relatos que hacen balance de la Transición, Pamela RADCLIFF: “Si ocurrió en España, ¿por qué no en cualquier otra parte? Evaluación del «modelo» español de transición democrática”, *Pasajes de pensamiento contemporáneo*, 29 (2009), pp. 109-119; o Santos Juliá: “Cosas que de la transición se cuentan”, *Ayer*, 79 (2010), pp. 297-319.

<sup>129</sup> En Sigüenza se reunieron Felipe González, Gregorio Peces-Barba, Alfonso Guerra, Luis Gómez Llorente, Javier Solana, Enrique Múgica, Luis Fajardo, Antonio Sotillo, Pablo Castellano, Enrique Barón, Joaquín Ruiz Mendoza, Virgilio Zapatero, Francisco Ramos, Plácido Fernández Viagas y Manuel Marín, miembros del Comité Permanente y de la Comisión Constitucional del Grupo Parlamentario Socialista; con Francesc Ramos y Rudolf Guerra del Grupo Parlamentario Socialista de Catalunya; y Miguel Satrustegui, Alfonso Ruiz Miguel, Liborio Hierro y Larry Levene del Gabinete Técnico. PSOE: “Reunión de Sigüenza, Sección Partidos políticos”, AFFLC, Fondo PSOE, 00040059-001.

directriz de un «procedimiento uniforme en cuanto a las posibilidades de llegar al resultado final y a su vez múltiple recogiendo las situaciones varias existentes en cuanto a la iniciativa autonómica y delimitación territorial»<sup>130</sup>. Según esto difícilmente pueden calificarse de derrota de los planteamientos del PSOE sobre la forma de Estado que instauró una Constitución especialmente abierta en estos aspectos. Como Luis Fajardo Spinola afirma<sup>131</sup>, Sigüenza proponía un sistema que coincidía sustancialmente con el esquema constitucional que se impuso<sup>132</sup>.

Este mismo autor señala, que fue en aquella reunión donde se decidió la estrategia constitucional del partido respecto al carácter federal del Estado. Allí se habría barajado la posibilidad de definirlo, desde el artículo primero, como Estado federal; la de que se limitara a responder a principios federativos; e incluso se planteó la incompatibilidad entre el concepto de Estado Federal y el de otro organizado por Estatutos de Autonomía. Finalmente –según explica– sería el propio Felipe González el que propusiera el esquema aceptado, aludiendo a la estrategia que debían adoptar ante la batalla que se daría con UCD:

Consideraba González que bastaría con referirse al carácter federal en el preámbulo, y no definir expresamente como tal el Estado, pues esa caracterización constituiría más una meta que una base de partida (...) «esa va a ser a mi juicio la batalla, presagiaba Felipe, saber si se incluye o no en el texto constitucional el marco genérico de las autonomías, porque ellos no quieren incluirlo. Por tanto la discusión con ellos no puede ser federal o no federal; lo fundamental va a ser cómo van a configurarse las autonomías, y va a ser una batalla muy dura. Por ello bastaría incluir en el preámbulo de la Constitución la aspiración a un Estado Federal»<sup>133</sup>.

---

<sup>130</sup> Así lo confirmaba también el que fuera ponente constitucional, Gregorio Peces-Barba: «Allí se adoptó también el criterio de plantear el tema con una dimensión funcional de orientación federalista, y con una extensión de la autonomía a todas las nacionalidades y regiones, y no sólo a las históricas». Una dimensión funcional del federalismo que para este jurista implicaba el reconocimiento de la soberanía exclusivamente para el Estado-nación y no para las naciones culturales que lo componían, en Gregorio PECES-BARBA: *La elaboración de la Constitución de 1978*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988, p. 29.

<sup>131</sup> Este socialista canario tuvo un papel protagonista en la política autonómica del PSOE durante la Transición. Como miembro del CEF, encargado de la política municipal, participó en la mencionada Reunión de Sigüenza; pero además, tal y como él mismo señala, se encargó de dirigir el Gabinete del Secretario General que debía realizar el seguimiento de la presencia socialista en las reuniones preparatorias de las preautonomías, en Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo...*, pp. 44-45; además, a él le fueron encomendadas, junto a otros diputados catalanes y vascos, las enmiendas constitucionales relacionadas con temas autonómicos, según se señala en Soledad GALLEGO-DÍAZ y Bonifacio DE LA CUADRA: *Crónica secreta de la Constitución*, Madrid, Tecnos, 1989, p.47.

<sup>132</sup> Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo...*, p.52.

<sup>133</sup> *Ibid.*, p. 53.

Pero la actitud de los socialistas no era un caso aislado, y el Partido Comunista ofrecía posiciones mucho más moderadas conforme avanzaba el tiempo. Este grupo, tenía además una preocupación añadida, debía de hacer frente a la problemática de su legalización, que no se produjo hasta el 9 de abril de 1977, lo que en ocasiones le llevaba a realizar unas declaraciones de principios en apoyo de la unidad de la nación española que irían más allá de las que se permitían realizar desde el Partido Socialista<sup>134</sup>. El PCE reafirmaba su soberanía como partido nacional frente a todos aquellos que dentro de España no tuvieran claro qué lealtad prevalecía entre los comunistas. En 1977, por ejemplo, en un cuestionario planteado con la intención de dar a conocer la postura del Partido ante diversos temas, seguramente ante la inminencia de las primeras elecciones democráticas<sup>135</sup>, se culminaba, sintomáticamente, con una pregunta sobre el futuro de España en el contexto internacional, a la que seguía una patriótica respuesta que poco tendría que envidiar a una realizada por cualquier partido autoproclamado como nacionalista:

La hura fraseología, la manía de «grandeza imperial» de los primeros años del franquismo ha tenido como resultado el abandono de «las posesiones» de Marruecos y África, la entrega indigna del Sahara Occidental, la incapacidad para recuperar Gibraltar. Y lo que es más grave y vergonzoso, el haber convertido España en un inmenso Gibraltar abriendo de par en par las puertas de nuestra economía a la penetración y dominación del imperialismo, sobre todo americano. Ese es el resultado lógico de un régimen no sólo antidemocrático, sino antinacional (...) Pero, una vez instaurada la democracia (...) estamos convencidos que España desempeñará un papel importante, como corresponde a su historia y a la contribución que ha dado y puede dar al desarrollo de la comunidad internacional.<sup>136</sup>

---

<sup>134</sup> En palabras de Jesús Sánchez Rodríguez: «La preocupación por no quedar marginado, especialmente por no ser legalizado, o serlo muy tarde, se convertiría rápidamente en el principal motivo de actuación del PCE», y esto provocaría la aceptación de un pacto entre Suárez y Carrillo, al parecer en febrero de 1977, según el cual, se legalizaba al PCE a cambio de que éste se comprometiera a aceptar la monarquía de Juan Carlos, la bandera, y la unidad de España, en Jesús SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, *Teoría y práctica democrática*, p.270-275.

<sup>135</sup> Al tratarse de una publicación de carácter divulgativo, y por la inminencia de las elecciones, parece un ejemplo interesante en el que los «procesos de negociación», mencionados por Ferran Archilés, habrían condicionado el mensaje que sería transmitido finalmente a la sociedad. El cuestionario –publicado junto a otros documentos en un libro editado por Santiago Carrillo y Simón Sánchez Montero– estaba realizado con preguntas directas a un interlocutor al que no se menciona, por lo que genera la sensación de impersonalidad y parece por tanto responder a las directrices del Partido en su conjunto. Santiago CARRILLO y Simón SÁNCHEZ MONTERO: *PCE*, Bilbao, Albia, 1977, p. 75.

<sup>136</sup> *Ibid.*, p. 110.

Lo visto hasta el momento no indicaría la reafirmación de la izquierda mayoritaria en unas posiciones que les hiciera difícil aprobar el texto Constitucional tal y como quedó redactado. Lo que parece indicar el análisis de la etapa pre-constitucional es que cuando nos alejamos de los titulares y los grandes enunciados, se percibe una mayor coherencia que habría estado siempre latente, y que tenía mucho que ver con la herencia de una identidad española compartida por la cultura política socialista, también al inicio de la Transición. Y algo no muy distinto sucedió con el Partido Comunista, que durante aquel verano, como había sucedido en Sigüenza con el PSOE, se pronunció a través de Jordi Solé Tura, por no exigir que la Constitución sancionara un modelo federal, ya que en el fondo consideraban que el federalismo era más bien un punto de llegada y no de partida<sup>137</sup>. A pesar de esto, nada evitaba que igual que en el PSOE, principios que iban siendo relegados en la práctica, se mantuvieran en las resoluciones y en el programa de máximos. Es por ello, que en el IX Congreso, de abril de 1978, se hablara de poco más que de autonomía y descentralización, excepto en la resolución número seis, *La democracia política y social, etapa hacia el socialismo y el comunismo*, en la que se reafirmaban tareas propugnadas en el Manifiesto-Programa de 1975, entre las que ocupaba un lugar: «el establecimiento de un sistema federal que exprese el carácter plurinacional y plurirregional del país y represente el respeto al derecho de autodeterminación de sus nacionalidades»<sup>138</sup>. Pero a continuación mostraban sus verdaderas aspiraciones, que de momento no iban más allá de la autonomía: «La experiencia de este período de autonomía señalará las características de la futura organización federal, entendida como su superación y desarrollo»<sup>139</sup>.

### 3. El debate constitucional

Como es bien sabido, la Constitución de 1978 no sancionó el derecho de autodeterminación ni mencionó el Estado federal. De aquello no hicieron batalla en la izquierda mayoritaria, que más que renunciar a aquellos principios, aplicó una manera si se quiere un tanto *sui generis* de entenderlos, que no era sin embargo nueva. Ya se ha ido viendo cómo no es conveniente trasladar al proyecto de la izquierda sobre el modelo de Estado y de nación para España, un significado genérico sobre la autodeterminación

---

<sup>137</sup> Jordi SOLÉ TURA: *Los comunistas y la Constitución*, Madrid, Forma ediciones, 1978, pp. 32 y 40. En el mismo sentido, Carme MOLINERO y Pere YSÀS: “El PCE y la...”, p. 132.

<sup>138</sup> PCE: *9º Congreso del PCE, del 19 al 23 de abril de 1978. Actas, debates y resoluciones*, PCE, Madrid, 1978, p. 364.

<sup>139</sup> *Íbid.*, p. 367.

o sobre el federalismo. Ferran Archilés ha apuntado en este sentido que «es equivocado juzgar atemporalmente la defensa de algunas de aquellas propuestas de organización del marco territorial y de definición identitaria, al margen del conjunto de los lenguajes políticos del momento»<sup>140</sup>. Es por tanto a partir de estas premisas, y teniendo en cuenta los análisis que se fueron desplegando entre 1974 y 1977 sobre estas cuestiones, desde donde debe analizarse cómo se abordó la definición nacional y se diseñó el modelo de Estado en el debate constitucional, en el que conceptos como autodeterminación, federalismo, nación o nacionalidad no tenían significados unívocos.

Ya en el anteproyecto constitucional presentado en enero de 1978, los términos autodeterminación o Estado federal no aparecían, aunque el modelo elaborado no ofrecía diferencias significativas con el establecido por los socialistas en Sigüenza, sancionándose un Estado unitario en el que se reconocía el autogobierno de las regiones y nacionalidades y en el que la soberanía residía únicamente en uno de los pueblos que integraban el Estado, el español. Así se establecía en el artículo 1.2: «Los poderes de todos los órganos del Estado emanan del pueblo español, en el que reside la soberanía»; y el artículo 2: «La Constitución se fundamenta en la unidad de España y la solidaridad entre sus pueblos y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran». Además, a partir del título VIII se generalizaba el acceso a la autonomía a todos los territorios, incluyendo siempre la celebración de un referéndum sobre el Estatuto<sup>141</sup>.

De este texto al aprobado finalmente, la consecuencia más evidente y llamativa fue el cambio del artículo 2: «La Constitución se fundamenta, en la unidad de España como patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la indisoluble unidad de la nación española»<sup>142</sup>. Jordi Solé Tura ha contado que la tensión en torno a este artículo era muy elevada y los responsables de UCD avisaron de que se veían obligados a retirar el término «nacionalidades» porque «no podían aguantar las presiones». Presiones que al parecer, se acabaron imponiendo al conjunto de la Ponencia, pues como señala este dirigente del PSUC: «me llegó, en tanto que presidente de la sesión, un papel escrito a

---

<sup>140</sup> Ferran ARCHILÉS: «El «olvido» de España. Izquierda y nacionalismo español en la Transición democrática: el caso del PCE», *Historia del Presente*, 14 (2009), p. 106.

<sup>141</sup> Texto del anteproyecto de Constitución en BOC nº44, 5 enero de 1978.

<sup>142</sup> El artículo 1.2 quedaba de la siguiente manera: «La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado», Anteproyecto definitivo en BOC: nº82, 17 abril de 1978.

mano y procedente de la Moncloa en la que se proponía una nueva redacción del artículo 2», la que finalmente quedó aprobada<sup>143</sup>.

Pero otra «modificación decisiva» tuvo lugar entre un proyecto y otro, como ha puesto de relieve Ferran Archilés, quien indica que a través del Título VIII:

de un modelo generalista se pasó a un modelo asimétrico, con vías diferenciadas como las de los artículos 143 y 151, –aunque no estuvieran prefijando a que territorios debían aplicarse. Se reforzaba así la dinámica de las preautonomías, tanto como se abría el paso a un tratamiento más acelerado y específico para algunos territorios, lo que debía permitir dar salida al caso catalán, vasco y gallego, pero que podía ir más allá, según la voluntad del momento<sup>144</sup>.

Aunque se ha señalado que la Constitución establecía una autonomía política pensada sobre todo para Cataluña y Euskadi, y quizá Galicia<sup>145</sup>, también es un lugar común que pese a que la Constitución no suponía la generalización de entrada, abría las puertas a una posibilidad que para muchos autores pretendía poner un límite al nacionalismo vasco y catalán fundamentalmente<sup>146</sup>. De hecho, Óscar Alzaga ya defendió en uno de los primeros comentarios sistemáticos de la Constitución, que el artículo 151 buscaba reconocer el hecho diferencial de Cataluña, Euskadi y Galicia, aunque sin impedir que en el futuro otros territorios accedieran a los mismos techos competenciales. Este autor consideraba por tanto, que la Constitución establecía un modelo «casi federalista para Cataluña y el País Vasco» y moderadamente regionalizable para otros «pasando por situaciones intermedias»<sup>147</sup>.

Sobre la responsabilidad de aquella generalización se ha debatido mucho, incluso, en algunos momentos, importantes dirigentes socialistas acusaron a los centristas, y especialmente al Ministro Manuel Clavero Arévalo, de haber generado artificialmente las demandas autonómicas en el conjunto de los territorios del Estado.

---

<sup>143</sup> Jordi SOLÉ TURA: *Nacionalidades y nacionalismos en España. Autonomías, federalismo, autodeterminación*, Madrid, Alianza Editorial, 1985, pp. 98-100. La nota manuscrita puede encontrarse en el fondo que donó al Arxiu Històric de Mollet del Vallès (AHMV), Fons Jordi Solé Tura, 13.1.2.45.

<sup>144</sup> Ferran ARCHILÉS: “75, modelo para...”.

<sup>145</sup> Carme MOLINERO y Pere Ysàs: *La cuestión catalana...*, p. 266.

<sup>146</sup> Manuel ALCARAZ: “Construcción y decadencia del Estado Autonomico”, en Ferran ARCHILÉS e Ismael SAZ: *Naciones y Estado. La cuestión española*, València, PUV, 2014, pp. 64-69; o José Luis LÓPEZ ARANGUREN: “Naciones, Estados, nacionalismos, inter-nacionalidad”, *Revista de Occidente*, 122-123 (1991), p. 22.

<sup>147</sup> Óscar ALZAGA: *La Constitución española de 1978 (comentario sistemático)*, Madrid, Ediciones del Foro, 1978, pp. 819-825 y 878-880.

En sus memorias, Alfonso Guerra llegó a rememorar los hechos que habían conducido al Estado de las Autonomías repartiendo responsabilidades entre el partido de Gobierno y la oposición, causantes de haber generado una batalla que alentó la generalización de reivindicaciones identitarias. De su relato se desprendía que el PSOE llevó a cabo una política improvisada que se preocupaba desde el inicio por que el proceso no se viera desbordado, pese a que la coyuntura y la defensa de principios e intereses encontrados dentro del Partido la dificultaron. Guerra, que hablaba de la existencia de conversaciones entre la dirección de su Partido y el Gobierno mucho antes de que se aprobara la Constitución, sitúa el punto de no retorno en la postura que mantuvo Manuel Clavero, Ministro para las Relaciones con las Regiones, que diseñó el «café para todos»:

Recién inaugurada la democracia tuvimos Felipe González y yo una entrevista con el presidente Suárez para intentar dar una salida histórica al contencioso territorial. Nuestra propuesta fue clara y sencilla: restaurar los Estatutos de Euskadi y Cataluña aprobados durante la República (...).

La alternativa más viable fue descartada por temor a la reacción del Ejército, y entramos en una dinámica de complicaciones que fue a devenir en el Título VIII de la Carta Magna, el más ambicioso y el más problemático de la Constitución de 1978. Pero hasta llegar a él una acumulación de disparates fue haciendo inevitable que todos aproximaran un final del que nadie se sentiría responsable.

El Gobierno de Adolfo Suárez quería evitar que el lema de amnistía y estatuto de autonomía se convirtiera en una bandera que le amenazara electoralmente, y los grupos de oposición arremetían en sus reivindicaciones autonomistas para no dejar en manos del Gobierno la iniciativa en un tema que se convertía cada día más en una petición popular.

En un piélago de dudas y estirones, la aparición de un ministro gris y de poca trayectoria política, Manuel Clavero, trastocó todos los planes. Su teoría de «café para todos» se sostenía sobre el intento de granjearse un apoyo en su región de origen, Andalucía, y como un proyecto de reducir la tensión vasco-catalana, extendiendo a todo

el mapa lo que distinguía a aquellos dos territorios. El resultado fue una carrera «a pelo» para situarse como más regionalista que nadie<sup>148</sup>.

Pero es un hecho que desde hacía tiempo el Partido Socialista se pronunciaba favorable a extender la autonomía a todas las nacionalidades y regiones, por cuestiones estratégicas pero también por el convencimiento de que el derecho a la diferencia no podía menoscabar la igualdad en derechos de los territorios. Así se había planteado incluso en el XXVII Congreso, estableciendo eso sí una diferencia terminológica que sin embargo no se traducía en ninguna propuesta que las distinguiera en la práctica. Alejandro Quiroga ha mantenido que fue en la «segunda coyuntura crítica», principalmente durante el debate constitucional a partir del segundo Anteproyecto de la ponencia, cuando se produjo por parte de la izquierda (PSOE y PCE) la renuncia a «otorgar a Cataluña, el País Vasco y Galicia un estatus especial dentro de una España descentralizada»<sup>149</sup>. Si bien esto podría responder mejor al perfil del PCE, que siempre había tenido más clara la distinción entre las tres nacionalidades históricas y el resto<sup>150</sup>, no encaja del todo respecto al PSOE, que aunque planteaba dudas a este respecto y reconocía la existencia de diferencias sobre todo entre Cataluña y Euskadi y los demás territorios, no quería imponer ningún tipo de sistema asimétrico, más bien al contrario<sup>151</sup>.

De hecho, el primer anteproyecto, que no distinguía entre diferentes vías para el acceso a la autonomía, si nos fiamos del testimonio de Peces-Barba, se debería fundamentalmente al empeño socialista<sup>152</sup>, cuyo ponente llegó a reconocer sentirse

---

<sup>148</sup> Alfonso GUERRA: *Cuando el tiempo nos alcanza (1940-1982)*, Madrid, Espasa, 2004, pp. 233-234. Dentro de UCD, otros como Martín Villa, que manifestó no estar de acuerdo con ese diseño del modelo de Estado al que llamaba la «tabla de quesos», también han responsabilizado de la generalización autonómica a Manuel Clavero, véase Martín Villa, en Rodolfo MARTÍN VILLA: *Al servicio...*

<sup>149</sup> Alejandro QUIROGA: *Coyunturas críticas. La izquierda y la idea de España durante la Transición en Historia del presente*, nº13 *¿Una patria invisible?*, 2009, p.26.

<sup>150</sup> Montse MATEO: *La idea de España a finales del siglo XX: El nacionalismo español desde la transición*, Madrid, UNED, 2003, en <http://www.vientosur.info/documentos/cuestionnacional-montsemateo.pdf>; o Ferran ARCHILÉS: “El «olvido» de España...”.

<sup>151</sup> En cualquier caso, Jordi Solé Tura y Miquel Roca también parecieron asumir sin discusiones el sistema que había impuesto el borrador, de dos vías pero generalizable, como se demuestra en los textos que publicaron en abril de 1978 sobre la Constitución en los que justificaban sus posiciones como ponentes: Jordi SOLÉ TURA: “La Constitución y la lucha por el socialismo”, en Gregorio PECES-BARBA, Jordi SOLÉ TURA (et. al.): *La izquierda y la Constitución*, Barcelona, Taula de Canvi, 1978, pp. 19-29; y Miquel ROCA: *Una primera aproximación al debate constitucional*, en Gregorio PECES-BARBA, Jordi SOLÉ TURA (et. al.): *La izquierda y la Constitución*, Barcelona, Taula de Canvi, 1978, pp. 30-47.

<sup>152</sup> Uno de los socialistas catalanes que colaboraron con el PSOE en la elaboración del texto constitucional, José Antonio González Casanova, defendía en 1980 que los socialistas mantuvieron un



«poco acompañado» –a excepción del apoyo de Solé Tura–, en su voluntad de conseguir que se garantizase la igualdad a todas las Comunidades Autónomas:

Nuestro planteamiento de lo que he llamado federalismo funcional y que los nacionalismos llaman despectivamente «café para todos», había quedado descolgado antes de empezar el estudio concreto del tema, con lo que el debate se basó en el texto de Roca, apoyado muchas veces por Solé Tura, y en el de UCD, al que Fraga apoyaba también como mal menor. En mi opinión no eran asumibles plenamente ninguna de las dos posiciones, y mi esfuerzo se dedicó durante toda la discusión a introducir elementos que nos aproximasen a ese federalismo funcional, que superaba la justificación de las autonomías como salida a la diferencia cultural de algunas nacionalidades, y la completaba con el criterio más racional u objetivo, válido para las demás regiones españolas, de la descentralización política y la distribución territorial del poder, que permitiría al final del proceso una igualdad entre todas las comunidades autónomas. No fue fácil, pero creo que en definitiva se alcanzó ese objetivo<sup>153</sup>.

Es conocido que este primer consenso se rompió cuando en el debate del primer borrador del anteproyecto, Miguel Herrero de Miñón presentó un texto alternativo al Título VIII, que según Peces-Barba suponía «una discriminación entre dos tipos de comunidades autónomas, las de primer grado, entre las que se encontraban las históricas, y las de segundo grado que carecían de órganos políticos y seguían siendo en realidad una mancomunidad de diputaciones. Esta idea chocaba frontalmente con el federalismo funcional que nosotros mantuvimos desde el principio». Este sería uno de los motivos que se adujeron para la salida de los socialistas de la ponencia, aunque detrás pudieron haber otros de tipo estratégicos, a los que se ha referido el propio protagonista<sup>154</sup>. Lo cierto es que si la improvisación estuvo muy presente en la

---

modelo de Estado que fue siempre coherente y sistemático, considerando al PSOE como la izquierda consecuente pero realista que optó «por organizar el Estado en base a una estructura solidaria de unidades territoriales de autogobierno o autonomía política». A diferencia del pactismo coyuntural, pragmático y particularista del nacionalismo regionalista burgués (aceptado tácticamente por UCD y PCE-PSUC), en José Antonio GONZÁLEZ CASANOVA: “El Estado de las Comunidades Autónomas”, *Sistema: Revista de ciencias sociales*, 38-39 (1980), pp. 233-234.

<sup>153</sup> En otro momento llegó a afirmar que el modelo de acuerdo UCD-PSOE fue el que surgió vencedor en la ponencia constitucional, que entre otras cosas permitía frenar a los nacionalistas si resultaban excesivas sus pretensiones, en Gregorio PECES-BARBA: La elaboración de..., pp.43, 75 y 83. En apoyo de esta tesis Abdón MATEOS y Giulia QUAGGIO: “Nación y Estado...; o Luis FAJARDO: ¿Hacia otro modelo..., p. 58.

<sup>154</sup> Aunque se han señalado razones ideológicas respecto a las modificaciones que UCD quería realizar en relación con la educación, o la relegación a una simple descentralización administrativa al resto de nacionalidades y regiones que no fueran las tres históricas; o motivos de desacuerdo en relación a las

actuación socialista en materia de política autonómica, no puede decirse algo muy distinto de la que se llevó a cabo desde el Partido de Gobierno, lo que explica ciertos vaivenes en las posiciones centristas. Ferran Archilés ha considerado que la actuación de Suárez y la UCD fue pragmática y oportunista sobre todo tras las elecciones de 1977, y que a inicios de 1978 a pesar de ir «a remolque» y no tener ni siquiera un proyecto autonómico, consiguió controlar la situación y marcar la agenda. Así pues, un Adolfo Suárez que en opinión de Archilés, se vio influido por cuestiones tácticas que aconsejaban enfriar las demandas catalanas; por las propuestas que ya circulaban de Eduardo García de Enterría; y por un Ministro para las regiones que impulsó las preautonomías, dio luz verde a una generalización autonómica que después aparecería como un lastre a un partido que se acabó decantando por la contención del sistema autonómico<sup>155</sup>. Y una de las primeras muestras de la imposición de los sectores que pretendían otorgar un carácter excepcional a las autonomías sería aquella actuación de Herrero de Miñón, que finalmente no llegó a aprobarse en los términos en el que este la propuso<sup>156</sup>.

---

formas poco reglamentarias y decorosas de los centristas, Peces-Barba llegó a escribir que «se trató de una jugada de póker para mejorar las posiciones en el debate», Gregorio PECES-BARBA: *La elaboración de...*, pp. 22 y 131. Esta explicación concuerda con la que dieron Soledad Gallego y Bonifacio de la Cuadra: «Lo que sucedió realmente fue que Peces-barba eligió ese momento para poner en práctica una decisión adoptada días antes. El ponente socialista se planteó la posibilidad de abandonar espectacularmente los trabajos constitucionales desde el mismo momento en que, (...), se hizo patente el éxito de la estrategia de Miguel Herero y la formación de un eje AP-UCD-Minoría Catalana. (...) Se trataba de aprovechar la presentación por parte de UCD de una enmienda que afectara a un tema de raíz popular para dar un *sonoro portazo*», Soledad GALLEGU-DÍAZ y Bonifacio DE LA CUADRA: *Crónica secreta de...*, pp. 48-49.

<sup>155</sup> Ferran ARCHILÉS: “Nacionalismos y culturas políticas en España (C. 1975-2012)”, en Manuel PÉREZ LEDESMA e Ismael SAZ (coords.): *Del Franquismo a la democracia, 1936-2013*, Madrid, Marcial Pons, 2015, pp. 156-157; y Ferran ARCHILÉS: “75, modelo para...”.

<sup>156</sup> Este político no ocultaría su disconformidad ante el modelo que acabó imponiéndose. Consideraba que exceptuando a los nacionalismos vasco y catalán, cuyos movimientos dieron origen a las autonomías, en el resto de los territorios fueron las preautonomías y las expectativas de mejora que generaron, extendidas por su compañero de partido Clavero Arévalo, las que originaron las demandas sociales. La explicación de por qué el socialismo había alentado aquel proceso para Herrero de Miñón estaba clara, se trataba de una cuestión estratégica; y la responsabilidad en la derecha la trasladaba fundamentalmente a Clavero: «Nunca fue partidario del reconocimiento de los hechos diferenciales ni de la palabra “nacionalidades” y lo que ello implicaba, y si favoreció la autonomía andaluza sobre la base del artículo 151 de la Constitución, no fue por su amplitud, sino para evitar lo que estimaba era una discriminación de esta región respecto de las nacionalidades históricas. La autonomía fue técnica igualitaria, como siglo y medio antes lo había sido la centralización». Aunque no dejaba de reconocer que la inexistencia de una política definida en estos asuntos dentro de su Partido; la voluntad por robar a la izquierda «sus banderas»; y el hecho de que la mayor parte de los dirigentes centristas fueran antiautonomistas y quisieran diluir las reivindicaciones de los nacionalismos catalán y vasco, ayudaban a explicar la actitud de UCD. Por todo ello, como concluía: «Lo que se exigía en virtud de una diferencia se pretendía satisfacer por la vía de la homogeneización y se sustituía así la legitimación autóctona de la autonomía de índole histórica y política, por una legitimación heterónoma de carácter normativo», en Miguel HERRERO DE MIÑÓN: “La gestación del sistema autonómico español: claves del sistema constituyente”, *Revista Vasca de Administración Pública*, 36 (II) (1993), pp. 41-43. En el mismo sentido Miguel HERRERO DE MINÓN:

Sea como fuere, aunque con ciertos matices respecto a la etapa anterior, coincidimos con Quiroga en señalar que fue a partir de 1978 cuando fue adoptada con más fuerza desde la dirección socialista una postura pública favorable a la generalización autonómica, y un ejemplo de ello se daría en el libro que Felipe González publicó junto a Antonio Guerra, escribiendo el apartado *Socialismo es libertad*, donde se imponía un programa más moderado. Conciliando el socialismo con el nacionalismo, veía en la lucha nacional una forma de redistribuir la riqueza de forma más justa, y a ello se refirió en el apartado titulado como «Las autonomías», en el que relacionaba directamente el proceso autonómico con la solidaridad: «Para los pueblos menos favorecidos, la conciencia de liberación se inserta en la conciencia de autonomía y, ambas, en la conciencia de solidaridad». Y añadía: «la autonomía no va a resolver de un día para otro los graves males que aquejan a algunos sectores del país, mientras que exigirá a los más desarrollados algunos sacrificios que, a la larga, redundarán en beneficio del conjunto del país». Además, prevenía frente a la carrera autonómica, que no debía ser «una imposición o una necesidad defensiva frente a otros», aunque tampoco la relacionaba con la necesidad de un territorio con una identidad nacional diferenciada a mantener su propia personalidad política, sino con «la puesta en marcha de una transformación real de las relaciones de producción, de los mecanismos de distribución de la riqueza» por lo que invitaba a todas las regiones a sumarse a este proceso, aunque con calma, cuando pudieran asumirlo. Por último, el líder socialista sentenciaba de manera reveladora, demostrando cómo la política sobre la cuestión nacional estaba improvisándose y construyéndose sobre unas bases poco claras, que: «Afinar los sutiles distinguos de nacionalidad, de país, de región, es una tarea llena de matices técnicos que corresponden a los especialistas. A la política pertenece cargar de contenido pragmático el sentimiento difuso de la comunidad»<sup>157</sup>. Y esto es precisamente

---

*Memorias de estío*, Madrid, Temas de hoy, 1993, pp. 148-158. Véase David SÁNCHEZ CORNEJO: “La Unión de Centro Democrático y la idea de España: la problemática reelaboración de un discurso nacionalista para un contexto democrático”, *Historia del presente*, 13 (2009), p. 15; o Pere YSÀS: “El proceso hacia el Estado de las autonomías” en Javier UGARTE: *La transición en el País Vasco y España*, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1998, p. 71.

<sup>157</sup> Felipe GONZÁLEZ y Alfonso GUERRA: *Socialismo es Libertad y Notas para una biografía*, Galba Edicions, Barcelona, 1978, p.163-166. En este sentido, en otra publicación de 1978, Felipe González se pronunciaba por un modelo que pudiera ser igualitario en los límites, partiendo siempre de la voluntad popular, sin imposiciones a la baja pero tampoco al alza: «En otros términos, diríamos que cada nacionalidad o región puede llenar, según el grado de su conciencia colectiva y las necesidades en que se encuentre, el número de competencias que desee dentro de su marco específico, o de las compartibles con el poder central. No queremos discriminaciones a la baja o al alza, ni tampoco imposiciones desde los poderes centrales para crear igualitarismos irreales o diferencias lacerantes. Por consiguiente, nuestra tesis

lo que hacían, a sentimientos difusos aplicaban políticas que en ocasiones eran ambiguas y que intentaban homogeneizar y generalizar un sentimiento que no se presentaba con las mismas características en todos los territorios, pero que al Partido le interesaba extender, abanderando la cuestión nacional o autonómica en todas las nacionalidades y regiones, eso sí, tratando de no poner con ello en peligro la unidad y la funcionalidad del Estado<sup>158</sup>.

Volviendo al proceso de aprobación de la Constitución, interesa el debate sobre el texto del Anteproyecto definitivo, que tuvo lugar en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, durante 24 sesiones entre los meses de mayo y junio. Es interesante rescatar brevemente algunas cuestiones que fueron discutidas en torno al artículo 1.2 y el término «soberanía nacional». Mientras que los grupos que representaban a los nacionalismos no estatales se negaban a incluirlo de este modo porque suponía la existencia de una única soberanía, y en consecuencia una única nación, la española, Peces-Barba, representando al PSOE, defendería una enmienda «in voce» con el objetivo de sustituir «soberanía nacional» por «soberanía». Aludiendo a que el primer término contribuía a la polémica «que confunde siempre el concepto de nación con la necesidad de que la nación esté siempre personificada en un Estado»; y sin pronunciarse acerca de si la soberanía podía ser, o no, divisible (discusión en la que estaban enzarzados otros grupos), se refirió a otras cuestiones jurídicas de tipo técnico y sentenció: «el término aceptable cuando se quiere calificar a la soberanía es el de soberanía popular. (...) Como no hay por qué elegir, y precisamente la enmienda del señor Martín Toval pretende evitar la polémica y habla solo de soberanía, este Grupo Parlamentario, señor Presidente, va a apoyarla»<sup>159</sup>.

La enmienda no salió adelante y el PSOE votó posteriormente a favor del artículo de la ponencia que finalmente fue aprobado, eso sí, tratando de mantener un posición en la que no se les pudiera acusar de «cómplices ni responsables, porque

---

es que, en principio, cada una de las entidades autónomas potenciales tiene los mismo derechos, al margen de las realidades objetivas diferenciales, pero estos hechos pueden ser cubiertos y deben serlo en función de decisiones colectivas dentro de un proceso de maduración histórica», Felipe GONZÁLEZ: *España y su futuro*, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1978, p. 45.

<sup>158</sup> En el libro *España y su futuro*, después de pronunciarse por la preferencia de un Estado en el que la autonomía fuera generalizable con igualdad de competencias a todos los territorios cuya voluntad popular la demandara, advertían del peligro de alentar de forma demagógica un proceso que se basaba sobre todo en profundizar la democracia, acercar el poder al pueblo y reconocer la pluralidad, pero que no debía debilitar la unidad del Estado, *Ibid.*, p. 46.

<sup>159</sup> Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de asuntos y libertades públicas, nº 64, sesión nº4, 11 de mayo de 1978, p. 2189.

hemos querido evitarlo, de que no se incluya un término que técnicamente nos parece incorrecto, pero al final lo hemos votado» porque «entendemos, que este problema importante debe tener el apoyo máximo de los Grupos Parlamentarios y porque con eso confirmamos que nuestro planteamiento era un planteamiento técnico»<sup>160</sup>. La insistencia en que para ellos era una cuestión de índole técnico es clarificadora, tomando distancia respecto a la discusión que se estableció entre otros grupos. Aunque el testimonio de Peces-Barba unos años después, en el que daba cuenta de su experiencia en la elaboración del texto constitucional, mostraría cómo el PSOE no tenía intención de permitir una redacción que pusiera en duda la indivisibilidad de la soberanía nacional española, respirando incluso aliviados ante la corrección del primer borrador del Anteproyecto, que según el ponente socialista no dejaba lo suficientemente clara esta cuestión:

Este tema de la soberanía, en la preocupación de muchos de nosotros, estaba vinculado al reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades, porque no queríamos en ningún caso que se pudiese apoyar en la Constitución un federalismo originario, y no sólo organizativo, consistente en defender una soberanía propia a las nacionalidades, basada en una torcida aplicación del principio romántico de que cada nación tiene derecho a ser un Estado independiente, y en un desconocimiento de la realidad histórica de España. Éramos un Estado unitario, con una única soberanía residente en el pueblo español, que pretendía descentralizarse y establecer la autonomía política en unos entes –comunidades autónomas, que no eran soberanos–. Esta preocupación no estaba todavía bien resuelta en este primer texto de la ponencia, y había que esperar a etapas posteriores de la producción constitucional para encontrar la fórmula adecuada.

Frente a la oposición constante y desde el principio de Fraga al término «nacionalidades», otros pensábamos que era el reconocimiento de una realidad, siempre que no se diese el salto lógico de sostener que eso llevaba aparejado el reconocimiento de una soberanía propia de esas «nacionalidades». Por eso era necesario impedir ese argumento con el artículo 1-2 que residenciaba exclusivamente la soberanía en el pueblo español. Los debates posteriores pondrían de relieve cómo todavía fue posible dar un giro más a la llave del candado que cerraba la puerta a la soberanía de las nacionalidades y de paso al llamado «derecho de autodeterminación». La calificación de la soberanía como «nacional» sería el instrumento utilizado en el informe definitivo de

---

<sup>160</sup> *Ibid.*, p. 2191.

la ponencia (...). En su momento no estuve de acuerdo con esa adición, e incluso intervine en el debate de la Comisión, en favor de una enmienda de los socialistas catalanes que no incluía el término nacional. Finalmente votamos a favor del texto de la ponencia, pese a las dificultades que me llevaban a considerar científicamente anacrónico el término, porque empecé a entender que, como reiteradamente en público, pero sobre todo en privado, sostenían los ponentes de UCD y el diputado Alzaga que llevó con Cisneros la voz cantante en este debate, el adjetivo nacional cerraba la preocupación de la utilización del reconocimiento del derecho a la autonomía para sostener la soberanía originaria de las nacionalidades<sup>161</sup>.

En cuanto al artículo 2, que contribuyó a poner más «cerrojos» a la divisibilidad de la soberanía, el PSOE presentó una enmienda propia: «La Constitución fundamenta y garantiza la unidad de la nación española, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas»<sup>162</sup>. A estas alturas es evidente que ya habían renunciado al principio de autodeterminación, sustituyendo esta construcción ideológica por la ofrecida por Anselmo Carretero, España como nación de naciones, que no tuvo en cambio excesivo eco en el Congreso del PSOE en 1976, cuando éste lo expuso en una de las ponencias<sup>163</sup>. Como han explicado autores como Andrea Geniola y Ferran Archilés, la influencia de Carretero en el socialismo español fue débil en los años previos y se trataba de una figura aislada, tratándose de un caso de invención de la tradición que fue convenientemente utilizado en la etapa de la elaboración de la Constitución<sup>164</sup>. Fue sobre todo de manos del ponente socialista cuando comenzó a generalizarse aquella concepción de la «nación de naciones» como el modelo preferido por el PSOE para España. Este término y su debate son inseparables de la inclusión de la mención a las «nacionalidades» en la

---

<sup>161</sup> Gregorio PECES-BARBA: *La elaboración de...*, pp. 48-49.

<sup>162</sup> Congreso de los Diputados. Comisión de asuntos y libertades públicas: *Enmiendas al Anteproyecto de la Constitución*, p. 154, (<http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/enmiendas/enmcongreso.pdf>).

<sup>163</sup> Anselmo Carretero, encabezando a la agrupación mexicana, había presentado a este congreso una ponencia federalista en el que planteaba la cuestión en los términos que más tarde se asumirían de forma más explícita, aunque como han señalado Abdón Mateos y Giulia Quaggio, sin demasiada reflexión y debate, Abdón MATEOS y Giulia QUAGGIO: “Nación y Estado en el socialismo español hasta 1992”, en J. Daniel MOLINA: *La España del pueblo. La idea de España en el PSOE. Desde la Guerra Civil hasta 1992*, Madrid, Sílex, 2005, p. 25.

<sup>164</sup> Andrea GENIOLA: “El hilo enredado...”; y Ferran ARCHILÉS: “75, modelo para...”. En sentido contrario véase el prólogo de Jordi Solé Tura al libro de Carretero *Los pueblos de España* en 1992, en el que destacaba la «sorpresa», «revelación» e «incitación» que había supuesto para muchos —entre los que se incluía— la publicación en 1952 del libro *Las nacionalidades españolas*, Jordi SOLÉ TURA: “Anselmo Carretero y el nuevo federalismo”, en Anselmo CARRETERO: *Los pueblos de España*, Barcelona, Editorial Hacer, 1992, pp. 7-13. Véase Anselmo CARRETERO: “Socialismo y federalismo en España”, en Lluís ARMET (et alii): *Federalismo y Estado de las autonomías*, Barcelona, Planeta, 1988, pp. 51-73.

Constitución<sup>165</sup>. De hecho, aunque como ha admitido Peces-Barba, inicialmente no presentaron ante la ponencia una redacción del artículo 2º en la que se incluyera el término «nacionalidades», fueron favorables a ello en cuanto se propuso porque según explicaba, encajaba perfectamente en la España como nación –soberana– de naciones –sin soberanía, o lo que era lo mismo para los ámbitos socialistas españoles, naciones culturales o nacionalidades–:

Curiosamente esta redacción, a diferencia de otros artículos de nuestra propuesta, no tuvieron eco entre los restantes ponentes pese a su sencillez. Era lógico en la posición de Roca, pero lo era menos, en la de los ponentes de UCD<sup>166</sup>. Por otra parte, cuando se sugirió una fórmula que fue la que, al final resultó preferida, que incluía el término nacionalidades, no tuve ninguna dificultad en aceptarla. Los socialistas catalanes la preferían también y además respondía a la realidad histórica de que era una Nación de naciones –al fin y al cabo nacionalidad no es sino sinónimo de nación–y de regiones diferenciada<sup>167</sup>.

---

<sup>165</sup> Véase para un análisis detallado de los debates constitucionales sobre la inclusión del concepto nacionalidad, Carme MOLINERO y Pere Ysàs: *La cuestión catalana...*, pp. 217-250. Para un recorrido sobre el significado y la aceptación de aquel concepto en la izquierda hasta la Transición véase Santos JULIÁ: “Nación, nacionalidades y regiones en la transición política a la democracia”, en JAVIER MORENO LUZÓN (ed.): *Izquierdas y nacionalismos en la España contemporánea*, Madrid, Pablo Iglesias, 2011, pp. 257-283. Sobre la polémica que surgió en aquellos momentos entre la intelectualidad española y la catalana por aquel término puede verse el artículo de Amando de Miguel que clamaba ante la incomprensión de la primera –especialmente de Julián Marías– ante el hecho nacional catalán, Amando DE MIGUEL: “Los intelectuales castellanos y la cuestión catalana”, *Papers: Revista de Sociología*, 12 (1979), pp. 115-138.

<sup>166</sup> Aunque en un texto publicado en 1978 el mismo Peces-Barba denunciara amargamente que se había tratado de deformar la actitud del PSOE en la Constitución haciendo «política catalana», cuando se afirmó «que en nuestro texto sobre las autonomías no se mencionaba la palabra nacionalidades», en Gregorio PECES-BARBA: “Los socialistas y la Constitución”, en Gregorio PECES-BARBA, Jordi SOLÉ TURA (et. al.): *La izquierda y la Constitución*, Barcelona, Taula de Canvi, 1978, p. 7.

<sup>167</sup> Gregorio PECES-BARBA: *La elaboración de...*, p. 44. Reafirmaba aquella idea años más tarde, cuando se refería a España como nación de naciones, entendiendo nacionalidad como sinónimo de nación siempre que se refieran a naciones culturales, pero «dejando claro que la única nación soberana es la nación española», Gregorio PECES-BARBA: “La Constitución española de 1978: balance de sus 25 años”, *Revista electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de la Rioja-REDUR*, 2 (2004), p. 10. En cambio, en un libro destinado a divulgar el ideario socialista y a presentar al Partido como una alternativa de Gobierno, publicado en medio de los debates constitucionales, Felipe González no demostraba tener tan clara esta idea ni creer en la necesidad de realizar una profunda reflexión sobre la misma, aunque veía adecuado utilizar ambos términos como sinónimos, ya que así se había generalizado entre la sociedad, pese a que ello no invalidara la existencia, decía, de la nación española, cuyo reconocimiento parecía interesarle especialmente: «No quiero entrar en la discusión, a mi juicio más operación de distracción que problema de fondo, de si pueden o no emplearse los términos de *nacionalidad* y *nación*. Es evidente que existe la nación española. Nadie con una mínima sensatez política lo pone en duda. También lo es que, para definir la aspiración autonómica y descentralizadora de los diferentes pueblos que componen la nación española, se ha hablado y se habla –de forma general y colectiva–unas veces de nacionalidad, otras de país, otras de región. Al margen de doctas discusiones sobre la materia, pienso que no existe incompatibilidad entre cualquiera de estas expresiones y el reconocimiento de que existe la nación española», en Felipe GONZÁLEZ: *España y su futuro*, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1978, p. 44.

Volviendo a la enmienda socialista sobre el artículo 2, en aquel momento intentaron justificar su actuación a partir criterios meramente técnicos, aunque su concepción sobre la nación española se reflejaba en todas aquellas propuestas. No se cuestionaba cuál era la nación soberana en España y su unidad aparecía como incontestable; ignoraban cualquier voluntad soberanista de las nacionalidades, para las que se concebía sólo el derecho a la autonomía y el reconocimiento como naciones culturales; y aunque únicamente decían preocuparse por dar una forma correcta al artículo desde el punto de vista del derecho constitucional, asumían la existencia previa a la Constitución de la nación española, a pesar de que reconocían el resto de nacionalidades culturales que convivían dentro del Estado:

la nación española hemos dicho que existía este siglo, el siglo pasado, hace tres siglos, hace cuatro, hace cinco (...). Por eso, la supresión del «se» y la afirmación del «fundamenta» no tiene nada que ver con intentos de crear ahora la Nación, sino simplemente intentar dar una formulación jurídica correcta, porque desde el punto de vista jurídico, señores y señoras Diputados, desde el punto de vista normativo, no hay nada antes ni por encima de la Constitución (...) Y colocamos –y ésta sería la segunda perspectiva de nuestra enmienda– también la fundamentación y la garantía del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Ya hemos dicho en alguna ocasión, que para nosotros nacionalidad es sinónimo de nación<sup>168</sup>.

La diferencia fundamental entre nación y nacionalidad desde esta perspectiva sería por tanto la capacidad soberana de unas y otras. Como indicara Ferran Archilés en otra investigación, «la clave no era tanto si ambas nociones eran idénticas, como resultó bastante aceptado, sino si la de nacionalidad daba lugar a derechos (o permitía aspiraciones) de soberanía similares, como resultó ampliamente rechazado tanto por la izquierda como por la derecha»<sup>169</sup>. Otro autor que ha reflexionado sobre este asunto ha

---

<sup>168</sup> *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de asuntos y libertades públicas*, nº 64, sesión nº5, 12 de mayo de 1978, p. 2305. Por otra parte, la afirmación del representante socialista Enrique Tierno Galván, ante el Congreso en 1978, en la que esgrimía que la inclusión del término nacionalidad en la Constitución se trataba de una contrapartida a los nacionalismos alternativos para que abandonaran cualquier veleidad separatista, corrobora la idea de que la defensa del término nacionalidad por los socialistas en ningún caso pretendía erosionar la soberanía y la unidad de España, y que para muchos, incluso, se trataba de una concesión necesaria para asegurarla. Era, según Tierno: «un compromiso para evitar que las regiones o nacionalidades rompieran definitivamente con el depósito permanente y unitario de España», citado en Juan José SOLOZÁBAL: “Nación, nacionalidades y autonomías...”, p. 272.

<sup>169</sup> Ferran ARCHILÉS: “El «olvido» de España...”, p. 12. En trabajos recientes, Juan José Solozábal ha señalado que aunque para muchos la nacionalidad fuera interpretada como una nación sin soberanía, quizá el constituyente «tendía a considerar a la nacionalidad, más que como sinónimo de nación, como región cualificada», es decir, como una «región con acusada conciencia de su especificidad», Juan José



sido Xacobe Bastida, que en la línea que venimos mencionando, se refiere como «armonicistas» a aquellos que asumen la nación española como única e indivisible al mismo tiempo que reconocen la existencia de naciones meramente culturales, es decir, de nacionalidades. Esta opción, según propone este autor, se haría posible gracias a una distinción errónea entre naciones políticas a las que corresponde la soberanía (Naciones-Estado) y naciones culturales sin vocación política<sup>170</sup>.

Retomando el curso de la enmienda presentada por el PSOE, ésta no prosperaría y apoyarían entonces la versión aprobada aduciendo que «nos complace especialmente el término “garantiza”, en el que tanto hemos insistido en nuestra perspectiva puramente jurídica (...) entre males posibles o bienes posibles hay que elegir uno»<sup>171</sup>.

---

SOLOZÁBAL: “Las naciones de España”, en Antonio MORALES, Juan Pablo FUSI y Andrés DE BLAS (dirs.): *Historia de la nación y del nacionalismo*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013, p. 926.

<sup>170</sup> En el mismo sentido, ya en el año 1981, Juan Ferrando Badía, a partir de este planteamiento creía que las nacionalidades habían sido vaciadas de contenido e igualadas en la práctica a las regiones, Juan FERRANDO: “Las Comunidades autónomas y las preautonómicas en España”, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 40 (1981), pp. 74-96. Por otra parte, partiendo de esta lógica, Xacobe Bastida entiende que el artículo 2, tal y como fue aprobado, convierte a la española en una Constitución nacionalista de signo españolista. Este autor trata de demostrar que la división que separa el nacionalismo considerado como cívico, del étnico-cultural, es ficticia. Así, intenta desmontar el mito del «patriotismo constitucional» que el nacionalismo español habría construido en torno a una identidad española basada en una supuesta lealtad cívico-política, que remitía no a la nación cultural sino a un sistema político determinado, la democracia, a partir por tanto del garante de la misma, la Constitución de 1978. Esto se había hecho apropiándose y deformando el concepto Jürgen Habermas, acuñado a finales del s.XX, pero el análisis de Bastida sobre el Título preliminar pondría de relieve cómo en España la nación precede a este orden, otorgándole una condición prepolítica, al establecer en su artículo 2 que es precisamente la nación la que fundamenta la Constitución y no la Constitución a la nación española. Véase Xacobe BASTIDA: “El nacionalismo constitucional español”, en Carlos FORCADELL, Pilar SALOMÓN e Ismael SAZ (eds.): *Discursos de España en el s. XX*, València, PUV, 2009, pp. 255-281; Xacobe BASTIDA: *La nación española y el nacionalismo constitucional*, Barcelona, Ariel, 1998; Jürgen HABERMAS: *Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría de discurso*, Madrid, Trotta, 1998. Mucho antes que Bastida, Juan José Solozábal ya había destacado la fundamentación nacionalista de la Constitución, basada en un concepto de la misma fundamentalmente voluntarista pero también a partir de criterios históricos, Juan José SOLOZÁBAL: “Nación, nacionalidades y autonomías...”, pp. 257-281. Véase también, Juan José SOLOZÁBAL: “Las naciones de España...”, p. 924. Sobre el nacionalismo de la Constitución española véase también Bartolomé CLAVERO: “Presencia política de la historia: Nacionalidades y Autonomías en la Constitución”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 36 (1980), pp. 37-52. Juan Cotarelo, sin referirse al nacionalismo de la Constitución, utiliza argumentos similares a los anteriores cuando juzga como desafortunado el redactado del artículo 2 cuando fundamenta la Constitución en la unidad nacional, y no a la inversa, considerando que de esta manera se sitúa la «unidad nacional» fuera de la Constitución, desconstitucionalizando la misma, Juan COTARELO: “Valores y principios de la Constitución de 1978”, en Ramón COTARELO (coord.): *Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986)*, Madrid, CIS, 1992, pp. 195-196.

<sup>171</sup> *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de asuntos y libertades públicas*, nº 64, sesión nº4, 12 de mayo de 1978, p. 2315. Es importante también entender que las cesiones fueron concebidas como necesarias para alcanzar el consenso, imponiéndose la máxima de que: «no haya nada que pueda ser absolutamente inaceptable para cualquiera de los Grupos Parlamentarios aquí existentes, porque entendemos que con esta constitución deben poder gobernar todos», como afirmó Peces-Barba,

Lo que parece claro es que en 1978, la izquierda mayoritaria no estaba por el reconocimiento constitucional del derecho de autodeterminación, pero esta idea se reforzó explícitamente a partir de la enmienda sobre el derecho de autodeterminación, propuesta por el diputado de Euskadiko Ezquerria, Francisco Letamendía Belzunce, ante el debate sobre el Título VIII. Letamendía, apelaba a la responsabilidad de grupos como el PCE o el PSOE, que habían proclamado en repetidas ocasiones el derecho de autodeterminación, pero tanto Gregorio Peces-Barba como Jordi Solé Tura votaron en contra. En su explicación al voto, Peces-Barba aludía a un derecho de autodeterminación que debía entenderse siempre dentro de los límites del Estado federal, ya que de otra manera, se estarían refiriendo a la autodeterminación planteada en el Derecho internacional, algo que no podían aplicar al caso vasco. Por tanto, votar a favor o abstenerse supondría «aceptar que el pueblo vasco es un pueblo colonizado como algunos de los pueblos que se encuentran en otros continentes; y nosotros no podemos hacer esa ofensa al pueblo vasco»<sup>172</sup>. Diferente era la explicación de Solé Tura, quien afirmaba: «Esa enmienda tiene la connotación de obligar a los que estamos aquí digamos si estamos o no, en abstracto, por el derecho de autodeterminación» y aunque sí lo estaban, se negaban a apoyar la inclusión de un derecho que se veía en términos únicamente abstractos, en una Constitución que debía ser real, adecuada a la situación concreta española, y no «testimonial» o «ideologista»<sup>173</sup>. Ambas explicaciones tenían en común el hecho de estar a favor del derecho de autodeterminación, en abstracto, y negarse a él ante la situación específica española. Podría parecer que se trataba de una renuncia, o que en realidad esta demanda nunca había sido sincera para estos grupos, pero en realidad no sería así. Jordi Solé Tura nos daba la clave del problema cuando afirmaba a posteriori que este derecho:

no puede verse nunca al margen del contexto político en que se proclama y se ejerce (...) más allá de su sentido general como principio democrático, su contenido concreto y su ejercicio dependen del contexto político, de las fuerzas en presencia, de los valores en juego y de las voluntades sumadas en la acción<sup>174</sup>.

---

principal negociador del PSOE, *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de asuntos y libertades públicas*, nº 59, sesión nº1, 5 de mayo de 1978, p. 2034.

<sup>172</sup> *Diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Asuntos Constitucionales y libertades públicas*, el 16 de junio de 1978, en Fernando SAINZ: *Constitución española. Trabajos parlamentarios. V. II*, Cortes Generales, Madrid, 1980, p. 1696.

<sup>173</sup> *Ibid.*, pp. 1694-1695.

<sup>174</sup> Jordi SOLÉ TURA: *Nacionalidades y nacionalismos en España. Autonomías, federalismo, autodeterminación*, Madrid, Alianza Editorial, 1985, p.144. En este sentido, Santos Juliá ha explicado

El contexto en España, había estado marcado por una dictadura, y la alianza de las fuerzas antifranquistas provocaron que esta demanda se convirtiera en un lugar común, en una demanda democrática que suponía el derecho no solo de los ciudadanos, sino también de los pueblos, de elegir libremente sus destinos. Pero los matices entre las fuerzas políticas que estaban a favor de esta cuestión eran importantes, aunque hubieran pasado a un segundo plano, por lo que, según este autor existían varios significados distintos, entre ellos, el de comunistas y socialistas, para los que:

se trata de un principio democrático válido para impedir los separatismos derrotando democráticamente (...) a los partidarios del independentismo. Pero también se entiende por algunos como una fórmula de afirmar la profunda vinculación del partido con la nacionalidad respectiva, sin aclarar debidamente la actitud que debería tomarse en caso de que la consulta electoral diese un resultado favorable al independentismo<sup>175</sup>.

Esta misma postura la hemos visto antes. Las supuestas *renuncias* de la Constitución no son tales, pues nunca pretendieron ir más allá del Estado federal, pero tampoco puede calificarse como *oportunist*a la defensa de este derecho, porque aunque algo ambigua, tenía una tradición a la que aferrarse, una tradición heredada del marxismo y del contexto propio de la dictadura. Dolores Ibarruri, en 1970, aunque mencionaba la defensa de su ejercicio efectivo de la siguiente manera: «¿qué entienden los comunistas por derecho de libre determinación? (...) significa el derecho de Euzkadi, Cataluña y Galicia a formar parte del Estado español o separarse de éste y constituir Estados nacionales independientes», añadía a continuación la limitación que en realidad contenía, y la instrumentalización que de él se hacía, como hicieran también los líderes históricos del marxismo, y que sería común al PSOE:

Defender el derecho de las nacionalidades a la libre autodeterminación no supone en absoluto la obligación de separarse. Los comunistas hemos considerado siempre esta cuestión, como subordinada a la utilidad de ella y en relación con los intereses de las fuerzas fundamentales: La clase obrera, los campesinos y demás fuerzas populares<sup>176</sup>.

La utilidad no era otra que la de permitir la unidad, en libertad, de los pueblos de España. Porque no se concebía que los intereses de las clases populares les condujeran a

---

cómo no se otorgaba un significado unívoco de autodeterminación en los organismos unitarios que luchaban por la democracia: «¿Era derecho de autodeterminación equivalente a derecho de separación o de independencia? No necesariamente», en Santos Juliá: “Nación, nacionalidades...”, pp. 274-275.

<sup>175</sup> *Ibid.*, p.150.

<sup>176</sup> Dolores IBARRURI: *España, Estado Multinacional...*, pp. 18-19.

otro fin que al de la unión consentida en un Estado federal y democrático. Esa era la realidad que encerraba este planteamiento, el PCE se arrogaba la virtud de haber sido el primero en defender los derechos de las nacionalidades, pero la condición era que la clase más «consecuentemente revolucionaria» no se decidiera por el separatismo, anteponiendo sus intereses nacionales a sus intereses de clase, pues eran estos últimos los que debían prevalecer ante cualquier situación<sup>177</sup>. Y este iba a ser el gran triunfo de los comunistas, aquellos que habían sido calificados de la «antiespaña» por las fuerzas que «servían a los ejércitos fascistas extranjeros» iban a demostrar con el tiempo y con su actitud ante el problema identitario, «dónde estaba la antiespaña y quiénes eran los verdaderos defensores de España»<sup>178</sup>.

De todos modos, debemos resaltar también el factor táctico que había detrás de estas enunciaciones, pues como el propio Solé Tura opinara, la ambigüedad estaba muy presente en su defensa; y ni siquiera el comprender qué elementos de la tradición ideológica del PSOE y del PCE estaban en la base de la proclamación de este derecho, les podría conceder una ingenuidad tal que supusiera ignorar las consecuencias de su concesión, unas consecuencias que en realidad nunca habrían estado dispuestos a

---

<sup>177</sup> Esto era algo que Carrillo ya había expresado en 1962 en la revista del PSUC *Nous Horitzons*, demostrando que defendían (y defenderían) un derecho de autodeterminación que no implicara el separatismo: «la solución del problema nacional está en el derecho de autodeterminación de cada pueblo. Los comunistas somos defensores consecuentes de este principio que implica la admisión del derecho a la separación. Eso no quiere decir que la posición del Partido deba coincidir forzosamente con la que resulte del ejercicio de este derecho. Pero en todo caso la respetaría. Si hubiera coincidencia, la defendería, la haría suya, y si hubiera divergencia trataría pacientemente de demostrar a las masas que su posición era errónea». Más adelante, reafirmaría que para el PCE el derecho de autodeterminación no se enunciaba en ningún caso con una voluntad separatista: «debemos combatir la concepción de que el reconocimiento de la personalidad nacional de estos pueblos y su derecho a la autodeterminación, es una posición *destructiva* respecto a la unidad del Estado, una actitud *separatista*», Ferran ARCHILÉS: “El «olvido» de España...”, pp.108-109. En 1975, agitando los peligros de las potencias imperialistas y capitalistas, llegaban incluso a hacer depender la integridad de España, del derecho de autodeterminación; al mismo tiempo que manifestaban que el ejercicio de este sólo podía ser garantizado por la unidad de España. En este caso, claro está, el derecho a decidir tampoco se entendía desde el separatismo sino desde la unidad elegida libremente. El discurso de Carrillo, pronunciado en la II Conferencia del PCE, contenía un apartado titulado como «El mantenimiento de la comunidad española. Garantía de la autodeterminación de sus pueblos», y decía así: «las potencias imperialistas, y particularmente EEUU, va a tratar, están tratando de hacer girar en torno a sí como satélites a los otros Estados capitalistas (...) en un mundo así, el mantenimiento de la comunidad española como un Estado federativo, autonómico, no centralista, es también garantía de un auténtico ejercicio del derecho de autodeterminación de cada una de las nacionalidades y de los pueblos que componen esa comunidad. La unidad democrática libre de esos pueblos es lo que puede permitirnos, en definitiva, impedir que, a trozos, los distintos pueblos que componen nuestro país vayan pasando bajo la hegemonía de una o de otra potencia», Santiago CARRILLO: “Resumen de la discusión”, en PCE: *Manifiesto-Programa del Partido Comunista de España. II Conferencia Nacional del Partido Comunista de España*, París, Ebro, 1975, p. 70.

<sup>178</sup> Dolores IBARRURI: *España, Estado Multinacional...*, p. 19.

aceptar<sup>179</sup>. Fuera como fuese, la versión oficial entendió que la votación positiva del referéndum constitucional supuso la aplicación del derecho de autodeterminación, que se había saldado con la voluntad popular de aplicar únicamente el autogobierno en el marco del Estado autonómico, una idea que en todo caso ya se había planteado antes, como demuestra la publicación de Alfonso Guerra y Felipe González en 1977, que afirmaban: «El derecho a la autodeterminación de los pueblos debe ser concretado desde el punto de vista socialista, a través de la creación de poderes autonómicos en las nacionalidades y regionalidades que componen el Estado»<sup>180</sup>.

Por otra parte, hay que incidir en el progresivo desplazamiento que se produjo en el seno del PSOE de la defensa del federalismo hacia el sistema de las autonomías. Como ha escrito Ferran Archilés:

Tras las elecciones de junio de 1977 las propuestas federalistas se postergaron pragmáticamente. Con la redacción de la Constitución solo se cumplieron en parte (en su contenido de descentralización administrativa posible) pero en ningún caso de manera explícita como forma de organización de la soberanía. Las propuestas de autodeterminación fueron decididamente abandonadas (aunque por un tiempo se siguió manteniendo que el ejercicio del derecho a la autonomía era su plasmación)<sup>181</sup>.

En estas circunstancias, tampoco debe extrañar que los socialistas no disputaran con más fuerza la inclusión del reconocimiento del federalismo en la Constitución de 1978. De hecho, aunque la referencia a este ideal –como lo describió Gregorio Peces-Barba– estuvo presente en el debate sobre el Anteproyecto constitucional, no se planteó

---

<sup>179</sup> El propio Jordi Solé Tura afirmaría a finales de la década de los ochenta, y por tanto en un contexto diferente al de los planteamientos sobre la autodeterminación de la Transición, que eran «profundamente ambiguos los nacionalismos que no preconizan explícitamente la independencia y los sectores de izquierdas que creen compatible la defensa del Estado de las autonomías con la reivindicación del derecho de autodeterminación (...). En un país como el nuestro, a finales del siglo XX, creo que no podemos continuar hablando del derecho de autodeterminación como un simple principio ideológico, es decir, sin explicar sus implicaciones políticas y, por lo tanto, sin ponerlo en relación con el modelo de Estado que hemos heredado y con el que es definido en la Constitución (...). Y en este contexto general no se puede esconder que el derecho de autodeterminación significa otro modelo de Estado, porque no puede verse desligado de su consecuencia lógica, el derecho a la independencia. (...) los partidos y grupos de izquierda no lo pueden plantear en abstracto ni pueden reducirlo a una simple proclamación ideológica», en Jordi SOLÉ TURA: “Una lectura autonomista y federal del modelo de Estado constitucional, en Lluís ARMET (et alii): *Federalismo y Estado de las autonomías*, Barcelona, Planeta, 1988, p. 128-130.

<sup>180</sup> Felipe GONZÁLEZ y Alfonso GUERRA: *Partido Socialista Obrero...*, p. 37.

<sup>181</sup> Ferran ARCHILÉS: “75, modelo para...”.

más que de forma retórica<sup>182</sup>. Negándose a votar a favor de una enmienda del diputado de Euskadiko Ezquerria, Letamendía Belzunce, que suponía la supresión de la prohibición de la federación de comunidades autónomas, Peces-Barba decía:

nosotros también estamos por el Estado federal. Lo que ocurre es que entendemos que esta Constitución no es una Constitución federal. (...) nosotros tenemos que estar en contra; primero porque no tiene nada que ver con el Estado federal; segundo, porque supone un salto de soberanías y hacen acuerdos bilaterales desconociendo la estructura de la organización del Estado y produciendo una discusión que consideramos superada. Es, en definitiva, la vieja idea del pacto social en uno de sus aspectos, el pacto entre dos comunidades con soberanía propia, desconociendo la soberanía general del Estado, que está muy claramente reconocida en el título preliminar de nuestra constitución<sup>183</sup>.

El modelo de Estado del PSOE se basó finalmente en la unidad de España como comunidad superior o nación de naciones; en la autonomía; y en la solidaridad, tal y como señalaba con posterioridad su ponente constitucional<sup>184</sup>. Acabaron negándose a incluir de forma explícita el derecho de autodeterminación en la Constitución y prefirieron un Estado que se asegurara para sí la soberanía, salvaguardando una unidad que siempre habían antepuesto a los derechos de las nacionalidades. Al fin y al cabo, querían evitar caer en la demagogia, una demagogia que les impediría hacer realidad el proyecto que, en esencia, siempre habían defendido<sup>185</sup>. En definitiva, la defensa de la autodeterminación cobraba sentido para ellos dentro de una lógica de estrategia de clase, y aunque se defendiera como un derecho justo, nunca debería ejercerse en contra de los intereses de la clase trabajadora, que debía permanecer unida para luchar por su libertad e igualdad, para lo que la solidaridad interregional era indispensable y por lo que el separatismo no era viable.

---

<sup>182</sup> José Antonio Piqueras ha puesto de relieve que la opción federal estuvo ausente de los trabajos constituyentes de 1977 a 1978, José Antonio PIQUERAS: *El federalismo...*, p. 396.

<sup>183</sup> Diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Asuntos Constitucionales y libertades públicas. Se trataba de la discusión sobre el título VIII, el 14 de junio de 1978, en Fernando SAINZ: *Constitución española...*, pp. 1536-1537.

<sup>184</sup> Gregorio PECES-BARBA: *La Constitución española de 1978. Un estudio de derecho y política*, Valencia, Fernando Torres, 1981, p. 33.

<sup>185</sup> Coherente con su modelo de Estado, Felipe González defendía la opción del partido y su actuación en 1978 de la siguiente manera: «Los socialistas, que tenemos acreditadas pruebas históricas de respeto y servicio a la diversidad de los pueblos de España, ni nos sentimos obligados a hacer alarde de esa convicción, ni la postergamos a otras necesidades más acuciantes, sino que, para realizarla más plenamente, más eficazmente y más duraderamente, pretendemos cargarla de racionalidades, lo que nos salvará de la demagogia», en Felipe GONZÁLEZ y Alfonso GUERRA: *Socialismo es Libertad...*, p.166.

Coherente con esta trayectoria, Gregorio Peces-Barba escribía que se debía otorgar un peso principal a los valores que coincidían con el principio de subsidiariedad en la elaboración de la Constitución. Resaltaba lo que calificaba como la «perspectiva racional y jurídica» que entendía la autonomía como «profundización de la democracia, limitación del poder y participación de los ciudadanos en la formación del mismo»<sup>186</sup>; aunque no dejaba de señalar la complementariedad del fundamento, podríamos decir identitario, que justificaba el Estado autonómico en el derecho de las nacionalidades y regiones a su autogobierno. La primera visión tenía además una virtud añadida, y era la de encajar mejor en los presupuestos de igualdad y solidaridad propios del socialismo, ya que era válido para todos los pueblos de España, incluidos aquellos que quizá no pudieran justificar una conciencia identitaria diferenciada. Casaba mejor por tanto, con su estrategia de generalizar la autonomía como principio y no como excepción:

Se podría incluso decir que el fundamento que califica específicamente al Estado de las autonomías constitucionalmente garantizadas es el primero más que el segundo, porque es el único que permite la explicación racional y total de reorganización del Estado en base a las Comunidades Autónomas y como concepto integral o total del Estado y no sólo como excepciones autonómicas<sup>187</sup>.

No hubo excesivas renunciadas en un pacto constitucional que los socialistas mismos calificaron de satisfactorio, más incluso que para otros grupos<sup>188</sup>. González Casanova sentenció ya en 1980 que «los principios de la lógica constitucional, que el socialismo consideraba inviolables, (...), quedaron a salvo», el primero de ellos asegurar la igualdad y la posibilidad de la homogeneidad final del Estado:

debía consagrar la *posibilidad* de que, por voluntad democrática de los ciudadanos de cada región o nacionalidad, se ejerciera la iniciativa a constituirse en Comunidad Autónoma y, asimismo, que no hubiera ninguna disposición constitucional que impidiese alcanzar en el futuro a cualquiera de ellas el grado máximo de competencias garantizado por la Constitución. El punto de partida y el de llegada debían ser, por tanto, los mismos para todos los españoles<sup>189</sup>.

---

<sup>186</sup> Gregorio PECES-BARBA: *La Constitución española...*, p. 173.

<sup>187</sup> *Ibid.*, p.174.

<sup>188</sup> Gregorio PECES-BARBA: *La elaboración de...*, p. 145.

<sup>189</sup> José Antonio GONZÁLEZ CASANOVA: "El Estado de...", pp. 234-235.

Nada parece desmentir por tanto la afirmación de Soledad Gallego y Bonifacio de la Cuadra cuando concluían que «el tema de las autonomías quedó regulado en la Constitución, si no a plena satisfacción de los partidos nacionalistas, sí cubriendo los mínimos exigidos por ellos y los máximos tolerados por los partidos de implantación estatal –UCD, PSOE, PCE y, en menor medida, AP»<sup>190</sup>. Los socialistas pactaron por tanto un modelo de consenso que respondía a un criterio que sería defendido de la siguiente manera:

nuestra idea de las autonomías era más racional y menos emotiva. No se trataba sólo de resolver el tema vasco o catalán, se trataba de una reorganización más justificada, más racional y más objetiva, es decir, más propia del Derecho que regula la vida de una sociedad (...): limitar el poder y profundizar la democracia<sup>191</sup>.

Desde entonces buscaron racionalizar justificando tales políticas en la funcionalidad, la democratización, la igualdad o la solidaridad. En aspectos que definían como «objetivos», distintos a los «sentimentales» que caracterizaban a los nacionalismos no estatales, en una clara negación de la propia identidad y de la coexistencia junto a los anteriores de valores que reforzaban la construcción nacional española desde un discurso propio de su cultura política. En definitiva, el modelo que pactaron en la Constitución no estaba tan alejado de los principios que habían definido su postura sobre España en el PSOE desde el inicio de la Transición. Un modelo igualitario, solidario, que reconociera los derechos de las nacionalidades y regiones pero que en la práctica no cuestionara la unidad del Estado. Y es que, aunque en muchas ocasiones evitaran hablar de España como nación, los socialistas no podían esconder cuál era su referente nacional, el horizonte que nunca perdían de vista. Como señala Ferran Archilés: «No hubo ni pudo haberlo “olvido” alguno de España en el discurso del comunismo español»<sup>192</sup>; ni tampoco lo habría en el socialismo, ya que no pretendían otra cosa que no fuera reforzar su unidad, pero bajo unos principios opuestos a los del nacionalismo españolista impuesto durante el Franquismo. Herederos de una identidad nacional plural, y condicionados por una multitud de factores, estratégicos e ideológicos, no imaginaron otra nación más que la española, en la que la democracia sustituía al socialismo; la autodeterminación no era necesaria más que como principio

---

<sup>190</sup> Soledad GALLEGU-DÍAZ y Bonifacio DE LA CUADRA: *Crónica secreta de...*, p. 109.

<sup>191</sup> Gregorio PECES-BARBA: *La elaboración de...*, pp. 145-146.

<sup>192</sup> Ferran ARCHILÉS: «El «olvido» de España...», p. 118.



en abstracto; y en la que el federalismo bien podía remplazarse por el sistema del Estado de las Autonomías, siempre que garantizara la descentralización.



## **II. LA CAMPAÑA «MARIDO» Y EL MODELO DE ESTADO DE UN PARTIDO «SERIO»**

Tras la Constitución quedaba muchísimo por hacer, el cambio no se había agotado, y desde luego los límites de la democracia no estaban establecidos. Pero aquel marco legal suponía sin lugar a dudas un punto de inflexión. El modelo aún era maleable, muchos aspectos cruciales para la vida política española aún estaban en juego y por decidir, pero ahora existía un punto de partida. Era de partida y no de llegada, lo que significaba que los interrogantes iban a ser muchos y las pugnas por imponer los postulados ideológicos de cada cultura política y tendencia serían a veces cruentas, pero la referencia ya existía. A veces, la Constitución supondría un elemento que segaría la posibilidad de aplicar alternativas profundamente arraigadas ideológicamente en los partidos; otras, tan sólo matizaría posiciones; y en algunos casos sería la excusa perfecta para desarrollar políticas que se irían revelando como las más coherentes para las trayectorias ideológicas e históricas de los partidos y sus militantes, y para las tendencias que la nueva coyuntura iría imponiendo, o más bien afianzando.

Además, en este año tuvieron lugar las segundas elecciones generales vividas tras la muerte de Franco, en marzo de 1979; y las primeras elecciones municipales, lo que tenía una trascendencia especial, ya que por fin desaparecería esa contrariedad que suponía el mantenimiento de unas instituciones locales que en muchos casos se resistían a los cambios democráticos. Consecuencia de esto fueron, por ejemplo, los problemas que se sucedieron en los gobiernos preautonómicos con aquel anacronismo que dificultaba la gestión de una situación ya de por sí complicada. La consecución por fin de este relevo democrático dio lugar a que los entes preautonómicos de los territorios con una conciencia identitaria diferenciada más marcada avanzaran hacia su autogobierno, en unos procesos que se fueron demostrando cada vez más complejos y reveladores de las posiciones políticas de cada partido respecto a la autonomía.

Al poco de iniciarse esta etapa se concluyeron las negociaciones que culminaron con la aprobación de los Estatutos de Autonomía de Cataluña y del País Vasco, quedando abierto el proceso de autogobierno para el resto de España, con un legado nada sencillo que se iría complicando conforme avanzaba la coyuntura. Pero al mismo tiempo, las dificultades fueron forzando una clarificación en las posturas de los partidos, que debieron ir posicionándose ante los problemas, dejando ver, cada vez de forma más

nítida las estrategias de cada uno de ellos. Unas estrategias que como se intentará poner en valor, se desarrollaron a partir de unos principios a los que intentaron mantenerse fieles, relegando los que podían resultar más prescindibles a su tradición<sup>193</sup>. Así pues, los principios no variaron excesivamente entre el inicio y el final del período, lo que no implicaba en absoluto la existencia de una estrategia bien definida desde el comienzo. De hecho, en gran medida, la política autonómica que definió al Partido estuvo dominada sobre todo por la improvisación, marcada tanto por la coyuntura y la actuación de los oponentes políticos, como por la jerarquización de valores que internamente se iría produciendo.

En las siguientes páginas analizaré su política autonómica para el período que abarca desde la Constitución hasta la concreción e imposición de un modelo de Estado que la misma había dejado envuelto en medio de muchos interrogantes. Es bien sabido que el modelo autonómico estaba abierto, el cómo lo cerraron y por qué, y qué papel concreto tuvo el Partido Socialista Obrero Español en este sentido, será objeto de estudio de este trabajo. Este «viejo y nuevo partido», como empezaron a denominarse, tenía que definir ahora más que nunca cuál era realmente el Estado que quería construir. Si como ya se ha comentado, los postulados iniciales del PSOE no diferían tanto de lo que se legisló en el texto fundacional, ahora se podrá ver hasta dónde querían llegar en su defensa de las libertades de otras sensibilidades identitarias y qué modelo de nación y de Estado querían para España. Este «viejo y nuevo partido», no tenía más remedio que enfrentarse a su tradición histórica, a sus reivindicaciones por los derechos nacionales y a su voluntad de aparecer como un partido de presente y de futuro y plantear qué permanecía y qué no.

## **1. Una campaña seria**

No sería ilógico relacionar las tendencias que se irían afianzando en el PSOE durante esta etapa con elementos no tan endógenos al Partido y a las disputas ideológicas de la propia militancia. Es decir, además de las cuestiones internas, no es un secreto que muchos aspectos externos influyeron y condicionaron las respuestas que desde el Partido se iban formulando para resolver tanto problemas coyunturales como cuestiones de índole más trascendental, tales como la definición del modelo de Estado.

---

<sup>193</sup> Desde esta perspectiva me referiré fundamentalmente a las directrices que se establecieron desde las ejecutivas, aunque sin ignorar que los partidos no eran entes homogéneos, por lo que se generaron tensiones en su interior a este respecto.

El PSOE no había puesto en duda ni la unidad de España ni el hecho de que esta fuera un Estado-nación, pero cómo afrontar la transformación de un Estado centralista a otro plural abría la puerta a una multitud de posibilidades para las que el Partido no había fijado claramente las posiciones desde el inicio. A causa de esto se irían debatiendo entre el mantenimiento de ciertos principios como inamovibles y la praxis política, que los llevaba a improvisar, flexibilizando los medios para conseguir determinados objetivos, adecuando ciertos postulados –que no el fondo de sus convicciones– para acomodarse mejor a sus intereses estratégicos según las coyunturas, en un contexto especialmente convulso como fue la Transición.

Este panorama tendría, como no, uno de sus mejores exponentes en los procesos electorales. En este caso nos referimos a las elecciones generales y las municipales que se vivieron en 1979. Si ya desde junio de 1977, la estrategia del PSOE había animado los procesos autonómicos en la mayor parte de los territorios, en 1979 debía alternar este énfasis con su intención de contener una carrera descontrolada hacia la autonomía, cosa que les hacía caer en muchas ocasiones en contradicciones que debían ir salvando sobre la marcha.

Por otra parte, estos comicios se planteaban como el momento de invertir al PSOE como la «alternativa de poder», una alternativa viable en aquel momento. Para ello, desde la cúpula dirigente estaban empeñados en convertir al Partido en una opción responsable, que no atemorizara a las clases medias, para lo que debían suavizar los rasgos menos moderados y capitalizar el voto de las clases medias. El propio Alfonso Guerra se referiría a esta estrategia en sus memorias aludiendo a su intención, como responsable de la campaña electoral, de presentar una nueva imagen del PSOE más seria, que se identificara más con un partido que estuviera a la altura que suponía el gobierno de un país:

Responsable de nuevo de la campaña electoral, concebí un proyecto que fuese útil, sobre todo, para convencer al electorado de que aquellos jóvenes *outsiders* del sistema del poder (...) estaban preparados para asumir la responsabilidad de gobierno. (...) se podía aprovechar una nueva presentación pública para fraguar en la conciencia colectiva que existía un partido, nuevo para muchos, pero viejo para los que vivieron la República, que estaba preparado para el relevo.

(...) Si en las elecciones de 1977 simbólicamente hicimos una campaña *amante*, entonces ofrecimos una campaña *marido*. (...) queríamos convencer a los electores de que los jóvenes demócratas podían garantizar estabilidad, orden y administración en la gobernación de un país<sup>194</sup>.

El «viejo y nuevo partido» era un lema recordado gracias a la conmemoración recurrente del centenario de su fundación, mostrando la seriedad y la trayectoria de una formación que no podía ser tachada de novel, aunque sin excederse, pues querían ser vistos como el Partido renovador que con responsabilidad podía generar nuevas expectativas<sup>195</sup>. Como Alberto Sabio Alcutén ha afirmado, se combinaba una imagen naif con la proyección de un partido serio vinculado a unas siglas históricas que compensara la campaña del miedo con la que UCD iba a intentar contraatacar la ofensiva de los socialistas para hacerse con el poder:

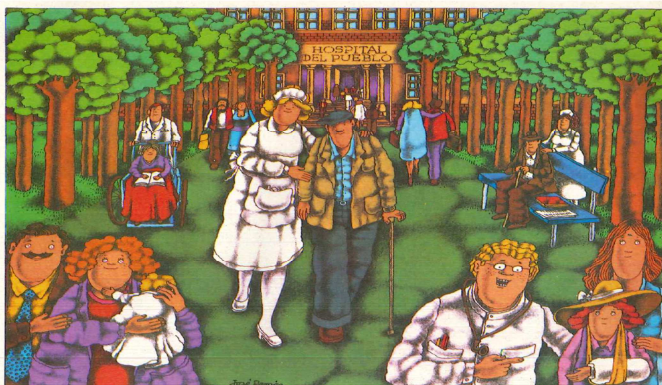
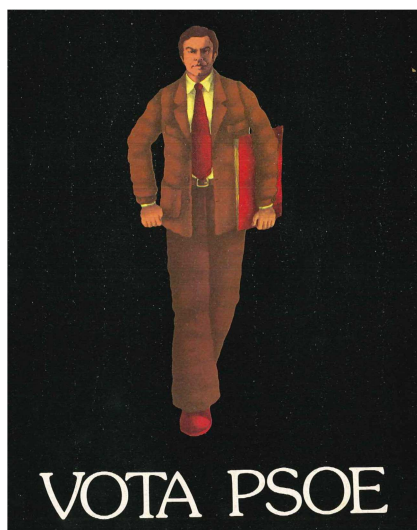
se aprovecharon las dos campañas electorales de 1979 para conmemorar el centenario del PSOE con el lema «100 años de honradez y firmeza» junto a una ilustración que enlazaba las figuras de Pablo Iglesias y Felipe González, sin que faltasen tampoco los coloristas, naif y casi ingenuos carteles de José Ramón Sánchez con arco iris incluido, escenas de cooperación ciudadana a la hora de conservar parques y jardines, y espacios verdes donde jugaban los niños y los adultos leían o descansaban. Otras veces, con la intención de transmitir una imagen de seriedad y de confianza, aparecía en los afiches un «Felipe González encorbatado, pulcro, atildado, de gesto serio y a la vez sereno, con la idea clave de la campaña: un Gobierno firme». Se buscaba compensar también el hecho de que la UCD identificase públicamente al PSOE con un «marcado frentepopulismo», hasta el punto de menudear en la campaña electoral varias alusiones de los *centristas* a la posibilidad de que se repitiese la «tragedia del 36» cuando, en realidad, el programa socialista de 1979 era mucho más conservador que el de dos años antes, como si hubiesen tomado conciencia de la política real y de los aterrizajes realistas que desarrollaban otros partidos socialistas europeos cuando accedían gobierno<sup>196</sup>.

---

<sup>194</sup> Alfonso GUERRA: *Cuando el tiempo...*, pp. 246-247.

<sup>195</sup> En las advertencias finales de su «Guía de campaña» afirmaban: «la historia del partido no debe ser el núcleo de nuestras intervenciones, en las que se tratará el tema de pasada, haciendo referencia al Centenario. Conviene que sea así para conseguir no dar imagen de que sólo tenemos historia que ofrecer», en PSOE: «Guía de campaña. Elecciones 1979», Arxiu Històric de la Universitat de València (AHUV), Fons Alfons Cucó, 014/002, p. 56.

<sup>196</sup> Alberto SABIO ALUTÉN: «Las culturas políticas socialista y comunista ante la ruptura pactada: acción colectiva, consenso y desencanto en la transición española, 1975-1979», en Manuel PÉREZ LEDESMA e Ismael Saz (coords.): *Del franquismo a la democracia. 1936-2013*, vol. IV, Madrid,



Imágenes 1 y 2; Ilustraciones del programa electoral (Fuente: PSOE: “Programa del PSOE. Versión ilustrada – Elecciones 1979”, Archivo personal de Víctor Fuentes Prosper)

Así pues, por un lado se iba a mantener un hilo conductor con el socialismo histórico, pero por otro, querían generar nuevas expectativas, algo que no se podía hacer sin englobar también a las clases medias con las que pretendían hacer crecer al PSOE. Esta estrategia tuvo su punto de inflexión en el XXVIII Congreso, como se verá, con el intento de relegar el término marxista de la definición del Partido, pero empezó un tiempo antes. De hecho, el Congreso tuvo en este debate su elemento más polémico, pero no suponía en el fondo más que la confirmación de una estrategia por la que los socialistas estaban transitando desde antes. La praxis política se estaba imponiendo en muchas cuestiones ideológicas, o más bien en la plasmación que estas debían tener a la hora de poner en marcha los mecanismos que las fueran a hacer realidad. Como explicaba Santos Juliá, las primeras manifestaciones en este sentido se dieron a mediados de 1978, cuando Felipe González, en una reunión con periodistas «y con objeto de que se enterara todo el país a la vez que su partido y compañeros de dirección», señaló que había sido un error definir como marxista al Partido, ya que la

---

Marcial Pons y Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2015, p. 337. El libro citado es Diego CARO CANCELA: *Cien años de socialismo en Andalucía (1885-1985)*, Cádiz, Quorum. El periodista Pedro J. Ramírez narraba con habilidad el contraste entre un Felipe González que intentaba dar una imagen de serenidad y seriedad frente a la efectividad del dramatismo de un Suárez que supo transmitir a los electores el miedo al socialismo en el debate previo a los comicios –que seguramente influyó de forma decisiva en los resultados–: «Felipe González intervino en primer lugar, proyectando una imagen relajada y serena. (...) Fue, en resumen, un mensaje apaciguado, moderado, lleno de equilibrio y sensatez. (...) Aunque lo negó de forma expresa, Suárez pedía, lisa y llanamente, el voto del miedo. Para bien o para mal, el mecanismo funcionó a las mil maravillas», Pedro J. RAMÍREZ: *Así se ganaron las elecciones. 1979*, Madrid, Prensa Española, 1979, PP. 256-257.

mayoría de los votantes del PSOE se declaraban como no marxistas, y porque en adelante iban a seguir una táctica elemental: «si por la izquierda no existían ya competidores, la única ampliación posible del atractivo electoral se situaba a la derecha de la posición ideológica que el partido había ocupado en el período de la refundación». Así, según afirmaba Juliá, no fue casualidad que «el anuncio del abandono del marxismo coincidiera con la exigencia de la convocatoria de nuevas elecciones generales»<sup>197</sup>. De esta forma, aunque el debate se retomó formalmente tras las elecciones –y en parte, a causa de los resultados que se habían obtenido– la estrategia de moderación ya se había iniciado de cara a estos comicios. Así lo explicaba también José Félix Tezanos, al afirmar:

la polémica que saltó en gran escala a la opinión pública en el 28 Congreso no hizo sino plantear, amplificadamente, la aceptación interna por parte de los socialistas de lo que ya la propaganda socialista había planteado en las elecciones de 1977 y 1979 y, sobre todo, en 1982: es decir, la concepción del PSOE como un partido con una definición ideológica amplia<sup>198</sup>.

Como han señalado diversos autores, tras la unificación del socialismo y su éxito electoral en 1977 respecto al PCE, ya no era necesaria la radicalización inicial de la que había hecho gala el PSOE en su estrategia por hegemonizar el espacio político de la izquierda<sup>199</sup>. Según Abdón Mateos, «el centenario Partido Socialista Obrero sufrió una especie de «enfermedad infantil» izquierdista hasta 1979», momento a partir del cual culminaría esa «transición dentro de la Transición»<sup>200</sup>. El PSOE hizo gala de una dualidad entre la teoría y la práctica socialista, el «programa máximo» y el «programa mínimo», principalmente durante ese período de mayor «radicalización», que comenzó a diluirse a partir de la convocatoria de estas elecciones y sobre todo a la luz de sus

---

<sup>197</sup> Santos JULIÁ: *Los socialistas en la política...*, pp. 517-520.

<sup>198</sup> José Félix TEZANOS: *Sociología del socialismo español*, Madrid, Tecnos, 1983, p. 63.

<sup>199</sup> Entre otros Santos Juliá afirmaba: «El cambio de posición real en el sistema de partidos determinó un cambio de metas inmediatas y de las estrategias necesarias para alcanzarlas. De los valores propios de una ideología de izquierda configurada en la oposición al franquismo se pasó velozmente a la afirmación de los valores del nuevo sistema democrático como fruto del consenso de todos los partidos; del rechazo de un sistema político se pasó a la necesidad de consolidar el recién inaugurado sistema político; de la estrategia de conquista de las parcelas de libertad se pasó a la estrategia de ocupación de espacios de poder», en Santos JULIÁ: *Los socialistas en la política...*, p. 516. Véase también Juan Antonio ANDRADE: *El PCE y el PSOE en...*; Alberto SABIO ALUTÉN: «Las culturas políticas...»; o Carles CASTRO: *Relato electoral de España (1977-2007). Las claves de la alternativa en el poder durante tres décadas de monarquía parlamentaria*, Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2008.

<sup>200</sup> Abdón MATEOS: «La Transición del PSOE durante los años setenta», en Rafael QUIROSA-CHEYROUZE (coord.): *Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, p. 288; Donald SHARE: «Two Transitions. Democratization and the Evolution of the Spanish Socialist Left», *West European Politics*, 8 (1985).



decepcionantes resultados electorales, pese a que no lo haría del todo<sup>201</sup>. Como Santos Juliá ha afirmado, ya desde mediados de 1978 la dirección del partido se había aprestado a adecuar la teoría a la práctica, según éste, «incluso al precio de renunciar a toda teoría»<sup>202</sup>. Los socialistas, que habían hecho gala de dos espíritus desde el inicio de la Transición, uno el que se veía en las resoluciones de los Congresos y otro, sobre todo, en los programas electorales, se apresuraban en 1979 a hacer prevalecer el programa más moderado<sup>203</sup>.

Establecidas estas cuestiones, pasaremos a analizar cuál fue la carta de presentación de los socialistas ante las elecciones generales que iban a celebrarse el 1 de marzo de 1979. Comenzaremos por referirnos a su guía de campaña, un documento dirigido a los coordinadores de campaña, a los miembros de los comités y a los candidatos, y que era de «absoluta confidencialidad». Establecía las pautas de una campaña que debía ser coherente, como se repetía insistentemente, y que tenía que mostrar que los socialistas estaban en condiciones de convertirse en el partido de gobierno, sobrepasando la fase de «alternativa de poder», tal y como afirmaban. Para ello, adjudicaban un papel decisorio a la imagen de seriedad y responsabilidad que pudieran transmitir al electorado ante estos comicios:

es necesario hacer una campaña muy intensa, bien organizada, bien sincronizada, manteniendo la unidad de exposición en todo momento. Una campaña en esta línea hará patente nuestra coherencia política y nuestra capacidad de organización, y por lo tanto

---

<sup>201</sup> A este respecto señalaba José Félix Tezanos: «la propaganda socialista –en su programa electoral, en sus llamamientos, en las declaraciones de sus líderes y candidatos– se ha dirigido a cubrir –y obtener el apoyo– tanto de sectores sociales específicos (las mujeres, los jóvenes, los jubilados, etc.), como de clases sociales y sectores de clase concretos (obreros manuales industriales, campesinos, profesionales, autónomos, empleados de oficina y otros sectores de las llamadas “nuevas clases medias”, pequeños propietarios de la industria y los servicios, etc.)», en José Félix TEZANOS: *Sociología del socialismo...*, p. 63.

<sup>202</sup> Santos JULIÁ: *Los socialistas en la política...*, p. 523. En este sentido es interesante el planteamiento de Richard Gillespie, para quien el «viraje a la derecha» habría comenzado antes, teniendo desde 1977 una evidente estrategia de centro izquierda, aunque sería sobre todo desde 1979 cuando «los dirigentes socialistas estaban convencidos de que ahora hacía falta ajustar la imagen pública del partido a su práctica política reciente», en Richard GILLESPIE: *Historia del Partido Socialista Obrero Español*, Madrid, Alianza Universal, 1991.

<sup>203</sup> De hecho, esta dualidad entre las resoluciones y el programa electoral sería defendida en cierta medida por Felipe González a posteriori: «efectivamente los congresos marcan unas pautas, unas grandes directrices por las que el partido debe discurrir pero la resolución de un congreso no es el programa electoral de un partido. Eso lo saben muy bien todos los europeos. El programa electoral es lo que un partido dice que puede hacer y que ofrece hacer (...) Este es el programa electoral, que no puede ser contradictorio con la resolución del congreso; pero que no tiene que ser miméticamente la resolución del congreso, como es natural», en Felipe GONZÁLEZ: *Un estilo ético. Conversaciones con Víctor Márquez Reviriego*, Barcelona, Argos Vergara, 1982, p. 125.

se entenderá mediante nuestra praxis la eficacia y la madurez actual del socialismo [s. o,]<sup>204</sup>.

Existía una «estrategia lógica de alternativa de poder» que según Felipe González había sido definida tras las elecciones del 15 de junio de 1977<sup>205</sup>, y que en 1979 se consideraba al borde del éxito, a la que había que dar el último empujón. Pese a lo que pudiera decir posteriormente en sus memorias Guerra<sup>206</sup>, las expectativas del PSOE antes de las elecciones auguraban un mayor éxito del que finalmente se dio<sup>207</sup>. De hecho, su objetivo era alcanzar el 35% de los votos emitidos para conseguir la mayoría absoluta en el Congreso o al menos acercarse a este resultado contando así con una «minoría mayoritaria que evitase la formación de una coalición de otros grupos»<sup>208</sup>. Aunque finalmente obtuvieron un 30% frente al 35,2% de Unión de Centro Democrático<sup>209</sup>.

En cualquier caso, pese a estas grandes metas, que calificaban de ambiciosas pero alcanzables, sabían que aunque estaban por delante de UCD en todas las encuestas que manejaban, el resultado final estaría en manos de los indecisos, por lo que estos eran su «objetivo prioritario». Eran conscientes de que gran parte de estos indecisos se decantarían en el último momento por una de las dos fuerzas que se habían establecido desde las elecciones anteriores como mayoritarias, UCD y PSOE, por lo que veían a la formación de Suárez como el «adversario electoral nº1», y aclarando que la terminología era sólo para uso interno, explicaban que era «la candidatura que puede robar más votos por tener una parte del electorado común con nosotros». Así pues, eran los más temidos y debían evitar el trasvase de votos que se podría producir por la derecha del PSOE; pero al mismo tiempo animaban a explorar las oportunidades que podría ofrecer el acercarse a los electores que a UCD se le pudieran escapar por la

---

<sup>204</sup> PSOE: «Guía de campaña..., p.7.

<sup>205</sup> PSOE: «Discurso de Felipe González..., p. 19.

<sup>206</sup> Declaraba que por aquel entonces «entendían que el triunfo electoral del PSOE no era posible –y tal vez tampoco deseable por prematuro–», en Alfonso GUERRA: *Cuando el tiempo...*, p. 246.

<sup>207</sup> Así lo reconocía el propio Felipe González en el discurso inaugural del XXVIII Congreso, en PSOE: «Discurso de Felipe González..., p. 28.

<sup>208</sup> PSOE: «Guía de campaña..., p.41. Para ello los socialistas contaban, como ha indicado Juan Antonio Andrade, «con el traspaso mecánico de los sufragios recibidos anteriormente por los partidos socialistas absorbidos», en Juan Antonio ANDRADE: *El PCE y el PSOE en...*, p. 146.

<sup>209</sup> PSOE: *Este viejo y nuevo...*, p. 299. Parece que según fue avanzando la campaña, las encuestas iban desvelando que los socialistas se estaban deshinchando. Como Carles Castro menciona, las encuestas previas llegaron a registrar un empate entre UCD y PSOE, pero a tan sólo unas semanas los sondeos del CIS arrojaban una victoria de 3 puntos a favor de los centristas (que fue de 4,4 finalmente), en Carles CASTRO: *Relato electoral...*, p. 52.

izquierda<sup>210</sup>. De esta manera, en su capítulo sobre estrategia, indicaban que para conseguir un porcentaje superior al 35% debían mantener sus votos actuales, recoger los del PSP y «conquistar los votos obtenidos por UCD en un sector de población cuyos intereses están realmente defendidos por el Partido»<sup>211</sup>.

Pero para lograr este objetivo tenían muy en cuenta otros aspectos que revelaban las encuestas: en primer lugar, qué preocupaba realmente a la gente; y después, qué preocupaba a ese sector que podía pasar de estar indeciso, o de votar a UCD en las elecciones anteriores, a sumar para el cambio que representaba el PSOE. Por ejemplo, sobre el marxismo preguntó específicamente esta encuesta, cuyo resultado era la indiferencia para la mayoría de la población. La moderación se iba demostrando como imprescindible si de verdad querían dar el salto al poder<sup>212</sup>.

Pero, ¿qué importancia tiene todo este entramado de estrategias y cálculos electorales para la cuestión nacional? Para empezar es relevante porque da una visión de conjunto de cuáles eran las preocupaciones y los objetivos principales del partido en esta coyuntura, y en consecuencia qué estrategia se siguió para alcanzarlos. Establecidas las líneas de actuación generales que se habían marcado, se puede situar qué posición ocupaba el problema autonómico dentro de estos intereses y cómo se debía actuar sobre éste para hacerlo encajar en un marco más amplio. Por ejemplo, hay que entender los posicionamientos del PSOE influidos, aunque no determinados, por su intención de acercarse a esos votantes de la clase media con propuestas que les resultaran más atractivas. Entre estas, además de las cuestiones relacionadas con el marxismo, el programa debía alcanzar muchas otras, incluso más importantes para la mayoría de los electores<sup>213</sup>. En este sentido, entraba en juego uno de los mayores retos del nuevo

---

<sup>210</sup> Según los datos que manejaba el PSOE, finalmente un 7,8% de los votantes de UCD de las elecciones de 1977 se decantó en 1979 por ellos, mientras que al revés tan sólo sucedió con un 3% de los electores. El otro partido con el que se dieron las mayores transferencias fue el PCE, que perdió también un 7,8% de sus votantes en favor del PSOE, ganando sólo un 3,2% en detrimento del PSOE, José Félix TEZANOS: *Sociología del socialismo...*, p. 81.

<sup>211</sup> PSOE: «Guía de campaña...», p. 51.

<sup>212</sup> Además, en el apartado final de «advertencias» indicaban cuál era la mejor opción para definirse si los periodistas tocaban este tema, mostrando la incomodidad que existía desde la élite dirigente hacia este término: «los grupos de derecha utilizarán el marxismo como arma contra nosotros. No debemos entrar en polémica sobre ello. Si los periodistas nos preguntaran, habrá que decir simplemente que en el Partido hay marxistas y no marxistas, sin definirse al respecto, particularmente los candidatos», PSOE: «Guía de campaña...», p.56.

<sup>213</sup> Según una encuesta preelectoral de enero de 1979, en la que se preguntaba por el marxismo, se demostraba, como afirmara José Félix Tezanos, que no más de un tercio de los encuestados «tienen alguna opinión concreta sobre el tema. Incluso entre los propios votantes del PSOE el grado de desconocimiento es muy considerable». Ante la pregunta de si estaban de acuerdo con las declaraciones

Estado democrático, su modelo nacional, por lo que la manera en la que se planteó este problema en la campaña electoral, y el propio resultado de las elecciones, además de mostrar por una parte las posturas menos «radicalizadas» que existían en el partido, pudo influir también en la política autonómica que el PSOE adoptó en el futuro.

De hecho, uno de los aspectos derivados de este viaje hacia la moderación sería el abandono de algunos postulados en torno a la organización territorial de España, que se hacían hasta cierto punto coherentes tras el desarrollo constitucional y que tuvieron su culminación, como se verá, en el posterior Congreso del PSOE en mayo de este mismo año. Para un autor como Abdón Mateos, las posiciones sobre la nación y los nacionalismos de los socialistas deben entenderse como otro de los aspectos del ajuste ideológico que los socialistas vivieron durante la Transición, enmarcando las teorías del oportunismo, vistas con anterioridad, dentro de esta lógica superior, que supondría la radicalización del PSOE a principios del período para moderarse posteriormente<sup>214</sup>.

Volviendo a la guía de campaña y a los temas que se destacaban como más importantes para los electores, según los datos que manejaba el PSOE, dos eran las cuestiones sobre las que debían centrar su atención: el paro y el terrorismo, en este orden. De hecho, tal y como habían constatado, el terrorismo era el problema más citado, entre otros, por los «votantes de UCD que votarían por el PSOE en segundo lugar»<sup>215</sup>, lo que convertía esta preocupación en un tema atractivo que explotar en su programa electoral, tema que como se verá, fue muy recurrente durante la campaña. Y si el marxismo o el paro tenían que ver con ese marco amplio que interesaba para tener una visión más general, pero no afectaban de forma directa a la organización territorial del Estado y al problema de la cuestión nacional, el problema del terrorismo sí se relacionaba con estos debates, sobre todo cuando pensaban en ETA y el País Vasco.

De facto, en el País Vasco, el terrorismo era un recurso para contrarrestar las campañas de sus adversarios nacionalistas, concretamente del Partido Nacionalista

---

de Felipe González sobre el tema del marxismo, el 47,4 del total de la muestra respondía que no las conocían y un 49% entre los que habían declarado votar al PSOE en 1977; no les importaba a un 2,4% y 1,4% respectivamente; a un 2,2% y a un 2% les parecía algo secundario; y un 24,2 y un 18% no sabía o no contestaba. Ante la pregunta «¿Le parecería a usted bien o mal que el PSOE dejara de ser un partido político *exclusivamente* marxista?» del total de la muestra y de los que se habían declarado votantes contestaban que no les importaba un 11,7% y un 11,1 respectivamente; no sabían de qué se trataba un 28,6% y un 27%; y no sabían o no contestaban un 25,5% y un 20,6%, José Félix TEZANOS: *Sociología del socialismo...*, pp. 73-74.

<sup>214</sup> Abdón MATEOS: “La Transición del PSOE...”, pp. 296-299.

<sup>215</sup> PSOE: “Guía de campaña...”, p. 39.

Vasco y de Euskadiko Ezkerra. Según la estrategia que estaba marcando el PSOE, se indicaba que su respuesta ante estos grupos debía ser la de presentarse como la alternativa al paro y al terrorismo y como los garantes de la paz<sup>216</sup>. Por otra parte, a nivel estatal, a sabiendas de que el terrorismo era el segundo problema en importancia para los españoles según las encuestas, pretendían utilizarlo para sacar ventaja, tanto en contra de su enemigo electoral nº1, UCD, como del nº2, el PCE, pero no tanto desde el descrédito de los otros sobre un tema tan sensible, sino más bien siendo conscientes de cuáles podían ser las actitudes de sus rivales sobre este problema para preparar la mejor estrategia al respecto: presentarse como un partido fiable y serio, capaz de ofrecer la seguridad que el país necesitaba<sup>217</sup>.

Así pues, advertían de que los centristas «eludirán el tema del terrorismo, pero usarán la situación que crea para asustar con un posible gobierno PSOE hablando de la seguridad», algo que desde el PSOE se intentó contrarrestar, durante y después de la campaña, tratando de forma insistente el tema, intentado poner en evidencia las deficiencias del gobierno en la gestión de este problema, aunque siempre criticando la violencia de ETA. En cuanto al PCE advertían que «manifestarán todas sus iras contra ETA sin criticar para nada la actuación del gobierno»<sup>218</sup>.

Por lo que respecta a menciones directas al tema autonómico, demostraban ser conscientes de la importancia estratégica de esta cuestión, tanto por la influencia que ejercería en la campaña, como por la que la misma causaría en la evolución de la organización territorial en España. Por un lado consideraban que una de las consecuencias más importantes del proceso electoral sería que determinaría el desarrollo del proceso autonómico, además del de la Constitución<sup>219</sup>. Esto podría reforzar la teoría de que la improvisación invadió la política del PSOE en relación al desarrollo del

---

<sup>216</sup> *Ibid.*, p. 49-50.

<sup>217</sup> Desde luego el terrorismo es utilizado de forma consciente para sacar réditos electorales, lo que no significa que su actitud hacia esta cuestión estuviera motivada únicamente por fines oportunistas. Ellos mismos afirmaban que la campaña iba a afectar en aspectos que consideraban «no estrictamente electorales y de carácter conflictivo», como las luchas sindicales o el terrorismo, en PSOE: «Guía de campaña...», p.43.

<sup>218</sup> PSOE: “Guía de campaña...”, p.46. En el cruce de acusaciones UCD atacaría agresivamente, en concordancia a su estrategia de utilizar el miedo para desacreditar a los socialistas como una alternativa responsable, aludiendo al intento de diálogo de estos para pactar el fin de ETA, cuando en las conversaciones también había estado involucrado el gobierno. Véase Txiki Benegas: *Euskadi: sin la paz nada es posible. Conversaciones con Pedro Altaras*, Barcelona, Argos Vergara, 1984, pp. 106-107; o Andrea MICCICHÈ: *Euskadi socialista. El PSE-PSOE y la Transición en el País Vasco (1976-1980)*, Madrid, Pablo Iglesias, 2009, pp. 205-206.

<sup>219</sup> PSOE: “Guía de campaña...”, p. 43.

Estado de las Autonomías, pendientes de las coyunturas más inmediatas para reaccionar de uno u otro modo, siempre dentro de unos límites.

Como decíamos, las autonomías tuvieron un peso específico en el desarrollo de la campaña, y en el PSOE eran conscientes de que el resto de partidos las tendrían muy presentes en sus discursos, por lo que lo posicionaron como un tema central a la altura del paro, el terrorismo o el desarrollo constitucional, pese a que no formara parte de los problemas que más preocupaban a los españoles según las encuestas<sup>220</sup>. Sin formar parte de los intereses más directos del conjunto de los electores, de forma coyuntural y según los territorios, podían adquirir un fuerte protagonismo, lo que provocaba que desde el PSOE se estuviera pendiente de cómo actuar en cada situación, condicionado en parte por la reacción de sus adversarios políticos, acentuando la improvisación. Por ejemplo, en Cataluña consideraban que el adversario electoral nº1 del PSC-PSOE era el Partit Socialista Unificat de Catalunya, seguido de Convergència i Unió, y en ambos casos advertían que estos dos partidos se centrarían en la cuestión nacional y que atacarían al PSOE por haber retrasado el Estatut, al apoyar junto a UCD la convocatoria de las elecciones generales antes de que éste fuera aprobado. Su respuesta se basaba en aleccionar a los coordinadores de campaña para responder ante estas acusaciones alegando que la victoria de los socialistas era necesaria para conseguir un buen Estatuto, contrarrestando la fuerza que UCD pudiera tener en el Congreso, adoptando una vez más en esta campaña la estrategia del voto útil.

En cuanto a las directrices generales para todo el Estado, establecieron dos apartados dentro el capítulo sobre «estrategia»: el de la «idea básica de campaña»; y los «temas básicos de campaña». El primer punto era concebido como la síntesis de la campaña y se basaba principalmente en las preocupaciones que se habían revelado más importantes para los ciudadanos a partir de las encuestas y que coincidían con los que para el PSOE eran los problemas básicos del país, concretándose en los siguientes: paro, terrorismo, precios, sanidad y educación. Para atajar estos problemas la idea básica de campaña se resumía en la siguiente sentencia: «El país necesita un gobierno FIRME que luche contra el paro; por la seguridad ciudadana y por una sociedad más justa. Para conseguirlo es necesario votar PSOE»<sup>221</sup>.

---

<sup>220</sup> *Ibid.*

<sup>221</sup> *Ibid.*, p. 52.

Pero a esta «idea básica de campaña», que debía desarrollarse incidiendo en la capacidad, la credibilidad y la responsabilidad del PSOE para gobernar en pro de los intereses nacionales, debía sumarse la segunda parte de la estrategia, la que aludía a los «temas básicos de campaña», que eran los anteriores con alguna adición, como la de las autonomías. Por el siguiente orden, los temas a destacar durante la campaña serían en el primer grupo: «el paro, los precios, la seguridad ciudadana, la educación, la sanidad, y las autonomías»; y en el segundo: «Europa, campo y emigración»<sup>222</sup>. Lo que viene a indicar que, el tema de las autonomías, se coló entre los problemas que más preocupaban al PSOE, aunque lo hiciera en el último lugar, a pesar de que no era un tema que interesara en exceso al conjunto de la sociedad española a la luz de las encuestas que manejaban. Quizá precisamente por esto desde el Partido se le fue dando cada vez un lugar menos preferente, y las soluciones se iban improvisando en cierta manera, adecuándolas a cada coyuntura, sin establecer unos principios estrictos que sirvieran de guía para todos los territorios.

Lo que muestran las elecciones de 1979, y en concreto esta guía, es cómo el PSOE generaba un discurso que, sobre todo en estos momentos, pasaba por el filtro, no sólo de sus electores, sino también del conjunto de los españoles. Su discurso necesitaba apelar a una narración que conectara con el público al que iba destinado, a través de elementos que les resultaran familiares; a través de los temas que les interesaban; o a través de un lenguaje que les sedujera, como se explicitaba desde el apartado de la «táctica»:

Es de gran importancia que la manera de decir las cosas sea acorde con el público al que nos dirigimos, pues es ésta la única forma de que nos escuchen y en su caso acepten nuestros planteamientos.

(...) Hay un sector popular que ya está con nosotros, pero las encuestas demuestran que otro sector nos ve con recelo, producido, no por nuestras propuestas, sino porque tienen una falsa imagen del Partido, por lo que hay que tener sumo cuidado en toda la actividad de expresión externa del Partido<sup>223</sup>.

Esto demuestra cómo la imagen que trasladaba el PSOE a la opinión pública estaba mediada por la misma sociedad. En 1979, la propaganda que generó el partido sobre la cuestión nacional y las autonomías estaba condicionada, aunque no sólo, por lo

---

<sup>222</sup> *Ibid.*, pp. 53-54.

<sup>223</sup> *Ibid.*, p. 55.

que creían que podía movilizar a sus potenciales electores; pero también por los elementos con los que los militantes y dirigentes socialistas «experimentaban» su propia identidad, quienes no se limitarían a desarrollar unas estrategias ajenas a sus propias tradiciones, sino que estas serían una consecuencia muy directa de las mismas.

## **2. De la teoría a la praxis de la campaña**

A continuación analizaré el programa electoral, el lugar más visible en el que plasmar todas las estrategias anteriores. El texto que daría una imagen de cómo el PSOE se presentaba para dar ese salto de alternativa a partido de gobierno; el texto donde enunciar su modelo político y su modelo de Estado para España. Fieles a su voluntad de presentarse como una opción responsable y eficaz, comenzaron recorriendo sus éxitos hasta el momento: «El PSOE cumplió los compromisos adquiridos con sus electores, dando la batalla parlamentaria en todas las comisiones, porque es un partido serio y coherente y porque sus grupos parlamentarios y los equipos técnicos propios que les asisten son competentes y responsables». Pero si se vanagloriaban de un éxito era de haber hecho posible: «una Constitución para todos, capaz de proporcionar a España y a los españoles de todas la regiones y nacionalidades un marco de convivencia en paz y en libertad»<sup>224</sup>.

En la misma introducción apelaba a los principales problemas políticos, económicos y sociales que consideraban afectaban a España, y para los que el gobierno no había dado una respuesta adecuada. Entre ellos se encontraban los temas que se han visto en la guía de campaña, como el paro, los precios, la educación, la sanidad y por supuesto el terrorismo, además de otros que no habían sido detallados en el documento referido. Pero llama la atención que en este primer desglose no apareciera la cuestión territorial y autonómica.

En cuanto al tratamiento respecto al terrorismo, se realizó de manera acorde a los planteamientos que se intuían a partir de la guía de campaña, comenzando por acusar a UCD de incapacidad para gestionar este problema y asociando el problema de la violencia armada directamente a ETA y al País Vasco: «ausencia de imaginación y criterios para detener el terrorismo y para crear un ambiente de entendimiento en el País

---

<sup>224</sup> PSOE: “Programa. Elecciones 79”, AHT, Colección Propaganda Política y Social (1970-1985), 02/15/017, p. 1.



Vasco»<sup>225</sup>. Por otra parte, indirectamente, relacionaban el terrorismo con el problema autonómico, al pretender luchar contra el mismo con una serie de «planes políticos y policiales inteligentemente coordinados», entre los que el primero consistía en: «un conveniente desarrollo de las autonomías, defendiendo la unidad de España»<sup>226</sup>. De nuevo, la unidad aparecía en escena, en un momento en que ni siquiera era de obligada referencia, ya que el desarrollo de las autonomías bajo los cauces constitucionales ya la daba por supuesta; y tampoco existía la necesidad de reafirmarla a partir de un planteamiento que no la estaba debatiendo ni cuestionando<sup>227</sup>.

La voluntad de la unidad española fue ratificada de nuevo, esta vez en el punto sobre «el proceso autonómico» que sí había sido tratado según avanzaba el programa, aunque no hubiese sido mencionado en la introducción como uno de los principales problemas de España. En este espacio, en cambio, lo consideraban como «uno de los retos decisivos que se nos presentan ante la nueva etapa», a pesar de que se mencionaban únicamente los aspectos más relacionados con los principios de la subsidiariedad, sin enfatizar el respeto a la diferencia identitaria o los diferentes ritmos, acordes a diferentes niveles de conciencia nacional, de los que sí se hablaba en otros ámbitos. Así, este reto consistía en «hacer efectivo el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, proclamado en la Constitución y siempre defendido por los socialistas, ya que la autonomía es el camino para acercar el poder a los ciudadanos». Para asegurar este objetivo el PSOE esgrimía, entre otros, los siguientes principios:

- Adecuar el ritmo de los procesos autonómicos para llegar a un nivel común de autogobierno, en correspondencia con la conciencia autonómica y la capacidad de gestión de cada una de las regiones o nacionalidades.
- Fortalecimiento de la solidaridad entre los pueblos de España, corrigiendo los actuales desequilibrios territoriales.
- Preservación de la unidad de la nación española (...) <sup>228</sup>.

---

<sup>225</sup> *Ibid.*, p. 3.

<sup>226</sup> *Ibid.*, p.11.

<sup>227</sup> Además, la expresión «defendiendo la unidad de España» no se eligió al azar, sino que estuvo muy meditada. De hecho, en el proyecto del programa electoral se había elegido otra palabra para asegurar esa unidad: originalmente el texto decía «respetando la unidad de España». Aunque esto podría considerarse anecdótico, nos parece significativo que cambiaran el verbo respetar, que dejaba igualmente claro cuál era su voluntad sobre el modelo de España pero que era un poco más neutro, por el de defender, que convertía a los socialistas en guardianes directos de esa unidad. PSOE: “Programa electoral (Proyecto)”, Archivo de la Fundación Largo Caballero, Fondo PSOE. Partido Socialista Obrero Español, 004056-003, p.18.

<sup>228</sup> PSOE: «Programa. Elecciones 79...», p.13.

Es cierto que el primero de estos tres puntos expuestos sí aludía la existencia de diferentes niveles en las conciencias autonómicas de las regiones y nacionalidades, pero también lo es que la importancia en su promesa electoral recaía en su voluntad de igualar las competencias en todas las autonomías. En este sentido se podría apuntar otra cuestión del programa, pero en este caso, lo reseñable sería más bien lo que no decían. En el apartado de «El desarrollo de la Constitución», justo antes del que se dedicaba al proceso autonómico, hacían referencia a la voluntad del PSOE de completar y profundizar la democracia propiciando un desarrollo progresista de la Constitución. Para ello apuntaban diversas leyes, como las que favorecerían los derechos de los trabajadores; otra para la democratización y la autonomía de los municipios; o la que garantizaría la independencia judicial. Pero entre ellas no había ninguna referida a los procesos autonómicos, a sabiendas de que la Constitución estaba abierta a este respecto y esa nivelación de competencias de la que hablaban debía ser regulada de alguna manera, en uno u otro sentido.

Volveremos ahora a un detalle en el que no nos hemos detenido lo suficiente: cuando mencionaban la unidad de España en este caso, lo hacían a través del término nación y no Estado. Ya nos hemos referido a cómo la nación se podía construir banalmente también desde el discurso del PSOE, y cómo los propios socialistas participaban de una identidad nacional banal que al mismo tiempo reproducían<sup>229</sup>. Esto se pone en relación con el diálogo que desde el partido se establecía con la población, herederos de una cultura política en la que la identidad nacional española también estaba arraigada, desde el socialismo se contribuía a transmitir una narración determinada de la nación española, se contribuía a generar esas «experiencias de nación», de las que participaba la propia militancia del partido. De ello sería una muestra el programa electoral en los apartados en los que en principio no se estaba debatiendo el modelo de Estado y de nación en España, por lo que se expresaban sin menos complejos, o precauciones, sobre una nación, la española, que daban por supuesta. Sería el caso de los puntos sobre «Defensa nacional» y «Política internacional», en los que de forma banal recordaban continuamente qué significaba España para ellos, sin definirla conscientemente, sencillamente dando por descontada su

---

<sup>229</sup> Trasladando los planteamientos de Michael Billig al marco del Estado-nación español, mantenemos que se puede contribuir a construir y transmitir identidad nacional desde un partido político si éste apela a un «nosotros», a un pueblo, a un país o a una nación que identifica como propios, en Michael BILLIG: *Nacionalismo Banal...*

unidad y su soberanía nacional. Una soberanía nacional, por ejemplo, que debía ser defendida y garantizada por las Fuerzas Armadas dentro y fuera de España. En la misma línea, afirmaban que la política exterior debía defender los intereses nacionales, que «no se subordinarían a ningún otro interés», por lo que se oponían «a la vinculación de España a ninguno de los bloques militares, por suponer una limitación de nuestra independencia y soberanía nacional»<sup>230</sup>.

El hecho de que el PSOE diera por supuesta la unidad nacional y la naturalizara en determinados ámbitos del programa en los que no estaban debatiendo el problema territorial de España responde tanto a la voluntad de calar en el electorado como a la existencia de una conciencia nacional mayoritaria dentro de su militancia y de sus clases dirigentes. Y por ello se aceptaría sin complejos una versión aún más explícita en la adaptación ilustrada del programa, que con seguridad llegaría a un mayor número de electores. «Un ejército moderno para una nación soberana» sería el lema elegido para el epígrafe que se dedicaría al Ejército y a la política exterior que proponían los socialistas para España. Por si éste no fuera lo suficientemente sugerente, le acompañaba una imagen evocadora de esa gran nación a la que se aludiría en el texto.



Imagen 3; Ilustración del programa electoral (Fuente: PSOE: “Programa del PSOE. Versión ilustrada – Elecciones 1979”, Archivo personal de Víctor Fuentes Prosper)

<sup>230</sup> PSOE: «Programa. Elecciones 79...», p. 17. Lo mismo sucedía en el apartado «Política Internacional» del libro *Este Viejo y Nuevo Partido*, donde se reafirmaban de la siguiente manera: «el PSOE mantiene el principio de la defensa de la independencia y la soberanía de España, buscando un área de autonomía para la acción exterior, que evite la satelización sin romper los equilibrios generales», PSOE: *Este viejo y nuevo Partido*, Madrid, Pablo Iglesias, 1979, p. 496.

La bandera española ondeaba de manera gráfica, confirmando con ayuda del texto que acompañaba a la imagen, casi punto por punto, todos los elementos que Michael Billig utilizaría para explicar la existencia del nacionalismo banal, en los Estados-nación. Y es que además de lo evidente, los socialistas apelaban al pasado glorioso de la que denominaban, en primera persona del plural, «nuestra patria», para justificar el papel que por historia le correspondía ocupar internacionalmente:

España, en cuyo suelo florecieron las culturas mediterráneas más poderosas, llegando a ser una de las provincias más desarrolladas del mundo romano. Que a través de su civilización árabe transmitió a Europa la ciencia y la cultura del olvidado mundo griego. Que descubrió América, cuyos habitantes hablan nuestra lengua y enriquecen con sus aportaciones nuestra común cultura.

España, que participó activamente de la creación de la Europa moderna, no puede seguir realizando una política exterior acomplejada ni debe aceptar vinculaciones de tipo militar o político que supongan limitación de su soberanía; sino que, a partir de la instauración de su sistema democrático, debe jugar el papel que le corresponde por su historia, su peso económico y su posición estratégica<sup>231</sup>.

Unas líneas después, esta apelación a la nación basada en su historia, su lengua, su cultura, sería completada por la mención de la nación democrática a la que el PSOE quería defender a través del Ejército:

Para ello propone el PSOE realizar una política de defensa basada en las necesidades estratégicas y en las formas de convivencia democrática de nuestra patria que necesita de unas Fuerzas Armadas modernas, disciplinadas, potentes, altamente profesionalizadas e integradas en la sociedad de la que proceden y a la que defienden como garantía última que son de la soberanía nacional y de la Constitución<sup>232</sup>.

En este caso el tono se asociaba más a los valores cívicos y voluntaristas, un tono que aislado, podría hacer pensar en una concepción de España que no tenía en cuenta los rasgos étnicos-culturales que junto a los cívicos componen toda definición de

---

<sup>231</sup> PSOE: “Programa del PSOE. Versión ilustrada – Elecciones 197”, Archivo personal de Víctor Fuentes Prosper, p. 5.

<sup>232</sup> *Ibid.*

nación<sup>233</sup>. En este sentido, hablar de patriotismo constitucional, como se hace desde algunos ámbitos, para referirse a estas lealtades demostradas por los socialistas, o por cualquier otra formación, obvia otras manifestaciones que de forma explícita se realizaban apelando a valores culturales e históricos<sup>234</sup>.

Otro aspecto llamativo sería la postura mantenida ante el problema de Gibraltar, que se convertía en una pieza simbólica que exponer ante el público nacional que nostálgicamente se aferraría a la devolución de un territorio cuyo recuerdo hería el imaginario patriótico. Tanto en el programa completo como en su versión ilustrada se referían a su recuperación<sup>235</sup>. En un sentido similar aparecían estas cuestiones en el libro *Este viejo y nuevo partido. De congreso a congreso*, presentado en el XXVIII Congreso y nacido con la vocación de analizar la política socialista durante los dos años que mediaban entre este último y el anterior. Pretendía ser también una «exposición de lo que ha sido y es el partido», en palabras de su responsable de redacción José Leyva, y como una declaración de futuro desde la directiva del PSOE, recogiendo las esencias de sus 100 años de vida<sup>236</sup>. El libro había sido concebido por Alfonso Guerra<sup>237</sup>, y fue organizado como un diccionario especializado, ordenado por voces, entre las que se encontraba un apartado específico para «Gibraltar». En él, aludían a una historia que justificaría la reclamación de su devolución, ya que la plaza «fue arrebatada a España en 1704, durante la Guerra de Secesión y, desde entonces, todos los esfuerzos para recuperarla han sido inútiles, incluido el heroico sitio –por ambas partes– de 1782, en el que pereció el literato coronel Cadalso». Creían que Gibraltar se encontraba colonizada

---

<sup>233</sup> Para una visión que desmonta la división ficticia entre nacionalismos étnico-culturales y nacionalismos cívicos véase Michael BILLIG: *Nacionalismo Banal...*

<sup>234</sup> Por otra parte, como ha señalado Xacobe Bastida, resulta difícil asociar a la Constitución española de 1978, únicamente valores de tipo cívico a partir de su artículo 2. Véase en sentido contrario José Daniel MOLINA: *La España del pueblo...*

<sup>235</sup> De nuevo, el programa definitivo superó al proyecto, ya que la versión provisional no mencionaba esta cuestión, mientras que en la posterior abogaban por que el proceso de remodelación de las instituciones europeas supusiera «la plena soberanía de España sobre Gibraltar», PSOE: «Programa. Elecciones 79...», p. 17.

<sup>236</sup> *El Socialista*, 109 (20 de mayo de 1979).

<sup>237</sup> En su introducción, escrita por Alfonso Guerra se puede ver en parte la motivación de su edición, el reseñar la política que el partido había llevado desde finales de 1976, sobre temas fundamentales para la estabilidad de la democracia, un objetivo prioritario para el partido: «El país en 1976 emerge de una dictadura y aún hoy se desazona luchando por conquistar una democracia estable y auténtica. Los conflictos políticos, los esfuerzos por resolver las injusticias sociales, la crisis económica, las aspiraciones autonomistas de los pueblos en marcha, las respuestas a los estímulos de una colectividad humana que amanece a la libertad y busca la igualdad, jalonan las páginas de un libro que se pretende una radiografía de una sociedad a través del cristal limpio de un partido que cumple ahora cien años de historia. Si acerté al concebir el libro, el lector lo dirá, pero lo que sé es que tuve fortuna al hacer responsable del equipo de redacción a José Leyva, cuyo trabajo ha hecho posible la ventana abierta que es *Este viejo y nuevo partido*», PSOE: *Este viejo y nuevo...*

por los británicos y que geopolítica e históricamente formaba parte de España, aunque abogaban preferiblemente por una solución pactada que respetara la voluntad y los intereses de los habitantes del Peñón<sup>238</sup>. De nuevo se referían a esta problemática en el apartado sobre «Política internacional» del mismo libro, donde en este caso, la soberanía nacional española sobre este territorio no parecía admitir discusión:

Gibraltar: La recuperación de la integridad territorial tiene en Gibraltar un objetivo irrenunciable. (...) El contencioso gibraltareño tiene un objetivo último: La aceptación por parte británica de la soberanía española y una serie de temas negociables donde la flexibilidad puede ser amplia<sup>239</sup>.

Como se está viendo, a veces puede resultar más sencillo observar la asunción inconsciente de una identidad española por parte del PSOE en aquellos apartados en los que no se dedicaban explícitamente a pronunciarse sobre estos problemas. Así sucede por ejemplo, con la carta de presentación de su programa ilustrado, pensado además para conectar con el grueso de sus posibles votantes. Se trataba de una exposición del eje de su política, de aquellos aspectos fundamentales que lo tenía que definir como partido dispuesto a acceder al gobierno del país. Tras presentarse de nuevo como un partido sólido y veraz, que cumplía sus promesas –entre otras la de luchar por una Constitución a la altura de las circunstancias– mencionaban los problemas y desafíos principales del país, el primero el terrorismo. Entre ellos se nombraba también el tema autonómico, cuya solución pasaba por desarrollarlo desde la perspectiva de la solidaridad. Una omnipresente solidaridad que se repetía como cierre del programa socialista, una solidaridad que suponía en gran medida el reflejo de la existencia de una conciencia nacional hegemónica en el Partido, dibujando una España asociada a un proyecto político de valores progresistas, pero que basaba su legitimidad como nación en una historia o una cultura común:

Hace falta un gobierno, en fin, que haga de España un país alegre, justo, seguro, libre, solidario, digno de respeto y reconocimiento que por su historia, su cultura y sus gentes merece<sup>240</sup>.

En cuanto al apartado específico en el que demostrar cuál era su postura ante la orientación que querían dar al modelo del Estado de las Autonomías: no existía por sí

---

<sup>238</sup> PSOE: *Este viejo y nuevo...*, pp. 352-353.

<sup>239</sup> *Ibid.*, p. 498.

<sup>240</sup> PSOE: “Programa del PSOE. Versión ilustrada...”, p. 1.

mismo en esta versión ilustrada. En realidad lo integraban totalmente con el problema del terrorismo vasco, haciendo que la cuestión autonómica pareciese sencillamente la solución a la cuestión vasca, bajo los lemas «Paz y solidaridad» y «Libertad y seguridad» como títulos para los epígrafes. Por su parte, la imagen elegida para ilustrarlos sería muy significativa:

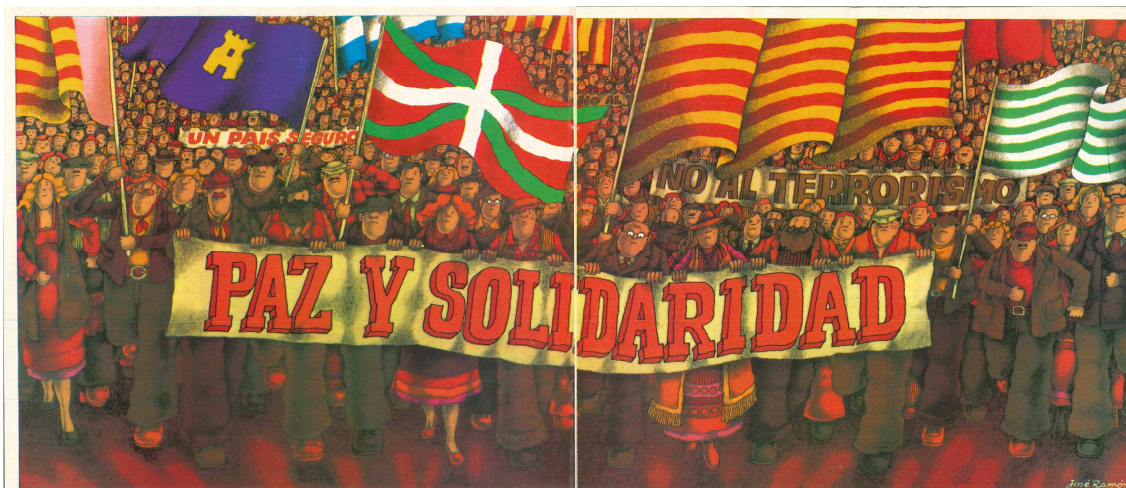


Imagen 4; Ilustración del programa electoral (Fuente: PSOE: “Programa del PSOE. Versión ilustrada – Elecciones 1979”, Archivo personal de Víctor Fuentes Prosper)

Se representaba una manifestación en la que en la pancarta principal se leía «Paz y Solidaridad», pero otras dos más podían verse hacia el fondo. En ellas se había escrito «Un país seguro» y «No al terrorismo». No eran, sin embargo, los únicos símbolos que acompañaban a los manifestantes, en una demostración muy gráfica de ese intento de unir el problema autonómico con el del terrorismo –que sabían se encontraba entre las preocupaciones más importantes para sus posibles electores–, plagaron la imagen de banderas de las nacionalidades y regiones, esta vez sin rastro de la española. Entre los territorios representados con claridad estaban Cataluña y el País Vasco; y podría intuirse que se ondeaban las banderas que representaban a Andalucía, Aragón, Galicia, Navarra y el País Valenciano. En el último caso, quizá tratando de huir de polémicas se había dejado el hueco para la franja azul pero en lugar de pintarlo de este color se habría sustituido por otro más neutro<sup>241</sup>.

<sup>241</sup> En capítulos posteriores se tratará con mayor profundidad este tema, que tenía que ver con un conflicto identitario en el que los símbolos, entre ellos la bandera, cobraron un protagonismo muy destacado.

En cuanto al texto, no hacía sino confirmar lo anterior. Tras un primer párrafo en el que se ocupaban del proceso autonómico en sí, el resto estaba destinado al problema vasco y la solución al terrorismo. En lo relativo al problema del conjunto del Estado, se centraban en remarcar la descentralización que permitía la Constitución, para esta vez sí, alertar sobre el peligro de carreras e improvisaciones, reafirmandose sobre la defensa de los diferentes niveles de conciencia identitaria. En este caso, a diferencia de otros, no relacionaban esto con los distintos ritmos, dejando claro que el límite será igual para todos a la larga, pero sí aseguraban la solidaridad y la unidad de España:

La Constitución va a permitirnos pasar de la forma centralizada de Estado que ahora tenemos a otra descentralizada que hemos de construir y en la que los entes autonómicos alcancen y ejerciten el autogobierno. Ante una tarea tan compleja y delicada como ésta no caben carreras ni improvisaciones porque no todas las comunidades tienen la misma conciencia ni la misma necesidad de autogobierno. El Partido Socialista defiende a rajatabla el principio de solidaridad entre los pueblos de España en el marco de la unidad definido por la Constitución<sup>242</sup>.

Inmediatamente después vinculaba lo anterior a la situación de violencia que sufría Euskadi, que si estaba justificada con el Franquismo y la centralización que oprimía a los pueblos del Estado, dejaría de estarlo con la descentralización y la democracia:

Y es que el problema es especialmente delicado porque de una rápida, justa y acertada respuesta al derecho de autonomía del País Vasco depende en gran medida la solución del cáncer del terrorismo cuyas semillas plantó el anterior régimen (...)<sup>243</sup>.

Las soluciones que proponía pasaban por aislar a ETA y arropar a unas Fuerzas de Seguridad rejuvenecidas. Y esto pretendían conseguirlo a través, por ejemplo, de movilizaciones solidarias en toda España que hicieran realidad la ilustración anterior:

Extendiendo la solidaridad y comprensión entre el pueblo vasco y los demás pueblos de España mediante movilizaciones por la Paz y la Solidaridad y todo tipo de actividades políticas, culturales, deportivas y folklóricas que mejoren el conocimiento mutuo<sup>244</sup>.

Se observa, por tanto, una jerarquización en los valores que se querían transmitir a la sociedad ante los comicios electorales, un esfuerzo por representar una imagen de

---

<sup>242</sup> PSOE: “Programa del PSOE. Versión ilustrada...”, p. 3.

<sup>243</sup> *Ibid.*

<sup>244</sup> *Ibid.*



responsabilidad y de Partido de Estado que situaba la igualdad, la solidaridad y la unidad de España en primera plano. Pero anteponer determinados principios frente otros no significa que estos últimos no representaran una sensibilidad real dentro del Partido. Lo que en realidad se está viendo es que existía un intento por conciliar unos y otros, aunque anteponiendo también unos a otros, marcando unas líneas rojas que prometían no traspasarse.

La unidad era una de ellas, pero una unidad concebida dentro de una España plural, mostrándose preocupados por los derechos de las nacionalidades y regiones, aunque posiblemente tampoco en la misma medida por los de todos los territorios. Esta concepción plural de España era más visible cuando se hablaba de la diversidad cultural, que querían favorecer y difundir, a través de una educación y una política que tuviera en cuenta las diferentes lenguas y culturas que convivían en España. Aunque incluso sobre esto se mostraban relativamente tibios, ya que si bien sí se hacía una moderada mención en el programa completo, no aparecía en la versión ilustrada, en la que se hablaba por ejemplo de evitar la discriminación social o de género en la enseñanza, sin mencionar la de tipo cultural, que se había sufrido en España hasta entonces por motivos identitarios.

Al final, lo que prevalecía en el programa, sobre todo en su versión corta, era el horizonte del PSOE como Partido de Estado, como representante de todos los españoles, del conjunto de la nación, preocupado por los temas que de manera global se consideraban como más importantes para la población y para sus potenciales votantes: avanzar de forma progresista hacía una sociedad más justa, igualitaria y solidaria, que solucionara los problemas más graves que la mayoría de la sociedad había señalado como los más urgentes (el paro, el terrorismo, la crisis económica, etc)<sup>245</sup>. Así, se despedían en este programa ilustrado, apelando a un proyecto propio y nuevo, para una «vieja» nación:

No prometemos nada que no podemos cumplir, ni nos limitamos a pedir vuestro voto; vamos a pedirnos vuestro esfuerzo para una notable tarea, la de levantar entre todos este

---

<sup>245</sup> En el mismo sentido apuntaba una «guía para mítines» repartida presumiblemente entre los candidatos. En ella, se había escrito un discurso, que debía suponer un modelo a imitar, en el que tenían la voluntad de clarificar su posición ante la opinión pública, explicando cuál era «La línea del partido socialista», en el que el tema autonómico no era tratado en absoluto. Extraña en cualquier caso, que se preocuparan por apoyar «los movimientos de liberación de todos los pueblos» de acuerdo a su «solidaridad con los oprimidos de todo el mundo» y como una parte más de su condición de partido internacionalista y no se defendieran en este documento los derechos de los pueblos con identidades diferenciadas dentro de España, PSOE: Guía para mítines, Archivo de la Fundación Largo Caballero, Fondo Alberto Pérez García, 004008-003.

noble y viejo país que se llama España, haciendo posible el milagro de construir sobre su ancho solar los cimientos del edificio de una sociedad nueva, fundada sobre el entendimiento y la concordia, en la que resplandezcan los valores superiores de la libertad, la justicia, la igualdad y la fraternidad; según un proyecto de vida basado en el humanismo socialista<sup>246</sup>.

El tema autonómico no centraba los mensajes socialistas en esta campaña, de hecho, aparecía un tanto desdibujado, al menos en la propaganda estatal, y cuando lo hacía, generalmente se trataba con cautela, alertando sobre los peligros de tomar este tema a la ligera, anteponiendo la viabilidad del Estado a la defensa de los derechos nacionales y regionales que el mismo Partido había contribuido a alentar. En plena campaña electoral, Felipe González se pronunció directamente por las cuestiones autonómicas y por cómo estas podían afectar al futuro de la recién nacida democracia española. Lo hizo en el *Club Siglo XXI*, alegando escapar a la tentación electoralista, aludiendo como prueba que ya un año antes había denunciado los peligros de acometer la tarea de transformar un Estado centralista en otro descentralizado sin la necesaria perspectiva histórica. Y con perspectiva histórica quería decir ir poco a poco, al menos para aquellas nacionalidades y regiones que no tuvieran la necesidad urgente de solucionar esta cuestión. Estaba refiriéndose por tanto a los diferentes ritmos por los que apostaba por aquel momento el PSOE para avanzar en el proceso autonómico, que sin generar desigualdades ni insolidaridad entre regiones, permitiera no crear una competencia innecesaria que complicara el proceso y en definitiva, la gobernabilidad del país. Pero, ¿qué legitimaba la urgencia en este caso? ¿Se trataba de la conciencia identitaria, el subdesarrollo económico o la crispación social y política? En este caso no lo aclaraba, pero sí daba una visión del modelo de Estado que el Secretario General del PSOE quería para España, y qué importaba más en su modelo de Estado:

Hoy, desde esta tribuna, salvando las circunstancias de aquellas colectividades autónomas que necesitan con urgencia una solución, voy a hacer una afirmación que, seguro, van a utilizar contra mí en muchos sitios, pero que, probablemente, va a entender el pueblo, tarde o temprano.

Me daría por satisfecho si en el año 2000, (...), todas las regiones y nacionalidades del Estado Español hubieran asumido con plenitud los poderes que la Constitución les da; si hubiéramos legado a nuestros hijos una España descentralizada, con poderes mucho más

---

<sup>246</sup> *Ibid.*, p., 14.

cerca del pueblo y hecho pacíficamente, tal como se viene haciendo en tránsito democrático.

Sé que va a ser muy criticado el que diga que tengo como perspectiva el año 2000 para la culminación de este proceso que nos colocaría en las puertas de una estructura federal o federativa del Estado, pero creo que lo contrario es hacer una demagogia peligrosa<sup>247</sup>.

Una demagogia que para González suponía poner en peligro la operatividad del Estado y otros proyectos más importantes para los socialistas, a consecuencia de la falta de recursos que se sucedería con una administración multiplicada en volumen por culpa del desarrollo efectivo del derecho al autogobierno.

Se confirmaba el miedo, o al menos las prevenciones, ante la carrera autonómica, y se incidía de forma colateral en el hecho de que posiblemente en el fondo, la importancia de avanzar en el modelo «federal o federativo» tenía más que ver con esa posibilidad de acercar los poderes al pueblo, como enunciaba explícitamente, que con otorgar derechos históricos a unos territorios con una cultura nacional diferenciada. Así parece al menos cuando tras advertir de los peligros del Estado Autonómico no señalaba otro beneficio que este. Aunque también es probable que este pensamiento vaya destinado a aquellos territorios que debían ralentizar el ritmo, y no a los que necesitaban «con urgencia una solución».

Por otra parte, su mención a la «estructuración federal o federativa» a la que se podría acceder a partir del año 2000, cuando el Estado de las Autonomías hubiera culminado, dice algo de lo que se pensaba desde la dirección del PSOE sobre el Estado federal. Se reafirmaba que era un principio defendido únicamente para el futuro, pero demostrando que quizá ni siquiera estaban tan seguros de ello, ya que a partir de las palabras de González no se confirmaba que apostaran con seguridad por un modelo federal pleno a partir del 2000, sino que este podría ser federativo, lo que nos remite a las dificultades que desde los inicios de la Transición hubo en el Partido por aclarar esta fórmula.

La importancia de estas declaraciones es innegable, porque aunque no formaban parte de resoluciones emitidas de forma oficial y no tenían por qué ser compartidas por

---

<sup>247</sup> Discurso de Felipe González pronunciado ante el Club Siglo XXI el 12 de febrero de 1979. Citado en Emilio ATTARD: *Vida y muerte de UCD. Un análisis crítico y sincero de la evolución de sus miembros más destacados*, Barcelona, Planeta, 1983, p. 92.

la totalidad de los miembros del PSOE, habían sido realizadas por su máximo representante ante la opinión pública, imagen simbólica del Partido que debía trasladar a la sociedad las líneas estratégicas y los resultados de los debates que se habían producido en el Comité Federal y en la Comisión Ejecutiva, y no una suerte de opiniones personales<sup>248</sup>.

### 3. El análisis postelectoral

Como ya se ha mencionado, las expectativas de los socialistas no fueron cumplidas en los comicios de 1979, en los que lograron sólo el 30% de los votos frente al 35,2% de UCD, cuando sus perspectivas más optimistas auguraban justo lo contrario. Posiblemente, como han señalado algunos autores, la ofensiva del partido de gobierno, azuzando el fantasma del miedo fue exitosa y logró que muchos de los indecisos no se decantaran finalmente por el PSOE<sup>249</sup>. Entre otros motivos, como ha señalado Carles Castro tuvo una gran influencia lo siguiente:

el trasfondo de una democracia amenazada se había convertido en un elemento básico del escenario político a raíz del terrorismo etarra desde 1978, en «compleja relación dialéctica» con la amenaza de intervención militar. Por ello, Suárez no encontró grandes dificultades para pintar, con expresión grave, un panorama apocalíptico en caso de la victoria del Partido Socialista<sup>250</sup>.

Así, ante una escena dominada por el miedo a la radicalización que se podía producir tanto hacia la derecha como hacia la izquierda; y con la amenaza constante del terrorismo, que sin embargo los socialistas tenían siempre presente en su propuesta política, los indecisos no se decantaron por el PSOE pese a los pronósticos que esta formación manejaba<sup>251</sup>. Otro aspecto que les perjudicó notablemente fue el alto grado

---

<sup>248</sup> Así se explicaba en PSOE: *Este viejo y nuevo...*, pp. 540-545.

<sup>249</sup> La dureza de la confrontación electoral fue visible en todo momento, utilizando especialmente el recurso al miedo a través de la televisión que controlaba UCD, que tuvo su momento culminante en la apocalíptica intervención de Suárez en el último día de la campaña, Enric COMPANY y Francesc ARROYO: *Historia del socialismo español*, vol. 5, Barcelona, Conjunto Editorial, 1989, pp. 42-43. Quien también se refería al fracaso de las expectativas que se había depositado en los comicios sería José Félix Tezanos, quien decía que de igual modo que el PSOE había manejado unas encuestas que situaban a UCD y PCE como víctimas de un posible trasvase de votos en beneficio del PSOE, estos partidos habrían estudiado datos similares, lo que les condujo a dirigir «un importante esfuerzo en sus campaña *contra* el PSOE», especialmente UCD, que emplearía «a fondo todos los recursos posibles y agitando incluso los espectros del miedo», en José Félix TEZANOS: *Sociología del socialismo...*, p. 52.

<sup>250</sup> Carles CASTRO: *Relato electoral...*, p. 53.

<sup>251</sup> Según las encuestas postelectorales, en torno al 31% de los votantes decidieron su voto entre 20 días antes y el mismo día de los comicios. Como explica Félix Tezanos «Con tal margen de indecisos hasta el último momento, y con tan considerable porcentaje de abstencionistas, no es nada extraño, pues, que

de abstención que repercutió en especial a los socialistas<sup>252</sup>. Esta abstención se relaciona por algunos autores fundamentalmente con el desencanto que el PSOE habría generado con su política de consenso –especialmente con los Pactos de la Moncloa–, a lo que debía sumarse también el desplazamiento hacia un voto más a la izquierda por parte de algunos indecisos, que no veían en el PSOE una alternativa real al Gobierno<sup>253</sup>. También Juan Antonio Andrade ha puesto de relieve cómo habría sido UCD quien en realidad había rentabilizado la política de consenso, algo que ya habían señalado destacados analistas del momento como Juan Luis Cebrián<sup>254</sup>:

Los socialistas, llevados por eso que se llama *razón de Estado*, se vieron así abocados a la firma de los acuerdos que constituyeron a corto plazo un verdadero suicidio político de la oposición. Y esto no porque los pactos no fueran útiles y necesarios, sino porque el PSOE dio en ellos muchas cosas a cambio de nada o casi nada<sup>255</sup>.

La respuesta que dio el Partido a esta derrota electoral, que se sentía así sobre todo por las expectativas que se habían generado, no estuvo exenta de autocrítica, como demostró Felipe González en el discurso inaugural del XXVIII Congreso, buscándose en general explicaciones que de seguro tendrían en cuenta para su estrategia futura. Los análisis coincidían en algunos puntos con lo expuesto, y uno de ellos aludía precisamente a que su actuación responsable, que cualificaba al PSOE como partido de Estado, no les había proporcionado los éxitos merecidos:

El consenso, pues, no es un error histórico sino más bien un acierto. No obstante esta política de consenso ha tenido más costes de los que necesariamente debiera haber tenido para el Partido Socialista. (...) En líneas generales puede decirse que hemos legitimado la política gubernamental, sin haber exigido las contrapartidas necesarias<sup>256</sup>.

---

ningún pronóstico electoral lograra coincidir con los resultados que finalmente se obtuvieron en las urnas», en José Félix TEZANOS: *Sociología del socialismo...*, p. 79

<sup>252</sup> También a partir de encuestas postelectorales manejadas por los socialistas, en torno a un 24,2% de los que finalmente no votaron manifestaron que en algún momento tuvieron intención de votar al PSOE, en José Félix TEZANOS: *Sociología del socialismo...*, pp. 78-79.

<sup>253</sup> Según Carles Castro, existía en 1979 «un nutrido contingente de electores –mayormente jóvenes– que finalmente optaron por abstenerse, a la espera de la ocasión propicia para materializar la alternancia» o que votaron a «otras opciones de izquierda sin ninguna posibilidad real de desplazar a Suárez del Gobierno», en Carles CASTRO: *Relato electoral...*, p. 53. Aunque en cambio, el PSOE había manejado encuestas que indicaban que precisamente que la política de pactos en lo económico y para cuestiones constitucionales era valorado de forma muy positiva por el conjunto de la población, en PSOE: «Guía de campaña...», p. 40.

<sup>254</sup> Juan Antonio ANDRADE: *El PCE y el PSOE en...*, p. 145.

<sup>255</sup> Juan Luis CEBRIÁN: *La España que bosteza. Apuntes para una historia crítica de la Transición*, Madrid, Taurus, 1980, p. 32.

<sup>256</sup> PSOE: «Discurso de Felipe González...», pp. 20-21.

Sin arrepentirse de ese papel de guardián del nuevo sistema democrático, parece que como señala Andrade, «había llegado el momento de ejercer sin ningún tipo de complejos como partido de la oposición, desgastando a la UCD y demostrando a la ciudadanía que ellos eran su única alternativa viable». Pero sobre todo habían reafirmado la creencia que ya era firme, especialmente entre la dirección del PSOE, de que «las señas de identidad izquierdistas que tan útiles le habían sido para resituarse en la oposición a la dictadura lo hacían sumamente vulnerable a los ataques de sus adversarios en la democracia»<sup>257</sup>. Así pues, los resultados de las elecciones fueron «los catalizadores» del debate que se retomó durante el XXVIII Congreso, que implicaba la desaparición del término marxismo y que tenía en esto su aspecto más llamativo, pero que conllevaba otras cuestiones que afectaban a una moderación de la línea política que iba a repercutir en muchos otros aspectos<sup>258</sup>.

En el marco de esta política que debía tender a la moderación, que debía seguir siendo «de Estado» y que debía velar por la aplicación de la Constitución, aunque en sentido progresista, pero que al mismo tiempo debía hacer una mayor oposición al Gobierno, el tema del desarrollo del Estado Autonómico seguía ocupando un lugar importante. Y en este caso, como en otros, iba a ser difícil conciliar todos los preceptos sin que a veces se tendiera a la improvisación. Como veremos en el capítulo siguiente, las resoluciones de los Congresos cada vez se iban a adaptar más a la práctica política, también en este tema, pero las contradicciones y las ambigüedades no iban a desaparecer. A nivel general se iban a inclinar hacia una mayor racionalización, poniendo en valor un modelo en el que la unidad del Estado y la solidaridad e igualdad entre las nacionalidades y regiones iba prevalecer ante los derechos de los territorios con identidades diferenciadas. Pero por otra parte, las elecciones habían demostrado a los socialistas que no se debía subestimar el poder movilizador de los nacionalismos, sobre todo en algunos territorios.

De hecho, para Carles Castro, una lectura adecuada de los resultados electorales sería la que habría llevado al PSOE a corregir los errores sufridos para alzarse con el triunfo en 1982. Por un lado:

---

<sup>257</sup> Juan Antonio ANDRADE: *El PCE y el PSOE en...*, p. 147.

<sup>258</sup> Richard GILLESPIE: *Historia del Partido Socialista...*, p. 352. Pedro J. Ramírez, opinó que el aire triunfalista perjudicó a su imagen ante la opinión pública, haciendo aparecer unos resultados que a su juicio eran «bastante dignos» como «un estrepitoso fracaso», lo que desembocó en un «efecto “boomerang” que daría paso a la apertura de un proceso de autocrítica de imprevisibles consecuencias», Pedro J. RAMÍREZ: *Así se ganaron...*, p. 261.

La excepcional rapidez de reflejos del PSOE se manifestó también en el ámbito doctrinal. Consciente del flanco débil que representaba la permanencia de unas resoluciones ideológicas demasiado radicales (...) el tándem Alfonso Guerra-Felipe González decidió, tras la derrota electoral de 1979, apretar el acelerador de la apertura al centro<sup>259</sup>.

Y en segundo lugar, y esto es lo que más nos interesa, Castro considera que la otra clave de la victoria del PSOE en 1982 sería Andalucía. De hecho, este autor vincula el éxito de la estrategia socialista al fracaso de la de UCD a partir de la victoria de 1979. Para él, los centristas no supieron gestionar ni el problema económico; ni el del terrorismo –sobre el que, como hemos visto, el PSOE estaba haciendo pivotar gran parte de su programa–; ni el autonómico, donde más se evidenció su incapacidad. Y aquí es donde el PSOE habría conseguido sacar una de sus mayores ventajas: «la intuición y la agilidad del PSOE le permitieron ponerse a la cabeza de la reivindicación autonómica y descolocar incluso a los nacionalistas del PSA, que se habían convertido en un peligrosísimo competidor», logrando que su postura ante el referéndum del 28 de febrero de 1980 le otorgara un liderazgo indiscutido en esta región, tema que analizaremos más adelante<sup>260</sup>.

Así pues, el PSOE hizo autocrítica, y encontró que tenía un talón de Aquiles, representado por el auge de los nacionalismos en Andalucía y en el País Vasco, donde el fracaso electoral había sido mayor, pero esto no había sucedido, ni mucho menos en todo el territorio. De hecho, en una encuesta postelectoral del PSOE, que trataba de averiguar por qué aquellos que habían manifestado una posible intención de votar socialista, no lo habían hecho finalmente, únicamente un 4,8% había contestado: «Por considerar al PSOE poco preocupado por las cuestiones regionales»<sup>261</sup>. Pero, si en conjunto esta cifra no tiene demasiada representatividad, como José Félix Tezanos señalaba, cobraba especial importancia en un territorio como Andalucía, donde el 40% de los votantes del PSA se habría planteado votar al PSOE y al final no lo habría hecho, sobre todo, por las cuestiones regionales<sup>262</sup>.

Volviendo al análisis de conjunto, en líneas generales creían estar actuando como un Partido de Estado, sin caer en electoralismos y pagando los platos rotos de una

---

<sup>259</sup> Carles CASTRO: *Relato electoral...*, p. 58.

<sup>260</sup> *Ibid.*, pp. 55-57.

<sup>261</sup> Nótese que no se contemplan las cuestiones de las nacionalidades, sino sólo las regionales.

<sup>262</sup> José Félix TEZANOS: *Sociología del socialismo...*, pp. 83-84.

política poco clara por parte del Gobierno en materia autonómica, que estaba generando fuertes decepciones en algunos territorios y de la que habían sacado provecho los nacionalismos «burgueses» como les calificaban en algunos ámbitos. Pese a esto, desde algunos sectores también se reconocía la falta de una política clara a este respecto.

Lo que sucedía es que en el PSOE estaban haciendo compatible sobre el papel una política basada en el aliento a la proliferación de las demandas autonómicas, de las que se consideraban legítimos impulsores, con otra que entendía que esto debía estar supeditado a un modelo que primara una estructura estatal descentralizada administrativa y políticamente, pero coordinada, en la que la solidaridad y la igualdad fueran sus ejes vertebradores. Aunque teóricamente no vieran contradicción alguna, en ocasiones hacían autocrítica, tal y como se vio en la voz sobre «Nacionalidades y regiones» en el libro *Este viejo y nuevo partido*, cuando se culpaban de que en ocasiones habían podido favorecer el separatismo por la falta de profundización; o como se produjo por ejemplo en el XXVIII Congreso, cuando se censuraba una falta de comprensión del proceso autonómico por parte de la Ejecutiva<sup>263</sup>. Así se reflejaba también en *El Socialista*, cuando se hacía referencia a la acusación de uno de los representantes de Palencia, que criticaba que en política autonómica se hubiese «improvisado continuamente»<sup>264</sup>.

La realidad es que no era tan sencillo conciliar esa política planificada con la que los socialistas trataban de evitar una carrera descontrolada por las autonomías, intentando consolidar una estructura solidaria y unitaria, aunque respetuosa con las identidades diferenciadas; con los efectos prácticos que tenía esa generalización en las demandas y esa voluntad de encabezar los movimientos por los derechos nacionales en todos los territorios, generada tanto por convencimiento como por intereses partidarios. En esta situación, los bandazos eran comunes, y eran vividos a veces con estupor por propios y extraños. Precisamente, en su balance sobre la gestión de la Ejecutiva Federal en el discurso de apertura, el Secretario General hacía autocrítica sobre este asunto, y aducía errores en su política de información, pero no en el espíritu que les había guiado:

En el tema autonómico el Partido Socialista ha tenido un protagonismo importante aunque no suficientemente conocido por el conjunto de la sociedad. El fallo, pues, no está en la actitud del partido ante los procesos autonómicos, porque hemos sido

---

<sup>263</sup> PSOE: *Este viejo y nuevo...*, p. 428; *El País*, 18 de mayo de 1979.

<sup>264</sup> *El Socialista*, 110 (27 de mayo de 1979).



elemento decisivo en la formulación constitucional de dicho tema, sino en el escaso eco que nuestra posición ha tenido en algunos lugares o en algunos pueblos de España<sup>265</sup>.

Además de intuirse una relación entre ese fallo de comunicación y los resultados electorales, González continuaba realzando el modelo que priorizaba la viabilidad del conjunto del Estado, basado en los valores democratizadores, solidarios e igualitarios, prevaleciendo estos sobre los intereses «nacionalistas o regionalistas»:

Hemos encarado el proceso autonómico con una responsabilidad de Estado que, a veces, ha producido un fuerte desgaste de nuestro partido ante la opinión pública, frente a las posiciones ambiguas del Gobierno y a las demagogias de algunos grupos nacionalistas o regionalistas.

La vocación federalista del partido, puesta de manifiesto en todos los debates políticos que han acompañado a la fase previa al proceso electoral del 15 de junio, y a toda la elaboración del nuevo texto constitucional no se ha trasladado suficientemente a la opinión pública, sin embargo, será valorado históricamente como el camino más serio y consecuente hacia la nueva estructuración del Estado.

En definitiva, el partido tiene que asumir que el mantenimiento de una estrategia política rigurosa, al margen del grado de acierto que ésta comporte, tiene por sí misma unos costes que es necesario asumir<sup>266</sup>.

En opinión de su Secretario General, el PSOE era una alternativa de gobierno responsable, y como tal, obedeciendo su responsabilidad de Estado, se apostaba por un Estado federal que no era concebido más que como la manera de asegurar la unidad, siempre atendiendo en la medida de lo posible unos derechos que eran reclamados legítimamente por los pueblos que constituían ese conjunto, ese Estado-nación indivisible, construido a partir de la pluralidad<sup>267</sup>. Pero esto no impedía que les preocupara, de cara al electorado, el efecto perjudicial que podía tener la defensa de estos principios, sobre todo en algunos territorios. Sobre estos «costes» hablaba también en el mismo discurso cuando hacía un análisis detallado de los resultados electorales:

---

<sup>265</sup> PSOE: “Discurso de Felipe González...”, p. 25.

<sup>266</sup> *Ibid.*

<sup>267</sup> Felipe Guardiola confirmaría esta visión, llevándola posiblemente al extremo, al afirmar: “Yo creo que el PSOE ha sido siempre un partido bastante jacobino, un partido bastante centralista, y muy anclado en la idea tradicional de España con una diferencia de lo que piensa la derecha nula prácticamente, es decir que la visión ha sido muy de Estado, un partido de orden ha sido el PSOE en este tema”, *Felipe Guardiola Sellés*, 28 de octubre de 2015, entrevista realizada por Vega RODRÍGUEZ-FLORES, Valencia.

Al mismo tiempo, algunos grupos nacionales y regionalistas dieron un salto cuantitativo y cualitativo considerable, en detrimento fundamentalmente, aunque no exclusivamente, de nuestro partido (...)<sup>268</sup>.

Pese a todo, que jerarquizaran la defensa de unos principios sobre otros tampoco significaba que siempre fueran tan «rigurosos», ya que, como había sucedido hasta ahora, la política autonómica siguió manteniendo fuertes dosis de improvisación, al tratar de hacer compatible la «armonización» del proceso autonómico, con el cumplimiento de sus promesas anteriores. Además, pronto se darían cuenta de que en ciertos territorios iba a convenir mantener unas posiciones más activas en cuanto a la reivindicación autonómica que en otros, sobre todo a partir de la lección de las generales, que como se ha visto, habían demostrado con el auge de los partidos nacionalistas en territorios como Andalucía o el País Vasco, que era peligroso dejar que estas fuerzas capitalizaran todo este potencial. Así pues, la conciliación entre todas las «almas» que a este respecto convivían en el seno del Partido socialista no iba a ser fácil, y menos ante un panorama complicado por las estrategias partidistas que unas y otras formaciones iban desplegando, con grandes toques de improvisación, al reaccionar muchas veces por oposición al contrario. Todo esto contribuiría aún más al desconcierto e incluso a la crispación en algunos territorios, como el País Vasco, Andalucía o el País Valenciano, por ejemplo. Sobre estos dos últimos, en los que el proceso se enquistó con ayuda de las luchas partidistas, se reflexionó desde el PSOE:

Es una lucha política, una pugna en la que los socialistas intentan poner las bases políticas-legales para un futuro autonómico más amplio, más definitivo, más solidario. Pero los socialistas difícilmente van a poder explicárselo a los pueblos. Sin medios de comunicación propios, la demagogia del Partido de Gobierno poco a poco se irá imponiendo. Van a atacar al PSOE en aquellas regionalidades o nacionalidades donde los centristas no tienen el dominio absoluto de los entes preautonómicos con todo tipo de falsedades. Y, aún más, van a favorecer a esa falaz idea de que los socialistas son los dueños de la situación en Andalucía y País Valenciano. Y en alguna medida lo consiguen: identifican Andalucía con los socialistas, País Valenciano con los socialistas y, a continuación, cínicamente van a decir que sus respectivos presidentes no han hecho nada (?). Una perfecta encerrona<sup>269</sup>.

---

<sup>268</sup> PSOE: "Discurso de Felipe González...", p. 28.

<sup>269</sup> PSOE: *Este viejo y nuevo...*, p. 429.

La preocupación por el impacto social que tuviera la marcha autonómica y qué imagen se daba desde el socialismo en este aspecto era palpable. Una vez más, desde otro ámbito, se apelaba a los problemas de comunicación que existían sobre este asunto, aunque esta vez sin hacer autocrítica, la responsabilidad la trasladaban a los engaños que UCD podía haber transmitido a la población con la ayuda de los medios de comunicación. Es importante remarcar que en este caso se hacía referencia a dos territorios en los que las instituciones que debían conducir a la autonomía estaban controladas mayoritariamente, aunque no exclusivamente, por los socialistas. Territorios que fueron presa de los enfrentamientos entre unos y otros, llegando a convertirse en auténticos mártires de la causa. Pero no podemos llevarnos a engaño y creer que esta táctica sólo era seguida por los centristas. Por ejemplo, en Andalucía, erigirse en el futuro como valedores del proceso autonómico les benefició sobremanera, aunque esta estrategia no resultaba tan rentable en todos los lugares y por ello no la aplicaron por igual en todas las regiones. Muestra de ello podría ser el caso del País Valenciano, donde actuaron de forma muy diferente, posiblemente porque cuestiones específicas de este contexto consiguieron hastiar a parte de la sociedad y de la clase política sobre los límites de la autonomía, haciendo que no fuera tan ventajoso para el PSOE maximizar ciertas demandas para rentabilizarlas electoralmente<sup>270</sup>.

La cuestión es que más allá del apoyo a la causa autonómica, el PSOE tenía también muy en cuenta que la unidad de España no podía ser puesta en peligro, y también donde tenían la mayoría se frustraron muchas de las aspiraciones que habían alentado. Era un contexto dominado por la improvisación y las oscilaciones en el que era difícil mantener el equilibrio entre los considerados derechos legítimos de las nacionalidades; el deber de un partido de Estado que necesitaba convencer de que era una alternativa fiable; y los intereses partidistas y estratégicos de unos y otros<sup>271</sup>.

---

<sup>270</sup> Como ellos mismos afirmaran, la cuestión autonómica sobresalió por lo conflictiva y lo compleja que se tornó: “Si la rudeza de la confrontación y, en buena medida, el desaliento ha sido el denominador común de este período preautonómico, al acercarnos al País Valenciano tenemos que llevar hasta el extremo el significado último de estos conceptos”, en PSOE: *Este viejo y nuevo...*, p. 636.

<sup>271</sup> Los intereses electoralistas, sin ser sobrevalorados, deben ser tenidos en cuenta como un elemento más que entraba en juego junto al resto y que condicionaba, como el resto, la política autonómica. Para uno de sus dirigentes valencianos, Felipe Guardiola, la postura sobre esta cuestión se vio influida, aunque no exclusivamente, por los intereses estratégicos: «yo creo que (...) el PSOE no ha sido nunca ni entonces ni ahora un partido pro-nacionalista, en absoluto, tácticamente ha jugado con los nacionalistas según le ha convenido para (...) llegar al gobierno, o ganar elecciones, como cualquier partido», *Felipe Guardiola Sellés*, 28 de octubre...

En este intento de equilibrar todos los postulados e intereses se situaba por ejemplo, el socialista Plácido Fernández Viagas, Presidente entonces de la Junta de Andalucía y coordinador de la futura Comisión para asuntos de política autonómica<sup>272</sup>, quien expresaba lo siguiente en la voz «Andalucía» del libro del centenario:

Hablo, y no puede ser de otra manera, como socialista, miembro del Partido Socialista, y, por tanto, convencido de que este reto tan difícil de las autonomías para nosotros es un reto de solidaridad. Y convencido de que la conciencia autonomista que potenciamos con todos nuestros ímpetus, no puede separarse de la conciencia de la marginación, de dependencia cultural y económica, de liberación de los trabajadores andaluces, lo cual no será posible realizar sin la lúcida constatación de los objetivos compartidos por todos los pueblos de España.

(...) El reto de hoy es idear fórmulas eficaces de autogobierno habitadas de imaginación, pero no de demagogia. Para descartar la demagogia debemos esforzarnos (...) en racionalizar el proceso hacia la autonomía.

(...) sin pretender ocupar espacios de autonomía cuando desborden nuestras posibilidades inmediatas, por un simple afán competitivo, como si el proceso autonómico fuese de carácter deportivo, donde lo importante es marcar tantos en puerta ajena, que para algunos son las puertas de las otras autonomías. Tantos que, muchas veces, serían en nuestra propia puerta andaluza, pues la asunción de competencias que no van a incidir directamente en los puntos clave de la postergación de nuestro pueblo no es un tanto que nos apuntamos nosotros de ninguna manera<sup>273</sup>.

Y ¿qué se debe entender por los puntos clave que ayudarían a superar la postergación del pueblo andaluz? Tienen que ver con los que el PSOE venía estableciendo como prioritarios para el nuevo modelo de Estado, que no ponían en cuestión la vertebración de España como nación, sino que la fortalecían desde la solidaridad. La solidaridad una vez más era uno de los principios clave que además servía de pegamento para cohesionar los pueblos de España. El Estado de las Autonomías de los socialistas tenía la función básica de defender derechos identitarios, pero sobre todo, de redistribuir la riqueza y generar igualdad entre todos los ciudadanos a través de la solidaridad. Así lo pregonaban cuando la voz Andalucía se iniciaba con la siguiente cita, demostrando cuál era el espíritu que el libro quería pregonar sobre la

---

<sup>272</sup> La Comisión estaba formada también por Joan Raventós, Primer Secretario del PSC-PSOE, y por Rafael Fernández, Presidente del Consejo Regional de Asturias.

<sup>273</sup> PSOE: *Este viejo y nuevo...*, pp. 16-17.

autonomía, en concreto sobre la andaluza, una de las que más éxitos cosecharon durante la Transición, gracias precisamente al apoyo socialista:

Nosotros, socialistas, entendemos que la autonomía no puede ser concebida como una necesidad de defendernos «frente a los otros». Nosotros, como socialistas, vinculamos la autonomía a la puesta en marcha de una transformación real de la sociedad, de las relaciones de producción y de los mecanismos de distribución de la riqueza<sup>274</sup>.

En general en la mayoría de las voces referidas a los territorios españoles predominaba esta visión, expresada con mayor o menor intensidad<sup>275</sup>, pero en el País Vasco la cuestión se tornaba más delicada a causa de la especial situación que se vivía allí<sup>276</sup>. La solidaridad adquiría otras connotaciones, aparecía asimilada casi como un sinónimo de convivencia. Preocupaba el triunfo electoral del nacionalismo en las elecciones generales<sup>277</sup> –y dentro de éste el importante ascenso de Herri Batasuna– y el desplome que el PSE-PSOE había sufrido de 1977 a 1979<sup>278</sup>. En cualquier caso, el tono en esta voz era distinto al resto, se reiteraba la necesidad de no hacer en aquel territorio una política electoral ni partidista, lo que hace pensar en su manifestada voluntad de comportarse como un Partido de Estado. Y cuando se hablaba en esos términos lo importante era no dividir ni a España ni a Euskadi. Posiblemente, en muchos aspectos, allí era donde más fuerza cobraba el discurso de la unidad, donde la autonomía solidaria tenía su razón de ser para cohesionar y no para fragmentar:

---

<sup>274</sup> *Ibid.*, p.11.

<sup>275</sup> Por ejemplo, en la voz de Canarias explicaban como el socialismo había abogado siempre por una «pronta y progresista autonomía», cuando la gran oligarquía se acercaba al separatismo y cuando se le acabaron los «sueños autonomistas y aún separatistas» tras abrazar a UCD. Se presentaban por tanto como una fuerza responsable que siempre había mantenido el equilibrio necesario que lo alejaba del centralismo y del separatismo. *Este viejo y nuevo...*, p. 34.

<sup>276</sup> Multitud de autores se han referido a la excepcionalidad de la situación vasca, condicionada en gran medida por la violencia terrorista, que convertían a este territorio en un lugar clave para la solución del problema nacional pero también para la buena marcha del proceso de construcción democrática de España. Como ha escrito Juan Pablo Fusi: «en el momento de producirse la transición hacia la democracia había dos convicciones generalizadas: que el problema vasco sería el problema más grave de la transición y que no se resolvería sin la concesión al País Vasco de un régimen de autonomía que enlazase con la legalidad creada en 1932», en Juan Pablo FUSI: *El País Vasco. Pluralismo y nacionalidad*, Madrid, Alianza Editorial, 1984, p. 178. Véase también José Antonio PÉREZ: «La izquierda vasca...», pp. 195-219. Otros autores han señalado también la excepcionalidad vasca marcada por la campaña de abstención promovida por el PNV en el referéndum constitucional, que restó legitimidad a la transición en este territorio, Antonio RIVERA: «La transición en el País Vasco: un caso particular», en Javier UGARTE: *La transición en el País Vasco y España*, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1998, pp.81-82.

<sup>277</sup> El voto nacionalista había aumentado en las tres provincias vascas un 10%, Andrea MICCICHÈ: *Euskadi socialista...*, p.211.

<sup>278</sup> Estos resultados contrastaban además con los del resto de territorios (en términos comparativos respecto a las elecciones de 1977), como se puede consultar a partir de las tablas electorales realizadas por el PSOE, en las que se comparaban los resultados, por provincias, de las elecciones de 1979 y las de 1977, en *Este viejo y nuevo...*, pp. 276-297.

Hemos tratado de introducir en el País Vasco un nuevo concepto de autonomía, la autonomía solidaria, la autonomía que no sólo no rechaza lo español, ni es un primer paso hacia la independencia, sino que, por el contrario, es una autonomía que busca la mayor solidaridad con los pueblos de España, y compartir responsablemente los problemas del Estado, de todo el Estado y de cada uno de los pueblos que lo componen<sup>279</sup>.

Pero este concepto de la autonomía no era nuevo, era la autonomía en la que desde el principio había creído el PSOE, que en el País Vasco se veía como la solución a un problema que se había recrudecido más que en ningún otro lugar por la acción de ETA, a la que criminalizaban. Como en otras ocasiones parte de la culpa la hacían recaer en un centralismo intolerante que había agravado las cosas, pero señalaban a la banda armada como la responsable de la violencia, descargando incluso de parte de la culpa a las Fuerzas de Orden Público<sup>280</sup>.

Tras la lucha armada, la otra preocupación del PSOE en Euskadi era el nacionalismo que consideraba excluyente, «sabiniano», que dividía en lugar de unir al conjunto de la sociedad, contra el que creían que debían luchar los políticos «nacionalistas» y los «partidos de ámbito estatal». Defendían que la sociedad vasca estaba formada por: «un viejo pueblo que se ha ido perpetuando a lo largo de los siglos (...) depositario de la lengua, el Euskera –las costumbres tradicionales, el espíritu vasco–, y que es portador de una idiosincrasia propia y diferenciada»; pero también por los emigrantes y los hijos de estos que no participaban ni siquiera de las posturas vasquistas más moderadas pero que habían echado raíces igualmente en aquel territorio y que eran tan vascos como los primeros. Se trataba pues, de una «comunidad confluyente» que debería devenir según su proyecto en una «comunidad vasca armonizada, sin exclusiones ni discriminaciones» y para ello veían necesario:

que se evite y erradique totalmente la tentación, muy habitual en el Partido Nacionalista Vasco, de que una parte del pueblo pretenda representar a todo el pueblo, o que sectores de la población sean intolerantes entre sí, pretendiendo imponer unilateralmente sus

---

<sup>279</sup>PSOE: *Este viejo y nuevo...*, p. 343.

<sup>280</sup> Aunque reconocía que en el pasado y en el presente estas Fuerzas de Seguridad habían cometido errores, disculpaba los que se habían producido en democracia porque, a causa de las situaciones personales de injusticia que debían soportar (desde sus condiciones de vida, su marginación por gran parte de la sociedad vasca, o el hecho de saber que sus vidas estaban amenazadas): «viven en un estado psicológico propicio al nerviosismo, al error e incluso al revanchismo contra todo lo vasco», PSOE: *Este viejo y nuevo...*, p. 335.

criterios o resucitando el maquetismo sabiniano, tentación ésta en que incurren algunos sectores de la izquierda abertzale, que no consideran vascos o patriotas más que a ellos mismos<sup>281</sup>.

La campaña electoral se había orientado fundamentalmente en dos direcciones: la primera era la de postularse como alternativa de gobierno tanto en España como en Euskadi –de hecho, la Ejecutiva socialista estaba convencida de que iba a mejorar los ya buenos resultados de 1977–; y en segundo lugar, había llevado a cabo «una crítica áspera y sin frenos al nacionalismo del PNV y sobre todo al Gobierno de la UCD». Cuando criticaban al PNV se estaban postulando al mismo tiempo como el partido de izquierda que no anteponía el problema nacional a los demás problemas, pero que era capaz de recoger parte de sus sensibilidades, haciendo, como explica Micciché, de partido «cremallera» entre «el mundo nacionalista y la izquierda estatal»<sup>282</sup>. Aunque siempre admitiendo aquellas sensibilidades de manera secundaria, como demostraba su anteproyecto electoral: pacificar del País Vasco; solucionar el problema del paro y en general de la crisis económica; y apoyar el Estatuto de Autonomía, eso sí, dejando claro que el problema nacional no era el prioritario para ellos, al añadir «salvo en las cuestiones que afectan los intereses de los trabajadores»<sup>283</sup>.

El contraste con la voz que aludía a Cataluña era evidente, en la que el tono era mucho más despreocupado. Me atrevería a afirmar incluso, que tenía un triunfalismo que en general no dominaba tampoco el análisis del resto de los territorios. Parecía que el proceso autonómico discurría allí por los cauces de una solución pactada por parte de las fuerzas políticas, entre las que el PSOE había obtenido la mayoría en las pasadas elecciones. La solución autonómica era presentada como ejemplo, y calificaban al proceso preautonómico catalán como «el más trascendente de cuantos se han llevado durante la etapa de la transición» ya que había sido Cataluña «la nacionalidad que por historia, madurez y especial situación política interna ha llevado con más calma, responsabilidad y ritmo el proceso». Pero si hay algo que llama la atención aquí es un matiz dentro de la tradicional apelación, común en todas las voces, a un pasado histórico glorioso: «Unida con Aragón protagonizó el primer imperio español que llevó la

---

<sup>281</sup> *Ibid.*, pp. 33-334.

<sup>282</sup> Andrea MICCICHÈ: *Euskadi socialista...*, p.198 y 187. Aunque en la autocritica interna posterior a los comicios se iba a hacer referencia a una política seguidista de la UCD en algunos temas para enfrentarse al nacionalismo del PNV, algo que afirmaban habría sido un decisivo error de cálculo.

<sup>283</sup> PSE (PSOE): “Acta de la reunión ordinaria del Comité Nacional del PSE-PSOE, celebrada en Vitoria los días 27 y 28 de enero de 1979”, ABFPI, Fondo José Antonio Maturana Plaza, CJAMP-1005-4.

bandera de las cinco barras hasta las torres de Atenas». Fue el primero de los pueblos, pero de los pueblos españoles. Venían a decir que el pueblo catalán era un gran pueblo español, de hecho se convertía en todos los sentidos en el paradigma de pueblo español, que había demostrado su valía a la cabeza de España en el pasado, y que ahora en el presente lo seguía haciendo, conduciendo al resto de las nacionalidades y regiones, a través de su ejemplo, por la vía de una modélica autonomía<sup>284</sup>.

Para finalizar es interesante señalar cómo la lectura de las generales influyó en la campaña de las elecciones municipales, celebradas apenas un mes después, el 3 de abril de 1979. La prevención ante el auge de los nacionalismos también alcanzó la estrategia de estos comicios, algo que se puede observar, por ejemplo, a partir del control al que quería someterse el tratamiento de esta cuestión en su guía de campaña confidencial. En esta se advertía a los coordinadores de campaña provinciales de lo siguiente:

En las zonas en las que se presentan partidos regionalistas o nacionalistas deberá elaborarse respecto a ellos una actitud en consecuencia con la campaña aquí desarrollada y consultas con el CEF<sup>285</sup>.

Además, el tema autonómico adquiriría un protagonismo que posiblemente no había tenido en la campaña anterior, sobre todo teniendo en cuenta que no le correspondía realmente al ámbito municipal resolver este tipo de cuestiones. Así y todo, uno de los cinco puntos del apartado «Argumentos importantes», trataba la cuestión autonómica: «Es importante que en las argumentaciones se introduzcan ideas de carácter regionalista y nacionalista relacionadas con las autonomías»<sup>286</sup>.

En la práctica, estas ideas se relacionaban en muchos de los programas municipales, con otra que también esgrimían en la guía de campaña: la de que los socialistas proponían una nueva forma de gobernar, participativa, transparente, honrada y eficaz. Algo que se conectaba fácilmente con la descentralización que primero tenía que producirse a nivel autonómico, pero que debería tener una correspondencia a nivel

---

<sup>284</sup> PSOE: *Este viejo y nuevo...*, p.49.

<sup>285</sup> PSOE: “Guía de campaña. Confidencial. Elecciones Locales 79”, ABFPI, fa 3121, p.1.

<sup>286</sup> *Ibid.*, p.14. A modo de ejemplo, el programa de Santander reivindicaría fervientemente la lucha autonómica y sus derechos regionales, pero siempre enmarcados en una unidad solidaria con el resto de España: «Los socialistas de Cantabria hemos defendido, sin reservas, el carácter regional de Cantabria y que nuestra Comunidad alcance cotas de autonomía en igualdad de condiciones que el resto de Regiones y Nacionalidades del Estado. Hemos manifestado, igualmente, nuestra plena solidaridad con aquellas Regiones y Nacionalidades que forman un Estado común que es España», en “Cambia Santander con los socialistas. Elecciones municipales 79”, ABFPI, fa 289.



comarcal y local, favoreciendo la democratización del poder y la eficacia, promoviendo en definitiva valores propios de la subsidiariedad asociados a la Autonomía<sup>287</sup>. Era visible también en su programa general para las elecciones locales, donde dos de los puntos que definían su planificación municipal serían los siguientes:

- a) Para los socialistas, que hemos desarrollado una eficaz batalla por regular en la Constitución española un marco institucional amplio para las comunidades autónomas y vamos a luchar por conseguir dotarlos de su correspondiente Estatuto, la coordinación política y técnica entre los entes autonómicos y los municipales resulta obligada. (...)
- b) Pero si la descentralización y subsiguiente autonomía es un punto clave de nuestro manifiesto municipal socialista, también lo es la comarcalización y la metropolización<sup>288</sup>.

Pero además, esta mayor descentralización, que debía abarcar desde lo autonómico a lo local, llevaba también aparejada la «descentralización de la acción cultural», ya que según su programa sería desde esta esfera desde donde se terminaría «con el aislamiento cultural de las nacionalidades, regiones, provincias y municipios», lo que no significaba, como aclaraban «llevar actividades de Madrid a provincias, sino buscar nuevas formas de fomentar una toma de conciencia cultural, de alentar un sentido de responsabilidad y crítica, así como de iniciativas en el ámbito cultural a nivel local»<sup>289</sup>. Era una forma de descentralizar y promover la cultura, acercándola a todos los ciudadanos, tanto si ésta era nacionalmente española como si procedía de otra de las identidades nacionales que convivían en el Estado que el PSOE concebía de forma plural. Así se reafirmaban en la versión ilustrada del programa local, cuando decían que los alcaldes y concejales: «Fomentarán y protegerán todas las actividades tradicionales populares y folklóricas; fiestas, romerías, procesiones, carnavales, etc.»<sup>290</sup>.

Finalmente los resultados supusieron un gran triunfo para la izquierda, según el propio Partido, consiguiéndose que el 70% de la población estuviera gobernada por

---

<sup>287</sup> Servirían como muestra los programas municipales de Madrid o Segovia, que incidirían sobre todo en la necesidad de la descentralización para favorecer la autonomía municipal: “Programa para Madrid. Municipales 79”, ABFPI, fa 691; “Programa PSOE”, ABFPI, fa 928.

<sup>288</sup> PSOE: “Programa. Elecciones Locales 79”, ABFPI, fa 283, p.2.

<sup>289</sup> *Ibid.*, p. 8.

<sup>290</sup> PSOE: “Cambia tu ciudad con los socialistas”, AHUV, Fons Alfons Cucó, 014/011.

alcaldes vinculados al PSOE-PCE, gracias al acuerdo entre estos<sup>291</sup>. Pero otra tendencia se confirmaba, la del auge de los partidos nacionalistas, que los socialistas no iban a ignorar.

#### **4. Euskadi, Andalucía y el peligro nacionalista**

Lo que parece claro es que tras los resultados electorales, la preocupación sobre su comportamiento en referencia a la cuestión nacional se iba a centrar sobre todo en Euskadi, donde el descalabro había sido muy importante y en parte inesperado; pero también en Andalucía, donde habían perdido las elecciones frente a UCD y donde había surgido con fuerza el nacionalismo andaluz con el Partido Socialista de Andalucía, que había obtenido 5 escaños. Por ello, no es de extrañar que a partir de aquel momento estos dos territorios tuvieran un papel importante en la estrategia autonómica del PSOE, que hacía el siguiente análisis:

el panorama político quedó profundamente alterado por la aparición de una serie de factores: la explosión del voto nacionalista, principalmente en Euskadi y Andalucía, que sitúa el problema vasco en particular y el de las comunidades autonómicas en general, en primer plano<sup>292</sup>.

En Andalucía se analizaron los resultados de las generales desde la Comisión Ejecutiva Regional de la Federación Socialista Andaluza del PSOE en diciembre de 1979, con motivo de su II Congreso. Lo hicieron en la *Memoria de Gestión*, que dedicó un apartado para ello. Eran mucho más optimistas de lo esperado, incluso llegaban a felicitarse por ser la fuerza hegemónica en número de votos, pero pronto cambiaban el tono para referirse al PSA, que a partir de la retórica que utilizaban, parecía ser su mayor obstáculo. Su miedo procedía de la incertidumbre de que en el futuro el nacionalismo erosionara aún más su fuerza electoral, ya que relacionaban directamente la disminución en la recepción de votos que se había dado en 1979, con el aumento del voto nacionalista:

---

<sup>291</sup> PSOE: *Este viejo y nuevo...*, p. 316. Por otra parte, a pesar de la victoria en las municipales, Felipe González matizaba el triunfo del PSOE de la misma manera que había matizado el de la UCD para las generales, en PSOE: "Discurso de Felipe González...", pp. 30-31. En un sentido similar se expresaría Richard Gillespie en su análisis de estos comicios, minimizando el éxito que se había trasladado a la opinión pública en aquel momento, ya que aunque el voto para el conjunto de la izquierda sí había aumentado, según este autor no había sido tanto gracias al PSOE: «los resultados del PSOE en las elecciones municipales resultaron igual de desalentadores para los estrategas del partido», en Richard GILLESPIE: *Historia del Partido Socialista...*, p. 353.

<sup>292</sup> PSOE: *Este viejo y nuevo...*, p. 273.

Esta eclosión del PSA viene a distorsionar el mapa político andaluz por cuanto que por su carácter oscilante e interclasista, puede ser un factor que contribuya a la inestabilidad del proceso de constitucionalización andaluz.

En realidad el PSA (...) intenta atraer los votos populares sobre la base de despertar la conciencia de marginación latente en el pueblo, y de la autoafirmación consecuentemente necesaria.

No hay que ocultar que aunque el resultado electoral supone una consolidación del PSOE, es al mismo tiempo índice preocupante de la dirección que pueden tomar los votos de una franja del pueblo donde la conciencia de clases no está suficientemente desarrollada<sup>293</sup>.

Otras voces se alzaron para alertar sobre estos acontecimientos y criticar la actuación que había guiado al Partido en estos asuntos, como la de Arturo Val del Olmo, delegado del congreso por la agrupación de Vitoria y Secretario General de la UGT de Álava, que preparó un documento dirigido «a todos los delegados del XXVIII Congreso» en el que criticaba la gestión de la Comisión Ejecutiva expresando lo siguiente:

Si analizamos los resultados electorales, aparece como una constante el resurgimiento de los movimientos nacionalistas y autonomistas en Euskadi, Galicia, Canarias, Aragón y sobre todo Andalucía. Quizá no haya sido una casualidad que en Euskadi y Andalucía, los dos únicos sitios en que el PSOE dominaba los órganos preautonómicos hayan sido precisamente los sitios donde la derrota electoral ha sido más clara y concluyente<sup>294</sup>.

---

<sup>293</sup> FSA-PSOE: “Memoria de Gestión. II Congreso de Andalucía”, Sevilla, 7-9 de diciembre de 1979, ABFPI, Fc 878, p. 4. 2. Es interesante que se refirieran al despertar de la conciencia de marginación del pueblo y no de la conciencia nacional, ya que daría a entender que las reivindicaciones autonómicas andaluzas estaban más conectadas con un sentimiento de agravio que con uno de conciencia identitaria diferenciada de la española. En cualquier caso, no sería la única región que identificara el proceso autonómico con la solución al subdesarrollo permitiendo el equilibrio territorial. Con el lema «Soluciones murcianas a los problemas murcianos en solidaridad con las restantes regiones y nacionalidades de España» la Federación murciana hablaba desde esta óptica en su programa electoral: «El PSOE considera que el desarrollo de las autonomías, es camino obligado para corregir desequilibrios regionales y labor de la máxima trascendencia en Regiones que como la nuestra sufre en tantos aspectos la marginación y el abandono del poder central», “Programa del PSOE. Para el gobierno de la región murciana», ABFPI, Fc 77, p.1

<sup>294</sup> Una reflexión como ésta puede arrojar luz a lo que fue sucediendo en un lugar como el País Valenciano, donde el PSOE, como se verá, fue abandonando la reivindicación nacional progresivamente. Quizá, dentro del Partido se observaba que el nacionalismo (que había sido integrado principalmente dentro del propio PSOE) no suponía una amenaza para los socialistas, que también controlaban el Consell. Los resultados del PSOE no fueron tan distintos en ambos territorios, mayoritarios en votos, en Andalucía tuvieron un escaño menos que UCD y en el País Valenciano empataron con los centristas. Así

La política seguida en el tema autonómico nos ha hecho aparecer ante amplios sectores de la clase trabajadora y del pueblo como corresponsables de la política antiautonómica del Gobierno de Suárez. Por otra parte, frente a la política independentista planteada por los nacionalistas radicales nuestra única respuesta ha sido la afirmación de que estamos a favor de un estado único. En realidad hemos dejado todo el camino libre a estos movimientos para que establezcan una cuña de división en el seno del movimiento obrero (...).

Si estos movimientos nacionalistas y autonomistas han avanzado, la responsabilidad no es exclusivamente de la política del Sr. Martín Villa, sino también de que la dirección de nuestro partido no ha combatido suficientemente en este aspecto la política del Gobierno (...).

Todo esto al lado de una defensa incondicional de las llamadas fuerzas de Orden Público y el abandono total del derecho de autodeterminación complican la enorme derrota sufrida por el partido en uno de sus bastiones tradicionales: Euskadi, podemos decir sin exageración que nunca la militancia y la influencia del partido en Euskadi ha sido tan baja en toda nuestra historia.

En el caso de Andalucía aunque no disponemos de datos nos parece que la política seguida en torno al tema autonómico nos ha perjudicado notablemente. Según nuestras noticias Alfonso Guerra declaró una y otra vez que...«el andalucismo no tiene justificación histórica»... para los marxistas la defensa de las autonomías no se basa en justificaciones históricas sino en el estado actual de la conciencia nacional o autonómica de las masas de la población. Si los andaluces quieren la autonomía los marxistas tenemos que explicarles que estamos a favor de la más amplia autonomía para Andalucía, pero que eso no va a solucionar ninguno de los problemas vitales de la clase obrera y el pueblo andaluz<sup>295</sup>.

Estas críticas demuestran una vez más que los socialistas no formaban parte de un bloque homogéneo sin fisuras, como no sucedía por otra parte en ningún partido. Sobre estas cuestiones, fuera la que fuese la línea mayoritaria y la establecida por la dirección, había diferencias, que serían más notables en los territorios en los que existía una mayor conciencia identitaria por razones históricas.

---

pues, la diferencia sustancial que haría que no se mencionara al País Valenciano era que en este territorio no había una fuerza nacionalista que pudiera erosionar su electorado.

<sup>295</sup> Arturo VAL DEL OLMO: "A todos los delegados del XXVIII Congreso. Crítica a la gestión de la Comisión Ejecutiva" AHUV, Fons Alfons Cucó, 021/030, p. 10.

La realidad se había revelado dura, fundamentalmente en el País Vasco, y la estrategia de «partido cremallera» no se había revelado fructífera. Como señala Andrea Micciché:

Las elecciones del 1 de marzo de 1979 representaron un dramático momento de cambio para la dirección socialista. Las grandes ilusiones ligadas a la posibilidad de mejorar el positivo resultado de las consultas democráticas de junio de 1977 y el protagonismo asumido por los socialistas vascos en los procesos de preautonomía y en el mismo debate constitucional no se transformaron en un resultado a la altura de las expectativas, señalando, por el contrario, un durísimo despertar para un partido que se había presentado como alternativa al nacionalismo<sup>296</sup>.

La sensación de fracaso era enorme, y así lo demuestran los testimonios de sus protagonistas, como el del Secretario General del PSE-PSOE, Txiki Benegas, quien señalaría un tiempo después su abatimiento ante los resultados: «Creo que es mi primera derrota política seria. Me siento fracasado y tengo la tentación de creer que todo el esfuerzo ha sido inútil, que el problema no tiene solución, o al menos yo no la veo»<sup>297</sup>. Otros protagonistas del momento dejaron testimonios similares, como el que ha recogido Andrea Micciché de José Antonio Maturana, diputado y miembro del Comité Ejecutivo, indicando además que las elecciones supusieron un punto de inflexión en la estrategia del Partido:

Se trató de una derrota dolorosísima, de un «terrible shock», como varias veces lo ha definido José Antonio Maturana durante nuestras conversaciones. La fuerte sangría de votos marcó el final de una estrategia política, seguida desde el principio de la Transición y que ya había entrado en crisis durante los días del referéndum y de la redacción del Estatuto<sup>298</sup>.

Los análisis se centraron, por una parte, en explicar el desplome a partir de causas externas, relacionadas con la dinámica ya planteada para el conjunto de España, explicando los resultados a partir de la abstención y el desencanto nacido entre la población a raíz de la política de «responsabilidad» seguida en el conjunto del Estado

---

<sup>296</sup> Andrea MICCICHÈ: *Euskadi socialista...*, p. 208.

<sup>297</sup> Txiki Benegas: *Euskadi: sin la paz...*, p. 115. De hecho, ante el decepcionante resultado, Benegas puso su cargo a disposición del Comité Ejecutivo y Comité Nacional de Euskadi «por considerar que los malos resultados obtenidos así lo requieren», PSE (PSOE): “Acta de la reunión extraordinaria del Comité Nacional del Partido Socialista de Euskadi PSOE, celebrada en Vitoria el día 7 de abril de 1979”, ABFPI, Fondo José Antonio Maturana Plaza, CJAMP-1005-4, p. 2.

<sup>298</sup> Andrea MICCICHÈ: *Euskadi socialista...*, p. 208.

por el PSOE, con el añadido de la especial situación vasca<sup>299</sup>. Así, en este territorio, a lo anterior habría que sumar la ausencia de libertad que supondría el miedo a la violencia terrorista<sup>300</sup>, y un Consejo General Vasco presidido por un socialista, Ramón Rubial, que no había obtenido éxitos visibles<sup>301</sup>. De hecho, Benegas aludiría a todas estas causas, con un tono victimista, acusando tanto al PNV como a UCD de no haber permitido que a la altura de marzo de 1979 se hubiese desbloqueado la situación, haciendo aparecer al PSE-PSOE como los responsables del estancamiento:

¿Explicaciones? Aumenta la abstención y cuando en el País Vasco aumenta la abstención nosotros perdemos votos. Lo que pudo suceder en el 79 es que al ver que una determinada alternativa política ha tratado durante año y medio de encauzar el problema vasco y no lo ha conseguido, el electorado opta por ver si otro resuelve el problema. También es cierto que tuvimos poco tiempo (...) y otros recogen parte del trabajo realizado por nosotros<sup>302</sup>.

Pero junto a esa imputación a causas externas de la responsabilidad de los resultados se añadió, al menos de forma interna, una fuerte autocrítica, valorando los problemas que el propio PSE-PSOE había tenido para conectar con la población, entre

---

<sup>299</sup> En sentido similar Virginia TAMAYO: *Génesis del Estatuto de Gernika*, Bilbao, Instituto Vasco de la Administración Pública, 1991, p.120; Raúl LÓPEZ, María LOSADA y Carlos CARNICERO: *Rojo esperanza. Los socialistas vascos contra el franquismo*, Vitoria, Ikusager Ediciones, 2013, p. 229

<sup>300</sup> Andrea MICCICHÈ: *Euskadi socialista...*, pp. 215-217.

<sup>301</sup> Rubial ganó al candidato del PNV, Juan Ajuriaguerra, tras 8 votaciones que tuvo que desempatar UCD, posicionándose junto a los socialistas, algo que molestó a los nacionalistas vascos, que creían que les correspondía la presidencia por haber obtenido el mayor número de votos en las elecciones, y que ayudó, entre otras cosas, a su desvinculación del Consejo General Vasco. Véase Diego MUÑOZ: "Una larga transición: nacionalismo vasco y cambio político en Euskadi", en Manuel ORTIZ (coord.): *Culturas políticas del nacionalismo español. Del franquismo a la transición*, Madrid, Catarata, 2009, p. 141; y Virginia TAMAYO: *Génesis del Estatuto...*, p. 98.

<sup>302</sup> En otro momento hace graves insinuaciones sobre los intereses de UCD y PNV de que en aquella etapa los socialistas no obtuvieran éxitos presidiendo el Consejo General Vasco: «nos encontramos con la paradoja, no sé por qué razones, nunca lo he llegado a entender, de pasar prácticamente del año 78 a las elecciones del 79 sin conseguir nada. Y sin nada que ofrecer como producto de la vía del diálogo y la negociación al pueblo vasco, frente a la vía de la violencia y del enfrentamiento frontal. Se tenía que haber propiciado y demostrado al pueblo vasco que a través de una institución como el Consejo General del País Vasco, a través del diálogo, a través de la negociación, se producían frutos y se conseguían metas. Y no fue así (...) lo que se nos alegaba es que no estaba la Constitución hecha, y al no estarlo no se podían adoptar transferencias o decisiones que pudieran condicionar el Proyecto Constitucional. Y algo de razón había en ello. Lo que pasa es que, en este período, empieza a irse el País Vasco de las manos. (...) No quiero pensar mal, pero se da la circunstancia de que Ramón Rubial es el primer presidente socialista de una comunidad autónoma y el primer miembro del PSOE, por decirlo de alguna forma, que ostenta un poder institucional. No me gustaría pensar que porque había allí un presidente socialista no se hiciera un proceso de transferencias rápido (...) Yo creo que esta reflexión se introduce a partir de otro hecho fundamental, y que ya es el inicio de lo que puede ser la falta de encauzamiento del problema vasco: la actitud que adoptan los nacionalistas ante la Constitución del 78», Txiki BENEGAS: *Euskadi: sin la paz...*, pp. 86 y 116.

los que su actitud ante la cuestión nacional iba a tomar protagonismo<sup>303</sup>. La primera demostración en este sentido se encuentra en el Acta de la reunión extraordinaria que se celebró el 7 de abril, en la que se valoraron las elecciones generales y municipales y Tiki Benegas expuso «las causas que han originado una sensible pérdida de votos» respecto a junio de 1977. El acta comienza señalando las causas que, siendo ajenas a su actuación habían sido responsables en primera instancia de que su estrategia no hubiera sido exitosa:

Se destaca que la estrategia llevada durante este tiempo ha sido la de aparecer como el Partido capaz de superar la división del País en dos comunidades, lo que nos conduce a asumir la Presidencia del C.G.V., con lo que el P.NV., al ver quebrada su hegemonía nacionalista, se radicaliza y pasa a hacer una política demagógica inhibiéndose de los problemas del país: violencia, paro, etc. Por tanto toda la responsabilidad del trabajo en C.G.V. recae en los Consejeros Socialistas con el consiguiente desgaste que ello supone.

Igualmente se valoran como desfavorables para el Partido los temas de la negociación con ETA, que no se pudo concretar en nada y que UCD aprovechó de cara a la opinión pública<sup>304</sup>.

Pero a estas justificaciones esgrimidas habitualmente en aquel momento —a las que por supuesto se añadía la de la negativa incidencia de la abstención— se sumaban otros aspectos que habían incidido en la pérdida de votos y que eran vistos como errores propios. Por un lado, se mencionaban los cometidos por la formación vasca, entre los que estaba no haber formado un Grupo Parlamentario propio; su actitud ante la integración de Navarra en Euskadi, tema «en el que el Partido ha variado la postura inicialmente adoptada»<sup>305</sup>; los problemas con U.G.T, que les habían impedido llevar a

---

<sup>303</sup> Como Andrea MICCICHÈ ha señalado, «la Ejecutiva socialista puso en marcha una más profunda reflexión interna acerca de las posibles causas de aquella situación y de las lagunas en la estrategia política del partido. La reunión del 7 de abril del Comité Nacional condensó en pocas horas las críticas, las insatisfacciones y los malhumores internos provocados por una línea política que había sido claramente errática. Y fue justamente José María Benegas quien propuso la primera reflexión seria acerca de la situación real del socialismo vasco», Andrea MICCICHÈ: *Euskadi socialista...*, p. 227.

<sup>304</sup> PSE (PSOE): «Acta de la reunión extraordinaria...», p.2

<sup>305</sup> Según Txiki Benegas, el cambio de postura se había iniciado desde que la Constitución previó que sería el pueblo navarro el que decidiría sobre su incorporación al País Vasco, ya que a partir de aquel momento «los compañeros de Navarra cambian de actitud», entre otras cosas, «porque la organización crece y, por lo tanto, tiene un pulso más directo de lo que está pensando la propia sociedad navarra», Txiki Benegas: *Euskadi: sin la paz...*, p. 95. Desde entonces mantuvieron deliberadamente una postura errática, de hecho, el Comité Ejecutivo acordó no definirse por el momento, manteniéndose en una «tercera vía». Los días 29 y 30 de abril adoptaron el siguiente acuerdo: «se destaca que ahora solo cabe una solución ecléctica. Como conclusión se puede señalar que la política en Navarra debe caracterizarse por una tregua, ya que no está consolidada la opinión de nadie. No estamos obligados a dar una solución ya desde Navarra; no hay otro Partido de izquierdas navarrista que nos pueda quitar terreno. Mantener

cabo una verdadera política de clase; o no haber podido explicar suficientemente ante la opinión pública su salida de la Ponencia redactora del Estatuto. En cuanto a la repercusión negativa que había tenido la acción del PSOE a nivel estatal, se aludía a la política de consenso y al desencanto de los electores, pero también, y quizá esto es lo más interesante, a la moderación que les había hecho perder votos en Andalucía y Euskadi:

Por lo que se refiere a la incidencia en Euskadi de la política del Partido a nivel estatal, se destacan como factores negativos los siguientes: la política de consenso, que se consideró como la única viable para consolidar la democracia en España y posibilitar una Constitución, pero que apareció desfigurada ante la opinión pública y produjo un gran desencanto en parte del electorado. Igualmente el aparecer como el Partido alternativo de poder condujo a una política de enorme moderación para ganar las elecciones generales e hizo perder votos en zonas donde la inestabilidad social es grave, como son Andalucía y Euskadi<sup>306</sup>.

Aunque en este análisis la cuestión nacional estaba presente, fue en el debate posterior en el que intervinieron las Agrupaciones locales, en el que se le dio una mayor importancia, del mismo modo que se tocaron otros muchos temas. Además de incidir de nuevo en la falta de una política de oposición y de una verdadera política de clase<sup>307</sup>, se reiteró que la preautonomía había resultado una trampa para los socialistas. Se manifestaron posturas bastante críticas respecto a la política seguida por el Partido, indicando por ejemplo que había sido negativo el «duelo PNV-PSOE en el Senado sobre el tema de la enmienda foral de la Constitución»; que se hubieran saltado las resoluciones de los Congresos en temas como el de la autodeterminación; que no hubieran sabido infundir seguridad a los inmigrantes que habrían optado por «un falso intento de integración» en la comunidad abertzale; o que existieran planteamientos internos en contra de lo vasco<sup>308</sup>.

De nuevo, los días 29 y 30 de abril se debatió sobre los posibles errores cometidos por el Partido y que pudieran explicar los resultados electorales, en este caso

---

una tercera vía como perspectiva y no como delimitación institucional», PSE (PSOE): “Acta de la reunión celebrada en San Sebastián los días 29 y 30 de abril de 1979 por el Comité Ejecutivo del Partido Socialista de Euskadi (PSOE)”, ABFPI, Fondo José Antonio Maturana Plaza, CJAMP-1005-9, p. 4.

<sup>306</sup> PSE (PSOE): “Acta de la reunión extraordinaria...”, p. 2.

<sup>307</sup> Se hizo también una referencia a la incidencia negativa de las declaraciones de Felipe González sobre el marxismo.

<sup>308</sup> PSE (PSOE): “Acta de la reunión extraordinaria...”, p.3.



en el seno de una reunión del Comité Ejecutivo y con unas intervenciones dominadas ya por el problema nacional, en la que también se analizaba la futura estrategia política:

- Se destaca la falta de un análisis en profundidad del problema vasco. Prima el eje nacionalismo-centralismo.
- Necesidad de entender el nacionalismo de nuevo cuño. H.B.
- Evitar el riesgo de considerar la situación como estática. H.B. está en proceso de formación.
- El nacionalismo y el socialismo salen de la dictadura, en apariencia, igualados, pero el socialismo carece de orientación. El trabajo en la clandestinidad ha beneficiado a ETA.
- (...)
- Existencia de dos comunidades. El Partido representa a la no nacionalista, no podremos hacernos nacionalistas nunca.
- Necesidad de resolver, previamente, el tema nacional para que el partido tenga alguna opción.
- Sentimiento entre la población de que con la democracia no ha cambiado nada. Sufrimos la hipoteca de la política antinacionalista llevada anteriormente. (...)
- Según A. Hernández, es inútil plantearse ahora políticas de clase porque el tema es el nacionalismo.
- A. Saracíbar opina justo lo contrario al planteamiento anterior.
- El nacionalismo no es una ideología sino un sentimiento. Es necesario que se convierta en realidades para que deje de ser solo un sentimiento y se pueda comenzar a trabajar, sobre todo en beneficio del País<sup>309</sup>.

La preocupación en el interior del PSE-PSOE por su actitud ante la cuestión vasca fue notable a partir de aquel momento. Un ejemplo de ello fue el documento-debate titulado «El PSE (PSOE) ante las nuevas condiciones», que discutido en el Comité Ejecutivo, tenía entre sus motivaciones situar al Partido ante el problema nacional. Aunque escrito posteriormente, en el contexto de dos derrotas electorales –tras los comicios autonómicos de marzo de 1980 en Euskadi– nos interesa ahora porque hacía balance de los resultados que el Partido había obtenido desde 1979, y cómo su

---

<sup>309</sup> PSE (PSOE): “Acta de la reunión celebrada en San Sebastián los días 29 y 30 de abril...”, pp. 3-4.

actitud ante el hecho nacional había sido la principal responsable desde entonces de su desplome electoral y del auge de los partidos nacionalistas<sup>310</sup>.

En este documento se hacía un recorrido del problema nacional en perspectiva histórica, señalando la causa de la dificultad por parte del socialismo vasco, de asumir como propias las reivindicaciones nacionales hasta los años treinta. Entre otros motivos aludían a «la composición de su militancia y electorado de origen inmigrante» y «por la escasa elaboración teórica en el seno del marxismo de las relaciones entre problema nacional y lucha de clases, en general, y en particular del socialismo español»<sup>311</sup>. Esto había propiciado en tiempos de la II República, decían en clave autocrítica, que el PSOE no percibiera la evolución que se había producido en el movimiento nacionalista desde Sabino Arana, confundiendo la cuestión vasca con el PNV. Se originó entonces la pugna entre nacionalistas e izquierda, retrasando el Estatuto de Autonomía, que llegaría demasiado tarde. Pero aquel sector del PSE-PSOE sacaba varias enseñanzas de aquel proceso que parecían querer corregir, como la «incapacidad de la izquierda para contrarrestar la identificación País Vasco-PNV»; o la «incapacidad para liderar la bandera del autonomismo, dejando un protagonismo al PNV que habría de ser la base para su hegemonía cultural posterior»<sup>312</sup>.

Pese a todo, aquellas conclusiones no parecían haber calado todavía en 1979, ya que los errores habían sido repetidos en gran medida, aunque no de la misma manera, tal y como se deducía de su análisis sobre los años de la transición. Aunque el PSE (PSOE) había asumido la autonomía como un componente democrático esencial, a grandes rasgos cometió algunos de los fallos mencionados para otras épocas. En su análisis explicaban la caída electoral desde la victoria de 1977 atendiendo a cuestiones como su política ante UCD y PNV respectivamente. Habían aparecido ante la opinión pública como cómplices de la actitud del Gobierno de UCD que restaba competencias y medios al Consejo General Vasco; mientras que el PNV denunciaba continuamente esta situación y generaba una fuerte tensión frente a Madrid. Los motivos que daban para tal

---

<sup>310</sup> Representativo de un sector proclive a no menospreciar la influencia del problema nacional, planteaba la discusión en unos términos muy presentes en aquellas fechas. Como se irá viendo, los sectores que preferían soslayar el problema nacional y reforzar la identidad del PSE como un partido de clase, fueron reforzándose a partir de este momento, pero no fue hasta 1980 cuando consiguieron que prevaleciera su posición.

<sup>311</sup> PSE (PSOE): “El PSE (PSOE) ante las nuevas condiciones” ABFPI, Fondo José Antonio Maturana Plaza, CJAMP-1005-14, pp. 3-4. El documento, aparece datado en el archivo entre enero y junio de 1979, aunque su análisis demuestra que es posterior a las elecciones de marzo de 1980.

<sup>312</sup> *Ibid.*, p. 4.

actitud habían sido el estar temerosos de avalar la política del PNV y mantenerse pertinaces en su política de responsabilidad y de crédito de las instituciones.

Por un lado, concluían que sus coincidencias con UCD a nivel estatal habían sido explotadas por parte de sus adversarios (el PNV y la izquierda abertzale), favoreciendo una «imagen centralista del PSOE» y desdibujando «su carácter de fuerza de izquierda». Por otro, «su oposición al PNV y la política de “responsabilidades” llevada en el País Vasco han minimizado los enfrentamientos con UCD en el terreno autonómico, lo que ha permitido desdibujar nuestro carácter autonomista». La importancia recaía sobre todo en este último aspecto, ya que en «la identificación prevalente en la sociedad entre ideología nacionalista y legitimidad política, se puede obtener una explicación básica de la pérdida de influencia del PSE en el País Vasco»<sup>313</sup>.

Los socialistas vascos debatieron sobre si el nacionalismo podía ser ignorado o si desplazar este problema a un segundo plano les había pasado factura<sup>314</sup>. Pese a todo, no estaban dispuestos a lanzarse hacia el otro extremo, al del nacionalismo vasco. Se mostraron partidarios de reforzar el autonomismo, incluso, de hacer suyos ciertos referentes identitarios propios del nacionalismo, pero se marcaba una distancia

---

<sup>313</sup> PSE (PSOE): “El PSE (PSOE) ante...”, p. 6. En este sentido parece que el análisis que ellos mismo hacían coincidiría con el que posteriormente harían Raúl López, María Losada y Carlos Carnicero, quienes explicaban el «brusco desplome del PSE-PSOE» entre otras cosas porque «en el asunto de las identidades territoriales, parecía no encontrar claramente su lugar. Estaba en tierra de nadie en un clima fuertemente nacionalizado. Los abertzales escogían al PNV, Euskadiko Ezkerra y HB. Mientras los votantes que se reconocían abiertamente como españoles disponían de opciones como UCD y Alianza Popular», en Raúl LÓPEZ, María LOSADA y Carlos CARNICERO: *Rojo esperanza...*, p.229. Sin entrar a valorar si UCD y AP consiguieron realmente capitalizar los votos «españolistas», lo que sí parece es que desde el PSE tenían evidentes problemas a la hora de identificarse con el nacionalismo vasco, y que rehuían identificarse explícitamente con el nacionalismo español. Pero que no lo hicieran de forma explícita no significa que esta no fuera la identidad dominante dentro del partido, lo que les llevaría, como han manifestado autores como Antonio Rivera a transitar por una «españolización forzada» que si bien iría profundizándose con el tiempo, había supuesto una importante rémora para el partido durante la Transición: «La españolización de los socialistas supuso una rémora en tanto que les dificultó una aceptación temprana del vasquismo, otro de los componentes esenciales de la realidad vasca, sin cuya consideración se hacía más complicada la integración social y política del País Vasco». Cabe destacar que Rivera incide en una españolización más condicionada por el hecho de que el partido se fue convirtiendo en el referente para el voto «no nacionalista o estatalista», que por la idiosincrasia de su propia identidad, pero creo que este aspecto no debe ser ignorado de ningún modo a la luz de las fuentes, que van indicando cómo existían tensiones internas por la escasa aceptación de los símbolos vasquistas, en Antonio RIVERA: «La transición en...», pp.84-85.

<sup>314</sup> Como establecía Juan Pablo Fusí, el españolismo estaba desacreditado en el País Vasco tras el franquismo. A partir de esto: «El estigma del «sucursalismo» pesaría sobre los partidos vascos de ámbito estatal (...), lo que les plantearía graves dificultades de imagen política e identidad ideológica que repercutirían sensiblemente en sus resultados electorales», en Juan Pablo FUSÍ: *El País Vasco...*, p. 177. De hecho, era común que los nacionalistas vascos acusaran a los socialistas de estar subordinando los intereses del pueblo vasco a la consecución del poder en Madrid, como señala también Andrea Micciché, en Andrea MICCICHÈ: *Euskadi socialista...*, pp. 203-204.

constante entre los límites de su posicionamiento, proclive a defender más y mejor la autonomía, y el nacionalismo, que era de «otros». Así se seguía demostrando en la enumeración de errores que decían haber cometido durante la Transición, y que según señalaban, serían los siguientes:

1 – Históricamente –y también en el inmediato pasado– el PSE ha dado una prioridad básica a su concepción global del Estado y al diseño de una política de clase nítida. Esta prioridad se ha manifestado en un cierto mecanicismo tanto en la concepción del Estado como en el diseño de una estrategia de clase, al no asumir dialécticamente las nuevas realidades:

-El Estado no significa oposición a Autonomía: tiende a ser el Estado de las Autonomías.

- La acción de clase no se contrapone necesariamente a política autonómica (...).

2 – La composición sociológica del Partido y su particular sensibilidad cultural, unidas a los excesos nacionalistas en ciertas reivindicaciones, han producido un cierto vaivén de comportamiento en nuestros militantes: entre la aceptación acrítica de toda la simbología nacional y el rechazo visceral. Se acepta casi resignadamente la Ikurriña, el Euskara, el Aberri-Eguna, etc. No hay una asunción sin complejos de valores que – procediendo ocasionalmente del campo nacionalista– han dejado de tener –y deberían hacerlo más en el futuro con nuestro apoyo– un carácter partidista y separador.

Y tal vez convenga señalar que la vivencia interna del Partido condiciona en buena medida su praxis interna y su imagen pública.

3 – (...) la creencia de que la asunción por el PNV de las responsabilidades públicas significaban la reducción de las tensiones con Madrid y el paso a segundo plano de la «cuestión nacional». Tal hipótesis no se ha visto confirmada. Así como está por demostrar que la capacidad de movilización de los trabajadores depende más del énfasis de los supuestos intereses específicos de clase (paro, salarios, sanidad, etc.) que de la defensa de otros valores ligados a la consolidación de Euskadi como nacionalidad. (..)

4 – El PSE ha dejado en manos de los nacionalistas toda la tarea de oposición frente a UCD en los campos que atañen al Estatuto de Autonomía. (...) El desmarque frente a la UCD en la dialéctica de clase o no ha sido lo suficientemente intenso o no ha tenido el suficiente atractivo entre los trabajadores en un período de fuerte exaltación nacionalista.

5 – Las indefiniciones y vaivenes del PSE en torno a Navarra no sólo han hecho más difícil la solución del «problema», sino que han creado un conflicto orgánico serio por la desmembración «de facto» de la Agrupación Navarra del PSE<sup>315</sup>.

La cita revelaba que al menos un sector del socialismo vasco consideraba que durante aquellos años se había partido de un análisis erróneo de la sociedad vasca, manteniendo una dinámica que no les había hecho entender la realidad, alejándoles de una población que habría terminado por abandonarles. Reconocían, que en el fondo, durante aquella etapa no habían sabido asumir las sensibilidades que de verdad movilizaban a la clase trabajadora vasca, al mantener inalterable el principio de que los intereses de clase estaban por encima de los nacionales.

Lo que venían a argumentar era que alejándose del nacionalismo vasco se habían alejado de la voluntad mayoritaria, y por tanto, la solución era hacer compatible su ideología de clase con el autonomismo. Se reconocía, aunque desde una lógica instrumental, que habían fallado al no haberse identificado más con unos símbolos que habían sido rechazados por gran parte de la militancia socialista. Lo hacían demostrando la relación que existe entre la identidad que se genera y se transmite desde los partidos y la identidad en la que sus miembros están socializados. Remitían al diálogo que se establece entre los agentes políticos y los individuos con los que quieren conectar, una voluntad que obliga a apelar a una narración identitaria en la que puedan verse reflejados los posibles votantes, pero también la militancia. Demostraban que «su praxis externa y su imagen pública», su narración sobre la nación, dependía en gran medida de la identidad que compartían mayoritariamente sus militantes, y parece ser que esta no era la vasca, al menos no en términos nacionalistas.

Por otra parte, esto avala la tesis, señalada por diferentes autores, sobre el intento del PSE-PSOE de asumir ciertos símbolos que inicialmente no habían formado parte de su tradición –aunque no sin algunas dificultades y tensiones internas<sup>316</sup>. La motivación de esta asunción la explicaba Antonio Rivera a partir del contacto que se había producido, durante el franquismo y sobre todo el tardofranquismo, entre el nacionalismo

---

<sup>315</sup> PSE (PSOE): “El PSE (PSOE) ante...”, pp. 7-8.

<sup>316</sup> «Los socialistas asumieron ciertos “lugares de memoria” que en su origen eran nacionalistas (...). Es el caso de algunos de los principales distintivos del país: la bandera y el escudo. Durante la Transición el PSE (...) se propuso deliberadamente contribuir a la construcción de la “nacionalidad vasca”», José Antonio PÉREZ y Raúl LÓPEZ: «La memoria histórica del franquismo y la transición. Un eterno presente», en Fernando MOLINA y José Antonio PÉREZ (eds.): *El peso de la identidad. Mitos y ritos de la historia vasca*, Madrid, Marcial Pons, 2015, p. 247.

renovado y la oposición antifranquista «no nacionalista», que había producido que «esa izquierda se contagie de parte de ese discurso nacionalista y lo incorpore a sus reivindicaciones de manera bastante acrítica (como demostró el futuro con grandes repercusiones: los socialistas en el tema de Navarra y la autodeterminación)»<sup>317</sup>. Otros autores, como José Antonio Pérez o Raúl López Romo, juzgaban más exitoso este proceso por el cual los socialistas se habían abastecido de símbolos ajenos a su tradición para favorecer una «labor regionalista» en una suerte de doble patriotismo:

Durante la Transición, en el terreno cultural, el PSE impulsó la dignificación de la lengua vernácula y la preservación de la identidad vasca, sin verla de forma excluyente respecto a la española, lo que amparaba los dobles afectos patrióticos. Asimismo, en el terreno político demandó más capacidad de autogobierno y, aunque se mostró hasta finales de los setenta proclive al derecho de autodeterminación<sup>318</sup>, nunca defendió la secesión, sino la permanencia de Euskadi en España, dentro de una estructura federal solidaria con los otros «pueblos que integran el Estado». (...) En esa labor regionalista, que no fue su principal sello de distinción, sino de los aspectos de su política, el PSE carecía de símbolos propios, y hubo de abastecerse de los procedentes de la tradición nacionalista, contribuyendo así, indirectamente, a reforzar a esta cultura política (naturalizando algunas de sus demandas como las consustanciales al país)<sup>319</sup>.

Pese a las diferencias entre unas y otras interpretaciones, lo que se observa es la coincidencia en la afirmación de que los socialistas vascos adoptaron unos símbolos y unas tradiciones que no les eran propias. Pero en estos análisis se echa de menos la definición de lo que eran y no sólo lo que no eran. Estos «no nacionalistas vascos», que habían impulsado una «labor regionalista» que trataba de conciliar lo español y lo vasco, eran en su mayoría vascos ajenos a la tradición nacionalista vasca, porque eran en su mayoría vascos que compartían una identidad nacional española, construida a partir de lo vasco.

Si atendemos a su discurso, es evidente que desde el PSE no querían tampoco reivindicar el nacionalismo vasco, pero importantes sectores del Partido temían las consecuencias de anteponer, retóricamente, la identidad de clase sobre la nacional. Así

---

<sup>317</sup> Antonio RIVERA: *Las limitaciones de una transición*, en Mercedes ARBAIZA (ed.): *La cuestión vasca. Una mirada desde la historia*, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2000, p. 176.

<sup>318</sup> El grupo vasco se destacó precisamente por oponerse frontalmente a mantener el derecho a la autodeterminación en el 28 Congreso del PSOE en mayo de 1979.

<sup>319</sup> José Antonio PÉREZ y Raúl LÓPEZ: «La memoria histórica del franquismo y la transición. Un eterno presente», en Fernando MOLINA y José Antonio PÉREZ (eds.): *El peso de la identidad...*, pp. 248-249.

pues, desde su punto de vista, el problema no provenía de un choque entre dos identidades nacionales, la española y la vasca, sino de un choque entre dos categorías identitarias distintas, la de clase y la nacional. Por tanto, según esta lectura, el PSE-PSOE, habría tratado de imponer una estrategia de clase en un contexto fuertemente nacionalizado, del que los socialistas habrían logrado escapar convirtiéndose en una especie de partido anacional. Incluso aquellos que juzgaban necesario aumentar la comprensión socialista del hecho nacional vasco, no atribuían sus dificultades al respecto –al menos públicamente–, a la existencia entre su militancia y sus cuadros dirigentes de una identidad mayoritariamente española que en consecuencia competía con la anterior.

En cualquier caso, el uso de la terminología de aquellos momentos demuestra cómo en este territorio la situación era muy compleja. Generalmente, España era mencionada siempre como Estado, y lo nacional remitía a lo vasco, lo que tampoco debe tomarse a la ligera. Evidentemente remite a una tradición discursiva y a un contexto especialmente sensibilizado con los derechos de las nacionalidades oprimidas, pero igual que no puede leerse con total literalidad asumiéndose que los socialistas vascos compartieron por ello una identidad nacional vasca en lugar de española; tampoco debe ignorarse. Si la construcción de la identidad nacional entre los socialistas sería compleja en toda España, la pluralidad en los sentimientos que los identificarían en territorios como el vasco sería mucho más acusada.

Por otra parte, la peculiaridad del caso de Euskadi quizá favoreció que los resultados electorales se vivieran con mayor complejidad en el socialismo vasco, pero sin lugar a dudas aquella cita con las urnas marcó un momento decisivo en todo el territorio estatal. Incidieron en la política general del Partido Socialista Obrero Español, moderándola para hacer frente al nuevo contexto, decantando la balanza hacia una estrategia que apostó definitivamente por suavizar su imagen de radicalidad. Una imagen que se había tratado de transmitir a la sociedad por parte del Partido de Gobierno, pero a la que también había contribuido el propio PSOE con su «programa máximo», a pesar de que este nunca había llegado a definirlo, al menos por completo.

Las elecciones dieron a los socialistas el impulso que necesitaba para iniciar una nueva etapa en la que el debate sobre el marxismo fue lo más llamativo, recibiendo todos los focos mediáticos del Congreso que estaba por llegar. A partir de entonces, el

PSOE iba a esforzarse por establecer una mayor coincidencia de la que había existido hasta el momento entre los programas electorales y las resoluciones de los Congresos. Pero tras el debate entre marxismo sí / marxismo no, se iban a sancionar otro giros importantes, decididos ya por la dirección a la luz de los resultados electorales, y que iban a quedar ocultos por lo que quizá fue una cortina de humo, mucho más importante por lo simbólico que por lo real, que escondería una deriva hacia la moderación no sólo en la definición nominal sino también en temas de democracia y autonomía interna, de organización, o de política autonómica<sup>320</sup>.

En cuanto a la política autonómica, esta se iría improvisando y no sería igual en todas las regiones o nacionalidades. Para unas se iba a imponer esa tendencia general que recomendaba cautela, moderación y en definitiva, racionalización; para otras, la deseada medida iba a enfrentarse a los derechos históricos y al reconocimiento de la diferencia. El éxito entre sucumbir a la homogeneización o conseguir una «autonomía plena» iba a depender, no exclusivamente, pero sí en gran medida, del pulso a una ciudadanía que había hablado el 1 de marzo de 1979.

---

<sup>320</sup> Como ha señalado Richard Gillespie, aquella retórica sobre el marxismo estaba apoyada en muy poco debate sobre la ideología como tal y quizá «habría sido más inteligente que en 1979 la izquierda hubiera consagrado sus principales energías a la batalla por la democracia en el partido, en lugar de luchar sobre todo por una etiqueta de partido», en Richard GILLESPIE: *Historia del Partido Socialista...*, pp. 351-360.



### III. EL «VIEJO Y NUEVO PARTIDO» ANTE EL XXVIII CONGRESO

Tras las elecciones de 1979, la dirección del Partido con una «vieja» tradición había decidido culminar su renovación para convertirse definitivamente en el cambio político que permitiera, de forma realista, la alternancia en el poder. Para ello veía inevitable deshacerse del lastre que podía suponer mantener el marxismo en su definición, sobre todo después de que durante la campaña electoral la derecha hubiera conseguido «crear una asociación de ideas entre las palabras marxismo, socialismo, colectivismo, comunismo y modelo soviético de sistema político, todo ello como sinónimo de falta de libertad»<sup>321</sup>. Así pues, con esta voluntad en mente se inició el XXVIII Congreso, celebrado entre el 17 y el 20 de mayo de 1979. Felipe González realizaría su discurso de apertura precisamente refiriéndose al PSOE como «un partido viejo y joven al mismo tiempo» añadiendo después que en aquella reunión se debía:

rendir un serio homenaje de reconocimiento y de gratitud a todos los hombres y mujeres que desde Pablo Iglesias nos legaron un estilo propio, una identidad concreta (...). Esto no significa que nosotros asumamos nuestra propia historia sin el espíritu crítico que hace que esa asunción sea socialista. Tenemos que aprender de los aciertos y de los errores de nuestros compañeros en el pasado de la misma manera que somos autocríticos con el proceso histórico que estamos protagonizando hoy.

El XXVIII Congreso del partido se sitúa en el seno de una sociedad mucho más compleja que la que conocieron nuestros fundadores. Han cambiado las estructuras socio-económicas y han evolucionado las ideas en todos los terrenos. Las clases sociales son múltiples y los antagonismos de signo distinto a los de hace un siglo. Sobre esta sociedad, más compleja, más difícil, más desarrollada, estamos obligados a proyectar nuestro mensaje de cambio.

(...) Esta tarea debe hacerse con rigor y frescura intelectual, sin dogmatismos ni posiciones que se anclen en el pasado. Sin renunciamentos ni abandonismos que falsifiquen nuestra identidad. Con capacidad, en fin, para dar respuesta a todos aquellos que pueden identificarse con un proyecto socialista<sup>322</sup>.

---

<sup>321</sup> Enric COMPANY y Francesc ARROYO: *Historia del socialismo...*, pp. 48-49.

<sup>322</sup> PSOE: “Discurso de Felipe González, Primer Secretario General del PSOE, al XXVIII Congreso” (Madrid, 17 de mayo de 1979), Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero (AFFLC), Fondo Alberto Pérez García, 004006-005, pp. 4-12.

Este Congreso había sido concebido por la dirección para dibujar una línea divisoria con parte de la estrategia anterior. Ante un tiempo nuevo, se habían propuesto dar un cambio de rumbo a su imagen pública, además de pretender matizar algunas de sus posiciones, en parte para alcanzar una mayor coherencia con su práctica política y en parte para representar una opción política que diera una mayor seguridad a un electorado, menos escorado a la izquierda.

Como señalan diversos autores, en realidad detrás del debate del marxismo que se representó en aquel momento, se estaban jugando muchas otras cuestiones que no tenían tanto que ver con esta definición ideológica<sup>323</sup>. A este respecto Santos Juliá explicaba:

Por debajo de ese término, lo que se sometió a discusión, por última vez, fue la concepción misma del partido, la dirección política emprendida desde el anterior congreso, el juicio sobre la transición a la democracia y la definición de las tareas que en el futuro esperaban los socialistas<sup>324</sup>.

En aquel momento se sucedió un enfrentamiento entre dos visiones, la de los denominados «críticos»<sup>325</sup> y los «oficialistas». Los primeros reprochaban a la dirección la deriva electoralista que estaba llevando el Partido, pero también el liderazgo personalista, la ausencia de autonomía en las federaciones y la paulatina erosión a la democracia interna<sup>326</sup>. Entre otras cosas sostuvieron que trataban de evitar un giro a la derecha con la excusa no demostrada de que la moderación fuera a aportar más votos. A esto se ha referido también Gillespie, quien considera que «aquellos resultados no dejaban claro en absoluto que la apertura del partido a la derecha fuese a producir algún progreso. Los datos indicaban que el PSOE perdería apoyo con más facilidad si giraba hacia la izquierda»<sup>327</sup>. Para demostrarlo, entre otras aportaciones citaba una encuesta preelectoral de enero de 1979, manejada por aquella formación, y vista en el capítulo

---

<sup>323</sup> Como indica Abdón Mateos: «El resultado del XXVIII Congreso del PSOE (...) fue la principal y efímera factura que pagó el “mortero del antifranquismo” en que se estaba convirtiendo el centenario partido. Para muchos fue una crisis de crecimiento en la que aparte de la cuestión del marxismo, por lo demás escasamente debatida, se jugaba la confirmación de una política autónoma dirigida hacia la competencia electoral con UCD o una política de unidad con el PCE y, por tanto, el mantenimiento del proyecto reformista revolucionario», en Abdón MATEOS: “La Transición del PSOE...”, p. 295. De cualquier forma, como mantiene Alberto Sabio, «los desentimientos emblemáticos no fueron exclusivos del socialismo español en aquellas fechas», poniendo como ejemplo al socialismo francés, o el alemán para una época un poco anterior, en Alberto SABIO ALUTÉN: «Las culturas políticas...», pp. 337-338.

<sup>324</sup> Santos JULIÁ: *Los socialistas en la política...*, p. 529.

<sup>325</sup> Representados fundamentalmente por Francisco Bustelo, Pablo Castellano y Luis Gómez Llorente.

<sup>326</sup> Santos JULIÁ: *Los socialistas en la política...*, pp. 529-530.

<sup>327</sup> Richard GILLESPIE: *Historia del Partido Socialista...*, p. 354.

anterior. En ella se podía observar cómo a la mayoría de los encuestados no les preocupaba la definición marxista del partido y que incluso creían mayoritariamente que el PSOE era un partido socialdemócrata y no marxista. Pero el caso es que para los líderes socialistas estos eran precisamente argumentos que les indicaban que seguir definiéndose como marxistas era una cuestión nominal que en todo caso podría restarles apoyos, sobre todo entre los votantes de UCD<sup>328</sup>. A partir de todos estos datos, el sociólogo del PSOE concluía que:

Una definición incorrecta del carácter de clase del PSOE, que no tenga en cuenta las nuevas realidades sociales, o que desprecie –y desconozca– cuál es la importancia de estos nuevos sectores sociales, no sólo puede conducir a un peligroso enquistamiento, que impida la obtención de mayorías electorales, sino que puede traducirse, también, en nada desdeñables retrocesos<sup>329</sup>.

No nos entretendremos más en estas cuestiones que no forman parte del objetivo de esta investigación, pero hemos creído importante dibujar la escena, aunque fuera de forma somera, para permitir palpar el ambiente que se vivía, para conseguir que se entienda mejor un contexto que influirá también en las actitudes que se adopten sobre la cuestión nacional, o mejor dicho, autonómica. La dirección quiso dar un cambio de timón que redefiniera su imagen pública y sus objetivos más inmediatos, y aunque con algún contratiempo, lo consiguió. Pese a que inicialmente se impusieron los críticos en la votación sobre la Ponencia Política, manteniéndose intacto el término de la discordia, el golpe de efecto de Felipe González con su dimisión, generó un sentimiento de orfandad y de culpabilidad que consiguió incluso reforzar su liderazgo para el Congreso Extraordinario, en el que según Abdón Mateos, se cerró «la década de transición interna del PSOE»<sup>330</sup>. Los críticos finalmente no encabezaron ninguna alternativa, sobre todo

---

<sup>328</sup> Y no parecía muy probable que pudiera afectarles en exceso entre los votantes socialistas la nueva actitud. A la pregunta de si conocían las declaraciones sobre la definición marxista del Partido realizadas por Felipe González, de los votantes del PSOE en 1977, un 10,1% respondía que estaban en desacuerdo frente a un 19,5% que las aprobaba. A la pregunta «¿Le parecería a usted bien o mal que el PSOE dejara de ser un partido político *exclusivamente* marxista?», a un 24,5% le parecía bien y a un 16,9% mal, en José Félix TEZANOS: *Sociología del socialismo...*, p. 73-82.

<sup>329</sup> *Ibid.*, p. 70.

<sup>330</sup> Abdón MATEOS: «La Transición del PSOE...», p. 295. De ello habló Alfonso Guerra en sus memorias, recordando que Felipe González le había razonado la necesidad de que aquel fuera el escenario que orientara al partido hacia la clarificación ideológica y la victoria electoral: «Le expresé mi contrariedad ante lo que se avecinaba. El Congreso iba a quedar prisionero de una definición nominalista (...) Pero Felipe insistió en la necesidad de clarificar el asunto, por razones de dos categorías: en el terreno de los principios, un partido no puede, a finales del siglo XX, y tras la experiencia de la Unión Soviética, declararse intrínsecamente marxista; y en el ámbito político, las aspiraciones de regir la transformación de España se convertían en algo casi imposible con una definición marxista». Según este

porque lo que habían querido era contener la deriva que estaba siguiendo el Partido, pero manteniendo el liderazgo de Felipe González, y cuando se enfrentaron a la situación que éste propició, la realidad les demostró que no tenían los apoyos necesarios para hacerlo<sup>331</sup>.

El debate entre marxismo sí / marxismo no, eclipsó al resto, pero ello no resta importancia a las resoluciones que se adoptaron en torno a otros asuntos, o a las discusiones que existieron sobre los mismos<sup>332</sup>. Porque como ha enunciado Santos Juliá: «Fue a través de ese combate aparentemente ideológico como se llegó a la nueva percepción del PSOE como partido del cambio y de la seguridad; partido de la síntesis ideológica, sectorial y territorial; partido llamado a consolidar la democracia y vertebrar España»<sup>333</sup>. Y es que en este Congreso muchos debates importantes quedaron ocultos tras los fuegos artificiales, en especial el que iba a encauzar el modelo de política autonómica del PSOE, quizá porque tampoco era un debate que interesaba especialmente a los críticos, quizá porque en esto ambas corrientes estaban mayoritariamente por la moderación. En esa voluntad de ir haciendo coherente su programa máximo con su política real se iba a eliminar muchos postulados defendidos

---

relato, la intención del Secretario del PSOE de dar una nueva orientación a la teoría política socialista, le llevaría a dejar el Partido con la voluntad de que ese golpe de efecto le permitiera llevar a cabo su proyecto: «Felipe me aseguró que él no podía “tirar del carro” si no creía en el carro, y me sugirió que en el futuro todo se podría reconducir. “Alfonso, así reconstruiremos todo y podremos recuperar la dirección”», Alfonso GUERRA: *Cuando el tiempo...*, pp. 260-264.

<sup>331</sup> Santos Juliá lo explicaba así: «En resumen, no dieron el paso adelante y, (...) lo cierto es que no lo dieron porque no podían darlo, porque lo que habían aprobado era sencillamente irrealizable: o se ganan elecciones o se hace la revolución, pero las dos cosas al mismo tiempo y guiados por la misma persona excede de lo políticamente razonable», Santos JULIÁ: *Los socialistas en la política...*, p. 535. Por otra parte Juan Antonio Andrade señalaba que en el desenlace tuvo una fuerte influencia la prensa, que interpretó este debate como un problema nacional en el que debía intervenir, al entender que el «triunfo de las tesis críticas suponía que desde el segundo partido del país se cuestionaban los principales consensos, y eso no resultaba asumible para el nuevo sistema. Por eso todos los periódicos (...) cerraron filas en torno a la dirección en los momentos más agudos de la crisis y todos ellos evidenciaron una extraordinaria beligerancia hacia el sector crítico». Un sector que no estaba sancionando el comportamiento de la dirección respecto a su actitud ante la Constitución o los Pactos de la Moncloa, Juan Antonio ANDRADE: *El PCE y el PSOE en...*, pp. 309-356.

<sup>332</sup> Como ejemplo del protagonismo desmesurado que había obtenido esta cuestión podemos leer la siguiente crónica de *El Socialista*: «El plenario de la mañana del domingo se inició bajo el signo del rumor, de la incertidumbre y de la mala conciencia de muchos delegados ante la insistencia de que Felipe no se presentaba a la reelección para la nueva Comisión Ejecutiva. Por ello, en honor a la verdad, hay que señalar que los delegados prestaron menos atención de la debida a muchos temas importantes, fundamentales incluso deberíamos decir, para nuestro partido, que se iban debatiendo en la sesión», *El Socialista*, 110 (27 de mayo de 1979). Aunque el tema autonómico tampoco era baladí, como el propio Alfonso Guerra afirmara, era una cuestión «verdaderamente importante que debe marcar la política general que el partido va a seguir para la concesión de los estatutos», *El Socialista*, 109 (20 de mayo de 1979).

<sup>333</sup> Santos JULIÁ: *Los socialistas en la política...*, p. 540.

hasta el momento haciendo un esfuerzo final por vertebrar España, a través de una lectura de la Constitución que lo favoreciera.

Una España vertebrada que estaría ilustrada en la siguiente imagen que el PSOE habría utilizado en su libro *Este viejo y nuevo partido. De congreso a congreso*, en el que un puño en alto integraba a España y sus nacionalidades, emanando estas de la primera. Una España que se unía para compartir el mismo objetivo, el socialismo:

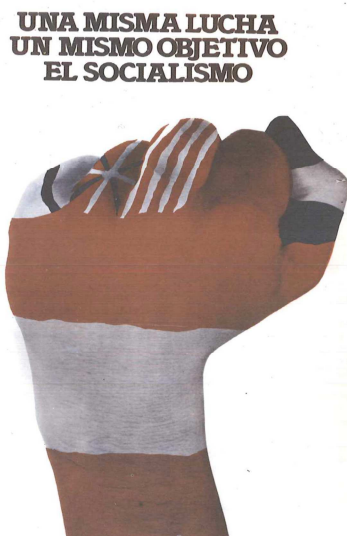


Imagen 5; “Una misma lucha un mismo objetivo. El socialismo” (Fuente: PSOE: *Este viejo y nuevo Partido*, Madrid, Pablo Iglesias, 1979).

Así pues, en estas páginas se tratará de poner en valor algo que quizá haya pasado inadvertido: que el XXVIII Congreso supuso la sanción de una determinada política autonómica. Que el resultado de aquel debate sobre el modelo de Estado y de nación que los socialistas querían para España fue la confirmación de una deriva que condicionaría el desarrollo del futuro Estado de las Autonomías, en uno u otro sentido.

Tras la Constitución, los hechos –y la actitud que el propio PSOE había adoptado en el debate constitucional– parecían imponer necesariamente la desaparición de la demanda de autodeterminación para los pueblos de España, y la resolución que se adoptó así lo confirmaba. El término no había sobrevivido y había desaparecido sin hacer ruido, la lógica del nuevo contexto parecía haberse impuesto sin ninguna oposición. Pero es interesante ver cómo no fue exactamente así, que este término desapareció sin hacer demasiado ruido, pero no en completo silencio. La polémica fue

ahogada en parte por el debate que centraba casi todas las miradas; y en parte porque no era una necesidad posiblemente para casi nadie seguir defendiéndolo. Pero hay que señalar que todavía dio algunos coletazos y que fue defendido hasta la última sesión del pleno, donde la mayoría remató definitivamente cualquier aspiración, más simbólica que real, de la minoría.

### **1. La Constitución como punto de partida. Una resolución acorde a los nuevos tiempos**

Como se está viendo, el XXVIII Congreso ofrecía al PSOE la posibilidad de discutir y plasmar de forma oficial la estrategia que la nueva situación obligaba a replantear, la oportunidad de redefinir o concretar algunas de sus bases ideológicas. El Congreso anterior de diciembre de 1976, realizado antes incluso de las primeras elecciones democráticas, no podía establecer ya la guía de un Partido que debía reformular muchos de sus principios y sobre todo de sus tácticas y estrategias. Como se afirmaba en la introducción de la Memoria de Gestión de la Comisión Ejecutiva Federal, redactada entre enero y marzo de 1979, y presentada en el XXVIII Congreso: «España ha superado la primera etapa de la transición política, la que podríamos considerar como de “provisionalidad”, y se dispone a encarar una nueva de “afianzamiento” democrático». Por ello, desde la dirección, se había propuesto adaptar la teoría a la práctica que, como alternativa de gobierno, ya se había comenzado a ejercer desde 1977. Primero con el control de algunas instituciones preautonómicas, y después, desde abril de 1979, como representantes de gran parte del poder municipal. Esto, de forma inevitable, había cambiado el rol del partido, y así, se vaticinaba desde dicha memoria:

Los socialistas se hallarán en el XXVIII Congreso como una organización que ha dejado de ser un instrumento de presión desde fuera de las instituciones básicas del Estado, para convertirse en un instrumento de realización de políticas concretas sobre la práctica totalidad de los sectores de la sociedad, que empiezan ya a exigirle cuentas sobre sus comportamientos como responsable de importantes parcelas de representación de poder institucional<sup>334</sup>.

Además, es obvio que la Constitución y las posiciones que se adoptaron en este sentido desde el Partido, fueron decisivas para reformular muchas cuestiones, al menos

---

<sup>334</sup> PSOE: “Memoria. I. Gestión Comisión Ejecutiva. 28 Congreso”, ABFPI, c 147, p.9.

de forma parcial, planteándolas en muchos casos como consecuencia de la responsabilidad que los nuevos tiempos les obligaban a asumir. Muchos principios y demandas se postergaron a un futuro no inmediato, en aras de llegar a un consenso para elaborar la Carta Magna y para permitir fortalecer la incipiente democracia, que se anteponía a cualquier cuestión en aquellas circunstancias. En adelante, sería la propia lealtad a la Constitución la que justificaría esas aparentes «renuncias»:

Esta Constitución aprobada como texto básico que regula la convivencia en libertad de todos los ciudadanos y pueblos de España, constituye para el Partido Socialista, fuerza progresiva en la iniciativa constituyente y en su contenido definitivo, el cauce a través del cual se canalizarán nuestras acciones transformadoras.

Debemos decir públicamente que para nosotros será una cuestión de principios la defensa de esta Constitución desde el principio al fin de su articulado como garantía de convivencia en paz de los ciudadanos y de los pueblos que integran España<sup>335</sup>.

Pero no sólo lo defendían por tratarse del texto del que se habían dotado los españoles para permitir la convivencia en beneficio de la estabilidad democrática, sino que se sentían identificados con él y se vanagloriaban de haber aportado mucho al mismo. Ya se ha tratado de demostrar que la Constitución resultante no difería en exceso en materia autonómica de la idea que se compartía mayoritariamente en el PSOE –particularmente en la dirección del Partido–. En esta línea debe entenderse la siguiente defensa del texto, loando sus aspectos positivos, entre los que se encontraba el modelo de Estado y de nación que enunciaba:

Se ha elaborado y aprobado una Constitución democrática en la que se recogen los derechos y libertades fundamentales de las personas y de las colectividades; en la que se reconoce la realidad plurinacional y plurirregional de España y se crean los cauces para dar al Estado una nueva estructura<sup>336</sup>.

Aunque sabemos que la España que se legitimaba legalmente en aquel texto fundacional sería plural pero no plurinacional, ya que siguiendo el artículo 2, su soberanía era «indisoluble» e «indivisible». Este dato no debía ignorarlo Felipe González, entonces ¿por qué hablaba del reconocimiento de una realidad plurinacional? Tal vez porque mantener aquella retórica les permitía aparentar una victoria mayor de

---

<sup>335</sup> PSOE: “Discurso de Felipe González..., pp. 17-18.

<sup>336</sup> *Ibid.*, p.17.

los planteamientos que defendía su «programa máximo»; o posiblemente porque sin descartar cierto uso tramposo del lenguaje, el reconocimiento de unas nacionalidades sin soberanía dentro de una nación española soberana era el modelo al que siempre habían aspirado. Quizá se habían saltado el paso de la cesión de la soberanía de las nacionalidades a la nación española, pero siempre lo habían considerado más como un trámite simbólico, aunque importante, que como un objetivo. En realidad, pese a hablar de una España plurinacional no la imaginaron nunca más que plural.

En cualquier caso, desde el PSOE se siguió dando muestras de su apoyo sin fisuras –desde los ámbitos mayoritarios del Partido– no sólo a la Constitución, sino al modelo de Estado que ésta permitiría desarrollar. Otro ejemplo se daría en la voz «Constitución 1978», de nuevo del libro *Este Viejo y Nuevo Partido*, en la que se señalaba que los artículos 1 y 2, y la Disposición Derogatoria verificaban por ellos solos «la muerte de los demonios del pasado» y que junto al resto del articulado se obtenía una «Constitución que fundamenta su filosofía sobre la libertad, la justicia y la igualdad, y una nueva concepción de la estructura del Estado». Es llamativo qué citaban y qué suprimían del primer y del segundo artículo: del primero se conservaba todo a excepción de la referencia a la Monarquía como forma de gobierno; y del artículo 2 citaban lo siguiente: «La Constitución (...) reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas»<sup>337</sup>. Es evidente que los puntos más delicados con los que el socialismo había tenido que transigir eran eliminados en esta presentación ideal de la Constitución pactada tan sólo unos meses antes. Pero que se haya eliminado una definición de España tan forzada como la que se impuso finalmente, no significa tampoco que renegaran de la nación española, quizá sólo es un síntoma de que no se sentían cómodos con esa formulación, algo que tampoco era un secreto<sup>338</sup>. De cualquier modo, unas páginas después presentarían la aprobación de estas cuestiones como un trámite sencillo en el que no hubieron divergencias entre la clase política gracias al consenso conseguido: «Los temas relativos a la monarquía parlamentaria y nacionalidades fueron aprobados el primer día de debates sin que se dieran discrepancias considerables», claro que se referían al debate en el pleno del Congreso, ignorando posiblemente de forma deliberada las sesiones mucho más problemáticas que tuvieron lugar cuando se debatían

---

<sup>337</sup> PSOE: *Este viejo y nuevo...*, p. 111.

<sup>338</sup> El propio Jordi Solé Tura habla de que el artículo 2 no era un ejemplo de corrección estilística, en Jordi SOLÉ TURA: *Nacionalidades y nacionalismos...*, p. 98.



estos artículos en la Ponencia o en la Comisión de Asuntos Constitucionales<sup>339</sup>. Fuera como fuese, concluían con el análisis del título VIII, dejando claro qué modelo nacional había sido aprobado por la Constitución y cuál debía apoyarse desde el PSOE. En palabras del socialista aragonés y miembro del gobierno preautonómico de esta región, Ramón Sainz de Varanda:

Quizás haya muchos defectos en el título VIII, de las autonomías, pero contiene el mínimo imprescindible para construir el Estado de todos los pueblos de España. No es ya hora de reivindicar soberanías, porque ha pasado mucho tiempo desde que se tenían esas soberanías<sup>340</sup>.

De todos modos, como se ha visto, la postura del socialismo español no era completamente homogénea y aunque sí se trataba de la línea hegemónica dentro del Partido, también hubo quien criticó duramente la actitud del PSOE ante aquel cerrar filas en torno a una Constitución que entre otros temas, no representaba los valores que se defendían sobre la cuestión nacional, al menos teóricamente en los últimos congresos de 1974 y 1976. Así, Arturo Val del Olmo, en el documento de crítica a la Comisión Ejecutiva citado ya, desaprobaba también el apoyo a la Constitución y la consecuente política del Partido en materia autonómica<sup>341</sup>:

En otro orden de cosas las limitaciones impuestas a la Autonomía y la negativa radical a la defensa del derecho de Autodeterminación bastaría para mantener una actitud de reserva y hasta de oposición a la Constitución. Para nosotros hay una serie de puntos centrales que debe de tener una Constitución para poder apoyarla. Uno de ellos es el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de las Nacionalidades, que por otra parte está recogido en la ponencia de Nacionalidades del XXVIII Congreso (...).

Desgraciadamente ni durante los debates de la Constitución, ni en ningún documento de propaganda del partido o manifiesto electoral hemos visto la defensa y explicación de

---

<sup>339</sup> PSOE: *Este viejo y nuevo...*, p.117

<sup>340</sup> Ibid., p.118

<sup>341</sup> Fue Arturo Val del Olmo el encargado de leer la ponencia Política (elaborada por la Federación de Asturias) aprobada en la Comisión en que se debatiría este asunto. Este se situó a favor del sector crítico, Richard GILLESPIE: *Historia del Partido Socialista...*, p. 359. Como muestra también este documento, su autor cuestionaba algunas de las decisiones adoptadas por el PSOE en aras del consenso, como hizo el sector crítico (aunque en general el sector «crítico» no se caracterizara por reivindicar la defensa de derechos como el tema nacional, sí se cuestionaba el no cumplimiento de las líneas marcadas por las resoluciones del XXVII Congreso).

esta idea que debería ser el eje central de la política de los Socialistas con respecto al tema nacional<sup>342</sup>.

Sin duda, la Constitución había supuesto un punto de inflexión, pero la problemática de la cuestión nacional seguiría ocupando un lugar privilegiado en el panorama político, y como se sabe, los socialistas cobraron en esta etapa un papel decisivo en la construcción del nuevo modelo de Estado, para cuyo desarrollo debían establecer unas nuevas directrices. Esto sucedería por primera vez de forma oficial en la resolución sobre «Autonomías» del nuevo Congreso. De momento se analizará qué se aprobó oficialmente en esta resolución, para pasar posteriormente a desgranar cómo se abandonó el derecho a la autodeterminación.

Lo primero que llama la atención es el título de la misma, «Autonomías», que concretaba en gran medida las pretensiones del texto y lo situaba claramente como consecuencia de los postulados constitucionales. Las nacionalidades y regiones tenían por tanto una proyección clara y limitada, la de obtener la autonomía. En este texto, las rebajas respecto a la «Resolución sobre nacionalidades» de 1976 son evidentes y acordes a la nueva coyuntura, pero no provenían únicamente de ella<sup>343</sup>. Dado que la famosa inconcreción que se le ha achacado tradicionalmente al Título VIII de la Constitución, permitía hacer evolucionar el modelo en uno u otro sentido, las posibilidades quedaban abiertas y desde el PSOE tenían que aportar su contribución, y qué mejor plataforma que la de esta resolución. El nuevo Estado de las Autonomías – que desde luego no era federal, eso sí parecía quedar claro– no establecía un modelo cerrado, por lo que es interesante ver cómo resolvieron algunas de las cuestiones que aún quedaban por diseñar, si tratando de salvar aquellos postulados más radicales de su resolución anterior que aún permitía aplicar el nuevo marco legal, o afianzando posturas más conservadoras.

Es cierto que el «programa máximo» se dejó ver en algunas ocasiones, en un intento por no renunciar por completo, al menos a parte de la retórica. En esta nueva resolución, pese a lo defendido en el debate constitucional, España dejaba de ser una nación plural para convertirse de nuevo en un Estado plurinacional –aunque se debe

---

<sup>342</sup> Arturo VAL DEL OLMO: “A todos los delegados..., p.9.

<sup>343</sup> Por otra parte, muchas de las consideradas «renuncias», como se ha intentado demostrar, derivaban en realidad de una política más coherente de lo que pudiera parecer a simple vista, con el ideario que en el PSOE se enunciaba desde inicios de la Transición.

recordar lo dicho anteriormente sobre el significado que podrían estar otorgando a este término–, y en una ocasión, el manido término «nacionalidades» pasaba a ser sustituido por «naciones». Existían otras similitudes con el texto de 1976, como la que identificaba la lucha nacional –y por ende la necesidad de reconocer esa realidad plurinacional– con la lucha contra cualquier forma de opresión. Además, mantenían el objetivo federal, pero sólo en perspectiva de futuro, justificando esta postergación por la nueva coyuntura que surgía desde diciembre de 1978<sup>344</sup>:

Es desde la perspectiva de este objetivo federal del Partido en cuanto a la organización del Estado y a la luz de la realidad plurinacional de España desde la que el PSOE debe valorar el contenido autonómico de la Constitución democrática vigente. La concepción del artículo 2 (...) y el desarrollo de lo que se ha dado en llamar Estado de las Autonomías en el título VIII de la Constitución, suponen sin duda un avance legislativo importante, aunque limitado, para la convivencia democrática de todos los pueblos de España. La aplicación política de las previsiones constitucionales en materia autonómica significará también indudablemente un paso adelante en el difícil y complejo proceso de configuración de España como un Estado Federal compuesto «de nacionalidades y regiones en pie de igualdad». (Resolución sobre nacionalidades del XXVII Congreso)<sup>345</sup>.

Pero aquí acababa cualquier trasgresión a lo pactado en el transcurso de 1978, porque estos principios (junto al de la unidad de la clase trabajadora y la solidaridad de los pueblos de las nacionalidades y regiones), les servían para conjugar el proceso de transformación autonómica del nuevo Estado, con los valores que constituían el «soporte ideológico básico sobre el que se fundamentaba la declaración “SOBRE NACIONALIDADES DEL XXVII CONGRESO”»<sup>346</sup>. Es decir, el nuevo marco no les impedía trabajar por el Estado que en esencia habían dibujado ya en 1976, y que compartía lo más importante con el que se marcaba desde la Constitución, ya que lo que se buscaba en ambos como objetivo final era la convivencia democrática de las nacionalidades y regiones, primando la igualdad entre ellas. En cambio, desaparecía totalmente el principio de autodeterminación, que por lo visto ni siquiera habría formado parte de ese «soporte ideológico básico» del XXVII Congreso, a juzgar por esta manifestación. En definitiva, pervivían tan sólo aquellos postulados que permitían

---

<sup>344</sup> A pesar de que, como hemos visto, defender el Estado Federal sólo en perspectiva de futuro era algo que se planteaba en el PSOE al menos desde 1976.

<sup>345</sup> “Autonomías”, en PSOE: “Resoluciones. 28 Congreso”, ABFPI, c 142, p.5.

<sup>346</sup> *Ibid.*, p.1.

un proyecto de autogobierno, eso sí, con la «perspectiva de un estado federal» no inmediata.

Pero, ¿qué clase de autogobierno? O sobre todo, ¿qué modelo autonómico querían? Por un lado parece que apuntaban al «café para todos», la generalización de las autonomías, casi podría decirse que impuesta desde arriba, igualando el techo de competencias del futuro Estado Autonómico, pero con un acceso gradual a las mismas por parte de los diferentes territorios estatales. Aunque las tensiones fueron muchas en este período, y parece que a este respecto se fue improvisando, influenciados por los resultados electorales y por los avatares propios de la coyuntura y de cada territorio. Veamos paso por paso cómo se fue desarrollando este planteamiento en esta resolución, que tampoco aquí fue totalmente unívoco.

En primer lugar, utilizaron un argumento ya conocido por el socialismo, el que suponía que la opresión nacional era una faceta más de la opresión de las clases dominantes y que por ello se debía combatir contra ella, asumiendo las demandas nacionales de los pueblos de España como un elemento más de la lucha de clases. Lo llamativo es que con el mismo argumento se conseguía revertir la posición defendida por ellos en el congreso anterior, eliminando las demandas más radicales. Se apelaba, como ya se había hecho, al potencial movilizador del nacionalismo, para luchar contra el poder centralista que oprimía a los pueblos; pero también para evitar que lo capitalizaran «las burguesías nacionales» que «nunca han asumido en profundidad la defensa de los derechos y de las aspiraciones de los pueblos del Estado, situándose siempre en última instancia al servicio de los intereses centralizadores de su propia clase»<sup>347</sup>. No dejar que la burguesía se apropiara del nacionalismo era común en toda teoría que pretendiera conciliar socialismo con movimientos de liberación nacional, pero lo interesante es que el PSOE de 1979 consiguió justificar así un modelo que jerarquizaba la igualdad territorial, frente a otro que pudiera construirse de manera asimétrica con el fin de respetar las identidades diferenciadas<sup>348</sup>.

No sólo desaparecían las reivindicaciones más llamativas de Suresnes, ratificadas en el XXVII Congreso, como la defensa de la autodeterminación o el Estado

---

<sup>347</sup> *Ibid.*, p.2

<sup>348</sup> Tampoco era nueva en la teoría socialista esta conclusión. La teoría socialista permitía, como se ha visto, consolidar la nación dominante, a través de una reinterpretación del internacionalismo, en la que la lucha nacional serviría al fin último de la lucha de clases, para el que la unidad de la clase obrera era imprescindible.

federal; sino que iban más allá de defender la unidad de España, querían además asegurar el desarrollo de un Estado igualitario que racionalizara y armonizara el proceso. El argumento seguía la siguiente lógica: en primer lugar se reservaban el derecho a encabezar todos los movimientos con aspiraciones nacionales, allí donde existían reclamaciones históricas, pero también donde no las había. Reivindicaban el protagonismo en territorios como Cataluña o el País Vasco, a los que citaban expresamente y donde se había reforzado, a juzgar por esta resolución, el papel de las fuerzas políticas de la izquierda en los procesos autonómicos. En estos lugares, la responsabilidad debía recaer en los socialistas porque el objetivo de la reconstrucción nacional no debía guiarse por el viejo objetivo de la burguesía nacionalista, sino que la «nacionalidad nueva» debía construirse, económica, política, social y culturalmente, también con la emigración de los trabajadores «de destino». Por otra parte, aludían a un fenómeno nuevo que también estaban dispuestos a liderar, la eclosión de la concienciación nacional o regional, cuya «generalización de la reivindicación autonómica es sin duda, su aspecto más aparente». Ponían como ejemplo a Canarias y Andalucía como puntas de lanza de un movimiento que suponía «una realidad reivindicativa frente al centro y frente a las mejores condiciones de otros pueblos para su liberación nacional», y que se caracterizaba como «progresivo» por tratarse de «un movimiento de reivindicación de igualdad, de existencia de un tratamiento político (no sólo autonómico) que posibilite la efectiva equiparación de los derechos y deberes de la ciudadanía española en todas las nacionalidades y regiones del Estado»<sup>349</sup>.

Ante estas dos manifestaciones de reivindicaciones autonómicas –de orígenes muy distintos– los socialistas no establecían diferencias, especialmente respecto a las metas. Tanto en los territorios con demandas históricas como en aquellos que se insertaban en el segundo grupo, el valor que cobraba un sentido mayor era aquel que igualaba indiscutiblemente a los ciudadanos en derechos. Si los trabajadores de «destino» debían ser tenidos en cuenta al mismo nivel que los de «origen» para construir esa «nueva nacionalidad» demandada históricamente; también las nacionalidades o regiones y en última instancia, sus habitantes, debían conseguir los mismos derechos que los de los territorios que optaban a la autonomía por razones históricas. Para ello, ¿qué partido podía asegurar que el proceso transcurriera por estos cauces deseables mejor que el PSOE?: «el PSOE debe colocarse a la cabeza de los

---

<sup>349</sup> «Autonomías»..., p.3

movimientos de reivindicación nacional y regional orientándolos en la dirección de la liberación social como meta de la igualdad y de la solidaridad entre los pueblos»<sup>350</sup>.

De momento parece que la autonomía servía, según esta resolución, como instrumento que propiciaba la profundización en valores como la igualdad y la solidaridad, siempre respetando las identidades diferenciadas pero incluyéndolas en un marco de superación de las mismas, el de la nación española. Acorde a los principios de subsidiariedad, comentados páginas atrás, valores como la igualdad y la solidaridad se jerarquizaban por encima de otros como el derecho a la diferencia identitaria. A ellos habría que sumar otro, el de la democratización que implicaba el desarrollo del Estado de la Autonomías:

Por otro lado, si es obvio que la democratización de los aparatos del Estado es uno de los objetivos fundamentales de los socialistas en esta etapa de consolidación democrática en España, también lo es que la aplicación en profundidad del proceso autonomizador del Estado es la mejor arma que la Constitución nos sirve para nuestra estrategia democratizadora del Estado<sup>351</sup>.

En el PSOE presentaban el proyecto socialista como superior al del nacionalismo burgués, porque el hecho de hacerse valedores de los intereses, digamos más puramente identitarios, no les hacía perder de vista el objetivo último y prioritario, la igualdad del conjunto de la nación española<sup>352</sup>. Pero además, su proyecto representaba la alternativa respecto al de la derecha gubernamental, que había supuesto una frustración generalizada en muchas nacionalidades y que como consecuencia había radicalizado la expresión política de estos movimientos. Así pues, es continua la intención de arrogarse el papel director en los procesos autonómicos, animando a los pueblos a desarrollar o potenciar su conciencia diferenciada; dando a entender de forma velada que ellos eran la alternativa a la frustración y a la radicalización que conllevaba; salvaguardando por tanto la igualdad y la unidad. Interpretando el papel de valedores de la autonomía, afirmaban sobre el PSOE:

---

<sup>350</sup> *Ibid.*, p.5

<sup>351</sup> *Ibid.*

<sup>352</sup> Esto mismo ya se había visto por ejemplo en el apartado de «Política económica» del libro *Este Viejo y Nuevo Partido*, en el que había una sección llamada «Autonomía y solidaridad regional». En él se apostaba por la redistribución económica entre territorios, demostrando que la igualdad económica entre estos era uno de los objetivos fundamentales que para el PSOE tenía la autonomía, y que no podía ser entendida más que en términos globales, para el conjunto de España: «no puede entenderse la solidaridad sin la autonomía y viceversa. Las autonomías podrán amortiguar las diferencias entre las regiones mediante una política que sirva a una política económica general», en PSOE: *Este viejo y nuevo...*, p. 480.

incidirá además en la generalización de las conciencias nacionales y regionales de todos los pueblos del Estado Español, de forma que el paulatino ejercicio de las libertades autonómicas (...) se inscriba en un esperanzador proceso de desarrollo respetuoso igual y equilibrado de las culturas y de las circunstancias sociales y económicas de todas ellas”<sup>353</sup>.

La intención de ser el partido «impulsor» de la conciencia nacional o regional de todos los pueblos era reiterada en multitud de ocasiones en el texto. El reconocimiento de la España plurinacional nos devuelve a ese programa de máximos que abandonaron con el pacto constitucional, seguramente recuperado tan sólo de forma simbólica, porque las reivindicaciones tenían un límite claro, que no imponía la Constitución en su discurso, sino el «sentido de nacionalismo o regionalismo de clase». Este límite se marcaba, en la erosión a la igualdad, en la trasgresión del interés del conjunto del pueblo español, de la nación española, de la clase trabajadora española, cuya unidad debía prevalecer.

En todo momento abogaban por la necesidad de materializar institucionalmente las autonomías, y por la generalización de las mismas, sin perder jamás el horizonte de igualdad que les esperaba al final del proceso. Pero a estas alturas manifestaban alguna preocupación sobre los efectos que podía tener correr demasiado en todas las regiones, para ellas y para el conjunto de España. La clave para entender cómo desde el PSOE se conciliaron ambos criterios, el de mantener la homogeneidad e igualdad sin caer en la precipitación, recaería en la gradualidad que querían dar al proceso. De hecho, el PSOE apostó explícitamente en este documento por promover la discusión en aquellas regiones que no habían contado históricamente con un Estatuto de Autonomía, para elaborar los Proyectos de Estatutos que mejor se adaptaran a sus realidades culturales, sociales y económicas; a su nivel de conciencia nacional o regional; y a su propia capacidad de autogobierno. Esta manifestación no debe entenderse como un principio que pondría en peligro la igualdad futura de los territorios del Estado, sino como una

---

<sup>353</sup>Y añadían que llevaría a cabo: «una acción política a todos los niveles de la Organización, comprensiva de las realidades nacionales y regionales respectivas, y potenciadora de la profundización y generalización de la conciencia nacional y regional de los trabajadores y de las clases populares. El Partido Socialista debe colocarse al frente de las reivindicaciones autonómicas dotándolas de contenido, impulsando conscientemente en el desarrollo de las realidades culturales diferenciadas. Con la legitimidad que otorga el ser un decidido y responsable impulsor de la solución a la realidad plurinacional de España, el PSOE ha de orientar las reivindicaciones nacionales y regionales en la dirección de la liberación social, de la lucha contra la opresión por la libertad y la igualdad, y bajo un sentido de nacionalismo o regionalismo de clase». Autonomías”..., p.6.

advertencia para no caer en imitaciones, en la carrera competencial, antes de estar preparados.

De este modo, cuando plantearon los dos puntos fundamentales sobre la posición del Partido en relación al contenido de los Estatutos de Autonomía, el primero de ellos, «Aspectos institucionales de las Autonomías», aseguraba precisamente que las competencias serían iguales para todos, pero anunciando su postura favorable a diferentes ritmos. Entendían que la Constitución establecía un «ámbito posible de competencia que, en principio, es asumible por todas las comunidades autónomas en primera o ulteriores fases de su constitución como tales», pero matizaban que en la primera etapa debía valorarse cada caso en profundidad para acertar con el nivel adecuado de competencias, ya que era cierto que en aquel momento:

las diferentes realidades culturales, sociales y económicas y los diversos niveles de conciencia autonómica pueden dar lugar a diferenciados modelos autonómicos que pueden determinar distintos niveles de competencia<sup>354</sup>.

Es decir, al mismo tiempo que en el PSOE se había decidido –como se demuestra al observar el contexto político preautonómico, o al analizar por ejemplo este texto que guía su estrategia del momento– animar a todos los territorios a transitar por la vía autonómica, se marcaban algunas pautas que demostraban su cautela ante un desarrollo autonómico que se les pudiera ir de las manos. Lo habían reflexionado también en otros documentos, como en *Este viejo y nuevo partido*, que contenía la voz «Nacionalidades y regiones», en la que se hablaba en términos similares a los que se observan en la resolución, incluso aludían a la declaración de Felipe González de 1978 en el Club Siglo XXI para demostrar que ya entonces estaban preocupados por generar demasiadas expectativas que no pudieran ser satisfechas de forma inmediata o en un corto plazo<sup>355</sup>: «debemos huir de decir que autonomía es igual a la solución de todos los problemas que existen. Esto es falso sobre todo en un plazo inmediato» y añadían al analizar tales declaraciones: «1.ª) Eran hipótesis que se han cumplido literalmente, y 2.ª) Reflejaban preocupaciones que algunos han llevado torpemente a la práctica, haciendo

---

<sup>354</sup> *Ibid.*, p.7.

<sup>355</sup> Ya nos referimos en el capítulo anterior a una intervención de Felipe González hablando sobre estas cuestiones a principios de 1979, en plena campaña electoral. En ella, su autor defendía que ya en 1978 se había explicado en términos similares y no por razones electoralistas, en alusión clara a la que ahora es mencionada por el libro *Este viejo y nuevo partido. De congreso a congreso*.



que la primera etapa preautonómica salga chamuscada peligrosamente en algunas regiones y nacionalidades»<sup>356</sup>.

Tales afirmaciones redondean un planteamiento esgrimido en la resolución y que podía pasar desapercibido o no interpretado en su plenitud, pero que cobra relevancia a la luz de estas manifestaciones. Anteriormente se ha explicado cómo el PSOE acusaba a UCD de haber frustrado las reivindicaciones de las nacionalidades y regiones, generando un desfase entre los niveles de conciencia identitaria y la plasmación en derechos políticos, por lo que esto había producido la radicalización de tales sentimientos. Dejando de lado el hecho de que de estas palabras ya se intuye que de alguna manera la motivación para otorgar ciertos derechos venía motivada en parte para evitar una maximización de las reivindicaciones, podemos extraer otras conclusiones a luz de los nuevos datos. Los socialistas estaban preocupados, no solo —o no tanto— por no defraudar ciertas aspiraciones, sino por no generarlas artificialmente, de lo que acusaban a UCD. Así, en la resolución se leía: «“La política” de preautonomías generalizadas de la derecha bajo su presentación demagógica ha tratado de esconder su verdadera intención de neutralizar las reivindicaciones de las nacionalidades y regiones»<sup>357</sup>. Aquí podría entenderse un reproche, no sólo a la frustración posterior por la manera de gestionar las autonomías por parte del Gobierno, sino también por llevar una política «demagógica» que proponía generalizar las autonomías para desvirtuar y neutralizar su contenido. A esto se apuntaba precisamente en la voz referida, cuando, esta vez asumiendo parte de la responsabilidad, decían:

como el concepto democracia, la autonomía tenía un significado a los ojos de gran número de votantes, mesiánico, salvador, definitivo. La precipitación se tornó en excesiva alegría de los partidos políticos —sobre todo de izquierda— a la hora, de hablar, prometer y sintetizar arduos problemas como el que nos ocupa. A partir de aquel momento, y sobre todo tomando como punto de referencia precisa los resultados del I-M, se cernía sobre los partidos racional y vocacionalmente autonomistas y sobre el mismo futuro del país autonómico, un grave problema: la decepción de los esperanzados. Naturalmente hoy se puede aducir que a ello ha contribuido sobremanera la nefasta labor llevada por el Gobierno de UCD. Ciertamente. Pero ese no medir suficientemente el alcance último del hecho autonómico, esa no profundización teórico-práctica en la raíz última que es la autonomía: un proceso político de clases que lleva a

---

<sup>356</sup> PSOE: *Este viejo y nuevo...*, p. 423.

<sup>357</sup> “Autonomías”..., p.4.

la par que las emancipaciones regionales o nacionales, el tránsito hacia la emancipación de sus clases populares o trabajadoras en solidaridad, ha dado pie a que entre en juego un nuevo aditivo sumamente peligroso: la demagogia, el radicalismo y el separatismo. Pero este es un nuevo proceso que solamente está esbozado, y por tanto, puede ser yugulado<sup>358</sup>.

Esto confirma que su defensa de los derechos nacionales se hacía siempre y de forma exclusiva desde una lógica unitaria y solidaria. Pero el texto sorprende sobre todo por el reconocimiento vago, aunque matizado después, de su responsabilidad en la generación –en sentido negativo– de muchas de estas aspiraciones. En parte, la esencia del argumento, salvando las distancias, fue similar a la que se desprendía años después de una aseveración de Rodolfo Martín Villa, quien acusaba al PSOE de haber sido «más papista que el papa» alentado los nacionalismos y favoreciendo así la confusión entre autonomía y nacionalismo. Como intuye por sus palabras, para este autor, el PSOE – junto con el PCE– llevó demasiado lejos un principio compartido por toda la oposición democrática, el de la autonomía, identificándolo con el nacionalismo<sup>359</sup>. Quizá a esto se referían en el Partido socialista cuando trataban de llamar la atención sobre las tendencias que iban más allá de esa autonomía solidaria y que deberían ser estranguladas por demagógicas, radicales y separatistas.

En este texto del libro *Este Viejo y Nuevo Partido*, explicaban que tras la muerte de Franco, contagiados por las demandas catalanistas, la oposición democrática había sufrido una «ósmosis autonomista» añadiendo que «la autonomía pendiente es un grito que nadie (...) se atrevía a dejarlo ahogado en su garganta»<sup>360</sup>. Pero mientras lo que se defendiera no implicara transgredir los límites de la autonomía, el Partido proponía seguir apoyando el proceso. De hecho, entendían que la «nefasta política» de UCD había sido la causante de gran parte de esas radicalizaciones que criticaban, por ello, lo que tenía que hacerse desde el PSOE era seguir luchando por que la preautonomía no fuera más esa imposición «mojigata» que habían forzado los centristas, dotándola de competencias reales. Pese a todo, reconocían que parte del problema venía de la propia actitud de los socialistas, a los que no se les había llegado a entender, a los que no se les «había dado la oportunidad de explicarse». Pero aunque con cierta autocrítica, dejaban

---

<sup>358</sup> PSOE: *Este viejo y nuevo...*, p. 428.

<sup>359</sup> Rodolfo MARTÍN VILLA: *Al servicio del Estado*, Barcelona, Planeta, 1984, pp. 174-175.

<sup>360</sup> PSOE: *Este viejo y nuevo...*, pp.427-428.

muy claro que de todo ello había un culpable claro, la UCD y los obstáculos que impuso al desarrollo autonómico:

La izquierda, aunque no lo va a hacer patente de una forma claramente manifiesta se va a decepcionar con el proceso (obviamente no queremos decir que haya pensado por un momento en su liquidación) o, mejor dicho, responsablemente, va a entender y asumir que el año y medio de gobierno de Suárez ha empeorado la situación socioeconómica del país de tal forma que hay que dirigirse preponderantemente a temas claves como el paro, el terrorismo, la seguridad...Pero el proceso autonómico está ahí, más vivo que nunca, más exigente, más decepcionado (...)<sup>361</sup>.

Además de UCD, otro villano aparecía en escena: los nacionalismos burgueses. Estos habían sabido aprovechar la situación de decepción de estos pueblos y la torpeza del PSOE a la hora de transmitir sus objetivos, para sembrar la confusión en su propio beneficio:

“demagogos y hampones políticos recogían los frutos de la ignorancia y el desconocimiento, al tiempo que en el norte y en el sur del país dos partidos políticos ponían la primera piedra de un renaciente sectarismo autonomista burgués. Y es que falló desde el primer momento la verdadera explicación de lo que pueden ser y deben ser hoy las autonomías. Y es que los errores de un año y medio de desgobierno de UCD han traído más certeras metralletas y mayor preparación de esos señoritos de la política a los que les resulta demasiado complicada España como para salirse de sus reductos a los que llaman nación”<sup>362</sup>.

La referencia a los resultados electorales en el País Vasco y Andalucía es velada pero clara en este texto. Ellos mismos reconocían lo peligroso que había resultado no percatarse de que la autonomía podía ser capitalizada en otros territorios por el nacionalismo, restándoles votos. Preocupados por el terrorismo o el paro, temas clave de su campaña electoral, habían descuidado el problema nacional, y esto les había pasado factura en algunos territorios de España, pero no en todos. Posiblemente por ello, se tensionaban los principios y se hacía malabares para mantener la coherencia por definir una política autonómica que por un lado quería rebajar y racionalizar el proceso a través de un acceso gradual en el que se primara a los territorios con mayor tradición de autogobierno y capacidad para gestionarlo (aunque con un evidente horizonte de

---

<sup>361</sup> *Ibid.*, p. 431.

<sup>362</sup> *Ibid.*, pp. 431-432.

igualdad); y por otro instaba a encabezar y promover todos los movimientos que reivindicaran la autonomía, para las llamadas nacionalidades históricas –aunque Galicia no era mencionada casi nunca– y para los territorios como Andalucía, que cada vez cobraban más protagonismo en sus escritos, considerados «puntas de lanza» de ese segundo grupo referido en la propia resolución, más preocupados por la igualdad que por los derechos identitarios.

Además, el nacionalismo, tan malo como esa derecha que impedía desarrollar en su esplendor el autonomismo solidario, era utilizado –gracias a la demonización que se conseguía adjudicándole el apellido de burgués– para ensalzar la unidad de España, compleja pero necesaria, a la que había que defender de la burguesía egoísta que tan sólo miraba por sus intereses de clase. La defensa de los derechos nacionales tenía un límite claro para el PSOE, la integridad de España. Cuando éste se sobrepasaba, los valores que se representaban ya no eran válidos desde el socialismo y por tanto debían ser atacados por el Partido. Así se demostraba en la conclusión del texto, que terminaba con el deseo de fortalecer la nación española con unas autonomías a la altura, ofreciendo el siguiente análisis de la situación:

En que se concedan autonomías amplias, generosas, y se hagan verdaderas reformas estructurales de nuestro sistema impositivo y financiero, estará la clave del futuro feliz de la nueva España autonómica y de la nación como tal. De no hacerse así, el futuro del país será una continua y cada vez más enconada lucha entre clases, aunque, y de momento, la demagogia de ciertos nacionalismos y nacionalistas lleva la dinámica por otro derrotero deliberadamente equivocado: la pugna entre regiones ricas y regiones pobres”<sup>363</sup>.

Este argumento suponía una defensa de los derechos nacionales condicionada a la unidad y la solidaridad, ya que si se ponía en peligro este modelo de España, ya no remitirían a los valores que para el PSOE los convertían en merecedores de ser aplicados. Con una retórica maniquea, los nacionalismos que no preservaban ese Estado autonómico que querían salvaguardar, acababan siendo nacionalismos que trasladaban a la esfera territorial la voluntad de los ricos de someter a los pobres.

Pero todo este discurso no era óbice, como se ha visto, para potenciar las identidades diferenciadas allí donde pudieran existir, generando una actitud ambigua o

---

<sup>363</sup> *Ibid.*, p. 433.

dubitativa en este sentido. Por un lado les parecía necesario defender la unidad, y alertaban sobre el peligro de un contagio demasiado rápido de las demandas autonomistas, que convirtieran el proceso en una carrera competitiva; y por otro, no renunciaban a capitanear estos procesos, ya fuera por razones ideológicas, estratégicas o electoralistas. Era una apuesta difícil, estaba plagada de pros y contras, y la propia tradición permitía avanzar en uno u otro sentido, por lo que no tuvieron una posición clara y fueron improvisando y balanceándose entre una y otra opción, según avanzaba la coyuntura y también según se iban posicionando sus oponentes políticos<sup>364</sup>.

De hecho, en la misma resolución sobre «Autonomías», se insistía repetidamente sobre la obligación socialista de animar las demandas autonómicas donde estas no fueran lo suficientemente fuertes como para motivar desde abajo los movimientos ciudadanos que debían reclamarlas. Pero la revitalización de las conciencias nacionales, al menos en estos lugares, no tenía el objetivo de poner en valor las cuestiones de tipo cultural e identitario, sino que se destacaba la voluntad de alcanzar la igualdad, en términos socio-económicos, con los pueblos de España con mayores cotas de desarrollo. Animar la generalización de las demandas autonómicas desde arriba, suponía por tanto, hacerlo apelando a la igualdad o al subdesarrollo, algo que les iba a dar grandes frutos por ejemplo en Andalucía. Esta noción de la autonomía, y su impulso, no suponían conceptualmente contradicción alguna ni con los principios socialistas, ni con la cautela que aconsejaba ralentizar el proceso.

Una cosa era temer la «carrera autonómica» y otra pensar en un modelo para España que no mantuviera la unidad, la igualdad o la solidaridad en su diseño final. El Estado de las Autonomías que planeaban en el PSOE, posibilitaba la equiparación de todas las nacionalidades o regiones de España en el futuro, preocupándose de los desequilibrios territoriales. Para ello, establecían una correspondencia automática entre autonomía y solidaridad, como se demostraba en el punto titulado «Autonomías y solidaridad. Los desequilibrios territoriales». En él culpaban al Franquismo de la

---

<sup>364</sup> El líder socialista explicitaría que estas dinámicas basadas en la improvisación a partir de cálculos estratégicos según cada problema y cada coyuntura específica eran deseables. Lo haría al indicar que eran preferibles unas resoluciones que dejaran los problemas relativamente abiertos para no encorsetar futuras decisiones: «Creo que lo que hay que evitar es el cerrar demasiadas puertas, es decir, nosotros tenemos la tentación de hacer unos proyectos excesivamente acabados, de tal manera que limitamos mucho la capacidad de alternancia dentro de un juego estratégico que tiene adaptaciones tácticas que nos impone la realidad. Entonces, creo que hay que hacer grandes alineamientos estratégicos, y, a partir de eso, encargar que haya convenciones con equipos de estudio que preparen alternativas concretas a problemas concretos», *El Socialista*, 108 (13 de mayo de 1979).

desigual situación socio-económica que sufría España, y no veían otra salida para corregir el problema que la de aplicar los principios de la solidaridad e igualdad a través del «proceso autonomizador» como «instrumento de corrección de los desequilibrios económicos»<sup>365</sup>. Como este era un objetivo fundamental y prioritario del PSOE, explicaban la necesidad de que el Gobierno planificara, como función básica del Estado, la actividad económica general. Este plan económico se describía como:

necesario a dos niveles desde la perspectiva autonómica: primero como factor o instrumento de corrección de los desequilibrios regionales, previo incluso al asentamiento y consolidación de las autonomías. Y segundo, como pieza indispensable para la armonización y coordinación de las diferentes acciones y políticas económicas de las comunidades autónomas de forma que no se produzcan distorsiones, contradicciones y desequilibrios inseparables<sup>366</sup>.

Es evidente que el objetivo prioritario de la descentralización autonómica era transformar España en un territorio organizado igualitariamente. De hecho, se planteaba la exigencia de una ordenación, que por encima de los derechos históricos, «armonizara» el desarrollo autonómico del Estado. Y es que, aunque mantenían que cada nacionalidad y región debía avanzar hacia la misma meta a su propia velocidad, en opinión del PSOE, este proceso requería una armonización y una planificación que condujera el cambio desde arriba:

distinto ritmo en el proceso autonómico no puede ni debe implicar que no se aborden desde el Estado los graves problemas de infradesarrollo económico y cultural (...) ya que precisamente esa atención específica a problemas auténticamente estructurales será una condición favorecedora del proceso autonómico (...) La atención a los urgentes problemas socio-económicos específicamente territoriales es la condición indispensable para el verdadero y no puramente supraestructural despegue autonómico<sup>367</sup>.

Era evidente que se apostaba por la armonización para favorecer la igualdad del conjunto de España. En su modelo, estos principios eran más importantes que atender a la identidad diferenciada de los territorios que integraban este Estado-nación, y prevalecieron ante la defensa de los derechos de las nacionalidades oprimidas postulados en congresos anteriores. De hecho, permitir que el conjunto de ciudadanos

---

<sup>365</sup> “Autonomías”..., p.10.

<sup>366</sup> *Ibid.*, p.11

<sup>367</sup> *Ibid.*

que conformaban la nación española compartiera la misma situación socio-económica, sería el mayor reclamo que impulsaría a los socialistas para avanzar en ese Estado de las Autonomías. Y para asegurar que el proceso se producía con normalidad, planteaban la necesidad de que existiera más de un ritmo autonómico, acorde al nivel de conciencia nacional o regional de cada pueblo –o a intereses que se irían revelando importantes sobre la marcha– pese a que de forma inequívoca el camino debía conducir a la misma meta, ellos mismos se estaban asegurando de ello al favorecer la creación o la difusión de las reivindicaciones autonómicas, como se ha visto.

Pero, ¿qué otras implicaciones tenía este plan que concebía un Estado de las Autonomías que, aunque avanzando a su ritmo, acabara por homogeneizar España a nivel competencial? Si los procesos de desarrollo autonómico se habían concebido para que se precipitaran a partir de la movilización ciudadanía desde abajo, el PSOE había decidido influenciar a la misma, tratando de poner a las clases populares a la cabeza de estas demandas, como propugnaban en el XXVIII Congreso. Lo cierto es que en muchos territorios las estrategias de los partidos condicionaron la marcha de los acontecimientos, implicando muchos más factores en la ecuación y haciendo que el desenlace dependiera no sólo de la voluntad inicial de autogobierno de la población, como se verá.

La moderación en el espíritu de esta resolución parece clara, aunque pese a todo, en determinados momentos se mantuvieron algunas formulaciones que iban más allá de lo que en realidad estaban planteando llevar a cabo. Este mantenimiento del que fuera el «programa máximo», convivía forzosamente ante la realidad de una estrategia que transcurría claramente por otros cauces. La apuesta de máximos, según la cual parecían querer demostrar que no habían dado marcha atrás en la formulación de determinados principios, era observable sobre todo a partir de su conclusión de ratificar plenamente el «contenido de la declaración sobre “Nacionalidades” aprobado por el XXVII Congreso del Partido». Un intento de guardar las apariencias que era desmentido por la realidad. En cualquier caso, como veremos a continuación, los socialistas se negaron a ratificar de forma explícita principios defendidos en 1976, como el del derecho a la autodeterminación.

## 2. El abandono del derecho de autodeterminación

La moderación en el discurso era acorde al cambio estratégico que se estaba produciendo en el PSOE, embarcado en aquellos momentos en una deriva política más posibilista. La renuncia a la defensa del principio de autodeterminación no produjo excesivo ruido mediático, posiblemente porque el debate constitucional lo había hecho aparecer como el desenlace más «lógico»; pero también porque el debate entre marxismo sí / marxismo no, acallaba otras polémicas de fondo. Y es que esto precisamente pudo representar la desaparición del derecho de autodeterminación, una cuestión de fondo en la que no hubo tanto consenso como podría haber parecido a partir de un análisis más superficial. Desde luego, la polémica, si la hubo, no fue tan fuerte como para dejarse oír en un momento en el que las miradas estaban atentas a otro problema de mayor interés, entre la mayor parte de la militancia y la sociedad –a juzgar por el papel otorgado desde la prensa–. Pero un estudio más pormenorizado nos revela cómo este término no desapareció sin más de la escena política, sino que trató de sobrevivir, aunque tan solo fuera de una manera más bien simbólica, como principio ideológico, sin voluntad de aplicación práctica, dentro de los límites de ese Estado federal, que por otra parte era federal sólo como horizonte de futuro.

El propio Felipe González, en una entrevista a *El Socialista*, con motivo de la celebración del citado congreso, expresaba que el nuevo texto legal les condicionaba a la hora de establecer sus postulados programáticos, también en materia autonómica, ya que no partían de cero<sup>368</sup>. Inmerso en la polémica sobre el marxismo y trabajando en su estrategia de moderación, plantearía algo que sería perfectamente aplicable para la defensa o no del derecho de autodeterminación: que postulados esgrimidos en un tiempo diferente no tenían por qué ser los que marcaran la política de los socialistas en un momento en el que, conquistada la democracia, el objetivo del partido debería ser transformar democráticamente la sociedad. Una transformación que no veía posible sin que el proyecto socialista fuera mayoritario en el país. Para ello, juzgaba necesario

---

<sup>368</sup> «Ahora mismo partimos de una realidad –no estamos encarando el futuro sin ningún punto de partida, como ocurrió en el congreso de 1976–; ahora tenemos una base que se llama la Constitución. Por consiguiente, el partido tiene que tener en cuenta que hay un texto básico que nosotros no sólo hemos votado, sino que hemos defendido. Y que ese texto es la garantía de la estabilización de la democracia. A partir de la Constitución, a mi juicio, deben construirse una serie de alternativas políticas; por ejemplo, las alternativas políticas autonómicas, teniendo en cuenta nuestra vocación federalista», *El Socialista*, 108 (13 de mayo de 1979).



calar en un conjunto cada vez más amplio del electorado, ofreciendo aquello en lo que la mayoría podía verse reconocido y no al contrario:

El hecho es que ha habido una transformación profunda. Entonces, hay que estudiar esta sociedad y hacer un proyecto político para esta sociedad y no hacer una abstracción, como pretenden algunos compañeros, metiendo la sociedad en el proyecto político y no el proyecto político en la sociedad<sup>369</sup>.

Así pues, aunque no se estaba refiriendo específicamente al tema que ocupa esta investigación, el espíritu que guiaba sus declaraciones era igualmente aplicable a este caso: en este ambiente estratégico, y ante una Constitución y una mayoría de la sociedad que no aceptaba el derecho de la autodeterminación, debía aprobarse una resolución en la que aparentemente este no podía tener cabida. Pero pese a todo, la defensa socialista de este principio no fue acallada totalmente con el consenso constitucional, sino que tuvo sus últimos estertores en el XXVIII Congreso del PSOE, y se observan reconstruyendo el proceso de elaboración de la resolución sobre «Autonomías».

### ***Hablan las agrupaciones***

Para empezar, hay que señalar que el proceso de elaboración de las resoluciones comenzaba con la redacción de las ponencias, realizadas en dos fases, que pasarían después a votarse en el Pleno del Congreso. La primera fase era diferente dependiendo del tipo de ponencia, ya que inicialmente debían estar divididas en dos grupos, las realizadas por las agrupaciones de militantes (entre las que se encontraba la de «Nacionalidades y política autonómica»); y las suscritas por las comisiones encargadas por el Comité Federal («Estrategia política», «Estatutos», «Economía», «Emigración» y «Defensa»)<sup>370</sup>. En todos los casos, los textos presentados eran considerados documentos de trabajo para facilitar la discusión de cara a la elaboración de las ponencias definitivas, y se pusieron a disposición de los militantes con anterioridad al Congreso, en el primer caso a través de una memoria publicada y distribuida un tiempo antes; y en el segundo, por medio de la edición de un dossier titulado «Documentos de trabajo elaborados por el Comité Federal»<sup>371</sup>.

---

<sup>369</sup> *Ibid.*, p.4.

<sup>370</sup> *El Socialista*, 104 (15 de abril de 1979); y *La Vanguardia*, 11 de marzo de 1979.

<sup>371</sup> La Memoria se dividía en 4 tomos: el primero se refería a la gestión de la Comisión Ejecutiva; el segundo era el de las proposiciones políticas; el tercero correspondía a las proposiciones orgánicas, con ponencias como la de «Estatutos»; y el cuarto, el de las proposiciones programáticas, lugar entre el que se

En el caso de los documentos de trabajo, la publicación oficial no consta de un apartado específico para afrontar la problemática sobre la organización autonómica, pero parece que el Comité Federal sí lo consideró un tema lo suficientemente importante para ser encargado a una comisión específica, aunque después, este informe no fue integrado en la edición oficial de estos trabajos. Este documento de trabajo, titulado como «Las Autonomías», había sido elaborado por una comisión formada por José Antonio Maturana, Josep Maria Triginer, Josep Verde i Aldea, Luid Fajardo y Rafael Vallejo<sup>372</sup>.

El texto mantenía un tono relativamente neutro respecto a las cuestiones más problemáticas, sin mencionar la autodeterminación, asumiendo por completo el marco Constitucional, y centrándose en los aspectos más técnicos de la nueva administración territorial. Desde la introducción de este proyecto de ponencia se establecía claramente el marco en el que se movía la política del PSOE a este respecto: la Constitución de 1978; y cuáles eran los objetivos que motivaban al partido: favorecer el autogobierno, desde una concepción federalista que se basaba en la solidaridad y la profundización de la democracia. Establecidos estos máximos que inspiraban su política de actuación, impulsaban un proceso que debía desarrollarse a diferentes ritmos, en base a la constatación según ellos, de diferentes niveles de identidad entre los pueblos de España:

La transformación de un Estado centralista en un Estado basado en las autonomías como unidades de gobierno, con las competencias que la Constitución les reserva, es uno de los objetivos políticos más inmediatos en la etapa de profundización y normalización de la democracia en nuestro País. Los socialistas, partimos del principio de que todos los pueblos de España tienen derecho a reclamar un mismo nivel de competencias.

Consideramos asimismo, que el ritmo necesario para asumir estas competencias, ha de estar en función de la conciencia autonómica de cada nacionalidad o región y de su capacidad de autogobierno. La conciencia autonómica se ha desarrollado, históricamente, en las denominadas «nacionalidades»: Euskadi, Cataluña y Galicia y ha surgido, también, en otras regiones a causa de la especificidad de sus problemas o como consecuencia de su situación geográfica

---

inscribían las ponencias sobre las autonomías, y que suponía el «futuro programa del PSOE», *El Socialista*, 104 (15 de abril de 1979); y *La Vanguardia*, 27 de abril de 1979.

<sup>372</sup> Una representación de algunas de las sensibilidades que posiblemente más preocupaban a los socialistas en aquel momento: la catalana, la vasca, la andaluza y la canaria.

Por todo ello, el PSOE considera que debe establecerse una política de prioridades en la transferencia de competencias preautonómicas y en el desarrollo y contenido de sus Estatutos<sup>373</sup>.

A raíz de esta afirmación no está muy claro si tan sólo consideraban nacionalidades a Cataluña, Euskadi y Galicia y si en consecuencia reservaban las «prioridades» y un ritmo más rápido en la consecución de la autonomía a estos tres territorios en exclusiva; o si pese a otorgarles una categoría preferente como nacionalidades por derecho, creían que a este ritmo podrían sumarse también otros pueblos de España. Y en ese caso ¿qué requisitos deberían reunir el resto de territorios para formar parte del grupo de los más avanzados? En cualquier caso, aludir a diferentes ritmos no significaba apostar por la construcción de un modelo asimétrico, ya que la concepción socialista del Estado tenía dos pilares fundamentales, como se desprendía del texto: la solidaridad, a la que servía la autonomía, para redistribuir territorialmente la riqueza; y la profundización de la democracia, a la que contribuiría la autonomía al «aproximar el nivel de las decisiones políticas al ámbito donde estas deben llevarse a cabo». Estos principios, que jerárquicamente sobresalían en el discurso, eran compatibles con la diferencia identitaria y con los diferentes niveles que esta identidad adquiriría en los distintos pueblos de España. Por ello, cuando se referían al «Estatuto marco», dejaban claro que existía un límite constitucional, al que voluntariamente podrían acceder todos los territorios que lo desearan, pero que no debía ser ni mucho menos obligatorio ni necesario, ya que se contemplaba también «la posibilidad de renunciar a una parte de estas competencias en función de la voluntad expresa de sus redactores». Esta matización no impediría, sin embargo, que el verdadero espíritu del texto quedara expuesto, el de organizar un Estado basado en el autogobierno de las comunidades que lo componían, en el que la igualdad, la solidaridad y la

---

<sup>373</sup> Parece que éste análisis contemplaba sólo 3 territorios con una identidad autonómica, que no nacional, basada en motivos históricos, y otros territorios en los que se habría adquirido una identidad autonómica a partir de su situación geográfica (Canarias sería el ejemplo evidente) o de la «especificidad de sus problemas» (que recuerda a la reivindicación autonómica de Andalucía a consecuencia sobre todo de su subdesarrollo económico). Esto olvidaría a territorios como el País Valenciano, en los que los dos últimos motivos no encajarían bien para definir las causas de su reivindicación autonómica. José A. MATURANA, J. M. TRIGINER, J. VERDE Y ALDEA, L. FAJARDO y R. VALLEJO: “Documento de trabajo. Elaborado por la comisión nombrada a estos efectos por el C.F. Tema: Las Autonomías”, ABFPI, Fondo Carlos Martínez Parera, ACMP-1033-21, pp. 1-2.

democratización prevalecían ante cualquier otro derecho, y en el que la eficacia en la gestión de aquella pluralidad eran prioritarias<sup>374</sup>.

Para conseguir estos objetivos, establecieron una jerarquía entre los «niveles de decisión política», de los cuáles el más importante se situaba en los organismos centrales del Estado desde donde se decidía la política común de toda España, ya que era en éste ámbito desde donde se decidía «el resultado de la más importante confrontación de intereses de clase. El modelo económico de crecimiento, la estructura del poder que otorga la propiedad privada, las relaciones de producción y, en suma, el modelo de sociedad»<sup>375</sup>. Aunque no por esto despreciaban el nivel de decisión política que se jugaba desde las autonomías o desde los poderes locales, ya que eran ámbitos desde donde se podía dar respuestas más cercana a los problemas sociales. En definitiva, la atención del PSOE se centraba en este texto encargado por el Comité Federal, en cuestiones estructurales que afectaban al conjunto de España, para las que el nuevo modelo de Estado podría suponer una solución, y si bien no despreciaban el problema identitario tampoco suponía la punta de lanza de sus demandas ni sus objetivos:

El distinto ritmo en el proceso autonómico no puede ni debe implicar que no se aborden, desde el Estado –que es quien puede y debe hacerlo, los graves problemas de infradesarrollo económico y cultural (...) ya que precisamente esta atención específica a problemas auténticamente estructurales será condición favorecedora del proceso autonómico en sentido básicamente político, o de estructura política que precisa bases sólidas para ser llevado a término con éxito en esta visión global que para el Estado propugnamos los socialistas. La atención a urgentes problemas socio-económicos específicamente regionales es la condición indispensable para el verdadero y no puramente estructural despegue autonómico<sup>376</sup>.

Esta postura podría considerarse de alguna manera como la oficial, al menos por parte del Comité Federal, ya que, aunque por algún motivo no fue recogida en la publicación que reunía los «documentos de trabajo» encargados por este organismo, sí debió repartirse entre los militantes<sup>377</sup>.

---

<sup>374</sup> *Ibid.*, p. 2-4.

<sup>375</sup> *Ibid.*, p. 3

<sup>376</sup> *Ibid.*, p. 4.

<sup>377</sup> Ya que precisamente este documento se encuentra archivado en un fondo donado por un militante a la Fundación Pablo Iglesias.

Es interesante contrastar sus postulados con los que se observan en las proposiciones sobre «Nacionalidades y política autonómica» que emitieron voluntariamente las agrupaciones<sup>378</sup>. De todas ellas, tres plantearon el problema de la autodeterminación, pero no del mismo modo<sup>379</sup>. En la ponencia navarra, que no obtuvo ningún protagonismo en la comisión encargada de hacer la ponencia definitiva, la autodeterminación se veía casi como una concesión necesaria<sup>380</sup>. Tras un pasado de opresión de los derechos nacionales por parte de la dictadura, la población se había manifestado masivamente a favor de estos, y el PSOE no podía negar las aspiraciones de estos pueblos, que además de haber dejado claro su mandato, habían confiado en los socialistas para llevarlo a cabo : «el impresionante apoyo obtenido por nuestro Partido en todas las nacionalidades del Estado español, nos ponía en condiciones de apoyar totalmente el derecho de las nacionalidades a decidir su propio destino». Pero una vez más, el mantra de la unidad era repetido, en este caso sin dejar dudas de que para ellos era, si no la única opción posible, al menos la única deseable:

Sólo la defensa del derecho a la autodeterminación podía llevar a una unidad voluntaria de todos los pueblos del Estado. Después de largos años de unidad impuesta y represión brutal de los derechos democráticos, es lógico que muchos sectores nacionalistas reclamen incluso la independencia.

Para los marxistas, el desmembramiento del Estado español y del movimiento obrero, en líneas nacionales sería un desastre.

Nosotros comprendemos que los trabajadores necesitan unirse por encima de cualquier frontera para llevar adelante la transformación socialista de la sociedad, y en esta gran lucha hay dos tareas básicas: eliminar la propiedad privada de los medios de producción y librar las fuerzas productivas de los límites impuestos por las fronteras nacionales<sup>381</sup>.

---

<sup>378</sup> Las Palmas, representando a Canarias (con una introducción del Comité Regional de la federación canaria); Castellón; Ceuta; Estella por Navarra; Talavera de la Reina por Toledo; Burjassot por Valencia; y dos agrupaciones del exterior, la de México y Ginebra.

<sup>379</sup> Ceuta, por ejemplo, se limitó a confirmar de forma aséptica lo que ya se había reconocido en 1974 y 1976, para pasar rápidamente a enunciar las demandas concretas en torno a la autonomía ceutí que en realidad habían motivado su alegato, PSOE: “Memoria. IV. Propositiones Programáticas. 28 Congreso”, ABFPI, c 150, p. 189.

<sup>380</sup> Mostrando que éste no era un tema en el que había consenso, el periódico *Avui* se hizo eco de una polémica dentro de la agrupación navarra. Al parecer se había expulsado a veinticinco miembros que acusaban al grupo parlamentario de marcar la línea política sin contar con la militancia de base, añadiendo entre otras cosas, que «l’esperit del militants navarresos és el de l’autodeterminació, tot i que a Tudela hi ha certa por sobre aquest punt per manca d’informació», *Avui*, 16 de mayo de 1979.

<sup>381</sup> PSOE: “Memoria. IV. Propositiones...”, p. 190.

La retórica era heredera de diversas tradiciones discursivas sobre la relación entre nacionalismo y marxismo. Por un lado, el recuerdo del Franquismo justificaba la voluntad independentista de los nacionalismos alternativos al español, con los que se solidarizaban como víctimas de la dictadura. En realidad podría decirse que era esto lo que en última instancia justificaría el separatismo, porque inmersos en otra tradición, posiblemente la del «monismo internacionalista», a los autores de este texto les resultaba más difícil entender que la clase obrera pudiera pretender romper la unidad que era necesaria para emanciparse del yugo opresor. Se trataba de una perspectiva que aceptaba las reivindicaciones nacionales siempre que no pusieran en peligro la unidad última de la clase obrera, lo que implicaba de facto mantener la unidad en los Estados-nación. Para la agrupación de Estella, la autodeterminación era el mecanismo necesario para que los pueblos se pronunciasen libremente, pero de forma afirmativa, por la unidad de España. Esta fórmula así entendida era concebida como la única vía posible para conciliar sus obligaciones proletarias con la defensa de las libertades de los oprimidos:

sabemos que incluso la independencia nunca daría solución a los derechos de las nacionalidades mientras subsista el capitalismo (...).

Los socialistas defendemos que sólo bajo el socialismo, a través de la unión libre de todos los pueblos, se podrán satisfacer las aspiraciones democráticas de las nacionalidades oprimidas y el resto de los problemas de la clase obrera<sup>382</sup>.

Pese a todo, aunque mantenían clara su alternativa, reiterada en diversas ocasiones, llegaban a aceptar el derecho de cada pueblo a decidir «incluso su separación». Pero no se puede tomar esta declaración de forma literal, una vez había quedado integrada en un discurso en el que la autodeterminación era entendida desde una visión ideológica y estratégica que excluía la separación por principios. De hecho, esta era la aplicación práctica que debía extraerse del planteamiento esgrimido por gran parte del socialismo, como ya se había demostrado a raíz del debate constitucional. Y a partir de esta concepción, la autodeterminación seguía viva como principio en muchos ámbitos, sin que para muchos socialistas fuera incongruente con su práctica política, aunque para la mayoría, como se verá con la aprobación de la resolución, esgrimir este

---

<sup>382</sup> PSOE: “Memoria. IV. Propositiones..., p. 190.

derecho no era una opción viable, al menos en España, una vez se había descartado por la Constitución, con el apoyo decidido del grupo socialista.

Por otra parte, en este texto, como no podía ser de otro modo, se relacionaba esta cuestión con el problema de la violencia en el País Vasco y con el de la falta de legitimidad del proceso democrático en este territorio a partir de los resultados que se habían obtenido con el referéndum constitucional. Una vez más se hacía autocrítica respecto a la política autonómica socialista que se había llevado en esta nacionalidad, mencionando como uno de los aspectos negativos, la negación del derecho de autodeterminación en la Constitución<sup>383</sup>. Aunque esta afirmación no suponía una trasgresión a los planteamientos generales, ya que aludía a que la solución sólo se daría en el marco de una sociedad socialista, donde los problemas nacionales no tendrían ya razón de ser y la unidad se daría de forma voluntaria y necesaria<sup>384</sup>.

La otra ponencia que defendió el derecho de autodeterminación fue la de Castellón, que lo hizo también desde los presupuestos marxistas que vinculaban la lucha en las nacionalidades oprimidas a una parte más de la lucha de clases, reinterpretando el viejo internacionalismo, pero con un tono distinto al del proyecto de Navarra. La unidad, sin ser puesta en entredicho no aparecía reiterada de igual manera y en este texto no parecía que centraran el foco sobre la misma. El término aparecía cuatro veces, tres de las cuales se debía a una copia literal de la «Resolución sobre nacionalidades» del XXVII Congreso de 1976, la otra decía así:

La autodeterminación, por la cual los pueblos deciden libremente las instituciones que mejor convienen a su identidad nacional y a sus relaciones con otros pueblos, es un

---

<sup>383</sup> «los resultados obtenidos en el referéndum de la Constitución, derivados de la oposición a esos “engaños” autonómicos que nuestro Partido apoyó entonces, puso a la orden del día la gravedad del problema nacional y la imperiosa necesidad y obligación del PSOE de articular una salida revolucionaria. El terrorismo individual (ETA) es la expresión más clara de las ilusiones que se habían depositado en la democracia. Al verse truncadas, pues no se han dado al pueblo vasco sus reivindicaciones, y la negación en la Constitución al derecho de autodeterminación, unido a la actuación vandálica de la Policía, se crean las condiciones adecuadas para la justificación de la lucha terrorista», PSOE: “Memoria. IV. Propositiones...”, p.190.

<sup>384</sup> «todos los problemas de la clase obrera y el problema de la expresión nacional se derivan de la existencia del corrompido sistema económico capitalista y su Estado. Sólo la clase obrera organizada puede solucionar estos problemas desde una perspectiva de clase, manteniendo la unidad con el resto de la clase obrera del Estado español y a nivel internacional. (...) Sólo podremos acabar con el terrorismo de ETA en la medida en que destruyamos las causas que lo originan. (...) Esta tarea requiere la unidad del proletariado a nivel internacional, bajo la bandera del socialismo y no su fraccionamiento. No es por casualidad. La primera consigna central de MARX y ENGELS que dirigieron a los trabajadores y que hoy mantiene toda su vigencia fue: ¡Proletarios del mundo, uníos!, PSOE: “Memoria. IV. Propositiones...”, p.190.

derecho permanente e imprescindible. Los socialistas exigimos que su ejercicio sea reconocido a todos los pueblos que forman el Estado español<sup>385</sup>.

En este caso no había condiciones a un derecho, que debía ser «permanente e imprescindible», pero a renglón seguido se ponía en evidencia cuál era la voluntad real del socialismo español. Aunque no se planteaban límites al derecho a decidir, se demostraba una vez más que la intención no iba más allá de construir un Estado gestionado a través del autogobierno, con un lenguaje propio de la subsidiariedad:

Los principios de autogestión y autogobierno significan que el poder político ha de ser limitado, descentralizado, adaptado y próximo a los pueblos en donde se ejerce y directamente controlado por estos. En una realidad multinacional como la del Estado español, la existencia de un poder político centralizado, unitario y concentrado, es la negación directa de estos principios que hemos ido enumerando<sup>386</sup>.

Desde luego, aparecen manifestaciones bastante explícitas, como autodeterminación o la caracterización de España como Estado multinacional, pero la voluntad en el PSOE, su objetivo implícito, era mantener la unidad a través de una descentralización política, que además ayudara a acercar el poder a los ciudadanos construyendo una sociedad española más democrática.

Enunciadas algunas de las cuestiones más destacables de las propuestas enviadas por las agrupaciones, conviene aclarar ciertas cuestiones formales sobre el funcionamiento del Congreso y de esta Ponencia. Ya se ha mencionado que el proceso de elaboración empezaba –al menos teóricamente–, por la presentación voluntaria de estas propuestas por parte de las agrupaciones, y que todas ellas se incluían en la Memoria<sup>387</sup>. Una vez en el Congreso, los delegados se apuntaban voluntariamente a la comisión de la ponencia sobre la que estuvieran interesados (en proporción al número de miembros por delegación), y de entre todas las proposiciones enviadas la Ponencia debía elegir la proposición o proposiciones que iban a constituir el «texto base»<sup>388</sup>.

---

<sup>385</sup> Se encuentra otro momento –extraído literalmente del XXVII Congreso– en que se hacía referencia a esa voluntad del PSOE de que el ejercicio del derecho de autodeterminación desembocara no en la separación sino en una unidad más fuerte, igualitaria y solidaria por encima de todo, en PSOE: “Memoria. IV. Proposiciones..., p.187.

<sup>386</sup> *Ibid.*

<sup>387</sup> PSOE: «Reglamento de Congresos», Archivo personal de Víctor Fuentes Prosper, p. 7.

<sup>388</sup> Constituida la ponencia se procedía a la elección de la dirección de la Mesa por mayoría simple. En este caso, la mesa sobre «Política autonómica» quedó de la siguiente manera: «Alfons Cucó, de Valencia, como presidente; para vicepresidente resultó elegido el jiennense Pedro Capiscol; secretario de actas es



A partir del seguimiento de los medios de comunicación sobre el Congreso se deduce que fue la ponencia de Castellón y otra del PSC-PSOE las que marcaron la discusión de la comisión y establecieron las pautas para la redacción en el seno de la misma del dictamen que pasaría a defenderse en el pleno<sup>389</sup>. Aunque, la tónica general de la prensa fue hacerse eco de la importancia del texto de Castellón<sup>390</sup>, el protagonismo del mismo fue en realidad muy limitado, ya que sería la ponencia del PSC-PSOE, presentada en la propia comisión, la que marcó las líneas generales. Esta no había sido recogida en la Memoria, tal y como pautaba el reglamento, sino que debió de nacer al calor de una reunión del 13 de mayo celebrada por los delegados catalanes y destinada a discutir su postura ante el Congreso. Como manifestaron a la prensa, a diferencia de lo que sucedía en otros partidos federados o federaciones socialistas, su preocupación sustancial no era la supresión o continuidad del término «marxista», sino que según declaraba Eduardo Martín Toval, para ellos existían otras cuestiones que les preocupaban más, como la federalización del partido<sup>391</sup>. Así pues, «situando en un segundo plano la polémica sobre el marxismo» se decidió defender la federalización como el punto primordial del mandato que debía llevarse a Madrid, y se fijaron las posturas de los 48 delegados que representarían al partido, en torno a las siguientes ponencias: línea política, estatutos, política sindical, autonomía y política municipal<sup>392</sup>.

En esta reunión se debatió el texto que el PSC-PSOE envió como enmienda directamente en la ponencia<sup>393</sup>, «Hecho nacional y política autonómica», un texto que se presentaba con la siguiente aclaración: «Aquestes esmenes han estat preparades per una

---

el compañero López, de Málaga, y como secretario de palabra fue designado Antonio Inda, de Granada”, *El Socialista*, 1 especial XXVIII Congreso (19 de mayo de 1979).

<sup>389</sup> «Dos ponencias presentadas, respectivamente, por Castellón de la plana y el PSC-PSOE fueron los textos que más se manejaron en las discusiones», *Ibid*.

<sup>390</sup> Por ejemplo en *La Vanguardia*: «La misma radicalización de la ponencia política se reflejó también en la dedicada a la política autonómica, donde tras una serie de discusiones se aprobó una propuesta inicial de la Federación de Castellón, modificada con una serie de enmiendas de otras federaciones», *La Vanguardia*, 19 de mayo de 1979; en otro artículo de *El País* se señalaba que : «La comisión que discutió la ponencia sobre política autonómica del partido, presidida por Alfons Cucó, de Valencia, adoptó como documento base de la discusión, por su amplitud, el presentado por la organización de Castellón de la Plana», *El País*, 19 de mayo de 1979.

<sup>391</sup> *La Vanguardia*, 13 de mayo de 1979.

<sup>392</sup> *La Vanguardia*, 15 de mayo de 1979.

<sup>393</sup> Así lo confirmaba Josep Verde i Aldea, quien expresaría unos días después de la celebración del congreso el motivo que llevó al PSC-PSOE a redactar este texto: «La qüestió autonòmica figurava tractada de manera molt parcial en diverses ponències arribades en temps oportú i publicades als llibres de materials a treballar pel Congrés. Des de Catalunya fou elaborat un text que, després de ser treballat a la conferència de delegats catalans a Barcelona, el dia 13 de maig, anà a la corresponent del Congrés com a esmena i que, definitivament, i amb noves aportacions, fou aprovat al ple», Josep VERDE I ALDEA: “Socialisme espanyol i autonomies”, *Avui*, 23 de mayo de 1979.

Comissió delegada per la Executiva Nacional integrada per Eduardo Martín Toval i Josep Verde i Aldea»<sup>394</sup>. Este proyecto, tomado después como referencia del debate, no fue incluido por el procedimiento normal, sino que siguió un trámite que a pesar de no ser el habitual, parece que tampoco resultaba extraño, ya que si los miembros de la ponencia no ponían inconvenientes podía ser aceptado<sup>395</sup>. Además, uno de sus dos autores, Josep Verde i Aldea, había contado previamente con la confianza del Comité Federal para realizar el «documento de trabajo» sobre las Autonomías al que nos hemos referido anteriormente. Pero, entonces, un texto que no había podido ser estudiado por los delegados que acudían a este encuentro sería fundamental, y esto no puede ser soslayado, ya que, como declaraba Alfonso Guerra, el trabajo previo por las federaciones y los partidos federados resultaba fundamental, y en este caso no se había hecho<sup>396</sup>.

Posiblemente, pese a los inconvenientes, la necesidad de esta propuesta permitió su inserción en el debate convirtiéndose en la práctica en el texto base, puesto que era quizá el más acorde a la política que a las alturas de 1979 se estaba desarrollando en el Partido. El texto que se había realizado desde Navarra podría resultar demasiado polémico por sus repetidos llamamientos a la unidad en relación con el polémico y complicado problema de la violencia terrorista; y el texto de Castellón estaba en la línea de la resolución de 1976, defendiendo unos planteamientos que comenzaban a resultar problemáticos tras la Constitución y el inicio de la nueva estrategia que el partido estaba trazando cada vez de forma más evidente. De hecho, estaba tan en consonancia con la resolución del XXVII, que gran parte de lo escrito no era en realidad más que una copia literal de éste –quizá otro motivo que explicaba la necesidad en la ponencia de un texto

---

<sup>394</sup> “Hecho nacional y política autonómica”, AHUV, Fons Alfons Cucó, 021/029, p.1.

<sup>395</sup> Así nos lo confirmó Víctor Fuentes Prosper: *Víctor Fuentes Prosper*, 24 de septiembre de 2015, entrevista realizada por Vega RODRÍGUEZ-FLORES, València.

<sup>396</sup> A la pregunta de si 4 días serían suficientes para debatir sobre las ponencias, Guerra respondía que los textos: «ya son conocidos por todos los delegados y han sido discutidos en las agrupaciones. Y hay muchas agrupaciones que traen, ya, su posición fijada, incluso de una manera rígida», *El Socialista*, 109 (20 de mayo de 1979). Otra de las polémicas vividas en aquel momento era la de la excesiva rigidez con la que venían tomadas las decisiones desde cada territorio, ya que en muchos de los casos los votos eran emitidos según la consigna establecida desde los partidos o federaciones de las distintas nacionalidades y regiones, con poco margen para que el debate permitiera cambios de opinión y consensos posteriores. Con lo cual, las posibles enmiendas al texto catalán no habían sido discutidas como ocurría con el resto de las presentadas, y los votos debían realizarse según los criterios particulares de los delegados.

alternativo. Posiblemente, por todo ello, el PSC-PSOE presentó aquella alternativa, revistiéndola de síntesis de las proposiciones de la Memoria<sup>397</sup>.

De este modo, más que una síntesis suponía una aportación nueva, más acorde a los nuevos tiempos y a la imagen que la Ejecutiva estaba tratando de trasladar a la opinión pública. Aunque es cierto que el otro texto del que se discutieron algunas cuestiones y del que el PSC-PSOE tomó algunos párrafos fue el de Castellón. El de México, por ejemplo, la otra propuesta que sí tenía un desarrollo teórico sobre esta cuestión, poco inspiró a los catalanes y a la ponencia definitiva. Por ello, su análisis, si no es tan importante para coger el pulso de la opinión del conjunto del Partido, nos sirve para ver qué elementos no tenían cabida en la formación, ni tan siquiera para ser debatidos. Entre ellos, una definición explícita de España como nación. Esto no significa que no la vieran como tal, como se ha ido tratando de reflejar, el PSOE compartía y reproducía una imagen de España en la que esta era mucho más que un Estado. Lo que sucede es que resultaba difícil referirse sin tapujos en este sentido, sobre todo en una ambiente que hasta aquel momento había servido de escaparate para su programa máximo. Hay que recordar que hasta mayo de 1979, en los Congresos se había mantenido los postulados más idealistas. Por otra parte, tampoco debe ignorarse la diversidad inherente al PSOE; y que una agrupación del exilio tuviera sensibilidades digamos más españolistas, no significaba que fueran compartidas por todas las federaciones o partidos de nacionalidad, y mucho menos que pudieran imponerse<sup>398</sup>.

De hecho, la definición de España supuso otra de las polémicas más importantes en el seno de la Ponencia. Según informaba el periódico *El País*, el debate se inició discutiendo este concepto a partir del texto de Castellón, que decía así:

El Estado español no está compuesto por una nación única, sino que incluye diversas naciones. Particularmente, desde el siglo XVIII, la relación entre estas diversas naciones está determinada por el dominio político cultural de una nación hegemónica sobre las

---

<sup>397</sup> «Esta enmienda pretende refundir y sintetizar, aportando algún elemento nuevo de análisis y conclusión, las ponencias presentadas por las Agrupaciones de Canarias, Ceuta, Castellón, Navarra (Estella), Toledo (Talavera de la Reina), Valencia (Burjasot), América (Méjico) y Suiza-Italia (Ginebra) y recogidas en la Memoria correspondiente del XXVIII Congreso del PSOE bajo el título de “Nacionalidades y política autonómica”», “Hecho nacional y política...”, p. 12.

<sup>398</sup> Por otra parte, en esta ponencia definían a España como una nación de naciones, con un tono acorde al nuevo marco que ofrecía la Constitución: «España es una nación compleja –comunidad de pueblos o nación de naciones– integrada por diversas nacionalidades y regiones históricas, todas igualmente españolas», en PSOE: “Memoria. IV. Propositiones...”, p. 195.

otras, dominio heredado de la monarquía absoluta y llevado al extremo durante el franquismo<sup>399</sup>.

Según el periódico mencionado, «se procedió a discutir el concepto de “nación española”, sin que se llegara a definirlo, por entender que no era tarea de la ponencia elaborar un concepto científico del término»<sup>400</sup>. Parece que una cosa era definir España explícitamente como nación, pero otra llegar a plantear lo que quería denunciar el texto castellonense, mucho más radical que la ponencia catalana que finalmente se presentó al Pleno. Este fragmento, por tanto, no fue incluido en la ponencia final ni tampoco había sido reflejado en el texto del PSC-PSOE, que aunque se refería a España como una realidad plurinacional, no llegaba a denunciar su dominio sobre el resto.

Tras lo anterior, el texto de Castellón continuaba, culpando de la opresión no sólo a España —o mejor dicho, a la clase burguesa españolista— sino también a las burguesías nacionales de los pueblos oprimidos, oponiéndose por tanto a los nacionalismos «burgueses» y reivindicando a las clases populares como las únicas capaces de liderar este movimiento:

Esta situación de opresión nacional se ha fundamentado en los intereses de las clases y grupos dominantes de la nación hegemónica, con las cuales se han identificado generalmente las clases privilegiadas de las otras naciones del Estado español. Así, la situación de opresión nacional que se da en el Estado español sólo puede desaparecer cuando sea eliminado el poder de los grupos y clases que la mantienen, y cuando la relación entre las naciones se fundamente en el mutuo y pleno reconocimiento y en la libre voluntad de cada una de ellas.

Teniendo en cuenta que el socialismo supone la liberación de todas las opresiones y alienaciones individuales y colectivas nosotros, los socialistas, tenemos que enfocar siempre la cuestión nacional como un aspecto esencial de la liberación económica, social, política e ideológica de las clases populares del Estado español.

Allá donde se dé una situación de opresión nacional, nosotros los socialistas no podemos inhibirnos, adoptar actitudes pasivas o tímidas, o considerar el problema como una cuestión menor o secundaria. Los socialistas tenemos la obligación histórica de ponernos al frente de los movimientos de reivindicación nacional y orientarlos en la

---

<sup>399</sup> *Ibid.*, p.186.

<sup>400</sup> *El País*, 19 de mayo de 1979.

dirección de la liberación social como meta de la igualdad y solidaridad entre los pueblos. No hacerlo es ser cómplices de la misma opresión que padece el pueblo. (...)

En el Estado español, la opresión nacional (...) está ligada a la explotación capitalista. La alta burguesía y los grupos de poder real (...) tienen unos intereses comunes a nivel de todo el Estado, y este Estado unitario y centralista es su instrumento de dominio sobre todos los pueblos que lo componen. Los grupos dominantes y privilegiados de los pueblos del Estado español, son por tanto, los más directamente interesados en que se mantenga la situación de opresión nacional (...).

Así, en todos los campos (económico, político, cultural y lingüístico) las clases dominantes de los pueblos del Estado español han sido traidoras a sus pueblos<sup>401</sup>.

Desde luego se trataba de una retórica mucho más radical que la que el PSC-PSOE ofrecía, cuya propuesta mantenía el espíritu general de estos postulados, pero los moderaba y los dejaba en segundo plano, como marco ideológico, prestando mayor atención a los aspectos más prácticos de la autonomía<sup>402</sup>. Por otra parte, sin eclipsar los derechos de las nacionalidades y regiones oprimidas, en el texto del PSC-PSOE, la solidaridad e igualdad se convertían indiscutiblemente en los elementos protagonistas<sup>403</sup>.

En otro orden de cosas, fue muy llamativa la llamada desde la agrupación mexicana a dejar las puertas abiertas a una futura, no ya federación sino fusión de

---

<sup>401</sup> PSOE: "Memoria. IV. Propositiones..., p.186-187.

<sup>402</sup> De todos modos, de la cita anterior se sacaron las dos únicas referencias que fueron incluidas en el documento realizado por el PSC-PSOE, demostrando que el texto de Castellón no fue en realidad importante para esta Comisión, a pesar de lo que dijera la prensa. Además, que casi la única referencia literal al texto de Castellón se refiriera a la obligación de los socialistas de ponerse al frente de la reivindicación nacional para orientarla con una meta concreta: la de la igualdad y solidaridad entre los pueblos, es muy significativo. Lo es porque se trata de la manera de conectar los principios ideológicos más maximalistas en torno a la cuestión nacional que propugnaba el PSOE con su realidad más inmediata, la práctica política que les empujaba a acercarse a postulados más moderados y más pragmáticos.

<sup>403</sup> Pese a lo dicho anteriormente, la ponencia de Castellón también reforzó los principios de la igualdad y la solidaridad cuando se refería a la economía. En su último punto, llamado «Autonomías y política económica», de repente lo más importante pasaba a ser la igualdad en relación con la política autonómica, proponiendo una estrategia que concordaba más con la coyuntura y la actitud del partido: «Entendemos que debe existir un principio que debe vertebrar la política autonómica a nivel Estado: la igualdad. La igualdad como base fundamental». En su proyecto, la igualdad debía llegar no sólo a través de una nueva organización política, sino sobre todo, por medio de una nueva regulación económica entre las diferentes nacionalidades. Creían que «partiendo de la idea de fraternidad y solidaridad de los distintos pueblos del Estado, debe considerarse como imperativo la liquidación de las desigualdades existentes» y que para ello se podían seguir dos actuaciones: imponer una nivelación general y directa, o tratar de igualar las condiciones de desarrollo a través de la industrialización. Consideraban que la opción correcta era la segunda, ya que la primera «no reduciría las tensiones existentes en las relaciones entre las distintas nacionalidades o regiones, forzando a las regiones menos desarrolladas a exigir más y más, y a las regiones más desarrolladas a defender con más insistencia sus propias posiciones», en una clara alusión a una carrera autonómica que quería evitarse, en PSOE: "Memoria. IV. Propositiones..., p.187.

nacionalidades o regiones. Una llamada que sin embargo no tuvo ningún eco en la ponencia que resultó del debate, ni tampoco en las que habían presentado Navarra, Castellón y Cataluña, pese a que sus territorios eran directamente aludidos:

Ratifica también su criterio de que si alguna o algunas de estas nacionalidades o regiones históricas quisieran fusionarse con otra vecina (si, por ejemplo, Navarra quisiera unirse con el País Vasco, Valencia con Cataluña o Castilla con León), a ellas mismas correspondería decidir<sup>404</sup>.

Como última cuestión de este recorrido sobre la incorporación de los planteamientos ofrecidos por las agrupaciones en el texto base del PSC-PSOE, queremos mencionar la cuestión terrorista y cómo los catalanes trataron de matizar la parte más polémica del texto navarro. Estos últimos, aunque condenaban explícitamente la violencia de ETA, habían justificado de alguna manera su existencia, o al menos la habían explicado como consecuencia de unos hechos que no se remontaban al franquismo, sino que aludían directamente a unas ilusiones truncadas con la nueva democracia, repartiendo culpas también entre los socialistas. La esencia de este argumento se fue transformando en la ponencia catalana en dos fases previas a la presentación de la misma en la comisión, hasta su desaparición en el debate de ésta, pues el texto definitivo ni siquiera mencionaba el problema, eliminando la polémica de raíz. Las dos fases de las que hablo se refieren a la redacción inicial y la corrección que de esta se realizó, figurando en un anexo el texto que iba a sustituir el original<sup>405</sup>. La primera redacción, afirmaba la responsabilidad que en el desarrollo terrorista tenía el propio movimiento terrorista, pero en la línea de los navarros explicaban este fenómeno en base a causas externas que si no lo justificaban sí lo hacían comprensible. Pero la diferencia fundamental es que las causas externas no remitían más que al demonizado centralismo –con el que poco tendría que ver el PSOE– y a la propia fuerza de la identidad diferenciada de este territorio<sup>406</sup>.

---

<sup>404</sup> PSOE: "Memoria. IV. Propositiones..., p.194.

<sup>405</sup> El documento al que he tenido acceso sufrió algunas modificaciones de las cuales desconozco el motivo o el proceso por el que se realizaron. En este caso, los dos párrafos se encontraban tachados y eran sustituidos en un apéndice final, tal y como se indicaba.

<sup>406</sup> «Debe aceptarse como cierto, y es generalmente reconocido, que el fenómeno terrorista genera por sí mismo, una vez iniciado, causas y motivaciones para su propio desarrollo al margen de las condiciones externas que lo producen y provocan. Pero las acciones terroristas ligadas al fenómeno nacional aparecen siempre como coincidencia espacial y temporal de, al menos, dos elementos: de un lado, una acción centralista opresora a ultranza de cualquier expresión de una realidad nacional diferenciada; de otro, un alto y generalizado nivel de conciencia nacional en la nacionalidad diferenciada, progresivamente

Este texto fue sustituido por otro que enfatizaba la necesidad de acabar con el terrorismo, y aunque explicaba su razón de ser a partir de factores históricos, culturales y políticos, relacionaba la violencia con la división política en la lucha por la liberación nacional, (siempre dentro de un marco federal del Estado). Por supuesto, la manera eficaz para combatir la lucha armada era otorgando derechos como el de la autodeterminación, aunque siempre dentro de una estrategia unitaria, que pasaba por: «la afirmación inequívoca de su derecho a la autodeterminación (...) y la elaboración por el PSOE (...) de una estrategia de liberación nacional en el marco de una organización solidaria y federal de los pueblos de España». Ponían en valor la política de reconocimiento de derechos de los pueblos oprimidos para combatir la violencia, pero a diferencia del texto anterior, los métodos policiales no eran criminalizados de la misma manera. Aunque como se ha mencionado, estos planteamientos sobre un tema que se había convertido en central para el PSOE, desaparecieron totalmente de la ponencia final, en un cambio de estrategia que quizá quería ir desvinculando el problema de las autonomías, más centrado en la nueva organización y racionalización territorial, del de la violencia en el País Vasco<sup>407</sup>.

### ***El debate en la Comisión y en el Pleno del Congreso***

En teoría –aunque no tanto en la práctica–, el texto catalán había recogido los hechos más reseñables de los textos enviados por las agrupaciones y fue discutido, «punto por punto o artículo por artículo», en la comisión encargada de elaborar la ponencia sobre autonomías, sufriendo tan sólo algunos cambios. Nos hemos adelantado mencionando antes alguno de ellos, como el que supuso la eliminación de cualquier referencia al terrorismo en Euskadi. A continuación explicaremos tan sólo aquellos que juzgamos más importantes porque no se referían a cuestiones de estilo, sino que de alguna manera suponían una modificación del contenido o de las formas en que éste se enunciaba, evidenciando que algunas de las puntualizaciones se debían a una estrategia

---

radicalizado por su permanente frustración ante la represión centralista de cualquier manifestación de su propia identidad. A partir de aquí, toda acción policial represora del terrorismo se identifica con represión del hecho nacional diferenciado, y la espiral es imparable. Sólo una acción política en profundidad y responsable que posibilite el ejercicio de los derechos nacionales sojuzgados puede iniciar el proceso de regresión del fenómeno terrorista», “Hecho nacional y política...”, pp. 3-4.

<sup>407</sup> Puede que se hubieran dado cuenta de que esta estrategia no les había reportado beneficios en las elecciones de 1979, ya que aunque el terrorismo preocupaba a los ciudadanos, también lo hacía el desarrollo autonómico, y centrarse demasiado en el primer problema vinculándolo en exceso al segundo les había pasado factura, como se ha visto en el capítulo anterior.

bien calculada de cuál era el modelo que habían ideado para España; pero también de qué imagen querían trasladar al resto de militantes y de la opinión pública.

Empezaremos por el título, que pasaba de «Hecho nacional y política autonómica» a «Política autonómica» a secas, menos idealista y acorde con el espíritu del texto, que establecía unos ideales de fondo, como el horizonte federal y una autodeterminación muy matizada, pero que en realidad se ocupaba de la organización de un Estado autonómico que no sería federal y en el que no se permitía de facto la autodeterminación.

Continuaremos con otra de esas cuestiones de matiz, la sustitución en la mayoría de las ocasiones del término España por el de Estado español, lo que quizá acentuaba su definición de Estado multinacional. En un momento en que habían apoyado la definición de España como nación de naciones, podría interesarles seguir manteniendo algunos postulados como el del horizonte federal (que aparecía en prácticamente todos los textos de la Memoria); el de la caracterización de España como Estado plurinacional; o incluso como se observa, la afirmación de un teórico –pero limitado, como demostraremos a continuación– derecho de autodeterminación, para no romper del todo con la tradición anterior y seguir manteniendo ciertos postulados de una manera más idealista y utópica que real. En este sentido, España no era mencionada como nación, pero en la solución adoptada finalmente ni siquiera se mantenía ese tan neutro «España» que proponían los socialistas catalanes, cambiándolo por un más institucional Estado español, que aparecería como un reconocimiento a la legalidad vigente, en coherencia con la voluntad de no definir qué es España –como se ha visto–, pero que al mismo tiempo les permitiría seguir apareciendo, aunque sólo de forma idílica y en el uso del lenguaje, como adalides de las libertades.

Otro cambio que podría parecer menor, pero al que damos cierta importancia, es el que atañe a la enumeración de los territorios que habrían sido «punta de lanza» del movimiento generalizador de la reivindicación nacional en lugares donde este proceso era inexistente hasta la Transición. En el texto de la ponencia, y también el de la resolución –como se ha visto– se referían específicamente a Canarias y Andalucía, remitiendo después a una asunción «por la totalidad de las diferentes nacionalidades y regiones del E. Español». Esto permitía una ambigüedad a la hora de catalogar en uno u otro grupo a los distintos territorios. Es decir, el País Valenciano o Galicia podrían no



ser mencionados como puntas de lanza, pese a su fuerte tradición a este respecto, porque perfectamente podrían incluirse entre el grupo de territorios para los que en absoluto se trataba de unas demandas novedosas, contagiadas por un proceso general fruto de una coyuntura determinada. Pero el texto original nos muestra que la omisión posterior bien pudo ser una precaución, para no poner a Galicia, considerada nacionalidad histórica formalmente, o al País Valenciano, cuyas demandas en pro de la autonomía no habían sido en ningún caso más débiles que las canarias o andaluzas, en un segundo plano de este grupo capitaneado por Andalucía y Canarias:

Canarias y Andalucía se presentan como puntas de lanza de este movimiento generalizador del fenómeno nacional o regional, pero el hecho se asume también en Murcia y Aragón, en Castilla y La Mancha, en Extremadura y La Rioja, en Asturias y Cantabria y, desde luego, en Galicia, País Valenciano y las Islas Baleares<sup>408</sup>.

Terminando con este texto, hay que abordar el hecho más visible, la promulgación del derecho de autodeterminación, que pasaría al dictamen final, junto a unas modificaciones que podrían aparecer de nuevo como simples detalles, pero que escondían una postura que en realidad estaba reafirmando unos valores muy concretos. Se puede ver cómo el redactado final se alteró mínimamente en el párrafo introductorio, lo que a nuestro juicio demostraría que se pretendía matizar el derecho de autodeterminación, eliminado por completo en la siguiente fase, en el pleno del Congreso. Ya se ha explicado, al hilo del análisis de la resolución definitiva, que existían algunas reminiscencias del «programa máximo» que en el fondo eran conjugadas con el proceso de transformación autonómico, matizando en la práctica los principios teóricos. Pues bien, esta matización, aunque clara en el espíritu del texto original del PSC, no lo estaba tanto en el primer párrafo de su propuesta. Para empezar, tras el reconocimiento de la realidad plurinacional de España, sintieron la necesidad de apostillar el término «plural»: De «El reconocimiento de la realidad plurinacional de España», a «El reconocimiento de la realidad plurinacional y plural del Estado español». España era plurinacional, lo que significaba que estaba compuesta por más de una nación, pero era también una realidad plural, lo que quizá nos acerque más al sentir del conjunto del Partido, porque casaría mejor con la definición de España también como nación, pero siempre como nación plural.

---

<sup>408</sup> «Hecho nacional y política..., p.3.

Continuando con esos cambios que casi podrían parecer de estilo, aparece una alteración en el orden. En el texto catalán, inmediatamente después del reconocimiento de la realidad plurinacional, se afirmaba el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Pero en la ponencia aprobada por la Comisión, este derecho pasaba a un segundo plano: tras enunciar esa realidad plurinacional y plural, se defendía la lucha contra la opresión, la unidad fundamental de la clase trabajadora y la solidaridad de los pueblos. Se introducía la fórmula que copiaría la resolución, en la que parecían querer suavizar los elementos más radicales, pero conservando todavía el derecho de autodeterminación: «en la línea de conjugar el proceso de transformación autonómico del Estado con el principio del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos en la perspectiva de un Estado federal»<sup>409</sup>. Es decir, que se enunciaba el derecho pero dentro de un marco concreto que lo limitaba. El derecho de autodeterminación se entendía en el horizonte de un Estado federal, ya que los pueblos votarían a favor de una unión federal según la lógica del internacionalismo obrero que defendía el PSOE<sup>410</sup>. Pero además, este Estado federal ni siquiera debía serlo realmente, ya que por el momento les valía con que estos principios se conjugaran, de una forma idealista y teórica, con el modelo autonómico.

Esta nueva fórmula al redactar el párrafo introductorio, posiblemente el más «radical» de todos, suavizaba sus contenidos. Así se confirmaba también en un artículo de *La Vanguardia*, en que hablaba de los cambios mencionados de la siguiente manera:

El problema autonómico ha quedado obviado, de alguna forma, por las aportaciones últimas de la Federación Catalana, que ha minimizado el problema de la autodeterminación, haciendo referir ésta al techo del Estado federal. Sin embargo (...) serán discutidas, algunas enmiendas presentadas por otros sectores del PSOE, para que no conste, de ninguna forma, el término autodeterminación y se sustituya, de alguna manera, por el de autogobierno<sup>411</sup>.

---

<sup>409</sup> PSOE: “Ponencia de Política Autonómica” (Madrid, 17-20 de mayo de 1979), AHUV, Fondo Alfons Cucó, 021/030, p.1.

<sup>410</sup> Esto mismo señalaban desde la redacción de *Avui*, explicando que tras treinta horas de discusión de la comisión se había aprobado un texto que si bien daba luz verde al derecho de autodeterminación, lo situaba dentro del Estado federal: «L’expressió inclosa des del primer moment, que es referia a “l’autodeterminació dels pobles”, fou discutida una i altra vegada a fi de deixar ben aclarida la seva càrrega política. (...) A última hora fou introduïda una esmena que especificava ben clarament que el dret de l’autodeterminació està relacional amb l’Estat federal», *Avui*, 20 de mayo de 1979.

<sup>411</sup> *La Vanguardia*, 20 de mayo de 1979.

Según se lee en prensa, y confirmamos en el propio documento, otra mención a la autodeterminación consiguió ser suprimida, para evitar «confusiones y más interpretaciones, “ya que el concepto ya queda claramente expresado en la introducción” (...) según informaciones de la Oficina de prensa del Congreso»<sup>412</sup>. Parece ser, que ya en el debate de la propia Comisión existieron tensiones sobre la inclusión de este derecho, tratándose éste del punto más conflictivo, y según *La Vanguardia*, fueron los delegados del PSC los que mantuvieron unas posiciones radicalmente federalistas y los que defendieron la defensa ideológica del derecho de autodeterminación. Aunque el texto elaborado por el PSC, no era radicalmente federalista ni apoyaba la aplicación del derecho de autodeterminación, puede que su grupo llevara un poco más allá que el resto la defensa simbólica de estos principios ya que finalmente, fue el portavoz del grupo catalán, Joan Prats, quien defendió el dictamen de la Ponencia ante el Pleno del Congreso<sup>413</sup>. En cualquier caso, antes de la celebración del Pleno, Joan Prats declaró a *La Vanguardia*, que «la labor fundamental de su ponencia fue la de ofrecer una alternativa para la construcción del sistema de autonomías en España y el acceso al Estado federal» y preguntado por el tema de la autodeterminación respondía:

no era un tema determinante del Congreso: al Congreso sólo le preocupaba la política de transformación autonómica y la ratificación de sus principios de siempre. El principio de autodeterminación de los pueblos se recoge en el marco ideológico de la victoria del PSOE, y en este sentido se ha hablado<sup>414</sup>.

Esta declaración tiene que entenderse por tanto, integrada en una política general del PSOE en la que se podían esgrimir unos principios ideológicos que en el fondo no suponían un condicionamiento real de la práctica política, centrada en las autonomías. Otra confirmación de la moderación real que suponían los contenidos aparentalmente más rompedores, se encuentra también en otro de los artículos que *La Vanguardia* dedicó al Congreso, que en la línea de las declaraciones anteriores de Prats, demuestra

---

<sup>412</sup> *La Vanguardia*, 20 de mayo de 1979.

<sup>413</sup> Aunque el texto de Castellón era quizá más «radical», lo cierto es que no suponía la postura representativa del conjunto del PSPV-PSOE, ni siquiera de la denominada intercomarcal de Castellón, según ha señalado su Secretario General Felipe Guardiola, en *Felipe Guardiola Sellés*, 28 de octubre...

<sup>414</sup> *La Vanguardia*, 20 de mayo de 1979. Con un talante muy similar se expresaba en las siguientes declaraciones recogidas por *Avui*: «Hem parlat de com s'ha de passar de les pre-autonomies a les autonomies, com es fan els Estatuts, llur ritme, llur contingut, etc. L'autodeterminació és un marc ideològic que pertany al patrimoni del partit, dins el qual es situen els Estatuts i la política autonòmica», *Avui*, 20 de mayo de 1979.

cómo desde el PSC tampoco se pretendía ir más allá de lo establecido en la Constitución, más que de una forma retórica, considerando que el verdadero alcance de la promulgación de este derecho había sido mal interpretado sobre todo por los socialistas vascos:

Otro aspecto polémico ha sido el derecho de autodeterminación mal interpretado por algunos sectores de dentro y fuera de la ponencia de autonomías, donde esta cuestión, más a nivel del palabras que de significaciones ha causado uno de los más importantes revuelos del Congreso.

El reconocimiento al derecho de «autodeterminación» de los pueblos ha sido matizado en el texto final que ha aprobado la ponencia, pero la insistencia de algunos sectores vascos preocupados tal vez en exceso de lo que puede suponer para Euzkadi que aparezca esta palabra hará que con toda seguridad el pleno se pronuncie en contra.

Otras versiones también se han referido a la inconstitucionalidad del derecho de autodeterminación y, sobre todo, a la diferencia que supone con la política seguida por el partido<sup>415</sup>.

Efectivamente, pese a que los defensores del mantenimiento del término limitaban mucho su significado real, conservándolo de forma meramente simbólica, el debate en el Pleno contó con una enmienda de Ciriaco de Vicente, quien según relataba *El Socialista*, «hizo una muy brillante defensa de la enmienda que pedía la sustitución del término “derecho a la autodeterminación” por “derecho al autogobierno” y consiguió convencer ampliamente al pleno, que votó la enmienda por una cómoda mayoría»<sup>416</sup>, concretamente, según *La Vanguardia*, por 160 votos contra 71 y 10 abstenciones<sup>417</sup>. Este periódico también añadía los motivos que se habían aludido para tal modificación, referidos a «evitar equívocos» pero también a no contradecir su

---

<sup>415</sup> *La Vanguardia*, 20 mayo de 1979. El diario *Avui* también se refería a la contrariedad que había supuesto para otros socialistas la inclusión de este término: «Alguns membres de l'executiva anterior, com Gregorio Peces Barba, expresaren llur confiança que el ple del congrés elimini les referències al marxisme i a l'autodeterminació», *Avui*, 19 de mayo de 1979. En otro artículo se añadía que la aprobación de este derecho provocó descontento entre algunos delegados: «Alguns congressistes expressaren llurs reticències davant el que anomenaven una hegemonia autonòmica de bascs i catalans, cosa que provocà en opinió d'altres congressistes, una mena de cursa a veure qui demanava més», *Avui*, 19 de mayo de 1979.

<sup>416</sup> *El Socialista*, 110 (27 de mayo de 1979).

<sup>417</sup> En el Pleno del Congreso no podían votar todos los delegados, tan sólo los cabezas de las delegaciones, representándolas. El cómputo total de delegados, ascendía a 1018. Para hacerse una idea de la fuerza de cada territorio en militantes y por tanto en delegados y en consecuencia en votos, a continuación detallo los datos: Andalucía, 259; País Valenciano, 157; Castilla-La Mancha 99; Madrid 96; Asturias 62; Euzkadi 58; Catalunya 48; Castilla-León 47; Extremadura 36; Galicia 39; Murcia 21; Aragón 21; Exterior 21; Canarias 20; Cantabria 17; Baleares 9; Ceuta 4; Rioja 3; Melilla 1.

postura respecto a la Constitución, ya que ésta «no reconoce el derecho de autodeterminación y el partido tenía que ser coherente»<sup>418</sup>.

Es interesante ver cómo no se pretendía imponer el derecho de autodeterminación más que de forma simbólica y que incluso en estas condiciones salieron enemigos férreos al término, que se oponían a tal concesión y que además lograron imponer sus posiciones al contar con el apoyo de gran parte del Partido. Por otra parte, otro hecho revelador sería la ausencia de un debate posterior sobre esta cuestión, sobre el abandono definitivo del término y sobre cómo había peleado por sobrevivir sin éxito. Más allá de las crónicas mencionadas, en las que se informa de lo ocurrido, no parece que surgieran muchas voces descontentas con el resultado final, que quisieran hacerse escuchar, o al menos los rastros que esto habría dejado no serían fáciles de encontrar<sup>419</sup>. El propio Verde i Aldea, hablaría con satisfacción de la ponencia y restaría importancia a la desaparición del término en la última fase, como si no se hubiese puesto en debate y una mayoría contundente del Partido no se hubiera negado a defender, ni siquiera desde un punto de vista meramente testimonial e ideológico, este derecho. Con un discurso que podría casi decirse que rayaba el cinismo en este punto, negaba la mayor y explicaba que el término se entendía asumido al ratificar en esta resolución la promulgada en 1976, donde sí se defendía abiertamente:

El plantejament que fèiem des de Catalunya per a aquesta qüestió tenia uns punts essencials, traduïts clarament i expressament en les cinc resolucions que conclouen el text. Era molt clar que, en aquest Congrés, calia apuntar línies concretes d'actuació a curt termini, encara que en una perspectiva més llarga. També era clar que no calia repetir allò que l'anterior Congrés del PSOE havia ja estat aprovat i proclamat i, per això, l'entrada del text i la primera de les resolucions ratificava plenament el contingut

---

<sup>418</sup> *La Vanguardia*, 22 mayo de 1979.

<sup>419</sup> Lo único que hemos encontrado en prensa, sería un artículo de opinión en *Avui*, en el que más que decepcionarse o criticar el hecho de la desaparición en el PSOE de la defensa de este derecho, se planteó el debate en términos de oportunidad, lo importante que era para el futuro que por aquellas alturas aún se hubiera discutido desde el socialismo español, sin desaparecer sin más tras la Constitución. Esta reacción explicaría en parte que no hubieran grandes debates sobre el asunto tras el congreso, ya que podría mostrar cómo existía un sentir general en el que se había asumido que la aplicación de la autodeterminación no era defendida en España por los partidos mayoritarios y que el Estado autonómico contentaba a una gran mayoría, por lo que sus defensores se resignarían sólo con que el tema se pusiera encima de la mesa: «Ja em sembla positiu que la paraula “autodeterminació” hagi arribat tan lluny en el congrés del PSOE: el problema, de tota manera, queda sobre la taula. Un gran partit com es aquest l'ha tinguda molt present, encara que finalment no l'hagi acceptada. Cal esperar que els altres partits, en ocasions similars, també es plantegin el problema i que poc a poc vagi desapareixent tot el que encara té de “fantasma” la paraula autodeterminació», Josep M. ORTA: “Autodeterminació”, *Avui*, 22 de mayo de 1979.

de la declaració feta l'any 1976 sobre «nacionalitats». Això cal dir-ho perquè posa al seu lloc concret la qüestió de l'eliminació de la paraula «autodeterminació» (...). D'una banda, la ratificació de les declaracions del Congrés anterior ja significa que és recollit, entre els principis, el de l'autodeterminació. D'una altra banda, l'objectiu de concreta aplicació que la ponència sobre política autonòmica pretenia era fixar les línies bàsiques i concretes de desenvolupament d'allò que, ara i aquí, tenim entre mans, que és el posar en pràctica aquesta autèntica revolució estructural a l'Estat que configuren les autonomies –sense el caràcter de «pre»–, plenament desenvolupades a través dels corresponents Estatuts.

El socialisme crec que ha fet, amb aquesta resolució sobre les autonomies, una aportació important que fuig de qualsevol utopia irrealitzable a un termini previsible, alhora que manifesta clarament com entén el procés autonòmic per a donar compliment a les previsions de la Constitució, sense fugides endavant que si bé sonen agradablement a les oïdes, col·loquen en carrerons de permanent frustració tots aquells qui volen substituir les realitats –sempre crues i difícils– per voluntarismes fàcils però inoperants<sup>420</sup>.

Es evidente que dijera lo que dijese el autor de este texto, el término autodeterminación fue rechazado de pleno y no es posible acogerse a una resolución anterior, por mucho que la ratificaran de forma simbólica. Pero profundizando un poco más en sus palabras, se puede vislumbrar la voluntad real que subyacía incluso en el PSC-PSOE. Esta declaración muestra la satisfacción con lo conseguido, porque quizá no se necesitaba ir más allá. Comenzaba felicitándose porque el texto enviado desde Cataluña, y que fue aprobado casi íntegramente, tenía unos puntos esenciales que fueron aceptados en su totalidad y un *leitmotiv* que también fue respetado y compartido por el conjunto del PSOE. Dentro de esta lógica se enfrentaban un idealismo teórico, frente a un proyecto realizable que unía a todos y que todos compartían. Un proyecto que en realidad no concebía la posibilidad de la independencia, y aunque quizá para algunos sí fuera necesario permitir la aplicación de este derecho –al menos teóricamente–, para otros, era innecesario en las condiciones de libertad que había traído la democracia. Por ello, al final, entre plantear un principio idealista que además generaba tantas contradicciones y posturas enfrentadas dentro del socialismo; y eliminar el término de la discordia, sabiendo que para los defensores de su mantenimiento el modelo de Estado

---

<sup>420</sup> Josep VERDE I ALDEA: “Socialisme espanyol...”

ideal era el mismo que para aquellos que no lo aceptaban, la solución se inclinaba por la última opción.

Se trataba de la opción pragmática, pero que al mismo tiempo permitía desarrollar el Estado autonómico en el que creían, esa revolución estructural del Estado de la que hablaba Verde i Aldea. Él mismo estaba preguntando implícitamente para qué demandar una defensa teórica de una utopía irrealizable –cuando la Constitución había cercenado la posibilidad real de realizarla–, si podían dejar de frustrar estas expectativas que no iban a llegar a buen puerto, para comenzar a desarrollar el Estado autonómico tal y como realmente lo entendían y lo deseaban. En el fondo, pese a que no lo dijera abiertamente, estaba defendiendo la necesidad de aparcar el término autodeterminación, al menos de momento.

Por último hay que destacar la supervivencia del término cuando éste no apelaba a una posible división de la comunidad española. El derecho de autodeterminación se mantuvo como solución a problemas que se producían más allá de las fronteras del Estado español, cuando se referían a naciones que al reivindicarse no ponían en peligro la integridad de la comunidad nacional que imaginaban la mayoría de los militantes del PSOE. Así, encontramos una defensa sin complejos de la autodeterminación en la resolución de política internacional:

### 3.- Derecho de los pueblos a la libre determinación

El Partido Socialista reitera el derecho de los pueblos a la libre determinación establecido en la Carta de las Naciones unidas. Para la realización del mismo, los socialistas españoles ofrecen su ayuda a los pueblos colonizados o sometidos a procesos de explotación neocolonial.

El imperialismo, en todas sus formas, debe ser combatido, pues solo una sociedad internacional basada en el principio de igualdad de derechos de los pueblos, constituye una garantía de paz eficaz<sup>421</sup>.

Serán por tanto, los españoles, como pueblo, como nación, los que apoyen tal derecho fuera de sus fronteras y no dentro. Pero esta teoría no era en absoluto contradictoria con la que habían defendido en el fondo desde el inicio y que cada vez se estaba concretando más, porque este derecho sólo era aplicable a los pueblos oprimidos

---

<sup>421</sup> “Política IBis”, en PSOE: “Resoluciones. 28 Congreso”, ABFPI, c 142, p. 2.

o colonizados. La finalidad de la autodeterminación, planteada desde la dialéctica marxista que habían heredado, era por un lado la de ayudar a la emancipación social del yugo opresor y la de luchar de paso contra cualquier tipo de injusticia y sometimiento. Por ello, en una sociedad que garantizara la igualdad y la solidaridad de los pueblos, como creían que sucedía con el sistema de las autonomías, el derecho a la libre determinación carecía de sentido. España no era ya a sus ojos un Estado opresor, donde el imperialismo sometiera o colonizara a otros pueblos. La libertad que se había ofrecido con la democracia y con el autogobierno había desactivado, a su juicio, la necesidad de demandar y ejercer tal derecho. Se trataba, como siempre había sucedido, de una actitud que no priorizaba los elementos identitarios, aunque se había solidarizado con ellos. Pero no los había antepuesto a otros valores y objetivos, pese a que siempre los tuvo presentes de acuerdo a su concepción plural de España. Su marco estatal y nacional siempre fue España, y su unidad, siempre que se respetaran ciertos derechos, no era puesta en entredicho. Así, además de observar cómo el derecho de autodeterminación se reservaba para otros, se podía ver cómo el deseo de la unidad de las clases trabajadoras no alcanzaba para romper los límites de sus propias fronteras nacionales, y a nivel internacional no se reclamaba más que la coexistencia, la paz y la igualdad, además de reivindicar el sueño de una sociedad socialista mundial en la que no parecían planear la desaparición de las naciones<sup>422</sup>.

### **3. Un modelo de Estado y un modelo de Partido**

Pasaremos ahora a analizar los aspectos que atañen a esta problemática en la resolución política<sup>423</sup>. El partido se definía como «de clase, de masas, democrático y federal» en concordancia con el modelo de Estado que deseaban: «la lucha por las libertades colectivas de las nacionalidades y los pueblos pasa por la impulsión de la

---

<sup>422</sup> «El Partido Socialista Obrero Español, fiel a la tradición internacionalista y proletaria (...) se reafirma (...) dedicado a la consecución de la paz y la coexistencia internacional entre todos los pueblos, manteniendo vivo el ideal del establecimiento de una sociedad socialista mundial. (...) El Partido Socialista Obrero Español, miembro de la Internacional Socialista, fomentará la cooperación entre los pueblos para el logro de la paz y la igualdad entre los mismos», “Política IBis...”, p.1

<sup>423</sup> El documento de trabajo sobre «Política» encargado por el Comité Federal a una comisión formada por J. Solana, J. M. Obiols, J. Rodríguez de la Borbolla, E. Múgica y E. del Moral, apenas hablaba sobre el problema nacional. Se limitaba a una mención muy básica en la que apuntaban lo siguiente: «los socialistas asumen la tarea de impulsión del autogobierno de las nacionalidades y regiones, para asegurar la aprobación sin rebajas ni recortes de los Estatutos democráticamente elaborados y hacer de las instituciones autonómicas instrumentos eficaces al servicio de los distintos pueblos de España, en el marco de la solidaridad entre todos ellos», “Política”, en PSOE: “Documentos de trabajo elaborados por el Comité Federal”, ABFPI, fa 244, p.16.



configuración federal del Estado Español»<sup>424</sup>. Pero una vez más, en la práctica las aspiraciones eran moderadas, limitándose a la consecución de una autonomía que garantizara y primara la igualdad y la solidaridad de los intereses comunes de todos los españoles:

El PSOE ha de hacer que la clase trabajadora figure a la cabeza en la lucha por la autonomía de las nacionalidades y regiones oprimidas por una burguesía centralista y retrógrada, teniendo en mente que solo desde una perspectiva de clase se pueden vincular estas aspiraciones con una estrategia dinámica de solidaridad entre los intereses comunes a todas las nacionalidades y pueblos del estado español<sup>425</sup>.

Por otro lado, en esta resolución destacaba el tratamiento de la autonomía, no desde un punto de vista que privilegiaba el aspecto identitario sino como un medio para promover y profundizar la democracia, acercando el poder a los ciudadanos, racionalizándolo y haciéndolo más eficiente:

La profundización de la democracia, así pues, implica:

- c) Una descentralización real del poder político. Una división real del poder político en diversos niveles: Estado. Región, Comarca, provincia, nacionalidad, municipio, barrio: respondiendo cada uno de ellos a los distintos niveles en los que se organiza la colectividad social y con competencias propias para resolver los problemas propios de dichas colectividades sociales<sup>426</sup>.

De hecho, no privilegiaban la nacionalidad o la región respecto otras esferas del poder como la local o la comarcal, pues en su discurso la importancia recaía en los beneficios democratizadores que podían obtenerse con la descentralización:

La conquista progresiva de parcelas de poder político, esto es, la conquista por las fuerzas de izquierda de los entes político-sociales intermedios (Nacionalidades, Regiones, provincias, municipios, etc.) (...)

Hay que ampliar la democracia para hacer cada vez más grandes las áreas de poder social en manos de la decisión popular<sup>427</sup>.

---

<sup>424</sup> “Política”, en PSOE: “Resoluciones. 28 Congreso”, ABFPI, c 142, p.3-5.

<sup>425</sup> *Ibid.*

<sup>426</sup> *Ibid.*, p.9.

<sup>427</sup> *Ibid.*, p.10.

En definitiva, presentaban un modelo de Estado diseñado para perseguir los criterios de la subsidiariedad y no para reivindicar los derechos de las nacionalidades y las regiones:

La nueva estructura del estado español ha de basarse en la profundización de la configuración autonómica plasmada en la Constitución. La consecución de unos Estatutos de Autonomía que garanticen el mismo nivel de autogobierno para las distintas comunidades de España, hará posible una mayor democracia real en el sentido en que nos hemos expresado<sup>428</sup>.

Y este modelo de Estado, como se ha visto en capítulos anteriores no era nuevo, venía siendo, en realidad, el modelo que tradicionalmente habían relacionado con el Estado federal. Un Estado federal que en la práctica se construía de arriba hacia abajo, vinculado a valores democratizadores, solidarios, igualitarios y racionalizadores, como ya habían definido teóricamente, por ejemplo en el libro *Este Viejo y Nuevo Partido*, preparado para el Congreso, y que se servía de manifestaciones expresadas ya en 1977. Un Estado que en nada difería a la hora de la verdad al Estado autonómico y que era perfectamente compatible con su tradición socialista:

Desde nuestro punto de vista, este proceso descentralizador y de potenciación de las autonomías es perfectamente coherente con la esencia del Socialismo, por cuanto que supone una profundización del concepto de la democracia, objetivo que se identifica con el Socialismo mismo<sup>429</sup>.

Se hablaba, al fin y al cabo, de la necesidad de armonizar el proceso autonómico, favoreciendo al mismo tiempo la igualdad y el respeto a la diversidad. De propiciar un modelo que, sin imponer a todos los territorios la autonomía, se asegurara de acabar con el centralismo, para otorgar unos derechos legítimos a los pueblos que los demandaban, entre otras cosas, porque esta era la mejor manera de defender la unidad, ya que el «unitarismo impuesto desde arriba (...) exacerba las tensiones centrífugas propias de un país que ve ahogadas las aspiraciones de los diferentes pueblos que lo componen»<sup>430</sup>. Había por tanto, que colaborar de forma voluntaria para construir una unidad fuerte pero necesaria, una unidad socialista, que se vería visualizada de forma gráfica a través de la

---

<sup>428</sup> *Ibid.*, p.11.

<sup>429</sup> PSOE: *Este viejo y nuevo...*, p. 324.

<sup>430</sup> *Ibid.*

imagen que ilustraba este apartado sobre el Estado Federal: unas manos que se unían en el centro para sujetar una rosa:



Imagen 6; Estado Federal (Fuente: PSOE: *Este viejo y nuevo Partido*, Madrid, Pablo Iglesias, 1979)

El propio Felipe González reincidiría una vez más en este aspecto otorgando al Estado federal un significado que lo identificaba con todos estos valores y que lo hacían equiparable, si no nominalmente, al menos sí en la práctica, con el Estado de las Autonomías que se estaba forjando e la transición<sup>431</sup>. Así pues, situaba la elaboración de los Estatutos de Autonomía como uno de los «problemas» más acuciantes del desarrollo constitucional y señalaba:

Todo el mundo debe comprender que el proceso autonómico es necesario y beneficioso para la profundización de la democracia y para el respeto de nuestra realidad plurirregional y plurinacional.

---

<sup>431</sup> Pese a que esta parecía ser la línea dominante tampoco se puede obviar la heterogeneidad de un partido que además estaría influido por posiciones diferentes provenientes sobre todo del PSC-PSOE. A este respecto deberían ser tenidas en cuenta las declaraciones que ante el siguiente Congreso Extraordinario realizó Raimon Obiols al diario *Avui*, demostrando que existían otras sensibilidades que apostaban por otra concepción del federalismo, distinta a la que se mantenía desde la línea dominante del partido: «En un momento en que arreu de l'Estat hi ha una eclosió dels moviments nacionals i regionals, el partit socialista ha de recuperar el que ha estat la trajectòria federalista de l'esquerra i el moviment obrer», *Avui*, 26 de septiembre de 1979.

Todo el mundo debe comprender asimismo que todas las comunidades autónomas tienen iguales derechos, aunque ello no signifique que deban igualarse realidades diferenciadas. El equilibrio entre el derecho a la igualdad y el derecho a la diferencia, pasa ineludiblemente por la ausencia de privilegios de unas comunidades respecto a otras. La vocación federalista del Partido puede y debe ser un estímulo para el desarrollo de las autonomías y un cauce para que, a partir de la Constitución, este desarrollo se realice sin privilegios lacerantes.

Nadie duda que existen prioridades temporales pero ello no significa que haya preferencias de fondo. Nadie niega que el grado de conciencia de cada comunidad sea diferente y que por consiguiente el ritmo de asunción de competencias deba ser también diverso. Pero el techo debe ser idéntico para todos e irse cubriendo, no por imposiciones centralistas, sino por imperativos regionales y de nacionalidad<sup>432</sup>.

Así pues, el federalismo se convertía en el método que aseguraba la simetría del Estado, la igualdad de derechos, la profundización de la democracia. Era el mecanismo por el que se respetaban el «derecho a la diferencia» siempre y cuando este no supusiese la diferencia en los derechos. Se podía reclamar el reconocimiento de los mismos, sí, pero siempre que estos no llevaran aparejados privilegios, y mientras que todos los territorios pudieran acceder a ellos, aunque fuera a diferentes ritmos. Era en definitiva una forma de entender el federalismo que lejos de parecer extraña debe sonar natural a la filosofía socialista, pues estaba en su ADN ideológico. Como botón de muestra tomaré la frase final con la que Felipe González culminaba un discurso con el que quería definir la esencia del Partido a mediados de 1979. Una expresión que hablaba de construir la sociedad socialista a través de la lucha democrática y que encajaba a la perfección con el espíritu que inspiraba su modelo de Estado: «la libertad y la igualdad serán cada día más reales por el camino de la justicia y la solidaridad»<sup>433</sup>.

No es arriesgado concluir a la luz de lo visto hasta ahora que el Estado federal (o el Estado Autonómico) que imaginaban los socialistas era unitario por encima de todo, pese a que trabajara por los derechos autonómicos de los territorios. Pero también hemos visto cómo estos principios eran difíciles de conciliar en muchas ocasiones en la práctica, lo que generaba unas tensiones que se trasladaban al electorado pero también a la militancia. Ya se ha planteado cómo en el XXVIII Congreso, algunas voces

---

<sup>432</sup> PSOE: “Discurso de Felipe González...”, pp. 33-34.

<sup>433</sup> *Ibid.*, p.38.

manifestaban la disconformidad ante una política autonómica que a veces estaba demasiado marcada por la improvisación. Pues bien, esto es trasladable también a la organización interna del partido, y el XXVIII Congreso fue escenario de críticas por este motivo desde amplios sectores, ya que desde diversos ámbitos se clamaba cada vez por una mayor federalización real.

Si bien el XXVII Congreso había definido al PSOE como federal y otorgado una teórica autonomía a las federaciones, en la práctica ésta no era muy amplia. El encuentro de 1979 iba a servir a muchos para tratar esta cuestión, que se convirtió en uno de los asuntos que más inquietaron, siempre con el permiso del debate de fondo que atenuó la importancia que adquiriría el resto. De hecho, se hicieron oír algunas voces preocupadas por que el tema de la definición marxista o no del partido impidiera tratar con el merecido interés otros asuntos, como el de la federalización del partido, más importantes, incluso, para muchos<sup>434</sup>. En este sentido, son muchos los que han mencionado que lo que se estaba jugando en este Congreso no era tanto un modelo ideológico como un modelo de Partido en el que vencería finalmente el dirigismo de la Ejecutiva<sup>435</sup>. Lo harían por ejemplo en el *Manifiesto de la izquierda del Partido Socialista Obrero Español*, presentado ante el XXVIII Congreso<sup>436</sup>. Tras reafirmarse en el marxismo el punto 4 aludía precisamente a la problemática sobre la estructuración del Partido, demandando mayor independencia y menor control por parte de la dirección:

4. Una organización socialista de militantes no puede ser más que una estructura auténticamente federal, esto es, dotada de una autonomía real de cada unidad orgánica para tomar decisiones en su propio ámbito.

---

<sup>434</sup> Ya vimos que el PSC-PSOE, veía en el debate sobre la federalización y el avance en la democratización interna del partido un punto crucial del Congreso, y se pronunciaron defendiéndolo ante la prensa entre otros Martín Toval, *La Vanguardia*, 13 de mayo de 1979.

<sup>435</sup> Así lo haría José Luis Albiñana en una entrevista reciente, vinculando directamente el debate sobre marxismo sí / marxismo no con el dominio cada vez mayor de la Ejecutiva sobre la teórica autonomía de las federaciones. Esta polémica habría servido en realidad para reforzar a la cúpula dirigente, y sobre todo a Felipe González, y para permitir que impusieran un modelo de centralización del poder, logrando conformar una organización nada conflictiva para sus intereses: «consiguió imponer su dominio al socaire de una fase de selección de proyectos, aparentemente, por ejemplo, el primer descalabro fue el abandono de las tesis del marxismo por la socialdemocracia, con la salida en falso de Felipe González, dimitiendo como Secretario General, y haciéndose cargo una Comisión Gestora. Eso, en realidad, era más aparente que real, porque lo que estaba en discusión ahí no era un modelo ideológico sino un modelo de partido, y más que un modelo de partido pues era el dirigismo de Felipe González, con un entreguismo absoluto hacia él mismo del poder para buscar una organización que no fuera conflictiva», *José Luis Albiñana*, 15 de mayo de 2013, entrevista realizada por Vega RODRÍGUEZ-FLORES, Valencia.

<sup>436</sup> Representando al sector que se enfrentaba a la dirección estarían entre otros Luis Gómez Llorente, Pablo Castellano, Francisco Bustelo, Fernando Morán, Joan Pastor, Néstor Padrón, Manuel Sánchez Ayuso o Enrique Sapena, y estos serían sólo los primeros nueve firmantes de los 175 que tenía el documento.

El dirigismo centralista, el amiguismo, la personalización del poder, ahogan la espontaneidad necesaria y la participación eficiente imprescindibles para que se desarrolle la militancia.

Particular importancia tienen el estricto respeto a la democracia interna (...).

El respeto a la vida interna de las organizaciones territoriales y especialmente de las agrupaciones ha de ser absoluto. El Comité Federal tiene que ser el verdadero órgano director del Partido entre congresos. Para incrementar en este sentido su eficacia es preciso potenciar, como no se ha hecho hasta el presente, la información interna y la organización de las Federaciones<sup>437</sup>.

Además, el punto 5 versaba directamente sobre el problema autonómico, pese a que muchos de los principales protagonistas de esta corriente no eran en absoluto defensores de las posturas más proclives a reclamar las diferencias nacionales y los derechos que estas podían otorgar, por ejemplo en términos de soberanía. En realidad, este punto no tenía por qué ser en sí mismo una crítica a la política autonómica del PSOE, ya que en nada se diferenciaba de ésta. Como mucho hacía una llamada para movilizar a través de esta cuestión a la población que se había desencantado a raíz de las actuaciones basadas en el consenso. Pero lo hacían sin llegar a plantear nada concreto que los desmarcara de la gestión llevada a cabo hasta aquel momento: «5. El PSOE ha de asumir con rotunda decisión la lucha por la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran el Estado, ligando la aspiración de la autonomía a la lucha socialista por transformar la estructuras producida a causa de las políticas de consenso seguidas en el período constituyente»<sup>438</sup>.

En relación con las demandas de mayor federalización, y confirmando el proceder de la dirección que para muchos estaba suponiendo un problema, uno de los líderes del PSC, Martín Toval, añadiría que un tema de vital importancia era el de

---

<sup>437</sup> VV.AA: “Manifiesto de la izquierda del Partido Socialista Obrero Español”, AHUV, Fons Alfons Cucó, 021/011. Otro texto que apunta en esta misma línea sería el elaborado por Arsenio Jimeno Velilla, elegido Presidente del Partido Socialista de Aragón en 1978, titulado «Reflexiones de un delegado al XXVIII Congreso». En él, su autor hacía una valoración, que en general era positiva, de la gestión de la Comisión Ejecutiva, pero en la que remarcaba las críticas que ésta había recibido y que a su parecer estaban más fundamentadas, entre ellas las relativas a la falta de independencia de las agrupaciones y federaciones: «¿Por qué la irritación de muchas delegaciones se tradujo después en un alto porcentaje de abstenciones? Para mí no hay duda alguna. Se condenaba las intromisiones de la Secretaría de Organización en la vida interna de las Agrupaciones y Federaciones, recortando sus facultades, su soberanía, haciendo del federalismo una mera caricatura, de la autonomía federal una palabra hueca», en Arsenio JIMENO VELILLA: “Reflexiones de un delegado al XXVIII Congreso” (Zaragoza, 25 de mayo de 1979), AFFLC, Sección Archivos Personales, Fondo Arsenio Jimeno Velilla, 004617-008, pp. 1-2.

<sup>438</sup> VV.AA: “Manifiesto de la izquierda...”

ahondar en la autonomía que la Ejecutiva daba a las federaciones: «Si bien en el anterior congreso se aprobó una declaración en este sentido, era del todo insuficiente. Si el PSOE cree en un Estado federal y en un partido federal, ello quiere decir que el PSOE está formado por un conjunto de partidos federados»<sup>439</sup>. Pero en realidad, los socialistas no eran una federación de partidos, sino un Partido con federaciones y tan sólo un Partido federado, el PSC-PSOE, aunque tanto este como el PSE-PSOE tenían grupo parlamentario propio<sup>440</sup>. Su concepción de Partido federal no distaba de la que habían construido sobre el Estado federal y que tan bien se adaptaba a ese modelo de España que querían construir. De hecho así quedaba demostrado en algunas reflexiones sobre este asunto, donde se demuestra qué entendían exactamente por federalización del Partido:

Para adecuar la estructura del partido al modelo que se ofrece de estructuración del Estado, la organización se ha dado unos nuevos estatutos, cuyo somero análisis puede desvelarnos la finalidad que se pretende al propugnar la federalización del Estado.

El partido expresa en su organización la necesaria compatibilización de los intereses solidarios del conjunto de los españoles, con los intereses específicos de los diferentes pueblos que componen las nacionalidades y regionalidades.

Un Congreso, que reúne a todos los socialistas españoles al margen de su procedencia nacional o regional, elabora las grandes líneas estratégicas del Socialismo a nivel del Estado; ofrece las grandes opciones que ligan solidariamente a todos los que componen la ideología socialista y democrática. (...)

---

<sup>439</sup> *La Vanguardia*, 13 de mayo de 1979.

<sup>440</sup> Sólo estos partidos tenían grupo propio en el Congreso de los diputados, aunque se decía barajar la posibilidad de que en un futuro la federalización del Partido condujera a la creación de otros, como el andaluz. En este sentido explicaba el diario *Avui*, cómo había transmitido Peces-Barba la negociación a la prensa: «Gregorio Peces Barba explicà que tant el PSC-PSOE como el PSE-PSOE són partits autònoms, inscrits al registre d'associacions polítiques, però federats amb el PSOE, i que en conseqüència tenen dret a formar grup parlamentari propi. A més, cal tenir en compte –afegí– les característiques nacionals d'ambdós països. A mesura que la federalització del PSOE tiri endavant, es formaran altres grups parlamentaris amb els diputats de les diverses nacionalitats i regions. Esmentà el cas particular d'Andalusia», *Avui*, 26 de abril de 1979. Unos días más tarde, en el mismo periódico se recogían las siguientes amenazas lanzadas contra UCD, que había pactado con el PSA la creación de un grupo parlamentario propio tan sólo con 5 diputados, cuando hasta el momento el mínimo necesario era 15: «si es dóna permís als del PSA per tenir una minoria propia, ells federalitzaran els seus grups i en faran tants com els convingui». Ante la posibilidad de que los socialistas vascos y los socialistas catalanes perdieran sus grupos parlamentarios, si se consideraba que los diputados de estos territorios formaban parte, en sentido estricto, de la misma formación –al no haberse enfrentado electoralmente ni el PSE-PSOE ni el PSC-PSOE al PSOE– se llegó al siguiente acuerdo. Se permitía la creación de grupos propios con 5 diputados y «els socialistes limiten la seva amenaça de “federalització” a la constitució del grup de Socialistes de Catalunya y d'Esuskadi», *Avui*, 29 de abril de 1979. La realidad fue que desde 1982, lejos de avanzar hacia esa federalización y crear nuevos grupos parlamentarios, los socialistas catalanes y vascos se integraron dentro del Grupo Socialista.

Esta estructura federal del partido intenta ser modélica en coherencia con la que trata de conquistarse para el conjunto de la sociedad española”<sup>441</sup>.

Así pues, la multitud de demandas que apostaban en este nuevo congreso por una mayor independencia o autonomía para las federaciones iban a tener unos límites claros: los mismos que iba a tener el Estado federal y que venían marcados por la manera en la que se entendía la federalización desde la cúpula del PSOE<sup>442</sup>.

La comisión que debía trabajar sobre la resolución de los Estatutos fue, como había anunciado la prensa, una de las que más interés generaron, cosa que se demostró al ser el grupo de trabajo al que más delegados se adscribieron voluntariamente, en concreto 190<sup>443</sup>. Fue más numerosa incluso que la ponencia política, confirmando la teoría de aquellos que apuntan a que en el Congreso se estaban jugando más que la definición del Partido y que detrás de este debate había también una pugna sobre el modelo del mismo. En ella se tenía que debatir sobre puntos como los relativos a la federalización del partido, pero también otros como los del reconocimiento de tendencias internas organizadas, que tenían en común el permitir un menor control por parte de la ejecutiva. Existía un cierto clamor en este sentido y parecía que la dirección no estaba dispuesta a ceder. De hecho, esta comisión sería de las pocas en las que no se trabajó con ponencias enviadas voluntariamente por las agrupaciones, sino que se utilizó un documento de trabajo encargado directamente por el Comité Federal<sup>444</sup>. En general, la esencia de lo propuesto desde el Comité Federal se mantuvo en la Resolución final, así sucedió con la reafirmación en torno al carácter federal del Partido; o con la novedad retórica respecto al Congreso de 1976, que enunciaba que en el seno del PSOE se integraban además de federaciones, partidos: “El PSOE es una Organización política de

---

<sup>441</sup> *Este viejo y nuevo...*, p. 324.

<sup>442</sup> Según el periódico *Avui*, «Hi ha un aspecte sobre el qual si que hi ha acord: la federalització completa del PSOE. Aquest principi ja fou adoptat al congrés anterior (...) “Es tracta ara que es dugui a la pràctica de debó” deia un diputat socialista», *Avui*, 13 de mayo de 1979. En otras crónicas de la prensa del momento se reiteraba el interés por este tema, que consideraban uno de los tres puntos más importantes del Congreso, junto al debate sobre el marxismo y la política sindical. Aunque varias federaciones parecían estar preocupadas, destacaban la catalana o la gallega: «Una de les grans qüestions del congrés serà la proposta de profunditzar l’estructura federativa del partit, punt en què les delegacions catalanes i gallegues han insistit molt, perquè el consideren molt més important que les discussions sobre marxisme o sobre política sindical», *Avui*, 17 de mayo de 1979. Para el caso gallego Modesto SEARA: *El socialismo en España*, México, Escuela Nacional de Estudios Profesionales-Universidad Nacional Autónoma de México, 1980, pp. 23-30.

<sup>443</sup> La ponencia política era la segunda más numerosa con 177; le seguía la programática con 102; y a cierta distancia, pero todavía relevante, aparecía la de política autonómica con 70 adscritos. *Avui*, 19 de mayo de 1979.

<sup>444</sup> La Comisión que elaboró este documento de trabajo estaba formada por José Acosta, Carlos Cigarrán, Carmen García Bloise, Joan Lerma y Jaime Montalvo.



carácter federal constituida y estructurada sobre la base de partidos o federaciones de nacionalidad o región (...)»<sup>445</sup>. La diferencia más reseñable respecto al «documento de trabajo» encargado y enviado por el Comité Federal sería la desaparición en la resolución del siguiente artículo: «En el camino a la estructuración federal del Estado, el PSOE impulsará la federalización real del Partido, adelantando su ritmo al del establecimiento de las autonomías regionales o de nacionalidad»<sup>446</sup>.

Pero al final el proceso no fue mucho más allá, y ni se permitieron las tendencias organizadas ni se satisficieron las demandas de una independencia real, que siguieron coleando más tarde, como demuestran las declaraciones de Raimon Obiols, quien denunciaba que «el PSOE s’havia declarat sempre federalista però en la pràctica era un partit centralista»<sup>447</sup>. De hecho, como ha afirmado Santos Juliá:

mientras se discutía sobre la identidad del PSOE como partido marxista, el 28 Congreso aprobaba con una fuerte oposición, una reforma de estatutos que además de prohibir las tendencias organizadas y las corrientes de opinión, cambiaba el sistema de representación a los congresos de manera que en adelante, suprimido el derecho de cada agrupación a enviar sus representantes, serían las federaciones provinciales y regionales las que enviarían una delegación única con un único voto. El sistema indirecto de elección y el voto único por delegación dejaba en manos de una minoría, fácilmente controlada por los organismos ejecutivos centrales, la aprobación de las resoluciones y la elección de la ejecutiva<sup>448</sup>.

En definitiva, se puede concluir que el XXVIII Congreso supuso la culminación de un proceso por el que el PSOE había transitado mucho antes. Como han señalado la mayoría de los autores, fue el momento en que la moderación, que ya dominaba gran parte de su política, se imponía en todos los ámbitos, también los reservados hasta el momento al programa máximo. Empujados por un nuevo marco constitucional, pero no sólo, ofreció la ocasión para decantarse formalmente por posturas más moderadas en casi todos los aspectos. Lo que podría ser presentado como la necesidad de renunciar a muchos principios en aras del consenso constitucional, o de deshacerse de lo superfluo, puede ser interpretado desde esta perspectiva como la oportunidad de establecer una

---

<sup>445</sup> “Organización y Estatutos”, en PSOE: “Resoluciones. 28 Congreso”, ABFPI, c 142, p.5.

<sup>446</sup> “Estatutos”, en PSOE: “Documentos de trabajo elaborados por el Comité Federal”, ABFPI, fa 244, p. 34.

<sup>447</sup> *Avui*, 30 de septiembre de 1979.

<sup>448</sup> Santos JULIÁ: *Los socialistas en la política...*, p. 541. Véase también Richard GILLESPIE: *Historia del Partido Socialista...*, p. 356.

mayor coherencia entre las «dos almas» que desde hacía tiempo convivían en el Partido. Por supuesto, en este proceso también intervino la estrategia política, animados a dar el salto de «alternativa» a Gobierno, la dirección decidió unificar las posturas y comenzar a teorizar de una manera más acorde a la práctica, y de paso ejerció un control mucho más férreo sobre el Partido<sup>449</sup>.

Por todo ello creemos que hay que reivindicar el factor ideológico dentro del PSOE, también respecto a la cuestión nacional. Sin menospreciar las razones tácticas, el cambio de estrategia no se dio únicamente para obtener mayores fines, que también, sino que en realidad se adaptaron los principios más radicales al fondo de lo que ya se estaba haciendo y diciendo mucho antes<sup>450</sup>. Ni antes habían sido sólo «oportunistas», ni ahora actuaban desprendiéndose de lo que nunca les había identificado, ni tampoco se veían obligados a renunciar a sus principios sólo en aras del consenso o de la estrategia política. En el PSOE, siempre se había definido en esencia la nación plural que ahora se plasmaba doctrinalmente, y como antes había sucedido, ante unos principios flexibles, que siempre habían sido estrictos en sus límites (la unidad de la nación basada en la convivencia plural, libre y solidaria de sus nacionalidades y regiones), las coyunturas concretas habían ido marcando las posibles alternativas, al ritmo de una improvisación que definirá también su política a partir de aquel momento.

Por tanto, las continuidades en esta etapa son importantes respecto al pasado, pero a diferencia de lo que ha establecido un autor como L. Vicario, consideramos que si debe atribuirse a algún Congreso el punto de inflexión de la política del PSOE en materia autonómica, no sería su XXIX Congreso sino el XXVIII, momento en el que abandonaron el derecho de autodeterminación; en el que plantearon, por primera vez en un Congreso, la voluntad de un Estado Federal para un horizonte de futuro; y en el que en definitiva se ocupan de diseñar las bases de un modelo autonómico «armonizado» que se fue perfilando conforme avanzó la coyuntura<sup>451</sup>.

---

<sup>449</sup> Como ha advertido Santos Juliá: «por vez primera en la historia de los sistemas de partidos en España, un partido no era en sus organismos centrales el reflejo de intereses locales o regionales sino que éstos se jerarquizaban de acuerdo con las decisiones adoptadas desde la comisión ejecutiva», en Santos JULIÁ: *Los socialistas en la política...*, p. 541.

<sup>450</sup> Paloma Román ha integrado el cambio en la política territorial a la dinámica que se hizo frecuente en la política sectorial, pasando de «exigir unos máximos a tecnificar unos mínimos», Paloma ROMÁN: *El Partido Socialista Obrero Español en la transición española: organización e ideología*, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1987, p. 592

<sup>451</sup> En sentido contrario L. Vicario: «En definitiva, se aprecia en el 28 Congreso el comienzo de un nuevo planteamiento acerca de la cuestión nacional. Sin embargo, la base ideológica fundamental no varía con

---

respecto al 27 Congreso por lo que hemos considerado adecuado englobar ambos dentro de una misma concepción ideológica. El punto de inflexión en el discurso ideológico lo marcará definitivamente el 29 Congreso del PSOE celebrado en 1981». Este autor explicaba el cambio que se produciría ya en 1981 al «reajuste ideológico» que había definido al PSOE durante toda la Transición, sin tener en cuenta otros factores coyunturales o ideológicos: «En efecto, la evolución desde posturas favorables a la autodeterminación dentro de una estrategia revolucionaria de ruptura, hasta la política actual basada en el autogobierno constitucional y solidario constituye, a nuestro juicio, un indicador de la primacía concedida por el PSOE a la eficacia, al pragmatismo, a la adaptación constante a la relación de fuerzas en cada momento concreto. Y todo ello con un objetivo concreto: la conquista y posterior mantenimiento del poder político (...) Dentro de este marco de ajuste se encuentra el tema nacional, la cuestión nacional, como un elemento más», L. VICARIO: «La cuestión nacional en el discurso ideológico del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)», en Alfonso PÉREZ-AGOTE (ed.): *Sociología del nacionalismo español*, Vitoria, Gobierno Vasco, 1989, pp. 316-317.



#### **IV. LA AUTONOMÍA COMO SOLUCIÓN A LOS AGRAVIOS. PERO, ¿QUÉ AGRAVIOS?**

Tras el XXVIII Congreso se iniciaba un período decisivo para la definición del Estado de las Autonomías, en el que darían comienzo las negociaciones de los Estatutos de Sau y Gernika entre la Comisión Constitucional y las delegaciones de los parlamentarios de sus respectivos territorios. Esto suponía que la política autonómica de los partidos debía definirse y enfrentarse a la realidad de su aplicación práctica, y en el PSOE aquella etapa se inauguraba con una dificultad añadida: el hecho de que durante este tiempo la dirección estaría detentada por una Comisión Gestora, que debía pasar el testigo a la nueva Ejecutiva cuando los primeros Estatutos estuvieran negociados. Aunque siempre se mantuvo una continuidad en el liderazgo, con una gestora «controlada» por el sector «felipista», es de suponer que aquello minó las posibilidades de mediación sobre un tema tan sensible y en el que las federaciones tenían tanto que aportar, o que incluso aplazó alguna toma de decisiones<sup>452</sup>.

Sin un órgano creado específicamente para dirigir y coordinar aquella materia, la política personalista y elaborada fundamentalmente desde la cúpula fue diseñando una línea estratégica que en ocasiones colisionaba con la que se iba improvisando desde las nacionalidades y regiones. Estos problemas comenzaron a intentar ser atajados ya, en este período de impasse, aunque no fueron solucionados entonces —ni tampoco desaparecieron a corto plazo tras la creación de la Secretaría de Política Autonómica en el Congreso Extraordinario—. Desde esta etapa, como intentaremos poner de relieve, creció la necesidad de dar respuesta a las voces que clamaban por una mayor definición y una política más coherente para un asunto que requería de una estrategia global. Y en este tiempo también, se pusieron de manifiesto las contradicciones y las diferencias entre las distintas concepciones que existían en el Partido respecto a la razón última para impulsar al movimiento autonomista.

##### **1. La puesta en marcha de una política autonómica**

En lo relativo a la organización territorial del Estado, la Gestora se guió por los principios establecidos por la Resolución sobre Autonomías en el XXVIII Congreso y

---

<sup>452</sup> Por ejemplo, *El Socialista* denunciaba que la Federación canaria no se había comprometido en estos temas (ni en los que tenían que ver con la definición del Partido respecto al marxismo) durante la celebración de su Congreso a la espera de lo que sucediera en el Congreso Extraordinario de septiembre, en *El Socialista*, 118 (22 de julio de 1979).

para ponerlos en práctica se creó una Comisión de Autonomías en cuyo seno, una Ponencia coordinada por Plácido Fernández Viagas<sup>453</sup>, se encargó de realizar un informe para establecer las «posibilidades de acción» durante el breve mandato de esta dirección. Como se puede observar, el protagonismo de andaluces y catalanes a la hora de definir la política autonómica que debía unificar la estrategia del conjunto del PSOE, se iba haciendo cada vez más patente. Al parecer, la Ponencia había indicado dos pautas fundamentales a la Comisión de Autonomías basándose en la resolución del Congreso de mayo: había que hacer realidad la estructura federal del PSOE y potenciar la soberanía de cada partido federado y federación para elaborar las estrategias necesarias en cada ámbito específico; pero siempre bajo la orientación del Partido en su conjunto cuya máxima continuaba siendo la institucionalización de un sistema autonómico bajo el principio de la solidaridad entre todas ellas<sup>454</sup>.

La intención fundamental de la Gestora respecto a la política autonómica, según afirmaban, era la de recabar la información necesaria, especialmente a través de los compañeros que ejercían cargos dentro de los órganos preautonómicos y de los Secretarios de las Federaciones de las nacionalidades, para elaborar una política socialista global y coordinada en esta materia. Como se desprende del informe del órgano gestor<sup>455</sup>, uno de los déficits que ellos mismos percibían, y que más les preocupaba, era precisamente la inexistencia de coordinación en esta materia, algo que estaban tratando de subsanar reclamando con especial énfasis una estrategia general con «líneas básicas comunes» al menos para el medio plazo, en la que el PSOE hubiera definido su postura sobre iniciativas y procesos autonómicos, y el establecimiento de fórmulas de coordinación entre entes autónomos y el Secretario Federal. Como ellos mismos concluían: «En el conjunto de estas reuniones y sobre la base del informe presentado por la Ponencia se expresaron criterios coincidentes sobre la conveniencia de establecer una línea común de los socialistas de todas las nacionalidades y regiones, en

---

<sup>453</sup> Viagas había sido el primer Presidente de la Junta de Andalucía y acompañándolo se encontraban Joan Raventós, del PSC-PSOE, y Rafael Fernández, Presidente del Consejo Regional de Asturias.

<sup>454</sup> Esta información se encontraba en el Informe que la Comisión Gestora presentaba antes el Congreso Extraordinario, en PSOE: “Informe Comisión Gestora”, (Madrid, 28 de Septiembre de 1979), ABFPI, Fc 257, pp. 7-8.

<sup>455</sup> Condensaba también el informe que había elaborado la Ponencia de la Comisión de Autonomías coordinada por Plácido Fernández Viagas.

los respectivos estatutos en cuanto a los temas que afectan a la estructura general del Estado así como a la solidaridad»<sup>456</sup>.

La improvisación en estas cuestiones era común, y las demandas de una dirección más planificada que racionalizara la estrategia del PSOE en torno a todos los procesos abiertos era cada vez mayor. Entre las demandas anteriores también se incluía la de presionar para acelerar la aprobación de una Ley orgánica sobre el referéndum, que llegaría a finales de ese año y que tendría una incidencia decisiva en la deriva racionalizadora posterior. En cambio, por aquel momento, como demostraba el informe de la Ponencia, la escena estaba dominada por una multitud de casos sobre los que todas las perspectivas estaban abiertas. De hecho, la imagen que nos ofrecería la descripción detallada de la situación de cada territorio demostraba que no sólo los socialistas no tenían claramente trazada la estrategia global, sino que en algunas nacionalidades existían dudas y conflictos internos que ofrecían una imagen un tanto dubitativa acerca de cuál iba a ser la posición que defendería el Partido finalmente<sup>457</sup>. Un ejemplo de ello se encuentra en la descripción de la situación en Aragón o el País Valenciano, donde los procesos autonómicos iban a sufrir una desaceleración respecto a la que los socialistas no fueron ajenos. El reflejo de esta situación en Aragón se puede observar a través de la información que transmitía la Ponencia, demostrando la división que la autonomía generaba dentro de los propios socialistas de esta región: «discrepancias entre los compañeros de la dirección política de la Federación, de la Diputación General de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza respecto a la oportunidad, la orientación y al ritmo de la iniciativa autonómica». Pese a ello, se mantenía una coincidencia de criterios a la hora de decantarse por la vía del artículo 151<sup>458</sup>. El otro territorio en el que

---

<sup>456</sup> *Ibid.*, p. 11.

<sup>457</sup> Solo mencionaban algunos de los territorios (Aragón, Cantabria, Andalucía, Valencia, Galicia, Madrid, País Vasco y Cataluña) porque como explican, no todas las federaciones «han cumplido con la debida diligencia» a la hora de entregar la documentación que se les requirió para poder ir trazando un plan conjunto, lo que demostraría que a esas alturas no estaban todavía lo suficientemente coordinados en estos asuntos, PSOE: «Informe Comisión...», pp. 9-10.

<sup>458</sup> En cambio, sólo unos meses antes, *El Socialista* informaba sobre el caso de Aragón de forma muy distinta, demostrando cómo la situación en este territorio se deterioró en poco tiempo, lo que facilitó la desaceleración y las dudas en el socialismo aragonés. El día 10 de junio decían: «Aragón y la región castellano-manchega (...) son las dos regiones del Estado que por las circunstancias que fuesen: pocas complicaciones, rápido entendimiento de los partidos en ellas representados, etcétera, tienen ya perfectamente trazado su inmediato futuro autonómico», *El Socialista*, nº112 (10 de junio de 1979); y el 15 de julio, comparándose con Galicia o el País Valenciano, territorios que ya entonces tenían importantes dificultades, señalaban: «la impresión que tienen los aragoneses es que con muchas menos pomposidades que otras regiones o nacionalidades están consiguiendo el mismo número de competencias que, pongamos por ejemplo, el País Valenciano o Galicia», *El Socialista*, nº117 (15 de julio de 1979).

se aprecian mayores diferencias era el del País Valenciano<sup>459</sup>, donde decían haber abordado en varias reuniones «las discrepancias entre los compañeros acerca de la política en el seno del Consell», añadiéndose que «la presidencia desarrolla una campaña en favor de la iniciativa autonómica y de la elaboración rápida del estatuto de autonomía», lo que pone en cuestión la imagen de unidad y arroja dudas sobre el consenso en torno a la vía del 151, como así se suponía. Aunque quizá resulta excesiva tal afirmación, lo que sí parece claro es que la autonomía se estaba comenzando a revelar como un problema y desde el PSOE temían sus consecuencias, como se demuestra en otra de las reuniones entre los Secretarios Generales de las federaciones y la Comisión Gestora. En ella, el representante valenciano explicaba que el PSOE tenía que hacer un esfuerzo rápido y muy importante por lograr que la mayoría de los alcaldes y concejales se pronunciaran por la autonomía, y demostrando su temor a que el contexto convulso en esta nacionalidad pudiera aumentar de no encauzarse rápidamente el proceso autonómico, añadía: «Existe una terrible confusión en temas culturales, y si la autonomía no está clara, la confusión será mayor»<sup>460</sup>.

En esta reunión del 22 de agosto, también se apreciaba la inexistencia de unas posturas definidas, para gran parte de los territorios. Incluso en el caso vasco, donde la defensa del Estatuto no podía ponerse en duda, el tema de Navarra era mencionado con cautela, aplazando la posición oficial al siguiente Congreso del PSE, intentando evitar los «bandazos»<sup>461</sup>. Pero más ejemplificador era el caso de Baleares, donde creían que el Estatuto no presentaba muchas dificultades, pero donde consideraban también que pronunciarse sobre la cuestión autonómica antes que UCD –al no tomar esta la iniciativa– era un «problema muy grande de responsabilidad».

Seguramente, la tónica general que puede intuirse en estos documentos sobre los posicionamientos concretos en cada región, y que se hacía compatible con los

---

<sup>459</sup> En el País Valenciano el conflicto ya estaba presente en la crónica de *El Socialista* mencionada en la nota anterior, y era referenciado (junto a Asturias) precisamente como contrapunto al caso aragonés: «Más espinosos son los temas preautonómicos en el País Valenciano y Asturias. A la hora de redactar estas líneas, prácticamente no ha habido ningún acuerdo importante entre las fuerzas políticas que tendrán representación en ambos entes preautonómicos. En el País Valenciano, tanto PSPV-PSOE como UCD no tienen criterios claros ante la inmediata formación del Consell. Podría decirse que tanto un partido como el otro están divididos a la hora de afrontar el tema de la presidencia. (...) Del lado socialista, la idea de no querer acceder a la presidencia parte de una serie de compañeros no especialmente mayoritaria», en *El Socialista*, nº112...

<sup>460</sup> PSOE: Reunión de Secretarios Generales de Nacionalidad y Región con la Comisión Gestora, (22 de agosto de 1979), AFFLC, Fondo José Prat García, 000739-002.

<sup>461</sup> La derrota sufrida en Euskadi en las anteriores elecciones estaba presente y demandaban un esfuerzo importante para evitar el «descalabro del Partido» ante el futuro referéndum por el Estatuto.



planteamientos defendidos programáticamente desde 1979, era la de alentar los procesos autonómicos allí donde existían demandas o donde les interesaba política y electoralmente, sin comprometer la integridad del Estado y sin que la ordenación autonómica se hiciera en un términos y unos tiempos que sobrepasaran la capacidad de gestión del mismo. Así, por ejemplo, alertaban del peligro de exaltar en exceso los ánimos en La Rioja: «El problema fundamental político es la autonomía pero hay que frenarlo para no desarrollar el espíritu nacionalista, e ir avanzando lentamente»<sup>462</sup>; y en cambio, pese a constatar que en Cantabria «no existe una conciencia real autónoma» se decantaban por posicionarse por la creación de una comunidad autónoma y por la vía del artículo 143, quizá, porque como decían en una de las reuniones, el «Partido Regional de Cantabria hace populismo y nos puede hacer daño si no seguimos adelante»<sup>463</sup>, o porque como planteaban en otro encuentro, habían constado «el sentimiento de marginación incluso por la desconexión de comunicaciones con Castilla»<sup>464</sup>.

Quizá, uno de los territorios sobre el que más claro lo tenían a estas alturas –a excepción de Cataluña, Euskadi, y en menor medida Galicia– era Andalucía, un territorio que optaba por la vía del 151, sobre el que no parecían existir en estos informes dudas importantes y del que se daba una imagen mucho más optimista y menos problemática: «El Partido promueve la iniciativa autonómica por la vía del Artículo 151, cumpliéndose las etapas que el mismo prevé y se actúa en la Junta de Andalucía, a este respecto por la vía del consenso»<sup>465</sup>. Aunque excepcional en este sentido, las motivaciones que movían a los socialistas a posicionarse por su autonomía no distaban tanto de las vistas hasta ahora, ya que, además de las sensibilidades que seguro compartirían sobre sus derechos identitarios y la necesidad de una política de desagravio hacia su población, como se veía en otros espacios, la respuesta electoralista y estratégica estaba también muy presente. Y es que tras las elecciones generales, el miedo a la ofensiva del PSA se mantenía –por no mencionar la ventaja que allí obtendrían frente a la opción por la que se decantaría finalmente UCD–, y no podían dejar que este partido se convirtiera en el único representante de la lucha por la autonomía andaluza. De hecho, las prevenciones sobre el socialismo andalucista se

---

<sup>462</sup> PSOE: Reunión de Secretarios Generales...

<sup>463</sup> *Ibid.*

<sup>464</sup> PSOE: “Informe Comisión...”, p.9.

<sup>465</sup> *Ibid.*

trasladaban ahora hasta el PSC, que alertaría del perjuicio que podrían ocasionarles en Cataluña: «Están preocupados por el daño que les podría hacer Rojas-Marcos si presentara candidatos al Parlamento catalán. Se informa que en Madrid, el PSA quiere también implantarse y que abarca el voto de las clases pobres, medias, nueva clase media, juvenil y femenino»<sup>466</sup>.

Y si parece que existían diferencias evidentes entre Andalucía y los territorios que sin ser considerados nacionalidad histórica se postulaban para acceder a la autonomía a través del artículo 151<sup>467</sup>, también se observaba distancia entre el rango que parecían tener dentro de las nacionalidades históricas, Cataluña y Euskadi por un lado, de las que se anunciaba en tono aséptico la existencia de reuniones para tratar la marcha de la elaboración de los Estatutos; y Galicia por otro, con la que no había tanto consenso. La nueva dirección, encabezada por José Luis Rodríguez Pardo, elegido Secretario General del PSdeG-PSOE en el Congreso Extraordinario celebrado en Santiago entre el 20 y el 22 de julio, no sería del agrado de la cúpula del PSOE. Como ha estudiado Emilio Grandío, la elección de Rodríguez Pardo, integrado con la unificación con el PSG, dotó a aquella Federación de un carácter galleguista que trataba de distanciarse de la anterior dirección, asociada a una imagen de complicidad con la UCD gallega. Pero como sentencia Grandío, «el trabajo de Rodríguez Pardo como Secretario General, no fue suficientemente entendido desde la organización central del PSOE», un hecho que se acentuaría conforme avanzaran las negociaciones en el Congreso sobre el Estatuto a partir de octubre, y que se detallarán más adelante<sup>468</sup>.

Los socialistas tenían claro, como ya se ha repetido en distintas ocasiones, que la unidad de España debía ser fortalecida a través de la pluralidad y no de la imposición centralista, y para ello, la autonomía de Cataluña y Euskadi era indispensable. A estas se sumó la gallega, que aunque no había tenido una trayectoria histórica que la dotara de la misma fuerza que las anteriores, consiguió aprobar su Estatuto durante la II República,

---

<sup>466</sup> PSOE: Reunión de Secretarios Generales...

<sup>467</sup> A partir de lo planteado por los documentos mencionados, el PSOE indicaba explícitamente que optaba por la vía del artículo 143 en Cantabria y Asturias; por la del 151 en Andalucía, Castilla y León, Aragón y País Valenciano (no lo hace explícitamente pero se entiende así ya que se refieren a que están llevando a cabo una campaña en favor de la elaboración rápida del Estatuto de Autonomía); no se pronuncian intencionadamente en Baleares; y no especifican en Canarias (en la que la iniciativa de la vía del 151 había comenzado con éxito como en Andalucía y País Valenciano), Murcia y La Rioja. Sobre el proceso autonómico en Castilla y León véase Mariano GONZÁLEZ CLAVERO: *El proceso autonómico de Castilla y León*, 2 vol., Valladolid, Fundación Villalar, 2004.

<sup>468</sup> Emilio GRANDÍO: "El lustro que marcó el camino: el PSOE en Galicia (1974-1978)", *Historia del Presente*, 26 (2015), p. 70.

lo que le permitió entrar a formar parte de este grupo aunque de una forma más discutida, por lo que tuvo más problemas a la hora de alcanzar los mismos derechos que las dos anteriores durante la Transición. En cualquier caso, que el Partido socialista hiciera, como el resto, distinciones entre las tres nacionalidades históricas y el resto de regiones, no significaba que la meta del mismo no fuera imponer un sistema igualitario y solidario ante todo, en el que la autonomía debía ser un derecho reconocido por la nueva democracia, pero sin que esto supusiera ningún tipo de privilegio, ya que no se puede perder de vista que para ellos el establecimiento del modelo unitario e igualitario estaba por encima de los intereses particulares de cada territorio.

En este sentido, si nadie dudaba de que las tres nacionalidades históricas –o al menos Cataluña y Euskadi– debían acceder a la autonomía por una vía privilegiada, las cosas se complicaban más con el resto. Para empezar, el establecimiento de dos vías provocaba que el Partido se pronunciara por una u otra en cada territorio, y como hemos visto, no en todos se tenía una opinión definida. Pero además, el PSOE era partidario a nivel global, de que el proceso no se desbordara, haciendo manifestaciones que prevenían ante una carrera de todas las regiones tratando de optar al mayor grado de autonomía en el menor tiempo posible antes de estar preparadas, ellas y el conjunto del Estado. Esto, sin una estrategia global bien planificada todavía, y con las tensiones partidistas que se vivían en cada territorio, estaba generando unas políticas improvisadas que en cambio iban a empezar a ordenarse de forma acorde a su plan racionalizador para todo el Estado. El resultado, por otra parte, sería distinto según el territorio, y según el contexto particular del mismo.

Para empezar, los problemas no serían los mismos en aquellos lugares en los que no se habían revelado con fuerza las demandas identitarias hasta el momento, por lo que el hecho de que en estas regiones se aplicara finalmente el artículo 143 no tenía por qué suponer ningún foco de conflicto. Pero la situación se complicaba con respecto al artículo 151, que inicialmente no tenía por qué ser negado a las nacionalidades que tempranamente se habían manifestado en favor de la autonomía, pero cuya demanda empezó a generar controversias a partir de 1979. La postura del PSOE al respecto fue planteando dudas según el lugar.

Como se ha dicho, uno de los casos más claros para los socialistas estaba siendo Andalucía, donde pelear por la autonomía se iba a convertir en una de las bazas más

rentables del Partido, que pronto comenzó a verlo así. Y a esto ayudaría la idea, cada vez más extendida entre la política y la sociedad española, de que la autonomía era una fórmula para salir de la marginación y para alcanzar las cuotas de bienestar socio-económico que un desarrollo desigual había negado a muchas de las regiones españolas. Así lo confirmaría años más tarde el socialista andaluz Miguel Ángel Pino Menchén, que participó como ponente en la elaboración del Estatuto de Carmona:

¿por qué la idea de la autonomía plena, la del artículo 151, concitaba tal consenso en la sociedad andaluza? Creo que venía a ser la síntesis del sueño que los andaluces han tenido en un momento determinado: el saber que podíamos llegar intelectual, cultural, económica y socialmente a niveles de desarrollo tan altos como cualquier otro pueblo de España y terminar con las situaciones de lacerante injusticia que se daban en nuestra tierra<sup>469</sup>.

Esta resignificación del concepto de autonomía permitía defender las demandas identitarias de las «nacionalidades oprimidas» mientras se hacían perfectamente compatibles con un Estado igualitario y solidario, sin contradecir, por tanto, los grandes principios socialistas. Esta dualidad no suponía una novedad, sino que había caracterizado las posiciones sobre la cuestión nacional entre la izquierda estatal desde el inicio de la Transición, pero conforme fue avanzando el período, y el momento de aplicar los principios teóricos era inminente, cobró cada vez más fuerza e importancia, relegando –una vez se salía del ámbito de las nacionalidades históricas– a la autonomía entendida desde la reivindicación más puramente identitaria.

Esto mismo ya se ha visto con la Resolución sobre Autonomías del XXVIII Congreso, en la que reclamaban su protagonismo a la hora de reivindicar los derechos autonómicos de forma generalizada en España, mencionando expresamente regiones como Andalucía o Canarias, que calificaban como puntas de lanza de un movimiento que pugnaba por igualarse en condiciones a otros territorios del Estado. De esta manera, esta concepción de la autonomía, que ponía el énfasis en otros aspectos como la solución a los desequilibrios económicos, sociales y culturales del territorio español, iría ganando peso. Una autonomía que no se centraba tanto en remarcar las diferencias

---

<sup>469</sup> Miguel Ángel PINO MENCHÉN: “Andalucía tuvo un sueño” en Javier TORRES (*et alii*): *Veinte años después. Los Redactores del Estatuto reflexionan sobre la autonomía andaluza*, Sevilla, Parlamento de Andalucía. Servicio del Diario de Sesiones y Publicaciones no Periódicas, 2001, p. 126.

identitarias, sino en reivindicar la igualdad y la reparación de los agravios históricos que el centralismo español había impuesto a muchas regiones españolas, sumiéndolas en el subdesarrollo. Para solucionar este problema no había mejor opción que ese Estado de las Autonomías basado en los principios que debían regir y fundamentar la unidad de la nación española: de nuevo la machacona cantinela de la igualdad y la solidaridad. En este sentido reflexionaría veinte años después de la aprobación del Estatuto andaluz, quien fuera entonces Secretario General del PSOE de Andalucía y ponente del Estatuto de Carmona, José Rodríguez de la Borbolla, estableciendo una doble dimensión en la «cuestión de las nacionalidades». Menciona que inicialmente, ésta se circunscribía fundamentalmente a Cataluña y el País Vasco, pero que sobre todo al inicio de la Transición, la idea de la autonomía se identificó con la de la democracia, generalizándose a todos los territorios de España, generándose una dualidad en la concepción de este derecho:

la autonomía se entendió como un instrumento polifacético, que podía ser útil tanto para la recuperación o reforzamiento de las propias identidades como para el desarrollo, desde abajo, de políticas transformadoras en lo económico y en lo social, que sirvieran para superar situaciones de abandono político y social, postración económica y ninguneo histórico<sup>470</sup>.

Embarcados en esta concepción deben entenderse los debates sobre los desequilibrios territoriales que se celebraron en el Senado y el Congreso a mediados de junio de ese mismo año y que tuvieron lugar de manera paralela al inicio de las negociaciones de los Estatutos vasco y catalán en el Congreso. Los socialistas, a rasgos generales –como sucedió con el PCE–, defendieron esta concepción de la autonomía como la solución al problema de los desequilibrios y la desigualdad regional en España. La declaración del diputado por Málaga, Carlos San Juan de la Rocha, durante el debate en el Pleno del Congreso, en calidad de representante del Grupo Parlamentario Socialista, lo muestra bien:

Los socialistas estamos convencidos de que el reto de las autonomías es un reto de solidaridad, y convencidos, además, de que la conciencia autonomista que estamos potenciando la potenciaremos en todos y cada uno de los pueblos de España, pero,

---

<sup>470</sup> José RODRÍGUEZ DE LA BORBOLLA: “Estatuto de Andalucía: Reflexiones veinte años después” en Javier TORRES (*et alii*): *Veinte años...*, pp. 140-141.

principalmente, en aquellos en que la situación de marginación y de subdesarrollo es mayor no puede separarse de la conciencia de dependencia cultural y económica, de liberación de los trabajadores y clases populares, y ello no será posible realizarlo sin una lúcida constatación de los objetivos compartidos por todos los pueblos. (...) (Canarias, Murcia, Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura) están bastante por debajo de la media nacional. Son los pueblos que más razón tienen para reclamar y exigir un cambio en el proceso del desarrollo español<sup>471</sup>.

Se imponía en estos debates, como estaba siendo frecuente, una autonomía que priorizaba, como afirmaba este diputado, «dos principios que son básicos en nuestra ideología: el principio de la igualdad y el de la solidaridad». Con la igualdad, como continuaba diciendo, se reconocía el derecho a una personalidad diferenciada, pero siempre que no implicara algo que no podían y no iban a reconocer: privilegios. Así pues, ahora que había llegado el momento de poner en práctica la política que construyera un modelo real del Estado Autonómico, estos derechos identitarios se subordinaban, como venía sucediendo tradicionalmente en el discurso teórico socialista, a los principios de igualdad y solidaridad, de modo que la prioridad debía situarse en eliminar los desequilibrios socio-económicos entre las regiones:

Cuando nosotros los socialistas hablamos de solidaridad nos referimos a la necesaria y obligada colaboración de los hombres y los pueblos, a que es necesario anteponer los intereses de la colectividad, del conjunto de los pueblos de España, y de España en su conjunto, a los intereses particulares de cada pueblo y de cada individuo; y nos referimos también al derecho y al deber de cada individuo y de cada pueblo de contribuir al desarrollo armónico de todos<sup>472</sup>.

Esta declaración de intereses, mucho tenía que ver también con la defensa férrea de la unidad de España. En un sentido similar se pronunciaba el representante del Grupo Socialista Andaluz del PSOE, Rafael Estrella Pedrola, en el debate del Senado también en referencia al problema de los desequilibrios regionales, que tuvo lugar el 19 de junio de 1977:

solidaridad por una parte y, por otra parte, también poder político, para que de una vez por todas la unidad que durante muchos años fue etiqueta de homogeneidad impuesta,

---

<sup>471</sup> Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n°19, 20 de junio de 1979, p. 934.

<sup>472</sup> *Ibid.*, p. 933.

sea realmente garantía de autorrealización de los pueblos libres y unánimemente aceptada para que (...), el pueblo andaluz, y todos los pueblos, puedan reencontrar no sólo su propia personalidad, sino también la dignidad que en justicia les corresponde<sup>473</sup>.

Además, Estrella Pedrola aludía a la disposición que tenían los socialistas a luchar por la aplicación de una interpretación progresista de la Constitución, para equilibrar y armonizar el desarrollo regional. En todo caso no fueron los únicos en referirse a la necesidad de construir la unidad desde la libertad y no desde la imposición, a partir de los mecanismos dispuestos en la Constitución. En sentido similar se manifestaba Solé Tura en el debate en el Congreso, quien recordaba que la unidad de España era indisoluble, pero que el cimiento de la misma era precisamente la solidaridad, palabra que había que convertir en realidad si se quería fortalecer de verdad España. Para ello, era necesario alcanzar una mayor igualdad interterritorial, acabando así con las dos Españas que existían en realidad: la España del subdesarrollo y la España que se desarrolla. Solé Tura sentenciaba: «Hay que superar esta diferencia si queremos forjar una auténtica unidad de los pueblos de España, tal como proclama la Constitución y como tenemos que conseguir», y añadía un poco después:

¿Qué tenemos que hacer para reconstruir esa España que nos han dejado deshecha? Tenemos, en primer lugar, que romper el centralismo esterilizador. Y por ahí va el tema de las autonomías, por ahí va. Las autonomías no tienden a romper España, como ustedes saben, o deberían saber; las autonomías tienden a reconstruir España»<sup>474</sup>.

En definitiva, unas autonomías, flanqueadas por una Constitución, que se convertían en la mejor garantía de unidad, siempre que con ellas se solucionara el problema de la desigualdad interterritorial, que no era más que una manifestación de la desigualdad socio-económica contra la que había luchado siempre el conjunto de la izquierda. Esta era, para el PCE o el PSOE, según dejaban ver en estos debates, la concepción que primaba sobre lo que debía suponer la autonomía finalmente. La jerarquización de principios e intereses, imponía una autonomía que apostaba por la redistribución, la solidaridad y la igualdad antes que por la defensa de la personalidad diferenciada de los pueblos. El mismo Solé Tura afirmaba lo siguiente:

---

<sup>473</sup> Diario de Sesiones del Senado, nº 8, 19 de junio de 1979, p. 252.

<sup>474</sup> Diario de Sesiones del Congreso..., pp. 928-930.

los proyectos de Estatuto contemplados en el título VIII son proyectos, formas, vías diversas, pero que todas ellas deben culminar en un mismo grado de autonomía. La Constitución no establece privilegios ni desigualdades; la Constitución lo que establece es un mismo punto de llegada, pero diversos puntos de partida y, en consecuencia diversos ritmos de avance hacia los mismos puntos de llegada. (...) Tenemos ahora ya dos proyectos de Estatuto en marcha, a punto de iniciarse, y hay que poner en marcha los otros. Hay que despejar incógnitas, saber hacia dónde se va, no estar aquí con reticencias. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la Ley Orgánica que prevé el artículo 151 de la Constitución como condición «sine qua non» para poner en marcha los procesos de autonomía en las demás nacionalidades y regiones de España? (...) No se trata de ir a privilegios, pero tampoco de ceder a la demagogia, demagogia que puede venir de dos ángulos, porque a veces, so capa de luchar contra los privilegios de una futura Comunidad Autónoma, lo que se pretende es mantener la estructura centralista, o a veces, lo que se pretende también es mantener el privilegio de clase de una determinada región<sup>475</sup>.

Aquí se pueden observar distintas cuestiones, empezando por la ratificación de que la unidad y la igualdad final de todas las autonomías era la base incuestionable del sistema, defendida también por el PCE. Pero se apuntaba por otra parte, hacia esa división que hemos planteado anteriormente, entre el grupo de las nacionalidades históricas, o más bien el tándem formado por Cataluña y Euskadi; y el resto de territorios, sobre los que no se había delimitado una estrategia clara todavía por ningún partido, pese a que todos decían ser conscientes durante los debates, de la necesidad de un plan armonizador que en este caso interviniera fundamentalmente en las políticas económicas. De hecho, se mencionaba la necesidad de concretar posturas sobre la Ley Orgánica de Referéndum, que aprobada a finales de ese año tendrá una incidencia muy destacable en la deriva de los procesos de las autonomías no consideradas como históricas, cuestión de la que nos ocuparemos más adelante. Finalmente, advertía de los peligros de llevar al extremo la idea compartida también por los socialistas de priorizar la igualdad, ya que si los derechos reclamados por las nacionalidades diferenciadas no colisionaban con este principio y no suponían ningún privilegio, tampoco podían ser negados. Y avisaba en otros momentos de su intervención, como también hicieron el mencionado Estrella Pedrola o Martín Toval (quien intervenía como representante del Grupo Parlamentario Socialista en su conjunto), que la autonomía debía ser vista como

---

<sup>475</sup> *Ibid.*, pp. 931-932.



solución y no como causa del subdesarrollo, ya que éste se había producido bajo gobiernos centralistas.

Lo cierto es que de aquellos debates se desprendía la idea, manifestada sobre todo los representantes catalanes –también el socialista Martín Toval–, de que aunque la necesidad de corregir las desigualdades interterritoriales era incuestionable, se temía que este discurso acabara perjudicando la marcha de los únicos dos Estatutos cuyo proceso ya estaba iniciándose de forma satisfactoria, el vasco y el catalán. Y aunque tales cuestiones sí condicionaron el debate de los mismos, sobre todo en lo que atendía a la financiación catalana, como trataremos más adelante, posiblemente afectaron aún más a aquellas nacionalidades que habían manifestado tempranamente su voluntad autonomista y cuyos procesos acabaron siendo absorbidos por la fuerza de la causa armonizadora, bajo la excusa de la igualdad y la solidaridad. De hecho, estas polémicas iban a ir colaborando en la reafirmación de la necesidad de marcar un techo que igualara a las nacionalidades históricas con el resto; y a su vez, ayudaban a que durante aquel recorrido, las vías para llegar al mismo se hicieran a dos ritmos. Por un lado el rápido, para las nacionalidades históricas, que en aquella coyuntura ya no podían ser frenadas. Y por otro, un segundo ritmo, en el que cada vez se querían observar menos diferencias, convirtiendo a este grupo en un bloque más homogéneo de lo que era en realidad, con el liderazgo indiscutible de Andalucía. Este territorio abanderaría las reivindicaciones a partir de razones históricas que legitimaban la autonomía cada vez menos por cuestiones relacionadas con la personalidad diferenciada, y cada vez más por aspectos relativos a la justicia social, el complejo de inferioridad o los memoriales de agravios relacionados con el subdesarrollo.

Precisamente, para no quedar arrinconados por un discurso que los desplazaría a un segundo plano, a partir de unos criterios que legitimaban la autonomía por medio de unos valores que no podían ser aplicados al pueblo catalán, se reaccionó desde el catalanismo. Hablando como representante de la Minoría Catalana, Jordi Pujol, llamaba la atención sobre la incidencia que el caso andaluz –y los resultados electorales de hacía unos meses– estaba adquiriendo, dominando la escena y convirtiendo la cuestión de los desequilibrios en el punto crucial de la autonomía: «Ha habido, y me parece que es un hecho altamente significativo, el gran éxito electoral del PSA, que suponga que habrá sido, para más de un partido presente en la Cámara, un gran aldabonazo que despertará

a más de uno de su rutina»<sup>476</sup>. El catalán, no negaba la importancia de tales cuestiones, y se posicionaba como defensor de las mismas, reclamando una actuación global del Estado para atajar estos problemas. Decía, que el catalanismo político era consciente de que situar estos problemas en el primer plano de la política, necesariamente representaría «un perjuicio, por lo menos en lo inmediato y en lo económico, para Cataluña», que sin embargo, aceptaban. Pero cuestionaba que esto se hiciera de forma irresponsable, transformando el tema «en una especie de polémica, en una especie de recuerdo constante de hechos históricos, de motivaciones, de intercambio de acusaciones», sin la cautela que los propios catalanes habían tenido al enarbolar sus reivindicaciones nacionales, algo que podría tener consecuencias de extraordinaria gravedad. Así, seguramente temiendo que el proceso iniciado ya en Euskadi y Cataluña pudiera verse frustrado o perjudicado, reclamaba el derecho de Cataluña a que «el debate se produzca y se desarrolle en clave de progreso, de solidaridad de superación, de defensa de intereses legítimos, no en clave anticatalana, no en clave antivasca, no en clave de nuevas insolidaridades»<sup>477</sup>.

Pero esto ya estaba sucediendo en diferentes ambientes al calor de esta polémica, como por ejemplo se podría observar en el artículo de opinión, firmado por Sebastián Cuevas y publicado un poco después de estos debates en el órgano de comunicación del PSOE. En él, su autor se quejaba de que no se racionalizara la cuestión autonómica –a la que llamaba la «patata caliente»– haciendo desaparecer cualquier tipo de privilegio y restituyendo así los derechos de Andalucía, sometida económicamente por culpa del País Vasco y Cataluña. Criticaba que con la excusa de los derechos históricos otros sacaran más beneficios, cuando no había otro lugar que en su opinión los mereciera más que Andalucía, que poseía estos derechos desde la antigüedad destacando como potencia económica y arruinada posteriormente por los «ricos nortños»:

Dijimos autonomía un 4 de diciembre. Y estábamos diciendo justicia y restitución. Devolución de lo que dimos a España. Más que a nadie a los detentadores Vasconia y

---

<sup>476</sup> *Ibid.*, p. 910. También se demostraría la preminencia que el caso andaluz adquirió en los debates, con la propuesta de resolución sobre los desequilibrios regionales presentada por Rojas-Marcos (PSA) el 21 de junio ante el Congreso. En ella se pedía el pronunciamiento positivo de la Cámara sobre la misma: «por el número de veces que todos los Grupos Parlamentarios han mencionado el término, la palabra, el nombre de Andalucía y por la sensibilidad que han demostrado todos los Grupos Parlamentarios de esta Cámara, de izquierda y de derecha, al colocar prácticamente la mitad de los oradores que han participado en estos debates de ayer y de hoy a hombre elegidos por el pueblo andaluz, en Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 20, 21 de junio de 1979, p. 970.

<sup>477</sup> *Ibid.*, pp. 909-913.

Cataluña. Restitución de nuestro millón y medio de hombres y de sus plusvalías. De nuestro esquilmo y de su desarrollo. Dijimos autonomía y estábamos hablando, en cristiano, del Fondo de Compensación Interregional. (...) Y lo hicimos pacífica y civilizadamente. Y con argumentos. No con bombas. (...) Puede que alguien, mientras analiza las razones de disenso con estatutos legítimos, pero no más urgentes como el andaluz, piense en el cúmulo de razones de su asentimiento con los andaluces. (...) Llamemos a las cosas por su nombre. Su nombre es privilegios económicos. Metan ya la mano en el fuego, ucedistas, y saquen las castañas. Y sobre todo la patata. La patata caliente. Y repártanla con justicia. (...) Estoy seguro que cuanto menos me entenderán los vascos que presos del franquismo en la cárcel de Córdoba me tuvieron por su enlace y contacto; juntos luchábamos desde dentro por una libertad y justicia para todos. Sin privilegios»<sup>478</sup>.

Una actitud que era por otra parte incentivada por la fuerza que estaba adquiriendo el socialismo andalucista del PSA con un discurso que apuntaba directamente a estas cuestiones. Volviendo a la intervención de Pujol, en el marco de la lógica argumental planteada, concluía haciendo una reflexión que pretendía desvincular su concepción de la autonomía de la que se estaba viendo como hegemónica en estos debates. Los motivos de los catalanes para reclamar la autonomía no tenían que ver con la redistribución o con cuestiones relacionadas con la subsidiariedad, que vaciaban de legitimidad la causa catalana, sino con la conciencia de un pueblo de su personalidad diferenciada:

Por tanto, si nosotros hoy reclamamos la autonomía no es por razones económicas, porque la autonomía resultará cara para Cataluña; lo sabemos, pero la queremos y la pedimos, y en realidad es el resto de la Cámara la que a veces no sigue una política de desarrollo general, pero la pedimos, simplemente porque queremos seguir siendo catalanes, cuanto más mejor; por eso y no por razones económicas es por lo que nosotros pedimos la autonomía. (...) no por razones ideológicas, no por razones de programa, sino porque somos nacionalistas catalanes y queremos que se nos respete en

---

<sup>478</sup> *El Socialista*, nº116 (8 de julio de 1979).

esto que constituye nuestra identidad y que quede claro que lo que deseamos es sólo eso: el respeto de nuestra identidad<sup>479</sup>.

Esta era la diferencia sustancial con los comunistas o socialistas, también catalanes. Estos rechazaban en general la identificación entre el problema de los desequilibrios y el sistema autonómico –como había hecho Pujol– pero al hacerlo, acababan primando los valores de la igualdad y la solidaridad frente a cualquier otro y dotaban a la autonomía –al menos en el contexto de estos debates– de un significado mucho más relacionado con el principio de la subsidiariedad, convirtiéndola principalmente en la solución a las injusticias socioeconómicas que el sistema centralista había impuesto a una parte de España, sumiéndola en el subdesarrollo. Exclusivamente en este sentido versó la intervención de Martín Toval, que dejó claro que de la aplicación de la Constitución debía derivarse la solución a tales problemas, ya que por un lado, esta impedía cualquier tipo de privilegios económicos o sociales; y sobre todo gracias al principio de la solidaridad, que venía contemplado en la misma y que debía ser la base que sustentara el sistema de financiación autonómico: «principio de solidaridad que, evidentemente, significa que cada uno aporta en función de su capacidad contributiva y recibe en función de sus necesidades». Y concluía con la siguiente reflexión:

Se trata de que se aborde seriamente el problema de los desequilibrios territoriales y depende de ello, en gran medida, la vigencia del Estado de las Autonomías y la estabilidad democrática. (...) esa atención del Estado, del Gobierno y de esta Cámara es condición necesaria de un verdadero, y no puramente superestructural, desarrollo de las Autonomías<sup>480</sup>.

La otra autonomía que podía verse amenazada ante este discurso era la vasca, a la que también se había aludido como ejemplo de desarrollo y progreso. Pero la defensa que de ella hizo el representante de los socialistas vascos, José Antonio Maturana, tuvo un cariz distinto a lo visto hasta el momento. Para empezar, se refería al Estado Autonómico como Estado Regional, y aunque defendía la legitimidad de los pueblos de España para acomodarse en la nueva estructura profundizando sobre sus planteamientos

---

<sup>479</sup> Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 20, p. 914. En un sentido similar se expresaba Fernando Sagaseta Cabrera de Unión del Pueblo Canario, en Diario de Sesiones del Congreso..., pp. 914 y 1916.

<sup>480</sup> *Ibid.*, pp. 923-927

regionales o nacionales, creía que la solución a los desequilibrios no se podía dar «desde una óptica “regionalista”» que en su exposición desprestigiaba. La óptica adecuada según su punto de vista partía de la conciencia de que por encima de los pueblos existía una unidad superior, la española, que además, funcionaba a través de las reglas del mercado:

Hay que empezar por reconocer que sobre la realidad de los pueblos y las regiones y nacionalidades se impone otra realidad no menos nítida o menos trascendente, cual es la de la unidad histórica del Estado y la de la unidad y la interdependencia de los diversos mercados en un marco de economía libre. (...) Desde una base de socialismo científico, reconocer esta realidad palmaria lleva necesariamente a rechazar esas tesis de regionalismo fácil que concluyen que la problemática de cada región española es el resultado de su colonización por el Estado o por aquellas otras regiones más desarrolladas. Tal conclusión, de la que suelen gustar los grupos políticos que se denominan de izquierda regionalista y que suelen ser mucho más esto último que aquello primero es esencialmente falsa. (...) Lo que muchas veces se entiende como colonización de unas regiones por otras o como consecuencia de un centralismo vuelto de espaldas a la realidad regional no es sino la proyección sobre las regiones del desarrollo de un proceso de crecimiento capitalista, con fuertes notas oligárquicas, y en el caso de España, profundamente antidemocrático<sup>481</sup>.

Así, la economía de mercado –defendida por el PSOE como afirmaba– generaba necesariamente desigualdades, que pese a todo sí podrían ser amortiguadas y transitorias para los territorios que las habían padecido históricamente a través de un plan común que tuviera presente estas cuestiones y profundizara la solidaridad de ese Estado Regional. De este modo, no podía ni siquiera acusarse únicamente al centralismo del subdesarrollo de esa otra mitad de España, y por supuesto no podría acusarse a las regiones ricas y a la mayor autonomía que iban a adquirir en ese proceso ya iniciado. Por ello, la respuesta a los desequilibrios se hallaba sobre todo en la profundización de la solidaridad y en la democratización de un Estado que debía luchar contra los efectos más nocivos del capitalismo.

Por otra parte, las acusaciones de «regionalismo fácil» hicieron que el portavoz del PSA se sintiera aludido, contratacando contra el PSOE por su supuesto sucursalismo

---

<sup>481</sup> *Ibid.*, p. 903-905.

y la falta de una política clara en torno a la cuestión autonómica, que ya se ha evidenciado también en estas páginas:

El representante de una organización apéndice de un partido centralista, que está teniendo dificultades en representar los intereses del pueblo vasco, como se ha visto en las elecciones generales, se permite darnos lecciones y explicarnos lo que tenemos que hacer en nuestro pueblo. El representante, que así lo tenemos, de ese mismo partido en Andalucía habla constantemente de nuestro pueblo, de no consentir privilegios en el País Vasco y en Cataluña y de la grave situación andaluza. (...) Para dar muestra expresiva del tratamiento que se ha hecho con frivolidad, el representante del Partido Socialista Obrero Español en el País Vasco nos habla de regionalismo en Euzkadi, y un ilustre representante del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, Presidente de la Junta de Andalucía, nos habla de nacionalismo y de nacionalidad en Andalucía<sup>482</sup>.

La disparidad de estrategias según el territorio empezaba a ser evidente, con demandas de elaborar un plan común lo antes posible, aunque los distintos intereses en cada región lo dificultaban. La armonización no era nada sencilla en un Estado con nacionalidades y regiones tan diferentes. Pero pese a todas las contradicciones en el discurso de los socialistas, algunos elementos comunes se encontraban en el fondo de todos ellos: la unidad de España, la solidaridad y la igualdad por encima de otras cuestiones, como ya estableciera claramente la guía que suponía la Resolución del XXVIII Congreso.

Estas prioridades no eran únicas del PSOE, y se habían situado en primera página de la actualidad política, interviniendo de forma decisiva en uno de los aspectos considerados como cruciales para la consolidación de la democracia, la construcción del Estado de las Autonomías. Por ello, la aprobación de los Estatutos que estaban en marcha, el vasco y el catalán, compartía protagonismo con el desarrollo del caso andaluz, omnipresente por ejemplo en la prensa socialista. Éste se había convertido en un símbolo de la autonomía vinculada al desarrollo económico, a la solidaridad, a la justicia social y al desagravio. De hecho, los debates reseñados eran un reflejo del ambiente que la prensa estaba trasladando, en el que la autonomía para la mayoría de los territorios significaba una mayor democracia y mejor y más efectiva administración

---

<sup>482</sup> *Ibid.*, p. 943.

autonómica, que permitiría a las regiones más desfavorecidas igualarse a las más ricas, y al resto mejorar, en la medida de lo posible, sus condiciones.

## 2. Los Estatutos de dos nacionalidades históricas

Pese a lo dicho, no puede negarse que existía igualmente, aunque con matices, la voluntad de restituir los derechos nacionales que se reconocían sobre todo en Cataluña y Euskadi, y por encima de aquello existía la conciencia de que era urgente solucionar el problema del tema vasco, en primer lugar, y el del catalán después. Por ello, sus Estatutos habían comenzado a ser negociados antes de que la Constitución estuviera aprobada, por lo que el procedimiento quedó interrumpido, dividido en dos fases. La primera tuvo lugar entre agosto y diciembre de 1978 en el caso catalán, que comenzó con cierta ventaja en el tiempo, y entre noviembre y diciembre de 1978 para el caso vasco.

En cuanto al Estatuto de Cataluña, por iniciativa del grupo de senadores de «Entesa dels Catalans», se constituyó en julio una comisión redactora denominada la «Comisión de los Veinte» que inició sus trabajos el 1 de agosto<sup>483</sup>. Es común referirse al consenso que marcó la elaboración del proyecto de Estatuto<sup>484</sup>, pero durante aquel proceso se produjeron también algunas discrepancias, como la enfatizada por el socialista del Comité Ejecutivo Federal, Luis Fajardo. Este señalaba que en relación al título III sobre Finanzas y Economía, el acuerdo no fue tan sencillo, ni siquiera en el seno del socialismo. La mayoría de izquierda, formada por el PSC-PSOE y el PSUC se vio enfrentada (en ocasiones con el apoyo de UCD-UCC), al modelo que quería imponer fundamentalmente Convergència Democràtica de Catalunya, que era, según Luis Fajardo, «claramente insolidario con las regiones menos desarrolladas (...) mientras el de los socialistas catalanes incorporaba técnicas para responder a tal principio de solidaridad, si bien aún de forma insuficiente, y además con ciertas fórmulas de dudosa constitucionalidad». De hecho, en este caso, como en algún otro,

---

<sup>483</sup> Con una composición proporcional a la de los resultados de las elecciones del 15 de junio de 1977, estaba integrada por 4 representantes de Socialistes de Catalunya (Eduardo Martín Toval, Josep Andreu Abelló, Josep M. Triginer y Josep Verde i Aldea); 3 del PSUC (Jordi Solé Tura, Josep Solé Barberà y Maria Dolors Calvet); 3 de UCD-UCC (Carles Güell, Marcel·lí Moreta y Manuel de Sárraga), 3 de CDC (Miquel Roca, Macià Alavedra y Josep Cendra); 1 de UDC (Aton Cañellas); 1 de ERC (Joaquim Arana); 1 de AP (Laureano López Rodó); y 4 de Entesa dels Catalans (Josep Benet, Jaume Sobrequés, Felip Solé y Josep Subirats).

<sup>484</sup> Véase entre otros Borja DE RIQUER: "La configuración del sistema autonómico. El caso de Catalunya", en Javier TUSELL y Álvaro SOTO (eds.): *Historia de la Transición (1975-1986)*, Madrid, Alianza Editorial, 1996, p. 480.

afirma que la Ejecutiva Federal realizó unas indicaciones que «no fueron plenamente atendidas por los dirigentes socialistas catalanes», aventurando que el motivo de aquello pudo haber sido la necesidad de hacer concesiones en pro del consenso<sup>485</sup>. Por otra parte, Carme Molinero y Pere Ysàs han estudiado cómo además de esta cuestión, hubo diferencias de criterios durante esta primera fase de la elaboración del Estatuto, por temas tales como la proporcionalidad en las elecciones<sup>486</sup> o la lengua, en las que comunistas y socialistas se vieron enfrentados a los nacionalistas. En cuanto al idioma, como han investigado estos autores, el PSC y el PSUC propusieron enmendar el articulado añadiendo al enunciado que obligaba a la Generalitat a tomar las medidas necesarias para asegurar el conocimiento de ambas lenguas, la exigencia de crear «las condiciones para llegar a la igualdad plena en el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña», en un intento, como concluyen Molinero e Ysàs, de «alcanzar el mismo objetivo que pretendían CDC y ERC pero evitando violentar a una parte considerable de la población de Cataluña, procedente de una inmigración reciente, a la que rechazaban imponer de inmediato la obligación legal de conocer el catalán». Como relatan, en el debate en el Pleno de Parlamentarios ante la acusación de Trias Fargas a PSC y PSUC de tratar de imponer, junto a UCD y AP, unas restricciones al uso de la lengua catalana, Raimon Obiols se defendió aduciendo que habían sido las organizaciones de los trabajadores las que habían llevado a cabo una importante labor en la recuperación del catalán, pero que no iban a permitir la imposición por la fuerza de esta lengua; «nosotros no traduciremos al catalán aquella frase nefasta de *hable usted en castellano*»<sup>487</sup>.

---

<sup>485</sup> Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo de Estado? Los socialistas y el Estado autonómico*, Navarra, Aranzadi, 2009, p. 73. De todos modos, como explican Carme Molinero y Pere Ysàs, los socialistas fueron defensores de atenerse a los criterios constitucionales para elaborar el Estatuto. Así, mientras que Joan Reventós, recordaba el papel determinante de los catalanes a la hora de redactar el título preliminar y el título VIII de la Constitución, que recogían muchas de sus reivindicaciones autonómicas; Felip Solé Sabarís clamó por la unidad de las fuerzas políticas y por la responsabilidad de no caer «en la tentación de introducir alguna enmienda anticonstitucional, que, por qué no decirlo, muchos de nosotros compartiríamos» pero que obligaría a los partidos españoles a votar en contra del Estatuto, lo que no sería juego político limpio al «presentarlos como enemigos de Cataluña, porque por otra parte sabemos de sobra que son nuestros aliados naturales», en Carme MOLINERO y Pere Ysàs: *La cuestión catalana...*, pp. 288-289.

<sup>486</sup> Fueron acusados de sucursalistas por dar prioridad a la máxima proporcionalidad en lugar de incidir en la representación de las comarcas, en *Ibid.*, pp. 281-282.

<sup>487</sup> Finalmente se alcanzó el consenso con la siguiente redacción «la Generalitat garantizará el uso normal y oficial de ambos idiomas, adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento, y creará las condiciones que permitan llegar a su igualdad plena en lo que se refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña», en *Ibid.*, pp. 286 y 294-295.



Esta primera fase concluía el 20 de diciembre de 1978, cuando la Asamblea de Parlamentarios aprobaba el Estatuto de Sau —con 58 votos a favor y ninguno en contra—, que se depositaría el 29 de diciembre, apenas una hora más tarde que el Estatuto vasco en el Congreso, que consiguió adelantarse al catalán pese a que los trámites se iniciaron con retraso, y lo hizo no sólo gracias a la ventaja que le ofreció el alquilar un aerotaxi para enviar el texto a la Secretaría General del Congreso de los Diputados, sino sobre todo por la premura que los representantes vascos imprimieron a aquella fase. Este era precisamente el objetivo que se habían marcado en Euskadi, ya que el primero en llegar sería el primero en ser discutido y aprobado, por lo que creían que era necesario evitar los techos autonómicos que la negociación previa con los catalanes hubiera podido marcarles<sup>488</sup>. Joan Reventós llegaría a afirmar que aquello fue facilitado además por el Gobierno español, que según sus propias palabras «Van considerar que estratègicament era millor i políticament era millor afrontar i resoldre el problema de l'Estatut d'autonomia del País Basc, per la situació de tensió que hi havia allà», provocando retrasos en el trámite catalán, con la complicidad del Presidente de la Generalitat Josep Tarradellas<sup>489</sup>. A ello contribuyó el clima de violencia que convertía la situación vasca en excepcional, y que condicionó toda la política autonómica, como ya se ha señalado, sin que la elaboración del Estatuto de Gernika fuese una excepción<sup>490</sup>.

La redacción del proyecto de Estatuto se inició a mediados de noviembre de 1978 y el clima fue un poco más tenso que el vivido en Cataluña<sup>491</sup>. El 7 de diciembre se dio a conocer el primer Anteproyecto de Estatuto, que fue contestado tanto por el nacionalismo rupturista como por la izquierda y derecha estatales, llegando al extremo de que el PSE-PSOE no ratificó el texto y abandonó la Ponencia. Las quejas

<sup>488</sup> Virginia TAMAYO: *Génesis del Estatuto...*, p. 104.

<sup>489</sup> Conferencia transcrita en Joan REVENTÓS: “Joan Reventós”, en Rafael ARACIL y Antoni SEGURA (ed.): *Memòria de la Transició a Espanya i a Catalunya*, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona-Centre d'Estudis Històrics Internacionals, 2000, p. 308. Juan Pablo Fusi también ha afirmado que el caso vasco tuvo prioridad en aquel momento, en Juan Pablo FUSI: “El desarrollo autonómico”, en Javier TUSELL y Álvaro SOTO (eds.): *Historia de la Transición (1975-1986)*, Madrid, Alianza Editorial, 1996, p. 457.

<sup>490</sup> La escalada de violencia que se sucedió entre 1978 y 1979 no pudo ser ignorada por los protagonistas políticos del momento, véase José Luis DE LA GRANJA, Justo BERAMENDI y Pere ANGUERA: *La España de los nacionalismos y las autonomías*, Madrid, Síntesis, 2001, p. 225.

<sup>491</sup> La ponencia redactora tuvo también 20 miembros, 18 serían designados por los partidos políticos con representación parlamentaria, y 2 extraparlamentaria: 5 PNV (Xabier Arzalluz, José Angel Cuerda, Emilio Guevara, Kepa Sodupe y Carlos Garaikoetxea); 5 PSE-SOE (José Antonio Maturana, José María Benegas, Enrique Iparraguirre, Luis Alberto Aguiriano y Carlos Solchaga); 3 UCD (Juan Echevarría Gangoiti, Jesús María Viana y Jaime Mayor Oreja); 2 EE (Juan María Bandrés y Mario Onaindia); 1 AP (Pedro Mendizábal); 1 ESEI (Gregorio Monreal); 1 independiente (Juan María Vidarte); y por las fuerzas extraparlamentarias, 1 PCE-EPK (Roberto Lertxundi); y 1 EKA (Carlos Zufia) .

fundamentales de los socialistas provenían del mecanismo adoptado para los acuerdos, que como ha detallado Luis Fajardo, se basaba sencillamente en el sistema de votaciones, lo que permitió que el PNV llevara la voz cantante, según él con el apoyo de los dos extra parlamentarios, y el concurso indirecto, por su actitud ambigua, de UCD y AP. El enfado de los socialistas vascos puede observarse en la siguiente declaración de Benegas a los medios de comunicación: «al primer partido de Euskadi no se le pueden hacer perder veintitrés votaciones seguidas...no puede ser un Estatuto elaborado en contra de prácticamente todas las propuestas de un partido mayoritario»<sup>492</sup>. En cuanto al contenido, las diferencias más importantes que ya se manifestaron en aquel momento y que se mantuvieron durante el resto del proceso, tenían que ver con el diseño institucional y especialmente con el sistema fiscal, tema en el que, como ha trabajado Andrea Micciché, las dificultades se multiplicaban al hacerse muy difícil la compatibilidad entre las directrices establecidas desde la Ejecutiva Federal y las exigencias que el «vasquismo» demandaba del socialismo en Euskadi<sup>493</sup>:

los socialistas habían afrontado hasta ese momento materias espinosas, como la fiscal, oscilando a menudo entre concesiones a las posiciones nacionalistas y principios establecidos a nivel estatal. (...) El PSOE intentaba imponer síntesis de criterios y principios que no siempre eran tan flexibles como para prestarse a este tipo de tentativas. De hecho, precisamente sobre esta temática, las dificultades derivaban de la difícil compatibilidad entre los principios defendidos a nivel estatal y las reivindicaciones tradicionales «vasquistas»<sup>494</sup>.

De hecho, como demuestra el siguiente testimonio de Luis Fajardo, la financiación autonómica hizo surgir discrepancias entre el PSOE a nivel estatal y la federación vasca, que se veían en una encrucijada a la hora de elegir entre acatar las condiciones que el socialismo español quería establecer para el conjunto del Estado, y cumplir con sus compromisos en la nacionalidad que representaban:

Ya desde 1978, (...), el PSOE comenzó a estudiar con un aceptable nivel de concreción técnica y política, la cuestión de la financiación autonómica. En unas Jornadas celebradas en Sevilla los días 6 y 7 de mayo de 1978, se analizaron nueve ponencias a

---

<sup>492</sup> Citado en Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo...*, p. 77.

<sup>493</sup> En este sentido Eider Landaberea considera que durante esta primera fase de la tramitación estatutaria en el PSE-PSOE comenzó a establecerse un «espacio político propio y a diferenciar el proyecto socialista del proyecto nacionalista ante un objetivo que en los primeros momentos de la Transición fue común: la autonomía», en Eider LANDABEREA: *Los “nosotros”...*, pp. 152-153.

<sup>494</sup> Andrea MICCICHÈ: *Euskadi socialista...*, p. 192.

cargo de Francisco Fernández Marugán, Josep M<sup>a</sup> Huget y Jaume Villalta, Carlos Calleja Xifre, Juan Manuel Eguiagaray, Manuel Vallés, Santiago Roldán, Baltasar Aymerich y Andreu García de la Riba, y Luis Fajardo Spinola. Las conclusiones de estas Jornadas no fueron suscritas por el representante de los socialistas vascos, quienes habían firmado antes (el 4 de mayo) un acuerdo de todos los miembros del Consejo General Vasco a favor del «mantenimiento de una diferenciación fiscal en Euskadi»<sup>495</sup>.

Aunque el PSE-PSOE aceptaba la existencia de los conciertos económicos, estaban preocupados por el contenido de los mismos, y querían evitar la insolidaridad que imputaban al nacionalismo y que decían supondrían una discriminación para el resto de territorios<sup>496</sup>. Preocupados por la creación de paraísos fiscales, este debate no se cerró entonces, aunque la situación excepcional de Euskadi hizo que prevaleciera la voluntad de consenso, y como ha estudiado Virginia Tamayo, el 17 de diciembre el PSE-PSOE condicionó su regreso al cumplimiento de cinco condiciones: «1.<sup>a</sup>) Discusión sobre los derechos de los trabajadores. 2.<sup>a</sup>) Discusión del Título de Hacienda. 3.<sup>a</sup>) Procedimiento de adopción de acuerdos por «consenso» y no por «votaciones». 4.<sup>a</sup>) Evitar posibles vulneraciones del texto constitucional y, por último, 5.<sup>a</sup>) Grabación en cinta magnetofónica de las reuniones de la Ponencia –siguiendo el sistema adoptado por los catalanes», que fueron tomadas en consideración por la Ponencia, a excepción de la última, considerada por el resto de partidos como un tema «pueril»<sup>497</sup>.

Finalmente, el segundo anteproyecto fue elaborado también mediante el sistema de votación, y el texto estuvo listo el 22 de diciembre. Aunque no introducía cambios significativos respecto al primer anteproyecto, como ha escrito Javier Corcuera: «La necesidad de apoyar políticamente lo que aparecía como vía necesaria (aunque quizá no suficiente) para la pacificación y «normalización» de un país que continuaba sumido en la violencia, iba, muy pronto, a relegar aquellas diferencias»<sup>498</sup>. Esto se ve corroborado por una reunión del Comité Nacional del PSE del mismo 22, rescatada por Andrea Miccichè, en la que establecían «Agotar en la Asamblea las posibilidades de llegar a un consenso y en el caso de que éste no se produzca se suscribe el Estatuto de Autonomía

---

<sup>495</sup> Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo...*, p. 75.

<sup>496</sup> En este sentido Fajardo aclara que: «Los socialistas nunca fueron especialmente favorables a esta figura; pero a lo que siempre se opusieron es a que viniera acompañada de facultades tributarias autónomas que rompieran la uniformidad fiscal en el conjunto de España, promoviendo la aparición de una tributación más suave en Euskadi que en el resto del país», en *Ibid.*, p. 78.

<sup>497</sup> Virginia TAMAYO: *Génesis del Estatuto...*, p. 111.

<sup>498</sup> Javier CORCUERA: «El momento constituyente y la elaboración del Estatuto de Guernica (1975-1979)», en Luis CASTELLS y Arturo CAJAL (eds.): *La autonomía vasca en la España contemporánea (1808-2008)*, p. 339.

señalando los puntos con los que no estamos de acuerdo y anunciando que defenderemos nuestros criterios en las Cortes»<sup>499</sup>. El día de la votación en la Asamblea de Parlamentarios Vascos, el PSE-PSOE y el PNV se reunieron, para aproximar posturas, como indica Virgina Tamayo: «El PNV y el PSOE alcanzaron un acuerdo, sino en todos los temas tratados, sí, al menos, en los más importantes. (...) El PSOE se comprometió a emitir un voto favorable en la votación global del Anteproyecto. (...) No obstante, quedaron sin consensuar otros puntos clave, como educación, orden público y Conciertos Económicos que estaban aún sin resolver»<sup>500</sup>. En la madrugada del 24 de diciembre, aunque con algunos temas aplazados para los posteriores debates, el proyecto fue aprobado por 28 votos a favor, una abstención y ninguno en contra.

La elaboración de los Estatutos se interrumpió, tras esta primera fase que hemos enunciado brevemente, con la aprobación de la Constitución y la disolución de las Cortes para convocar las elecciones generales de marzo de 1979, tratadas en capítulos anteriores. Tras estas, la representación en las Asambleas de Parlamentarios cambiaría, sobre todo en Euskadi, donde el mal resultado del PSE-PSOE los relegaría a un segundo lugar, con una clara ventaja del PNV. Tras perder la presidencia del Consejo General Vasco, que ahora detentaba el PNV con Carlos Garaikoetxea y con un 9% menos de votos en aquella comunidad, a partir de este momento los socialistas entraron en una fase de mayor confrontación con el Partido Nacionalista Vasco<sup>501</sup>, que pronto se traduciría también en una nueva actitud hacia el vasquismo.

En la segunda fase, la prioridad temporal iba a ser para el Estatuto de Gernika, cuya Asamblea de Parlamentarios se constituyó el 20 de marzo –que y ratificó el texto aprobado a finales de diciembre de 1978–, adelantándose un mes a la catalana. En ambos casos se eligió una delegación para debatir los proyectos de Estatuto con la Comisión Constitucional del Congreso en una Comisión mixta. Pero antes de esto, el 25 de junio se presentaron los motivos de acuerdos y desacuerdos de las fuerzas políticas respecto a los proyectos de Estatutos. El Partido de Gobierno presentó 18 motivos de desacuerdo al Estatuto de Gernika y 59 al de Sau<sup>502</sup>, por su parte, la izquierda estatal no

---

<sup>499</sup> Andrea MICCICHÈ: *Euskadi socialista...*, p. 193.

<sup>500</sup> Virginia TAMAYO: *Génesis del Estatuto...*, p. 113.

<sup>501</sup> Enric COMPANYY y Francesc ARROYO: *Historia del socialismo...*, p. 65.

<sup>502</sup> Aquella impugnación del Estatuto catalán que había alarmado a la clase política catalana, como han mencionado Sobrequés y Riera: «Els nombrosos desacords presentats pel partit del govern –cinquantanou, que afectaven gairebé les tres quarts parts del Projecte d'Estatut català– causaren una forta impressió i un gran pessimisme a Catalunya», véase Jaume SOBREQUÉS y Sebastià RIERA: *L'Estatut*

presentó motivos de desacuerdo, interesada como estaba en alcanzar un acuerdo por encima de otras cuestiones<sup>503</sup>. Pero lo que sí hizo el PSOE fue elaborar dos documentos de «consideraciones» vertebrados por los siguientes principios que decían debían asegurar los Estatutos: «Interpretación generosa e igualitaria de la Constitución, ausencia de privilegios y tratamiento solidarios entre los pueblos»<sup>504</sup>. Jaume Sobrequés y Sebastià Riera han explicado que el PSOE:

no presentà cap esmena concreta, sinó que el limità a formular els principis que defensaria en les negociacions autonòmiques, i que serien els següents: màxim nivell d'autonomia compatible amb la solidaritat entre els pobles d'Espanya; absència de privilegis i, alhora, respecte de les diferències existents entre les diverses comunitats; respecte a la Constitució; i defensa del contingut progressista dels Estatuts d'autonomia<sup>505</sup>.

La decisión de no presentar «motivos de desacuerdo» se tomó en una reunión el día 22 de junio entre la Gestora, los responsables del Grupo Parlamentario Socialista y representantes del PSC-PSOE y del PSE-PSOE. Según recogía *El Socialista*, se llegó a «una decisión final que satisface a vascos y catalanes», partiendo de la idea de que «los estatutos eran una materia que habría que verla, en una primera lectura, políticamente, es decir, no se trataba de hacerle (...) recortes políticos o en base a las conveniencias de cada partido, sino que se trataría de entender como positivos los textos para, a partir de

---

*d'Autonomia de Catalunya. Bases documentals per a l'estudi del procés política d'elaboració de l'Estatut d'Autonomia de 1979*, vol. I, p. 305. En este sentido debe entenderse el llamamiento del PSC-PSOE al pueblo catalán «para alertarlo ante el importante y grave momento que le afecta», ya que si los motivos de desacuerdo «prosperasen llevarían a todo el pueblo de Cataluña a sentirse realmente traicionado en sus profundas aspiraciones autonómicas», haciendo un llamamiento entre otras fuerzas a los Ayuntamientos o a los sindicatos, y en general al conjunto de la ciudadanía en apoyo del Estatuto, en *El Socialista*, 116 (8 de julio de 1979). Esta movilización, que se hizo de forma conjunta con el PSUC y ERC, tenía además otra motivación, la que se relacionaba con la rentabilización de una imagen positiva frente al electorado, que al parecer no dio los resultados esperados, como se indicó en el «Informe Semanal» del Departamento de Análisis de Propaganda entre el 6 y el 13 de julio, en el que se advertía del papel protagonista del PSUC, que estaba sacando una mayor ventaja de aquella movilización, en Departamento de Análisis de Propaganda (PSOE): «Informe Semanal» (del 6 y al 13 de julio de 1979), AFFLC, Fondo José Prat, 000739-003.

<sup>503</sup> Virginia Tamayo ha puesto de relevancia, pese a todo, «los grupos parlamentarios, sin distinción de ideologías, coinciden en la necesidad de enmarcar la autonomía vasca en el marco constitucional y subrayan la necesidad de atender a la solidaridad interregional; solidaridad que cada partido la concibe de forma distinta», en Virginia TAMAYO: *Génesis del Estatuto...*, p. 129.

<sup>504</sup> *El Socialista*, 115 (1 de julio de 1979).

<sup>505</sup> Jaume SOBREQUÉS y Sebastià RIERA: *L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Bases documentals per a l'estudi del procés política d'elaboració de l'Estatut d'Autonomia de 1979*, vol. I, Barcelona, Edicions 62, 1982, pp. 309-310. Para consultar el documento sobre las «consideraciones» del Grupo Socialista y el comentario del Gabinete Técnico del PSC a los «motivos de desacuerdo» de UCD véase, Jaume SOBREQUÉS y Sebastià RIERA: *L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Bases documentals per a l'estudi del procés política d'elaboració de l'Estatut d'Autonomia de 1979*, vol. IV, Barcelona, Edicions 62, 1982, pp.1373-1378. Véase también, Carme MOLINERO y Pere Ysàs: *La cuestión catalana...*, p. 13.

ahí, adecuarlos a la Constitución», y por ello, aunque sin «motivos de desacuerdo», el Partido se reservaba el derecho de intervenir en aquellos aspectos en los que no respetaran la Constitución o sobre los que mantenían discrepancias<sup>506</sup>, basando su estrategia en representar el papel de «partido puente»<sup>507</sup>. De aquella reunión ha hablado también José Antonio González Casanova en sus memorias, quien dice haber asistido a la misma junto a Reventós, Martín Toval, Txiki Benegas, Enrique Múgica, José Antonio Maturana y «la plana mayor del PSOE», en un intento de los representantes catalanes y vascos de «cortocircuitar el propósito declarado de UCD de arrastrar a los demás grupos parlamentarios a presentar desacuerdos al Estatuto». De aquel encuentro surgió un comunicado en el que el PSOE anunciaba que no lo haría, en un claro espaldarazo, como recordaba González Casanova, a los Estatutos catalán y vasco, pese a que la parte final del comunicado referido a Cataluña le parecía que transmitía un mensaje «inocuo que no se comprometía ni en pro ni en contra», a lo que se añadía la sensación, que había percibido durante el debate de aquel día, de que entre la dirección socialista existía «un instintivo recelo a lo que pretendíamos los catalanes, mientras que el problema vasco tan solo era una cuestión de orden público y de violencia terrorista»<sup>508</sup>. Lo cierto es que la especificidad de la situación vasca eliminaba reticencias a la hora de negociar<sup>509</sup>, algo que se mantendría durante el resto del proceso y que apenas era disimulado por muchos de los más destacados dirigentes, como sucedía con el presidente del Grupo Socialista en el Congreso, quien había afirmado en el contexto de los «motivos de desacuerdo» que el Estatuto vasco tenía un doble valor: «valor intrínseco o esencial en sí mismo y valor instrumental, por ser la única vía de pacificación para el País Vasco»<sup>510</sup>.

---

<sup>506</sup> *El Socialista*, 115...

<sup>507</sup> Así informaba Carlos Solchaga en una reunión del Comité Ejecutivo del PSE-PSOE sobre las conversaciones mantenidas en Madrid en el seno del Partido, «con objeto de establecer los criterios a seguir en la negociación del Estatuto de Autonomía, tanto vasco, como catalán», en Comité Ejecutivo del PSE-PSOE: «Acta de la reunión celebrada en Bilbao el día 3 de julio de 1979 por el Comité Ejecutivo del Partido Socialista de Euskadi (PSOE)», ABFPI, Fondo José Antonio Maturana Plaza, CJAMP-1005-9.

<sup>508</sup> José Antonio GONZÁLEZ CASANOVA: *Memoria de un socialista indignado*, Barcelona, RBA, 2015, p. 299.

<sup>509</sup> No puede obviarse, por ejemplo, la preferencia con la que se había tramitado el Estatuto de Gernika frente al de Sau, o los 18 motivos de desacuerdo al Estatuto de Euskadi frente a los 59 del catalán.

<sup>510</sup> En aquel momento en el socialismo vasco se debatían entre una postura más reacia y combativa frente al nacionalismo y otra que creía que alcanzar el Estatuto era la meta necesaria para poder desarrollar una política menos centrada en lo nacional, algo que veremos más adelante y que en cualquier caso consiguieron compatibilizar desde las negociaciones del Estatuto. Abundan los testimonios en este sentido, y otro ejemplo de ellos se encuentra en un artículo de opinión firmado por Felipe Iquíniz que es un claro exponente de aquella voluntad de conseguir el éxito del proceso estatutario por encima de cualquier otra consideración de tipo identitario por lo que suponía para la pacificación del país –lo que

A continuación comenzó el debate sobre el proyecto de Estatuto vasco en la Comisión mixta, pero la verdadera negociación se dio de forma paralela entre el Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez y el de Generalidad del País Vasco, Carlos Garaikoetxea. Enric Company, ha puesto de relieve que Suárez aprovechó enfrentamiento entre socialistas y nacionalistas vascos que se había incrementado tras las elecciones de 1979, para negociar directamente con el PNV<sup>511</sup>; otros autores como Virginia Tamayo ponen sin embargo el énfasis en el hecho de que Suárez comprendió que debía abandonar las políticas de enfrentamiento, como la que había desencadenado los «motivos de desacuerdo», desoyendo a importantes sectores de su partido, e iniciar una negociación con un interlocutor lo suficientemente representativo para que el nacionalismo moderado fuera capaz de apoyar el Estatuto y sentirlo suyo, permitiendo que la autonomía culminar con éxito en Euskadi y que el Estatuto fuera plebiscitado con un resultado positivo<sup>512</sup>.

De esta manera, apenas un día después de comenzar los debates en sede parlamentaria, empezaron las negociaciones paralelas<sup>513</sup>, poniendo en entredicho la soberanía parlamentaria y generando disconformidad entre el resto de grupos parlamentarios, especialmente en el PSE-PSOE, que se quejó abiertamente en un comunicado conjunto con EE ante este procedimiento que vulneraba el proceso constitucionalmente previsto y que ahondaba más en la animadversión recíproca que

---

evidentemente lo convertía en un caso especial no comparable al catalán—, mientras que se defendía igualmente la imposición de algunos límites al nacionalismo. En un artículo titulado «La última esperanza para Euskadi», se mantenía que «El Estatuto de Guernica debe ser la última nave que pueda hundirse» y que «Por encima de cualquier consideración sobre el futuro régimen de autogobierno y el reconocimiento de la nacionalidad vasca, con toda la carga étnica, cultural, emocional y de esencia diferenciadora que el documento en cuestión pueda suponer, el Estatuto de Guernica representa, además, la última nave a hundir, la última esperanza para la definitiva pacificación de Euskadi, para la desaparición del terrorismo y, en definitiva, para la consolidación de la democracia». Aunque ello no era óbice para aceptar que en aras de la independencia «hundamos a Euskadi social, económica y culturalmente, dividiéndolo en dos comunidades enfrentadas en base a concepciones racistas o de cualquier otra índole. Ha llegado el momento de poner freno a la ceguera política y a la demagogia coercitiva. El Estatuto es el límite y la frontera de lo racional», en *El Socialista*, 115...

<sup>511</sup> Enric COMPANY y Francesc ARROYO: *Historia del socialismo...*, p. 65.

<sup>512</sup> En cualquier caso parece que Suárez había confesado en privado a los representantes vascos que los motivos de desacuerdo fueron planteados como instrumento de presión de cara a la negociación, en Virginia TAMAYO: *Génesis del Estatuto...*, pp. 129-131.

<sup>513</sup> Sobre las reuniones bilaterales, Tamayo ha señalado que los representantes del PNV solicitaron la presencia del resto de las fuerzas política vascas, especialmente, del PSOE y EE, pero que la negativa de UCD a permitir el debate con EE dio al traste con estas intenciones, en *Ibid.* p. 132. En cambio, el propio Garaikoetxea insinúa en sus memorias que la negociación bilateral fue idea suya, en Carlos GARAIKOETXEA: *Euskadi: la transición inacabada*, Barcelona, Planeta, 2002, p. 93. Por su parte, Arzalluz, temeroso de que un posible fracaso de las negociaciones pusiera en una situación difícil al PNV, ha reconocido que fue él quien demandó a Pérez Llorca que se sumaran a las negociaciones estos dos partidos, lo que fue respondido con un «Los socialistas no tendrán más remedio que aceptar lo que hagamos aquí», en Xabier ARZALLUZ: *Así fue*, Madrid, Foca, 2005, p. 182.

había crecido entre el PNV y los socialistas vascos sobre todo a partir de las elecciones de marzo. Como ya se ha anunciado, pese a los análisis postelectorales vistos en capítulos anteriores, durante la segunda fase de la negociación estatutaria comenzó a ganar peso la corriente que abogaba por distanciarse del nacionalismo, aunque todavía tardaría en imponerse. Esta se vería animada por la Comisión Gestora Federal, que como informaba Txiki Benegas en una reunión del Comité Nacional, consideraba que «debemos pasar a una postura más dura con el nacionalismo e incluso contra el Estatuto»<sup>514</sup>. Esto avanzaba las posiciones que se iban a ir desarrollando en los siguientes meses, que madurarían la idea, ya existente, de que se había cometido un error al abandonar la lucha ideológica contra el PNV no acentuando una política de clase, que a pesar de todo, reconocían era difícil de ejercer en un momento en el que la «gravedad en el problema nacional» confundía a las clases sociales y «sobrepasa sus problemas»<sup>515</sup>. Pero al mismo tiempo, en un contexto en el que se había generalizado la idea de que la consecución de la paz estaba vinculada a la solución autonómica, las críticas del PSE no eran bien acogidas, ni entendidas, lo que también inquietaba al PSOE, cuyo Departamento de Análisis de Propaganda emitió un informe en el que se preocupaba por la imagen negativa ante la crítica del partido sobre la marcha de aquellas negociaciones paralelas, aunque no llegaban a valorar como peyorativa su actuación: «La queja del Partido por no participar en las negociaciones no resulta del todo clara y ha tenido una respuesta dura por parte de toda la prensa que se ha hecho eco del comunicado de UCD en el que se nos acusa de inconsecuentes y oportunistas»<sup>516</sup>. Posiblemente, aquel contexto que favorecía un debate a dos para alcanzar la ansiada paz social<sup>517</sup>, y de acuerdo a la estrategia que el PSE-PSOE estaba adoptando, que buscaba

---

<sup>514</sup> En cualquier caso, dentro del PSE-PSOE no eran ajenos a una sensibilidad identitaria española que defendía por encima de las consideraciones autonómicas la unidad del Estado y por ende, de la nación española. Así lo demuestra una entrevista de Ramón Rubial a *El Correo español*, en la que afirmaba que se sentía tan vasco como español, igual que su partido, ya que eran «la federación de Euskadi, de un Partido Estatal, por tanto aceptamos y defendemos la unidad del Estado», igual que defendían la autonomía, entre otras cosas porque «creemos que la forma de garantizar la unidad es España, pasa por una descentralización lógica, que permita a cada pueblo las cuotas de autogobierno que le sean precisas», en Ramón RUBIAL: “Correo español. Contestación de Ramón Rubial”, AFFLC, Fondo UGT. Comisión Ejecutiva Confederal, 003099-001.

<sup>515</sup> A pesar de esto, eran conscientes de que su imagen poco «vasquista» también había sido origen del problema. Desde la Ejecutiva vasca reconocían que cierta dependencia de la estructura estatal les había perjudicado, algo que estaban solucionado, por ejemplo, a través de la creación del Grupo Parlamentario Vasco, en Comité Nacional del PSE-PSOE: “Acta del C.N (San Sebastián 23-24 de junio de 1979)”, ABFPI, Fondo José Antonio Maturana Plaza, CJAMP-1005-4, p. 5.

<sup>516</sup> Departamento de Análisis de Propaganda (PSOE): “Informe Semanal” (del 6 y al 13...

<sup>517</sup> Javier Corcuera ha indicado que es en aquel marco es como debe entenderse «la sustitución del debate por la negociación a dos (no faltando apelaciones a la unidad contra ETA para dejar sin suficiente discusión algunos temas)», en Javier CORCUERA: “El momento constituyente...”, p. 341.



deshacerse de su componente más vasquista, les hicieron considerar que era el momento de mantenerse definitivamente en un segundo plano, dejando que la cuestión autonómica se resolviera primero, favoreciendo tal objetivo, si era necesario con una cierta inacción, interpretando aquel papel de «partido puente»<sup>518</sup>.

Esta idea ya había sido abordada a finales de abril por el Comité Ejecutivo Federal del PSE, reconociendo que los socialistas habían perdido el protagonismo<sup>519</sup>, con lo que la «estabilidad del País Vasco no pasa por el Partido Socialista como eje» y aventurando un pacto entre UCD y PNV, intentando además favorecer un enfrentamiento entre el PNV y la izquierda abertzale, comenzando entonces a imponer una política que iría siendo perfilada más adelante, según la cual los socialistas dejarían las cuestiones nacionalistas a otros, incidiendo ellos en el discurso de clase, buscando evidenciar las diferencias que les separaban de estos grupos en torno a estos asuntos<sup>520</sup>.

Con aquellos precedentes, y cada vez más convencidos de que lo mejor para solucionar el problema vasco, y para beneficiar sus intereses partidistas, era ceder la iniciativa al nacionalismo moderado, en aquella reunión del Comité Nacional de finales de junio, Txiki Benegas informó de que el Comité Ejecutivo había concluido que la solución de la cuestión nacional era prioritaria, y que mientras esto no sucediese los socialistas no podrían ejercer una alternativa de clase eficaz:

- mientras no se resuelva el problema nacional, éste superará a los problemas de clase, lo que dificulta la política socialista.
- en el problema nacional siempre quedaremos desbordados por los nacionalistas.

---

<sup>518</sup> Así se representaban en el “Informe sobre el desarrollo de los trabajos de la ponencia negociadora presentado del Estatuto de Autonomía” emitido por la Comisión Gestora para el Congreso Extraordinario, en el que se indicaba que el Grupo Socialista del Congreso, ante lo que parecían «posiciones irreductibles» del PNV y UCD, «entendió que su misión en esos momentos era la de intentar que las partes negociaran», en PSOE: “Anexo 2: Informe sobre el desarrollo de los trabajos de la ponencia negociadora presentado del Estatuto de Autonomía”, en “Informe Comisión Gestora” (Madrid, 28 de septiembre de 1979), ABFPI, Fc 257.

<sup>519</sup> En este sentido Virginia Tamayo ponía de relieve que el cambio de actitud se debía a los negativos resultados electorales: «una vez comprobada la dimensión de la derrota del PSOE, se despejó la incógnita de su posible *alternativa de poder*. A partir de esta fecha, los socialistas tienden a fortalecer la posición negociadora del PNV respecto del Estatuto», en Virginia TAMAYO: *Génesis del Estatuto...*, p. 122.

<sup>520</sup> PSE (PSOE): “Acta de la reunión celebrada en San Sebastián los días 29 y 30 de abril...”, p. 4. Esto puede observarse un tiempo después en actitudes como la mantenida acerca de un debate entre PNV y HB, en el que el C.E del PSE decidió no participar por tratarse de «una discusión entre nacionalistas (...). No obstante, se acuerda comunicar a la opinión pública que el PSE está interesado en debatir con HB en profundidad, los planteamientos de izquierda y las alternativas de izquierda para la clase trabajadora de Euskadi», en Comité Ejecutivo del PSE-PSOE: “Acta de la reunión celebrada en Bilbao los días 6 y 7 de septiembre de 1979 por el Comité Ejecutivo del Partido Socialista de Euskadi (PSOE)”, ABFPI, Fondo José Antonio Maturana Plaza, CJAMP-1005-9.

- Si el problema nacional no se soluciona, corremos el riesgo de perder aún más votos<sup>521</sup>.

En el debate sobre el Estatuto en aquella reunión se evidenciaba de nuevo la dificultad que implicaba compatibilizar «nuestro apoyo general al Estatuto con la política del PSOE a nivel de todo el Estado», que debía impedir específicamente que los conciertos económicos acabaran suponiendo un privilegio, ya que «para nosotros, el techo es la Constitución y la solidaridad con el resto del Estado, sin privilegios»<sup>522</sup>. Al parecer, como se trasladaba en diversas ocasiones durante este encuentro, la Gestora imponía una política de mayor rechazo al nacionalismo para que se cumplieran las exigencias mínimas socialistas sobre la igualdad y la solidaridad territorial, pero hacerlo sin asumir el protagonismo y apoyando el Estatuto no era tarea sencilla<sup>523</sup>. Mientras, ponentes de la Comisión Constitucional como Alfonso Guerra (por el PSOE), o Eduardo Martín Toval (por el PSC-PSOE), hacían declaraciones en contra de los posibles privilegios que pudieran provenir de los conciertos económicos:

El tema de la economía –continúa Guerra– es el más difícil, porque establecer un sistema económico, financiero y fiscal para una comunidad autónoma puede estar implicando intereses de otras comunidades, dicho más claramente, se pueden crear privilegios que perjudiquen a las comunidades menos desarrolladas o con menos capacidad económica<sup>524</sup>.

Luis Fajardo ha contado que los socialistas ya habían hecho concesiones para aprobar los conciertos en el proyecto de Estatuto que salió de la Asamblea de Parlamentarios Vascos en diciembre de 1978, ya que conscientes de que aquellos eran irremediables acabaron aceptando unas posiciones que distaban de su voluntad de uniformidad fiscal, con vistas a una negociación que mejorara desde su punto de vista la regulación de los mismos. Sin embargo, el acuerdo que UCD y PNV ponían sobre la mesa de la Comisión mixta provocó que retornaran las discrepancias respecto al Título

---

<sup>521</sup> Comité Nacional del PSE-PSOE: “Acta del C.N (San Sebastián 23-24 de junio..., p. 6.

<sup>522</sup> *Ibid.*, p. 7.

<sup>523</sup> Los aspectos en los que el PSOE estaba dispuesto a hacer más modificaciones eran la enseñanza, el orden público, y la hacienda, como informó Carlos Solchaga al Comité Nacional el 3 de julio, en Comité Ejecutivo del PSE-PSOE: “Acta de la reunión celebrada en Bilbao el día 3 de julio...Sobre esta cuestión Andrea Micciché ha señalado: «El problema era encontrar fórmulas sobre las temáticas fiscales, la educación y el orden público que fueran compatibles con las distintas facciones territoriales e ideológicas que componían el PSOE. Por otra parte todos eran conscientes de la necesidad de salir del Congreso con un Estatuto que fuera aceptado por el nacionalismo, sobre todo después de las sacudidas producidas por las elecciones pasadas», en Andrea MICCICHÈ: *Euskadi socialista...*, p. 237.

<sup>524</sup> *El Socialista*, 117 (15 de julio de 1979).

III, con protestas tanto de Alfonso Guerra como de Jordi Solé Tura, quienes demandaron la vuelta a la redacción original, visto que la nueva hacía desaparecer la contribución de Euskadi al Fondo de Compensación Territorial mientras mantenía la eventualidad de transferencias desde el mismo a esta región<sup>525</sup>. Los socialistas, como expresó Benegas, mantuvieron un voto particular, porque como «socialistas, nos parece grave e inaceptable», pero también porque era necesario en el marco de la competencia con el PSA como se puede intuir de sus palabras: «para evitar los recelos y suspicacias que esto puede generar en otras nacionalidades y regiones (y en este aspecto no puede olvidarse que una de las razones de la retirada del representante del PSA, (...) ha sido este tema)»<sup>526</sup>.

En cualquier caso, los socialistas se decantaron en Euskadi por primar el acuerdo, haciendo gala de su voluntad de consenso, presente durante todo el proceso, ya que al tiempo que hablaban de los límites que debían imponerse al Estatuto, proclamaban que las consideraciones jurídicas tenían un valor importante pero restringido, y que debían flexibilizarse ante las razones políticas<sup>527</sup>. Este fue el espíritu que acabó prevaleciendo, y aquella contradicción o dificultad a la hora de compatibilizar el apoyo al Estatuto con las directrices socialistas a nivel estatal sobre la que había reflexionado el propio Benegas, encontraba solución primando en el caso vasco la pacificación del país, que creían llegaría con un Estatuto que el nacionalismo moderado pudiera sentir como suyo. Por ello, como explicaba el Secretario General del PSE-PSOE, aunque creyeran que el procedimiento no había sido el adecuado, comprendían «las razones políticas que han hecho aconsejable una negociación por separado de UCD con el PNV, y en este sentido, deseosos de que el Estatuto se apruebe cuanto antes, hemos aceptado este procedimiento de negociación», afirmando además que «a los socialistas no nos ha preocupado en exceso el especial protagonismo del PNV en esta negociación, incluso creemos que es conveniente, (...), porque así el PNV sentirá el Estatuto como más suyo y lo defenderá de todos los ataques que indudablemente va a sufrir»<sup>528</sup>.

---

<sup>525</sup> Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo...*, pp. 78-79.

<sup>526</sup> *El Socialista*, 118 (22 de julio de 1979).

<sup>527</sup> Declaraciones de Alfonso Guerra en *El Socialista*, 117...

<sup>528</sup> *El Socialista*, 118...

Tiempo después, Benegas calificaba aquel comportamiento socialista de generoso, y recordaba cómo acabó aceptando un procedimiento que le parecía personalmente intolerable:

inicialmente, no acepté este planteamiento y en la Comisión Constitucional los socialistas votábamos a favor del texto primitivo del Estatuto de Guernica, y no de la fórmula que habían pactado Suárez y Garaicoetxea. Entonces Suárez me convoca a la Moncloa, pero antes tengo una conversación con Felipe González que me hace reflexionar sobre el tema y me plantea la necesidad de ceder el protagonismo en la negociación autonómica al Partido Nacionalista Vasco, de aceptar que sea una negociación protagonizada por Suárez y Garaicoetxea. De esa forma se podía conseguir que el PNV sintiera como suyo el Estatuto de Autonomía y eso fuera el principio de su incorporación, después de haber rechazado la Constitución, al ordenamiento jurídico de la España democrática. Después de esta reflexión que me hace Felipe González, tengo la entrevista con Suárez y le digo lo que pensaba del procedimiento inicial, pero que vamos a tratar de ser absolutamente generosos, que no vamos a entorpecer, que no estamos jugando mucho y que, en definitiva, nosotros mantendremos una actitud de quedarnos en segundo plano dejando el protagonismo al Partido Nacionalista Vasco para que se produjera ese acuerdo que nos parecía tan importante. Recuerdo que entonces decíamos que el Estatuto era el último vagón del último tren, la última esperanza para resolver el problema vasco<sup>529</sup>.

Javier Corcuera ha subrayado que el resultado de las apelaciones continuas a la vinculación entre Estatuto y paz en Euskadi, provocaron que algunas cuestiones no fueran debatidas a fondo y que se aprobara un texto que según él:

puede considerarse de consenso, pero sólo porque los partidos no nacionalistas admitieron las grandes líneas marcadas por el PNV también en las cuestiones que dividían más a los partidos: el Concierto Económico y la configuración de la foralidad a nivel provincial (...). La capacidad de presión que otorgaba al PNV su especial posición en el sistema político vasco le permitió imponer en lo fundamental sus puntos de vista en la Asamblea de Parlamentarios Vascos, y el reconocimiento de la trascendencia que podía tener su papel en el final de ETA

---

<sup>529</sup> Txiki Benegas: *Euskadi: sin la paz...*, pp. 116-117.

le permitió igualmente incidir significativamente en la negociación del texto en el Congreso<sup>530</sup>.

Con aquel Estatuto, que la ponencia de aquella Comisión mixta aprobó el 21 de julio, los socialistas vascos empezarían una nueva etapa. Consideraron que el Estatuto había supuesto una meta en cuanto a la reivindicación de los derechos nacionales, y creyeron que a partir de entonces, la política de clase tendría una mayor cabida en la sociedad vasca y por tanto, la obligación del Partido sería reforzar, sin perder el «vasquismo», su orientación como partido de clase. Como ha concluido Eider Landaberea:

Con el Estatuto de Gernika, los socialistas vascos sintieron la responsabilidad de trazar el puente necesario entre las distintas tradiciones y sectores del país para crear una Euskadi unida y no dividida en dos comunidades distintas o contrapuestas; división que según el PSE-PSOE acrecentaba EAJ-PNV. (...) El «somos pueblo vasco» del PSE-PSOE había encontrado un acomodo perfecto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Gernika. Había llegado la hora de atender al otro lado de la balanza<sup>531</sup>.

Por otra parte, aquel Estatuto consiguió situarse ideológicamente por encima de los derechos autonómicos gracias a la apelación a los derechos históricos de su disposición adicional<sup>532</sup>, y de la disposición adicional primera de la Constitución<sup>533</sup>, que como han mantenido Pere Anguera, Justo Beramendi y José Luis de la Granja: «sirvió para dotarle de competencias más amplias que las del catalán de Sau», permitiendo que el Estatuto de Gernika no fuera «una *carta otorgada* sino el fruto de un doble *pacto político*: de Euskadi con el Estado español y entre los propios vascos»<sup>534</sup>.

---

<sup>530</sup> Javier CORCUERA: «Los derechos históricos ¿Un instrumento para la desarticulación de la nación española?», en Fernando MOLINA y José Antonio PÉREZ (eds.): *El peso de la identidad. Mitos y ritos de la historia vasca*, Madrid, Marcial Pons, 2015, p. 164.

<sup>531</sup> Eider LANDABEREA: Los «nosotros»..., p. 158.

<sup>532</sup> Javier CORCUERA: «Los derechos históricos...», pp. 164-165. Disposición Adicional del Estatuto: «La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico».

<sup>533</sup> Disposición Adicional Primera de la Constitución: «La Constitución ampara y respeta los derechos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía».

<sup>534</sup> José Luis DE LA GRANJA, Justo BERAMENDI y Pere ANGUERA: *La España de los nacionalismos...*, p. 226. Virginia Tamayo a este respecto también señalaba que aquella disposición adicional primera de la Constitución se convirtió en «el instrumento jurídico que facilita la aprobación de capítulos excepcionales del Estatuto: policía autónoma, enseñanza y Conciertos Económicos» y hacía que la autonomía vasca enlazara «de alguna manera con la foralidad tradicional y reciba de ella la legitimidad histórica», lo que según esta autora iniciaba el «camino de la reconciliación con el poder central y una

En cuanto a la negociación entre la Comisión Constitucional del Congreso y la delegación de parlamentarios catalanes en aquella ponencia conjunta, comenzó en cuanto terminó el debate vasco. En este caso se intentó evitar, por parte de los delegados catalanes, que se aplicara la misma fórmula que había servido para negociar el Estatuto vasco, aunque el panorama político, el contexto que lo rodeaba y los protagonistas que podían haber ejercido aquellos papeles eran muy distintos en Cataluña. Aun así, Suárez siguió empeñado en mantener un diálogo paralelo<sup>535</sup>, que en este caso no se produjo en exclusiva con uno de los partidos sino, con un bloque formado por los comunistas, los socialistas y los nacionalistas del CDC<sup>536</sup>.

La negociación con UCD no fue tan dura como hacían prever los «motivos de desacuerdo», aunque la clase política catalana se había tranquilizado al ver cómo en la negociación con Euskadi, la posición inicial se trataba más bien en una táctica negociadora<sup>537</sup>. A pesar de esto, en Cataluña se ofreció una mayor perspectiva de las reticencias de los partidos estatales a conformar un sistema asimétrico en España. Parecía como si tras el caso excepcional de Euskadi, comenzaran a querer reconducir la situación, aunque conscientes de que a Cataluña tampoco podía negársele una condición diferenciada como nacionalidad histórica por derecho. Al parecer, en las entrevistas con Suárez, Antoni Gutiérrez, representante del PSUC, y Heribert Barrera, de ERC, coincidieron en opinar que Suárez actuaba como si el Estatuto catalán fuera a ser el modelo para el resto de España<sup>538</sup>. Esto contribuiría a explicar por qué, como ha manifestado Joan B. Culla, se constataron sensibles diferencias respecto a Euskadi en aquella fase del proceso: «Fuese con la coartada foral o bajo la innombrable presión del terrorismo, lo cierto es que Euskadi obtuvo importantísimas ventajas financieras, competenciales y simbólicas» que no consiguió Cataluña<sup>539</sup>. Un agravio comparativo

---

posibilidad de solución de un contencioso histórico», en Virginia TAMAYO: *Génesis del Estatuto...*, p. 135 y 139.

<sup>535</sup> Emilio Attard ha defendido aquel tipo de negociación por la ineficacia de la Comisión mixta en muchas de sus jornadas pero también porque según menciona era necesario ya que «quizá nos faltaba, por defecto reglamentario, un interlocutor válido con quien debatir, nada más y nada menos que la viabilidad orgánica y constitucional de la asunción de competencias cuya titularidad correspondía al Estado, ausente como tal en el trámite estatutario», en Emilio ATTARD: *Vida y muerte...*, pp. 71-72.

<sup>536</sup> Véase Carme MOLINERO y Pere Ysàs: *La cuestión catalana...*, pp. 316-317; Jaume SOBREQUÉS y Sebastià RIERA: *L'Estatut d'Autonomia...*, vol. I, pp. 318-322; y Joan REVENTÓS: "Joan Reventós...", p. 309.

<sup>537</sup> Las críticas del PSC ante estas artimañas, que tachaban de grotescas y de oportunistas, se dejaron oír por ejemplo en *El Socialista*, 122 (19 de agosto de 1979).

<sup>538</sup> Jaume SOBREQUÉS y Sebastià RIERA: *L'Estatut d'Autonomia...*, vol. I, p. 326.

<sup>539</sup> Joan B. CULLA: "Una piedra en el zapato. El nacionalismo catalán en el escenario político español (1976-1998)", en Xavier BRU y Javier TUSELL: *España-Catalunya: un diálogo con futuro*, Barcelona,

que fue denunciado en Cataluña, como recordaba Felipe González a los socialistas gallegos, en lo que parecía un intento de consolarlos o de hacerles comprender que debían conformarse con aquella discriminación que se les quería imponer respecto al Estatuto catalán, igual que habían tenido que hacer los catalanes en relación al Estatuto vasco<sup>540</sup>. Una cuestión que se veía reflejada de forma acusada a través de la cuestión fiscal, como ha indicado Jordi Solé Tura:

Por otro lado, no es fácil justificar la excepción hecha con el País Vasco y Navarra, excepción que significa un auténtico privilegio. Cuando se discutió el Estatuto de Autonomía de Cataluña, algún sector nacionalista insinuó la necesidad de establecer también un concierto como el vasco, pero la decidida actitud de las fuerzas de la izquierda y, en general, de las fuerzas mayoritarias, rompió una tendencia que de generalizarse habría dividido España en una serie de compartimentos fiscales casi estancos<sup>541</sup>.

Con estos condicionantes podría aventurarse que la negociación del Estatuto en Cataluña fue más sensible a las dinámicas vistas en los debates sobre los desequilibrios regionales en el Congreso y el Senado. Aquellas que por un lado proclamaban como principios irrenunciables la igualdad y la solidaridad y veían en el sistema autonómico un método para favorecer la redistribución. Como aquellas que en cierta manera demonizaban el nacionalismo, generando en el socialismo la necesidad de justificar sus posiciones proclives al mismo, por ejemplo en Cataluña, como si el socialismo debiera eliminar la pátina de la insolidaridad que se veía asociada al nacionalismo. Para ello debían establecer los límites sobre el mismo, convirtiéndolo de esta manera en merecedor de tal apoyo. Una muestra de ello se encuentra en la columna de opinión escrita por el diputado del PSC Felip Lorda y titulada precisamente «Límites y perspectivas del nacionalismo» en *El Socialista*. Para empezar, rompía una lanza en favor de los nacionalistas y el nacionalismo, al argumentar que uno podía considerarse nacionalista, pero siempre que no fuera a la vez independentista, lo que veía como un contrasentido histórico en el siglo XX. La clave para que el nacionalismo fuera viable era que fuera «atemperado», aquellos «nacionalismos que reconocen y respetan las

---

Planeta, 1998, pp. 103-104. Véase también Federico VÁZQUEZ: "L'Estatut de Sau", en Josep Maria SOLÉ (et. al.): *La transició a Catalunya (1975-1984)*, vol. 1, Barcelona, Edicions 62, 2008, pp. 246-247.

<sup>540</sup> Sobre esta cuestión volveremos cuando tratemos el tema del Estatuto gallego, con el que quería frenarse un proceso autonómico que los partidos estatales temían que desbordara la capacidad de control del Estado, véase Secretaría de Política Autonómica-PSOE: "Reunión con la Ejecutiva gallega", (13 de diciembre de 1979), ABFPI, 075-E 2, pp. 4-5.

<sup>541</sup> Jordi SOLÉ TURA: *Nacionalidades y nacionalismos...*, p. 120.

peculiaridades de otras nacionalidades y están dispuestos a convivir con ellas»: «Ni avasallados ni avasallantes, sino simbióticos, solidarios. Punto de confluencia este, por lo demás, nivel de conciliación entre nacionalismo y socialismo, entre el reconocimiento institucionalizado de los hechos nacionales y el internacionalismo solidario de los trabajadores». Porque el otro, el nacionalismo intransigente, ya fuera estatal o subestatal, era rechazado por completo:

Más la hipertrofia imperialista, el «exclusivismo» o su correlato, la discriminación; el «afán de grandeza» o chovinismo, megalomanía; la «independencia *en todos los órdenes*» o encasillamiento e insolidaridad, en suma, el nacionalismo como sentimiento y concepto, no de energía, de vitalidad, de originalidad, sino de fuerza, de poder, de dominio, no es ya, en el mundo de hoy y menos en el que se avecina, muestra de una actitud sana, sino síndrome, más bien, de una afección morbosa que no puede terminar más que en un fatal desenlace<sup>542</sup>.

Es en este contexto en el que se enmarcó la discusión sobre el Título III, dedicado a Finanzas y Economía, que acabaría siendo modificado sustancialmente respecto al proyecto inicial. En el debate, el líder del PSA, Rojas-Marcos, se erigió, como han puesto de manifiesto Carme Molinero y Pere Ysàs, «en defensor, por una parte de los andaluces que residían en Cataluña y, por otra, de una región «pobre y subdesarrollada» como Andalucía, frente a lo que consideraba suponía el establecimiento de privilegios para una comunidad rica y desarrollada como Cataluña<sup>543</sup>. Aquella diatriba fue contestada por la izquierda catalana, pero la intervención de Alfonso Guerra, en relación al voto particular de Rojas-Marcos y al de Heribert Barrera en sentido contrario, estuvo plagada de referencias a la insolidaridad del proyecto aprobado en diciembre de 1979 y a lo «regresivo» de su planteamiento<sup>544</sup>, utilizando para demostrarlo comparaciones entre Andalucía y Cataluña<sup>545</sup>. Posiblemente

---

<sup>542</sup> *El Socialista*, 111 (3 de junio de 1979).

<sup>543</sup> Carme MOLINERO y Pere Ysàs: *La cuestión catalana...*, p. 321.

<sup>544</sup> Como recordaba Luis Fajardo, los preceptos del anteproyecto finalmente consensuados –de los que el PSOE nunca estuvo plenamente convencido– volverían a suscitar entonces importantes reparos de la representación socialista, en Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo...*, p. 73.

<sup>545</sup> Jaume SOBREQUÉS y Sebastià RIERA: *L'Estatut d'Autonomia...*, vol. IV, pp. 1450-1454. Una comparación que Sobrequés y Riera no veían casual, explicando la manifestación de Guerra en los siguientes términos: «L'actitud del PSA explica l'actuació, en alguns moments contradictòria dels diputats del PSOE i, sobretot del seu portaveu, Alfonso Guerra. Aquest (...), per neutralitzar la possible incidència dels discursos i vots del PSA a Andalusia (...) adoptà una actitud ambigua: donar a entendre que es distanciava en alguns punts –precissament els mateixos que atacava el PSA– de l'Estatut català, la qual cosa implicava una crítica als socialistes catalans, però finalment elogiar-lo i votar-lo favorablement», en Jaume SOBREQUÉS y Sebastià RIERA: *L'Estatut d'Autonomia...*, vol. I, p. 337. De



por ello fue contestado por el representante de la Minoría catalana, Roca i Junyent con el siguiente comentario: «Me queda la duda, después de la intervención del Diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de si se ha pretendido contestar al voto particular del Señor Barrera o se querían justificar otras cosas o convencer a otros auditorios o no quedarse rezagados en no sé qué extraña carrera»<sup>546</sup>. Y quizá no andaba desencaminado este diputado, ya que esta percepción no puede sino aumentar con la valoración que hacía Guerra de la aprobación del texto por la Comisión Constitucional y la Delegación de Parlamentarios, que en cierta medida parecía una justificación respecto a otros territorios, mirando especialmente a Andalucía y a los andaluces que vivían en Cataluña. Tras reconocer que el Estatuto de Sau devolvía al pueblo catalán un derecho, el de autogobierno, que derivaba de su «realidad nacional», dedicaba la mayor parte de su intervención a poner en relación aquel logro con lo que suponía para el conjunto de España y para el desarrollo del Estado autonómico, un Estado solidario al que a la catalana seguirían el resto de autonomías. Partiendo de una concepción federal decía que el «Estatuto no es más que una confirmación de una tendencia de todos los pueblos que componen España. España como nación de naciones», concluyendo poco después que:

Ayer aprobamos el Estatuto Vasco, hoy aprobamos el catalán, mañana el gallego, el andaluz y otros, y todos ellos, desde el socialismo, en igualdad de condiciones. (...)

Mis últimas palabras son para expresar nuestra esperanza de que este Estatuto de Autonomía de Cataluña sirva para una mejor y mayor comprensión entre todos los pueblos de España<sup>547</sup>.

Además, Guerra recordó de nuevo el triunfo que había supuesto para la solidaridad regional la modificación del Título III:

La solidaridad ha sido el gran principio que nosotros, los socialistas, tenemos en cuenta en todo trabajo constitucional y técnicamente en aquel que desarrolla el proceso autonómico. Entendemos que la gran conquista de este Estatuto es haber hecho una aproximación a la justicia social a través del Título III, de Finanzas y Hacienda. Progresividad dentro de Cataluña que permita vivir mejor a los catalanes y, especialmente, a la clase trabajadora de Cataluña, sin que ello quisiera decir que no haya

---

todos modos, no parece razonable explicar únicamente en base al cálculo electoral un planteamiento que como se está demostrando estaba tan arraigado al ideario socialista.

<sup>546</sup> Citado en Jaume SOBREQUÉS y Sebastià RIERA: *L'Estatut d'Autonomia...*, vol. IV, p. 1459.

<sup>547</sup> *Ibid.*, pp. 1501-1502.

de haber una solidaridad de Cataluña con los otros pueblos (...). No se trata de reducir el nivel de Cataluña, sino de aumentar el de las otras Comunidades de España<sup>548</sup>.

Pero a aquella apelación a la igualdad y la solidaridad con otras regiones, como había hecho Rojas-Marcos, había que sumar el espacio que añadía para referirse a los derechos de la inmigración andaluza en Cataluña, que debía poder mantener sus rasgos culturales. Estos eran defendidos como tan propios de Cataluña como los de los allí nacidos, y en consecuencia tan necesarios de proteger como los estrictamente catalanes:

Por último, defensa de la población catalana que para nosotros, solidarios, significa la población nacida en Cataluña y la población que trabaja en Cataluña, una población específica: la de los emigrantes en Cataluña, entre ellos, sustancialmente, un millón y medio de andaluces. Hemos intentado, con nuestra contribución y con la contribución de los demás, que esa población de Cataluña, toda la población de Cataluña, tenga garantizados sus derechos. (...)

Por último, hemos conseguido que la lengua sea una lengua garantizada por igual a los que hablan catalán y a los que hablen castellano.

Y hay una Disposición adicional 5; que tienen enorme interés, en la que se fija que la cultura de los catalanes, la cultura que produzca en Cataluña, cultura catalana y cultura no catalana, autóctona de otros lugares, pero que, por el movimiento emigratorio, se produce en el mismo lugar, unas y otras, queden garantizadas sin demérito para ninguna<sup>549</sup>.

Es evidente que además de privilegiar valores que en ningún caso eran ajenos a la tradición socialista, Guerra tenía muy presente la competencia con el PSA<sup>550</sup>. El

---

<sup>548</sup> *Ibid.*

<sup>549</sup> *Ibid.*, p. 1502. La Comisión Gestora hacía un balance similar al de Guerra en su informe ante el Congreso Extraordinario sobre la contribución socialista al Estatuto y concluía que: «El protagonismo socialista en la negociación ha colaborado de forma determinante a que el Estatuto de Catalunya sea una respuesta adecuada a los anhelos autonomistas y progresistas del pueblo catalán –de todos los catalanes, nacidos o no en Catalunya–, y al mismo tiempo ha sentado unas bases eficaces y flexibles de orientación para la construcción solidaria del Estado de las autonomías que la Constitución prevé para todas las nacionalidades y regiones de España», PSOE: “Anexo 1: Estatuto de Autonomía de Catalunya”, en “Informe Comisión Gestora” (Madrid, 28 de septiembre de 1979), ABFPI, Fc 257.

<sup>550</sup> Sobrequés y Riera hablan de un pasaje similar ante un voto particular en el que el PSA defendía añadir al artículo 8.2 lo siguiente «La Generalitat respectarà i donarà suport a les diverses cultures coexistents amb la catalana com a conseqüència del fet immigratori». El resultado de la votación fue de 23 votos en contra y 10 abstenciones, de las cuales 9 provenían del PSOE. Aunque finalmente se aprobó el texto de la ponencia con el apoyo socialista, como han indicado estos autores: «Amb aquesta votació els diputats del PSOE tractaren de fer compatible la lleialtat amb els socialistes catalans i la necessitat de neutralitzar l'electoralisme del PSA a Andalusia», algo que se vería completado con el discurso de Guerra, Jaume SOBREQUÉS y Sebastià RIERA: *L'Estatut d'Autonomia...*, vol. I, p. 338.

socialismo andalucista estaba comiendo terreno al PSOE en Andalucía y pronto buscaría hacerlo también en Cataluña, utilizando el recurso de la continua referencia a los intereses contrapuestos entre andaluces y catalanes. El Estatuto fue un magnífico escenario, pero aquella actuación no terminó entonces, algo que disgustaba al PSOE. Nuevos enfrentamientos tendrían lugar poco después de haberse aprobado el Estatuto de Sau, como sucedió por ejemplo con unas declaraciones de Rojas-Marcos que causarían una fuerte polémica, al acusar directamente a la burguesía catalana y vasca de haber perjudicado al resto de regiones, viéndose favorecidas por el centralismo, y al cuestionar al mismo tiempo el Estatuto de Autonomía de Cataluña por considerarlo una victoria de la comunidad catalana sobre la no catalana<sup>551</sup>. El líder andalucista fue acusado por Alfonso Guerra, Josep Verde i Aldea o Joan Reventós, de intentar dividir a la clase obrera en Cataluña, en una maniobra que sólo beneficiaba a la derecha<sup>552</sup>, aunque aquellos ataques frontales se debían también al temor de que el anuncio del PSA de presentarse en Cataluña a las próximas elecciones se hiciera realidad, como ya se ha visto a través de la Reunión de Secretarios Generales de Nacionalidad y Región con la Comisión Gestora el 22 de agosto<sup>553</sup>.

Volviendo al Estatuto, este fue aprobado el 13 de agosto por la Comisión Constitucional y la Delegación de la Asamblea de Parlamentarios, con un voto en contra y dos abstenciones. Se sancionaba así un texto que rebajaba considerablemente el proyecto de diciembre de 1978, no sólo en el Título III, sino también en cuestiones que tenían que ver con la definición de Cataluña, ya que, aunque Guerra se felicitara por haber reconocido gracias al texto de Sau la «realidad nacional» de Cataluña, el proyecto definitivo eliminaba esta referencia expresa de su primer artículo, sustituyéndola por la mención de nacionalidad<sup>554</sup>; se dejaba constancia de que los poderes de la Generalitat emanaban de la Constitución y del Estatuto y no del pueblo de Cataluña; se pasaba de la

---

<sup>551</sup> *El Socialista*, nº124 (2 de septiembre de 1979).

<sup>552</sup> *La Vanguardia*, 6 de septiembre de 1979.

<sup>553</sup> El miedo del PSOE a perder votos a manos del PSA, no sólo en Andalucía, sino también en Cataluña no estaba infundado, en una sociedad en la que las encuestas revelaban que el sentimiento solidario con el nacionalismo catalán entre la población inmigrante fue descendiendo, como demuestra la comparación de Carlota Solé, entre una encuesta de 1978 y otra de 1983. En 1983, entre los nacidos fuera de Cataluña, en torno a un 60% se declaraban centralistas en una escala del 7 al 10; o preferían en un 76% una organización de clase a una nacionalista catalana; además de que «l'opinió majoritària dels entrevistats, de qualsevol classe social és que ésser "catalanista" no té res a veure amb posicions polítiques d'esquerra», en Carlota SOLÉ: *Catalunya: Societat receptora d'immigrants. Anàlisi comparativa de dues enquestes, 1978 i 1983*, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1988, pp. 58-66.

<sup>554</sup> En el capítulo 6 se podrá ver como en 1981 el PSOE coincidirá con el Gobierno sobre la conveniencia de legislar para armonizar el uso de términos como nación o nacionalidad en las Comunidades Autónomas.

oficialidad a la cooficialidad del catalán; se perdió el control exclusivo del orden público; o se cercenaron competencias en educación. Algunas de ellas cuestiones que supusieron para ciertos sectores motivos de agravio respecto al proceso vasco. Para otros, sin embargo, como dejaría ver el discurso del PSC-PSOE, el Estatuto de Sau permitiría, igual que había pasado con el vasco en el PSE-PSOE, sancionar definitivamente la conciliación de dos tradiciones y unir, sobre los cimientos de la solidaridad y la voluntariedad fraternal, a dos identidades al grito de «Viva España» y «Visca Catalunya»<sup>555</sup>.

### 3. El Congreso Extraordinario y la sanción de la alternativa realista

Cuando todavía no habían sido convocados los referendos sobre los Estatutos recién aprobados, el 28 y el 29 de septiembre tenía lugar el Congreso Extraordinario del Partido Socialista Obrero Español que debía dar paso a una nueva Ejecutiva Federal elegida en el seno del mismo, sustituyendo así a la Gestora, que se había hecho cargo de la dirección del partido desde mayo<sup>556</sup>. Además, había que debatir una nueva ponencia política, cuya resolución anularía la surgida en el XXVIII Congreso, quedando intactas todas las demás.

La Resolución política fue aparentemente un ejemplo de conciliación con los presupuestos del sector crítico, aunque este quedó excluido de cualquier esfuerzo de integración en la ejecutiva<sup>557</sup>. El Partido asumía el marxismo como método de análisis de la realidad y reafirmaba su carácter de clase, pero también de partido de masas. La fórmula, aportada por la delegación del PSC<sup>558</sup>, fue la siguiente: «El PSOE asume el marxismo como un instrumento teórico, crítico y no dogmático, para el análisis y transformación de la realidad social, recogiendo las distintas aportaciones marxistas y

---

<sup>555</sup> Así se había expresado Reventós en su discurso ante la aprobación del Estatuto, en Jaume SOBREQUÉS y Sebastià RIERA: *L'Estatut d'Autonomia...*, vol. IV, pp. 1515-1517.

<sup>556</sup> Tenía también que elegirse una nueva Comisión Federal de Conflictos y una Comisión Federal Revisora de Cuentas, *El Socialista*, 117 (15 de julio de 1979). Véase Fernando OLLERO: "El Congreso Extraordinario del PSOE (septiembre de 1979)", en *Revista de Derecho Político*, 6 (1980), pp. 205-212.

<sup>557</sup> Con la excepción de Gómez Llorente, quien, según Fernando Barciela, sabían que no ofrecería problema a la dirección felipista, en Fernando BARCIELA: *La otra historia del PSOE*, Madrid, Emiliano Escolar, 1981. Véase *El País*, 30 de septiembre de 1979.

<sup>558</sup> Enric COMPANY: "Vints anys i quatre crisis, en *L'Avenç*, 228 (1998), p. 41. Al parecer los críticos brindaron, su apoyo al sector de Raimon Obiols —que pese a esto acabó siendo elegido miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE en aquel Congreso—, en la conferencia en la que se escogieron los delegados para el Congreso. Obiols, que defendió la ponencia presentada por el PSC, representaba en aquella conferencia al sector denominado como de «síntesis» (algunos miembros de la ex Federación socialista del PSOE y el grueso de los antiguos militantes del PSC (Congrés)), que venció al sector «moderado» de Triguier, en *El Socialista*, 128 (30 de septiembre de 1979). Richard GILLESPIE: *Historia del Partido Socialista...*, p. 413.

no marxistas, que han contribuido a hacer del socialismo la gran alternativa emancipadora de nuestro tiempo y respetando plenamente las creencias personales»<sup>559</sup>. En realidad, pese a la concesión sobre el reconocimiento del marxismo como método de análisis, con aquel Congreso Extraordinario se sancionaba una opción que buscaba ensanchar la base electoral, moderando los planteamientos y haciéndolos, como señalaban, realistas y ajustados a la situación política española y a sus necesidades, único modo de acceder al poder:

Hemos de sumar al ideal socialista y a la lucha por este ideal a la más amplia mayoría de la población, pues el triunfo del socialismo dependerá de que los socialistas consigan, (...) que la mayoría de los ciudadanos se convierta en una mayoría política consciente, que luche decididamente, utilizando siempre los medios democráticos, por lograr la transformación de la sociedad»<sup>560</sup>.

Otro de los temas más polémicos fue el de la política de alianzas, decidiéndose finalmente por la línea marcada por el «felipismo», que imponía una estrategia propia, evitando vincularse a ningún partido, para no erosionar su imagen a través de una política de consenso con el Gobierno que creían les había sido perjudicial en las pasadas elecciones, sin poder ejercer el control sobre ningún resorte del Ejecutivo ni sobre las políticas que implementara UCD, y sin contar tampoco con las contrapartidas que ofrecía participar directamente en la gestión. Pero tampoco querían compartir el protagonismo con otros grupos de izquierda como el PCE, siguiendo la lógica a la que recurría Felipe González en el discurso que ofreció tras ser elegido con el 86% de los votos<sup>561</sup>:

---

<sup>559</sup> PSOE: “Resolución Política del Congreso Extraordinario” (Madrid, 28-29 de septiembre de 1979), ABFPI, Fc 261, p. 2.

<sup>560</sup> PSOE: “Resolución Política del Congreso Extraordinario...”, p.7. En este sentido puede leerse también el editorial de *El Socialista*: «Y ahí están las resoluciones del Congreso para demostrar que, en el camino hacia el socialismo, a través de la primordial defensa de los intereses de la clase trabajadora –a la que nos debemos y de la que somos parte–, el proyecto socialista abarca a toda la sociedad. Anclado con firmeza y realismo en el presente –como revelan los análisis en que se basa la resolución política–, enfoca la evolución de nuestra sociedad como el desarrollo democrático de los modos socioeconómicos y políticos engendrados por los que hoy existen. Esta es la respuesta del Congreso a los interrogantes que, abiertos hace cuatro meses, inquietaban a los militantes del partido y a todos los ciudadanos demócratas», pero para ello había sido «preciso confrontar la teoría con la realidad y deducir los métodos para actuar sobre esa realidad en el sentido de la evolución histórica. El Partido Socialista no propone a nuestro pueblo un modelo de sociedad inventado en un laboratorio, sino aquel que va conformándose a través de la acción transformadora del sistema económico, de los usos sociales, de las instituciones políticas y de las formas culturales», en *El Socialista* 129 (7 de octubre de 1979).

<sup>561</sup> Gillespie ha planteado que en aquella victoria influyó –además de la profunda convicción en el Partido de la necesidad de contar como líder con Felipe González– el trabajo que hizo la Gestora entre mayo y septiembre en favor del felipismo, utilizando incluso medidas disciplinarias contra agrupaciones como las

¡Y yo, como socialista, no estoy dispuesto a hacer concesiones; quiero el protagonismo del cambio para el socialismo, porque estoy convencido de que el socialismo es el que garantiza el cambio con libertad! (...) Estamos dispuestos a un compromiso, a estrategias comunes no estamos dispuestos. La autonomía del proyecto socialista lo exige así ahora: fortalecer el protagonismo en la izquierda del Partido Socialista y, para esto, debemos de librar una dura batalla, no contra otros, sino para fortalecer nuestro propio proyecto socialista<sup>562</sup>.

En este sentido, José María Marín indica que el PSOE renovado a través del «felipismo» trataría de desgastar a partir de aquel momento en la medida de lo posible al Gobierno de UCD, y especialmente a su presidente Adolfo Suárez; y a su vez buscarían conseguir la hegemonía de la izquierda marginando al PCE<sup>563</sup>. Esta estrategia tenía, por otra parte, una salvedad, la que pudiera derivarse de una situación que requiriera la colaboración con el resto de las fuerzas políticas ante un inminente peligro para la democracia, caso en el que su condición de partido de Estado se impondría a su estrategia política, como se vio en 1981.

Ya se ha planteado que la estrategia más posibilista, que eliminaba, a juicio de Felipe González, el peligro de convertirse en un partido sectario e ideológico que no ofreciera un programa político auténtico y real, afectaba a diversas cuestiones, también a la deriva que estaba adoptando la postura socialista ante la organización territorial del Estado<sup>564</sup>. Un tema que preocupaba especialmente a los socialistas, en un momento en

---

de Jaén o las de Valencia, en las que la izquierda tenía fuerza, o a los cambios en la normativa para la organización del Congreso Extraordinario, que supusieron que los críticos, que contarían aproximadamente con un 40% de la militancia, tenían menos de un 10% de los votos del congreso, en Richard GILLESPIE: *Historia del Partido Socialista...*, pp. 362-367. A partir de entonces, los críticos, que no fueron integrados en la dirección, llevaron a cabo una actividad más testimonial, Jorge DE ESTEBAN y Luis LÓPEZ GUERRA: *Los partidos políticos...*, pp. 124-177; Fernando BARCIELA: *La otra historia...*

<sup>562</sup> Discurso reproducido en *El Socialista*, 129 (7 de octubre de 1979).

<sup>563</sup> José María MARÍN: “La oposición del PSOE al tercer gobierno Suárez”, en Carme MOLINERO y Pere YSÀS: *Las izquierdas en tiempos de Transición*, València, PUV, 2016, p. 97. Gillespie, por su parte, ha hecho referencia la dificultad de mantener el equilibrio en aquella estrategia que desplegó desde el Congreso Extraordinario y que dominó la actuación del Partido de 1980 a 1982. Y es que «el PSOE tenía que hacer un juego parlamentario muy difícil: tenía que tratar de socavar la credibilidad del gobierno de UCD sin crear un vacío de poder y poner así en peligro el proceso democrático en general», ya que, según mantiene, si el sectarismo no era una buena opción para el PSOE tampoco lo era el consenso más que en los momentos de necesidad extrema, en Richard GILLESPIE: *Historia del Partido Socialista...*, p. 370.

<sup>564</sup> En este sentido Juan Antonio Andrade ha concluido que a partir del Congreso Extraordinario lo que caracterizó ideológicamente al partido fue «el desinterés, en contraste con la etapa precedente, por la autodefinición ideológica y los debates doctrinales. (...) los elementos más puramente ideológicos e identitarios dejaron de ocupar un lugar central en las resoluciones del partido». Aunque al menos en el tema nacional, como venimos defendiendo, el elemento identitario empezó a ser relegado del discurso antes, en Juan Antonio ANDRADE: *El PCE y el PSOE en...*, p. 388.

que debía ponerse en marcha el modelo autonómico, con unos Estatutos que habían dado el pistoletazo de salida a la temida carrera competencial, que por otra parte era una consecuencia de la ansiada igualdad en derechos que proclamaban y que seguían alentando. González resumía así aquella problemática para la que los socialistas en aquella nueva etapa, debían proporcionar soluciones adaptadas a la realidad, que salvaguardaran la unidad de España:

Lamentablemente, en el partido cada uno tiene que hacer un papel; a mí me toca con frecuencia hacer un papel que no es nada grato, que es el de recordar lo que pasa en nuestro país, en qué circunstancias vivimos, qué es lo que pasa fuera de estas paredes en estos momentos, qué es lo que nos espera en un inmediato futuro. (...)

Tenemos una democracia débil, una democracia que no se ha consolidado. (...) Tenemos una democracia débil, porque la democracia está amenazada por la violencia terrorista y por una crisis económica (...). Tenemos una democracia débil, porque la conversión del aparato centralista del Estado en un Estado de las autonomías, en una operación histórica, delicada y difícil; una operación que puede llegar a traumatizar el proceso democrático en algunos momentos, y que tenemos que ser capaces de superar con visión histórica, para que salga fortalecida la unidad y la solidaridad entre todos los pueblos de España, todos los trabajadores y todos los sectores que en nuestro país quieren defender un proyecto común<sup>565</sup>.

Mientras que fue necesario convocar este Congreso Extraordinario para oficializar la moderación en la línea política, la Resolución sobre Autonomías ya había establecido las líneas maestras que en este sentido se iban a desarrollar sobre el problema nacional en España –que había pasado a ser en realidad el problema autonómico desde la aprobación del nuevo marco constitucional– y estas se iban a ver confirmadas con la nueva Resolución política, por lo que, al menos en la teoría, los experiencia de los Estatutos vasco y catalán no había cambiado los planteamientos sobre

---

<sup>565</sup> Sobre la violencia terrorista habló explícitamente un poco más adelante, centrándose fundamentalmente en ETA aunque no únicamente y vinculando este problema al proceso autonómico: «Una violencia criminal como la de ETA, que no sólo amenaza la estabilidad política del Estado, sino que está amenazando el proceso de reconquista de las libertades del pueblo vasco, que no quiere que haya Estatuto, porque no le interesa ningún Estatuto. Y hay que decirlo con claridad, no quieren esta ni ninguna otra fórmula que permita la recuperación de libertades del pueblo vasco por mecanismos democráticos (...). Y los socialistas lo tenemos que decir, igual que tenemos que decir que vamos a apoyar los Estatutos de Autonomía. (...) Algunos compañeros tienen miedo a hablar de este problema, porque creen que el lenguaje contra la violencia es el lenguaje típico de la derecha. Y no es verdad, nosotros estamos contra la violencia que se reclama supuestamente de izquierdas como contra la violencia fascista. Nosotros tenemos una legitimidad para defender la libertad y la democracia que no pueden tener otros», en *Ibid.*

el tema<sup>566</sup>. Si críticos y moderados habían chocado en su visión del Partido y sobre la estrategia política, esto no había sucedido con el problema autonómico, donde las similitudes eran evidentes. A grandes rasgos, las ponencias políticas que apostaban por posiciones alternativas, no diferían en lo que respectaba a la construcción del Estado autonómico, que juzgaban en todos los casos como uno de los elementos más cruciales para la construcción de la nueva democracia.

La resolución política que fue aprobada definitivamente tenía presente los costes de la política de consenso, de la que el Partido Socialista había sido partícipe, pero también celebraba el éxito de la misma, representado fundamentalmente por la promulgación de una Constitución –a la que prometían defender de cualquier intento involucionista– que había devuelto la soberanía al pueblo; contemplaba los derechos y las libertades individuales y sociales; y respetaba «las legítimas aspiraciones autonómicas de las distintas nacionalidades y regiones». El tema del problema nacional se veía como resuelto satisfactoriamente por el texto que inauguraba la nueva etapa constitucional, pero el saber qué forma adquiriría el nuevo Estado de las Autonomías y cómo se afrontarían las «dificultades en torno a la puesta en marcha del proceso autonómico» seguía siendo un problema que preocupaba especialmente a los socialistas, ocupando un lugar privilegiado junto al terrorismo, la crisis económica o la desmovilización de la clase trabajadora<sup>567</sup>. Así, el apartado, «Estrategia y objetivos políticos actuales», elaborado por una comisión en la que el peso fundamental había sido llevado por el PSC, dedicaría una importancia nada desdeñable a estos asuntos<sup>568</sup>.

---

<sup>566</sup> Autores como Abdón Mateos y Giulia Quaggio constaban cómo tras el Congreso Extraordinario, «Felipe González se inclinó por un rápido cierre del mapa autonómico más que por la construcción del estado autonómico durante décadas al modo de la segunda república». El Congreso, en cualquier caso no fue el punto de inflexión, pero seguro contribuyó el hecho de que supusiera el culmen del diseño de una nueva estrategia, además de que el Partido dejaba de estar en un período de impasse sustituyéndose por fin a la Gestora que se había hecho cargo de la dirección del PSOE desde el XXVIII Congreso. Además, a estos dos aspectos habría que sumar la experiencia de la negociación de los Estatutos y la cada vez más acuciante necesidad de perfilar mejor la política autonómica, a lo que contribuyó –sin solucionar del todo el problema de descoordinación y de ausencia de una directriz férrea y clara que se impusiera a la improvisación sin depender del contexto cambiante– la creación de Secretaría Política Autonómica. En cualquier caso, como han expuesto estos autores, la dirección del PSOE cada vez estaba más convencida de la necesidad de acelerar y racionalizar el proceso, en Abdón MATEOS y Giulia QUAGGIO: “Nación y Estado en el socialismo español hasta 1992”, en J. Daniel MOLINA: *La España del pueblo. La idea de España en el PSOE. Desde la Guerra Civil hasta 1992*, Madrid, Sílex, 2005, p. 27.

<sup>567</sup> PSOE: “Resolución Política del Congreso Extraordinario...”, p.6.

<sup>568</sup> Fue la ponencia del PSC la que sirvió de texto base –con aportaciones fundamentalmente de Sevilla, Madrid y Euskadi– para la elaboración de la ponencia de la comisión denominada como «Situación política, estrategia y transición», en *El Socialista*, 129 (7 de octubre de 1979).



La preocupación de los socialistas por el desarrollo autonómico en esta resolución, tenía que ver sobre todo con la vinculación de éste al propio proceso democrático. Existía, por una parte, el convencimiento de que el autogobierno ofrecía una respuesta democratizadora que atendía a las demandas que obedecían a «un sentimiento real de los pueblos, nacionalidades y regiones que configuran el Estado» basado en «profundas» razones históricas, culturales, económicas y sociales «de todas y cada una de las nacionalidades y regiones de España». Pero existían límites en la consecución de estos derechos para que precisamente esa democratización no fuese erosionada, y quedaban claramente fijados, como ya se ha mencionado en multitud de ocasiones, gracias al principio de la solidaridad, que se identificaba aún más para los socialistas con esa deseada democratización. Por ello, aunque el autogobierno era uno de los objetivos prioritarios del Partido, lo era siempre que se basara en «la exigencia de la solidaridad entre las distintas nacionalidades y regiones que evite inadmisibles desequilibrios territoriales entre ellas». Así, una vez más, la cuestión nacional, ahora convertida únicamente en cuestión autonómica, se subordinaba a los intereses del conjunto de la clase trabajadora, que imponían la unidad dentro de los límites del Estado español: «El Partido propiciará que la solidaridad entre los pueblos de España sea el más vivo reflejo de la solidaridad de la clase trabajadora»<sup>569</sup>. Era clave, por otra parte, la concepción de una autonomía que solucionara el problema de los desequilibrios socio-económicos, esta era la cuestión que se encontraba tras la continua mención a la igualdad y a la solidaridad, la autonomía socialista suponía sobre todo y antes que nada la redistribución de la riqueza, entre las clases, pero también entre las regiones. Una autonomía que además no ponía en peligro la unidad de España, otro valor en alza en el PSOE. Y ahora que los Estatutos vasco y catalán ya estaban en marcha, iba a ser mucho más sencillo reconducir el Estado autonómico para favorecer este fin.

Así pues, la democratización se identificaba con el autogobierno, no sólo porque permitía dar forma a esos derechos y aspiraciones de las nacionalidades y regiones, sino porque, en su estrategia hacia el socialismo, jugaba un papel crucial en favor de sus intereses. Una vez más, envueltos en la lógica que confundía los principios de la subsidiariedad con los que tenían que ver con el reconocimiento de derechos identitarios, se arrogaban la obligación de convertirse en el Partido defensor de las

---

<sup>569</sup> PSOE: “Resolución Política del Congreso Extraordinario...”, p. 12.

Autonomías, refiriéndose a la necesidad de crear un Estado Autonómico que transformara el Estado centralista heredado del pasado:

«creando centros de poder que debiliten la concentración de poder en que se ha basado el dominio de la burguesía española, impulsando la democracia en todas partes como factor de debilitación del poder de la minoría dominante. Por esto, los socialistas nos definimos como el partido de las autonomías, como los impulsores más decididos y consecuentes de un Estado basado en las comunidades autónomas. Esto será un paso de importancia histórica trascendental en el camino de la construcción de una estructura federal del Estado, basado en el autogobierno y la libertad de sus pueblos. Pero es también un elemento clave en la construcción y consolidación dinámica del Estado democrático, que permite una dialéctica combinada de poder central y comunidades autónomas, el acceso desigual y arrítmico a centros de poder para potenciar, por un lado, la capacidad hegemónica de los socialistas y, por otro, el impulso de los sectores donde las posiciones se hallan más retrasadas. Solamente estructurando la democracia sobre la base de la construcción de una estructura de autogobiernos de nacionalidades y regiones de España podemos avanzar en el debilitamiento de los instrumentos de dominación tradicionales de los terratenientes y la burguesía española, e impulsar la alternativa emancipadora de los trabajadores»<sup>570</sup>.

Este enunciado demuestra además que su voluntad de generalización era profunda y respondía a un modelo nacional y autonómico que no se entendía a partir de una autonomía que llegara mermada o que estuviera destinada sólo a unas pocas nacionalidades. Aunque en algunos momentos criticaran la carrera competencial y el estímulo por parte de otros partidos (en concreto de UCD) de la generalización de las demandas en la etapa preautonómica, en el fondo eran firmes defensores de ello, y pese a que pudieran criticar el mimetismo, sobre todo en los ritmos, su concepción de la autonomía sólo era válida en un territorio descentralizado políticamente en su conjunto, basándose en razones que iban más allá de la reivindicación identitaria y los derechos históricos. Y es que, las autonomías eran concebidas como un instrumento para profundizar la democracia, por ello, la consecución de los derechos de las nacionalidades no podía generar ningún tipo de desigualdad. Es más, como el autogobierno debía facilitar la consecución de la igualdad, la actividad política de los socialistas se iba a centrar muy especialmente en adquirir un «compromiso geográfico»

---

<sup>570</sup> *Ibid.*, p.9.

que impulsara ante todo la redistribución de la riqueza entre regiones, favoreciendo el desarrollo de aquellas que habían resultado hasta entonces, más castigadas económicamente:

El compromiso por el socialismo se concreta también en un compromiso geográfico. Las diferencias y desequilibrios inter-territoriales exigen de los socialistas una respuesta programática que esté dirigida contemporáneamente, a la superación global de la crisis y a la superación de las diferencias existentes entre nacionalidades y regiones de España. La diferente situación de desarrollo en que se encuentran obliga, en efecto, a hacer una política que esté dirigida primordialmente a satisfacer las exigencias de las nacionalidades y regiones menos favorecidas, al mismo tiempo que se satisfagan las necesidades de los sectores sociales oprimidos en todo el ámbito del Estado<sup>571</sup>.

Lo cierto es que no se hacía sino confirmar lo que la Resolución sobre Autonomías del XXVIII Congreso había establecido, que suponía un Estado en el que las autonomías y el autogobierno eran esenciales para la democracia, para acabar con el centralismo uniformizador e insolidario. Los objetivos eran estos, no iban más allá, pero tampoco menos, y así fueron plasmados en un documento elaborado para informar a la prensa, en el que en el punto número 27 se afanaban en defender estos postulados, relacionando la defensa de los intereses de clase con los intereses de las nacionalidades, y vinculando los intereses de la burguesía española a un centralismo que UCD podría tratar de seguir imponiendo, aunque escudados a través de una apariencia distinta. De nuevo, como ya sucedió en el XXVIII Congreso, acusaban a UCD de sumarse de manera oportunista al carro autonómico, para acabar frustrando en la práctica las aspiraciones de estos territorios. Y si el PSOE no tenía la intención de romper el marco autonómico del que se había dotado al Estado con la Constitución, también advertía que iba a defender su aplicación real, a través de una actividad parlamentaria que –como había explicado en diversas ocasiones– desarrollara en sentido progresista la Carta Magna, pero siempre desde una postura responsable:

El combate de las autonomías de las distintas nacionalidades y regiones es también uno de nuestros esenciales objetivos prioritarios. Los socialistas, que impulsamos el creciente protagonismo hegemónico de los trabajadores en los procesos de afirmación nacional y regional del Estado, lucharemos por la consecución de unos Estatutos de

---

<sup>571</sup> PSOE: “Resolución Política del Congreso Extraordinario...”, p. 8.

autonomía de la máxima amplitud, sin discriminaciones, adecuados a las peculiaridades específicas de los distintos pueblos de España y enmarcados en un contexto de plena solidaridad entre todos ellos. Deberemos vencer, en este terreno, las resistencias emanadas de los intereses y las bases institucionales de la burguesía española, que ha creado en el pasado un tipo de Estado autoritario, uniformista y centralista, y se opondrá insistentemente a un proceso de autogobierno que puede limitar su poder. Construir dinámicamente la democracia exige hoy impulsar el proceso de construcción de las comunidades autónomas, dotadas de poderes reales, evitando que en manos de UCD se conviertan en un sarcasmo que simplemente oculte la persistencia del mismo Estado centralista existente. La lucha por las autonomías debe desarrollarse en el plano parlamentario, tratando de conseguir acuerdos que signifiquen un total respeto a la voluntad autonomista de los pueblos, y también a nivel de la movilización popular, en las distintas nacionalidades y regiones, en un marco técnico caracterizado por la firmeza y la responsabilidad de nuestras posiciones<sup>572</sup>.

Por otra parte, el horizonte federal seguía defendiéndose como el futuro deseable para el que el Estado de las Autonomías debía consolidarse como fase previa, y acorde a esta perspectiva el PSOE se ratificaba en su voluntad de profundizar en el carácter federal de sus propias estructuras. Así, en el apartado sobre «Principios» se afirmaba: «El PSOE reafirma su carácter de clase, de masas, democrático y federal»<sup>573</sup>. Esta sentencia había necesitado ser incluida a través de una enmienda transaccional, presentada por Alonso Puerta y Txiki Benegas –de las delegaciones de Madrid y Euskadi y apoyada por la delegación andaluza– que venció en el Pleno<sup>574</sup>. Pero sobre el modelo de Partido se discutió directamente en una comisión encargada específicamente de ello y que elaboró el apartado «La organización de los socialistas». En él, entre otras cuestiones se analizaba la definición federal del PSOE, atendiendo a las voces que sobre todo desde el XXVIII Congreso demandaban una profundización en este sentido. Entre estas, destacaban las demandas surgidas desde el PSC-PSOE, que en su Conferencia para fijar los planteamiento de su formación ante el Congreso Extraordinario, volvían a reclamar –como ya habían hecho ante el XXVIII Congreso–, una federalización razonable y sin improvisaciones del Partido, ya que, según Obiols, aunque sí existía una

---

<sup>572</sup> PSOE: “Congreso del Partido Socialista Obrero Español –Resolución Política–”, en la carpeta “Información a la prensa”, (Septiembre de 1979), AHUV, Fons Alfons Cucó, 021/018, p.9.

<sup>573</sup> PSOE: “Resolución Política del Congreso Extraordinario...”, p.2.

<sup>574</sup> *El Socialista*, 129 (7 de octubre de 1979).

tradición organizativa dentro del PSOE que apuntaba en este sentido, había que avanzar en:

una segona faceta que no consisteix només en una federalització organitzativa sinó a avançar en una posició política de caràcter federal. En un moment en que arreu de l'Estat hi ha una eclosió dels moviments nacionals i regionals, el partit socialista ha de recuperar el que ha estat la trajectoria federalista de l'esquerra i el moviment obrer<sup>575</sup>.

También otros, como Gabriel Urralburu, encargado de defender la ponencia de Euskadi, demostraron que este tema cobraba una importancia capital para otras federaciones, como la vasca, exigiendo un amplio y generoso esfuerzo para descentralizar y federalizar la estructura del PSOE<sup>576</sup>. En este ambiente, el punto sobre la «Federalización de las estructuras del Partido» estaba totalmente justificado y parece que se guiaba por los planteamientos anteriores cuando reconocía de forma implícita la necesidad de avanzar en un principio que hasta el momento no había sido aplicado más que de forma superficial<sup>577</sup>. Así, decía tener como principal tarea político-organizativa desarrollar al máximo los presupuestos federales y respetar la autonomía política y organizativa de cada ámbito, para entre otras cosas, imbricar con la realidad plurinacional del Estado, aunque ésta ya no era defendida en ninguna otra parte del texto. La concreción de esta profundización del carácter federal del Partido conectaba con su proyecto sobre el modelo de Estado, en el que el federalismo era una concepción teórica que inspiraba la práctica política del momento y que se limitaba de facto a una autonomía que garantizase en primer lugar la solidaridad:

Por último, las relaciones entre los diversos colectivos territoriales, marcan el modelo autonómico de Partido que está implícito en la antigua tradición federal del PSOE, pero que debe articularse prácticamente en nuestra actual situación, en la que el desafío de transformar un estado centralista en un estado autonómico se constituye como la vía de nuestro tiempo para avanzar hacia el socialismo. Sólo un partido como el PSOE, de implantación estatal, de articulación autonomista y concepción federal, puede garantizar la autonomía de cada territorio y, al mismo tiempo, la solidaridad entre todos ellos, mediante un programa común de solidaridad y unos programas autónomos de cada nacionalidad o región. Pero la autonomía no cesa ahí sino que es preciso corregir todos

---

<sup>575</sup> *Avui*, 26 de septiembre de 1979.

<sup>576</sup> *El Socialista*, 128 (30 de septiembre de 1979).

<sup>577</sup> Sin embargo, la polémica siguió vigente en el siguiente Congreso y la intervención desde la dirección federal en las dinámicas de cada federación no disminuyó.

los desequilibrios hasta conseguir la desaparición del desequilibrio último, razón de ser de la tarea de los socialistas: la desigualdad de un hombre respecto a otro hombre<sup>578</sup>.

Parecía que más que federalizarse, el Partido se inclinaba por una vía intermedia, como había sucedido con el Estado de las Autonomías, en la que el poder emanaba del centro y no de las federaciones hacia el mismo<sup>579</sup>. Y pese a ello, una vez más, los catalanes demostraban que no suponían un verso suelto y que aceptaban sin reservas tales planteamientos, cuando Obiols afirmaba a raíz de esta resolución, su satisfacción ante el cambio de rumbo que a este respecto creía que había tomado el Partido. Tras remarcar que aunque el PSOE se había declarado siempre federalista era en realidad centralista, celebraba el punto de inflexión que suponía a este respecto el Congreso Extraordinario: «Des d'avui assumeix l'estructura federal i autonòmica fins a les darrers conseqüències»<sup>580</sup>.

La federalización tuvo protagonismo en una Comisión en la que la elaboración del dictamen gravitó, según *El Socialista*, sobre los textos elaborados por Barcelona, Sevilla-Córdoba y Madrid. Los catalanes, además, imprimieron importancia a este tema, al elaborar un esquema de trabajo para la comisión en el que la federalización de las estructuras del Partido era uno de los 4 apartados en los que se dividió el debate en la misma<sup>581</sup>. De hecho, el punto mencionado, sobre la «Federalización de las estructuras del Partido», se trataba de una traslación prácticamente literal de lo mantenido sobre este asunto en las ponencias de Córdoba y Barcelona<sup>582</sup>, pero no sucedía así con la ponencia de Madrid, que no daba especial relevancia a este tema, demandando eso sí, la autonomía para las federaciones, pero «con exclusión de todo privilegio»; y la distribución de recursos entre las mismas «en base a criterios objetivos»<sup>583</sup>.

Es significativo ver que en este aspecto no existirían discrepancias reseñables entre los dos sectores enfrentados en Madrid, que ejemplificaban en buena medida las

---

<sup>578</sup> PSOE: “Resolución Política del Congreso Extraordinario...”, pp. 20-21.

<sup>579</sup> De hecho, el Congreso Extraordinario sirvió para profundizar en la política que se había decidido llevar desde la dirección, en la que además de moderar los principios, se estaba centralizando el poder interno, «penetrando» desde el Comité Ejecutivo en las federaciones en lugar de que estas constituyeran la base del poder federal, Mónica MÉNDEZ: *La estrategia organizativa del Partido Socialista Obrero Español (1975-1996)*, Madrid, CIS-Siglo XXI, 2000, pp. 333-334.

<sup>580</sup> *Avui*, 30 de sept. de 1979.

<sup>581</sup> *El Socialista*, 129 (7 de octubre de 1979).

<sup>582</sup> PSOE: “Ponencias presentadas al Congreso Extraordinario”, (Madrid, 28-29 de septiembre de 1979), ABFPI, Fc 259, p.12, y p. 19.

<sup>583</sup> *Ibid.*, p. 172

diferencias existentes dentro del PSOE entre los «críticos» y los «felipistas» o «moderados». La pugna que se había llevado a cabo dentro de la Federación madrileña se había concretado en la discusión en torno a dos textos: el de las 59 tesis, más próximo a Felipe González, presentado entre otros por Joaquín Almunia o Joaquín Leguina; y el del sector «crítico», que contaba con destacados dirigentes como Luis Gómez Llorente, Francisco Bustelo o Pablo Castellano. Dentro de la Federación de Madrid salió vencedora la opción de los críticos, que fue votada mayoritariamente por los militantes como texto que representaría a la misma, pero que tuvo que hacer concesiones al sector «moderado», y sobre todo al considerado como la «tercera vía» – encabezado por Alonso Puerta–, enmendándose el texto definitivo<sup>584</sup>. En cualquier caso, parece que las mayores discrepancias no se dieron respecto al tema de la federalización<sup>585</sup>, en la que los textos de ambos sectores coincidían en lo fundamental y más bien divergían de la Resolución final<sup>586</sup>. La actitud menos proclive a la federalización se observaba en el sector «felipista», que pese a proclamar la vocación federal del Partido, en la tesis nº6: «La diversidad de nacionalidades y regiones que caracteriza y configura a la sociedad española, así como la vocación federalista del movimiento obrero democrático, motivan al PSOE a asumir una estructura interna federal y a unir su lucha por la democracia y el socialismo con el esfuerzo por conseguir la autonomía para los distintos pueblos de España»; no se definen explícitamente como un Partido Federal, y sobre todo, no inciden en la necesidad de reforzar y hacer real esta condición tanto desde el punto de vista organizativo como político. Esto llama especialmente la atención en el apartado «Modelo de Partido», donde pasan de puntillas por esta cuestión, dando incluso la sensación de que se pretendía otorgar una mayor importancia a la agrupación local, revalorizando su papel y situando a la Federación, si no en un segundo plano, al menos sí en una posición de mayor inferioridad de lo que estaría en la resolución posterior:

---

<sup>584</sup> *El País*, 10 de julio de 1979; *El País*, 12 de julio de 1979; *El País*, 19 de julio de 1979; *Diario 16*, 21 de julio de 1979; *Diario 16*, 22 de julio de 1979.

<sup>585</sup> *El Socialista*, 119 (29 de julio de 1979).

<sup>586</sup> Aunque el resto de lo establecido sobre los asuntos autonómicos era similar a la Resolución aprobada en el Congreso, el texto inicial de los críticos (antes de ser enmendado), se refería a la defensa de unidad construida por la solidaridad y no por «criterios egoístas e interesados que manipulan el concepto de unidad» y que se oponían a la «la paz y la solidaridad» que deseaban para los «entes autonómicos». Unos criterios «egoístas e interesados» que presumiblemente actuarían desde el plano del unitarismo centralizador y uniformizador, pero también desde el separatismo que rechazaban igualmente, en Comisión unitaria de la línea crítica de la Federación madrileña: “Línea Política del PSOE”, AFFLC, Fondo PSOE. Partido Socialista Obrero Español, 004062-004, p.16.

57. La unidad básica de nuestro partido es la agrupación local, de la que se puede afirmar, sin exaltar hasta límites de ineficacia su soberanía (...)

59. Por otro lado es evidente que la naturaleza de la acción política a desarrollar por el partido exige que las agrupaciones (...) se coordinen en unidades organizativas territoriales más amplias y lleguen a constituir fuertes estructuras políticas de nacionalidad o región. La dirección de la política socialista en las distintas comunidades autónomas debe corresponder cada vez más a los órganos del partido en esas unidades territoriales, para lo cual los órganos federales deben prestar el máximo apoyo y colaboración<sup>587</sup>.

En cuanto a los representantes vascos, aunque se hubieran significado en algunas manifestaciones públicas por una mayor federalización real del Partido, no sucedió así en las dos ponencias que presentaron por Euskadi y Vizcaya<sup>588</sup>. De hecho, en ambas se daba por descontada la estructura federal del Partido sin demandar ningún tipo de intensificación o reforma en este sentido. Por ejemplo, en la de Euskadi –muy similar en contenido y forma a la de Vizcaya– se hacía hincapié en la necesidad de una estructura participativa y descentralizada para permitir una mayor democratización y una mayor participación de las bases militantes, tratando de evitar una preponderancia excesiva de los órganos de dirección, pero no se hacían referencias a la misma necesidad respecto a la independencia de las Federaciones frente a los órganos centrales, y parecían totalmente satisfechos con la estructura de la que se habían dotado: «El PSOE, consecuentemente con su concepción del Estado, se ha dotado de una estructura interna de carácter federal»<sup>589</sup>. Esto matizaba un tanto las declaraciones de este grupo cuando se manifestó claramente por una mayor federalización.

Por último, la mayor novedad de aquel congreso en estos temas se refirió a la creación de la Secretaría Autonómica, que contribuiría a la intención de la dirección socialista de trazar una mayor planificación sobre la estrategia autonómica de forma conjunta para todo el Estado, pese a que hasta prácticamente la negociación de los

---

<sup>587</sup> “59 tesis para el Congreso Extraordinario del PSOE”, ABFPI, Fc 258.

<sup>588</sup> Algo similar había pasado con el sector de los críticos, que por ejemplo, en el «Manifiesto del grupo Bustelo-Gómez Llorente-Castellano», como lo denominó la prensa, esgrimían en su punto 4 lo siguiente: «Una organización socialista de militantes no puede ser más que una estructura auténticamente federal, esto es, dotada de una autonomía real de cada unidad orgánica para tomar decisiones en su propio ámbito», en *El Socialista*, 122 (19 de agosto de 1979).

<sup>589</sup> PSOE: “Ponencias presentadas...”, p. 150.



Pactos Autonómicos en la primavera de 1981 se estuvieron escuchando voces críticas y autocríticas sobre la inexistencia de unas directrices que no fluctuaran en función del contexto y el territorio<sup>590</sup>. En cualquier caso, a partir de entonces fue notable la proliferación de estudios, informes y reuniones para tratar de definir la posición del PSOE sobre la construcción del Estado Autonómico desde una plataforma que centralizaba y coordinaba estas iniciativas. Sin embargo, María Izquierdo, nombrada Secretaria de Política Autonómica, debía de tener una concepción distinta de lo que debía ser en realidad aquel organismo y dimitió al mes de haber asumido su cargo, por lo que consideraba era una intromisión del Vicesecretario General del PSOE, que según entendía, no permitía la autonomía requerida a aquella Secretaría. No siendo aceptada su dimisión por decisión unánime de la Comisión Ejecutiva Federal, la retiró pocos días después. Luis Fajardo ha opinado que aquella renuncia se debió posiblemente a que «no entendió en un primer momento la función de coordinación que se había asignado al nuevo Vicesecretario general, Alfonso Guerra, muy activo en todo el proceso de elaboración de los primeros Estatutos y en los trabajos preparatorios de la posición socialista en los diferentes aspectos del desarrollo autonómico»<sup>591</sup>. Aquella anécdota nos da, sin embargo, una idea del papel que la cúpula dirigente, y en concreto Alfonso Guerra, tuvieron en el diseño del nuevo modelo, por lo que tener muy presente sus concepciones y sensibilidades nacionales no parece un tema menor.

Se inauguraba una nueva fase que reforzaba el estilo personalista y en la que estaban dispuestos a subordinar los presupuestos ideológicos por los que creían eran los intereses nacionales, también en lo que respectaba a la estructura del Estado, lo que imponía pararse y plantear cómo se iba a gestionar la concesión de la autonomía a partir de aquel momento. Parecía claro que la generalización era no sólo inevitable, sino también deseada en el Partido, pero asegurarla mientras se aseguraba la unidad, la solidaridad y la funcionalidad estatal era indispensable.

---

<sup>590</sup> Sólo una semana antes de la celebración del Congreso se reunieron los Secretarios Generales y Presidentes de los entes Preautonómicos con Carmen García Bloise, y todos ellos coincidían en compartir el clamor sobre la necesidad de establecer una política firme y coordinada –aunque no necesariamente mimética en todas las regiones– sobre la cuestión autonómica, quejándose del desmadre en esta materia, de la tardanza en tomar una postura clara, de la inexistencia de un calendario y de líneas comunes y básicas, o de la peligrosa demagogia que podía suponer aquella política de hechos consumados que respondía a que el Partido no tenía las ideas claras», en PSOE: “Reunión de Secretarios Generales y Presidentes entes Preautonómicos autonomías” (21 de septiembre de 1979), ABFPB, 075-E 2.

<sup>591</sup> Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo...*, p. 96.

El primer problema con el que se encontraron tras aprobar los Estatutos era el de cómo permitir los referendos cuando todavía no se disponía de una ley orgánica para las modalidades de referéndum, que debía estar pensada también para el progresivo acceso a la autonomía del resto de los territorios, a los que seguiría Galicia –cuyo Estatuto comenzaría a debatirse en la Comisión Constitucional en octubre–, y pronto se unirían Andalucía, País Valenciano, Canarias, o Aragón, que ya habían iniciado los procedimientos que exigía la Constitución para alcanzar las mismas competencias que las tres nacionalidades históricas anteriores, y la lista no parecía acabarse aquí. De este modo, durante el verano se fueron barajando las opciones de cómo permitir la convocatoria de los referendos en estos territorios sin necesidad de esperar a que se definieran las bases generales del sistema. Tanto CiU como el PNV presionaron durante agosto y septiembre, asegurando a la prensa que en las negociaciones con el Gobierno sobre sus respectivos referendos, Suárez les había prometido que no deberían esperar a la promulgación de una ley orgánica que podría retrasarse ante la evidencia de que los principales partidos estatales no tenían un plan global para estructurar el Estado de las Autonomías<sup>592</sup>. Pronto comenzó a hablarse de la elaboración de un decreto-ley que se utilizara en los casos excepcionales de Euskadi y Cataluña, algo que se rechazó inicialmente desde algunos sectores del PSOE<sup>593</sup>. En concreto, Gregorio Peces-Barba declaró públicamente que el PSOE se opondría por considerarlo anticonstitucional, pese a que, aunque la fórmula no gustara en este grupo, muchos juzgaron de precipitadas sus palabras<sup>594</sup>.

Finalmente, el 14 de septiembre se aprobaron dos decretos de ley para permitir la convocatoria de los referendos, algo que acabaron celebrando los socialistas como la única alternativa posible ante la urgencia de la situación, aunque advirtiéndolo, como hacía Martín Toval, de que aquello no sentaba ningún precedente, dejando por tanto sin

---

<sup>592</sup> Se llegó a barajar la posibilidad de promulgar la ley orgánica en un plazo de menos de un mes para que quedara aprobada a finales de septiembre, en *El País*, 5 de septiembre de 1979. Véase a este respecto *El País*, 31 de agosto de 1979.

<sup>593</sup> *El País*, 6 de septiembre de 1979; *Avui*, 8 de septiembre de 1979.

<sup>594</sup> En el «Informe Semanal» del Departamento de Análisis de Propaganda, se comentaba esta cuestión, señalando que creían que «Gregorio Peces Barba se ha precipitado al considerar públicamente como anticonstitucional el decreto ley para el Referéndum. También pensamos que es un mal precedente el sistema del decreto ley. Dadas las declaraciones de Peces Barba y el mal precedente que supone la medida, el Partido debería pensar en la posibilidad de abstenerse cuando se celebre la votación parlamentaria», en Departamento de Análisis de Propaganda (PSOE): «Informe Semanal» (del 31 de agosto al 7 de septiembre de 1979), AFFLC, Fondo José Prat, 000739-003. Véase también *El País*, 6 de septiembre de 1979. Emilio Attard ha escrito en sus memorias que creía que el propio Gobierno era consciente de había «forzado la máquina de la ilegalidad para el referendo de los estatutos de las nacionalidades históricas», en Emilio ATTARD: *Vida y muerte...*, p. 107.

resolver esta cuestión para el resto de España<sup>595</sup>. La fecha escogida para su celebración fue el 25 de octubre, con unos resultados que confirmaron en ambos casos la ratificación de los Estatutos. La baja participación, sin embargo, con una abstención que rondaba el 40%, supuso una llamada de atención para los partidos estatales, a pesar de que fue explicada por aspectos como el cansancio del electorado, para el que la cita con las urnas estaba haciéndose demasiado frecuente; por el desgaste de unas instituciones preautonómicas vaciadas de contenido; o por las divisiones de los partidos ante unas negociaciones que además se habían extendido demasiado en el tiempo<sup>596</sup>.

El PSOE veía agravadas sus dudas sobre la conveniencia de generalizar aquel procedimiento para el resto del Estado, temiendo que quizá la sociedad española y la joven democracia no estuvieran preparadas para mantenerse bajo continuos plebiscitos, y preguntándose si no resultaría imprudente forzar todo aquello para acabar obteniendo unos resultados negativos en territorios donde las demandas de autogobierno no estaban tan arraigadas como en Euskadi y Cataluña. Unas dudas, que no eran nuevas, y que en ningún caso cuestionaban la extensión de la autonomía, o la conquista de los mismos derechos por todos los territorios, pero que reforzaban el temor a que las precipitaciones y la obsesión por el mimetismo pusieran en peligro la funcionalidad y la unidad del Estado. De hecho, diez días antes de la celebración de los referendos, Felipe González pronunciaba una conferencia en el Club Siglo XXI repitiendo opiniones que ya había expresado en la misma tribuna en febrero de ese mismo año:

En febrero manifesté aquí mi preocupación sobre este problema de dimensión histórica, que no podía estar sometido ni a presiones obstruccionistas, ni a tensiones demagógicas.

(...)

Desde mi punto de vista, un proceso autonómico que ha de colocarnos en la frontera de un Estado federalizado tiene que evitar las precipitaciones que nacen de fuerzas centrífugas, porque su verdadero sentido es el incremento de la solidaridad entre pueblos diferenciados. Para ello, hay que impedir discriminaciones que conviertan algunas zonas de nuestro territorio en comunidades de segunda o tercera categoría. Pero la igualdad de tratamiento, ni puede ni debe entenderse como la aplicación mimética de

---

<sup>595</sup> *El Socialista*, 127 (23 de septiembre de 1979).

<sup>596</sup> Eugènia SALVADOR: "Crònica política", en Lluís RECOLONS, Francesc CABANA, Eugènia SALVADOR y Salvador CARDÚS: *Catalunya 77/88*, Barcelona, Publicacions de la Fundació Jaume Bofill-La Magrana, 1989, pp. 211.

unos estatutos respecto de otros. Para que la igualdad sea real, tiene que admitir el derecho a la diferencia (...).

Hemos de llegar al convencimiento de que el proceso autonómico se basa en la necesidad histórica de armonizar, para unir solidariamente, a los distintos pueblos que componen y enriquecen esa realidad que se llama España<sup>597</sup>.

La máxima preocupación de los dos partidos mayoritarios era asegurar la estabilidad y la unidad de España. Pero, además, el PSOE se debatía entre favorecer las demandas autonómicas para alcanzar un Estado igualitario y lo más homogéneo posible –sin que esto supusiera una uniformización innecesaria–; y una política más pausada de acceso a la autonomía que no hiciera perder al Estado el control sobre demasiadas prerrogativas y que no pusiera en peligro, no sólo la unidad y la funcionalidad, sino la capacidad de coordinación que asegurara un modelo equilibrado regionalmente y plenamente igualitario.

Por ello, aquellas llamadas a la responsabilidad convivían con una política muy activa en la generalización de las demandas en todos los territorios del Estado, como se dejaba constancia en la reunión de Secretarios Generales y Presidentes de los entes Preautonómicos con Carmen García Bloise el 21 de septiembre de 1979, a la que faltaron los representantes catalanes –hecho sobre el que protestó el Presidente del Consejo andaluz, Rafael Escuredo–. En aquel encuentro, todas las opiniones sobre la generalización autonómica y el papel que debía jugar del PSOE en la misma, a excepción del representante vasco, se pronunciaron a favor de adoptar una actitud activa. Aunque no se creía que la estrategia debiera ser necesariamente mimética, sí se consideraba que debían existir unas directrices comunes y sobre todo una idea clara del modelo, basado en la generalización, en «plano de igualdad», de la autonomía para todas las regiones. Carlos Saldoja, representante del PSE, se quejaría, aludiendo a que «en la Constitución no está claramente definida la regionalización del Estado para toda España con uniformidad. El proceso autonómico no debe ser uniforme ni paralelo. Las razones de oportunidad política no son de peso definitivo». Se sacaba a relucir el tema de la estrategia electoralista, que también jugaba un papel importante, pero sería respondido por Rafael Escuredo refiriéndose a que «las razones históricas no son el único condicionante para la autonomía “la autonomía para todos es un desagravio”».

---

<sup>597</sup> Discurso reproducido en *El Socialista*, 131 (21 de octubre de 1979).

Una posición apoyada por aquellos que intervinieron, como los representantes de Canarias, Cuenca o Galicia, y que podía resumirse en la intervención de Carmen García Bloise que dijo que el PSOE «no se puede dejar robar el espacio político en materia de autonomía y que la autonomía debe ser un medio de profundización de la democracia»<sup>598</sup>.

Este era el contexto en el que se debía definir el modelo de Estado Autonómico ahora que su desarrollo era imparable. La siguiente pieza era el Estatuto gallego, que ya había empezado a debatirse en el Congreso a mediados de octubre. Pero las negociaciones se complicaron por la iniciativa de la UCD de comenzar a frenar aquella descentralización política de España con la tercera de las nacionalidades históricas, a lo que siguió una política de frenazo mucho más agresiva con la que paralizaron el proceso autonómico del resto de los territorios, y que conllevó graves consecuencias para muchos de ellos, generando un conflicto político en el que Andalucía acabó convirtiéndose en tablero de ajedrez entre centristas y socialistas. Estos últimos tuvieron que enfrentarse a una situación en la que debían lidiar con los problemas de una estrategia autonómica sin definir, marcada por la improvisación y la política de hechos consumados, y basada en unos principios de difícil compatibilidad, al menos en última instancia. Cómo abordaron todas estas cuestiones será lo que se tratará de analizar en las siguientes páginas.

---

<sup>598</sup> PSOE: “Reunión de Secretarios Generales y Presidentes...”



## V. ¿REFORZAR LA UNIDAD?: LA CONSTRUCCIÓN AUTONÓMICA TRAS LOS REFERENDOS VASCO Y CATALÁN

Tras pactar una solución para los problemas nacionales catalán y vasco, comenzó a extenderse entre la clase política, especialmente entre los partidos que tenían una responsabilidad de gobierno o veían cerca la posibilidad de la misma, el miedo a que la carrera autonómica y la generalización, a la que ellos mismos habían contribuido, pusiera en peligro la unidad y estabilidad de España. Es por ello, que tras aprobarse en referéndum los Estatutos de las dos nacionalidades históricas mencionadas, UCD, pero también el PSOE, iniciaron una política autonómica tendente a reconsiderar, si no el modelo del «café para todos», sí el ritmo con el que se accedía a la autonomía. Sería el tiempo del «frenazo autonómico» o la reconducción autonómica, que reafirmó al PSOE en la idea de pausar el acceso a la autonomía de la mayor parte de los territorios, y lo puso en un aprieto en aquellos en los que, ya fuera por convicción o por estrategia (o quizá por ambas), se había defendido la autonomía por la vía del artículo 151. Andalucía, Canarias, País Valenciano o Aragón, son los casos más llamativos, a los que se sumaron los problemas de una autonomía gallega que se quería descafeinar pese a ser «histórica».

### 1. Galicia, un problema no tan urgente

Aprobados los Estatutos catalán y vasco, y a menos de diez días de celebrarse los referendos sobre los mismos, se iniciaba el debate del Estatuto gallego entre la Comisión Constitucional y la delegación de los parlamentarios de este territorio, concretamente el 16 de octubre de 1979. El proyecto había sido aprobado por la Asamblea de Parlamentarios el 25 junio de 1979<sup>599</sup>, pero como ha apuntado Judith Carbajo, aquella propuesta no encontró «acomodo dentro del plan ya trazado de una España con dos tipos de autonomía, la catalana y la vasca por un lado y, el resto de regiones, por otro. Galicia era pieza clave para que ese plan siguiese su curso y no sufriese alteraciones. Así las cosas, el gobierno de UCD tenía que conseguir una autonomía gallega *moderada* y, en cualquier caso, muy por debajo del texto propuesto

---

<sup>599</sup> El dirigente socialista Celso Montero se refería al resultado final como un buen punto de partida, nacido del consenso y el acuerdo, que el PSG-PSOE esperaba pudiera ser desarrollado de forma más positiva en el debate con la Comisión Constitucional, en *El Socialista*, 116 (8 de julio de 1979).

por la Comisión»<sup>600</sup>. Los testimonios hablan de que esto comenzó a producirse entre septiembre y principios de octubre<sup>601</sup>, cuando Rodolfo Martín Villa recibió el encargo de Suárez de presidir una comisión en el seno de Comité Ejecutivo de la UCD, precisamente con el objetivo de racionalizar la política autonómica, en la que, en opinión de Emilio Attard, Manuel Clavero –que había dejado de ser Ministro para las Regiones el 5 de abril de 1979 cuando se nombró el nuevo Gobierno<sup>602</sup>– fue marginado<sup>603</sup>.

Se pretendía que aquella racionalización afectara también a la tercera nacionalidad histórica, un propósito que no han ocultado los dirigentes centristas cuando tiempo después han reflexionado sobre aquel periodo, empezando por Martín Villa<sup>604</sup>, a quien se le atribuye aquella maniobra que no contó con el apoyo de muchos de los parlamentarios de la UCD gallega:

El Estatuto de Galicia constituyó una magnífica ocasión para enmendar algunos de los más graves errores cometidos en la elaboración de los textos estatutarios vasco y catalán. Era importante conseguir que esta norma estableciese un precepto, en cuya virtud la nueva comunidad autónoma no pudiera legislar sobre materias aún no

---

<sup>600</sup> Judith CARBAJO: *El Partido Socialista Galego (PSG) y el discurso de los derechos del franquismo a la transición democrática*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2016, pp. 328-329.

<sup>601</sup> Para Luis Fajardo Spinola: «Una vez aprobados el 25 de octubre de 1979 los Estatutos de Autonomía vasco y catalán, el Gobierno Suárez decidió frenar el proceso autonómico del resto de España», en Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo...*, p. 85. Por su parte, en *El Socialista* se hacía alusión al letargo en el que podrían entrar otros territorios una vez se aprobaran los Estatutos vasco y catalán: «No recordamos ahora quién, pero ha sido un perspicaz político de izquierdas quien ha afirmado que superado el tránsito autonómico catalán y vasco, corresponde a las demás regiones del Estado emplear la fuerza y el tesón de aquellos para que el ejecutivo tome en cuenta sus reivindicaciones autonómicas (...). Las fuerzas progresistas de Castilla, Canarias, Aragón, País Valenciano y, por supuesto Andalucía (...) se están tropezando con algo aún peor: un partido de Gobierno escurridizo, ambiguo, evasivo», en *El Socialista*, 130 (14 de octubre de 1979).

<sup>602</sup> De hecho, para Carlos Rosado, ponente del estatuto de Carmona por UCD en 1981, la sustitución de Clavero en aquel Ministerio fue el inicio de un cambio en materia de política autonómica. Entrevista de Manuel Ruíz, en Manuel RUIZ ROMERO: *La conquista del Estatuto de Autonomía para Andalucía (1977-1982)*, Sevilla, Instituto Andaluz de Administración Pública, 2005, p. 159.

<sup>603</sup> Rodolfo MARTÍN VILLA: *Al servicio del Estado*, Barcelona, Planeta, 1984, pp. 183-184. La comisión estaba integrada por Rodolfo Martín Villa, José Pedro Pérez Llorca, Rafael Arias Salgado, Antonio Fontán, Óscar Alzaga, Francisco Fernández Ordóñez, Luis Gámir y Alberto Oliart, y en ella se estableció favorecer un ritmo sosegado que sería permitido a través de la generalización de la adopción del artículo 143 como medio para acceder a la autonomía, en Emilio ATTARD: *Vida y muerte de UCD. Un análisis crítico y sincero de la evolución de sus miembros más destacados*, Barcelona, Planeta, 1983, p. 93.

<sup>604</sup> Este dirigente centrista revelaría en sus memorias que en realidad, en aquel período, Antonio Fontán estuvo marginado de las grandes decisiones y serían él y Pérez Llorca los responsables de aquella política autonómica: «Ni en la elaboración de los estatutos de Cataluña, País Vasco y Galicia, ni en la delineación de la política autonómica de UCD, ni en la forma de conducir la cuestión andaluza, tuvo mucho que ver el titular de las autonomías, como tampoco había tenido que ver Manuel Clavero. Durante el mandato de Fontán, Pérez-Llorca condujo a la elaboración estatutaria desde el Ministerio de la Presidencia del Gobierno», en Rodolfo MARTÍN VILLA: *Al servicio...*, p. 188.



reguladas básicamente por el Estado. El Gobierno pensando sobre todo en la viabilidad global del proyecto autonómico hizo lo posible por lograr un objetivo tan razonable y necesario. (...) Fue esta una gran ocasión perdida para racionalizar un proceso que se desbordaba peligrosamente<sup>605</sup>.

El recorte a la autonomía gallega se intentó llevar a cabo haciendo que el traspaso de competencias necesitara de la aprobación de las leyes correspondientes en las Cortes Generales, y tratando así, como expusiera el centrista Emilio Attard, de disuadir al resto de regiones de emular a los Estatutos vasco y catalán. Aquella medida, que permitió que el 22 de noviembre se aprobara un «Estatuto de mínimos» con el único apoyo de UCD, supuso un «verdadero shock para nuestros parlamentarios», generando fortísimos desacuerdos dentro del partido, entre la dirección central y unos «diputados gallegos, que no comprendían cómo su estatuto iba a hacer de “conejo de Indias” en un cambio de frente» que sabían iba a encontrar la oposición de la intelectualidad y la mayor parte de la población<sup>606</sup>.

Ante la negativa del resto de grupos parlamentarios a apoyar aquel Estatuto<sup>607</sup>, el Gobierno decidió aplazar la convocatoria del referéndum –en un territorio en el que la abstención era por norma ya elevada–, por temor a un resultado negativo o a una desmovilización escandalosa, como así sucedió finalmente en 1980<sup>608</sup>. Se iniciaba así el primer bloqueo del proceso autonómico, al que, como se verá, seguirían muchos otros a partir de principios de 1980. Como analizara Emilio Grandío, se «consideraba que su aprobación abriría el paso a las siguientes comunidades en conseguir el Estatuto en semejantes condiciones. Andalucía y Valencia. El paso a una España federal se frena sin duda con el Estatuto gallego»<sup>609</sup>.

Como consecuencia de este ataque a la autonomía gallega, el PSdeG-PSOE acordó el 25 de noviembre, en una reunión de su Comité Nacional, romper relaciones con la Xunta Preautonómica y emitir un comunicado en el que valoraba «de forma muy

---

<sup>605</sup> Emilio ATTARD: Vida y muerte..., pp. 182-183.

<sup>606</sup> *Ibid.*, p. 98. Véase también, o Javier PÉREZ ROYO: “De la autonomía como excepción a la autonomía como norma: el Estatuto de Autonomía para Andalucía”, en Javier TORRES (*et alii*): Veinte años..., p. 117. Según cifras de *El Socialista*, el rechazo al «Estatuto centrista» movilizó el 4 de diciembre a cerca de 200.000 manifestantes, en *El Socialista*, 139, (16 de diciembre de 1979).

<sup>607</sup> Aunque José Luis de la Granja, Justo Beramendi y Pere Anguera han indicado que hubo más pasividad que apoyo al galleguismo por parte de nacionalistas vascos y catalanes, en José Luis DE LA GRANJA, Justo BERAMENDI y Pere ANGUERA: *La España de los nacionalismos...*, Madrid, Síntesis, 2001, p. 241.

<sup>608</sup> Enric COMPANY y Francesc ARROYO: *Historia del socialismo...*, pp. 66-67.

<sup>609</sup> Emilio GRANDÍO: “El lustro..., p. 70.

negativa en su conjunto el Estatuto» y lamentaba «la postura sectaria de UCD, al no haber permitido un acuerdo de todas las fuerzas políticas gallegas, por la injerencia y sometimiento al poder central e intereses caciquiles de los propios parlamentarios de la UCD, y declarar la firme voluntad del partido en la lucha por la reforma del Estatuto en las siguientes fases, mediante una campaña de concienciación y movilización»<sup>610</sup>.

Aparentemente, el rechazo socialista fue rotundo, pero como también ha explicado Emilio Grandío, se produjeron fuertes discrepancias internas, ya que habría sido, según afirma este autor, el propio Alfonso Guerra quien pactara con Pérez Llorca la Disposición Transitoria Tercera del Estatuto que lo hacía nacer vacío de competencias. De esta manera, aunque apenas tuvo eco en los medios, el PSdeG fue presionado desde Madrid para votar afirmativamente el Estatuto, y cuando no lo hizo se produjo «un auténtico vuelco en la imagen que se tenía de la dirección gallega desde la dirección central»<sup>611</sup>. Attard ha defendido también, que aquel viraje de UCD, era «más o menos coincidente» con el PSOE, aunque sólo acabó pasando factura a los centristas, los únicos que mantuvieron finalmente aquella postura<sup>612</sup>.

Reflexionando sobre la posición «ambigua» del PSOE respecto a las autonomías se escribirían dos interesantes editoriales en el periódico *El País*, cuyo director, Juan Luis Cebrián, era partidario de la armonización del proceso autonómico, racionalizando el acceso a la autonomía tras la consecución de los Estatutos vasco y catalán, territorios en los que la demanda de autogobierno no sólo nacía de una honda tradición, sino que representaba un verdadero problema para la democracia española<sup>613</sup>. En este sentido, el

---

<sup>610</sup> Citado en *El Socialista*, 137 (2 de diciembre de 1979).

<sup>611</sup> Emilio GRANDÍO: «El lustro..., pp. 70-71.

<sup>612</sup> Emilio ATTARD: Vida y muerte..., p. 98.

<sup>613</sup> En un libro publicado en 1980 Cebrián afirmaba que el Gobierno «para tratar de quitar fuerza a las reivindicaciones vascas y catalanas se empeñó en lo que luego ha dado en llamarse *carnaval autonómico*, aprovechando la actitud de la mayoría de los grupos políticos y una versión particular de la historia de España, para lanzar a la calle solicitudes de este género por toda la faz de la península. Se confundió no pocas veces el debate sobre las autonomías políticas con la reclamación de la necesaria descentralización administrativa, y se marginó la vocación federalista de determinados sectores por temor a las reacciones contrarias del Ejército. Nos enfrascamos así en una discusión bastante bizantina sobre los términos de *nación* y *nacionalidad*, cuando la realidad política acuciante era, por un lado, que el pueblo catalán y el vasco se sentían no sólo con derecho, sino con el poder suficiente para ofrecer fórmulas federales de unión con el Estado, y por otro, el universal reclamo de una verdadera potenciación de las regiones en aspecto constitucional y una respuesta a los problemas de subdesarrollo del sur. La actitud del partido en el poder y los temores generalizados a que una posición no halagadora de los excesos autonomistas restara votos a todos los que concurrieran a las elecciones, complicaron extraordinariamente el tema. Así se suscitaron y alimentaron polémicas sobre la identidad nacional andaluza o extremeña antes de preocuparse por tratar de resolver las diferencias abusivas de renta, nivel de vida y educación, entre las regiones pobres y ricas de este país; y se lanzó de boca a las menos desarrolladas a una reivindicación de autogobierno de improbable futuro y de cuestionable utilidad para resolver los verdaderos problemas que

primero de ellos se publicaba al calor del debate sobre la negociación gallega, el día 16 de noviembre, clamando por la responsabilidad de los socialistas, de la que Felipe González había hecho gala, para no prodigarse en el oportunismo electoral, la ambigüedad y la demagogia en la que tanto los socialistas como el resto de partidos habían caído a la hora de «instrumentar el Título VIII de la Constitución» buscando:

una salida para que las inevitables instituciones de autogobierno de Cataluña y Euskadi no fueran sentidas como un privilegio por otros territorios españoles, a los que se brindaba la posibilidad de alcanzar regímenes autonómicos para administrar mejor sus recursos y acercar a los ciudadanos a los centros de decisiones. La fórmula, inventada, en parte, para anegar en los espesores del derecho administrativo lo que era en realidad un diáfano problema político, fue, en buena medida, un procedimiento para ganar tiempo y para vender mejor en determinados medios institucionales las autonomías catalana y vasca. Pero su propia dinámica, acelerada por la subasta demagógica en la que han pujado la mayoría de los partidos, ha terminado por transformar el autonomismo, en un mito ilógico, que, en ocasiones, lleva a la identificación de democracia con particularismo, de libertad con insolidaridad, de autogobierno con taifismo y de progresismo con privilegios.

Ante tal despropósito, el editorial reclamaba que los partidos alcanzasen el acuerdo que al parecer la Ejecutiva del PSOE sí estaba dispuesta a pactar con UCD, o que de lo contrario, se cejase en el empeño de tramitar por la vía del artículo 151 el Estatuto gallego: «Si las luchas intestinas de UCD y las malas costumbres aprendidas por el PSOE de su lectura del Martín Fierro -empollar las crías en un lugar, pero gritar en otro- hicieran imposible un acuerdo inequívoco y claro sobre el Estatuto de Galicia, sería más honesto e infinitamente más democrático abandonar la vía rápida del artículo 151»<sup>614</sup>.

En cuanto al segundo editorial, publicado un día más tarde de la aprobación del Estatuto no consensuado, repetía muchos de los tópicos ya señalados, pero contextualizados en un desenlace que era reprobado al no considerar justificadas ciertas

---

tienen planteados. El resultado de esta actitud peregrina, que contrastaba con la elevada votación que salvo en el País Vasco o Cataluña obtuvieron en las primeras elecciones los partidos de implantación nacional frente a los de formulaciones regionalistas, fue la no resolución del problema vasco y la desfiguración del catalán. Pero, sobre todo, se crearon en otros puntos del país una cantidad de vanas esperanzas autonómicas, fácil pasto de la demagogia, el arbitrio y la irresponsabilidad», Juan Luis CEBRIÁN: *La España que bosteza. Apuntes para una historia crítica de la Transición*, Madrid, Taurus, 1980, pp. 57-59.

<sup>614</sup> *El País*, 16 de noviembre de 1979.

demandas en aquel contexto, en el que el nacionalismo gallego no había alcanzado «la implantación popular y la fuerza social que hacían inexcusable una urgente respuesta a las reivindicaciones de Cataluña y el País Vasco». Así pues, situándose ante el dilema al que debían someterse a partir de aquel día los partidos que habían votado negativamente, trazaba un amargo panorama:

Galicia, cuyo tradicional absentismo electoral llegó al 48% del censo en las últimas legislativas, se encuentra ahora ante el trance de refrendar su texto en las urnas; y los partidos que votaron en contra o se abstuvieron en la comisión mixta, ante el absurdo dilema de hacer campaña a su favor, desdiciéndose de su actuación parlamentaria durante la larga noche del 21 de noviembre, o de tratar de derribarlo, en cuyo caso el autonomismo gallego se encontraría en el kilómetro cero del trayecto y con una tremenda frustración a sus espaldas. Tal vez elijan el camino cómodo del abstencionismo, que conduciría a la aprobación legal de un Estatuto desprovisto, sin embargo, de legitimidad popular.

Para teñir el paisaje de tonos todavía más surrealistas, ocurre que el Estatuto de Galicia no ofrece a nuestro juicio, de hecho, menos competencias que los textos de Guernica y de Sau. La única diferencia real no es *sustancial*, sino de *procedimiento*.

Para terminar concluyendo que: «Si la comisión mixta, aunque sea con los únicos votos de UCD, ha alumbrado un Estatuto viable y con techos de transferencias marcadamente más altos que lo que los gallegos hubieran podido esperar de la Segunda República, ¿es razonable que la derecha y la izquierda parlamentarias se pongan de acuerdo para ahogar en la cuna a las instituciones de autogobierno?»<sup>615</sup>

Temas, todo ellos, que estaban siendo debatidos internamente en el PSOE. La situación entre la Federación gallega y el Comité Ejecutivo pasaba a finales de años por momentos difíciles, con reproches y desconfianzas mutuas, que podrían explicarse a partir de la discrepancia en torno a la defensa de posiciones contrarias sobre el acuerdo en torno al Estatuto durante la fase de las negociaciones en el Congreso. Una vez aprobado el Estatuto, los socialistas tenían que posicionarse respecto al referéndum, algo que hizo el Comité Nacional del PSdeG-PSOE el 10 de diciembre, ante la presión de ser el único partido que aún no se había decidido, y lo hizo decantándose por el no (aunque no de manera unánime). Aquella resolución hizo necesaria una reunión entre el Comité Ejecutivo gallego y una representación de la Ejecutiva Federal formada por

---

<sup>615</sup> *El País*, 23 de noviembre de 1979.

Felipe González, Alfonso Guerra y María Izquierdo, para discutir si a pesar de aquella decisión del Comité Nacional esta postura se hacía oficial. En aquel encuentro se expusieron los motivos por los que el PSdeG había considerado urgente pronunciarse en un momento en el que solo restaba por hacerlo el PSOE, y se enumeraron las razones para votar no y las que había para no votar sí. Entre las últimas se encontraban las siguientes:

La creencia general del gallego medio es que hay un acuerdo entre UCD-PSOE de cara al Estatuto y a otros asuntos. El voto sí haría perder la credibilidad; rompería el partido en Galicia; se produciría una masiva desafiliación (ya de por sí no muy numerosa); podrían dimitir muchos alcaldes y concejales sin que hubiera gente dispuesta a sustituirlos; perdería cohesión el Partido (y no tiene mucha ante la crítica); se aumentaría la desconfianza ante las bases (...); y como el resultado del Estatuto va a ser «sí» después no tendremos votos en el Parlamento gallego, nuestros votos se los llevaría Unidade Galega (que dice no y busca su subsistencia); quedaríamos como españolistas, junto a UCD, y no como nacionalistas (el Partido tiene fama de españolista en Galicia) [s.o.]<sup>616</sup>.

A estas razones que buscaban sobre todo no dañar la imagen del partido y no fragmentarlo internamente, se añadían las que se aducían para reforzar el voto del no, en las que la comparación con Cataluña y Euskadi y obtener una autonomía en igualdad de condiciones cobraban un peso destacado –aunque de nuevo, sin ignorar las estratégicas–:

El análisis técnico del articulado no convence, es ambiguo, no llega al mismo techo que el catalán y el vasco, se critica la Disposición transitoria 3ª. Se conseguiría una autonomía rebajada que sentaría precedente respecto a las que vinieran después.

Por otra parte, los partidos que votaron en Galicia no en la Constitución subieron de aceptación popular. El Partido con el voto no seguiría una línea coherente y ascendería su militancia. En consonancia con la lucha nacional gallega hay que decir que no al Estatuto<sup>617</sup>.

De todos modos, el no, era un no matizado, un «“no” autónomo» y «flexibilizado en el tiempo», ya que no les interesaba solidarizarse con el resto de las

---

<sup>616</sup> Secretaría de Política Autonómica-PSOE: Acta de la Reunión con la Ejecutiva gallega “Postura ante el Estatuto Gallego” (13 de diciembre de 1979), ABFPI, 075-E 2, p. 1.

<sup>617</sup> *Ibid.*, p. 2.

posturas de izquierda, sino que querían diferenciarse de ellas y evitar cualquier tipo de «frentepopulismo», manteniendo una postura más cercana a la reforma, aprovechando por tanto la ventaja que consideraban que tenían al ser el único partido de izquierdas con representación parlamentaria. Esta era juzgada como la opción más beneficiosa, ya que, como estaban convencidos de que el resultado del referéndum sería positivo, la flexibilidad favorecería la reforma del Estatuto y al mismo tiempo se podría perjudicar a los centristas: «con nuestro “no” se puede asestar un duro golpe a UCD».

Esta posición, sin embargo, no sería hegemónica, y algunos socialistas gallegos, como Celso Montero, expresaron dudas, recomendando la abstención, una abstención «agresiva» que no dividiría a Galicia en bloques de sí o no. Este político abogaba por esta opción –que fue derrotada en la votación del Comité Nacional gallego– porque le parecía la más coherente y responsable, criticando un «no que se podría mezclar con el no del nacionalismo radical, que repudia en orden a llegar a un nacionalismo más racional que garantice la solidaridad entre los pueblos. Cree que saldrá el sí, pero señala que no debe olvidarse el peligro de quedarse cinco años sin Estatuto si sale el no»<sup>618</sup>. Parecía como si los cálculos socialistas previeran una abstención masiva del electorado, a pesar de que ellos y el resto de grupos abogasen por un no y no por la abstención<sup>619</sup>.

La reunión del 13 de diciembre es además especialmente reveladora por la actitud de la Ejecutiva Federal, y no sólo respecto a la autonomía gallega, sino en relación al cambio que querían imprimir en la dinámica autonómica del conjunto del Estado, con valores que recuerdan a los planteados por los editoriales de *El País* ya comentados. A este respecto Felipe González replicaba la exposición del PSdeG con los siguientes argumentos:

Nos encontramos ante el primer ensayo mundial de un Estado de autonomías. El Gobierno se vio desbordado por la explosiva situación del País Vasco y, la latente peligrosidad de la situación en Cataluña. Se llegó a una Constitución en que se definía a España como a un Estado de autonomías, a la que se podía llegar por varios procedimientos (no demasiado transparentes en el texto constitucional). Como dijo

---

<sup>618</sup> *Ibid.*, pp. 2-3. Véase también, Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo...*, p. 84.

<sup>619</sup> Aún así, en algunos ámbitos demostraban que aquella posibilidad existía si los electores del resto de partidos votaban no, ya que como indicaban en *El Socialista*, sólo sería necesario que los partidarios del Bloque Nacional Galego, que habitualmente se inhibían ante la autonomía, decidieran votar negativamente para no favorecer a UCD con la abstención. Esta perspectiva, que públicamente sólo reconocían negativa para UCD, era vista con temor dentro del Partido, en *El Socialista*, 143 (13 de enero de 1980).

Pérez Llorca; sin quererlo nos hallamos ante un Frankenstein que no sabemos cómo va a reaccionar.

Es necesario racionalizar el proceso autonómico; no se pueden tener quince comunidades autónomas diferentes con unos diversos grados de competencias en quince ministerios diferentes. Así, este país sería ingobernable. Las autonomías deben tener una homogeneidad en las competencias. (...)

El PSOE reconoce que el proceso autonómico es el más grave, delicado y necesario de resolver. No buscamos negociaciones puntuales en otros partidos sobre este tema, queremos negociar globalmente» [s.o.]<sup>620</sup>.

Aquella declaración de intenciones demostraba que se había trazado una línea a partir de la aprobación del Estatuto catalán y demostraba que había que empezar a plantear la cuestión globalmente, por lo que el Estatuto gallego tenía que asumir ciertos recortes, como había hecho el catalán con el vasco, y a partir de aquel momento racionalizar el proceso autonómico. Además González, a pesar de reconocer unos recortes en competencias «por debajo de lo esperado», recurría al mismo argumento que se había utilizado en el editorial de *El País* e indicaba que este Estatuto era en cualquier caso mejor que el de 1936 y que el problema ante la opinión pública dependía de la imagen que se quisiera dar de él, opinando que «el contenido del mismo es más secundario como motivación del pueblo ante la votación, casi nadie lo va a leer». A pesar de lo dicho, teniendo en cuenta la opinión de los socialistas gallegos, y los temas de imagen que iban asociados a aquella cuestión, el Secretario General, incitaba a estudiar si convenía más al partido votar de manera afirmativa o negativamente – teniendo en cuenta que daban casi por descontado un resultado del plebiscito que aprobara el Estatuto, por lo que el modelo global no se vería afectado–:

En cuanto a una toma de postura, descarta la abstención e invita a la reflexión profunda con la previa eliminación de desconfianzas centro-periferia a nivel de compañeros. Hay que aprovechar la crisis de UCD en Galicia y considerar la postura ante el Estatuto como un problema de imagen de Partido (pues el Estatuto no es tan rechazable y en un principio se pensaba decir sí; ahora hay que recapacitar).

---

<sup>620</sup> Secretaría de Política Autonómica-PSOE: Acta de la Reunión con la Ejecutiva gallega “Postura ante..., p. 4.

Debemos atenernos a las cifras (%) que nos arrojan las más recientes votaciones generales y ver el coste de una u otra postura. Hay que tratar de no quebrar la coherencia, o si de quiebra cuándo se hace con menos coste [s.o.]<sup>621</sup>.

Con un tono menos conciliador, y evidentemente molesto, Alfonso Guerra reprochaba a los compañeros gallegos por no haber ido lo suficientemente preparados a aquella reunión, con encuestas sobre la opinión a la población o datos sobre las movilizaciones, pero sobre todo por la postura que habían adoptado tanto en la votación del Estatuto como en la última reunión del Comité Nacional, contraviniendo la opinión de la Ejecutiva Federal. Pero lo más llamativo es quizá su defensa de la Disposición transitoria tercera:

Recuerda que estuvo en la ponencia para la elaboración del Estatuto. En ella hubo que luchar contra dos frentes: UCD y la desconfianza de los propios compañeros de ponencia (manifestada en algunas ocasiones y en otras no) ante la sospecha de que existía un previo acuerdo con UCD. Vio como al final de la elaboración los compañeros se iban con la alegría del no y él con la tristeza de no haber podido conseguir un sí al no haber sido posible una modificación del Estatuto.

Señala sobre el tema concreto de la disposición transitoria tercera, que ésta nos beneficia en Galicia al ser centralista y no autonomista. En cuanto al resto, apunta que en el aspecto de financiación el Estatuto gallego está muy por encima del catalán [s.o.]<sup>622</sup>.

En cuanto a la posición a adoptar en torno al referéndum, aconsejaba, como había hecho González, prudencia, flexibilidad y tiempo para estudiar mejor los pros y los contras:

Da por sentado que si la votación fuere a corto plazo, la decisión razonable sería el no al Estatuto; pero, al no haber fecha fija de referéndum no hay urgencia en la resolución. No olvida tampoco el axioma político de que la convocatoria de un referéndum es para obtener el sí, si no el Gobierno no lo convocaría, habría dilación en la fecha.

Señala también que sería conveniente, antes de rigidizar posturas, hacer una encuesta de opinión sobre el Estatuto y luego según ésta decidirse<sup>623</sup>.

---

<sup>621</sup> *Ibid.*, p. 5.

<sup>622</sup> *Ibid.*, pp. 5-6.

<sup>623</sup> *Ibid.*, p. 6.



Así, a pesar de que el anuncio de la votación del Comité Nacional el PSdeG, tenía tratamiento de oficial en la prensa, el PSOE no desmentía esta cuestión pero no llegó a pronunciarse oficialmente. Mientras el referéndum no era convocado por el Gobierno de Suárez, siguiendo el axioma referido por Guerra, los socialistas creían que todavía tenían tiempo para decidir cuál sería la mejor opción para sus intereses. De hecho, mientras se publicaban noticias en *El Socialista* dando por descontado la negativa del PSOE, en una reunión entre los Secretarios Generales de nacionalidad y miembros de la Ejecutiva Federal, a principio de enero de 1980, la Secretaria de Política Autonómica informaba de que «en el Estatuto gallego no se están dando diferencias apreciables respecto al vasco y catalán y que si los futuros techos del resto de las autonomías tuvieran el del gallego podrían darse por satisfechos, pese a que los compañeros gallegos se inclinan a un voto negativo (lo que es un problema para el voto de futuros estatutos porque tendrían que hacer lo mismo en otros territorios)»<sup>624</sup>.

Durante este período, los socialistas todavía podían jugar esta baza, forzando a UCD a acercarse a sus posiciones para las futuras negociaciones en las que tanto la Ejecutiva del PSOE como Rodríguez Pardo, estaban poniendo sus esperanzas, mientras el proceso gallego quedaba bloqueado durante casi un año. Aquella amenaza del no, como declarara Rodríguez Pardo, había obligado a UCD a paralizar el referéndum mientras tenía que buscar un acuerdo amplio, cuya «estrategia *tiene* que pasar con el acuerdo con el PSOE. No digo que sea así, sino que *tiene* que ser así para UCD»<sup>625</sup>. Finalmente, la Ejecutiva Federal impuso a la Federación gallega la indicación de negociar con UCD para desbloquear el proceso, y éste lo hizo, además de para acatar la disciplina de partido, porque desde el primer momento había creído que un resultado negativo en aquel plebiscito sería perjudicial para Galicia. Rodríguez Pardo, que había defendido que la mejor solución sería reformar con posterioridad el Estatuto, tenía ahora la posibilidad de negociar con los centristas una formulación que convenciera más al socialismo gallego. Pero serían de hecho estas negociaciones secretas y la colaboración con UCD, las que le obligarían a dimitir en junio de 1980, acusado de permitir que se

---

<sup>624</sup> Secretaría de Política Autonómica-PSOE: Acta de la “Reunión con los Secretarios Generales de nacionalidad y región y otros responsables de política autonómica” (8 de enero de 1980), ABFPI, 075-E2, p. 10.

<sup>625</sup> *El Socialista*, 143 (8 de enero de 1980)

impusieran las directrices de la Ejecutiva Federal minando la autonomía de la Ejecutiva gallega<sup>626</sup>.

Así pues, en noviembre se iniciaba el bloqueo de la autonomía gallega, que debe ser entendido no desde un punto de vista aislado, sino como una pieza clave de la estrategia global de UCD con la que querían reconducir la construcción del Estado de las Autonomías para hacerlo más homogéneo y evitar posibles «tendencias centrífugas». Así sucedía también con los socialistas –que pese a todo no puede decirse que tuvieran exactamente la misma idea del modelo de Estado que los centristas–, aunque parece que para ellos fue más difícil disciplinar a la federación de este partido en Galicia. Por otra parte, los socialistas contaron con una ventaja respecto al partido de Gobierno que les permitía actuar teniendo presente también su imagen. Los centristas habían tomado una iniciativa que jugaría en su contra, ya que, al aprobar de forma unilateral un proyecto con el que nadie –ni siquiera AP– estaba de acuerdo, se cargaba en ellos la responsabilidad del referéndum, permitiendo que el resto de partidos, incluido el PSOE, actuaran teniendo esto muy presente. Los socialistas con esta actitud, conseguía defender la autonomía gallega sin incumplir sus promesas y sin ofrecer una imagen incoherente que les perjudicara, apostando además por la igualdad del modelo. Por otra parte, se corría el riesgo de que esta actitud permitiera que se siguiera avanzando en una carrera competencial que querían evitar, por ello se mantenían indecisos en su estrategia, aprovechando aquella paralización para tratar de negociar la racionalización del modelo, sin privilegios, pero sin prisas. Sin embargo, aunque la importancia de Galicia fuera clave en aquel contexto, no fue el territorio que adquirió más relevancia en aquel tablero de ajedrez en el que se convirtió la cuestión autonómica en España. Andalucía, por las cuestiones que mencionaremos, adquirió una relevancia posiblemente inesperada, sobre todo para el PSOE, que se jugaba mucho más en esta nacionalidad que en la gallega.

## **2. La urgencia del Estatuto andaluz**

Como se ha planteado, también en el capítulo anterior, Andalucía iba a convertirse en un símbolo al que el PSOE no iba a poder, ni a querer, renunciar. De hecho, cuando ya empezaban a manifestarse dudas y divisiones en otras nacionalidades y regiones sobre la actuación autonómica, el proceso andaluz se mostraba con un cierto

---

<sup>626</sup> Emilio GRANDÍO: “El lustro..., pp. 71-73.

aire de triunfalismo, como si la autonomía fuese la única opción y estuviese más que asumido que tras las nacionalidades históricas, éste era el territorio en el que se debía actuar de manera más urgente<sup>627</sup>. La actualidad informativa en otras comunidades, entre las que destacaba el País Valenciano, mostraba los problemas que estaban sucediéndose para poner en marcha el proceso autonómico –sobre todo los conflictos con UCD–, incluso, las divisiones que esto generaba en el seno del socialismo<sup>628</sup>. Mientras tanto, en Andalucía parecía existir un cierto acuerdo entre todas las formaciones políticas que permitía la unidad de posturas dentro de la Federación socialista andaluza, con alguna salvedad, dando la sensación de que se avanzaba hacia la autonomía de manera más rápida y eficaz.

El consenso también se daba en aquel momento con la UCD andaluza, liderada por Manuel Clavero, a quien muchos atribuyen el diseño inicial del «café para todos», y andalucista convencido, como se acabó demostrando. En aquel momento, la línea de este partido, y en especial de su dirigente, coincidía con las ideas expresadas en el debate sobre los desequilibrios regionales, entendiéndose la autonomía como una manera de desarrollar Andalucía, al mismo tiempo que se advertía sobre el peligro de crear un modelo estatal que agrandara aún más el abismo con aquellas comunidades más ricas, representadas por el País Vasco y Cataluña:

Por otra parte, lo que resulta evidente es que los territorios más desarrollados del país son aquellos en los que la reivindicación autonómica ha sido más fuerte a lo largo de la historia y que incluso llegaron a tener aprobados Estatutos de autonomía. Derogados estos, se ha mantenido el alto nivel de dichos territorios cuya reivindicación autonómica no se extinguió. Promulgada la Constitución, reconocer la autonomía plena a dichos territorios y no a los otros puede ser un cauce por el cual se amplíe cada vez más el foso profundo que separa a unas regiones de otras.

---

<sup>627</sup> Así se podía observar por ejemplo a través de la lectura de su órgano de comunicación *El Socialista* durante esta etapa.

<sup>628</sup> En el País Valenciano a estas cuestiones debía sumarse la violencia «blavera» que se estaba suscitando alentada por sectores de la derecha y que hacía del anticatalanismo y de la discusión sobre los símbolos una bandera muy poderosa que como se verá, caló en muchos sectores de la sociedad. Los episodios fueron constantes y afectaron en ocasiones directamente a personalidades socialistas, como sucedió por ejemplo el 3 de septiembre en el municipio valenciano de Quart de Poblet, donde tanto Manuel Girona, Presidente de la Diputación de Valencia, y José Luis Albiñana, fueron atacados por una multitud de violentos, y al parecer, no fueron protegidos debidamente por las fuerzas policiales, debido a la connivencia del movimiento «blavero» con UCD y los delegados gubernativos, en *El Socialista*, 126 (16 de septiembre de 1979).

(...) Concebidas las autonomías sobre el principio de solidaridad, tal como establece la Constitución, las regiones subdesarrolladas pueden obtener mayor cantidad de inversiones para su desarrollo. También se despertará una conciencia regional en sus distintas clases sociales y se adoptarán en el territorio gran cantidad de decisiones que hoy se toman en Madrid. Ello puede significar una esperanza para tales regiones, que al tener poder autonómico e instituciones propias contarán con voz que defienda sus intereses<sup>629</sup>.

Andalucía, convertida en un icono del subdesarrollo y de la injusticia pasaba a ser por excelencia la región necesitada de una solución inmediata frente a su desangramiento social y económico. Requería de una solución urgente reclamada de forma repetitiva por los medios y por los políticos, una solución que profundizaba la idea que identificaba la autonomía principalmente con la igualdad y la solidaridad. Y aunque esta situación no duraría siempre, supondría un precedente a tener muy en cuenta para el futuro desarrollo de los acontecimientos, cuando los Estatutos vasco y catalán fueran aprobados y las estrategias de los principales partidos comenzaran a cambiar de signo o a clarificarse.

Así, tras las elecciones generales había sido necesario renovar la Junta de Andalucía, constituyéndose un nuevo Pleno el día 2 de junio<sup>630</sup>. La novedad más trascendente fue quizá el nombramiento de Rafael Escuredo como Presidente de la misma, en sustitución del socialista Plácido Fernández Viagas, quien dimitió de su cargo, por un «deber de conciencia» al no compartir los nuevos planes del PSOE sobre la autonomía andaluza<sup>631</sup>. Estos pasaban por situar el andalucismo en un lugar

---

<sup>629</sup> Manuel CLAVERO: *Forjar Andalucía*, Argantonio. Ediciones Andaluzas, 1980, pp. 172-178

<sup>630</sup> La relación de fuerzas en el nuevo Pleno se distribuía de la siguiente manera: siete parlamentarios del PSOE, seis de UCD, uno del PCE y uno del PSA; y seis diputados provinciales del PSOE, seis diputados, ocho de UCD y dos del PCE. En el Consejo Permanente, como órgano ejecutivo, eran en cambio cuatro parlamentarios del PSOE, tres de UCD, uno del PCE y uno del PSA; y tres diputados provinciales por el PSOE, cuatro para UCD y uno para el PCE, en Manuel RUIZ ROMERO: *La conquista del Estatuto de Autonomía para Andalucía (1977-1982)*, Sevilla, Instituto Andaluz de Administración Pública, 2005, p. 163.

<sup>631</sup> Declaraciones a la agencia EFE citadas por José María de los Santos López, en José María de los SANTOS: *Andalucía en la Transición (1976-1982)*, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2002, p. 247. De hecho, este mismo autor relataría cómo, acorde a la estrategia del PSOE en aquel momento, el primer Presidente de la Junta decía no sentirse andalucista, y destacaba las siguientes intervenciones públicas realizadas por el político y reproducidas en *Andalucía Libre* en 1978: «Yo no tengo vena ninguna de andalucismo, ni antes ni ahora. Por supuesto, me declaro no andalucista, me molesta la palabra andalucista; no la palabra Andalucía, por supuesto»; o «Lo que me parece totalmente impensable de una manera u otra, es que quienes nos decimos representantes de los trabajadores, vayamos a querer ahora hacer nosotros el papel que no cumplieron los burgueses y empezar por crear un sentido de nacionalidad», *Ibid.*, p.251.

privilegiado de su discurso, y convertir la lucha por la autonomía en la lucha de su Partido, entre otras cosas para combatir al que se estaba convirtiendo en una seria competencia electoral, el PSA.

Cuenta Alfonso Guerra que fue a él a quien primero ofrecieron ese cargo, pero que se negaría, no porque no viera la necesidad de reforzar aquel mensaje que estaba calando fuertemente entre la población, sino porque de un modo similar a como le sucedía a Fernández Viagas, le incomodaba hacerlo él mismo:

No me encontraba con la fuerza suficiente para sumergirme en la retórica del andalucismo. Era consciente de la necesidad de levantar la condición social, cultural y económica de los andaluces, comprendía que si alguna región tiene una personalidad acendrada como colectivo esa es Andalucía, pero no me sentí capaz de resistir la simulación diaria de «rebuscar» en el pasado rasgos de distinción diaria de todos los otros españoles. Mi amor por Andalucía, mi sentimiento hogareño por mi tierra, no podía neutralizar mi espíritu universal, mi concepción de ser humano universal, imposible de aceptar un encorsetamiento regional o provinciano.

Las ideas nacionalistas nunca me parecieron fruto de la racionalidad. El discurso étnico, como el religioso, es separador, divisionista, planta fronteras, establece diferencias insalvables, limita, coarta, empobrece. Los que se sitúan en la creencia de estirpe, clan, tribu o nación deben contar con la libertad de explicitar y difundir sus ideas, pero algo muy diferente es compartirlas o entender que se trata de un derecho natural que los demás deben aceptar.

(...) yo ofrecería la mitad de mi vida para que los nacionalistas puedan defender sus postulados; la otra mitad la necesito para impedir que esos postulados, en los que no creo, sean una realidad<sup>632</sup>.

Además de advertirse un sentimiento identitario español que encubre, como ya se ha visto y explicado en otras ocasiones, con una retórica universalista; en el fondo, lo que demuestra es la existencia de una estrategia planificada que trata de identificar al PSOE con la lucha autonómica y la identidad andalucista, que Guerra aceptaba y compartía como necesaria, pero que según expresaba, le resultaba tedioso de mantener en lo personal.

---

<sup>632</sup> Alfonso GUERRA: *Cuando el tiempo...*, p. 244.

En cambio, Escuredo encarnó aquellos valores y llegó a forzar posturas que su Partido no había planeado, tanto, que aquel cambio en la línea política del PSOE acabó por conocerse como «escuredismo». De hecho, en sus primeras declaraciones recogidas por la prensa socialista, el nuevo Presidente se afanaba en defender la identificación entre andalucismo de clase y progresismo, enfrentando ambos conceptos al conservadurismo y al interclasismo. Además, añadía:

“creo, y no de ahora como tú bien sabes, que existe un país andaluz, que es una realidad política y social que existe un sentimiento de nacionalismo en Andalucía, por eso quiero dejar muy claro que socialismo y nacionalismo no son concepciones incompatibles. El concepto de nacionalidad no depende de la voluntad política de un partido, sino del nivel de conciencia que el pueblo asuma. La conciencia de ser pueblo diferente, la conciencia de una identidad cultural propia y, por supuesto, desde una perspectiva socialista el asumir una responsabilidad se puede convertir en el factor principal y fundamental para el proceso de rehabilitación y transformación social y cultural de un pueblo<sup>633</sup>”.

A través de estas palabras se observa cómo Escuredo revalorizaba la idea de la adquisición y potenciación de una conciencia colectiva andalucista, no sólo en sí misma, sino como medio de desarrollo del pueblo andaluz, y por ello aludía a la responsabilidad del Partido Socialista para reforzarla y situarla en una posición prioritaria dentro del ideario del partido. Una autonomía que era presentada incidiendo en valores asociados a su personalidad diferenciada –algo que no se hacía siempre–, pero cuya imagen completaba a través de su proyección como herramienta para combatir la desigualdad socioeconómica de los pueblos más desfavorecidos de España. Servía así al fin de acabar con el sistema centralista al que se veía como el origen fundamental de aquellos males. La afirmación de Escuredo no dejaba lugar a dudas: «las cosas están siendo cada vez más claras para este maltratado Sur, donde la autonomía pasa por la eliminación del subdesarrollo»<sup>634</sup>. En este sentido, en una entrevista a *El Socialista*, vinculaba el nacionalismo como reivindicación cultural con el nacionalismo como reivindicación de unos determinados intereses económicos. Lo hacía al comparar el nacionalismo del s. XIX en el País Vasco o Cataluña con el de la Andalucía de su tiempo, en el que convivían de igual manera ambos aspectos aunque en el andalucismo las motivaciones

---

<sup>633</sup> *El Socialista*, 112 (10 de junio de 1979).

<sup>634</sup> *Ibid.*

económicas surgían como consecuencia de unas posiciones de clase diferentes<sup>635</sup>. Ese nacionalismo de clase, era por otra parte el que no renunciaba «bajo ningún concepto al principio de unidad de clase que el PSOE tiene que promover y desarrollar»<sup>636</sup>, una unidad de clase que en la práctica siempre acababa en las fronteras españolas. Así, las prioridades de Escuredo no dejaban lugar a dudas cuando ante la pregunta de qué era para él el nacionalismo andaluz sentenciaba:

El nacionalismo es, para mí, la gran posibilidad para que las clases populares y las clases trabajadoras andaluzas sean, efectivamente, las protagonistas del proceso autonómico, única vía para hacer salir al país del subdesarrollo<sup>637</sup>.

En esta concepción del nacionalismo existía una dosis de agravio comparativo respecto a las regiones más ricas que componía posiblemente la esencia del andalucismo, y de ello no era tampoco ajeno el Presidente de la Junta de Andalucía, que aunque se afanaba como muchos otros en no construir una identidad en negativo como rechazo a Cataluña o al País Vasco, no dejaba de hacer referencia a la igualdad con respecto a aquellos territorios –que no mimetismo–. Tras referirse al terrorismo vasco y al paro andaluz, como los dos problemas más importantes del país<sup>638</sup>, apelaba a la necesidad de no discriminar el Estatuto de Andalucía respecto al vasco o al catalán, y aunque admitía ciertas especificidades, hacía una incidencia especial en la financiación, plano en el que batallaría ante cualquier privilegio:

---

<sup>635</sup> Ante esta afirmación Escuredo trató de afinar más sobre la identidad cultural diferenciada en Andalucía, haciendo una descripción que acababa resultando un tanto vaga: «Andalucía es un pueblo que cualquiera que haya viajado, conocido otra realidad territorial del Estado, se da cuenta que tropieza con una realidad diferencial frente a otros pueblos. Se ha discutido mucho de si tenemos una cultura propia. Yo estoy plenamente convencido de que el *pueblo andaluz* la tiene. Otra cosa sería si esa cultura, como se ha discutido fuertemente, es unitaria o multiforme. En cualquier caso, lo que nadie discute es que tenemos una identidad cultural», en *El Socialista*, 117 (15 de julio de 1979).

<sup>636</sup> *El Socialista*, 112 (10 de junio de 1979).

<sup>637</sup> *Ibid.*

<sup>638</sup> Otra declaración en este sentido la realizaría en plena campaña por conseguir la adhesión de los Ayuntamientos por la vía del artículo 151: «Madrid no responde (...) porque en Andalucía no ha aflorado la muerte como en el País Vasco. Somos conscientes de que aunque el terrorismo es un claro problema de Estado, el paro puede llegar a convertirse en un futuro nada lejano también en un grave problema y con consecuencias del todo imprevisibles», en *El Socialista*, 120 (5 de agosto de 1979). Es relativamente frecuente encontrar declaraciones de este estilo justificando una atención preferente de la cuestión andaluza. De hecho, en muchas ocasiones, los comentarios eran en tono recriminatorio, quejándose de que fuera la violencia la que estuviera dando prioridad al País Vasco, cuando sin ella los problemas de fondo de Andalucía serían mucho más perentorios. Incluso, en algunos artículos de opinión se responsabilizaba al País Vasco de lastrar aún más la economía andaluza con su violencia, al perjudicar el turismo de su región; o se advertía de que de no llegarse a una solución, esta podría surgir también en Andalucía. En otra ocasión, José Rodríguez de la Borbolla se refería a dos enemigos fundamentales para la consolidación de la democracia en España: el terrorismo y la crisis económica, concretamente en Andalucía, en *El Socialista*, 124 (2 de septiembre de 1979).

a nosotros, por ejemplo, lo que nos debe preocupar seriamente es la cuestión de las haciendas regionales, nacionales o como se les quiera llamar. En definitiva, el *tema de los dineros que vayan a nutrir a estos respectivos autogobiernos en el marco de los estatutos*, no debe suponer ningún tipo de discriminación. Aquí sí que el pueblo andaluz, junto con la Junta de Andalucía que es su representante, si llegase el momento, tendría que ser *fuertemente beligerante*. Y en este punto vamos a observar, con mucha atención este tema, porque si se producen discriminaciones, yo creo que no solamente se estaría cometiendo un acto de injusticia con un pueblo subdesarrollado y maltratado como el andaluz, sino que se estaría desestabilizando el proceso democrático, que como ya he tenido ocasión de señalar anteriormente, se inicia no solamente por la reivindicación de las libertades individuales, sino también por la libertad de los pueblos, y la libertad de un pueblo pasa, al menos, por que desde el punto de vista económico exista una solidaridad que sitúe en un mismo plano de igualdad en el tratamiento económico y financiero a pueblos desarrollados y a pueblos subdesarrollados<sup>639</sup>.

Estos eran los planteamientos con los que se presentaba a Escuredo desde la prensa socialistas, el nuevo «hombre del Sur» que casi seguro había llegado como revulsivo para no dejarse comer un terreno amenazado por el nacionalismo andalucista. Quería, según decían, devolver la esperanza a los andaluces acelerando el proceso autonómico; y «evitar esa manipulación de un sector minoritario que pretende asumir un protagonismo, no con el deseo de transformar, sino de anquilosar tras el verbalismo nacionalista»<sup>640</sup>. Como ya se ha planteado aquí, lo publicado en el portavoz oficial del PSOE durante esta etapa, y hasta que comenzó a cuestionarse públicamente la vía del 151—sobre todo a partir de la aprobación de los Estatutos Vasco y Catalán— para aquellas regiones que no fueran las tres nacionalidades históricas, daba una imagen de normalidad y de acuerdo respecto a la autonomía andaluza que contrastaba con las dudas —incluso en el seno de las propias federaciones de región o nacionalidad— y las incipientes dificultades que ya se venían manifestando en otros territorios sobre sus respectivos procesos<sup>641</sup>. De hecho, en aquellos momentos, las críticas desde el PSOE en

---

<sup>639</sup> *El Socialista*, 117 (15 de julio de 1979).

<sup>640</sup> *Ibid.* Esa sensación de impulso es constante en los números de *El Socialista* de aquella etapa, con informaciones continuas, por ejemplo, sobre sus viajes a Madrid para entrevistarse con figuras destacadas del Gobierno (como Fernando Abril Martorell), para presionarles y arrancarles compromisos, aunque fuera abordándoles por los pasillos, con foto incluida, en *El Socialista* nº115 (1 de julio de 1979).

<sup>641</sup> Aragón, Canarias o sobre todo el País Valenciano son ejemplo de ello. Canarias ya denunciaba a finales de julio el lastre que podía suponer para su nacionalidad la ralentización que el Gobierno estaba imprimiendo al proceso autonómico en aquellos territorios, en *El Socialista*, 119 (29 de julio de 1979). El País Valenciano aparecía frecuentemente en la prensa socialista por estas cuestiones, generalmente



relación a la autonomía andaluza se dirigían más hacia el PSA, que hacia la UCD andaluza, partido que en todo caso recibía los ataques a raíz de la posición del Gobierno central<sup>642</sup>. Desde el ámbito socialista se tachaba al PSA de profesar un nacionalismo interclasista<sup>643</sup>, frente al nacionalismo que se defendía en el PSOE, nacido a raíz de sus posiciones de clase.

En cualquier caso, parecía haber en la Junta un consenso sobre la consecución de la autonomía andaluza por la vía del 151, motivada en gran medida por la voluntad de hacer progresar social, cultural y económicamente a un pueblo especialmente castigado por el modelo de desarrollo que hasta entonces había dominado España. Por ello, el 11 de agosto, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Blas Infante, símbolo del andalucismo, la Junta formuló una declaración en la que reivindicaba un Estatuto que otorgara una autonomía plena, con el verdadero objetivo de reestructurar económica y socialmente Andalucía, ya que sin este logro la autonomía sería en vano. Por otro lado, también se consideraba vital la recuperación de la cultura, la historia y la tradición andaluza; aunque en un segundo plano respecto a la prioridad que suponía acabar con el paro, la emigración, la marginación y en definitiva el subdesarrollo<sup>644</sup>.

Y en este contexto, regido por un relativo consenso, llegó el primer acuerdo para el Proyecto de Estatuto, el borrador del conocido como Estatuto de Carmona<sup>645</sup>. A pesar de ello, ciertos aspectos fueron más discutidos, dejando abiertas algunas polémicas para

---

denunciándose las maniobras de UCD, pero en ocasiones revelando también los enfrentamientos internos dentro del PSPV-PSOE por estas cuestiones. Como anécdota, contrasta que en el mismo número que dedicaba varias de sus páginas a cubrir de forma triunfal la noticia sobre la finalización del proyecto de Estatuto andaluz, conseguido a partir del consenso de todas las fuerzas políticas; se dedicara un importante espacio también para explicar cómo la autonomía en el País Valenciano se había convertido en un «problema», en *El Socialista*, 123 (26 de agosto de 1979).

<sup>642</sup> Coincidiríamos en este análisis con Agustín Ruiz Robledo, que indicaría que mientras que durante la Presidencia de Plácido Fernández Viagas en la Junta de Andalucía los enfrentamientos más constantes fueron entre el PSOE y UCD, en la segunda etapa la rivalidad se daría entre el PSA y el resto de los partidos de la Junta, en Agustín RUIZ ROBLEDOS: *La Comunidad Autónoma de Andalucía*, Sevilla, Parlamento de Andalucía, 1988, p. 39.

<sup>643</sup> *El Socialista*, 122 (19 de agosto de 1979). Este argumento se veía reforzado por algunas alianzas que el andalucismo había establecido, y establecería con UCD, desde permitir su investidura, hasta el pacto que realizaron para desbloquear la autonomía andaluza, contado por algunos de sus protagonistas. Además de por su actitud ante el nacionalismo catalán.

<sup>644</sup> Declaración reproducida en *El Socialista*, 122 (19 de agosto de 1979). En otra ocasión, José Luis Rodríguez de la Borbolla, destacaba tres problemas entre los que afectaban a Andalucía, muy relacionados todos –no es muy difícil de adivinar en qué partido piensa– con el PSA: «la división de la clase trabajadora en Andalucía, la llegada de los advenedizos –“que ahora se visten de verde y blanco para irse a la cama”– y, por último, la demagogia de otros partidos que se dicen de izquierdas pero que no contribuyen a levantar el país con el trabajo de todos», en *El Socialista*, 123 (26 de agosto de 1979).

<sup>645</sup> La Ponencia estaba formada por José Rodríguez de la Borbolla y Joaquín Navarro por el PSOE; Cecilio Valverde y Soledad Becerril por UCD; Juan Calero por el PCE; y Rafael Illescas por el PSA.

el futuro. En concreto, tres fueron los puntos que más fricción produjeron y que quedaron «aparcados»: la composición de la Asamblea de Parlamentarios; la definición de Andalucía como nacionalidad o como comunidad autónoma; y el de la condición política de andaluz<sup>646</sup>.

Fue quizá la definición de Andalucía la que más cola trajo, ya que dividió no sólo a la Junta sino también a la propia Federación Socialista Andaluza. La postura oficial de los socialistas fue la defendida por su Secretario General y ponente estatutario José Rodríguez de la Borbolla, que compartía, como UCD y el PCA, el acuerdo final en el que no se mencionaba el término nacionalidad sino el de Comunidad Autónoma<sup>647</sup>. Según confirmaría después el Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Regional presentado ante el II Congreso de esta federación, los ponentes socialistas habían recibido el encargo, a partir de una reunión celebrada entre ellos, la propia C.E y los miembros del Partido presentes en la Junta, de reafirmarse en la definición de Andalucía como Comunidad Autónoma<sup>648</sup>. Este dirigente consideraba innecesaria la disputa, mantenida en el seno de la Junta sólo con el PSA, visto que en primer lugar el alcance final del Estatuto se refería a una autonomía total, y que por otra parte, en ese mismo articulado se referían a la igualdad y solidaridad con el resto de regiones<sup>649</sup>. Más severo se mostraría en una entrevista concedida a *El Socialista*, cuando afirmara que le parecía una «falsa polémica» que «no responde a la operatividad política real» y que era «inoportuno el debate sobre el término nacionalidad o región, porque tanto el término región como el término nacionalidad sirven para definir la realidad andaluza». La importancia recaía, como ya había manifestado en otras declaraciones, en la garantía de

---

<sup>646</sup> Se trataba este de otro punto de desacuerdo entre el PSA y el resto de la Junta, ya que los primeros eran partidarios de que la fórmula «vecindad administrativa», que atribuía el voto según la inscripción censal de cada individuo, fuera sustituida por la de «vecindad civil», en *El País*, 16 de agosto de 1979. Aunque como se detallaba en el Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Regional presentado ante el II Congreso de esta federación, la Resolución aprobada por el I Congreso de la FSA, abogaba por que la ciudadanía viniera determinada por la vecindad civil, en FSA-PSOE: “Memoria de Gestión...”, p. 5. 4.

<sup>647</sup> El artículo 1 decía así: «El pueblo andaluz, como expresión de su identidad histórica y política, y en el pleno ejercicio de sus derechos de autogobierno, se constituye como comunidad autónoma, de acuerdo con la Constitución, que es su norma constitucional básica», en *El Socialista*, 123 (26 de agosto de 1979).

<sup>648</sup> En línea con lo que ya se había mantenido en la Resolución del I Congreso de la FSA-PSOE: «Andalucía es una región autónoma del Estado español», en FSA-PSOE: “Memoria de Gestión...”, pp.5.3-5.4.

<sup>649</sup> En sentido semejante se pronunciaba el ponente comunista Juan Calero, exponiendo lo innecesario de una determinada definición cuando el objetivo de la plena autonomía se cumplía: «Nosotros opinamos que los términos “nacionalidad” y “comunidad autónoma” no son contrapuestos. Este último término surge en la Constitución y engloba tanto a las nacionalidades como a las regiones. El problema no se reduce a una discusión terminológica sino que hay que detenerse a valorar el contenido general del Estatuto que articula una autonomía plena», en *El Socialista*, 123 (26 de agosto de 1979).

que se obtendría la máxima capacidad de autogobierno de manera que Andalucía no fuera discriminada frente a otros pueblos<sup>650</sup>.

Se trasladaba el mensaje de que la discusión era superflua mientras que se imponía uno de los dos términos. El debate sin embargo existía, porque existían dos posiciones enfrentadas, que de hecho convivían también en el seno de la FSA-PSOE. Como ya se ha expuesto, Escuredo representaba una nueva estrategia más amable con el nacionalismo andaluz, que dio origen a una política determinada. Pero el «escuredismo» no fue hegemónico, sino que mantuvo una pugna con otro sector que a la postre acabaría venciendo sobre el anterior:

La estrategia del PSOE aparece desde el primer momento con una tendencia bipolar. El «escuredismo» es su cara más radical, más nacionalista, más de búsqueda de convergencia con el PSA, provocando la gran crisis de identidad de este colectivo que hemos analizado. La otra tendencia es la «ortodoxa», representada por el aparato del partido, especialmente por Rodríguez de la Borbolla. En ella prevalece el socialismo a secas frente al nacionalismo, y desde ella se trata de “racionalizar” la autonomía andaluza. Borbolla, no Escuredo, representará los intereses del PSOE en los debates del Estatuto<sup>651</sup>.

Aunque no compartamos algunas cuestiones mencionadas por de los Santos, como el hecho de no matizar ese «nacionalismo» de Escuredo, que aunque supondría un cambio de estrategia, no estaría tan distante de lo establecido en muchas otras ocasiones por el PSOE –acaba de verse a partir de su interpretación sobre la autonomía o el nacionalismo–; o el hecho de calificar de socialista «a secas» la posición del grupo «ortodoxo» frente a la otra postura «nacionalista», sin tener en cuenta que las identidades no son exclusivas de los movimientos que se reivindican frente a la nación dominante, en este caso española, coincidimos en que existían dos posturas que ofrecían

---

<sup>650</sup> Felipe González respondería en mayo de 1980 al líder del PSA ante su pregunta sobre si el PSOE consideraba a Andalucía como una nacionalidad en consonancia a estas ideas: «el problema de nacionalidad o nación» –que es un problema que evidentemente no se puede decidir tampoco desde Madrid– tiene, a mi juicio, una vertiente que es enormemente importante, que es que no implica discriminación de competencias. Es por eso por lo que a mí no me preocupa el problema; si supiera que para Andalucía, el que se considere nacionalidad o región supone una discriminación en un ápice de las competencias, yo no tendría la menor duda; si la personalidad de Andalucía estuviera definida por el hecho de que se la reconozca como nacionalidad o como región, yo estaría siempre por defender la personalidad de Andalucía (...). Creo que no es el problema sustancial, como usted bien ha dicho, de la propia Andalucía; que es fundamentalmente el problema económico de las transferencias», en BOCQ: *Diario de sesiones del Congreso de los Diputados*, nº 94, 29 de mayo de 1980, p.6170.

<sup>651</sup> José María de los SANTOS: *Andalucía en...*, p. 256.

dos ideas diferenciadas de Andalucía, aunque con más puntos en común de lo que este autor ha dejado ver en una interpretación un tanto reduccionista.

En aquel momento, todavía existía incertidumbre sobre el proceso y los socialistas estaban improvisando a partir de impulsos concretos realizados a veces desde dentro de su partido y otras desde fuera<sup>652</sup>. La toma de posición de Escuredo estaba empujando al partido en una dirección, pero otros sectores mantenían planteamientos que los devolvían a otras latitudes, creando en ocasiones importantes contradicciones, pero al mismo tiempo, cumpliendo una función, ya que les permitía abarcar amplios espectros mientras sondeaban los estados de opinión y decidían su estrategia, en función de los intereses electorales pero no sólo. Mientras Escuredo se declaraba nacionalista, generando revuelo y contrariedad –o esos eran los rumores– otros miembros de su partido como Rodríguez de la Borbolla<sup>653</sup>, comentaban:

A mí me parecen perfectas. (...) A mí me parece que una cosa es declararse nacionalista –dentro del partido hay nacionalistas y tienen perfecto derecho a declararse así, y es perfectamente coherente con los objetivos del partido, porque revela un afán de concienciar al pueblo y de hacer que el pueblo progrese lo más posible en su toma de conciencia colectiva–, y otra cosa muy distinta es incluir o no en un Estatuto el término de nacionalidad<sup>654</sup>.

Se observa claramente cómo ambas tendencias permitían mantener una dualidad que caracterizó, posiblemente de forma honesta, al PSOE de aquel momento. Escuredo representaba aquella motivación que se había expresado muy claramente en multitud de foros, de encabezar los movimientos nacionales donde existiera una conciencia

---

<sup>652</sup> La había incluso respecto a la conveniencia de seguir la vía del 151, como admitiría después el socialista Antonio Ojeda, miembro de la Comisión Permanente de la Junta y Consejero de Interior en aquella etapa, en una entrevista a Manuel Ruiz, refiriéndose a la etapa en que se estaba produciendo la campaña de apoyo por los Ayuntamientos para la vía del 151: «tengo que reconocer con sinceridad que dentro del partido había opiniones a título personal que se manifestaban, no oficialmente, reticentes o por lo menos desconfiadas con la vía del artículo 151 y hacia las posiciones que había adoptado el partido. Desconfianza y cierto temor, porque no sabía hacia donde podía llevar esa vía no en cuanto a Andalucía sino en cuanto al partido», en Manuel RUIZ ROMERO: *La conquista del Estatuto...*, p. 199.

<sup>653</sup> Según Antonio Ojeda: «no sentaron bien, en el sentido de que no era esa la línea oficial del PSOE ni siquiera en Andalucía, pero a él se le permitían por la personalidad que tenía, y porque en algunos momentos sabía prever donde iban a ir los caminos de la política con antelación al partido. Yo creo que Rafael acertó plenamente, e incluso arrastró al partido no en ese nacionalismo, porque el partido nunca fue nacionalista, pero sí en esa vía autonomista amplia y radical en defensa de los andaluz frente a los poderes retardatarios de la UCD». Entrevista concedida a Manuel Ruiz en, Manuel RUIZ ROMERO: *La conquista del Estatuto...*, p. 226.

<sup>654</sup>

diferenciada, e incluso alentar su desarrollo o fortalecimiento donde no fuera tan fuerte, y así lo transmitía Borbolla en sus palabras<sup>655</sup>. Por otra parte, éste encarnaba la voluntad de mantener un proceso ordenado que fortaleciera la unidad nacional española, no que la debilitara. Esta dualidad todavía se mantenía, y en Andalucía aún no estaba decantada la balanza, como demuestra el ejemplo del siguiente «Informe Semanal» del Departamento de Análisis de Propaganda del PSOE que decía:

La exigencia de que Andalucía sea considerada Nacionalidad creemos que ha tenido una respuesta precipitada por parte de Rodríguez de la Borbolla, que se muestra contrario mientras Escuredo parece favorable, una solución para que el Partido cambie su posición y se defina a favor de la definición de Andalucía como Nacionalidad sería un Congreso de esta Federación después del Congreso Extraordinario<sup>656</sup>.

Algo que no sucedió, pues fue el sector «ortodoxo» el que se impuso en el II Congreso de la Federación. De hecho, el debate sobre la definición volvió a darse con motivo de la redacción del tramo final del Estatuto en 1981, momento en el que el PSOE impuso, no sólo la opción que defendía la definición de Andalucía como «comunidad autónoma», aunque esta vez se colara el término «nacionalidad», sino una versión «patriotera» en relación con la nación española, como ha mantenido el representante del PSA en aquella ponencia, Juan Carlos Aguilar, quien según cuenta, se enfrentó a José Rodríguez de la Borbolla, por considerar que era «innecesaria esa insistencia en el españolismo de Andalucía»<sup>657</sup>. El artículo primero propuesto por el PSOE, en sus dos primeros puntos quedaba así:

1.- Andalucía, como expresión de su identidad histórica y en ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, se constituye en Comunidad Autónoma, en el marco de la unidad indisoluble de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.

---

<sup>655</sup> Javier Tusell responsabiliza en gran medida al PSOE de haber multiplacado con su propaganda la reivindicación autonómica del pueblo andaluz, Javier TUSELL: «El entierro del...», p. 433.

<sup>656</sup> Departamento de Análisis de Propaganda del PSOE: «Informe Semanal», (del 31 de agosto al 7 de septiembre de 1979), AFFLC, Fondo José Prat, 000739-003. De hecho, Rodríguez de la Borbolla declaraba a Diario 16 que «no se puede negar a "priori", que el reconocimiento de la nacionalidad andaluza pueda producirse por nuestro partido», algo que –añadía– «sería siempre consecuencia de un debate a desarrollar en el seno de nuestra organización, que habría que llevar a la celebración de nuestro congreso regional el próximo mes de diciembre», en *Diario 16*, 17 de agosto de 1979.

<sup>657</sup> Juan Carlos AGUILAR: «De la memoria», en Javier TORRES (*et alii*): *Veinte años...*, pp. 182-183.

2.- El Estatuto de Autonomía aspira a hacer realidad los principios de libertad, igualdad y justicia para todos los andaluces, en el marco de la igualdad y solidaridad con las demás nacionalidades y regiones de España<sup>658</sup>.

Ni siquiera UCD hacía una propuesta con connotaciones tan españolistas –¿o sencillamente alineadas con la Constitución?–, pese a que a cambio no incluía el término de nacionalidad ni siquiera de forma colateral como había hecho el PSOE<sup>659</sup>. Así, pese a las declaraciones que querían alejar la polémica negando que se tratase de una cuestión de principios sino puramente formal, las evidencias mostraban otra cara. Una cara que años más tarde José Rodríguez de la Borbolla mostraría con menos pudor que tiempos atrás, y puede que quizá con la convicción del paso de los años. Tras calificar aquella cuestión como de menor relevancia para la entidad de la Autonomía andaluza que otras, expresaba:

Yo sigo pensando, por ejemplo, que la Constitución no establece diferencias para los distintos territorios o futuras CC.AA. por el hecho de que sean consideradas como nacionalidades o regiones; yo sigo pensando, por ejemplo, que Andalucía no es una nacionalidad, ni falta que le hace; yo pienso hoy, más que ayer, que la única «nacionalidad» realmente existente en España, aparte de la Nación española, ha sido y es todavía la nacionalidad catalana<sup>660</sup>.

Obviando las partes más conflictivas, es probable que las cuestiones más destacadas, al menos desde el ámbito socialista, fueran significativamente, el hecho de alcanzar una autonomía equiparable a la vasca o la catalana, demostrando una vez más el peso que en la construcción de su conciencia colectiva tenía el tema del agravio

---

<sup>658</sup> Anteproyecto de Estatuto de Autonomía de Andalucía, Carmona, 12 de febrero de 1981, en Javier TORRES (*et alii*): *Veinte años...*, p. 244.

<sup>659</sup> El artículo propuesto por UCD-A decía en su punto primero: «El pueblo andaluz, como expresión de su identidad histórica y política y en pleno ejercicio de sus derechos de autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica». La redacción propuesta por el PCA, no definía Andalucía como nacionalidad, pero eliminaba el sesgo españolista que había incluido el PSOE y que pasaría al Estatuto aprobado: «Andalucía, como expresión de su identidad histórica y en ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, se constituye en Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto, que es su norma institucional básica». Por último, el PSA, otorgaba algo más de protagonismo al término «nacionalidad»: «El pueblo andaluz, como expresión de su identidad histórica y de su nacionalidad, se constituye como alcanzar {sic} su autogobierno, en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto, que es su norma institucional básica», en *Ibid.*, pp. 244-246.

<sup>660</sup> José RODRÍGUEZ DE LA BORBOLLA: «Estatuto de Andalucía: Reflexiones veinte años después», en Javier TORRES (*et alii*): *Veinte años...*, p. 159.

comparativo<sup>661</sup>; y por otro lado, el artículo 12, considerado el aspecto más original y el más logrado de aquella autonomía, que establecía los objetivos políticos, económicos y sociales hacia los que tenía que avanzar Andalucía. Pino Menchén lo calificaría después de una declaración voluntarista o un brindis al sol que sin embargo permitía plasmar los cambios que se querían ejercer para afectar a la vida cotidiana de la gente. Rodríguez de la Borbolla especificaría un poco más, demostrando la prioridad que los cambios socio-económicos tenían en la reivindicación autonómica frente a los puramente identitarios:

Lo que sí quedó bastante de manifiesto, hasta el punto de que fue recogido en el futuro artículo 12 del Estatuto, fue el acuerdo de todos los partidos sobre el hecho de que la Autonomía andaluza tenía un carácter que iba más allá de la defensa de la identidad propia o de la recuperación de cualquier pasado. La Autonomía andaluza se planteaba, desde el texto estatutario, como un instrumento de transformación económica y social, así como un medio para “la constante promoción de una política de superación de los desequilibrios existentes entre los diversos territorios del Estado, en efectivo cumplimiento del principio de solidaridad” (art. 12.3 9º del Estatuto de Andalucía). La Autonomía andaluza se entendía, pues, desde el principio y desde las más solemnes declaraciones de su texto fundacional, como un instrumento para la construcción de una España equilibrada y solidaria.

En definitiva, y tras todo lo visto, el Estatuto de Carmona para los socialistas era una herramienta con la que construir una Andalucía que alcanzara por fin cotas más elevadas de desarrollo, dentro de un sistema que reforzara la unidad española desde el equilibrio y la solidaridad interregional. Para todo ello, estaban contribuyendo a reforzar y a construir una identidad colectiva regional basada en principios que tenían más que ver con el sentimiento de agravio y las demandas de igualdad, que con las reivindicaciones culturales o históricas, pese a que también en ellas se apoyaran<sup>662</sup>. Reforzando de esta manera, una identidad andaluza entendida como parte de la española, como demostraba la gran pancarta que encabezaba la manifestación del día de Andalucía en demanda de la autonomía, una pancarta donde estuvo:

---

<sup>661</sup> La referencia catalana estuvo tan presente que según parece, algunos extractos llevaban al extremo la mimesis, apareciendo incluso la mención a Cataluña donde tendría que haberse escrito Andalucía, en Manuel RUIZ ROMERO: *La conquista del Estatut ...*, p. 219.

<sup>662</sup> Y a construir esta identidad se afanaban también desde su prensa, en la que era continua la mención a la lacra que suponía la situación andaluza dentro de España, necesitada de una solución que llegaría con la Autonomía: «¿Pero qué pasa en Andalucía? En Andalucía la esperanza sólo la encuentra el trabajador en el verde de la bandera», en *El Socialista*, 126 (16 de septiembre de 1979).

la bandera nacional y la blanca y verde portada por los representantes y autoridades máximas del ente preautonómico. Buena idea fue la de conjugar los dos símbolos que representan a Andalucía y a España que, para que no se nos olvide, ese mismo centro de la gran pancarta tendría que llevar escrita aquella frase de Blas Infante: «Andalucía por sí, para España y la humanidad»<sup>663</sup>.

Hasta este momento podríamos referirnos a un panorama en el que la política del PSOE en materia autonómica venía marcada por la improvisación y la continua adaptación a la coyuntura, en el que los principios se iban adecuando a la misma pero también entre sí, a causa precisamente de la inexistencia de una estrategia totalmente definida y del mantenimiento de postulados que podrían no ser del todo compatibles ante una lectura radical o poco flexible de los mismos. A ello contribuía la actitud de UCD, que se encontraba también en proceso de deliberación interno sobre qué hacer frente a uno de los mayores retos para la nueva democracia, la descentralización del Estado. Por si fuera poco, esta imagen de improvisación se veía agravada al observar la carencia de una estrategia conjunta para todo el Estado, ya que era evidente la disparidad de criterios según el territorio y la coyuntura concreta que este atravesaba.

Pero esta situación empezó a clarificarse a partir del otoño de 1979, cuando UCD realizó los primeros movimientos que se confirmaron a principios del año siguiente. Este giro tuvo como consecuencia la reacción de un PSOE que seguía definiéndose en estos asuntos conforme la coyuntura lo iba requiriendo, y la onda expansiva que generó la toma de posición del partido de Gobierno no pudo ser ignorada por los socialistas. De todo ello, Andalucía fue un invitado de excepción, el lugar donde se disputó un modelo de Estado y a partir del cual cayeron el resto de fichas de dominó. Si queremos, el punto de inflexión que fue encauzando las posturas oficiales de los dos partidos mayoritarios, que pese a todo no perdían de vista el objetivo final, la construcción de un modelo de Estado. Un modelo que se vio afectado por los hechos de Andalucía, pero que no fue diseñado a partir de esta.

Como se ha visto, la construcción del Estado de las Autonomías tenía, a grandes rasgos y simplificando, tres grupos de nacionalidades o regiones que estaban requiriendo un tratamiento diferenciado. Por un lado las nacionalidades históricas – aunque ya hemos visto que para algunos, Galicia no suponía un problema que necesitara

---

<sup>663</sup> *El Socialista*, 138 (9 de diciembre de 1979).



de una solución inmediata y diferenciada—; las nacionalidades y regiones que demandaban el mismo nivel de competencias que las anteriores y que apostaban por la vía del artículo 151; y las que se decantaban por el artículo 143. A partir de la aprobación de los Estatutos vasco y catalán en octubre, las cosas comenzaron a cambiar, como ya se ha mencionado, sobre todo gracias a la iniciativa de UCD, en la que los sectores que querían racionalizar el proceso y frenar la vía del artículo 151 comenzaron a hacerse con el control de la política autonómica<sup>664</sup>. Desde entonces hasta el 15 de enero de 1980, cuando UCD anunciara formalmente su voluntad de reconducir y racionalizar el proceso autonómico por la vía del artículo 151 se produjeron multitud de realidades paralelas. Las que tenían que ver con el talante en referencia a la construcción del Estado de las Autonomías por parte del PSOE en su conjunto, es decir, las directrices que la Ejecutiva Federal iba a imponer; y las realidades que se iban a ir desarrollando según la región o nacionalidad. En el PSOE actuaban cada vez más, impelidos por su responsabilidad como partido de Estado y su concepción unitaria de la nación española, lo que les conducía hacia un diseño del modelo autonómico que tenía dificultades en ser aplicado si también se querían respetar las promesas sobre la libertad en la elección de la vía de acceso, sobre todo cuando la carrera competencial empezaba a generalizarse. Ante esta disyuntiva, los socialistas comenzaron a decantarse por la armonización, aunque posiblemente se estaban planteando permitir algunas excepciones en algunos territorios, siempre y cuando no pusieran en peligro el modelo. Sin ir más lejos, nada más quedar aprobados los Estatutos vasco y catalán, Guerra se manifestó favorable, según se dijo en *El País* por reconvertir el proceso hacia el 143, al menos en gran parte de España:

La misma noche del 25 de octubre, y mientras se iban conociendo los resultados de los referendos, el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, comentaba, en el centro de datos que instaló el Ministerio del Interior, las dudas que le sugería el sistema

---

<sup>664</sup> La existencia de posiciones encontradas en el seno de la UCD era denunciado por el PSOE ya a principios de septiembre. Carmen García Bloise, miembro de la Gestora, habló de «Valencia» y Andalucía como ejemplos sintomáticos de aquel enfrentamiento —aunque éste era evidente en el País Valenciano mucho antes que en Andalucía—, y anunciaba que ante la maniobra del Gobierno trataría de acelerar el proceso, en *El Socialista*, 124 (2 de septiembre de 1979). Además, el propio Clavero Arévalo detallaría cómo en medio de la iniciativa de los Ayuntamientos para demandar la autonomía —requisito para acceder por la vía del artículo 151— a principios de septiembre, se reunió con Suárez y le explicó su «criterio de no secundar las directrices que a mis espaldas habían llegado a ciertas provincias andaluzas. Se trataba de que la iniciativa autonómica no prosperara en algunas de las circunscripciones donde UCD era mayoritaria», en Manuel CLAVERO: *Forjar Andalucía...*, p.198.

seguido en aquellos referendos, para el caso de futuros estatutos en regiones sin tradición y sin sentimientos autonomistas arraigados.

En algún momento, aunque sin pronunciarse con rotundidad, Guerra se mostró muy favorable a la vía lenta, aunque sus argumentos se centraban en que ofrecía menos riesgos, ya que evitaba la posibilidad de una votación adversa en provincias concretas, donde, a la vista de la abstención de un electorado fuertemente nacionalista, como el catalán o el vasco, no es improbable pensar en que no llegue a conseguirse la mayoría de votos necesaria en cada una de las provincias afectadas<sup>665</sup>.

Las divergencias que convivían en el seno del PSOE, fueron siendo aclaradas conforme avanzaron los hechos y ante muchos factores que hicieron por ejemplo que en Andalucía pelearan de forma exitosa por la vía del artículo 151, mientras que en otros lugares como el País Valenciano se ofreciera la cruz de la misma moneda. Lo cierto es que en la etapa que medió entre la aprobación de los Estatutos y el anuncio oficial de UCD, el PSOE ya demostraba su voluntad de armonizar el proceso, como se había resuelto en el XXVIII Congreso, e incluso mantenía conversaciones con el Gobierno en este sentido. Sin ir más lejos, Felipe González, el 15 de octubre pronunciaba otro discurso ante el Club Siglo XXI, refiriéndose a esta cuestión en términos similares a como lo había hecho en febrero, advirtiendo de los peligros de la carrera autonómica.

Ni aquellos que tratan de impedir los próximos *referenda* mediante artilugios legales o ilegales, ni los que hacen profesión de fe autonomista e incluso nacionalista (...) pueden influir decisivamente en el desarrollo autonómico.

Desde mi punto de vista, un proceso autonómico que ha de colocarnos en la frontera de un Estado federalizado tiene que evitar las precipitaciones que nacen de las fuerzas centrífugas, porque su verdadero sentido es el incremento de la solidaridad entre pueblos diferenciados. Para ello hay que impedir discriminaciones (...). Pero la igualdad de tratamiento ni puede ni debe entenderse como la aplicación mimética de unos estatutos respecto de otros. Para que la igualdad sea real tiene que admitirse el derecho a la diferencia, o, si se quiere, el hecho diferencial que justifica el desarrollo autonómico. Para que el tratamiento no sea desigual hay que evitar la discriminación.

---

<sup>665</sup> *El País*, 6 de noviembre de 1979.

Hemos de llegar al convencimiento de que el proceso autonómico se basa en la necesidad histórica de armonizar, para unir solidariamente, a los distintos pueblos que componen y enriquecen esa realidad que se llama España<sup>666</sup>.

En un momento, incluso parecía estar abriendo la puerta a un Estado asimétrico, en el que la diferencia autonómica no supusiera sin embargo un menoscabo para un desarrollo socio-económico igualitario entre todas las regiones. Pero después, hablaba de armonizar, y aquí no está claro si estaba pensando en una racionalización completa del modelo autonómico en su horizonte final, afectando a todas las nacionalidades, y rebajando así el techo competencial de las que habían accedido a través de una vía privilegiada; o lo que quería prefigurar eran dos vías distintas entre las que estarían por un lado las nacionalidades históricas con mayor capacidad competencial, y por el otro el resto de comunidades, que no por ello verían menoscabado su potencial de desarrollo socio-económico.

Esta duda nos queda aclarada a partir de una crónica realizada por *El País* sólo un mes más tarde. Acorde a su trayectoria hasta el momento, el PSOE proponía un Estado en el que la igualdad en todos los sentidos se impusiera frente a cualquier otro derecho. Bajo el titular «Los partidos mayoritarios, básicamente de acuerdo sobre el desarrollo del proceso autonómico» se detallaba como UCD, PSOE y PCE compartían la idea de «Negociar un calendario, facilitar competencias análogas, promover el artículo 143 de la Constitución como vía de acceso y establecer una nueva ley de régimen local». Además, según se señalaba, el PSOE juzgaba «imprescindible un consenso entre las fuerzas mayoritarias. “No se puede cambiar la forma de Estado”, afirma María Izquierdo, responsable de la Secretaría de Política Autonómica creada en el Congreso Extraordinario, “sin un acuerdo conjunto, ya que las autonomías son una cuestión clave de la Constitución”». Y se añadía:

Los socialistas abogan también por un ritmo sosegado para el desarrollo del proceso, que en buena parte viene dado por la presión política, la conciencia autonómica y la capacidad de gestión de una determinada comunidad. En base a esto, la ejecutiva del PSOE se inclina por el artículo 143 de la Constitución como vía más segura para acceder a la autonomía; «el 151 es una auténtica carrera de obstáculos», afirma uno de sus miembros, «con los inconvenientes que esto suscita para cualquier mecanismo en

---

<sup>666</sup> Transcrito en *El Socialista*, 131 (21 de octubre de 1979).

rodaje». Un informe elaborado por María Izquierdo establece la conclusión de que, a través del artículo 143, cualquier comunidad puede llegar a los mismos techos y a una autonomía tan plena como la de los pueblos que empleen el otro sistema.

No obstante, esta portavoz ha precisado que el PSOE va a facilitar a los socialistas los datos que posee sobre las posibilidades que ofrecen estos dos artículos, pero sin presionar sobre sus futuras decisiones.

Otra ventaja que encierra el artículo 143 para los dirigentes socialistas es que, a través de él, se puede evitar la dinámica de continuos referendos y elecciones, situación que propiciaría un fuerte abstencionismo y frustraría las ansias de autonomía.

El PSOE estima que la política autonómica debe basarse en tres ejes fundamentales: voluntad de acercar el poder a los ciudadanos, fomentar la solidaridad y respetar la identidad de los pueblos»<sup>667</sup>.

La existencia de un clima favorable para llegar a un entendimiento sobre la racionalización de la organización territorial del Estado entre el Gobierno y el PSOE, podría evidenciarse a partir de las referencias continuas a estas cuestiones que aparecen en estos momentos en la prensa<sup>668</sup>. *El País* anunciaría en un editorial, una entrevista entre Felipe González y Adolfo Suárez para tratar de forma prioritaria este asunto. Con un tono crítico culpaba a ambos partidos de «negociar en las penumbras de los despachos y a espaldas de la opinión» los grandes problemas de la nación, y de mantener una pugna de cara a la galería por la cuestión autonómica, al estar «compulsivamente entregados a la tarea de salvar su imagen frente a su electorado y a dejar ante los cuernos del toro al adversario, aunque en el fondo se esté de acuerdo con sus posiciones». Añadían que esto podía estar siendo reforzado por «las ambiciones y vanidades de los barones regionales y diputados provinciales centristas y socialistas, con el resultado final de que la cuestión de las autonomías desemboque en una senda que nos conduzca directamente al abismo de la disfuncionalidad de la Administración, al fortalecimiento del caciquismo, al despilfarro del gasto presupuestario y a la feudalización de la función pública». Pero, celebraba este editorial, que parecía que

---

<sup>667</sup> *El País*, 18 de noviembre de 1979.

<sup>668</sup> Por su parte, Jordi Solé Tura, intervenía en aquel debate dentro de las páginas de *El País* para advertir de la fuerza que estaban adquiriendo las «voces contra las autonomías», que atribuía únicamente a los sectores cercanos al Gobierno, en *El País*, 18 de noviembre de 1979.

ambos partidos habían comprendido por fin que «la estrategia de anegar las reivindicaciones autonómicas de Cataluña y del País Vasco con la generalización de los estatutos, (...), es un arma de las que se disparan por la culata». Y concluía: «No confundamos las dimensiones políticas de las autonomías catalana y vasca con los aspectos de descentralización administrativa en el resto de España. No apliquemos métodos, plazos e instituciones iguales para fenómenos cualitativamente diferentes. Acabemos con el carnaval y evitemos, sin embargo, la cuaresma»<sup>669</sup>.

Este editorial, que además de informar sobre la existencia de reuniones con las que presumiblemente se estaba intentando —en la línea de lo anunciado por María Izquierdo— llegar a acuerdos de Estado sobre esta materia, no tiene por qué ser reflejo de una posición orgánica del socialismo. Aunque su conclusión final nos recuerda demasiado a la opinión que Guerra haría pública el 19 de noviembre en una entrevista a *El Correo de Andalucía*, y en la que anunciaba que había que racionalizar las autonomías, aunque no frenarlas, porque de lo contrario:

Nos podemos encontrar con un proceso electoral cada 20 días en España. Esto no lo puede aguantar un país (...) este carnaval se ha cerrado con la cuaresma de las autonomías (...) decir que por el artículo 151 se consigue una autonomía de primera clase y por el artículo 143 una autonomía de segunda. Eso es insostenible<sup>670</sup>.

Además, *El País* escribía otro editorial del 16 de noviembre en el que cargaba contra la generalización de las autonomías y la actitud dubitativa de los socialistas, que se habían situado:

entre la tentación de cierto oportunismo electoral y alguna demagogia ante sus bases, por un lado, y el sentido de la responsabilidad claramente subyacente utilizado por Felipe González —«racionalizar el proceso autonómico»— para aludir al problema. La transición hacia la democracia ha abusado en de masía de la fórmula de aplazar las cuestiones más candentes, mediante el procedimiento de soslayarlas o, peor aún, de abordarlas en apariencia y de responderlas con el lenguaje de la ambigüedad<sup>671</sup>.

---

<sup>669</sup> *El País*, 10 de noviembre de 1979.

<sup>670</sup> Citado en Manuel RUIZ ROMERO: *La conquista del Estatuto...*, p. 272.

<sup>671</sup> Estaban refiriéndose en concreto a la actuación de los socialistas ante el Estatuto gallego, aunque acabaron conectándola con la estrategia del partido en el conjunto del Estado, en *El Socialista*, 16 de noviembre de 1979.

De nuevo, arremetían contra un diseño inicial, el de la generalización de las autonomías, concebido según este editorial, para restar importancia al proceso vasco y catalán, pero que había provocado muchos más problema a la larga, abogando por la reconducción de un sistema que podría erosionar la igualdad y la solidaridad:

La idea de un Estado de autonomías, instrumentado en el título VIII de la Constitución, buscaba una salida para que las inevitables instituciones de autogobierno de Cataluña y Euskadi no fueran resentidas como un privilegio por otros territorios españoles, a los que se brindaba la posibilidad de alcanzar regímenes autonómicos para administrar mejor sus recursos y acercar a los ciudadanos a los centros de decisiones. La fórmula, inventada, en parte, para anegar en los espesores del derecho administrativo lo que era en realidad un diáfano problema político, fue, en buena medida, un procedimiento para ganar tiempo y para vender mejor en determinados medios institucionales las autonomías catalana y vasca. Pero su propia dinámica, acelerada por la subasta demagógica en la que han pujado la mayoría de los partidos, ha terminado por transformar el autonomismo, en un mito ilógico, que, en ocasiones, lleva a la identificación de democracia con particularismo, de libertad con insolidaridad, de autogobierno con taifismo y de progresismo con privilegios<sup>672</sup>.

Una corriente de opinión a la que no eran ajenos en el PSOE y que compartían en muchos sectores, al menos en parte, generándose una tendencia dentro del socialismo que tuvo, a nuestro juicio, su culminación en un hecho no siempre resaltado suficientemente<sup>673</sup>: la aprobación de la Ley Orgánica sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, que necesitó del acuerdo entre UCD y PSOE para salir adelante<sup>674</sup>. Y una vez más, el caso andaluz y su influencia política y mediática tuvieron un protagonismo decisivo en el desenlace de unos acontecimientos que no parecían planificados desde el inicio. La cuestión es que esta ley tuvo que ser tramitada por procedimiento de urgencia para que pudiera cumplirse el compromiso adquirido entre Escuredo y Suárez de celebrar el referéndum de Andalucía el 28 de febrero<sup>675</sup>. Pero

---

<sup>672</sup> *Ibid.*

<sup>673</sup> En las páginas de *El Socialista* ni siquiera se hicieron eco de la noticia de su aprobación.

<sup>674</sup> *El País*, 29 de diciembre de 1979.

<sup>675</sup> Como han explicado Enrique Linde y Miguel Herrero la premura de cumplir la fecha obligó a apremiar el proceso: «Pues bien, subsistiendo en este caso, al igual que ha había acontecido con los referendos vasco y catalán, una falta de sincronía entre los compromisos personales adquiridos por el presidente del Gobierno y las previsiones legales en que se debía enmarcar el cumplimiento de aquellos, la solución ahora adoptada es, sin embargo, radicalmente distinta. En lugar de acudir al Decreto-Ley para resolver semejante desfase, (...) se procede a cumplir las previsiones constitucionales en la materia, tramitándose por el procedimiento de urgencia el proyecto de Ley», en Linde Enrique LINDE y Miguel

antes de explicar qué implicaciones iba a tener para la organización territorial del Estado la promulgación de esta ley, volvamos atrás, al acuerdo andaluz, para entender mejor lo que sucedió después.

La autonomía andaluza se posicionó con ventaja frente aquellas que habían iniciado igualmente la vía del artículo 151, sobre todo a partir del 3 de octubre cuando el Presidente de la Junta y el Presidente del Gobierno se reunieron para fijar la fecha del referéndum andaluz<sup>676</sup>. Parece que por mediación de Manuel Clavero y Cecilio Valverde, Suárez accedió a mantener aquella reunión, pero antes de ello, como narra el propio Clavero organizó otro encuentro:

Me dio la impresión de que Suárez vio una excelente ocasión para encauzar el proceso autonómico en general y retrasó la entrevista de Escuredo de las diez de la mañana a las ocho de la tarde. En el intervalo se celebró una comida a la que asistieron Rafael Arias Salgado y José Pedro Pérez Llorca por UCD y Alfonso Guerra y Gregorio Peces Barba por el PSOE<sup>677</sup>.

La misma no torció los planes de obtener una promesa que posiblemente fue definitiva en el futuro autonómico de este territorio. Según señala Clavero, en aquella comida «se vislumbró la posibilidad de un pacto autonómico a nivel de Estado, pero con la exigencia de los socialistas de que Andalucía accediera a la autonomía por la vía de artículo 151 de la Constitución»<sup>678</sup>. En cambio, Manuel Ruiz da testimonio de una llamada telefónica de Clavero a Pérez Miyares que según el autor cuestionaría esta interpretación, poniendo de manifiesto las contradicciones internas del PSOE. La llamada, relatada por Pérez Miyares habría sido así: «oye que el PSOE apoya al Gobierno, no al 151 el 143. ¿Pero qué mes estás contando?, le dije. Pues eso, que ha

---

HERRERO: “Comentario a la Ley Orgánica de Modalidades de Referéndum”, en Revista del Departamento de Derecho Político, 6 (Primavera 1980), p. 85. Aunque habría que incluir también al PSOE en esta ecuación, muy interesado igualmente en cumplir con aquellos plazos. En sentido similar véase Emilio ATTARD: Vida y muerte..., p. 107-108. Felipe González acabaría confirmando este punto cuando en el debate de la Moción de Censura al Gobierno se defendiera de las acusaciones de Rojas-Marcos, de ser corresponsables de la L.O, de la siguiente manera: «Nosotros estuvimos (...) en un momento difícil, enormemente difícil, (...) Si nosotros no aceptábamos la Ley Orgánica del Referéndum, un hecho importantísimo para ustedes, que incluso desencadena este debate, el 28 de febrero no se hubiera producido. Esa es la realidad, que es muy amarga a veces; a veces es muy amargo tener que votar algo contra lo que se está luchando en buena parte», en BOCG: *Diario de sesiones del Congreso de los Diputados*, N°94, 29 de mayo de 1980, p.6160.

<sup>676</sup> *El Socialista*, 130 (14 de octubre de 1979).

<sup>677</sup> Manuel CLAVERO: *Forjar Andalucía...*, p. 201.

<sup>678</sup> Manuel CLAVERO: *España, desde el centralismo a las autonomías*, Barcelona, Planeta, 1983, pp. 123-124.

habido una reunión y que ellos no aprietan; que ellos no aprietan en ninguna dirección»<sup>679</sup>. Otros testimonios hablarían de conversaciones entre el Gobierno y la cúpula del PSOE que no llegaron a buen puerto por la presión de Escuredo y del conjunto de la sociedad andaluza<sup>680</sup>. En realidad, una lectura contrastada de las fuentes nos hace pensar en una actuación improvisada, también respecto a Andalucía, en la que los marcha de los acontecimientos fue forzando la toma de posiciones en un Partido que se encontraba varado entre dos posiciones, la que dibujaba un modelo sosegado para la consecución de la autonomía para que reforzara la estabilidad y la unidad de la nación española; y la que defendía la libertad de elección sobre su futuro para unos pueblos que reivindicaban con fuerza su conciencia identitaria:

La apuesta la hice con preocupación, no alegremente. No sabía si el efecto estabilizador para el conjunto de España iba a superar al desestabilizador. Era una apuesta histórica, y por tanto no clara; pero prestó un servicio inesperado a la estabilización del país, al decir que nadie es más que nadie<sup>681</sup>.

Esta interpretación se vería confirmada una vez más con el testimonio de Fajardo, que unas páginas después declaraba que los socialistas habrían estado de acuerdo con racionalizar el proceso si por ello los ucedistas hubieran entendido –como sucedió en julio de 1981 con los Acuerdos Autonómicos–: «superar la ambigüedad constitucional y completar el modelo para hacerlo posible»<sup>682</sup>.

Compartiendo, por tanto, la idea de que los socialistas no tenían en absoluto una postura nítida, preestablecida y exenta de contradicciones o dificultades, quizá el testimonio de Pérez Miyares que recogía Manuel Ruiz tenga una interpretación distinta o complementaria de la que ha dado este autor. Si se analiza aquel testimonio, no como referido en concreto a la situación andaluza, sino al conjunto de España, no tendría por qué ser un obstáculo para que en Andalucía se celebrara un referéndum. Sabemos que la cúpula socialista prefería en aquellos momentos que se generalizara la vía del 143, aunque por otro lado, comprendía los problemas que suponía negar aquellos derechos a

---

<sup>679</sup> Manuel RUIZ ROMERO: *La conquista del Estatuto...*, p. 261.

<sup>680</sup> Entre ellos el del centrista Carlos Rosado: «Por muchas conversaciones secretas que hubiera entre Suárez y Felipe González, de ser cierto que éste hubiera estado dispuesto a algún arreglo, la firmeza de Escuredo lo hizo imposible. Y detrás estaba la mayoría abrumadora de los andaluces», en Carlos ROSADO: «La UCD y el proceso autonómico andaluz», en Javier TORRES (*et alii*): *Veinte años...*, p. 182.

<sup>681</sup> Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo...*, p. 88.

<sup>682</sup> *Ibid.*, p. 90.



algunos territorios que tenían muy avanzado el proceso del 151, con los que muy posiblemente se solidarizaban y de los que sufrían presiones desde sus propias federaciones. No podría extrañarnos un intercambio de opiniones en el que los líderes del PSOE transmitieran a los centristas su voluntad de ir encauzando la organización territorial en la medida de lo posible hacia el 143, a la espera de la evolución de los acontecimientos, especialmente en Andalucía, donde de momento al menos querían permitir el referéndum. De hecho, fuera o no cierto el contenido de aquella llamada de teléfono, existieran o no unas conversaciones en las que Andalucía habría sido defendida como la excepción por los socialistas, todo parece indicar a que desde el PSOE se quería una racionalización del proceso, y que en este territorio estaban teniendo lugar unas lógicas propias que lo iban a convertir en la excepción.

Así, aquella ley que debía tramitarse con urgencia para permitir a cualquier coste la celebración del referéndum andaluz en la fecha acordada, supondría sin embargo, la sanción de la racionalización. El seguro de que ningún otro territorio, con la salvedad quizá de esta región, podría acceder a la autonomía por la vía rápida. La premura con la que debió promulgarse esta ley, hizo que no se cuestionara en exceso el hecho de que los socialistas aceptaran unas condiciones que entorpecerían gravemente la consecución de la Autonomía, al hacer ostensiblemente difícil el obtener un resultado positivo en el referéndum a causa de las condiciones que se imponían en el punto 4 del artículo 8º:

Celebrado el referéndum, si no llegase a obtenerse la ratificación por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia, no podrá reiterarse la iniciativa hasta transcurridos cinco años<sup>683</sup>.

Como ha indicado Luis Fajardo, este artículo fue el único que no gustó en el PSOE, a pesar de que posiblemente en base al acuerdo con UCD y a la apremiante necesidad de tener la ley en un periodo muy breve, no presentaron ninguna enmienda ni en el Congreso ni en el Senado<sup>684</sup>: «La mayoría de sus artículos resultaron, sin embargo, aceptables para el Grupo parlamentario socialista; salvo uno de ellos, donde se establecía que si la consulta de la iniciativa autonómica fallaba en una provincia, por no alcanzar la mayoría requerida, tal resultado influiría en todas las demás (...) el artículo

---

<sup>683</sup> Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, en BOE Legislación consolidada, p. 3.

<sup>684</sup> BOCG: *Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados*, nº59, 28 de diciembre de 1979; y BOCG: *Diario de Sesiones del Senado de los Diputados*, nº38, 15 de enero de 1980.

8.4»<sup>685</sup>. De hecho, la ley no sólo había sido aprobada con la ayuda de los votos socialistas en diciembre de 1979, sino que había contado con la participación de Alfonso Guerra en la ponencia elaboradora<sup>686</sup>. Pero lo más importante es a mi juicio, un hecho al que no se dio publicidad y que impedía *de facto* la posibilidad de acceder a esa autonomía plena a territorios como el País Valenciano y Canarias, que hasta el momento transitaban el mismo camino que Andalucía, habiendo culminado también de forma exitosa la iniciativa autonómica ejercida por sus ayuntamientos. Con el punto uno del artículo 8º, que era «satisfactorio» para el PSOE, se estaba penalizando a aquellos territorios que de acceder satisfactoriamente por la vía del artículo 151, le darían carta de naturaleza y ya no podría ser frenada. Se les estaba impidiendo que pudieran celebrar el referéndum a partir de una ley que se quería implantar de forma retroactiva y que decía lo siguiente, sin que ningún partido presentara una sola enmienda en contra:

A iniciativa autonómica deberá acreditarse mediante elevación al Gobierno de los acuerdos de las Diputaciones o de los órganos interinsulares correspondientes y de las tres cuartas partes de los Municipios de cada una de las provincias afectadas que represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas, adoptados con las formalidades previstas en la Ley de Régimen Local, dentro del plazo prevenido en el artículo ciento cuarenta y tres, dos, de la Constitución y haciendo constar que se ejercita la facultad otorgada por el artículo ciento cincuenta y uno, uno, de la misma<sup>687</sup>.

Era precisamente esa condición final, la obligatoriedad de hacer constar explícitamente la vía elegida, lo que invalidaba las campañas en favor del acceso a la autonomía por la vía rápida y con mayores competencias que se había llevado a cabo de forma satisfactoria en ambos territorios entre septiembre y octubre<sup>688</sup>. Y este resultado no puede decirse que estuviera planeado por los socialistas, pero tampoco que fuera

---

<sup>685</sup> Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo...*, p. 89.

<sup>686</sup> Este dato es conocido gracias a las palabras del propio Alfonso Guerra: «Respecto a la ley de referéndum, manifiesta que estuvo en la ponencia elaboradora, y reconociendo que lo podrían haber hecho mejor, estima que se ha mejorado bastante respecto de la proposición del Gobierno», en Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Reunión con los Secretarios Generales de nacionalidad y región y otros responsables de política autonómica” (8 de enero de 1980), ABFPI, 075-E2, p. 11.

<sup>687</sup> BOE: *Ley Orgánica 2/1980*, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, p. 3.

<sup>688</sup> De hecho, en aquellos momentos, *El Socialista* escribía en uno de sus titulares «País Valenciano. En busca de ser la cuarta autonomía», un territorio que había entregado el 25 de octubre la petición formal de autonomía al Congreso de los Diputados y al Ministro de Administración Territorial, con una documentación que acreditaba el pronunciamiento favorable del 95% de los Ayuntamientos, representando al 98% de los electores de este territorio, *El Socialista*, 133 (4 de noviembre de 1979); *El País*, 25 de octubre de 1979; *El País*, 26 de octubre de 1979.

ajeno a las múltiples posibilidades que barajaba. De hecho, en enero de 1980, antes de que UCD se pronunciara definitivamente por el viraje en su política autonómica, el PSOE había estado contemplando cuál era la mejor manera de llevar a cabo aquella racionalización, aunque evitando la imposición que los centristas querían aplicar.

Gracias a Luis Fajardo se conoce que la Comisión Ejecutiva Federal debatió el 3 de enero de 1980 sobre el desarrollo constitucional. Como resultado de la discusión se descartó firmar con UCD cualquier tipo de acuerdo de legislatura, en coherencia a lo estipulado en el Congreso Extraordinario, pero sí «se consideró viable, y conveniente para los intereses generales, la adopción de acuerdos parciales con el Gobierno, entre otros en el tema autonómico»<sup>689</sup>. Es todavía más revelador el debate sostenido en la reunión del 8 de enero de la Secretaría de Política Autonómica con los Secretarios Generales de nacionalidad, a la que asistieron también entre otros Alfonso Guerra Felipe González.

En este debate interno y confidencial, se hacía autocrítica sobre la falta de profundización y de una correcta explicación de la cuestión autonómica en España, y se hablaba sin paliativos de la necesidad de la existencia de dos caras respecto a estos asuntos, además de considerar que habían incurrido en un error al poner esta cuestión en el centro del debate en la etapa anterior, incitando el surgimiento de aquellas reivindicaciones en todo el territorio. En estos términos comentaba Alfonso Guerra el problema que había generado aquello a las alturas de enero de 1980:

Todos nos vemos obligados a utilizar dos lenguajes: uno con vistas al exterior y otro para nosotros. Se ha producido una falsa identificación a nivel popular entre dictadura y centralismo, democracia y autonomía; los partidos de izquierdas han alentado conjuntamente el proceso autonómico<sup>690</sup>.

El PSOE pensaba entonces en racionalizar y armonizar, aunque no se había cuestionado formalmente la libre elección de las vías de acceso a la autonomía. Pero como puede observarse, esto entró a ser discutido mucho antes de lo que pudiera ser reconocido, como sucedió en esta reunión realizada con el objetivo de trazar una

---

<sup>689</sup> Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo...*, p. 97.

<sup>690</sup> Pese a esto, seguían culpabilizando a UCD de haber creado artificialmente el problema generalizando las preautonomías para rebajar la singularidad de Cataluña y el País Vasco, y en esta misma reunión Felipe González se había manifestado en tal sentido: «Suárez, posteriormente, quiso atenuar la tensión existente en el País Vasco y Cataluña y dio preautonomías en todas las demás», Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Reunión con los Secretarios Generales de nacionalidad y región...”, pp. 4 y 9.

estrategia socialista más clara y homogeneizar el proceso autonómico. Querían evitar la descoordinación, la improvisación y la política de hechos consumados que estaba caracterizando este tema<sup>691</sup>. Además de aludir a la pérdida de imagen que conllevaba, se estaba pensando en la gobernabilidad del Estado y se temía la complicación que podría suponer esta libertad en la elección de la vía cuando era evidente la «carrera competencial» que se estaba viviendo:

Ante el cúmulo de variantes que se pueden producir con dos vías de acceso a la autonomía, situaciones de preautonomías uniprovinciales y pluriprovinciales, etc., el resultado puede ser nefasto si no se controla bien el proceso. Se podría llegar a una complicación administrativa sin par (...). En conjunto, podemos llegar, como decía el actual Ministro de la Presidencia, a estar esperando cómo son los primeros pasos de un monstruo Frankenstein hecho de retales y que se puede volver contra su creador. Para poder iniciar negociaciones sobre autonomías con otros partidos, hay que adoptar una estrategia de conjunto dentro del Partido, sino sería distorsionante para éste. Se puede pensar en un Estado de Autonomías con una, dos, tres variantes, pero no con cincuenta que comportaría un cúmulo de excepciones (...) No hay rigor histórico ni político en el proceso autonómico, pero salvando esta cuestión, hay que tender hacia la racionalización del proceso autonómico, término que a muchos no les gusta en el sentido que toma esto en el sentido de freno. (...) Este proceso autonómico, que es imparable se debe racionalizar dibujando bien el marco de la institucionalización de las autonomías, con rapidez; y después es preciso fijar ritmos para lograr los grados autonómicos marcados<sup>692</sup>.

Es interesante ver cómo se quejaban de la artificialidad que la construcción de esta nueva forma de Estado estaba adquiriendo. Observaban el problema, no porque provocara que a la hora de la verdad no se reconocieran las diferencias y peculiaridades nacionales dentro del Estado, sino porque podría entorpecer la gobernabilidad y poner en peligro la consolidación de la democracia.

---

<sup>691</sup> Durante todo el documento planea el problema de la descoordinación entre las federaciones y los órganos centrales, algo de lo que se quejaba amargamente María Izquierdo. Episodios como estos se dieron con la federación gallega y la aprobación del Estatuto en la Comisión Constitucional, que ya había generado reproches en reuniones previas, y ahora se hablaba especialmente del caso del País Valenciano, que trataremos con mayor profundidad en las páginas siguientes. En concreto, se quejaban de que la improvisación y la descoordinación hubieron vuelto a ser protagonistas a finales de diciembre cuando los socialistas valencianos decidieron unilateralmente salirse del Consell Preautonòmic, y en general se establecía que esta opción no era aconsejable más que como última opción, en *Ibid.*

<sup>692</sup> *Ibid.*, p. 4-5.

Por otra parte, se apuntaba la necesidad de negociar estas cuestiones con otros partidos, un tema que surgió de forma recurrente en la reunión y se reconoció que se estaba decidiendo en el Comité Federal sobre la conveniencia del pacto. De hecho, posiblemente por su voluntad de racionalizar y de negociar con un partido que ya sabían quería reconducir los procesos por la vía del 143 –a excepción de Andalucía–, se decantaban ellos también por una generalización del 143 con algunas salvedades que aún debían debatirse, como comienza a observarse con las palabras de María Izquierdo:

En lo que respecta a la elección entre la vía 143 y 151, la Secretaría de Política Autonómica hace balance de las posturas de cada Federación. Inicialmente, algunas de estas se lanzaron hacia la vía 151 de una forma precipitada, la marcha atrás en este aspecto es costosa políticamente, y ya que UCD quiere encauzar todos los procesos autonómicos por la vía 143 (excepto Andalucía), es preciso analizar la correlación de fuerzas en cada una de las regiones<sup>693</sup>.

O sobre todo con las siguientes de Alfonso Guerra, en las que además de constatarse la voluntad racionalizadora, se evidencia que no tenían en la cabeza un modelo asimétrico, sino que querían adecuar el ritmo y conformar un sistema que igualara el techo competencial de los territorios a la larga<sup>694</sup>:

Hay que tener bien claro que el Partido, a nivel federal, debe defender la vía 151 en donde esto sea posible, donde no se pueda se debe ir a la vía 143 «sin romper la baraja». Debemos estudiar los costes que esto pueda suponer para el Partido, para el Gobierno y para el país. En Andalucía Clavero nos ha tendido una trampa de la que no podemos salir, en Aragón no podemos hacer lo mismo. (...) Defiende que en la vía 143 caben más contenidos que en la vía 151 ya que en la vía 143 existe por parte de la CA facultad para autonomarse. Siendo así, en la vía 143 caben los contenidos de la vía 151 más los que quisiera la C.A. La UCD está dispuesta a que en la vía 143 haya Asamblea legislativa. Lo que nadie desea son fricciones ni suplantaciones en las competencias del Estado y la C.C.A.A. (...) En cuanto al cambio de vía autonómica, de la 151 a la 143,

---

<sup>693</sup> *Ibid.*, p. 10

<sup>694</sup> Así se recogía también en el documento que plasmaba las conclusiones de dos debates de la Comisión Ejecutiva Federal que analizaban específicamente el problema autonómico, y de la reunión que venimos detallando. En él establecían que el PSOE velaría por la «Garantía de una IDENTIDAD EN LOS TECHOS y en los límites de competencias que cada Comunidad puede alcanzar, sin discriminación alguna», aunque esto no supusiera una política autonómica uniforme. Además, confirmaban que partían de la consideración de que a través de la 143 se obtenían similares instituciones que por medio de la 151, como la Asamblea Legislativa, y de que la vía del 151 implicaba «ciertos riesgos», en Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Conclusiones sobre estrategia del PSOE en política autonómica”, ABFPI, 75-G 1.

los mayores problemas son los concernientes a salvar la imagen del Partido, como sucede en el País Valenciano, Baleares y Aragón<sup>695</sup>.

En concreto, respecto a los territorios en los que barajaban la posibilidad de reconducir la vía del 151, no estaba en aquel momento Andalucía, donde mencionaban una fase de acuerdo a pesar de que «se es consciente de los riesgos que comporta, pero es algo irreversible seguir por dicha vía, existe gran conciencia popular sobre el tema». Eran más flexibles respecto a Baleares, cuyo representante, a pesar de reconocer el coste que supondría el abandono de la vía del 151, afirmaba que siempre que no se renunciara a las instituciones, la vía del 143 debería ser la recomendada por el partido; y algo similar sucedía en Aragón, donde reconocían que la Ley Orgánica sobre Modalidades de Referéndum hacía que debieran replantearse la vía de acceso<sup>696</sup>.

Por otro lado, parece claro que existían conversaciones sobre la posibilidad de reconducir la cuestión de las vías con el Gobierno, aunque no se tratara de negociaciones formales, como demuestra esta intervención del Secretario General, estaban tanteando el terreno:

En el Comité Federal se debe tomar la decisión de si se emprende o no la negociación, debe adoptarse una estrategia definida para saber nuestra capacidad de negociación. Un fracaso del proceso autonómico es un fracaso de la democracia, no sabemos a qué plazo nos estamos jugando la democracia. En esta Constitución de las Autonomías, el Gobierno no sabe a qué modelo de Estado va a ser el resultante, no se sabe a dónde va a llegar. Si nosotros damos una definición de nuestra estrategia, esta será la primera. Particularmente me preocupa menos ganar las próximas elecciones que conseguir finalmente un buen y funcional Estado<sup>697</sup>.

En cualquier caso, se confirmaba que la cuestión del cambio de vía les preocupa fundamentalmente por una cuestión de «imagen»<sup>698</sup>. De hecho, cada vez se fue haciendo más patente que la homogeneización y armonización que perseguían estaría destinada a construir un Estado igualitario y cada vez más simétrico, por lo que comenzaron a plantear de forma recurrente en las manifestaciones públicas que el problema de las vías

---

<sup>695</sup> Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Reunión con los Secretarios Generales de nacionalidad y región...”, pp. 15-16.

<sup>696</sup> *Ibid.*, pp. 10-13.

<sup>697</sup> *Ibid.*, p. 16.

<sup>698</sup> Joaquín Leguina, advertía de que una actitud de responsabilidad de Estado en esta cuestión conllevaba un desgaste que «le correspondería al Gobierno exclusivamente», y planteaba que lo conveniente sería llegar a un acuerdo político general. González también mostraba ciertas reservas, en *Ibid.*, pp. 8 y 11.

era «puramente procedimental» y que en ningún caso acceder por una u otra significaba convertirse en una autonomía de primera o de segunda. Aunque es cierto que pese a esto siguieron haciendo bandera de la libertad de elección y del respeto a la voluntad popular, sobre todo en el contexto del caso andaluz, es evidente que internamente trabajaban por reconducir el resto de los procesos por la vía del 143 sin que esto supusiera una pérdida de credibilidad que les pasara factura<sup>699</sup>.

### 3. La quiebra del consenso

Ya se han aludido varios de los motivos que podrían explicar la distinta suerte de Andalucía en su andadura autonómica, uno de ellos, la división que en el seno de la UCD se produjo con respecto al viraje que la cúpula quiso imprimir en aquella materia. Aunque no sería hasta enero de 1980 cuando se hizo oficial, el 23 de noviembre el Comité Ejecutivo Nacional votó a favor de modificar la vía para Andalucía por el 143 y de recomendar la abstención en el referéndum<sup>700</sup>. Pero esto no contó con el acuerdo del conjunto de la UCD regional, y su Presidente, Manuel Clavero, se opuso a ello. Esta figura fue clave –aunque no determinante– al dificultar aún más que la estrategia centrista triunfara y que el movimiento pro autonómico se replegara; impidiendo también –junto a Escuredo– que los socialistas cedieran ante las presiones del Gobierno, pese a que desde la estructura federal no lo tenían nada claro. Martín Villa contaba como él y gran parte de la plana gubernamental habían presionado a Suárez para que destituyera a Clavero precisamente porque estaba siendo perjudicial a este respecto, incluso de cara al pacto con los socialistas: «no era lógico que un ministro del Gobierno estuviera arrastrando a todos, también a la oposición socialista»<sup>701</sup>.

---

<sup>699</sup> Otro documento que confirmaba estas cuestiones sería el de «Bases de actuación en materia de Política Autonómica», que recogía el espíritu de aquella reunión, reafirmando que la voluntad socialista era la de crear un Estado Autonómico sin privilegios, alcanzando en el proceso final los mismos techos competenciales, sin que la elección de la vía supusiese ninguna limitación en este sentido, aunque ordenando los ritmos. Además, demostraba que la mayor diferencia respecto a la política centrista, como se viene defendiendo, era la negativa del PSOE a imponer aquella armonización por la fuerza, provocando el bloqueo de la construcción de las autonomías, por lo menos de momento: «racionalizar los procesos autonómicos no es frenar el ritmo de acceso a la autonomía por las vías emprendidas, sino adaptar la transformación del Estado a unos ritmos adecuados», en Secretaría de Política Autonómica-PSOE: «Bases de actuación en materia de política autonómica» (Madrid, 18 de enero de 1980), ABFPI, 75-B 9.

<sup>700</sup> Manuel CLAVERO: *Forjar Andalucía...*, p. 203.

<sup>701</sup> Al parecer, él y Pio Cabanillas plantearon el 19 de diciembre de 1979 al Vicepresidente de Gobierno, Fernando Abril, la necesidad de cesar a Clavero como ministro de Cultura por la cuestión andaluza. Tras esto, Suárez les convocó, y junto a ellos estuvieron Abril Martorell, Pérez-Llorca y Arias-Salgado: «Denunciamos la falta de una política global en la cuestión autonómica y, aunque se nos discutió, sí se aceptó la conveniencia del cese de Clavero, que se haría en cosa de horas. Pasó un mes, la cuestión

Mientras, entre el 7 y el 9 de diciembre, se celebraba el II Congreso de la Federación Socialista de Andalucía, en la que la pugna entre el sector «ortodoxo» o «borbollista» y el «escuredista» se saldó en favor de los primeros pese a que el segundo había capitalizado la reivindicación autonómica y seguiría ofreciéndose esta imagen de cara al público. En aquel encuentro, el grupo más sensibilizado con el andalucismo, representado por la Agrupación Provincial de Almería, trató de establecer –a través de una enmienda a la Ponencia de Estatutos–, que la Federación andaluza pasara a convertirse en partido federado del PSOE, cambiando sus siglas por las de PSA-PSOE. Esta propuesta, sin embargo, no fructiferó, al ser aprobado el dictamen original con la abstenciones de Granada y Almería<sup>702</sup>.

Pero aún más significativo sería el contenido de una Ponencia Política destinada en su totalidad a valorar la importancia de la autonomía, en la que no sólo estaba implícita su concepción de la misma basada en los criterios de la subsidiariedad, sino que de manera explícita se esforzaron por distinguirla del nacionalismo burgués y folklórico, defendiendo una identidad andaluza basada en la voluntad de superar el subdesarrollo y arraigada en el pueblo andaluz gracias al sentimiento del agravio comparativo<sup>703</sup>. Esto era ya visible en su primer apartado, «Andalucía. Realidad y conciencia autonómica» pero se irá acentuando conforme vaya avanzando el texto:

1. Andalucía constituye una comunidad con personalidad propia innegable, histórica y política, diferenciada del conjunto de pueblos que constituyen la Nación Española. La identidad geográfica, la existencia de unos hábitos sociales comunes, la participación en unas análogas formas de sentir y de crear la cultura, el sometimiento a una idéntica estructura de explotación económica, son datos que han contribuido a consolidar la identidad y a dotar a los andaluces de una conciencia de colectividad diferenciada, con aspiraciones de protagonizar su futuro.

---

andaluza se enquistó aún más y fue Clavero quien dimitió», en Rodolfo MARTÍN VILLA: *Al servicio...*, p. 183.

<sup>702</sup> *El Socialista*, 139 (16 de diciembre de 1979). La ponencia de Estatutos aprobada decía así: «Artículo 1º- La denominación del PSOE en Andalucía es la de “PSOE DE ANDALUCÍA”», en PSOE-A: “2º Congreso Socialista de Andalucía. Resoluciones. Ponencia de Estatutos”, ABFPI, Fc 66, p. 3.

<sup>703</sup> A este respecto es interesante indicar que como señala la crónica del Congreso realizada en *El Socialista*, la delegación de Almería, que representaba al sector más proclive al andalucismo, mantuvo «una cierta *hostilidad*» durante los debates, en *El Socialista*, 139 (16 de diciembre de 1979).



2. El dato que más ha contribuido a la definición de Andalucía, sin embargo, es su dependencia global con respecto al capital español<sup>704</sup>.

La identidad colectiva no estaba restringida únicamente a los aspectos socio-económicos que la habían situado históricamente en una situación desventajosa respecto al resto de España, pero son sobre los que recaía el peso de la construcción de la comunidad a la que se referían. Y por otra parte, aunque la imaginaron diferenciada regionalmente en lo cultural o lo histórico, de forma acorde a las posiciones defendidas posteriormente en el seno de la Ponencia para el Estatuto de Carmona, la concibieron nacionalmente española.

Esta sería en cualquier caso la única referencia a la identidad diferenciada desde aspectos más puramente culturales que se haría en todo un texto que era reiterativo hasta la saciedad recordando cómo el crecimiento de la conciencia identitaria del pueblo andaluz obedecía a criterios relacionados directamente con la «progresiva constatación de la situación de marginación de nuestra tierra», aunque esto haya permitido «niveles de afirmación de la propia personalidad de capacidad de exigencia de instituciones de autogobierno parangonables a las de otros territorios del Estado mucho más favorecidos que Andalucía por las ventajas del desarrollo económico y por la marcha de la historia». Evidenciando así un argumento recurrente en su retórica, aunque no se explicitaba ahora: que estos territorios privilegiados no deberían estar legitimados a mayores derechos que Andalucía, aunque más adelante llamaban a combatir la «xenofobia y el lerrouxismo», en clara alusión al PSA, que podía traducirse en un crecimiento del sentimiento antivasco y anticatalán.

Por otra parte, y esto es lo que diferenciaba la defensa socialista de la identidad andaluza, del nacionalismo «interclasista» o «folklórico», al basarse la conciencia colectiva de los andaluces en «la conciencia de marginación de los sectores populares», la lucha autonómica se veía como un avance en la toma de conciencia de clase, vinculando la lucha por la autonomía a la lucha de clases. Recurriendo así a los argumentos clásicos del socialismo para conciliar internacionalismo, socialismo y nacionalismo, aunque en este caso evitaban este término, de forma muy significativa. Un término que como se ha visto sí era utilizado por Escuredo, dándole de todos modos un contenido similar al que se veía en este texto. A este respecto, podría utilizarse como

---

<sup>704</sup> PSOE-A: “2º Congreso Socialista de Andalucía. Resoluciones. Ponencia Política”, ABFPI, Fc 66, p. 9.

ejemplo del planteamiento del Partido la contraposición entre identidad y reivindicación autonómica en positivo y nacionalismo en negativo:

9. Para los socialistas andaluces, la conciencia de Andalucía ha de pasar por la profundidad en el análisis de la explotación y marginación de Andalucía y por su asimilación por los sectores populares como consecuencia del sistema capitalista. La pretensión de analizar la realidad de Andalucía desde la perspectiva de la mera comparación con otras nacionalidades y regiones de España es algo que no contribuye a formar la conciencia de clase, sino muy al contrario permite difuminar los contornos del proceso de enfrentamiento profundo de las diversas clases sociales andaluzas y hace posible la puesta en práctica de una política interclasista. (...) INSTAURACIÓN DE LA AUTONOMÍA PLENA, ACCESO DE LOS SOCIALISTAS AL PODER AUTÓNOMO E INICIACIÓN DE UN PROGRAMA DE REFORMAS Y TRANSFORMACIONES SOCIALES EN PROFUNDIDAD SON LAS ETAPAS PARA LA FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA IDENTIDAD ANDALUZA Y PARA LA SUPERACIÓN DE LA MARGINACIÓN.

(...) 11. En Andalucía existen –y se encuentran en un momento de consolidación y crecimiento– elementos e indicios que apuntan al surgimiento de una conciencia de nacionalidad y de aspiraciones a la definición de Andalucía como nacionalidad. Y es esto una cuestión que los socialistas hemos de deslindar al poder aparecer distintos tipos de nacionalismos que en la mayoría de los casos conocidos se manifiestan con un claro matiz interclasista o burgués. En las contradicciones existentes en Andalucía los socialistas tenemos conciencia de que es prioritario la defensa de unas clases populares que luchan contra las consecuencias de la explotación capitalista<sup>705</sup>.

Esta contraposición, en la que el PSA no salía bien parado, identificaba el nacionalismo andalucista con los valores negativos, mientras que defendía una identidad andaluza que era a todas luces regional y que formaba parte de una identidad nacional española superior que no era vista sin embargo como nacionalismo. Y como reflejo de

---

<sup>705</sup> *Ibid.*, pp. 10-11. Además, como se detalla en la crónica de *El Socialista*, en el apartado 11 se incluyó la referencia al surgimiento de una conciencia de nacionalidad para salvar las tensiones que se habían producido ante la definición de Andalucía como nacionalidad. Como vemos, ello se evitó, pero hubo que introducir esta mención a partir de una enmienda transaccional para sofocar el enfrentamiento, aunque le seguía una declaración de principios destinada a desvincular al PSOE, a partir de aquella vaga declaración, con cualquier tipo de movimiento nacionalista, en *El Socialista*, 139 (16 de diciembre de 1979).

ello concluía en su punto 35 con el repetido lema de Blas Infante, conectando así con el andalucismo histórico:

«Andalucía por sí, para España y la humanidad» dijo Blas Infante. Esta frase debe ser desarrollada hoy: autonomía para levantar Andalucía. Levantar Andalucía para liberar al Pueblo de nuestra tierra para convertirlo en punta de lanza en el proceso de construcción de una sociedad socialista y por tanto justa, solidaria y libre en España, en Europa y en el mundo. Este es el nuevo ideal que los socialistas proponemos al pueblo andaluz.<sup>706</sup>

Este era pues, el socialismo andaluz que dominaría la campaña por el referéndum, haciendo que, como ha enunciado Manuel Ruiz, el 28F tuviera lugar en «un escenario *nacionalista sin nacionalismo*» fundamentalmente porque la posiciones de Escuredo y su «*andalucismo nacionalista de clase*» habían quedado marginadas en la práctica, pese a que se siguió aprovechando el tirón de su imagen pública como andalucista convencido, dando autenticidad a la campaña socialista<sup>707</sup>. Todo indica que ni siquiera desde el PSOE-A lo tenían tan claro, y que ante la movilización social; la situación interna de UCD; el miedo a que el PSA tomara ventaja de no hacerlo ellos; y el empuje de Escuredo, en el PSOE comprendieron que tenía que apostar por aquella opción, aunque les pareciera arriesgada. Esta sería la opinión de otro ponente del Estatuto, el centrista Carlos Rosado, que, como protagonista de aquellos hechos recuerda la actitud de los dos partidos mayoritarios como carente de una dirección nítida y tendente a la improvisación, pero con la ventaja por parte de los socialistas, de un mayor margen de maniobra al no tener la responsabilidad del gobierno:

Nadie en Madrid deseaba la proliferación de Autonomías que temían pudiera provocar la irrupción de Andalucía en un club que no estaba pensado para nosotros. (...) Creo que ni en la UCD ni en el PSOE había prisa alguna por constituir la Comunidad Autónoma de Andalucía y a ambos partidos les sorprendieron los acontecimientos con

---

<sup>706</sup> *Ibid.*, p. 15.

<sup>707</sup> Manuel RUIZ ROMERO: “La singularidad del caso andaluz o su aportación al Estadi de las Autonomías», en *Actes del Congrés la transició de la dictadura franquista a la democràcia: Barcelona, 20, 21 i 22 d’octubre de 2005*”, Barcelona, UAB-Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica, 2005, p. 186.

la diferencia de que uno gobernaba y el otro no. Sencillamente carecían de estrategia y de planificación<sup>708</sup>.

Una improvisación que se vería confirmada por las propias palabras del Vicesecretario del PSOE, quien confesaba años más tarde que no se decidieron más que cuando no tuvieron otro remedio y como reacción al movimiento centrista, demostrando que la visión estratégica y los intereses electoralistas tuvieron un peso nada desdeñable en la toma de decisiones:

La Constitución dejaba abierta la opción autonómica en cuanto al dibujo del mapa y a la dualidad del método de acceso. Estábamos en conversaciones con el Gobierno y con UCD en diciembre de 1979 para acordar una solución. En los primeros días de enero un viaje que había preparado a Estados Unidos constituyó para Abril Martorell un motivo de preocupación, pues temía que UCD tomaría decisiones durante mi ausencia que convertirían en imposible un acuerdo entre los dos partidos. (...) A mi llegada me encontré las cosas demasiado avanzadas: tomaron la decisión de convocar un referéndum en Andalucía para decidir el camino de acceso a la autonomía con la posición previa del Gobierno de apoyar la llamada «vía lenta». A nosotros nos colocaron ante el hecho consumado, lo que nos obligaba a situarnos en la actitud contraria, en la defensa de la vía rápida del artículo 151<sup>709</sup>.

---

<sup>708</sup> Carlos ROSADO: "La UCD...", p. 178. Otras declaraciones de Felipe González abonarían esta idea, al mostrarse preocupado por las autonomías tras la aprobación de los Estatutos vasco y catalán. Inquieto por la fase crítica en la que se encontraban a principios de enero, decía creer que el único desarrollo posible era el de avanzar a un ritmo acelerado y serio, siempre que la voluntad popular así lo confirmara. Pero esto mismo era puesto en duda, refiriéndose a que se estaban produciendo quiebras en este sentido, lo que ponía en peligro el proceso y mostraba sus reservas sobre el mismo: «Porque si la Constitución dice que hace falta el 50% de cada una de las circunscripciones electorales para acceder a la autonomía por tal o cual procedimiento, nosotros lo que no podemos decir es que si hay dos o tres circunscripciones que no hagan ustedes una excepción. Porque no es lógico. La gente, o quiere la autonomía mayoritariamente, o no la quiere mayoritariamente», en *El Socialista*, 142 (6 de enero de 1979). Por otra parte, Gregorio Peces Barba, incidiría también en la idea que se desprendía ya en la declaración de Felipe González: los socialistas daban por hecho que un resultado negativo en alguna de las provincias daría al traste con la consecución de la autonomía por el 151, obligando a esperar 5 años para acceder de nuevo a la misma: «el fracaso de la iniciativa en el momento de la ratificación por referéndum, en una provincia, enerva todo el proceso en la totalidad (...) esta vía del 151 exige, por un fundamento racional, el mismo grado de conciencia que se ha demostrado históricamente en Cataluña, Galicia o el País Vasco, y eso supone la conciencia de región o de nacionalidad en su totalidad, con lo que es razonable que el fracaso de una parte ponga de relieve lo inadecuado de utilizar ese cauce. También es sistemáticamente adecuado el plazo de cinco años que la ley orgánica concreta», en *El País*, 18 de enero de 1980.

<sup>709</sup> Alfonso GUERRA: *Cuando el tiempo...*, p. 235. Otro testimonio, esta vez el de Clavero, hace referencia a otras reuniones paralelas entre los socialistas y los centristas que podrían haber conducido a un desenlace distinto. Hablando de la reunión que tuvo con Suárez el mismo 15 de enero, explicaba que tuvo una esperanza de que las cosas pudieran arreglarse, cuando le contó de unas conversaciones –que el Presidente del Gobierno desconocía– con los socialistas. Le propuso entonces que retrasara la Resolución

Se trataría pues, de la aceptación de una situación de hechos consumados, una idea que transmite el testimonio de Carlos Rosado, quien resalta el peso que tuvo Escuredo inclinando al Partido hacia aquella opción, pero destacando también el papel que ejerció la presión social:

Y el propio Partido Socialista inicialmente distante, e incluso incómodo con Escuredo, no tuvo más remedio que apoyarle porque la decisión de UCD era absolutamente inasumible. (...) Resulta mezquino sostener hoy, como se hizo entonces, que la izquierda actuó por simple oportunismo electoral, simplemente sintonizaron con las aspiraciones de una masa potente de andaluces<sup>710</sup>.

Creo que aquí está una de las claves del proceso, como se ha planteado, no se puede tachar sin más de oportunista al PSOE, ya que los principios que defendió desde el inicio como fundamentales seguían siéndolo, al mismo tiempo que se jerarquizaban y se hacían compatibles con los nuevos tiempos, eso sí, en muchos casos a golpe de improvisación. Como se está viendo, el caso andaluz es un ejemplo claro, y aunque la estrategia política jugó un papel fundamental, los valores socialistas no fueron abandonados, atendiéndose además a una voluntad mayoritaria con la que estaban sensibilizados. La influencia de Escuredo fue importante pero no habría sido decisiva en otra coyuntura<sup>711</sup>, como no lo fue en el caso del País Valenciano, donde el Presidente del Consell Preautonòmic dimitió ante el viraje que su partido empezaba a imponer en materia autonómica, comenzando a desistir en sus esfuerzos por alcanzar la autonomía plena por la vía del 151, cuestión que se tratará más adelante. Sin centrar la atención ahora en este caso, que posiblemente supuso el contrapunto al modelo andaluz, su mención se realiza porque demuestra que la voluntad de un Presidente no era en absoluto suficiente, y que el apoyo social fue decisivo, enredado con la estrategia

---

para reconducir el proceso autonómico que iba a adoptar ese día la Ejecutiva Nacional, en función de las negociaciones previstas para seis días después, algo que sin embargo Suárez no hizo, en Manuel CLAVERO: *Forjar Andalucía...*, p. 207. En esta línea, Enric Company ha señalado que a finales de 1979 el PSOE había iniciado negociaciones con el Gobierno para definir conjuntamente un modelo de desarrollo para el Estado de las Autonomías, aunque no se llegó a ningún acuerdo porque UCD decidió «protagonizar sola la reconducción autonómica pensando que así se granjearía la aprobación de los sectores tradicionales del nacionalismo español», en Enric COMPANY y Francesc ARROYO: *Historia del socialismo...*, p. 69. Martín Villa, por su parte, indicó también que «antes del referéndum andaluz pudo haberse llegado a un acuerdo con el PSOE, pero éste no encontró, por las razones que fuere, interlocutores en el Gobierno ni en UCD», en Rodolfo MARTÍN VILLA: *Al servicio...*, p. 193.

<sup>710</sup> Carlos ROSADO: “La UCD...”, p. 180.

<sup>711</sup> Una visión un tanto acrítica del papel del PSOE y de Escuredo como garantes de la autonomía andaluza en Diego CARO CANCELA: *La reconstrucción del PSOE en la Andalucía occidental: entre la memoria histórica y la renovación (1975-1982)*, en *Historia del presente*, 26 (2015), p. 24.

electoralista y política, ya que son fenómenos que difícilmente pueden ser separados. La UCD decidió imponer un plan a nivel estatal, olvidando al hacerlo los intereses de la sociedad andaluza y con ellos sus intereses electorales en aquel territorio. Y al hacerlo, no supieron o no pudieron, como sucedió en tierras valencianas, vincular el no al referéndum con la agitación de fantasmas que consiguieran las adhesiones de una parte de la población. Intentaron hacerlo, alentando polémicas sobre el centralismo sevillano<sup>712</sup>, pero este recurso no resultó lo suficientemente potente como para neutralizar otro sentimiento mucho más arraigado, el del agravio comparativo con regiones más ricas como Cataluña y Euskadi, a las que en más de una ocasión se acusaba de haber participado con su desarrollo a generar más miseria en Andalucía. Aquí, el catalanismo no podía ser agitado por la UCD para avivar tensiones que debilitaran el movimiento autonomista, más bien al contrario, los andaluces querían ser restituidos en sus derechos y no contar con menos autonomía que la que habían conseguido estas nacionalidades históricas.

De este modo, el PSOE inició en Andalucía una estrategia en la que Escuredo tuvo un protagonismo indiscutible y en la que la sociedad fue decisiva, gracias posiblemente a la torpeza de UCD, que hacía para los socialistas imposible cualquier otra opción desde el punto de vista estratégico. Pero además de la competencia con UCD, fue también decisiva la eclosión del voto andalucista en las elecciones generales en marzo de 1979, que convirtió al PSA en una fuerza a tener muy presente. Algo que no hizo UCD, como denuncia Juan Carlos Aguilar, pese a que disponía de un estudio realizado por METRA/SEIS en junio de 1979, para explicar el auge del voto nacionalista en las elecciones de marzo. En él, se indicaba cómo el PSA se había nutrido de apoyos provenientes, fundamentalmente, de posibles votantes del PSOE y UCD; y cómo de no haber existido este partido, los socialistas habrían sido los más beneficiados. Además, el informe remitía a la importancia que en la mentalidad colectiva estaba adquiriendo la identidad andaluza, aunque con tintes distintos a los del nacionalismo catalán y vasco, más en relación con esa idea de agravio y restitución a la que nos venimos refiriendo. En cualquier caso, se demostraba que este fenómeno no podía ser pasado por alto por los grupos políticos:

---

<sup>712</sup> Se resucitaba por parte de UCD la fórmula del agravio del resto de provincias respecto a la preponderancia de Sevilla, véase Manuel RUIZ ROMERO: *La conquista del Estatuto...*, p.194.

si por nacionalismo se entiende una conciencia de identidad diferenciada de la existente en otras áreas, este estudio demuestra que Andalucía la tiene, aunque los elementos culturales en que se basa no son tan definitivos como los de Cataluña o el País Vasco. Lo que sí existe en Andalucía es una conciencia de marginación y abandono seculares por parte del poder central<sup>713</sup>.

Como ha defendido José María de los Santos, el PSA se convirtió en un acicate para el PSOE, que a partir de entonces entendió que debía tomarse la cuestión autonómica andaluza mucho más en serio, generando ese cambio de actitud a través del «escuredismo» y favoreciendo un enfrentamiento con UCD en esta tierra, mientras que a nivel general, como se ha visto, se debatían sobre la conveniencia de acercar posturas para favorecer la armonización:

El PSA acabó con la política de consenso y provocó asimismo la contienda Gobierno-oposición sobre la «cuestión andaluza», como demuestra el hecho de que sólo en Andalucía asumió el PSOE la función de seguir esta vía sin concesiones al Gobierno ucedista. Lo que demuestra que, sin el triunfo electoral del PSA en el 79, no hubiera habido 28 de Febrero de 1980. Si el PSOE no se hubiera sentido electoralmente amenazado por los resultados electorales del 79, con toda probabilidad no se hubiese convertido en abanderado de la causa andaluza en 1980<sup>714</sup>.

Aunque compartimos la idea de que el resultado electoral del PSA condicionó fuertemente la práctica política socialista en Andalucía, generándose unas divergencias muy notables con el resto de nacionalidades que estaban pugnando por acceder a la autonomía por el art. 151; parece excesiva y reduccionista la postura de este autor, que otorga un protagonismo absoluto a la formación de Rojas-Marcos, al considerar que desempeñó un rol histórico obligando a asumir ciertos protagonismos no calculados de antemano a los dos partidos mayoritarios. Esto, según él, habría conducido a una

---

<sup>713</sup> Conclusiones del estudio realizado por METRA/SEIS, citado en Juan Carlos AGUILAR: “De la memoria...”, pp. 182-183.

<sup>714</sup> José María de los SANTOS: *Andalucía en...*, p. 242. En este sentido Manuel Ruiz mantiene: «el hecho andaluz es utilizado desde las filas del PSOE para ofrecer una imagen concreta sobre la gestión de los socialistas al frente de las instituciones. Inclusive, en estos momentos la sensibilidad *escuredista* gana adeptos, por convencimiento y por estrategia, a la hora de imprimir un significativo cambio de rumbo en la labor de la Junta, de cara a reforzar la dimensión nacionalista/andalucista también entre los socialistas. Más que nunca ahora, y desde posiciones institucionales, el PSOE intenta vaciar de contenido simbólico la débil estructura orgánica de un andalucismo político, que ha irrumpido en contra de los sondeos», en Manuel RUIZ ROMERO: *La conquista del Estatuto...*, p. 242.

estrategia de «vampirización» por parte de Escuredo del nacionalismo andaluz que a la postre le fue efectiva<sup>715</sup>.

Ciertamente, los socialistas actuaron con respecto a la autonomía andaluza teniendo muy en cuenta el daño que el nacionalismo andalucista podría hacerles erigiéndose como la única fuerza que representaba los intereses del pueblo andaluz, pero como se ha intentado demostrar, habría que tener en cuenta muchos otros factores que incidieron en la actuación de la Federación socialista en Andalucía. Además, el reivindicarse como defensores de los derechos autonómicos de los territorios que no habían sido considerados nacionalidades históricas no había sucedido sólo en Andalucía, aunque a partir de 1979, el PSOE había comenzado una retirada en lo relativo a estas cuestiones en otras nacionalidades, acorde a esa planificación del proceso que estaba empezando a cuajar en los dos partidos mayoritarios; y en cambio, en Andalucía se comenzó una ofensiva al respecto.

La diferencia, por tanto, estribaba en que en Andalucía intervinieron muchos factores para que los socialistas, dubitativos en estos temas, no cedieran ante las presiones mediáticas y la propia tendencia que estaba imponiéndose desde la estructura federal. El PSOE estaba inclinándose por la reconducción de la autonomía para la mayoría, pero no había trazado una posición inamovible respecto a algunos territorios que ya habían iniciado la vía del 151. En enero, las manifestaciones que aparecían en prensa unos meses antes en favor de la racionalización aparecieron de nuevo, en editoriales de *El País*, pero también, en los ámbitos propios del Partido. Así, mientras se exigía la convocatoria del referéndum para la fecha prevista, el 28 de febrero, y se calificaba de traición al pueblo andaluz el giro centrista, se iba preparando el camino para que la población aceptara la vía del artículo 143 como una vía tan aceptable como la del 151, aunque no para Andalucía, y quizá tampoco para aquellas nacionalidades que ya habían manifestado su intención de ir por la vía rápida.

Esto significaba, a partir de su discurso, defender el 151 no por suponer más ventajas para Andalucía, sino porque el no hacerlo atacaba el principio de la soberanía popular y la consolidación de la democracia; porque frustraba las aspiraciones de un

---

<sup>715</sup> De hecho, como indica Diego Carlo Cancela, el liderazgo indiscutible de Escuredo en el avance del proceso autonómico, acabó rompiendo el monopolio andalucista, que estaba hasta entonces en poder exclusivo del PSA, en Diego CARO CANCELA: *La reconstrucción...*, p. 23. Como explica José María de los Santos, esto repercutió en gran medida en el declive de esta formación, en José María de los SANTOS: *Andalucía en...*



pueblo que se había expresado libremente; y porque era una maniobra centrista que lo único que se conseguía con ello era evitar que las fuerzas progresistas se instalaran en el poder<sup>716</sup>. Se desplazaba el problema de la diferencia real entre las vías, que era negada en toda manifestación pública, a una cuestión de libertad de elección, de agravio hacia un pueblo que generaría una frustración intolerable. Así se manifestaba José Rodríguez de la Borbolla:

El Comité Federal se pronunció en gran medida sintonizando perfectamente con la posición que previamente, había adoptado la Ejecutiva del PSOE de Andalucía. Estamos de acuerdo en que cualquiera de las vías que recoge la Constitución permite llegar al mismo objetivo, es decir, que siguen a través de ellas los mismos niveles y derechos autonómicos. Pero, una vez que una comunidad ha decidido una vía y ha creado unas expectativas autonómicas en un determinado territorio, es absolutamente irresponsable e irrespetuoso para con el pueblo adoptar una actitud como la adoptada por UCD<sup>717</sup>.

La responsable de política autonómica del PSOE se pronunciaba en los mismos términos, negando las mayores bondades de la vía del 151, que sólo era más adecuada para las regiones que así lo consideraban, aunque alertaba de los peligros de la misma y las ventajas de la denostada vía lenta, en la línea del mapa autonómico que estaba planeándose en el partido, manteniendo en aquel momento vía rápida solo para contados territorios:

Creo que no se debe caer en la trampa del maniqueísmo o pronunciamiento a favor de un artículo o de otro desde una posición o perspectiva general. La vía del 143 puede ser idónea para una comunidad y la peor de las vías para otra comunidad. La vía del 151 también puede ser la mejor para una comunidad o la peor para otras. (...) ambas son, desde una perspectiva general desde la Constitución, exactamente igual de legítimas y de eficaces. (...) La diferencia fundamental es aquella que se refiere al ritmo de competencias, ya que los techos pueden ser los mismos por una vía que por otras, es decir, los límites a que se puede llegar en las competencias son exactamente iguales. (...) También es cierto que frente a lo que pudiera llamarse una ventaja en el ritmo

---

<sup>716</sup> Primera plana de *El Socialista*, 145 (27 de enero de 1980). Véase en este sentido las declaraciones de María Izquierdo: «Unión de Centro no va a permitir que gobierne un partido de izquierdas en una comunidad autónoma. Eso es quizá el fondo de la cuestión», en *El Socialista*, 147 (10 de febrero de 1980).

<sup>717</sup> *El Socialista*, 145 (27 de enero de 1980).

indiscutible, existen unos riesgos de la vía del 151, que no se deben ocultar. El artículo 151 es realmente una barrera de obstáculos para cualquier comunidad autónoma. (...) La vía del artículo 143 cuenta con las ventajas en los que se refiere al ritmo en la aprobación del estatuto (...) Desde la perspectiva del 143 puede darse una autonomía bastante satisfactoria. Los socialistas no creemos que haya que ordenar desde el centralismo la vía que cada comunidad debe elegir; las comunidades han elegido y se han decantado por unas y por otras y, a nuestro juicio, la voluntad popular es algo que se debe respetar, algo que no ha hecho con su decisión la UCD<sup>718</sup>.

De forma paralela a la apuesta decidida por los derechos andaluces, en plena campaña por el sí al referéndum, proliferaban los artículos y las declaraciones que se esforzaban por eliminar cualquier sombra de duda sobre la igualdad entre vías, tanto en la prensa propiamente socialista<sup>719</sup>, como en otros medios, donde editoriales y escritos de importantes dirigentes seguían tratando de llegar a los lectores, quizá intentando crear un estado de opinión que fuera menos hostil hacía una reconducción que los socialistas posiblemente veían conveniente, aunque sin evidencias de que tuvieran tajantemente claro hasta dónde debía llegar, es decir, sin saber si el frenazo debía afectar a todos, como parecía preferían, o sólo a los que aún no se habían pronunciado, con la excepción de Andalucía, donde los hechos habían acabado por arrollar cualquier otra posibilidad<sup>720</sup>.

---

<sup>718</sup> Demostrando que en el PSOE prevalecía la idea de que el Estado Autonómico debía concebirse y construirse como un proceso paulatino y a largo plazo, en el que el horizonte final sería el mismo para todos los pueblos que lo desearan, añadía: «es una aberración pensar que porque en un primer paso de autonomía se tenga menos grado autonomía, no se pueda conseguir más. Hay que partir de la idea de que la autonomía es algo continuo, algo que admite graduaciones y medidas. No se trata de que sea negra o blanca. (...) los menores grados de autonomía pueden ser escalones que faciliten conseguir los más altos grados de autonomía», en *El Socialista*, 147 (10 de febrero de 1980).

<sup>719</sup> Otro artículo, titulado «Las dos vías, mal interpretadas», era publicado entonces en *El Socialista*, en aquella dinámica por denunciar la «demagogia» y el «maniqueísmo» que presentaba al artículo 151 como ventajoso para las Comunidades Autónomas, cuando la única diferencia se encontraba en el «timing», en *El Socialista*, 146 (3 de febrero de 1980).

<sup>720</sup> En aquellas fechas, el Secretario General del PSOE, volvía a confirmar con sus declaraciones la idea de que la situación les había cogido de improviso y que lo sucedido en Andalucía podría haber acabado pasando en otros lugares, como el País Valenciano; o bien podría no haber ocurrido tampoco allí, de no haber tomado UCD aquella decisión de manera unilateral. Según contaba Jaime Millás, González le había expresado que «habría sido posible el consenso con UCD en los procesos autonómicos andaluz y valenciano, pero “esta posibilidad la ha roto unilateralmente UCD y ahora el único acuerdo posible es sumarse a lo que dice UCD”». Señaló que en sus últimas conversaciones con el presidente del Gobierno se desprendían sospechas de tal decisión, si bien siempre Adolfo Suárez se mostró reacto a la aceptación del 151, aunque parecía estar resuelto el tema en el caso, andaluz y contar con el consenso suficiente para el País Valenciano. Consideró que los factores que podrían haber influido en la decisión de UCD eran los errores cometidos en el proceso de desarrollo de las autonomías, “poniendo agua al vino al crear situaciones preautonómicas para todos”, y asimismo en el miedo del partido del Gobierno al desarrollo

Son de aquellos momentos editoriales como el de *El Socialista*, que partiendo de la máxima que suponía la igualdad entre vías –en rapidez y en el techo final de competencias–, decía que lo razonable por parte de UCD, habría sido justificar su postura desde el punto de vista del bien común, y haber propuesto, no impuesto, la vía del 143 para todos aquellos que no tuvieran elaborados sus estatutos, dejando a Andalucía continuar por la vía emprendida<sup>721</sup>. Un editorial que coincidía con otro de *El País* –a raíz del anuncio de UCD–, en esa lógica del bien común<sup>722</sup>.

Pero más significativo serían dos artículos aparecidos también en *El País* el 17 y 18 de enero, y firmados por el socialista Gregoria Peces Barba, en calidad de jurista. El primero, dedicado a aclarar la vía del artículo 143; y el segundo, la del 151. Ambos destinados a convencer de la esterilidad de la batalla por acceder a la autonomía por una u otra vía, ya que la igualdad estaba asegurada por la Constitución. De hecho, otra vez, un dirigente socialista realzaba las bondades del 143, mientras que difuminaba las aparentes diferencias y los beneficios del 151:

En teoría, por consiguiente, la vía del artículo 151 permite terminar antes el desarrollo pleno del proceso autonómico. Sin embargo, parece que, en la práctica, por la lentitud del proceso necesaria ante un cambio tan importante en la organización del poder como el que supone el paso del Estado centralizado al Estado de autonomías, y por la mayor

---

real de las autonomías», en *El País*, 17 de enero de 1980. Unas afirmaciones que se apresuraron a negar un día más tarde, desde la Secretaría de Política Autonómica: «Respecto a las declaraciones de Felipe González en Valencia, que daban a entender la existencia de negociaciones con UCD sobre el proceso autonómico, María Izquierdo afirmó que sólo hubo voluntad de llegar a acuerdos y que en ningún caso suponía una marcha atrás en el proceso andaluz», en *El País*, 18 de enero de 1980. Como señala Caro Cancela, para alejar la sombra de dudas sobre el pacto PSOE-UCD, Felipe González se vio obligado a emitir un comunicado el 18 de enero criticando la decisión de UCD y reafirmando su voluntad de: «Defender la iniciativa autonómica decidida por los representantes legítimos del pueblo andaluz y apoyarla con los medios a mi alcance, tanto personal como políticamente», en Diego CARO CANCELA: *Cien años de socialismo en Andalucía (1885-1985)*, Cádiz, Quorum, 2013, p. 564.

<sup>721</sup> *El Socialista*, 145 (27 de enero de 1980).

<sup>722</sup> En el aparecido el 17 de enero se podía leer: «cuanto más tarde amanezcan más amargos serán los despertares de quienes, muchas veces con completa buena fe y argumentos no por falsos menos brillantes, han apostado todas sus bazas en favor de los estatutos de autonomía como bálsamos de Fierabrás para curar las reales dolencias del paro, la emigración, el subdesarrollo, la distribución de la tierra, la falta de industria, la escasez de escuelas y la insuficiencia de redes hospitalarias y de servicios públicos comunitarios en sus territorios. En este sentido, el caso de Andalucía resulta paradigmático. Es doloroso tener por anticipado la certeza de que sectores honestos y probadamente democráticos de esas ocho provincias van a considerar como un insulto deshonesto y antidemocrático contra su dignidad colectiva la resuelta negación de que sus problemas económicos, sociales y culturales vayan a ser resueltos por el artículo 151. Sin embargo, no existe más remedio que reconocer que la decisión adoptada ayer por el comité ejecutivo de UCD, aunque discutible en aspectos que se relacionan con los intereses partidistas de la propia organización, se adecúa a las necesidades a largo plazo de la construcción de un Estado a la vez funcional y democrático, rectifica quizá a tiempo el peligroso curso de esa insensata torrenciosa producida por el desplazamiento hacia los ámbitos territoriales de cuestiones amortiguadas o desactivadas dentro del marco nacional y no perjudica la causa de Andalucía», en *El País*, 17 de enero de 1980.

dificultad de los requisitos que hay que salvar en el artículo 151, los dos cauces se pueden de hecho simultanear, o casi (...).

Otro elemento importante de prudencia o de política legislativa en este campo debe llevar a la utilización más racional y más sosegada posible de la vía de acceso a la autonomía, si se quiere realmente alcanzar la meta del Estado de autonomías que aquí hemos dibujado, sobre todo una vez sentado el criterio de que ambos cauces –143 y 151– conducen a los mismos resultados finales. El forzar el ritmo puede ser una grave ligereza, o una provocación, o ambas cosas a la vez, que puede conducir al fracaso del proceso<sup>723</sup>.

Por otra parte, explicaba la necesidad de la inserción de la vía del artículo 151, como una vía especial destinada a rechazar «la tesis de unas autonomías como excepción con techo superior» posibilitando así «que todas las demás puedan tener ese idéntico techo»:

Por consiguiente, esta vía especial era imprescindible para poder hablar de Estado de autonomía como regla y no como excepción. Con la igualación política que supone su existencia se equiparan los fundamentos históricos y racionales de la autonomía. Ciertamente que se podían haber unificado los dos caminos, haciendo utilizar a todas las nacionalidades o regiones esta vía del artículo 151, suprimiendo la del 143. Sin embargo, esa opción hubiera sido muy imprudente, puesto que hubiera acelerado, quizá por encima de las posibilidades reales, el proceso de la construcción del Estado de autonomía. La existencia de este artículo 151-1 se justifica por las razones, que hemos dicho, para evitar que ninguna nacionalidad o región que realmente esté en condiciones de asumir el máximo de responsabilidades autonómicas pueda verse frustrada, pero tiene el peligro de su utilización torcida, en un proceso de emulación, demagógica por comunidades no preparadas para ello. Hay, por consiguiente, que considerarlo como una vía excepcional que no se puede convertir en regla. Sobre todo, su utilización imprudente no puede, en caso de fracasar, producir acusaciones contra el Estado ni contra la Constitución, sino que, sin duda, todas las responsabilidades que las

---

<sup>723</sup> *El País*, 17 de enero de 1980.

frustraciones que se puedan producir generen deben atribuirse a quienes iniciaron esa vía sin medir sus fuerzas ni la realidad de su región o nacionalidad<sup>724</sup>.

Si el PSOE había tenido la tentación de igualar a través de la 151 a todas las regiones, hacía tiempo que había desistido de ello. Las precauciones sobre los peligros de una aceleración innecesaria en el proceso de construcción del Estado de las Autonomías estaban presentes en muchos discursos recién aprobada la Constitución; y desde los primeros planes generales sobre la adjudicación de vías a cada territorio, la del 151 no había sido la única opción, ni siquiera la hegemónica. Pero conforme se acercaban a finales de 1979, la voluntad de adoptar la 143 de forma genérica –o mayoritaria– ganaba presencia<sup>725</sup>. Lo que podría inferirse de las palabras de Peces Barba, de ser representativa su declaración, era que la voluntad del PSOE fue la de evitar la construcción de un Estado asimétrico, ya fuera por una u otra vía, ya que la existencia de la 151 permitía por sí misma la igualdad en el techo competencial, y una generalización del 143 no podría impedirlo, por lo que la responsabilidad llamaba a los socialistas a pausar un proceso que no vería limitadas sus posibilidades en un futuro.

Se trataba, ante todo, como también se extrae del testimonio de María Izquierdo, de hacer viable la unidad de un sistema en el que la emulación estaba generando una carrera innecesaria, para evitar discriminaciones, cuando estas no se contemplaban, ni en el modelo constitucional, ni en el concebido por el PSOE. De hecho, en palabras de la Secretaria de Política Autonómica, el mensaje autonómico era:

---

<sup>724</sup> *El País*, 18 de enero de 1980. Además, nótese la advertencia que hacía sobre las frustraciones ante la carrera de obstáculos que era el artículo 151. Unas frustraciones que no serían atribuibles más que a los que iniciaron la vía sin ser conscientes de las dificultades. Una opinión que estaba en línea con lo referido por este autor en este mismo artículo, y por Felipe González en otra ocasión, y que tuvo poco que ver con la reacción del Partido ante los resultados del referéndum andaluz.

<sup>725</sup> Según el testimonio de Luis Fajardo, en aquella época «en la sede socialista se desarrollaban importantes reuniones de estudio y debate político de cara a fijar la posición del PSOE en torno a los problemas y cuestiones que planteaba el proceso autonómico. Ya desde finales de 1979 los socialistas habían manifestado el criterio de que todas las regiones habrían de disponer de facultad legislativa, incluso aquellas que hubieren optado por la vía del artículo 143, atribuyéndoles un elenco competencial ampliable, (...), si bien con ritmos diferentes a los del 151, y las mismas instituciones de autogobierno, incluso Tribunal Superior de Justicia (...). Para ello, el PSOE consideraba indispensable un acuerdo con el Gobierno que pudiera concretarse en «un Estatuto-tipo pactado, susceptible de variaciones o modulaciones en función de las peculiaridades de cada Comunidad Autónoma», y un calendario básico para el proceso autonómico. El PSOE, no obstante, aún no había articulado ese Estatuto-tipo en febrero de 1980» cuando UCD hizo público el suyo, que como explica también Fajardo, no gustaba entre los socialistas por la uniformización impositiva que suponía, pero que «a medio plazo terminaría resultando útil para el cierre del modelo territorial del nuevo Estado. Como veremos enseguida, el mayor interés de estos materiales reside en que constituyeron el ingrediente principal, junto a similares iniciativas del PSOE, de los Acuerdos Autonómicos que aún tardaría un año y medio en llegar», en Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo...*, pp. 98-99.

un mensaje sin odios entre los pueblos de España, que la defiende como una unidad integradora de los diferentes pueblos, sin los uniformes del franquismo y dando libertad a la comunidad cuando ésta tenga su propia identidad y sus propias señas. Pero todo esto integrándola y hablando de España y sin promover los odios entre los diferentes pueblos, cosa que, por el contrario, están haciendo las restantes fuerzas nacionalistas<sup>726</sup>.

Ante este momento crucial, se emitió, por parte del Comité Federal, una Resolución sobre Política autonómica, entre el 19 y el 20 de enero de 1980, en la línea de lo visto hasta el momento, amparando retóricamente por igual ambos procedimientos. En esta, concebía la Constitución de 1978 como «la Constitución de las Autonomías», y ligaba una vez más, el éxito del proceso al éxito de la democracia. Y para ello, desde el PSOE se consideraba necesario acelerar la institucionalización de las autonomías, que no frenarlas, lo que se traducía en una estrategia de defensa teórica de ambas vías, ya que por medio de las dos se conseguía el respeto a la identidad, la redistribución de la riqueza y la profundización de la democracia al aproximar el poder al pueblo, pilares básicos de su concepción autonómica. De modo que rechazaban la descalificación de la vía rápida que había realizado UCD, pero aseguraban la igualdad de competencias por medio de la vía lenta, que acababa imponiéndose como la más apropiada para el grueso de los territorios, al postularse en favor de una política de transferencias con «un ritmo adecuado, condicionado por la capacidad de asumirlas por parte de cada comunidad, como por la propia capacidad del Estado para llevarlas a cabo». La 151 era igual de válida, y la voluntad de la población debía ser escuchada, pero según esta visión, en la práctica no había motivos para escoger esta opción, precisamente, porque no había más diferencias que el exceso de precipitación:

Todas las vías fijadas constitucionalmente para el acceso a la autonomía son igualmente legítimas y eficaces, y compete a las instituciones representativas de cada comunidad la elección de la vía más adecuada. La descalificación del procedimiento previsto en el artículo 151, supone un flagrante desprecio a la Constitución y una suplantación de la voluntad popular libremente expresada.

Por otra parte, una política solidaria con respecto al desarrollo autonómico, exige que se garantice a todas las comunidades las mismas posibilidades de competencias y niveles

---

<sup>726</sup> *El Socialista*, 147 (10 de febrero de 1980).

de autogobierno, sin privilegios ni pretensiones uniformizadoras. El PSOE defiende en todo caso estos objetivos, cualquiera que sea la vía elegida por cada comunidad.

Para los socialistas, la consecución de la autonomía al amparo del artículo 143 de la Constitución comprende igualmente la existencia de asambleas legislativas basadas en el principio de representación proporcional y un consejo de gobierno propio<sup>727</sup>.

De este modo, en la práctica iban también decantándose por la elección de la vía del 143 en territorios en los que la 151 no había sido defendida como una cuestión irrenunciable hasta entonces; y se debatían entre la idoneidad o no, de mantener la vía rápida para otros territorios, como Canarias, el País Valenciano, Baleares o Aragón. En un nuevo informe, titulado «Esquema del proceso autonómico en cada comunidad», y que presumiblemente tendría validez en aquel momento, se realizaba un calendario con las fechas previstas para cada fase de la autonomía en los respectivos territorios<sup>728</sup>; y se incluía en el grupo del 151 a Andalucía, País Valenciano y Canarias<sup>729</sup> (como grupos en los que la iniciativa había culminado satisfactoriamente), y Baleares<sup>730</sup>; y en el 143 a Aragón<sup>731</sup>, Asturias<sup>732</sup>, Cantabria<sup>733</sup>, Extremadura, Castilla-León, Murcia<sup>734</sup>, Castilla-La Mancha, Madrid y La Rioja.

---

<sup>727</sup> PSOE: “Anexo II. Resoluciones del C. Federal. 19 y 20 de enero 1980. Resolución sobre Política autonómica”, en *Memoria. Informe de Gestion II. 29 Congreso*, Madrid, PSOE, 1981.

<sup>728</sup> El documento no está datado, pero debió escribirse antes de agosto, que es la fecha más temprana de una de las previsiones, con un apunte a mano en el que se indicaba que se había incumplido el plazo; y seguir vigente al menos hasta después de diciembre de 1979, fecha en la que se señalaba –otra vez a través de una anotación manuscrita junto a otra previsión– la superación del requisito para iniciar la autonomía por la vía del 143 en Asturias (lo mismo había señalado para la vía del 151 en Canarias, Andalucía y el País Valenciano, entre septiembre y octubre), en PSOE: “Esquema del proceso autonómico en cada comunidad”, AHUV, Fons Alfons Cucó, 027/003.

<sup>729</sup> Convertían al País Valenciano en el siguiente territorio, tras Andalucía, en celebrar el referéndum, entre marzo y mayo de 1980; para Canarias pensaban en junio de 1980.

<sup>730</sup> Durante el II Congreso de la FSB-PSOE, entre el 14 y el 16 de diciembre de 1979, se reafirmaron en su decisión tomada hacía meses, según se indicaba, de continuar por la 151, en *El Socialista*, 140 (23 de diciembre de 1979),

<sup>731</sup> En cambio, los socialistas aragoneses hicieron público un comunicado oficial de la Comisión Ejecutiva regional, ante el giro autonómico de UCD, estimando que se estaban restando posibilidades de acceder a una autonomía equiparable a las de las comunidades históricas, y reafirmando su postura de que en este territorio se elegía la vía del artículo 151, en *El País*, 18 de enero de 1980. Para el periodista José Ramón Marcuello, fue entonces cuando el PSOE y el PCE se vieron «entre la espada del posibilismo que abre el artículo 143 y sus compromisos adquiridos con la vía del 151», citado en Carlos SERRANO y Rubén RAMOS: *El aragonesismo en la Transición. II. Regionalismo y nacionalismo en el Aragón preautonómico (1978-1983)*, Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses-Fundación Gaspar Torrente, 2003, p. 148. Según explican Carlos Serrano y Rubén Ramos, los socialistas y los comunistas sufrieron, pese a la denuncia del frenazo de UCF, importantes críticas de las fuerzas extraparlamentarias de la izquierda, que señalaban la contradicción entre lo que se transmitía a nivel federal respecto a lo que mantenían los políticos aragoneses, algo que explicaría la diferencia entre el esquema general y sus declaraciones

De momento, en Andalucía, pese a las dudas, y quizá por lo excepcional de aquella situación, habían dado un paso adelante, que se concretaría en su campaña a favor del sí en el referéndum del 28 de febrero. La cita con las urnas estuvo marcada por la polémica y la denuncia por parte de toda la oposición gubernamental de la discriminación con respecto, no sólo a las condiciones abusivas que llevaba implícito el

---

concretas en este territorio, que corrobora una vez más la idea de que el PSOE actuaba de forma muy flexible según el lugar y conforme avanzaban los acontecimientos, permitiéndose en este período de definición ciertas divergencias en los planteamientos. Como cuentan estos autores, el V Congreso, celebrado en noviembre de 1979, les había acercado a posturas más maximalistas en esta región respecto a la autonomía, y de momento aún defendían, con Ramón Sáinz de Varanda a la cabeza, la vía plena, pese a que otras voces se alzaban por la opción más posibilista del 143, en *Ibid.*, pp. 148-152. Para la etapa previa véase ÍD.: *El aragonismo en la Transición. I. Alternativas aragonesistas y propuestas territoriales (1972-1978)*, Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses-Fundación Gaspar Torrente, 2003.

<sup>732</sup> Asturias sirve en este caso como ejemplo de los vaivenes socialistas en esta materia, de su actitud dubitativa y de su improvisación conforme se iban sucediendo los acontecimientos. Como se indicó anteriormente, en la reunión de Secretarios Generales de Nacionalidad y Región, en agosto de 1979, ya se planteaba que la férrea posición de UCD respecto al artículo 143 les obligaba a un acuerdo, aunque indicaban que tendrían que «dar la batalla en algún campo». Así, a finales de noviembre se firmaba un acuerdo entre UCD, PCE y PSOE por el que «ante la posición de UCD, que hace imposible “de facto” seguir la vía del artículo 151 (...) criterio este defendido por el PSOE, PCA y CD, los partidos políticos hacen un nuevo esfuerzo para lograr un concierto autonómico al único nivel que ahora parece posible, es decir, el configurado por el artículo 143 de la Constitución». La cesión ante la vía es presenta en este momento como necesaria, aunque como sabemos, estaba decidida desde antes, y posiblemente, la batalla la dieron en la condición –anunciada también en el acuerdo– de obtener a través de la vía del 143 una Cámara Legislativa Regional. Pero lo más llamativo de este caso no es esto, sino la entrevista que Rafael Fernández, Presidente del Consejo Regional de Asturias –y miembro de la Ponencia encargada de realizar el informe reseñado sobre la marcha autonómica durante el período de la Gestora–, concedió en *El Socialista* dos números antes de que el mismo periódico diera la información señalada. En este caso, el dirigente socialista se refería a la autonomía con una enorme prevención por lo costoso de la misma: «El asturiano tiene una idea muy clara de su regionalidad, pero no de su manejo autonómico. (...) la autonomía no es una panacea para esta región. (...) ¿Sabe alguien que estos gastos triplican los normales? Yo creo que de esto no es consciente el asturiano y que hasta que no lo sea no se puede hablar de autonomía como debe ser, una autonomía que interese a la región y a su clase trabajadora, y no una autonomía que solo interese a la oligarquía». Además, Fernández mostraba reservas también hacia la Cámara Legislativa que proponía el propio PSOE, diciendo: «¿para qué?, ¿Sobre qué vamos a legislar?, ¿qué tipo de gente va a legislar? Y lo más importante, el costo de una cámara legislativa (...) es mucho dinero para legislar, dinero que no se puede permitir, dadas las actuales circunstancias económicas, la propia región». Como reacción a esta entrevista, dos números después, cuando se daba a conocer el pacto autonómico para Asturias, el texto empezaba expresando que en aquellas declaraciones no se había recogido con exactitud la posición de los distintos partidos asturianos sobre la iniciativa autonómica. Todo ello, demuestra varias cosas, en primer lugar que como en otros temas, en este no había una postura monolítica y existían divergencias; pero también que la falta de una directriz clara propiciaba estas situaciones, en las que la dosis de improvisación y de acción reacción ante los movimientos del oponente político eran muy altas. *El Socialista*, nº135 (18 de noviembre de 1979); y *El Socialista*, nº177 (2 de diciembre de 1979).

<sup>733</sup> Cantabria era uno de los dos territorios en los que el PSOE se había posicionado por la 143 ya en tiempos de la Gestora, como se ha visto, y más tarde, la Federación cántabra aprobó en su Congreso, celebrado del 17 al 1 de noviembre de 1979, una ponencia autonómica por unanimidad en la que escogían la vía del 143 como la más adecuada para acceder a la autonomía, en *El Socialista*, 136 (25 de noviembre de 1979).

<sup>734</sup> Sería en el IV Congreso regional de la federación socialista murciana, entre el 21 y 23 de diciembre de 1979, cuando se decidió oficialmente que la región accedería a la autonomía por el art. 143, al suponer «más ventajas para la región que el 151». Enrique Múgica, que intervenía en el acto de clausura declaró que se trataba de una elección histórica, ya que permitía la racionalización del proceso autonómico», lo que abona las tesis de que el PSOE estaba transitando la andadura de la armonización autonómica en aquellas fechas, en *El Socialista*, 142 (6 de enero de 1980).



artículo 151, sino sobre todo a las diferencias en torno al menor tiempo de duración de la campaña; la presencia en los medios de comunicación públicos; la financiación gubernamental; o la misma elaboración de la pregunta, que parecía hecha para confundir a los votantes<sup>735</sup>. Estas dificultades permitieron añadir más dramatismo y teatralidad a la campaña, que fueron aprovechadas por los socialistas, jugando bien la carta del agravio<sup>736</sup>.

En cuanto a la estrategia socialista ante el referéndum, es posible analizarla a través de su guía de campaña, que como en otros casos es descrita para sus militantes como de «absoluta confidencialidad». Hay que destacar sobre otras cuestiones la sensación que transmiten de tener entre sus objetivos, no sólo el hecho de conseguir un resultado afirmativo, sino incluso en mayor medida, el obtener una imagen positiva a partir de su posicionamiento, demostrando que en Andalucía serían los socialistas los más concienciados con los derechos de su población y los más capacitados para resolver los problemas que acuciaban a los andaluces<sup>737</sup>. Así, señalaban como uno de los dos objetivos básicos, el protagonismo en la campaña, lo que consistían en que «el pueblo tenga una imagen real de quién puede ser el factor fundamental en la consecución de la autonomía respecto a la que se va a definir». Y añadían más adelante: «El partido que protagonice la campaña electoral tendrá un beneficio no sólo momentáneo sino prolongado. Será el “autor” de la Autonomía». Pero para rentabilizar aún más este esfuerzo, crearon incluso una imagen que tuviera la fuerza suficiente para identificar PSOE con autonomía, al sustituir la I del SI por el Puño y la Rosa, y conseguir así «el objetivo de mostrar al pueblo nuestra decisiva participación en el proceso autonómico», y basar «la imagen de campaña en el emblema del Partido, lo que es muy rentable para próximos procesos electorales», tratando de insistir «una y otra vez sobre estas imágenes, ya que por mucho que expliquemos nuestros argumentos sobre la Autonomía,

---

<sup>735</sup> Posiblemente, de lo más llamativo y criticado fue la elaboración de la pregunta. Entre otros, María Izquierdo, definía al texto como «farragoso y propicio a que el ciudadano sepa apenas qué va a votar», en *El Socialista*, 147 (10 de febrero de 1980). Este decía así: «¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución, a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?», en Santiago SÁNCHEZ TRAVER: “El 28-F”, en Juan de DIOS (ed.): *Crónica de un sueño : 1973-1983, memoria de la transición democrática*, Málaga, C&T, 2005, p. 99.

<sup>736</sup> Estas discriminaciones llevaron incluso a Escuredo a escenificar el rechazo socialista al giro ucedista a través de una huelga de hambre, que según su autor tenía el apoyo de Felipe González, aunque no posiblemente el de todos los socialistas, como se desprende de sus palabras: «Lo importante de este encuentro con Felipe González (...) es que, frente a ciertas posiciones ambiguas o confusas, él me apoyó personal y políticamente diciendo que estaba en el camino», en *El Socialista*, 147 (10 de febrero de 1980).

<sup>737</sup> Asimismo, de nuevo cobra relevancia la idea de la seriedad, la intención de demostrar la capacidad organizativa del PSOE, esencial según expresaban, para obtener la confianza del electorado.

si no hay una imagen, miles de veces repetidas, que los fije al Partido, podrán beneficiarse de ello otras fuerzas políticas»<sup>738</sup>.



Imagen 7; “Vota Sí” (Fuente: PSOE-A: “Un gran Estatuto para un gran pueblo”, ABFPI, Fa 683)

Era precisamente la manifestada voluntad de proyectar la idea de que PSOE era igual a la máxima autonomía, la que forzaba las repetidas advertencias y el ofrecimiento parejo de alternativas ante la imagen que, estaban seguros, trataría de trasladar el PSA a la opinión pública: aquella que vinculaba el giro del gobierno a conversaciones y pactos previos entre los dos partidos considerados centralistas y mayoritarios, UCD y PSOE. De hecho, los mensajes paralelos que se estaban enviando por parte de los socialistas en otros ámbitos, señalando las virtudes y la semejanza de ambas vías, destinadas en todos los casos a permitir la solidaridad e igualdad entre regiones y nacionalidades españolas; no se parecían en absoluto con el que emergía aquí. Ante un posible resultado negativo querían transmitir la sensación de incertidumbre, manteniendo que en aquel caso no habría «seguridad, ni tan siquiera, de que algún día pueda ser llevada a la práctica» y animaban a repetir como una canción la siguiente idea básica de campaña:

EL PSOE DE ANDALUCÍA (QUE HA SIDO UNA FACTOR FUNDAMENTAL EN LA DEFENSA DE LA AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA) PIDE QUE SE VOTE «SÍ» EN EL REFERÉNDUM PARA CONSEGUIR, POR FIN, NO DISCRIMINAR A ANADALUCÍA DEL RESTO DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA. EL PUEBLO ANDALUZ TIENE EL DERECHO A SU AUTOGOBIERNO QUE PERMITIRÁ SUPERAR LA SITUACIÓN DE MARGINACIÓN Y SUBDESARROLLO EN LA

---

<sup>738</sup> PSOE-A: “Guía de la campaña. PSOE de Andalucía. Referéndum Autonomía-80”, ABFPI, Fa 665, pp. 4-6 y 10-11.

QUE SE ENCUENTRA. LA DECISIÓN ESTÁ EN LA MANO DE LOS ANDALUCES Y DE ELLA DEPENDE EL FUTURO<sup>739</sup>.

A esto añadían el argumento que tenía más que ver con la traición a la soberanía, desplegando conjuntamente un argumento clásico del regionalismo en defensa respecto a una supuesta agresión del centro, de Madrid, pero que en ningún caso afectaba a la construcción de la identidad conjunta española: «nuestro camino lo decidimos nosotros mismos. No somos borregos para que desde Madrid el Gobierno decida por nosotros»<sup>740</sup>.

El éxito, por tanto, estaría asegurado con un resultados afirmativos, pero, ¿qué sucedería si el NO se imponía? Esta pregunta posiblemente no tenga una respuesta clara, pues el NO fracasó políticamente, pese a que no lo hizo legalmente. El peor panorama, augurado como posibilidad, tal y como se ha visto, por Felipe González o Gregorio Peces Barba, se materializó al menos en parte. Estos dirigentes plantearon que el resultado podría no ser positivo en todas las provincias debido a las exigencias difícilmente salvables del artículo 151, lo que les hacía ser precavidos ante la vía rápida. Y esto mismo fue lo que sucedió, únicamente en Almería no se consiguió, por apenas 20.000 votos, la ratificación de la consulta por la mayoría absoluta del censo electoral de esta provincia, aunque sí se pronunció afirmativamente el 55% del total del censo andaluz<sup>741</sup>. El fracaso legal, se convirtió sin embargo en una victoria moral y política, que permitió que se olvidaran declaraciones como las vistas, en que los socialistas advertían de que sólo serían responsables de las frustraciones aquellos que aún a sabiendas de las dificultades se lanzaran a apoyar la vía del 151. Este estado de ánimo era compartido también por los centristas, que a pesar de las declaraciones iniciales, eran conscientes de que en Andalucía sus propios electores les habían abandonado en un porcentaje elevado. Si los socialistas habían jugado con Andalucía una carta arriesgada, habían ganado.

#### **4. El discreto encanto del pragmatismo: el caso valenciano**

En medio de este contexto convulso, improvisado y cambiante, se encontraban los anhelos de algunos pueblos a los que se había prometido muchos derechos y que

---

<sup>739</sup> *Ibid.*, p. 5 y 9.

<sup>740</sup> *Ibid.*, p. 9.

<sup>741</sup> Manuel RUIZ ROMERO: “La singularidad...”, p. 185.

iban a ver frustradas sus expectativas. Entre ellos, el País Valenciano supone un ejemplo paradigmático de un territorio que había entrado en la Transición reivindicando con voz alta y clara los derechos que su personalidad diferenciada debía otorgarle y que acabó viendo cómo fracasaban sus aspiraciones<sup>742</sup>. Y en este sentido, los socialistas tuvieron un papel destacado, contribuyendo a desmoronar las esperanzas que ellos mismos habían contribuido a alentar. El caso valenciano ofrece el contrapunto al exitoso proceso andaluz, contrapunto a la vez que complemento necesario para entender mejor la actuación del PSOE en perspectiva, ayudando a complejizar la explicación de su comportamiento improvisado y errante, en el que tanto influyeron las convicciones ideológicas, pero también la estrategia. Si se menciona ahora de forma diferenciada es porque es a partir de este momento cuando podríamos hablar de un pragmatismo autonómico que comenzó a imponerse a finales de 1979, concretamente en diciembre de 1979 con la salida socialista del Consell Preautonòmic, aunque el abandono de la promesa del acceso a una autonomía de mayor rango por la vía preferente no se produjo de forma definitiva hasta el golpe de Estado de 1981, pese a que tampoco se descartara prácticamente desde finales de 1979<sup>743</sup>.

Los antecedentes en la reivindicación autonómica de este territorio durante la Transición podrían esbozarse de manera esquemática comenzando por mencionar que al grito de *Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia!*, toda la oposición democrática en el País Valenciano, especialmente la de izquierdas, había posicionado la autonomía en un lugar privilegiado dentro de las exigencias de cambio político. Las demandas de autonomía eran un lugar común entre las reivindicaciones democráticas en el País

---

<sup>742</sup> Sobre esta cuestión véase Benito SANZ: *Los socialistas en el País Valenciano (1939-1978)*, València, Institució Alfons el Magnànim, 1988; Manuel ALCARAZ: “Política e ideología en el proceso autonómico”, en Juan FERRANDO BADÍA: *El proceso autonómico valenciano*, València, Consell Valencià de Cultura, 1993, pp. 3-66; Vicente GARRIDO: “Consideraciones jurídico-políticas del proceso autonómico valenciano”, en Juan FERRANDO BADÍA: *El proceso autonómico valenciano*, València, Consell Valencià de Cultura, 1993, pp. 69-136; Benito SANZ y Josep Maria FELIP: *Política y políticos valencianos 1975-2000. Del tardofranquismo al Estatuto. 1975-1985*, v.I, Gules, València, 2002; Manuel ALCARAZ: *Cuestión nacional y autonomía valenciana*, Valencia, Instituto Juan Gil-Albert, 1985; ÍD: “Construcción y decadencia del Estado Autonómico”, en Ferran ARCHILÉS e Ismael SAZ: *Naciones y Estado. La cuestión española*, València, PUV, 2014, pp. 51-85; o Guillem LLOP y Joana TORMO: *Quan ens dèiem País. La preautonomía valenciana*, Barcelona, Editorial UOC, 2013.

<sup>743</sup> El que fuera entonces el Presidente socialistas del Consell Preautonòmic, José Luis Albiñana, ha integrado aquel suceso en un marco mayor, el de un incipiente pacto en UCD y PSOE por racionalizar la autonomía: «La realidad es, al margen de la política oficialmente asumida y respaldada en los Congresos de ambos partidos, e incluso al margen del pleno de los órganos de dirección –Ejecutiva y Comité Federal– del PSOE al menos, se estaba fraguando entre sectores dirigentes de este y de la UCD un pacto para desarbolar el crecimiento del Estado», José Luis ALBIÑANA: “Sobre la preautonomía”, en Vicente GARRIDO, Joaquín MARTÍN y Margarita SOLER: *El nacimiento del Estatuto valenciano*, València, Fundación Profesor Manuel Broseta, 2001, p. 78.

Valenciano, tanto para los partidos como para las manifestaciones cívicas que exigían un cambio político. Democracia y autonomía eran dos conceptos que se veían como inseparables, como se evidenció con la manifestación unitaria de toda la oposición antifranquista del 12 de julio de 1976, convocada para defender las libertades democráticas, la amnistía y la autonomía del País Valenciano, y que congregó a miles de valencianos. Pero si hubo una manifestación que confirmó la importancia que estas cuestiones habían adquirido para el conjunto de la sociedad valenciana fue la del 9 de octubre de 1977, convertido en el día nacional del País Valenciano, y que fue la más multitudinaria de la historia de este territorio –en la época se habló de la asistencia de unas 500.000 personas reivindicando el derecho a la autonomía–.

Así pues, aunque mayoritariamente no se ponía en cuestión el marco nacional español, los partidos –entre ellos las federaciones valencianas del PSOE– y las plataformas unitarias en las que estos estaban integrados, compartían una concepción que entendía al País Valenciano como una nacionalidad –como sinónimo de nación, aunque posiblemente sin capacidad soberana– que constituía un territorio diferenciado, con una historia, una cultura, una lengua y unas costumbres propias que lo legitimaban para demandar la autonomía, del mismo modo que sucedía con las tres nacionalidades históricas. Y así lo exigieron desde un principio los organismos unitarios en los que dentro del País Valenciano se integró el PSOE, culminando estas reivindicaciones con los postulados que mantuvo la *Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià*, creada el 14 de abril de 1976 como organismo que articulaba a todas las fuerzas democráticas dentro de este territorio. En su acuerdo constitutivo exigió –dentro del contexto general de ruptura democrática– el reconocimiento de la personalidad política diferenciada del País, concretada en la autonomía política y administrativa, y la creación inmediata de la Generalitat provisional del País Valenciano, puntos a los que daban especial importancia. Pero además, hubo otro hecho que confirmó el tipo de compromiso que todo el arco antifranquista había adquirido con esta causa. Cuando la *Taula* debía acudir a la reunión constitutiva del 4 de septiembre de la *Plataforma de Organismos Democráticos* (la *Platajunta*) –organismo equivalente a nivel estatal– como representante de este territorio, mantuvo una posición que igualaba en derechos a las tres nacionalidades consideradas históricas con la del País Valenciano. Unos días antes, como señalan Benito Sanz y Josep Maria Felip, una reunión de la «Taula» había acordado por unanimidad no aprobar el programa político que proponía la «Plataforma

de Convergencia Democrática» si no se modificaba el punto que sólo incluía el derecho a restablecer provisionalmente las instituciones autonómicas para los casos específicos de Cataluña, Euskadi y Galicia. En un documento alternativo, conocido como el «Documento de Valencia», defendían que se incluyera al País Valenciano y su derecho a que en el proceso constituyente se establecieran provisionalmente la Generalitat Valenciana y una Asamblea constituyente y se elaborara un Estatuto. Finalmente, en una reunión posterior de la Comisión Permanente, José Luis Albiñana, destacado dirigente de la Federación valenciana del PSOE, fue uno de los encargados de defender la postura valenciana que fue aceptada, añadiéndose al reconocimiento de los derechos de los casos particulares de Cataluña, Euskadi y Galicia, los del País Valenciano y Canarias<sup>744</sup>.

Esta posición fue reafirmada en posteriores documentos firmados por la *Taula* en los que por ejemplo se aludía a una historia tergiversada, una lengua perseguida y marginada, una cultura menospreciada, y a un derecho de autogobierno negado por el poder opresor durante siglos. Al mismo tiempo era común la referencia a la oportunidad histórica que podía brindar el nuevo sistema democrático que se estaba gestando para reivindicar aquellos derechos que correspondían con la voluntad del pueblo valenciano.

Efectivamente, tanto los socialistas como el resto de fuerzas antifranquistas, compartían la necesidad de que la democracia conllevara la promulgación de un Estatuto de Autonomía para el País Valenciano, pese a que no todos participaran exactamente de las mismas posiciones en torno a la cuestión nacional. De hecho, ni siquiera dentro de cada formación existían posturas homogéneas, algo que se haría evidente dentro del PSOE, a nivel federal, pero también en el ámbito valenciano. Para empezar, la Ejecutiva Federal no participaba de la sensibilidad que las federaciones valencianas habían adquirido gracias a la extensión de las ideas fusterianistas del nacionalismo valenciano, a las que no era fácil ser ajeno en el espacio de socialización al que pertenecían estos dirigentes y militantes. Pero por otra parte, tampoco dentro del propio PSOE valenciano existía el mismo grado de concienciación. Esto se haría mucho más visible tras la unificación del socialismo que lideraría esta formación en 1978, con la integración de otros partidos de sesgo nacionalista, dándose lugar a grupos dentro del PSPV-PSOE para los que el nacionalismo valenciano definía en gran medida su

---

<sup>744</sup> Benito SANZ y Josep Maria FELIP: *La construcción política de la Comunitat Valenciana*, València, Alfons el Magnànim, 2006, pp. 159-162.

actuación política, y otros para los que pronto pasaría a un segundo plano, como veremos. Aunque ni siquiera en el interior de estos las actitudes eran totalmente equiparables y homogéneas.

De todos modos, aunque el panorama se volviera más complejo con el tiempo, las contradicciones ya existían entonces. En aquellos momentos, serían comunes las declaraciones que, coherentes con su defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos defendido desde el Congreso del PSOE de Suresnes en 1974, se pronunciaban a favor de reclamarlo para el País Valenciano como nacionalidad oprimida; y al mismo tiempo ponían en duda el grado de conciencia nacional del pueblo valenciano, pero no su derecho a decidir, ni desde luego, la autonomía<sup>745</sup>.

Lo cierto es que en aquellos momentos parecía que no se podía ser de izquierdas sin defender los derechos de las nacionalidades oprimidas, y en el País Valenciano este era un tema que había demostrado tener un importante respaldo popular, por lo que los partidos en su conjunto se apresuraron a reivindicar la autonomía y a añadir la coletilla País Valenciano en sus siglas finales, tanto por motivos estratégicos como ideológicos. De este modo, el PSOE, iría conformando progresivamente una nueva estructura organizativa, en la que desaparecerían las federaciones provinciales de Valencia, Alicante y Castellón, para constituir una federación única para el conjunto del País Valenciano, el PSOE-PV –algo que no culminó hasta su I Congreso en febrero de 1978, aunque desde 1976 se había creado un comité de enlace para facilitar la coordinación entre las tres federaciones–.

Pero esta toma de conciencia y de reivindicación nacional o autonómica no puede tacharse sin más de oportunista, y explicar en base a esto las contradicciones en el propio discurso y en la actuación posterior. Como ya se ha mencionado, además de cuestiones estratégicas hay que tener en cuenta que la actitud proclive a la defensa de estas cuestiones sufrió de algunas ambigüedades importantes en el socialismo, pero estas se generaron también por la complejidad ideológica con la que se vivían estos temas en la izquierda; y por otra parte, fueron también fruto de los problemas concretos que tuvieron que irse afrontando en cada coyuntura. Y en este apartado cobra una relevancia especial la competencia que se vivía en aquel momento con los otros grupos

---

<sup>745</sup> Un ejemplo de ello puede observarse en la entrevista concedida por José Luis Albiñana a Amadeu Fabregat, en Amadeu FABREGAT: *Partits polítics al País Valencià*, v. 2, València, Eliseu Climent, 1977.

socialistas. Si ésta les ayudó a convencerse de la necesidad de hacer suyas las reivindicaciones nacionales, también provocaría un enfrentamiento en el que estos temas serían utilizados frecuentemente, generando la necesidad de defenderse, y cayendo en la discusión en importantes contradicciones. En este caso, el enfrentamiento entre el Partit Socialista del País Valencià, uno de sus principales competidores hasta las elecciones del 15 de junio de 1977, y el que se denominaría posteriormente como PSOE-PV, atendía de forma privilegiada al aspecto nacional. El PSPV, plenamente identificado con las sensibilidades nacionalistas en el País Valenciano, era el partido que había conseguido aglutinar y representar la tradición del socialismo valencianista durante el postfranquismo y la Transición, lo que suponía una clara alternativa al PSOE-PV, que aparecía desde este prisma como un partido de obediencia estatal. Así, desde el PSPV acusaban a la Federación valenciana del PSOE de sucursalista, y desde ésta se defendían en unas ocasiones afirmando su implicación como socialistas en la defensa de los derechos de las nacionalidades oprimidas y como garantes de los derechos de la clase obrera de cada nacionalidad; y otras, a partir de la descalificación de su adversario, afirmando que el nacionalismo era una cuestión burguesa que colisionaba con los intereses del socialismo<sup>746</sup>. Posiblemente, sobre todo antes de que el socialismo valencianista quedara integrado en el PSOE, se trataba de un partido que mayoritariamente reivindicaba de forma sincera la autonomía pero que tenía más problemas a la hora de definirse como nacionalista, algo que salía a la luz en estos enfrentamientos. Y es que, como el Partido en su conjunto, la Federación valenciana se caracterizó en esta etapa por defender una España plural en la que la autonomía era irrenunciable, pero en el que la identidad nacional española era la predominante.

En este marco se desarrolló la campaña de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura. Como en toda España, las diferencias entre el programa máximo y mínimo del PSOE se hicieron aún más visibles, y no hubo promesas electorales que fueran más allá del autogobierno, algo que en todo caso se planteaba como irrenunciable. De cualquier modo el mensaje parece que fue el adecuado en el País Valenciano, donde la victoria del PSOE fue rotunda, obteniendo 13 escaños frente a los 11 de Unión de Centro Democrático y los 3 del Partido Comunista de España.

---

<sup>746</sup> Para profundizar en el PSPV véase Alfons CUCÓ (*et. al.*): Partit Socialista del País Valencià, València, Eliseu Climent, 1977; Joan MARTÍ: “Valencianistes socialistes i socialistes valencianistes. Els camins del PSPV”, *Afers*, 67, 2010, pp. 595-618; Joan MARTÍ: *Socialistes d'un país imaginat. Una història del Partit Socialista del País Valencià (1974-1978)*, València, Institució Alfons el Magnànim, 2017.



Por otra parte, su triunfo frente al resto del socialismo valenciano les situó en una posición privilegiada para liderar una integración en condiciones de desigualdad para el resto. Posiblemente, a esta victoria contribuyó la división que sufrió el PSPV poco tiempo antes de los comicios y en la que, para muchos protagonistas, tuvo una influencia directa el PSOE<sup>747</sup>. Además, gran parte de los autores que han trabajado esta cuestión han planteado que el PSOE estaba llevando a cabo una estrategia de neutralización y absorción del resto del socialismo a partir de la división de la Federación de Partidos Socialistas, y para ello, minar las fuerzas del PSPV se desvelaba como fundamental en el País Valenciano. Parece que de haber sido así tuvieron éxito, ya que la división previa y la confusión que se generó en torno a las siglas permitió que la coalición electoral formada por el Partido Socialista Popular y la escisión del PSPV, Unitat Socialista del País Valencià, no obtuviera más que un escaño, mientras que el otro sector del PSPV, ahora en la coalición PSPV-Bloc, se quedó sin representación parlamentaria.

En junio de 1978 se llevó a cabo el Acto Protocolario de Unidad, pasando el partido a llamarse PSPV-PSOE (aunque no se produciría este cambio oficial hasta el siguiente congreso en febrero de 1980). En este momento sería cuando se integraría el sector más activo del socialismo nacionalista valenciano, que consiguió ejercer mayor influencia de lo que la representación popular le había otorgado, especialmente el grupo liderado entre otros por Alfons Cucó y que provenía del sector del PSPV-Bloc.

A partir de entonces se irían dando los primeros pasos hacia el autogobierno<sup>748</sup>, con la creación de las instituciones preautonómicas, entre ellas el Consell Preautonòmic del País Valencià, constituido formalmente el día 23 de abril de 1978, bajo la presidencia de los socialistas –representados por José Luis Albiñana–, y que debía dotar al País Valenciano de la plena autonomía. Una «fórmula transitoria» que contaba con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias valencianas, como se demuestra en el «Compromís autonòmic», firmado el 8 de octubre de 1978. En él, los partidos firmantes, entre ellos el PSPV-PSOE y UCD, declaraban su compromiso de actuación conjunta para conseguir el máximo grado de autonomía dentro del término que permitiera la Constitución, puntualizando posteriormente que se decantaban por la vía

---

<sup>747</sup> Véase Rafa ARNAL: “Uns països sense política”, en Toni MOLLÀ (*et alii*): *Nosaltres exvalencians*, Barcelona, La esfera de los libros, 2005, pp. 138-167.

<sup>748</sup> Véase Lluís AGUILÓ: “Els entrebancs jurídics de la Transició valenciana”, *Afers*, 67, 2010, pp. 709-717.

constitucional establecida por el artículo 151<sup>749</sup>. Pero implantar el Estado Autonómico que hasta el momento se había defendido y prometido en el partido, no iba a ser una tarea sencilla a partir de aquel momento. Aunque hay que tener en cuenta también las cuestiones endógenas del Partido, que influyeron en una situación adversa como la que fue desarrollándose en este territorio. Para empezar, la Ejecutiva Federal del PSOE no participaba de la sensibilidad que el PSPV (PSOE) había adquirido gracias a la extensión de las ideas fusterianistas<sup>750</sup> del nacionalismo valenciano y a las que no era fácil ser ajeno en el espacio de socialización al que pertenecían los socialistas valencianos.<sup>751</sup> Por otra parte, tampoco dentro de la federación valenciana existía el mismo grado de concienciación, ya que, aunque también a diversos niveles, se puede decir que existían grupos para los que el nacionalismo valenciano definía su actuación política, y otros para los que pronto pasaría a un segundo plano. Aunque ni siquiera en el interior de estos grupos las actitudes eran totalmente equiparables y homogéneas.

En este contexto, a finales de 1979, comenzaron a darse las primeras vacilaciones sobre la cuestión de las vías en el PSOE. Un hecho simbólico, como fue el abandono de los socialistas del Consell Preautonòmic, anunciado el 18 de diciembre de 1979, podría tomarse como la fecha en la que la dirección del PSPV-PSOE comenzó a embarcarse en aquel «pragmatismo autonómico» que empezó a poner por delante otros intereses frente a los que tenían que ver con las reivindicaciones de los derechos nacionales de este territorio. Siempre de forma coherente con los dictados de la Ejecutiva Federal, aunque a veces, como en este caso, de manera un tanto improvisada. Esto no significa que renunciaran a partir de aquellas fechas a las reivindicaciones previas, sino que fue poniéndose en duda que estas debieran prevalecer frente a cuestiones estratégicas o frente al interés nacional español, y por ello, los socialistas fueron subordinando cuestiones como el acceso por la vía del artículo 151 a una estrategia general que en cualquier caso todavía no estaba claramente definida. Por ello, la salida del Consell no significaba el abandono del acceso a la máxima autonomía en el

---

<sup>749</sup> “Compromís autonòmic” del 8 de octubre de 1978, en Comunitat Valenciana. Corts Valencianes: *Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana: procés d'elaboració i tramitació parlamentària*, Valencia, Corts Valencianes, 1992, pp. 27-30.

<sup>750</sup> Sobre el nacionalismo de Fuster ver Ferran ARCHILÉS: *Una singularitat amarga. Joan Fuster i el relat de la identitat valenciana*, Catarroja, Afers, 2012; Ferran ARCHILÉS: “L’inevitable desencís. Joan Fuster i la Transició democràtica (1976-1982)”, *Afers*, 67, 2010, pp. 565-593.

<sup>751</sup> En este sentido es importante destacar la influencia que el antiguo PSPV ejerció en la Federación valenciana del PSOE. Este partido no sólo permitió que la federación se dotara de un potente sector nacionalista a partir de la unidad, sino que anteriormente supuso un revulsivo para el PSOE valenciano, con quien competía por el espacio electoral y con el que mantuvo agrias discusiones a este respecto.

menor tiempo posible, pero sí reflejaba la voluntad de aparcar de momento aquella tensión, que era especialmente grave en Valencia, esperando a que la coyuntura despejara muchas incógnitas.

La crónica de la revista *Valencia Semanal*, relacionada directamente con la dirección del PSPV-PSOE<sup>752</sup>, relataba así la salida socialista del órgano preautonómico:

El pleno del Consell había sido convocado para las siete de la tarde del lunes 17 de diciembre. La sesión se veía venir tensa y conflictiva. En el Orden del día, por parte de UCD había la propuesta de una moción de censura en contra del presidente Albiñana (...). También lo era la reunión que la ejecutiva del PSPV (PSOE) celebraba ese mismo día en Alacant. La posibilidad de que los socialistas abandonaran el Consell se venía cociendo en las alturas del partido desde mediados de noviembre. (...) La noche del día 17 hubo contactos telefónicos entre el secretario general Joan Lerma y el presidente Albiñana. Por parte del PSPV (PSOE) la decisión estaba tomada (...). La Ejecutiva socialista había decidido por unanimidad **«terminar con esta farsa»** [s.o.]<sup>753</sup>.

Además de narrar de una manera un tanto novelesca los hechos que suponen la salida de los socialistas del órgano preautonómico, es el ejemplo de una visión un tanto maniquea e intencionadamente transmitida por este medio de comunicación, que suponía la postura oficial del PSPV-PSOE. El motivo que oficialmente dieron los socialistas fue que la UCD no tenía interés de alcanzar la vía de la «autonomía plena» y estaba boicoteando las negociaciones<sup>754</sup>. En la rueda de prensa que ofrecieron el 18 de diciembre, el Secretario General Joan Lerma aducía que se iban del Consell «porque la función del órgano pre-autonómico es traer la autonomía al País Valenciano. UCD está colapsando y boicoteando el funcionamiento del Consell (...). En estas condiciones, si el Consell no ha de servir para traer la autonomía, a los socialistas no nos interesa permanecer en el Consell»<sup>755</sup>.

---

<sup>752</sup> La revista fue comprada por un grupo de socialistas favorables al nacionalismo un poco antes del verano de 1979. Este grupo formaba parte del sector que había constituido la alianza entre Lerma, Albiñana y el antiguo PSPV. Sin que el *Valencia Semanal* se convirtiera oficialmente en el órgano de prensa del partido, la intención sí fue de presentar batalla contra los *blaveros* y en favor de la política socialista del *Consell*, especialmente en favor de la política autonómica que defendía el grupo nacionalista que lideraba Alfons Cucó.

<sup>753</sup> *Valencia Semanal*, 103 (6-13 de enero 1980).

<sup>754</sup> Para el caso de UCD véase Patricia GASCÓ: “Els discursos identitaris a la UCD-València (1977-1982)”, *Afers*, 67, 2010, pp. 641-663.

<sup>755</sup> *Valencia Semanal*, 101 (23-30 de diciembre de 1979).

Aunque la versión oficial no puede descartarse en su totalidad, tampoco ofrece la complejidad necesaria. Ciertamente, el proceso autonómico se encontraba paralizado desde que las elecciones municipales de abril de 1979 dieron como resultado una constitución del *Consell* que falseaba la voluntad popular mayoritaria. Pese a que la izquierda había salido vencedora en estos comicios, era UCD la que tenía para sí la totalidad de los *consellers*. Tal y como señala Benito Sanz, de los 18 representantes, 10 eran centristas, 6 socialistas y 2 comunistas. Esto pudo producirse porque entraba en vigor la “elección de nueve representantes por parte de las tres diputaciones provinciales. Estas últimas los escogieron por un complicado sistema electoral indirecto en que se primaba claramente a los municipios con menor población, precisamente en los que mayoritariamente la victoria había correspondido a los centristas”.<sup>756</sup> Sin embargo, como eran tan solo los miembros elegidos por el *Plenari de Parlamentaris* los que tenían la potestad de elegir la Presidencia, y en este caso sí había mayoría de izquierdas, Albiñana se mantuvo en el cargo, generándose una inoperancia y una contradicción evidentes, ya que UCD se quedó con todas las consellerías, al negarse el PSPV (PSOE) a ocupar las de menor importancia.

A esta situación había que añadir el clima de violencia de la Batalla de Valencia<sup>757</sup>, que se ejercía desde los sectores anticatalanistas, y en connivencia con UCD, que había visto como se trataba de un recurso eficaz para movilizar a parte de la población en contra de una autonomía que quería identificarse con una supuesta voluntad anexionadora de Cataluña. Frente a ello, los socialistas, que comenzaban a apreciar el desgaste de su imagen pública, tras conseguir acreditar formalmente la voluntad del pueblo valenciano de acceder a la autonomía por la vía del artículo 151, siguieron denunciando aquella campaña de acoso contra la figura del Presidente socialista del Consell; se ratificaron en la vía; en la defensa de los símbolos que el movimiento blavero quería desacreditar; y en el sistema electoral proporcional que era una de las cuestiones claves de la disputa con UCD, aunque este tema hiciera menos ruido que la lengua, la denominación del territorio o la bandera. Por otra parte, ya desde principios de noviembre se pronunciaron oficialmente por la voluntad de celebrar el referéndum el 28 de febrero, fecha prevista para el plebiscito andaluz, con una intención

---

<sup>756</sup> Benito SANZ y Josep Maria FELIP: *La construcción política...*, p.329.

<sup>757</sup> Para la cuestión del anticatalanismo en Valencia véase, Vicent FLOR: *Noves glòries a Espanya. Anticatalanisme i identitat valenciana*, Catarroja, Afers, 2011; ÍD: “El «capgirament». La irrupció del blaverisme”, *Afers*, 67, 2010, pp. 683-708; Ferran ARCHILÉS: “«... o no serà»: 20 anys de nacionalisme polític al País Valencià», *L’Avenç: Revista de història i cultura*, 214, 1996, pp. 26-31.

clara de unir su destino a un territorio en el que ya existía un compromiso por parte de Suárez pero también de la Ejecutiva Federal de su propio partido, que aunque con algunas dudas internas, parecía tener más claro el panorama de este territorio<sup>758</sup>.

Per sin embargo, pese a todo esto, no son pocos los que advierten la existencia de otras causas en esta decisión<sup>759</sup>. La más inmediata: defenestrar al propio José Luis Albiñana, que se estaba convirtiendo en un lastre para el partido. En este punto, debemos señalar que lo que sigue no es un intento de esclarecer la caída en desgracia de un personaje político en particular, ni tan siquiera queremos desentrañar las pugnas internas entre facciones por el poder del partido, aunque de todo esto haya también en el tema que nos ocupa. Lo que nos interesa es acudir al trasfondo de la cuestión, al problema, tanto coyuntural como ideológico, que provocó que el nacionalismo socialista y valencianista empezara a quedarse a partir de este si no fuera de juego, al menos sí relegado ante determinadas perspectivas, a la espera de que el panorama se fuera aclarando. Porque, aunque sería más tarde cuando esta estrategia quedara fijada y decidida definitivamente, fue en este momento cuando se produjeron las primeras reacciones que alejaron al PSPV-PSOE de la consecuente deriva valencianista por la que se estaba viendo arrastrado. Y para ello lo primero era desembarazarse del presidente del *Consell*, el rostro más visible del PSOE ante la población del País Valenciano. Así lo definiría en su libro el socialista valenciano Fernando Millán:

el pueblo identificaba en él la autonomía. Pero en la situación presente lo que estaba identificado era la confrontación permanente y la falta de un discurso sosegado que permitiese avanzar a la autonomía. La permanencia en la presidencia de José Luis Albiñana no sólo imposibilitaba la pacificación del país, sino que impedía cualquier pacto con la derecha que vehiculara la finalización del proceso autonómico. Él era un

---

<sup>758</sup> El Comité Nacional del PSPV-PSOE aprobó una resolución, el 4 de noviembre de 1979, en la que manifestaba su preocupación por «la escalada de violencia creciente contra las Instituciones y autoridades democráticas, y la inhibición sistemática de los responsables del Orden Público en el País Valenciano» y se ratificaban en el artículo 151; se declaraba que la elaboración del Estatuto implicaba el compromiso de todas las fuerzas políticas; se acordaba elegir el 28 de febrero como la fecha adecuada para el referéndum; y se establecían como fundamentales en el proceso autonómico la representatividad electoral, el tema de la bandera (proponiendo un elemento diferenciador a la bandera tradicional de las cuatro barras que no podía ser el de la franja azul), y el de la lengua (describiendo el País Valenciano como un territorio bilingüe), en Comisión Ejecutiva PSPV-PSOE: “Resolución aprobada por el Comité Nacional PSPV-PSOE” (Villajoyosa, 4 de noviembre de 1979), ABFPI, 75-A 4.

<sup>759</sup> Entre otros, Jesús SANZ: *La cara secreta de la política valenciana. De la predemocràcia al estatuto de Benicassim*, Valencia, Fernando Torres-Editor, 1982; Benito SANZ y Josep Maria FELIP: *La construcción política...*; o Fernando MILLÁN: *Del PSOE al PSPV. Anatomía de una escisión*, Valencia, Víctor Orega, 1991.

nacionalista convencido y entendía que cualquier sacrificio era válido si con ello se lograban los objetivos previstos. Si el obstáculo era Albiñana, el obstáculo debía ser removido<sup>760</sup>.

No se pretende, ni mucho menos, presentar a Albiñana como el único político del PSPV (PSOE) consecuente con estos problemas. A su trayectoria poco lineal podríamos dedicar extensas páginas, pero sí parece que su última etapa dentro del partido tuvo como *leitmotiv* la cuestión autonómica e identitaria, o al menos, eso representaba su figura. Tampoco mantenemos que no existieran estrategias entre los partidarios de aquella actitud que intentaran propiciar el avance de un proceso estancado al mismo tiempo que no renunciaban a los valores propios del socialismo valencianista. Lo que queremos poner de manifiesto es que fue entonces cuando gran parte de los líderes políticos socialistas comenzaron a replantearse que la política efectiva en materia autonómica constaba de algunas cuestiones irrenunciables y otras –como los símbolos o la vía del 151– por las que no merecía la pena plantar batalla hasta el final, aunque las motivaciones para esto, no fueron siempre las mismas.

Y es en parte por esto, por lo que, según señala Jesús Sanz<sup>761</sup>, fue a principios de octubre cuando se rompió el eje Albiñana-Lerma-Cucó, al decantarse los últimos por la vía negociadora para evitar un desgaste que podía convertirse en irreversible para el PSPV-PSOE. Lo cierto es que es en este momento cuando se produce el anuncio –el día 12 del mismo mes –de la voluntad de socialistas y centristas de iniciar conversaciones sobre temas autonómicos para «pacificar la tensión ciudadana»<sup>762</sup>.

Como explica Sanz, la UCD, aspirante a presidir el *Consell*, contaba con: un aliado valiosísimo, el núcleo *nacionalista* del PSPV-PSOE, que, ya consolidado en la ejecutiva del partido, deja de ser favorable a las posiciones de Albiñana, su aliado hasta entonces, para buscar negociar, al precio que sea, la sustitución de Albiñana por un centrista en la presidencia del pregobierno, dado el cerco al que están sometidos los socialistas. Y tampoco era un secreto (...) el excesivo personalismo de Albiñana, quien

---

<sup>760</sup> Fernando MILLÁN: *Del PSOE al PSPV...*p. 271. El autor era militante del PSPV (PSOE) y formaba parte del círculo íntimo de Joan Pastor, poco sensibilizado con el nacionalismo valencianista.

<sup>761</sup> Jesús SANZ: *La cara secreta...*p.249

<sup>762</sup> Jaime MILLAS: “PSOE y UCD negociarán una salida a la crisis política”, *EL PAÍS*, 13 de octubre de 1979.

sistemáticamente actuaba a su antojo, al margen frecuentemente de las orientaciones de su propio partido<sup>763</sup>.

Esta interpretación veía en la crisis del *Consell* la excusa perfecta para la formación valenciana de deshacerse de quien fuera uno de sus líderes tradicionales. Era también la sensación de la mayoría de la prensa valenciana y estatal, como denunciaría amargamente el *Valencia Semanal*, que consideraba que era una maniobra de UCD y de su prensa afín para desviar la atención del problema real: la intención de los centristas de paralizar la autonomía valenciana y la voluntad de los socialistas de no seguirles por más tiempo el juego.

En cambio, el propio Alfons Cucó –quien fuera posiblemente el máximo representante del sector nacionalista que venimos mencionando– planteará, años después, una versión diferente. En su libro *Roig i blau. La transició democràtica valenciana*, el autor denunciaba el progresivo abandono, por parte de la cúpula de dirigentes del PSPV-PSOE, de las ideas que en política identitaria y autonómica se venían defendiendo. Pero su denuncia nos llevaba a mediados de 1980, una vez Lerma ya había consolidado su poder, siempre, por supuesto, con el apoyo de la Ejecutiva Federal del PSOE. La batalla por los símbolos y por la vía del artículo 151 comenzaba a verse relegada, sobre todo gracias a la reconducción autonómica que llevaron a cabo fundamentalmente Antonio García Miralles, Juan Lerma y Felipe Guardiola, a quienes denominaba como los *exploradores*:

És per això, que sobretot arran la decisió d'UCD de bloquejar i reconduir la totalitat dels processos autonòmics de l'Estat (i especialment els que, com en el cas valencià, representaven la possibilitat d'un *contagi* «nacionalista» que s'entenia «desestabilitzador»), s'anirien afirmant, a dins dels partits polítics esmentats, concepcions ideològicopolítiques d'un pragmatisme absolut, per a les quals l'autonomia era fonamentalment un mitjà regional de conservar o d'incrementar, segons els casos, les quotes partidàries de poder<sup>764</sup>.

Es llamativo que Cucó ni siquiera mencione la polémica en torno a la figura de Albiñana, máxime cuando el enfrentamiento entre ambos grupos era palpable, o quizá sea precisamente por eso. En cualquier caso, al explicar esta crisis lo hace siguiendo a

---

<sup>763</sup> Jesús SANZ: *La cara secreta...* p.223

<sup>764</sup> Alfons CUCÓ: *Roig i blau. La transició democràtica valenciana*, Valencia, Tàndem Edicions, 2002, p. 282.

pies juntillas la versión oficial ofrecida por el partido. Versión que no concuerda plenamente ni con lo visto anteriormente ni con los apuntes que él mismo tomó como representante del PSPV (PSOE) en las negociaciones con UCD y a las que pronto se sumaría el PCPV.

Las conversaciones se iniciaron oficialmente a partir del 12 de octubre, pero por ejemplo, el *Valencia Semanal*, como «portavoz» del que en su día fuera el sector Lerma-Cucó, no comenzará a alentarlas hasta principios de noviembre, cuando cambie su postura reacia a pactar con UCD para alabar las virtudes del proceso. En un artículo titulado como *Política de Estado contra política partidista*,<sup>765</sup> se defendía la necesidad de hacer política de Estado «para y desde el País Valenciano», en la que la izquierda y el nacionalismo debían entender que era necesario deshacerse de lo superficial y sin «renunciar a lo irrenunciable», apostar de forma pragmática por aquello que conduciría a este territorio al destino que deseaban, era hora de imitar a Cataluña. Había por tanto que acordar con la UCD, y ceder ante lo necesario. Del texto se deduce que lo irrenunciable debía ser el sistema electoral, tema capital para los centristas, por lo que los socialistas tenían que ser sinceros con su electorado para no caer en la alternativa que se les estaba planteando y que denunciaban en el siguiente número:

Los augurios no son buenos y la alternativa, triste alternativa, se plantea hoy en que la izquierda acepte la trágala electoral a cambio de ciertas concesiones «graciosas concesiones» en símbolos, lengua y Consell (...) o que no lo acepte y las negociaciones queden definitivamente rotas. Si esto último ocurre, UCD apostará probablemente por el artículo 143 de la Constitución<sup>766</sup>.

Como vemos, en estos momentos se preparaba además el terreno para restar la importancia simbólica que podía tener el Consell –discurso que se repitió en otros momentos– al mismo tiempo que se revalorizaba el Plenari de Parlamentaris, como se hacía en la misma revista, donde refiriéndose a la última institución se señalaba: «A ellos, a los representantes electos del pueblo valenciano, y no a la Presidencia del *Consell*, puesta ahora entre la espada y la pared por la inoperancia de unos y la terquedad de otros, es a quien corresponde asumir las riendas del proceso»<sup>767</sup>.

---

<sup>765</sup> *Valencia Semanal*, 94 (4-11 de noviembre de 1979).

<sup>766</sup> *Valencia Semanal*, 95 (11-18 de noviembre de 1979).

<sup>767</sup> *Valencia Semanal*, 94...



Pero sería a mediados de noviembre cuando la posibilidad de abandonar el Consell comenzaba a hacerse cada vez más plausible. Según se observa en los apuntes que sobre los encuentros fue tomando uno de los interlocutores –Alfons Cucó–, sí se fueron realizando avances importantes para determinados puntos de los acuerdos, pero en las materias decisivas se mantuvieron posturas poco tendentes al entendimiento. Según se extrae de aquellas notas, para Broseta «el punt central és el sistema electoral»<sup>768</sup> y se negaba a fijar una fecha concreta para el referéndum, ya que según decían los centristas, «una campaña sin “serenar” la conflictividad de los temas enunciados y sin “dignificar” la actual composición del “Consell” nos llevaría a un desastre en el referéndum que frustraría a los propios valencianos»<sup>769</sup>. Ya fuera porque intentaban alargar el proceso para que fuera más sencillo dejar morir las aspiraciones que se habían prometido al pueblo valenciano; o porque esperaban, como repetían hasta la saciedad, alcanzar los objetivos prioritarios para su partido antes de decantarse por la vía del 151, el resultado fue que se enquistaron aspectos decisivos del acuerdo. Pero tampoco es menos cierto que se llegaron a consensos comunes, como el de cambiar la Presidencia del Consell, para lo que era necesario defenestrar a José Luis Albiñana<sup>770</sup>.

A principios de diciembre parecía que se había llegado a puntos de encuentro importantes sobre las cuestiones simbólicas a excepción del tema de la *senyera*, en el que los centristas seguían imponiendo la franja azul frente a la negativa de socialistas y comunistas. La denominación de País Valenciano, que no fue desde el inicio un tema complicado, se había zanjado con el reconocimiento de que era la forma “normalmente aceptada”, eso sí, con la concesión a UCD de incorporar el término Reino de Valencia en el Estatuto en la medida en que fuera posible. Para la lengua el acuerdo no fue total, aunque se establecía la oficialidad del castellano y el valenciano sólo para las zonas de origen valenciano-parlante. Además el PCPV exigía la aclaración de que «Valenciano es el nombre dado en el País Valenciano al idioma que compartimos con los pueblos

---

<sup>768</sup> Alfons CUCÓ: Apuntes manuscritos de una reunión celebrada entre PSPV, PCPV y UCD (Valencia, 13 de noviembre de 1979), AHUV, Fons Alfons Cucó, 023/005.

<sup>769</sup> UCD: “Propuestas escritas que formula UCD al PSOE y al PC” (1 de diciembre de 1979), AHUV, Fons Alfons Cucó, 023/005.

<sup>770</sup> Esta opción se barajaba de manera oficial en la Ejecutiva del PSPV-PSOE, que emitió un documento en noviembre según el cual el Comité Ejecutivo, en relación a las conversaciones que mantenía con otras fuerzas políticas respecto al proceso autonómico, acordaba entre otras cosas, revisar las estructuras del Consell, en concreto, respecto a las carteras, ofrecía dos posibilidades: la Presidencia socialistas más dos carteras, o cuatro carteras con Presidencia no socialista, en Comisión Ejecutiva PSPV-PSOE: Declaración sobre los planteamientos autonómicos que se negociaban con otras fuerzas políticas (Valencia, 9 de noviembre de 1979), AHUV, 018/034.

hermanos de Cataluña, Baleares y pequeñas zonas de Aragón»<sup>771</sup>. Mientras que UCD se negó en rotundo, el PSPV (PSOE) no mantuvo una posición definida<sup>772</sup>.

En el sistema electoral, la igualdad de diputados por provincia y el distrito judicial como circunscripción de los centristas, se opuso totalmente a la voluntad de la izquierda parlamentaria, que defendía la proporcionalidad en el número de diputados por provincia y las provincias como circunscripción electoral.

Como mencionábamos, uno de los aspectos más consensuados desde el principio fue precisamente el tema del Consell Preautonòmic. El Partit Socialista del País Valencià perdía la Presidencia en favor de UCD, quien renunciaba a la del Plenari dels Parlamentaris en favor de los socialistas. Las carteras se repartirían de la siguiente manera: 4 para los socialistas, 4 para los centristas y 1 para los comunistas. Lo más interesante era que delimitaban las funciones del *Consell*, dejando claro lo que esta institución no debía representar de ningún modo y que al parecer estaba suponiendo la escalada de crispación que se vivía en aquellos momentos:

ni el Presidente ni los Consellers deben iniciar ni ejecutar tareas estrictamente políticas, que corresponden a las direcciones de los Partidos políticos que los han propuesto o designado. Se trata de evitar la “provocación de tensiones” que después repercuten en la política de los Partidos<sup>773</sup>.

Se culpabilizaba así a la política del *Consell* como la generadora de la provocación, aceptando tanto socialistas como comunistas la tesis que públicamente se emitía desde los círculos afines al partido de gobierno: no era la violencia *blavera* la

---

<sup>771</sup> Exigencia realizada por el PCPV en una tabla en la que se plasmaban los acuerdos y disensiones en materia autonómica. Se apuntaba la opinión concreta de cada uno de los tres partidos sobre cada tema, y el acuerdo que habían alcanzado. PCPV: Tabla sobre las negociaciones autonómicas (8 de diciembre de 1979), AHUV, Fons Alfons Cucó, 023/005.

<sup>772</sup> En el documento de la Comisión Ejecutiva que establecía los principios defendidos por el PSPV-PSOE en las negociaciones con otras fuerzas políticas, detallaba respecto a la bandera y la lengua lo siguiente: «las cuatro barras rojas sobre fondo amarillo han identificado históricamente a los valencianos. La adición de un símbolo identificador podría contribuir a diferenciar la comunidad autónoma valenciana de otros territorios autónomos del Estado, con los que compartimos el origen histórico y determinadas señas de identidad. La franja azul de la bandera de la ciudad de Valencia podría significar un fuerte rechazo por parte del resto del País Valenciano, por lo que no consideramos procedente su inclusión en tanto que elemento identificador», y sobre la lengua se reafirmaban en su creencia de que el País valenciano era un territorio bilingüe, en el que «el valenciano y el castellano son las dos lenguas habladas», en Comisión Ejecutiva PSPV-PSOE: Declaración sobre los planteamientos...

<sup>773</sup> En este caso, el texto copia literalmente uno de los apartados del documento anterior “Propuestas escritas que formula UCD al PSOE y al PC”, en PCPV: Tabla sobre las negociaciones...

responsable de la situación, sino que las “provocaciones” las ejercía el *Consell*, con el presidente a la cabeza.

La sensación de que ya no sólo la Ejecutiva del País Valenciano, sino también la Federal comenzaban a sopesar si valía la pena continuar con aquella tensión que estaba erosionando su imagen se incrementa a partir de la reunión que mantuvieron el 6 de diciembre los representantes valencianos, José Luis Albiñana, Manuel Girona, Adela Plá y Juan Lerma, con María Izquierdo y Alfonso Guerra. La Secretaria de Política Autonómica daba una idea de la motivación de aquella reunión cuando anunciaba que querían conocer la situación exacta en el País Valenciano y la imagen del Partido ya que había que ver «hasta qué punto la política preautonómica nos ha deteriorado y ha beneficiado a UCD». Por parte de los representantes valencianos se contestaba dando cuenta del proceso y concluyendo respecto a UCD que «no dice NO A LA AUTONOMÍA ni tampoco NO AL ARTÍCULO 151. Se limita al ataque personal de Albiñana y de los Consellers Socialistas, utilizando la prensa local y los consejos de Abril Martorell». El Consell y Albiñana de nuevo el centro del problema. Por otra parte, desde el PSPV-PSOE planificaban mejorar la imagen de la autonomía valenciana demandando apoyo al Comité Federal «de la misma forma que lo hace con Andalucía» y planeando promocionar al País Valenciano en la prensa nacional, pero en el caso de que no saliera adelante la fecha del referéndum por la negativa centrista, preveían «presionar a nivel popular o abandonar el Consell». Un referéndum que según apuntaba Lerma, de celebrarse sin el apoyo del Gobierno no lograría los votos necesarios. En cuanto a las negociaciones sobre el Estatuto, María Izquierdo preguntó cuáles serían las cesiones que podría hacer el PSOE y Albiñana respondió «se intenta hacer una política de consenso y todo se puede negociar excepto la representación. En el tema de la bandera no puede ceder lo más mínimo ya que perdería credibilidad ante el electorado y ante el propio Partido»<sup>774</sup>.

Aquella situación se agravó con la presentación del proyecto de ley orgánica de referéndum, que era juzgado por Joan Lerma como «un proyecto de ley preparado

---

<sup>774</sup> PSOE: “Reunión día 6 de diciembre”, ABFPI, 75-A 4. En un documento manuscrito que parece el borrador del acta posterior de esta reunión, no sólo se hace referencia a que el PSPV quiere que la CEF apoye de igual manera al País Valenciano, sino que se recogen las siguientes reflexiones que van un poco más allá, evidenciando un sentimiento de agravio: «Manifiestan su temor de que la CEF incline sus preferencias hacia Andalucía y pide que el apoyo a Valencia sea el mismo», en PSOE: Documento manuscrito sobre la reunión del 6 de diciembre, ABFPI, 75-A 4.

expresamente por UCD para atentar contra la autonomía del País Valenciano»<sup>775</sup>, aunque como sabemos, tras la salida de los socialistas valencianos del Consell, el PSOE no puso ninguna traba al articulado que impedía el referéndum en el territorio valenciano, y que, como señala Benito Sanz<sup>776</sup>, invalidaba la campaña de verano que José Luis Albiñana, a la cabeza del Consell Preautonòmic, había llevado a cabo para la petición de autonomía por parte de todos los ayuntamientos del país. Según los datos que ofrece este autor, de 535 municipios, únicamente 11 no la apoyaron. Es cierto que sólo un 43% de los que lo hicieron especificaron la vía del 151, pero es que muchos menos se decantaban por la del 143, un 1,3%. Tal y como explica Jesús Sanz, la ley escondía una carta truca, la de imponer estos requisitos a posteriori, anulando incluso la voluntad de muchos municipios que se decantaban implícitamente por la primera fórmula, al «pedir el mayor grado de autonomía en el menor tiempo posible»<sup>777</sup>. Pero sobre este tema, que siguió ofreciendo debate, volveremos más adelante.

En este panorama, según la información de *El País*,<sup>778</sup> José Luis Albiñana ya no contaba con apoyo ni dentro de la Ejecutiva del País Valenciano ni en la Ejecutiva Federal y su permanencia en el cargo estaba suponiendo graves tensiones internas. La interpretación de Manuel Broseta sobre la salida socialista no haría más que incrementar la sensación de que estaban en lo cierto:

Por fin el PSOE ha comprendido nuestra posición cardinal de que mientras Albiñana presidiera el Consejo era imposible negociar la vía a la verdadera autonomía (...) Mi impresión personal es que se adopta la decisión de abandonar el Consejo para hacer posible lo que hasta entonces, tal vez por disensiones internas del PSOE, no se había atrevido a ejecutar: la salida de Albiñana de la presidencia del Consejo<sup>779</sup>.

Antonio García Miralles respondía a estas declaraciones diciendo que «Broseta sabe muy bien que José Luis Albiñana no ha intervenido para nada en las

---

<sup>775</sup> En esta crónica de Jaime Millás se consideraba rota la negociación a tres bandas, entre otras cosas a partir de la evidencia de los problemas en Andalucía y Galicia, pero también a un supuesto pacto entre las direcciones federales del PSOE y UCD para reencauzar las autonomías, en *El País*, 7 de diciembre de 1979.

<sup>776</sup> Benito SANZ y Josep Maria FELIP: *La construcción política...*, p. 347.

<sup>777</sup> Jesús SANZ: *La cara secreta...*, p. 256.

<sup>778</sup> *El País*, 20 de diciembre de 1979.

<sup>779</sup> *Ibid.* Sobre la inicial sintonía entre el que fuera Secretario de Estado para las Autonomías durante la reconducción de la vía de acceso para el País Valenciano, y Albiñana, y la colaboración del primero con el Consell Preautonòmic, véase Josep Maria FELIP: “La relación política de Manuel Broseta con la Presidencia socialista del Consell del País Valencià: otoño de 1978-invierno de 1979”, en Bruno BROSETA: *Manuel Broseta Pont. Imágenes de una vida*, València, Diputación Provincial, 2003, pp. 239-244.

conversaciones»,<sup>780</sup> algo que faltaba a la verdad a juzgar por las anotaciones que Cucó realizó sobre estas. Las referencias a Albiñana no son extrañas y no sólo en torno al pacto de ceder la presidencia a UCD. Sin ir más lejos, dos días antes de la Moción de Censura que desencadenó los hechos, Manuel Broseta hizo una referencia directa al orden del día del próximo pleno del Consell: «això és el final»; y Cucó apuntaba «pregunta qué fem, com a partit, això és si recolzem la posició del President». Según señalaba, la situación derivó en una terapia de grupo sobre quién tenía la culpa de la situación de tensión y de poco entendimiento entre los grupos, para añadir Broseta que «el tema del Consell es carrega tot, que el tema es de pressió (...) i que això pot afectar al PSOE en la seua línia de flotació»<sup>781</sup>.

A partir de aquí cada cuál puede extraer sus propias conclusiones, las de José Luis Albiñana estaban claras. Tras un breve período en que mantuvo la disciplina de partido, en abril de 1980 dejó la formación. Eso sí, antes de acatar el abandono del Consell –no dimitió hasta el día 22–, intentó, frustradamente, recabar apoyo en Madrid, donde seguramente no tenían excesivo interés en seguir desgastando al partido metiéndose en una batalla que ya casi nadie consideraba la suya dentro del PSOE ni del PSPV (PSOE), incluso los que estaban convencidos de que aquella era una cuestión capital creían que por el momento era mejor calmar el proceso<sup>782</sup>. Así se evidencia a partir de documentos emitidos días después por la Secretaría de Política Autonómica y por notas manuscritas que detallaban aquellas reuniones y las explicaciones que se habían dado o recabado de aquel abandono. En ellas se demuestra que se trató de una decisión improvisada por la Ejecutiva valenciana que no fue sin embargo contestada por la Ejecutiva Federal, que asumió lo sucedido a partir de la política de hechos consumados. En un informe de la Secretaría de Política Autonómica, tras detallar el proceso de deterioro que había vivido el Consell, inoperante y cada vez más desacreditado en la sociedad, y el clima de violencia vivido en el País Valenciano, se concluía que «como consecuencia de todo ello se produce un progresivo deterioro del proceso autonómico del País Valenciano, un estancamiento en su acceso a la autonomía y una grave pérdida de imagen de los socialistas». Y añadían, «el Consell no ha sido

---

<sup>780</sup> *Valencia Semanal*, 103...

<sup>781</sup> Alfons CUCÓ: Apuntes manuscritos de una reunión celebrada entre PSPV, PCPV y UCD, Valencia, 15 de noviembre de 1979, AHUV, Fons Alfons Cucó, 023/005.

<sup>782</sup> Al parecer, en la reunión del día 17 se decidió la salida del Consell aunque previa consulta a la CEF, pero alguien acudó a los medios de comunicación «para evitar que se echaran atrás», en Nota manuscrita sobre la salida del Consell, ABFPI, 75-A 4.

otra cosa que un lugar de confrontación política que, hoy por hoy, ha dejado de ser para los socialistas el instrumento anticipador de la plena autonomía», pese a que observaban la posibilidad, de que fuera contraproducente y diera mayor protagonismo a UCD sin solucionar los problemas, únicamente trasladándolos fuera de aquella institución<sup>783</sup>.

A partir de aquel momento las negociaciones no se interrumpieron, y aunque el 13 de enero el Comité Nacional del PSPV-PSOE se ratificó en la vía del 151, justificando así su salida del Consell<sup>784</sup>, reuniones internas volvían a demostrar que la duda se había instalado no sólo en la Ejecutiva Federal sino también en la valenciana. En las notas enviadas a la Secretaría de Política Autonómica referentes a la posición del PSPV-PSOE tras lo que parecer ser la reunión del día 29 de diciembre de los Parlamentarios valencianos para tratar el tema de las vías, se mencionaba que no existía acuerdo entre las fuerzas que firmaron el compromiso autonómico y se demuestra la posibilidad de ceder por parte de los socialistas según el panorama que fuera planteándose, incluso entre el grupo más nacionalista. Se proponía por una parte mantener la opción del 151 «por lo menos hasta conocer los resultados del 1er referéndum», en alusión al andaluz. Esta posibilidad, por otra parte, se introducía con interrogantes. Las dudas sobre el resultado podrían aclararse algo a través de la opción que proponía Alfons Cucó: convocar un referéndum «para que el pueblo diga si quiere la autonomía y por qué vía». Por último, Joan Lerma era más directo y declaraba que se dejaba la puerta abierta a la 143<sup>785</sup>. Las negociaciones, de hecho, en este período en el que en el fondo los socialistas buscaban rebajar la tensión y buscar el acuerdo, incluso podrían estar alcanzando un tema tan simbólico como era el de la bandera, ya que, según anunciaba *El País*, la Ejecutiva habría «anunciado su predisposición a adoptar la senyera cuatribarrada con franja azul y el escudo del Consejo». Ante esto, José Luis Albiñana comenzó a hacer pública su disconformidad con la política de su Partido en temas autonómicos, reconociendo que se encontraba dolido por aquella política de improvisación y desvelando que: «No me echaron de la presidencia del Consejo (...) Me vi apeado del cargo porque se iniciaba una nueva política autonómica, en la cual yo

---

<sup>783</sup> Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Proceso autonómico en el País Valenciano. Retirada de los socialistas del Consell” (Madrid, 26 de diciembre de 1979), ABFPI, 74-G 3. Véase también, Nota manuscrita sobre la reunión entre Felipe González, Alfonso Guerra, María Izquierdo, Joan Lerma, José Luis y Antonio García Miralles (20 de diciembre de 1979), ABFPI 75-A 4; Nota manuscrita sobre “Retirada Consell”, ABFPI, 75-A 4; o Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE: “Informe de la gestión del la Comisión Ejecutiva del P. V” (3 de enero de 1980), AHUV, 018/040.

<sup>784</sup> *El Socialista*, 144 (20 de enero de 1980).

<sup>785</sup> Nota Manuscrita reunión día 29 “País Valenciano”, ABFPI, 79-D 3.

no estaba dispuesto a participar, y esto siempre genera una mala conciencia que dificulta la continuación<sup>786</sup>.

A partir de todo aquel espectáculo, en el II Congreso del PSPV-PSOE, éste quiso modificar aquella imagen, en un ámbito en el que eran habituales las declaraciones propias del «programa máximo», reafirmandose en su negativa a aceptar la franja azul en la bandera; definiendo al País Valenciano como una nacionalidad; y manteniendo incluso, que «nuestro País sufre una situación de opresión nacional», aunque como siempre, ligando y subordinando esta a la lucha de clases. Además, decían que nunca habían renunciado a la vía del artículo 151, advirtiendo de que una «autonomía puramente formal y superficial podría dar como resultado una inmensa frustración histórica: una gravísima decepción para nuestro pueblo, y una definitiva consolidación del centralismo que ahora se presentaría como “democrático” y “racional”». Esta manifestación que bien podría estar atacando los principios que ya estaba defendiendo el PSOE a nivel federal, se veía contrarrestada en otra parte de la ponencia, por una afirmación en cuya lectura nos parece ver claramente la intención de dejar la puerta abierta a la vía del 143 en un momento en el que dentro del PSOE se estaba barajando que con dicha vía cualquier comunidad podría adquirir las mismas competencias que la del 15, especialmente aquellas relacionadas con el poder ejecutivo, legislativo y judicial:

El PSPV no renunciará a seguir defendiendo lo que entiende es voluntad del pueblo valenciano y no aceptará jamás un estatuto de autonomía que rebaje sustancialmente, en opinión del Comité Nacional del País Valenciano expresada en su momento, los presupuestos contenidos en el artículo 151 de la Constitución que conduzca a la recuperación de la personalidad y el autogobierno del País Valenciano, y en concreto, las señas de identidad anteriormente señaladas, la existencia de un Gobierno, un Parlamento y un Tribunal de Justicia autónomo, un sistema electoral para el parlamento que garantice el máximo grado de representatividad democrática y unas competencias amplias con calendario concreto para su asunción que no discrimine respecto a otras comunidades autónomas<sup>787</sup>.

---

<sup>786</sup> *El País*, 12 de enero de 1980. José Luis Albiñana ha sentenciado recientemente que al PSPV (PSOE) no le interesaba la vía del 151 «por directrices, sintonía y complicidad con la dirección federal del partido. Yo creo que todo lo demás es pura anécdota», *José Luis Albiñana*, 15 de mayo de 2013, entrevista realizada por Vega RODRÍGUEZ-FLORES, Valencia.

<sup>787</sup> PSPV-PSOE: “Ponencias. II Congreso Nacional PSPV-PSOE” (Valencia, 9 y 10 de febrero de 1980), ABFPI, Fa 671; PSPV-PSOE: “Resolución de Estatutos y organización del II Congreso PSPV-PSOE”

En definitiva, una autonomía en la que los valencianos no se vieran agraviados por los privilegios de otras que pudieran haberse constituido en el Estado, con igualdad en las instituciones y competencias y alcanzada a través de una planificación mayor de la que existía. Esto es enormemente compatible con la idea que empezaba a ser prodigada desde el PSOE, en la que se ponía el énfasis en el punto de llegada y no en la vía elegida, pues ya estaban defendiendo que en el modelo final no podría haber diferencias. Además, de acuerdo a la tendencia de que aquellas cuestiones debían centralizarse más por la Ejecutiva Federal para trazar una estrategia global que respondiera a los intereses del conjunto de España más que a los vaivenes de cada nacionalidad, a partir de aquel congreso, se decidió oficialmente, que una parcela importante de competencias tradicionalmente adscritas a la Secretaría de Relaciones Políticas del PSPV-PSOE, «tales como las relacionadas con la política autonómica, han pasado a integrarse plenamente en las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría del Política Autonómica»<sup>788</sup>. Dijeran lo que dijeren los enunciados más maximalistas del II Congreso, el control pasaba a ejercerse desde las instancias centrales, lo que inevitablemente iba a significar que los sectores más nacionalistas dentro del socialismo valenciano iban a perder gran parte del peso en las decisiones que se adoptaran en referencia al País Valenciano a partir de aquel momento.

## **5. ¿Consolidación o viraje hacia la simetría?**

Hasta el momento ha quedado patente cómo se iban consolidando trayectorias distintas de acceso a la autonomía según la nacionalidad o región de la que se hable, aunque parece razonable afirmar que los dos partidos mayoritarios buscaban homogeneizar el proceso para evitar una fragmentación de la unidad española, y en el PSOE en concreto, para no generar además desigualdades entre los territorios. Aunque esta actitud pugnaba internamente la voluntad del Partido de no imponer desde arriba una decisiones que no fueran acordes al sentir de cada territorio y por no verse afectados en su imagen ante la sociedad. Ante esta situación otro hecho influyó en aquella política improvisada, el éxito político del sí a la máxima autonomía en el referéndum andaluz, que se traduciría en la constatación de la victoria de todos frente a UCD, y en especial

---

(Valencia, 9 y 10 de febrero de 1980), ABFPI, Fa 672; PSPV-PSOE: “Decisión del Congreso del PSPV (PSOE) sobre el tema de la senyera”, AHUV, 018/086; Comisión Ejecutiva Nacional PSPV-PSOE: Circular Agrupaciones Locales sobre la decisión en torno a la senyera, AHUV, 018-086; *El Socialista*, 148 (17 de febrero de 1980).

<sup>788</sup> Secretaría de Relaciones Políticas del PSPV-PSOE: Memoria de Gestión, ABFPI, 79-D 3.



del PSOE, que supo cómo rentabilizar la consecución de la misma por la vía del artículo 151 como un mérito propio, y es que, si ya habían sabido interpretar este papel hasta el referéndum, sus resultados demostraron que no había cabida para las medias tintas o los pasos atrás<sup>789</sup>. El PSOE en Andalucía iba a aprovechar la oportunidad que se les estaba brindando y lucharía por la autonomía plena en este territorio, otra cosa es que siguieran el mismo ejemplo en el resto de España.

Para empezar, la estrategia socialista se había revelado como brillante en Andalucía, en gran medida porque conseguían neutralizar en parte el potencial del PSA, pero sobre todo, porque se había sabido aprovechar lo que muchos comenzarían a calificar como torpeza de UCD. La influencia de estos acontecimientos en la quiebra del partido de gobierno son innegables y reconocidos por los propios protagonistas. Carlos Rosado Cobián, Secretario General de la UCD de Andalucía, nombrado en julio de 1980 y encargado junto a otros de enderezar el fracaso ucedista en este territorio, se manifestaba así de rotundo: «Sin caer en simplificaciones históricas, puede afirmarse que la desaparición de UCD está íntimamente vinculada a las decisiones que tomó en relación a la Autonomía andaluza»<sup>790</sup>.

---

<sup>789</sup> Aunque según indica Ruiz Robledo, hubo momentos iniciales en los que la izquierda, pese a considerar que políticamente se había obtenido la victoria, se plantearon aceptar la vía del 143, lo que abundaría, de ser cierto, en la tesis de en concreto el PSOE, podría haberse visto impelido a actuar en favor de una autonomía de la que no estaba convencido del todo, en Agustín RUIZ ROBLEDOS: *La Comunidad Autónoma...*, p. 43.

<sup>790</sup> Además, vinculaba el problema andaluz a una estrategia más amplia para el conjunto del Estado, explicando que inicialmente en las preocupaciones de los constituyentes y del Gobierno de Suárez no estaba sino resolver la inserción del País Vasco y Cataluña en la España democrática, pero indicaba que tras haber permitido la generalización posterior fue un error querer dar marcha atrás una vez convocado el referéndum. Por otra parte, negaba que la UCD andaluza tuviera en mente desde el inicio lo que sucedió después, y reivindicaba que en realidad, ya que sin el concurso y «el respaldo de los ediles centristas andaluces este proceso no habría podido iniciarse en 1979 lo que habría retrasado nuestro acceso a la autonomía y, sin duda, reducido nuestros techos competenciales». Defiende por tanto, que el giro vino sobrevenido desde la dirección central más adelante –reafirmando la teoría de que la improvisación marcó los acontecimientos de los dos partidos mayoritarios–, porque sólo con haber retrasado aquel proceso el plazo no habría podido cumplirse y no habría podido culparse tan fehacientemente del fracaso a la UCD como sucedió con los hechos posteriores, que a su parecer fueron un error político: «Cuando el proceso estaba ya en marcha todo lo que no fuera concluirlo constituía un grave error político y de percepción de la realidad que empezaba a calar en la sociedad andaluza». Al mismo tiempo, explica la actitud de la UCD por la debilidad del Gobierno y el miedo a una reacción del Ejército ante cualquier amenaza a la unidad de España, y afirma que Martín Villa había advertido de que el ejemplo andaluz se extendería, lo que generaría sucesivos procesos electorales que desestabilizarían la democracia, dejándola desprotegida frente a un Ejército impredecible, en Carlos ROSADO: “La UCD...”, p. 171-177. De la misma opinión serían otros actores políticos como Emilio Attard, o Juan Carlos Aguilar, que creían que el partido salió herido de muerte de aquella coyuntura, en Juan Carlos AGUILAR: “De la memoria...”, p. 132; Emilio ATTARD: *Vida y muerte...* Por otra parte, Clavero mencionaba que aunque él era partidario desde el principio por la vía 151, «en abril de 1979 las cosas se hubieran podido presentar en forma distinta a como hubo que hacerlo en 1980», cuando también pensaba que era demasiado tarde y tal opción era ya

De este modo, el enquistamiento del problema andaluz, sería aprovechado y utilizado por el PSOE como arma arrojadiza contra el Gobierno, a través por ejemplo de su Proposición de Ley el 9 de mayo de 1980 sobre la «Modificación de la Ley Orgánica Reguladora de las distintas modalidades de Referéndum», en la que únicamente se pretendía resolver problemas relacionados con los resultados del referéndum, y no se contemplaba los casos de los territorios en los que el bloqueo político no había permitido avanzar hasta la proclamación de éste<sup>791</sup>. Esta reforma estaba destinada a solucionar la situación andaluza, estableciendo por ejemplo la posibilidad de repetir la consulta popular en los casos en los que «el voto afirmativo de la mayoría del Censo de electores no se haya alcanzado en una sola provincia», como pasó con Almería<sup>792</sup>. Esta iniciativa, como muchas otras, estuvo motivada por el especial interés de los socialistas en solucionar el problema andaluz, ignorando incluso las propuestas que se plantearon para dar salida al bloqueo que se sufría por ejemplo en el País Valenciano o en Canarias, donde pese a haberse considerado cumplidos los requisitos inicialmente, no se permitía la celebración del referéndum.

A este respecto, un informe del Departamento de Derecho Político de la Universidad de Valencia, concluía en marzo de 1980 que la única salida legal posible a la situación del País Valenciano era la de convocar un referéndum,<sup>793</sup> tal y como había sucedido en Andalucía. Pero en el debate del Congreso sobre esta Proposición, el 12 de junio, se admitía que era una iniciativa realizada ad hoc para el problema andaluz, aunque se señalaba que sin la solución de éste «difícilmente puede vislumbrarse la solución del resto de las autonomías»,<sup>794</sup> para las que sin embargo, no se tomaban medidas concretas. Más bien se rechazaron propuestas como las que el PSPV-PSOE realizó a través de un informe interno, firmado por el responsable de Política Autonómica de la Federación valenciana el 14 de mayo. En él se pedía, para resolver el

---

indefendible, lo que se confirmó para él con su propia dimisión, en Manuel CLAVERO: *Forjar Andalucía...*, p. 195.

<sup>791</sup> En línea con la idea de Ruiz Robledo, Manuel Ruiz deja entrever que pese a que cabía presuponer que la mayoría PCE-PSOE en la Junta pretendía una salida conjunta al resultado fallido desde el punto de vista legal, se produjeron unas vacilaciones iniciales durante el primer mes tras la consulta que no fueron despejadas hasta la Proposición de Ley que presentó el PSA el 12 de marzo para modificar la ley de referéndum, lo que iniciaría la cascada de propuestas presentadas por los distintos grupos, en Manuel RUIZ ROMERO: «La singularidad...», p. 186.

<sup>792</sup> Una ley que no salió adelante. BOCG: *Proposiciones de Ley*, nº 83-I, 9 de mayo de 1980, p.324

<sup>793</sup> Lluís AGUILÓ, Vicenta BOSCH, Vicent FRANCH, Manuel MARTÍNEZ y Rosa RIPOLLÉS: «Informe sobre la situación del proceso autonómico del País Valenciano», (Valencia, 5 de marzo de 1980), AHUV, Fons Alfons Cucó, 023/005.

<sup>794</sup> *Diario de sesiones del Congreso de los Diputados* el 12 de junio de 1980, en BOCG nº98, p.6464.

colapso del proceso autonómico en este territorio, retirar la Proposición de Ley para presentar una nueva que incluyera la solución para el País Valenciano; o en su defecto, una enmienda a la Proposición de Ley ya presentada. El texto que debería añadirse aludiría a que las iniciativas autonómicas «adoptadas con anterioridad, se considerarán formalizadas si (...) reflejan expresa o implícitamente la voluntad de acceder a la autonomía por la vía del art. 151 de la Constitución»<sup>795</sup>.

La realidad era que mientras se iban reafirmando en su apoyo a la autonomía andaluza, iban reconduciendo en la medida de lo posible el resto de los territorios, manteniéndose cada vez más al País Valenciano como la mayor incógnita. Así se demuestra a través del acta de la reunión del 24 de marzo en el seno de la Secretaría de Política Autonómica en la que se discutía el «Proyecto socialista para la construcción del Estado de las Autonomías» y a la que asistieron Alfonso Guerra, María Izquierdo, Francisco Fernández Marugán, Pedro Silva, Bernardo Fernández, Francisco J. Martín, Joan Prats, José Luis Romero, Raimon Obiols y Luis Fajardo Spínola, en la que se quería definir más la política autonómica, entre otras cosas como instrumento de una posible negociación con UCD que Fontán ya había propuesto<sup>796</sup>. Se señalaba que dado que no se conocía hasta qué punto se perfilaría un modelo «medianamente homogéneo y hasta dónde va a llegar la pluralidad en las características, medios y atribuciones de las diferentes CC. AA que se constituyan» y dado que esto podía «influir notablemente en la realización práctica de la idea de solidaridad interregional», era necesario que los partidos mayoritarios de ámbito estatal velaran por ella, protegiéndola de los

---

<sup>795</sup> Felipe GUARDIOLA: “Informe para el Comité Permanente sobre la posible modificación de la Ley Orgánica sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum” (14 de mayo de 1980), AHUV, Fons Alfons Cucó, 029, p.4

<sup>796</sup> Si ya se había manifestado en estas reuniones la posibilidad de que Aragón y Baleares discurrieran por la vía del artículo 143 si este tenía las mismas competencias que el del 151; ahora sería el turno de Canarias, que podría aceptarlo si se daba una «interpretación muy generosa» de este artículo. Parecía incluso una cuestión ya hablada que María Izquierdo daba por hecho, en Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Proyecto socialista para la construcción del Estado de las Autonomías”, (24 de marzo de 1980), ABFPI, 075-E2. Por otra parte, en unas notas manuscritas, se detallaba que Jerónimo Saavedra, el representante canario, quería plantear en su partido para el 12 de abril o el abandono del Ente Preautonómico –cuestión que sabemos que él no defendía–, o negociar el Estatuto por la vía del 143, aunque no consiguió hacer prevalecer su opinión entonces como es sabido, en Notas manuscritas y preparatorias de la reunión del 24 de marzo, en ABFPI, 82-c 1. Además, en otra reunión que debe situarse entre el referéndum de Andalucía y el 24 de marzo, a la que acudieron los Secretarios Generales del País Valenciano, Canarias, Baleares, Andalucía y Aragón, se firmó un manifiesto en el que se pronunciaban por el 151, aunque se daba a entender que se dejaba abierta la posibilidad del 143 según las competencias que ofreciera: «se han reafirmado en la convicción de que en tanto no se defina una alternativa clara y detallada, la vía del artículo 151 es la que garantiza el logro de un marco autonómico satisfactorio para sus respectivos territorios», en Manifiesto de los Secretarios Generales del País Valenciano, Canarias, Baleares, Andalucía y Aragón, ABFPI, 079 –D3.

nacionalismos burgueses insolidarios. Esto no significaba que necesariamente prefirieran la homogeneidad a la pluralidad, sólo que veían un potencial peligro en la última, y a la larga podrían observar que es más fácil garantizar la igualdad y la solidaridad –que les importa más que la pluralidad– por medio de la homogeneización. Todo esto, se sumaba además al evidente deterioro de la polémica sobre las vías, lo que hacía que consideraran elaborar un programa que eludiera hablar de la vía o al menos se centrara en estudiar cómo se podía asegurar la igualdad entre las dos vías de acceso, en unas conversaciones en las que la generalización de la vía del artículo 143 se veía como el horizonte más plausible<sup>797</sup>.

Para marcar las pautas que debían guiar la política autonómica de los socialistas a nivel general a partir de los últimos sucesos, se elaboró un documento surgido de una reunión de la Secretaría de Política Autonómica, el 9 de mayo de 1980. En él se diseñaba la estrategia del Partido a este respecto y se propugnaba un modelo resultante impuesto a partir de «una solución armónicamente homogénea y generalizada en la que todos los pueblos de España accedan a una autonomía política y puedan alcanzar los mismos niveles de autogobierno, con garantías en el ejercicio de la solidaridad y sin privilegios»<sup>798</sup>; además de equiparar explícitamente y en varias ocasiones, las vías de acceso a la autonomía, proponiendo no embarrarse en la polémica sobre los artículos concretos al decantarse por la mención a la vía de la «autonomía plena», que venía a ser el «143 ampliado», «evitando las referencias concretas a 151/143», y asegurando que cualquiera de ellas otorgaba una autonomía plena:

---

<sup>797</sup> En este sentido, Pedro Silva intervenía, como se recoge en el acta, afirmando que: «siendo realistas, debemos admitir que todas las comunidades van a seguir en adelante la vía del 143» y María Izquierdo respondía «que si no es posible eludir el tema de las vías constitucionales, habría que centrarse en fijar nuestra interpretación de la vía 143, qué máximos y qué mínimos encierra». Se produjo entonces un debate sobre hasta qué punto la 143 podía igualar a la 151, primándose siempre un horizonte igualitario. De hecho, Guerra llegó a señalar que la igualdad de todas las comunidades era imparable, ya que «Actualmente, en la comunidades que están en vías de conseguir su Estatuto de Autonomía el principal móvil es el agravio comparativo». En algún momento alguno de los intervinientes, como Pedro Silva llega a afirmar con rotundidad que a partir de entonces todas las comunidades iban a seguir la vía 143, a lo que Guerra le rectifica, aclarando que es «eso todavía no está claro», demostrando de nuevo que la estrategia todavía no estaba del todo fijada, y la mayor duda debía mantenerse con el País Valenciano, en *Ibid.* Véase también en este sentido el escrito de Jerónimo Sánchez Blanco, Vocal de la Comisión Mixta de Transferencias de la Junta de Andalucía, en Jerónimo SÁNCHEZ: “Problemas básicos del actual proceso autonómico” (1 de marzo de 1980, 75-G 1.

<sup>798</sup> Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Política Autonómica: Reunión 9-V-80”. “A) Posibles bases de discusión en materia de estrategia y esquema de posiciones”, AFFLC, 004095-004, p.7. En este sentido véase también Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Hacer autonomía” (12 de mayo de 1979), ABFPI, 075-G 1; Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Bases del programa de acceso a la autonomía a partir de la situación actual” (23 de mayo de 80), ABFPI, 075-G 1; y Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Autonomías regionales”, ABFPI, 75-G 1.

partiendo de la base de que todas las vías fijadas constitucionalmente para el acceso a la Autonomía son igualmente legítimas y eficaces para alcanzar los mismos techos o niveles de autogobierno. La elección de una vía u otra no podrá implicar, en ningún caso, diferencias en el modelo de Estado de las Autonomías resultante<sup>799</sup>.

Dentro de este bloque planteado como de discusión sobre la estrategia y el esquema de posiciones para conseguir imponer el modelo de Estado que concebían como el adecuado para España, describían tres situaciones que podrían derivar de su actuación política: procesos en los que no se resolviera la confrontación y se produjera una paralización de la autonomía que generara una mayor reacción autonomista y mayor sensibilidad ante los agravios comparativos, en los que proponían una respuesta socialista tendente a reivindicar mayores transferencias y la igualación respecto a la etapa preautonómica de los territorios catalán y vasco; procesos en los que se impusieran las tesis de UCD, una posibilidad de la que querían prevenirse, ya que podría llevarles a permitir la implantación de modelos autonómicos únicamente de descentralización administrativa que «quiebren nuestro proyecto, especialmente en lo que se refiere a la consecución de la autonomía generalizada, homogénea y sin agravios, para dar paso a un modelo de Estado con autonomías diferenciadas», mostrando sus preferencias –como sucedía en el escenario anterior– de conformar un Estado simétrico; y por último, la vía que a mi parecer afloraba como manera de evitar la anterior y los posibles bloqueos, la forma de salvaguardar el Estado homogéneo cuando creyeran que la relación de fuerzas lo hiciera peligrar, y que se materializaba a través del pacto UCD-PSOE, cuando fuera «posible resolver satisfactoriamente el proceso de acceso a la autonomía, a partir de posiciones confluyentes», especialmente entre estas dos fuerzas mayoritarias pero también con otras si era posible. Y para ello debían actuar teniendo presente como primer punto de las «bases de actuación», lo siguiente: «Necesidad de una previa clarificación de posiciones que presente netamente diferenciado nuestro

---

<sup>799</sup> Otra mención en sentido similar se produciría en un apartado destinado a describir posibles diferencias aceptables entre las Comunidades Autónomas resultantes, entre las que constaba el mismo concepto de nacionalidad, o el contenido específico de ciertas competencias para ajustarlas a las diferentes situaciones socioeconómicas, pero concluían para no dejar lugar a dudas, sentenciando que: «Las diferencias que se refieren a las formas de adopción de la iniciativa, formas de acceso, redacción o tramitación de los Estatutos así como a los distintos ritmos de atribución de competencias, no suponen en ningún caso una diferencia final en el modelo de Estado resultante», *Ibid.*, pp. 9-12.

proyecto y nuestra voluntad política autonómica, así como explicar la imposibilidad de los socialistas para proyectarla en la actual situación»<sup>800</sup>.

Estos posicionamientos permiten comprender y explicar mejor la manera en que comenzaron a hacer converger aquellos postulados definitorios de su política autonómica más general, con su actuación, todavía dubitativa, en algunos territorios en los que se habían pronunciado por la vía del artículo 151 antes de que UCD emprendiera la racionalización. Y es que, el hecho de que en Andalucía se hubiera decidido resolver la cuestión de un modo determinado, no implicaba necesariamente la aplicación mimética en territorios con características y coyunturas distintas. Ya entonces, en la segunda parte de este informe, se incluía un «Mapa del Estado actual de los procesos autonómicos»<sup>801</sup>, en el que se situaba a Andalucía como la única comunidad «pendiente de la aprobación del Estatuto por la vía 151 habiéndose celebrado el referéndum de iniciativa autonómica»<sup>802</sup>, mientras que para el País Valenciano, Canarias y Aragón, se dibujaba una situación muy distinta: «Comunidades en las que ha concluido el plazo inicial autonómico sin alcanzar los mínimos exigidos», a sabiendas de que la situación en Canarias y País Valenciano era distinta a la de Aragón, como se señalaría un poco después en el mismo informe para el caso del País Valenciano:

El proceso está detenido al considerar UCD que no se han obtenido los mínimos constitucionales por ambas vías de acceso a la autonomía. La diferencia de la situación con la anteriormente descrita de Aragón es que antes de publicarse la L.O de referéndum (BOS, 23-1-80) ya se habían superado las tres cuartas Partes de los Ayuntamientos y la mayoría del censo electoral<sup>803</sup>.

---

<sup>800</sup> *Ibid.*, pp. 1-2.

<sup>801</sup> Comisión Ejecutiva Federal. Secretaría de Política Autonómica (PSOE): “Política Autonómica: Reunión 9-V-80”. “B) Estado de los procesos autonómicos en las diferentes comunidades”, AFFLC, 004095-004, pp. 1-10.

<sup>802</sup> Y se resumía la posición del PSOE de Andalucía entre otras a cosas a través de su exigencia de impedir cualquier tipo de discriminación con respecto a Cataluña y al País Vasco, o de añadir una cláusula a la L.O de Referéndum que permitiera la repetición del mismo en Almería, para lo que aludían a la mencionada propuesta del ley presentada también el 9 de mayo. Además, se anunciaba la preparación de una campaña reivindicativa.

<sup>803</sup> Se describía la situación de Canarias reflejando las similitudes con el caso valenciano. Se mencionaba el «bloqueo por colisión entre las vías 143/151, habiéndose llegado antes de la publicación de la L.O. de Referéndum a obtener los mínimos exigidos por la vía 151 aunque no todos los ayuntamientos necesarios explicitaban dicha vía». Ante tal situación, el Comité Nacional del PSC-PSOE, el 12 de abril, se había ratificado por la 151 y, como ya pasara en diciembre de 1979 en el País Valenciano, y había abandonado la Junta de Canarias, tras lo que la Ejecutiva del PSC-PSOE tomó la determinación de dimitir.

Asimismo, se sostenía que:

el criterio del PSPV-PSOE, de acuerdo con el dictamen emitido por la Facultad de Derecho de Valencia, es que con los Ayuntamientos que explicitaron su pronunciamiento por la vía 151 y con los que no indicaron la vía autonómica en dicho pronunciamiento, se han cumplido los mínimos previstos en la Constitución para seguir la vía 151, y al ser la L.O de Referéndum posterior al cumplimiento de estos mínimos, no puede aplicarse retroactivamente y por tanto debe celebrarse el Referéndum de iniciativa autonómica al igual que se hizo en Andalucía<sup>804</sup>.

En Aragón se indicaba que el proceso estaba bloqueado porque no se había cumplido los mínimos constitucionales exigidos por ambas vías, y anunciaban la posibilidad de que los socialistas de Aragón negociaran con UCD la vía del 143, en un ejemplo de la posición estratégica mencionada con anterioridad:

sólo negociarán un Estatuto de Autonomía por la vía 143 si se dan dos condiciones básicas; a) garantía de que la vía 143 en un plazo de 5 años conduce a los mismos techos que la vía 151; b) exigencia desde que empiece a ser vigente el Estatuto de que haya una Asamblea legislativa elegida con criterios de proporcionalidad corregida y un Consejo de Gobierno.

Por su parte, existía ya grupo de comunidades que habían iniciado o concluido el proceso por la vía del 143: Asturias, Cantabria, La Rioja y Castilla-León. De las que aún no habían empezado el mismo, no se pronunciaban de forma explícita por la vía lenta pero podría darse por sobreentendido en Castilla-La Mancha<sup>805</sup>; en Ceuta y Melilla mencionaban la tramitación de la autonomía mediante Ley Orgánica; y no mencionaban nada a este respecto para Navarra y Madrid. De Extremadura se decía que «los socialistas que defendían la vía 151 (...) ya no hacen mención a dicha vía y sí de los contenidos del futuro Estatuto»<sup>806</sup>. Este sería otro ejemplo de cómo querían evitar el debate de las vías, apostando por una racionalización de una autonomía ampliada por el 143, y de cómo si no se tenía posibilidades de imponer sus criterios en una región era

---

<sup>804</sup> Comisión Ejecutiva Federal. Secretaría de Política Autonómica (PSOE): “Política Autonómica:..., pp. 1-5.

<sup>805</sup> Aunque en este caso ya se habían manifestado a favor del 143 en el informe anterior. Además proponían para septiembre el comienzo de la iniciativa.

<sup>806</sup> En cualquier caso, en el «Esquema del proceso autonómico en cada comunidad», ya incluían este territorio con los del 143.

más interesante llegar a acuerdos con UCD. Una cuestión distinta se daría en Murcia, donde eran primera fuerza política (aunque a escasa distancia de UCD), y tenían, como señalaban en este informe, el control de aproximadamente dos tercios de los Ayuntamientos, y sin embargo, apostaban directamente por el 143. Por último, en Baleares, sólo 4 miembros de los 24 que formaban el Consejo General Interinsular eran del PSOE, lo que complicaba la situación para continuar con la iniciativa por la que se había mostrado partidario el Consejo en un principio. A pesar de esto anunciaban que se ratificaban por la 151.

Parece como si la estrategia general se estuviera definiendo al margen de la andaluza, impulsando allí la vía del 151 mientras se intentaba generalizar la 143 y se pensaban qué hacer sólo en contados territorios. O quizá, sólo se hacía paralelamente, utilizando su ejemplo y elevando este territorio a símbolo. Puede que Andalucía se hubiera convertido sin premeditación en el territorio con el que asegurar una igualdad que ya pensaban imponer, consolidando un diseño simétrico que ya tenían en mente, pero que tras su ejemplo, pudiera ralentizarse el ritmo sin temor a que esto sentara precedentes para futuros privilegios de las nacionalidades históricas. Además, aunque, el éxito político del referéndum no era cuestionado por casi nadie, a pesar de ciertas declaraciones de cara a la galería, también había dejado ver el lado más crudo de la carrera de obstáculos en que se había convertido la vía del 151, y no era muy probable que en otros territorios se fueran a dar resultados más holgados.

Posiblemente todo fue sumando y se llegó a lo que podría considerarse el momento culminante de la estrategia socialista por rentabilizar el fracaso ucedista en Andalucía, la Moción de Censura, debatida en el Congreso los días 28, 29 y 30 de mayo. El texto presentado por los grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Socialista Vasco y Socialistes de Catalunya, del Partido Socialista Obrero Español a la Mesa del Congreso, contaba como uno de sus puntos importantes la cuestión autonómica<sup>807</sup>. Una acción que, según Alfonso Guerra, fue concebida para que el PSOE pudiera ofrecer una imagen de responsabilidad, como alternativa capaz de gobernar, mientras se debilitaba al Ejecutivo de Suárez. Además, como confiesa «elaboramos un plan estratégico para lograr que la moción de censura tuviese un gran impacto en la

---

<sup>807</sup> Decía así: «AFIRMANDO la carencia de un proyecto autonómico del Gobierno, rechazando por discriminatoria y limitativa la propuesta de una nueva lectura del título VIII de la Constitución anunciada por el Presidente del Gobierno (...)», en Grupo Socialista del Congreso: Texto de la Moción de Censura, Madrid, 21 de mayo de 1980, AFFLC, Fondo PSOE, Sección Grupo Parlamentario, 004059-001.



sociedad española» por medio de la retransmisión televisiva, buscando que fuera vista por un gran número de españoles. En su opinión, «el PSOE salía reforzado y Felipe González consolidaba ante la opinión pública su capacidad de liderazgo y la moderación de su proyecto político para España. (...) triunfo político, que no jurídico-institucional, de la moción de censura, que había de ser uno de los cuatro factores que condujeron al triunfo de 1982», otro sería el triunfo electoral de Andalucía<sup>808</sup>.

Precisamente, ese programa de moderación y responsabilidad de Estado sería, como estamos manteniendo, el mismo que se estaba aplicando en materia de política autonómica, y del que se haría gala las intervenciones de los socialistas en el debate sobre la Moción. En él, la creación del Estado de las Autonomías venía justificada en todo momento por la eficacia y la racionalización administrativa que una descentralización acompañada de las medidas adecuadas debería aportar; por las mejoras que se pondrían al servicio del pueblo y democratizarían el sistema; y por la igualdad y solidaridad que primaría entre las regiones, acabando así con los desequilibrios territoriales. Los argumentos que destacaban la lucha por la defensa de sus diferencias identitarias y culturales, brillaban por su ausencia en esta tribuna. Interpretando bien este papel, Guerra tachaba el comportamiento del Gobierno como de irresponsable, ignorante y oportunista en el tema autonómico al haber tratado primero de generalizar las autonomías con la intención de rebajar la importancia de los casos vasco y catalán, para dar un bandazo posterior, sin consultar a ningún grupo político, reconduciendo por el artículo 143 todos los procesos «cuando ya estaba comprometido con la convocatoria del referéndum en Andalucía». Demostrando claramente qué región centraba sus intereses, Guerra no culpaba tanto a UCD de querer racionalizar el proceso, sino de hacerlo de forma unilateral y pasando por encima de la voluntad popular. De hecho, decía entender su ánimo de querer regular ese proceso, al mismo tiempo que confirmaba las conversaciones que sobre esta materia había sostenido a finales de año el PSOE con UCD:

Por tratarse de un tema de responsabilidad de Estado, los socialistas, en diciembre de 1979, sostuvimos una entrevista con el señor Suárez a fin de dar una canalización justa,

---

<sup>808</sup> Alfonso GUERRA: *Cuando el tiempo...*, pp. 280-287. Autores como César Alonso de los Ríos y Carlos Elordi, han hecho referencia también a la importancia de la Moción de Censura como éxito personal de Felipe González, que le acercaría al electorado de UCD que quería conquistar, gracias al mensaje de «seriedad, información, capacidad de gobierno y moderación política», mientras que supuso un grave daño para Suárez y el prestigio del Gobierno», en César ALONSO DE LOS RÍOS y Carlos ELORDI: *El desafío socialista*, Editorial Laia, Barcelona, 1982, p. 27.

racional, económica y eficaz al proceso autonómico. Expusimos nuestro proyecto y quedamos a la espera de la respuesta gubernamental<sup>809</sup>.

Por otra parte, tampoco perdían la oportunidad de dirigirse al público enfatizando la unidad de España, sobre todo al justificar en ella y en su mayor fortalecimiento el proceso autonómico que se estaba desarrollando. Así sucedía cuando Felipe González, al introducir el problema autonómico como uno de los grandes problemas del país lo hacía de la siguiente manera: «La construcción del Estado de las Autonomías en el mantenimiento estricto de la unidad de España y con el reforzamiento claro de la solidaridad entre los distintos pueblos»<sup>810</sup>. Estas palabras de González deben entenderse como parte de un discurso que establecía el programa autonómico del PSOE, que sería transcrito y enviado con posterioridad en forma de circular a todas las

---

<sup>809</sup> BOCG: *Diario de sesiones del Congreso de los Diputados*, nº93, 28 de mayo de 1980, p.6091-6092. Unos días antes había hecho unas declaraciones recogidas en *El País*, en las que afirmaba que ambos partidos tuvieron la oportunidad de llegar a un acuerdo sobre el ritmo del proceso autonómico a principios de ese año, pero que UCD había decidido romper unilateralmente la negociación con su anuncio del 15 de enero. Se hacía también un recorrido histórico de la construcción del Estado de las Autonomías: «Guerra atribuye toda la responsabilidad a UCD y al Gobierno: para apaciguar a las fuerzas contrarias al proceso autonómico, y especialmente para diluir la fuerza de las reivindicaciones catalana y vasca, el partido centrista prefirió extender el sentimiento autonomista a todas las regiones españolas. Durante el período de elaboración de la Constitución, el ponente de UCD José Pedro Pérez-Llorca llegó a proponer -siempre según Alfonso Guerra- la inclusión del término nacionalidad para designar a la totalidad de las comunidades autónomas, “en el deseo de diluir el impacto de los temas de Cataluña y el País Vasco, y sin darse cuenta de que así extendía el problema al resto de las comunidades”. La catarata de despropósitos -prosiguió Guerra- continuó con la política de Manuel Clavero como ministro de las Regiones, que creó organismos preautonómicos por doquier y suscitó expectativas desmesuradas incluso en regiones que jamás habían tenido reivindicaciones de este carácter. Y cuando existían posibilidades de lograr un acuerdo razonable para racionalizar el proceso autonómico, UCD sacó un documento “por el que se reconducía todo por el artículo 143 y se había acabado el tema”». Además añadía, transmitiendo la idea de que la toma de posición había sido sobrevenida y que preferían un resultado distinto, al estar más preocupados en que el proceso autonómico no desbordara a la joven democracia: «“Gracias a la actitud de UCD en el referéndum de Andalucía, lo que podía haber sido un 30% de síes subió a un 50%. Y ahora, ¿quién les dice a los andaluces que la vía del 143 también es perfectamente constitucional, que se podían haber conseguido competencias importantes y que Manuel Clavero no es el héroe nacional?” Toda esta exposición de Guerra se completó con referencias al número de comunidades autónomas que va a haber en España -de diecisiete a veintiuna, según los cálculos del líder socialista- y a la gravísima dificultad de satisfacer razonablemente todas las expectativas creadas por la «irresponsable política de UCD», en *El País*, 9 de mayo de 1980. Además, la referencia al resultado positivo del referéndum en estos términos daría más credibilidad al argumento que apunta hacia una parálisis del PSOE tras el mismo, lo que abunda también en la idea de que posicionaron a favor sin que al menos desde todos los ámbitos existiera un convencimiento profundo.

<sup>810</sup> *Diario de sesiones del Congreso de los Diputados* el 28 de mayo de 1980, BOCG nº93, p.6111. No se quedaba a la zaga el otro gran partido de la izquierda, el PCE, mostrando que su proyecto nacional era claramente español en el mismo debate: «Quiero hacer constar que el Grupo Parlamentario Comunista no se propone hacer de España un reino de taifas. Para nosotros, España es una realidad forjada a través de una historia atormentada y difícil, con una vocación de unidad en la diversidad. (...) Esa España, unida en el respeto a la diversidad de sus pueblos, es la España que puede superar definitivamente muchos de los conflictos que hasta aquí la han desgarrado y la han impedido ocupar el lugar que merece en el mundo», en BOCG: *Diario de sesiones del Congreso de los Diputados*, nº94, 29 de mayo de 1980, p.6187.

agrupaciones socialistas a través de la Secretaría de Política Autonómica<sup>811</sup>. En él se proponía un plan de acción inmediato con medidas que liberaran los procesos autonómicos estancados: para Galicia exigía la garantía de la equivalencia con los Estatutos vasco y catalán; para Andalucía la repetición del referéndum en Almería a través de la modificación de la L.O; y para el País Valenciano, Canarias y Aragón mantenía la voluntad de acceder por la 151, aunque la solución que planteada no se comprometía ni tan siquiera a proclamar un referéndum en el que se expresara la soberanía popular:

Desbloquear sin imposiciones, respetando la voluntad autonómica de esas comunidades y proponiendo para ello una negociación entre las fuerzas en presencia en cada una de esas comunidades, que en un plazo no superior a dos meses intenten llegar a un acuerdo sobre la interpretación de la voluntad autonómica que ya ha sido expresada en los respectivos pronunciamientos de las instituciones responsables<sup>812</sup>.

Esta declaración recuerda inevitablemente a uno de los escenarios estratégicos que imaginaban desde la Secretaría de Política Autonómica en la reunión del 9 de mayo, en el que el desbloqueo y el pacto podrían pasar por el abandono de ciertos postulados ante la imposibilidad o dificultad –quizá también la falta de voluntad– de llevarlos a término. De nuevo estos territorios, de los que ahora desaparecía Baleares, no eran considerados del mismo modo que las tres nacionalidades históricas y Andalucía, algo que también se observó en el discurso de Guerra, que distinguía entre los casos al no reconocer a todos la misma legitimidad para reivindicar la vía del 151, aunque no lo manifestara abiertamente:

Suárez no ha ofrecido garantías fiables para dar satisfacción a las aspiraciones de Galicia y Andalucía; no resuelve democráticamente los casos en que la iniciativa se encuentra congelada por no haberse logrado la mayoría suficiente para ninguna de las vías de acceso, caso del País Valenciano, Aragón y Canarias<sup>813</sup>.

---

<sup>811</sup> Secretaría Federal de Política Autonómica: Correspondencia interna de la C.E. Programa autonómico, Madrid, 10 de junio de 1980, AHUV, Fons Alfons Cucó, 021/020.

<sup>812</sup> Íd, p.6114.

<sup>813</sup> BOCG: *Diario de sesiones del Congreso de los Diputados*, nº93, 28 de mayo de 1980, p.6092.

El programa continuaba, en segundo lugar, con el resto de comunidades, intentando prevenir nuevos conflictos, y para ello decía en este caso que en Baleares y Extremadura debía «evitarse cualquier medida de imposición por una vía», cumpliendo la máxima de no enzarzarse en el conflicto de la nomenclatura; e incluía al resto en la 143, nombrándola o no, esforzándose por demostrar que todos los pueblos alcanzarían los mismos techos autonómicos sin discriminaciones. Un programa que definiría al Estado de las Autonomías teóricamente como federal, pero en el que en realidad prevalecían otros principios:

El Estado de las Autonomías, señoras y señores Diputados, previsto en la Constitución de 1978, se concretará en una forma de organización de Estado federal que a otros posibles modelos. Se propugna, por tanto, una autonomía política armónicamente homogénea, generalizada, y en la que todas las Comunidades puedan alcanzar los mismos niveles de autogobierno, con garantías en el ejercicio de la solidaridad y sin privilegios de ningún tipo. (...) la construcción del Estado de las Autonomías puede y debe ser un proceso de síntesis, no un proceso de disgregación, que fortalezca, por consiguiente, la unidad de España<sup>814</sup>.

De todos modos, como se vienen insistiendo, la improvisación seguía manteniéndose, y en la teoría los socialistas intentaban conciliar todavía la racionalización con el derecho a libertad de elección, pese a que fueran ideando fórmulas de negociación que pondrían en peligro la capacidad soberana de los pueblos para decidir sobre estas cuestiones. Por ello, en algunos lugares se mantenía discursivamente la posibilidad –¿o ficción?– de acceder por la vía del 151, distinguiéndose esta postura de la que querría imponer el Gobierno. Durante el debate, Peces Barba se encargó de hacer notar tales diferencias argumentando lo siguiente:

Nosotros defendemos la existencia de dos vías: la del artículo 151 y la del 143. Primera diferencia importante. Nosotros rechazamos el dirigismo autonómico manifestado por el planteamiento de la Unión de Centro Democrático. El programa de UCD confunde dirigismo con igualdad, y creo que se explicó hasta la saciedad ayer cuál era el sentido de la igualdad autonómica y de la solidaridad que los socialistas teníamos»<sup>815</sup>.

---

<sup>814</sup> *Ibid.*, p. 6117.

<sup>815</sup> A esto contestaba el Ministro de Administración Territorial, Pérez-Llorca, poniendo de relieve la contradicción en que en su opinión incurrieran los socialistas, al acabar decidiendo ellos la vía elegida. Y

En un sentido similar se expresaba Felipe González el 30 de mayo en el mismo debate, cuando incidía en el hecho de que facilitar el acceso por la vía del 151 significaba no confundir igualdad con uniformidad. Ellos, a diferencia de UCD, querían hacer una oferta en la que «la igualdad es, a su vez, el respeto a la diferencia»<sup>816</sup>.

Finalmente, por todos fue comprendido el hecho de que el caso andaluz se había convertido –o lo habían convertido las fuerzas políticas– en una piedra angular del problema autonómico, y que la situación necesitaba ser desbloqueada. Por ello, la UCD acabó cediendo y se modificó la Ley Orgánica de Referéndum, convirtiendo el resultado –ahora sí–, en política y legalmente positivo. Pero para ello, los centristas renunciaron a vías intermedias como las aceptadas por el PSA, de salvar la situación a través de artículo 144, para unos el único medio posible<sup>817</sup>, y para otros, una forma de no dar marcha atrás, incurriendo en una violación de la Constitución, caso del PSOE<sup>818</sup>. La solución acabó pasando por un acuerdo suscrito por la totalidad de las fuerzas andaluzas, y presentado ante el Congreso el 23 de octubre de 1980, en el que se solicitaba a las Cortes Generales que se «sustituyera» la iniciativa autonómica de la provincia de Almería, en los términos que se preveían en la proposición de ley

---

aunque no era esto lo que planteaban sobre el papel, pues debía ser la propia ciudadanía la que se manifestara por una u otra voluntariamente, en la práctica la realidad no distaría tanto de este planteamiento: «Al candidato le parece mal que nuestro partido, (...) postule que sea el artículo 143 (...) el que solucione el problema autonómico global e igualitariamente. Al Partido Socialista le parece, en cambio, lícita su postura de decir que unas regiones –porque el Partido Socialista en ellas lo dice– han de ir por el artículo 151 y otras por el 143», en BOCG: Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, nº94, 29 de mayo de 1980, p.6203 y 6217. Rojas-Marcos intervendría también en esta polémica apuntando que no veía diferencias sustanciales entre el PSOE y UCD en el modelo autonómico que ofrecían, ya que, entre otras cosas, ambos iban dibujando «un mapa autonómico en el cual van colocando la ficha del 143 o del 151 de la Constitución, según ambos partidos de estructura central entienden, desde el plano de sus ejecutivas, lógicamente en Madrid. Y aunque los dos dicen que *respetan las voluntades respectivas de los pueblos, eso lo matizan por la vía de los hechos*», en BOCG: Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, nº 95, 30 de mayo de 1980, p.6248.

<sup>816</sup> *Ibid.*, p.6262.

<sup>817</sup> Así opinaba Juan Carlos Aguilar, del PSA, partido que pactó según él el desbloqueo de la cuestión andaluza con UCD por medio de a una «interpretación flexible del artículo 144», a cambio del voto positivo de los andalucistas en la Moción de Confianza del 17 de septiembre, lo que no gustó en su opinión al PSOE que «originó que en el mes siguiente a aquel acuerdo se lanzara a una feroz campaña cuyo *leitmotiv* no era otro que tan sólo admitir la vía del artículo 151 y oposición frontal a la del 144. (...) El fondo de la campaña era atacar conjuntamente a la UCD y al PSA por haber pactado el desbloqueo», en Juan Carlos AGUILAR: «De la memoria...», p. 33. Una visión distinta de los hechos tenía Carlos Rosado, que cuenta que se produjo una reunión de parte de la cúpula de UCD de Madrid y Andalucía, en la que Martín Villa reconoció que la vía del 143 estaba muerta y que estaban tratando de hacer servir, junto al PSA, el artículo 144 «para no admitir de forma palmaria que el Partido Socialista y otros pudieran aparecer como los artífices del triunfo de la vía del 151», en Carlos ROSADO: «La UCD...», pp. 186-187.

<sup>818</sup> Defendía que existían «remedios jurídicos –y políticos– para desbloquear, sin violación de la Constitución, el pleito autonómico andaluz». A tal efecto, habían presentado otra proposición de ley con fecha del 8 de septiembre para la reforma de la L.O., en Vicesecretaría General del PSOE. Comité Permanente del Grupo Parlamentario: *III Informe al Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español sobre Funcionamiento y Trabajo del Grupo Parlamentario Socialista*, ABFPI, Fc 409.

presentada por todos los grupos parlamentarios para modificar la L. O de las distintas modalidades de Referéndum y que declaraba «sustituida en esta provincia la iniciativa autonómica con objeto de que se incorpore al proceso autonómico de las otras provincias andaluzas por el procedimiento del artículo 151 de la Constitución»<sup>819</sup>. Una solución pensada exclusivamente *ad hoc* para el problema andaluz, ignorando así al resto de los que acabarían quedándose a las puertas del ansiado acceso por la vía que ofrecía realmente todas las garantías de igualdad inmediata, y sufriendo la imposición de la armonización del proceso, que conllevaba una frustración inicial de muchas expectativas.

La cuestión, llegados a este punto sería valorar qué supuso y cómo influyó esta etapa en la construcción del Estado de la Autonomías; si nos encontramos ante el momento clave en el que se frustraría el triunfo de un Estado asimétrico; o si, por el contrario, pese a ser posible en el papel, no sería probable al no tratarse del modelo elegido por los dos partidos mayoritarios; y por último, qué papel jugó la situación andaluza en el momento en que se dirimió la reconducción del proceso autonómico.

El «café para todos» o la «tabla de quesos» que se había acabado heredando, a juzgar por algunas de las declaraciones vistas, provocaba como mínimo algunas incomodidades a las cúpulas dirigentes que previamente habían diseñado el sistema. El motivo no estribaba tanto en la posibilidad de alcanzar un Estado igualitario, idea que agradaba a los partidos mayoritarios de matriz estatal, sino por el hecho de suponer una inestabilidad constante que podría desbordar la capacidad de la joven democracia. Pero al mismo tiempo, era la garantía que se había diseñado para permitir que en España no se consolidaran diferencias y privilegios entre nacionalidades y regiones que cuestionaran de alguna manera la unidad de la nación. Además, tanto desde la UCD como desde el PSOE se habían visto impelidos en sus estrategias previas, a alentar las reivindicaciones autonomistas y la consecución de gobiernos preautonómicos en todos los pueblos de España, facilitando la generalización que ahora temían.

Como se ha visto, estas lógicas comenzaban a hacerse menos compatibles en el momento en el que la construcción del Estado de las Autonomías debía llevarse a la práctica y la improvisación adquirió un protagonismo nada desdeñable en las estrategias

---

<sup>819</sup> Citado en Carlos ROSADO: “La UCD...”, pp. 191-192.

en materia de política autonómica<sup>820</sup>. En este contexto, los acercamientos entre ambos partidos proliferaron a partir de la aprobación de los Estatutos vasco y catalán. Buscaban la consecución de un acuerdo para permitir la racionalización y ordenación del proceso autonómico, pero en enero, la premura de UCD por reconducir el acceso a la autonomía por el artículo 143 precipitó una serie de acontecimientos que cambiaron momentáneamente el panorama, y sobre todo, hicieron que el PSOE se posicionaría públicamente en defensa de unos postulados que estaban dejando en un segundo plano en aquellos momentos. Para algunos, aquel giro de UCD les situaba en la consolidación de una deriva nacionalista en la lectura del marco constitucional, eligiendo un modelo de Estado asimétrico para España<sup>821</sup>. Y en consecuencia, desde esta lógica, autores como Roberto L. Blanco, opinan que el PSOE se descolgaría en entonces de la «apuesta por la asimetría», como respuesta a la decisión de los centristas<sup>822</sup>.

Esta idea conecta con otra que tiene que ver con el papel de Andalucía como lugar en el que se conseguiría frenar aquel avance de la asimetría al conseguir alcanzar la autonomía plena a través de la vía del artículo 151, impidiendo por tanto la consolidación de un sistema que privilegiaría sólo para las nacionalidades históricas<sup>823</sup>.

---

<sup>820</sup> La inexistencia de directrices claras ha sido reiteradamente señalada para el caso socialista, pero lo mismo sucedió en UCD, como se reafirma, por ejemplo, a partir de las palabras de un personaje clave como Manuel Clavero: «Al menos en UCD y también probablemente en otros partidos políticos, no se había celebrado, después de la Constitución, un debate en profundidad sobre la política autonómica a seguir después de la vigencia de aquella, lo cual era completamente necesario», en Manuel CLAVERO: *Forjar Andalucía...*, p. 116.

<sup>821</sup> El ponente comunista del Estatuto de Carmona, Javier Pérez Royo, sentenciaba lo siguiente: «Si el Gobierno y la mayoría parlamentaria de UCD (...) había mantenido una posición no solo ambigua sino incluso contradictoria en lo que a la definición de la estructura del Estado se refiere hasta el momento de la aprobación de la Constitución, pasará a tener una posición inequívoca y claramente definida a partir de ese momento. La interpretación de la Constitución debe hacerse en clave «nacionalista». La excepción de los artículos 151, 152 y Disposición Transitoria segunda debe ser una excepción, que no debe estar al alcance de las demás regiones españolas» y «el gobierno y su mayoría parlamentaria se dejaban formalmente de cualquier ambigüedad en lo que a la definición de la estructura del Estado se refiere. El Estado sería un Estado unitario con dos comunidades autónomas plenamente descentralizadas políticamente (Cataluña y País Vasco), otra descentralizada políticamente pero bajo la tutela de las Cortes Generales (Galicia) y el resto que contarían con algún tipo de descentralización sin definir con precisión, pero pensándose más en una vertiente administrativa que propiamente política», en Javier PÉREZ ROYO: «De la autonomía...», p. 116-117.

<sup>822</sup> Creía que hasta entonces se mantenía en líneas generales una interpretación nacionalista y asimétrica de la Constitución, entre otras cosas porque el 151 era disuasorio, y el frenazo no hacía más que acentuar este aspecto, en Roberto L. BLANCO: *Nacionalidades históricas y regiones sin Historia*, Madrid Alianza Editorial, 2005, pp. 49-61.

<sup>823</sup> Destacando por tanto la relevancia del caso andaluz para la conformación del Estado simétrico, se han posicionado autores como J. M. de los Santos: «entre las reacciones provocadas por la simple presencia y acción política del Partido Andaluz (...) hay que destacar: la reinterpretación práctica del título VIII de la Constitución en favor de las nacionalidades «no históricas», a la cabeza de las cuales se encontraba Andalucía; y la extensión, por tanto, de la planificación autonómica a todo el Estado», en José María de los SANTOS: *Andalucía en...*, p. 242; por su parte, Manuel Ruiz indica en sentido similar: «El hito y significado histórico del 28F es aprovechado por el PSOE desde el ejecutivo para abordar tras la

En este sentido podría entenderse también el título de uno de los epígrafes de Luis Fajardo: «La rebelión de Andalucía contra el modelo “asimétrico”». Pero, del propio autor proviene otra declaración que cuestiona las bases en las que se sostienen tales interpretaciones, al explicar que tras la Constitución no podía optarse por una «simple descentralización administrativa para las regiones no “históricas”; pero podía jugarse con el tiempo, ralentizando la iniciativa autonómica»<sup>824</sup>, por lo que no se trataba tanto de construir una opción asimétrica, sino de sosegar el proceso que conduciría al final a la simetría del Estado.

Así pues, no parece cierto que los socialistas pensaran en un modelo asimétrico tras la Constitución. Cuando en el PSOE se referían a racionalizar el Estado Autonómico, como se ha intentado demostrar hasta ahora, lo hacían con la idea fundamental de salvaguardar la igualdad y solidaridad, así que sus motivos y precauciones ante la carrera competencial eran otros<sup>825</sup>. De hecho, muy lejos de mostrar

---

*anomalía* andaluza, un federalismo que consolidará en el tiempo el *café para todos* del periodo preautonómico y que le permitirá, en aras de la estabilidad democrática y su visión de Estado, ejercer su acción de gobierno con un sistema de generalización de las autonomías apaciguado y sin sobresaltos», en Manuel RUIZ ROMERO: “La singularidad...”, p. 190; David Sánchez Cornejo dice que al menos al principio, aquella reconducción suponía una asimetría de los regímenes autonómicos, aunque posteriormente, con la experiencia andaluza se equipararon «las instituciones de todas las comunidades autónomas al nivel superior, y dieron lugar a un nuevo modelo simétrico», en David SÁNCHEZ CORNEJO: “La Unión de Centro Democrático y la idea de España: la problemática reelaboración de un discurso nacionalista para un contexto democrático”, en *Historia del presente*, 13 (2009), p. 16. Habría que plantear si más que equipararlas al nivel superior lo hicieron en uno intermedio que rebajó por tanto las posibilidades de las autonomías de las nacionalidades históricas; o Javier Pérez Royo: «Pero con el referéndum andaluz del 28 F se cerró el proceso constituyente en lo que a la definición de la estructura del Estado se refiere. (...) La autonomía ha dejado de ser excepción para convertirse en norma en el Estado español. Esto es lo que significó el proceso estatuyente andaluz. El Estado de las Autonomías que hoy tenemos únicamente se entiende a partir de él. Nada más pero también nada menos», en Javier PÉREZ ROYO: “De la autonomía...”, p. 120.

<sup>824</sup> Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo...*, p. 88.

<sup>825</sup> Jerónimo Sánchez Blanco, escribió en *El País*, en su condición de ex diputado del PSOE por Cádiz, para contestar a las acusaciones de José Aumente, de la Comisión Permanente del Congreso del PSA, quien acusaba al PSOE en noviembre de estar pactando con UCD para racionalizar el proceso y paralizar la vía del artículo 151 en Andalucía. Según éste, ambos partidos querían frenar las autonomías una vez conseguidos los Estatutos vasco y catalán porque en realidad siempre habían tenido en mente un Estado con dos autonomías de primera, y el resto de segunda. Sánchez Blanco refutaría esta teoría alegando, entre otras cosas, que el modelo constitucional que se había planeado, en todo caso permitía que a través del artículo 143 se obtuviera el mismo grado de autonomía aunque a un ritmo más pausado, pese a que también negara que desde el PSOE hubiera intención de frenar el acceso de Andalucía o el País Valenciano –donde sí sucedió– por la vía del 151. Unas declaraciones que corroboran el diseño de un modelo que se quería avanzar a diferentes ritmos pero con el objetivo de la igualdad siempre presente: «Efectivamente, el techo autonómico del 148 es inferior al del 149, pero en ningún sitio de la Constitución se dice que aceptar la vía del artículo 143 para alcanzar el 148 supone renunciar a las competencias del 149. Sólo se dice que cuando se alcanza el quórum necesario para las competencias del 148 hay que dejar transcurrir cinco años para acceder a las competencias del 149. Con ello se ha tratado de marcar distintos ritmos en el proceso autonómico, cuestión que, al parecer, José Aumente intenta olvidar, presentando como falsa una autonomía que, siendo auténtica, sólo es más reducida, y negando lo



ningún interés por privilegiar a las nacionalidades históricas, el Secretario General del PSOE realizaba unas confesiones en un libro publicado en la campaña electoral de 1982, que harían pensar en que la homogeneización y ralentización no habían sido concebidas en ningún caso para reforzar la asimetría, sino más bien para rebajar las diferencias que se podrían haberse establecido entre Cataluña y el País Vasco y el resto de territorios. Para ello, habrían inducido de una manera un tanto artificial la generalización del proceso autonómico:

Es inducido. Tiene otras causas, efectivamente, porque en el momento en que se generaliza desde la cúpula la estructura autonómica del Estado, por muchas razones, algunas no son razones demasiado positivas, en el sentido de que se había pensado fundamentalmente para contrarrestar el efecto distorsionante que pudiera tener en ese momento de tránsito una autonomía exclusivamente para Cataluña y para el País Vasco, pero aun así, yo creo que —es verdad que eso se ha procurado, se han hecho autonomías un poco en todas partes, con esa idea— aun así, yo creo que hay un movimiento de fondo que tiene mucha importancia, el caso más espectacular es Andalucía, que no se puede explicar sólo por un fenómeno de agravio comparativo<sup>826</sup>.

De igual modo, tampoco es probable que consolidar la asimetría fuera la voluntad de UCD<sup>827</sup>, como se demuestra en las explicaciones de sus dirigentes sobre el viraje en enero de 1980. Por ejemplo, Rafael Arias-Salgado, aseguraba que UCD sólo estaba eligiendo una opción de procedimiento y que «el uso del artículo 143 iba a permitir un encauzamiento global del proceso autonómico, su ordenación racional, el establecimiento de ritmos adecuados y, sobre todo, alcanzar los mismos niveles autonómicos en todas las regiones y nacionalidades»<sup>828</sup>. Punto sobre el que coincidiría el mayor artífice de la reconducción, Martín Villa, que ciertamente no estaba de acuerdo con la generalización de la cuestión autonómica y que creía que el artículo 151 había nacido sólo para dar salida a la cuestión catalana, vasca y en todo caso gallega, por lo que juzgaba un error dar expectativas al resto de territorios. Pero que explicaba la

---

que la Constitución le otorga: la posibilidad de acceder al 149», en *El País*, 23 de noviembre de 1979; y *El País*, 7 de diciembre de 1979.

<sup>826</sup> Felipe GONZÁLEZ: Un estilo..., p. 110.

<sup>827</sup> Había contribuido en buena medida, con el protagonismo de Manuel Clavero, al diseño del llamado «café para todos», pero no sólo a este debe atribuirse esta visión de España. Como indica Attard, el programa de UCD en 1978 decía que «El marco autonómico constitucionalizado será optativo y libre» y como indicaba en otro punto, se afirmaba también «la solidaridad entre todos los territorios que integran la nación española, señalando, de antemano, que ninguna autonomía supondrá privilegio», en Emilio ATTARD: *Vida y muerte...*, p. 87.

<sup>828</sup> *El País*, 17 de enero de 1980.

batalla entre el 143 y el 151, como un sinsentido, precisamente porque el modelo final no conducía en ningún caso a la asimetría:

Eran los comienzos de la ridícula guerra entre los artículos 143 y 151 (...). Se entendía por algunos que el acceder por la vía del artículo 143 suponía una autonomía «descafeinada», y la verdad es que no se pretendía que existieran comunidades autónomas de primera y de segunda. Al contrario, siempre he sido partidario de una cierta homogeneidad, sin la cual el proceso autonómico es imposible. Pero el procedimiento del artículo 151, pensado para situaciones excepcionales, era tan complicado que multiplicaba las consultas en forma realmente desorbitada. Su aplicación a todo el mundo nos hubiera podido conducir a una consulta popular cada veinte días entre 1980 y 1983. Intenté llevar al convencimiento (...) la idea de que con el artículo 143 se podían alcanzar idénticas competencias y poseer idénticos órganos de gobierno y representación»<sup>829</sup>.

Independientemente de que fuera o no lo mismo acceder directamente al mayor grado de autonomía, o que existiera la seguridad de que las competencias alcanzadas por todos podrían llegar a ser idénticas en el grado, sus palabras contribuyen a invalidar la idea de que UCD quería imponer un Estado asimétrico. Más bien se infiere la preocupación por solucionar de manera prioritaria los problemas vasco y catalán y ordenar el territorio para que la unidad no se viera afectada. Y completaba su relato diciendo que en mayo de 1980, Suárez hizo «el planteamiento autonómico más serio y riguroso hasta entonces hecho público (...) y atribuyó a la política autonómica las notas fundamentales de generalidad, homogeneidad y solidaridad», y citando al Presidente del Gobierno escribió: «Si las regiones que van a acceder ahora a la autonomía plena por el 143 desean realmente dotarse de un esquema organizativo paralelo al previsto para las

---

<sup>829</sup> Rodolfo MARTÍN VILLA: *Al servicio...*, p. 184. En el documento sobre las autonomías aprobado por el C. E de UCD el 15 de enero establecía en sus puntos 6 y 7 que las diferentes vías de acceso a la autonomía no condicionaban el contenido final de los Estatutos, que quedaba a la voluntad de cada región, sino únicamente el ritmo: «6. UCD lamenta especialmente que se haya propiciado la identificación entre ventajas y beneficios económicos y autonomía alcanzada exclusivamente por el cauce del artículo 151 de la Constitución. UCD afirma que tal identificación no sólo es falsa, sino que pone de relieve una consciente manipulación de la verdadera significación de la autonomía. Nada constituiría un mayor obstáculo al progreso económico que un sistema de autonomías improvisado, incoherente y de imposible asimilación. 7. UCD declara, en esta línea, que el procedimiento del artículo 143 de la Constitución permite garantizar el principio de igualdad y de solidaridad entre todas las regiones y nacionalidades, y rechaza rotundamente, por rigurosamente inexacta, cualquier afirmación de que por tal procedimiento sólo pueda alcanzarse una simple descentralización administrativa. Y ello porque las meras diferencias procedimentales o de tiempo ni suponen discriminación, ni vulneran el principio de igualdad, ni impiden en modo alguno la aplicación del principio de solidaridad, ni condicionan la consecución de una auténtica autonomía», en *El País*, 17 de enero de 1980.

regiones de restitución histórica, nada hay en la Constitución, ni en los postulados del partido mayoritario, ni en la actitud del Gobierno que lo impida»<sup>830</sup>. Y seguía:

El gobierno optó públicamente por la vía de acceso a la autonomía representada por el artículo 143 (...), y su presidente explicitó una nueva idea no menos importante: la de la gradualidad, ya que “el acceso inmediato de todas las comunidades españolas al nivel último de autonomía supondría un verdadero salto en el vacío desde el punto de vista político, y un auténtico caos en el funcionamiento de nuestras administraciones públicas”<sup>831</sup>.

No parece, por tanto, que quisieran un Estado asimétrico, es más, llegaba a afirmar que una vez la autonomía plena se fuera extendiendo, sería necesaria la generalización del proceso por motivos funcionales. Todo ello indicaría que no había grandes diferencias con los postulados de fondo del PSOE, en cuanto a la gradualidad y la igualdad final, aunque con formas distintas y con posiciones tampoco idénticas respecto a quiénes podían suponer una excepción.

Y si es difícil sostener a partir de los testimonios y hechos referidos hasta ahora la voluntad de construir un Estado Autonómico que no fuera simétrico por parte de cualquiera de los dos partidos mayoritarios, se hace también difícil otorgar al caso andaluz la responsabilidad de la simetría ulterior en el modelo español. Es cierto que adquirió un protagonismo destacado en todo este proceso, al ser la comunidad que se salvó del frenazo, pero no fue la única que se vio envuelta en tales cuestiones. De hecho, Attard, representante de la UCD valenciana, opinaría como otros que el fracaso de la UCD se sufrió por cuestiones autonómicas, pero con una visión más amplia, achacó al conjunto de la política autonómica de UCD su «autodestrucción», y no sólo a la que se llevó a cabo en Andalucía:

¿Qué yo discrepo de la racionalización del proceso autonómico? De forma alguna; pero cuando yo lo quería racionalizar era cuando todavía no se había iniciado el desenfreno de las autonomías a go-go, el supermontaje de los gobiernos provisionales

---

<sup>830</sup> Esto es también refrendado por él mismo, que tras hacerse cargo del Ministerio en septiembre de 1980, pronunció en el Club Siglo XXI una conferencia titulada «Autonomías posibles» que explicaba en once puntos sus propósitos. Entre ellos, el tercero decía: «Resolver las iniciativas autonómicas de modo que se hiciese posible la igualdad de competencias para las distintas comunidades autónomas y se evitase la proliferación de consultas electorales antes de la elaboración de las próximas elecciones generales o locales», en Rodolfo MARTÍN VILLA: *Al servicio...*, p. 185 y 189.

<sup>831</sup> *Ibid.*, p. 185.

preautonómicos. (...) A estas situaciones habíamos llegado por algo que nosotros habíamos consentido, que nosotros no habíamos impedido y, que tardíamente queríamos rectificar. Se me dirá también que el PSOE tuvo sus posiciones alternativas e interruptivas del proceso autonómico, que también coincidieron en la «racionalización», pero ellos lo hicieron con el buen cuidado de que la pesada carga del frenazo, del «martinvillazo», de la marcha atrás de la autonomía, corriera a cargo y a costa de la UCD (...) que dándose cuenta de su grave error, dos años después, quienes habían tolerado el desmadre, querían rectificarlo, sin tomarse las garantías de que esta rectificación, o era asumida por consenso y por todos los partidos, o nos llevaría al sepulcro el día que los pueblos ofendidos por su visceralidad, por su emotividad ante la discriminación, tuvieran ocasión de introducir por la ranura de las urnas la bilis de su asco»<sup>832</sup>.

La Ejecutiva del PSOE no diseñó su modelo a causa de los sucesos andaluces, sino que estos se encontraron en medio de un movimiento racionalizador e igualitario que sin embargo temía de unos tiempos que desbordaran la estabilidad de España y de excepciones que pusieran en peligro el conjunto del sistema. Y ahí radica su importancia, al haberse impuesto a otros territorios, favorecida en cualquier caso por intereses estratégicos y electoralistas del Partido, que no estaban consiguiendo aflorar con la misma fuerza en otros lugares.

Ante una UCD dividida en Andalucía por la vía de acceso, y una población que no presentaba fisuras importantes a este respecto, posicionarse como defensores de una autonomía sin discriminaciones ofrecía una perspectiva de réditos electorales que además contrarrestaría la ofensiva nacionalista del PSA. La autonomía plena de la vía del artículo 151 igualaba este territorio al País Vasco y Cataluña, y era concebida como el medio para restituir con el tiempo los agravios sociales, económicos y culturales que había padecido Andalucía, sumida en el subdesarrollo a causa del centralismo. De hecho, se consideraba que el centralismo había generado en España un sistema con graves desequilibrios, en el que Andalucía era erigida como el símbolo de esa desigualdad y del subdesarrollo; y por su parte, el País Vasco y Cataluña representaban el otro extremo del crecimiento. Por ello, acabar con el centralismo en España tenía muchas más implicaciones que las estrictamente identitarias, y la autonomía se relacionaba desde esta postura tanto o más con la igualdad y la solidaridad, que con el

---

<sup>832</sup> Emilio ATTARD: *Vida y muerte...*, p. 99.

respeto a los sentimientos nacionales diferenciados. Desde esta concepción, era difícil negar a Andalucía una posición privilegiada en el acceso a la misma.

Por otra parte, que Andalucía ocupara un lugar privilegiado en la estrategia del Partido, y que la concepción socialista del Estado de las Autonomías asegurara una homogeneidad final que no dependía en última instancia de la vía elegida, no explica del todo que se abandonara la lucha por la libertad de elección en la vía de acceso a la autonomía. Si bien es cierto que todo indicaba hacia una contención de la carrera competencial, esto no significa que la línea divisoria no pudiera haberse dibujado dejando entrar a algún territorio más en el «club» de los privilegiados, como sucedió con Andalucía. Posiblemente, en este sentido actuó una vez más la coyuntura y la improvisación del Partido, que iba adaptándose a veces sobre la marcha a cada situación. Quizá ante otro panorama, por ejemplo en el País Valenciano, no se hubiesen traicionado muchas promesas que habían surgido del arraigo y protagonismo que las demandas autonómicas habían tenido tradicionalmente. Pero ante un contexto condicionado por el bloqueo de UCD y el hartazgo que en algunos sectores estaba empezando a producir la cuestión autonómica a causa de la violencia de la Batalla de Valencia –incluidos los del entorno del PSPV-PSOE– la estrategia fue variando.

En conclusión, en su conjunto, el Estado de las Autonomías que se iría forjando en la Transición tenía mucho que ver con el Estado que estaban diseñando los socialistas desde el inicio. Se trataba de un modelo que respetaba la diversidad y que siempre había sido concebido como plural, pero que de igual modo siempre había antepuesto la igualdad, la solidaridad y la unidad a cualquier otra cosa. De este modo, sin traicionar sus principios, sino evolucionando a partir de ellos, se adaptaron al nuevo contexto, improvisando en muchos casos unas estrategias destinadas a construir, eso sí, un Estado Autonómico en el que la simetría estuviera asegurada. Un Estado que entendían debía respetar el derecho a la diferencia siempre y cuando éste no supusiera la diferencia en los derechos. En contra de otorgar privilegios, colaboraron con una reconducción de las vías de acceso que lejos de establecer diferencias entre un selecto grupo por un lado y el resto por otro, propiciaba en última instancia la equiparación de los techos autonómicos en un punto intermedio<sup>833</sup>. En realidad, la «armonización» lo

---

<sup>833</sup> Durante la Moción de Censura el Secretario General del PSOE se refería a la necesidad de igualar el resto de territorios con Cataluña a partir de su techo autonómico, dejando entrever que éste podría haber alcanzado así su cénit, igualándole con el resto a través de su autonomía mínima, mientras que los demás

que perseguían era impedir la construcción de un Estado asimétrico que permitía sobre el papel la Constitución<sup>834</sup>. Una motivación que no escondían, como se ha visto en capítulos anteriores, desde 1979, y que ligaba desde mucho antes esa igualdad y solidaridad a una única nación, para la que querían crear un único Estado. Un nosotros en clave nacionalmente española que siempre estuvo presente y que guio el antes y el después del Estado de las Autonomías.

---

tendrían todavía capacidad de crecimiento: «el Estatuto catalán, por hacer referencia sólo a ése, ha creado un techo mínimo de aspiración autonómica –para algunos podrá ser máximo, de acuerdo–, pero un techo al que tienen que llegar todas las autonomías del país» Boletín Oficial de las Cortes Generales. Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, 94, 29 de mayo de 1980, p.6160.

<sup>834</sup> Lo reconocía el propio Rodríguez Borbolla cuando años más tarde afirmara: «con base en la Constitución, y no hay que negarlo, hubiera sido posible desarrollar un modelo territorial “asimétrico” del Estado», un modelo sobre el que el autor se posicionaba en contra, concluyendo de forma triunfalista que ese no fue el destino del Estado español gracias a la solidaridad que también se establecía en la Constitución y que primó ante otros principios: «creo que puede decirse con rotundidad que, por mucho que ello no les guste a muchos, el Estado español no tenía que ser, en términos generales y con base a la Constitución, un “Estado asimétrico”. (...) la Constitución establece un principio general, como es el de la solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones de España (...). Para defender este principio, para hacer más posible la aplicación de este principio, para garantizar una justa “asimetría solidaria”, Andalucía decidió desarrollar las posibilidades de alcanzar el máximo techo institucional que permitía la Constitución», en José RODRÍGUEZ DE LA BORBOLLA: “Estatuto de Andalucía...”, p. 151-152.

## VI. EL ESTADO ARMÓNICO Y LA LOAPA

Tras la Moción de Censura se iba a mantener la estrategia que había motivado la acción contra el Gobierno, intentando así desestabilizarlo; dar una imagen positiva del PSOE como partido capaz de llevar el timón de España de manera más solvente; y forzar una solución que permitiera una salida positiva para la promulgación del Estatuto andaluz, que debía ayudar a los socialistas en su afán anterior. De hecho, si Andalucía estaba siendo clave en estos momentos se debía a que formaba parte de un proyecto superior y fundamental para la consolidación de la joven democracia española, la construcción de ese Estado autonómico que aún no estaba claramente definido, y para el que sólo se habían constituido formalmente las autonomías de Cataluña y del País Vasco.

El balance en cuanto a los réditos que estaban obteniendo por su política autonómica era, como sus actitudes a este respecto, irregular. Mientras que tras el referéndum todo parecía indicar que mejorarían los resultados de las elecciones de 1979 en este territorio<sup>835</sup>; las elecciones autonómicas en Euskadi y Cataluña de marzo de 1980 no ofrecían una perspectiva similar, dejando patente que no se había sabido remontar la situación de las generales en el País Vasco y que se habían hundido de forma inesperada en Cataluña<sup>836</sup>.

En el caso del PSE-PSOE, los problemas en torno a la cuestión nacional, se habían cerrado en falso en el II Congreso del Partido, en noviembre de 1979, urgidos por las elecciones al Parlamento vasco, que les obligó a buscar una solución de compromiso, constituyendo una Comisión Ejecutiva que demostraba la inexistencia de un acuerdo político que lastraría al PSE. Esta era de hecho la opinión de la propia Secretaría Federal de Organización, que especificaba que la tensión por el problema vasco enfrentaba principalmente la postura del sector de Vizcaya, que quería reforzar la imagen de un partido identificado con la defensa de los derechos de la clase trabajadora,

---

<sup>835</sup> Así se demostró en la primera oportunidad en la que pudieron medir sus fuerzas en las urnas. En las elecciones parciales al Senado en las provincias de Sevilla y Almería de noviembre de 1980, el PSOE obtuvo los mejores resultados de su historia: «en ninguna otra elección de sus ciento y un años de vida había conseguido el partido socialista unos resultados mejores en ambas provincias», en *El Socialista*, 182 (del 3 al 9 de diciembre de 1980).

<sup>836</sup> Algo que no sería bien recibido en el PSOE, máxime cuando estas elecciones constituyeron un test ara el resto del Estado, además de por tratarse en territorios estratégicos para la estabilidad del Estado y para los intereses partidistas de los grupos políticos, Salvador CANALS (et. al): *Atlas electoral de Catalunya: 1976/1980*, Barcelona, Fundació Jaume Bofill, 1981, p. 47.

liderado sobre todo por Ricardo García Damborenea; y el grupo de Guipúzcoa, encabezado por Txiki Benegas, que apostaba por reforzar la imagen nacionalista del partido. Dos visiones distintas del proyecto socialista vasco que al parecer, quedaron patentes en la campaña electoral según la Secretaría Federal de Organización<sup>837</sup>, aunque como han demostrado autores como Andrea Micciché o Eider Landaberea, desde el Estatuto la balanza se inclinó por revalorizar el elemento de clase respecto al nacional<sup>838</sup>, una tendencia que escondía una arraigada identidad española en gran parte del partido vasco<sup>839</sup>. En todo caso, como ya se vio en el capítulo 2, sería excesivo considerar que el grupo encabezado por Benegas esgrimiera criterios propios del nacionalismo vasco, sólo por diagnosticar la falta de comprensión del hecho nacional vasco como un hándicap decisivo en los negativos resultados electorales obtenidos por el PSE-PSOE desde 1979. De hecho, no iban más allá de reconocer la necesidad de corregir y revisar la política global del PSOE en materia autonómica, además de demandar un mayor compromiso del PSE en el desarrollo del Estatuto de Autonomía y el apoyo al PNV en sus demandas frente a UCD. En su propuesta sobre las líneas de actuación que deberían definir la práctica política del Partido en el futuro no se distanciaban de los grandes principios que defendía en su conjunto el PSOE: unidad, autonomía y solidaridad. Una opción que en ningún caso colisionaba con la identidad mayoritaria en el socialismo, la española, aunque construida desde la pluralidad cultural:

- Es obvio que queda descartado el nacionalismo, si se entiende por este la afirmación de Euskadi como «Patria de los vascos» en exclusiva, al margen de España, y la

---

<sup>837</sup> PSOE: “Secretaría Federal de Organización. Un año de gestión”, noviembre de 1980, AFLC, Fondo PSOE, Serie Informe, 004064-006, pp. 65-66. Véase PSE-PSOE: *Programa de gobierno*, Vitoria, PSE-PSOE, 1980.

<sup>838</sup> Andrea MICCICHÈ: *Euskadi socialista...*; Eider LANDABEREA: *Los “nosotros...”* Tasio Erkizia, quien fuera militante de HB en aquellos momentos, ha defendido que aquel congreso supuso una dejación de todos los planteamientos anteriores, adecuándolos a los establecidos por el XXVIII Congreso del PSOE, Tasio ERKIZIA: “El PSOE ante el problema nacional vasco”, en Tasio ERKIZIA, Martín GARITANO, Esteban BAIGORRI (et. al): *Euskadi, la renuncia del PSOE*, Bilbao, Txalaparta, 1988, pp. 32-33. Sobre el II Congreso del PSE-PSOE véase también Rafael LEONISIO: “La autonomía como proyecto. Relación Euskadi-España en los congresos del Partido Socialista de Euskadi (1977-2009), en *Sancho el Sabio: Revista de cultura e investigación vasca*, 36 (2013), pp. 141-168.

<sup>839</sup> Véanse los análisis de los resultados electorales del 1980 del PSE-PSOE, en los que se observa aquel debate, Agrupación Provincial de Vizcaya (PSE-PSOE): “Resultados electorales del 9 M y estrategia del partido”, ABFPI, Fondo José Antonio Maturana Plaza, CJAMP-1006-2; “Bases para un debate político”, ABFPI, Fondo José Antonio Maturana Plaza, CJAMP-1006-2; o Comité Ejecutivo del PSE-PSOE: “Proyecto de documento político sobre la estrategia del PSE (PSOE)” (19 de mayo de 1980), ABFPI, Fondo José Antonio Maturana Plaza, CJAMP-1006-3.



consiguiente defensa del independentismo. Quienes entiendan así la política no tienen un lugar en el PSE (PSOE).

- Queda sin embargo plenamente afirmado el autonomismo más amplio en la perspectiva de un Estado Federal Español. Autonomismo ligado a un proyecto de clase que es la transformación de España –concebida como un Estado de las Autonomías– en una sociedad socialista. Esta orientación supone la convicción de que el Socialismo es inalcanzable desde la perspectiva de Euskadi.
- El autonomismo dentro del marco del Estado Español implica una dimensión fundamental: la solidaridad de los trabajadores de todo el Estado en su lucha por el Socialismo.

(...)

- Una política autonomista consecuente, unida a un cierto cambio de imagen centralista, puede impedir la transferencia de votos al PNV e incluso verter el flujo hacia el PSE (...).

En cualquier caso, sea cual sea la orientación que se elija, este Partido tiene no sólo que revisar su estrategia a nivel Estado (PSOE) sino su estrategia en Euskadi (PSE)<sup>840</sup>.

Pese a la moderación de sus planteamientos, estos resultaban excesivos para aquellos grupos más españolistas que acabaron imponiendo sus posiciones. Pero no sólo al socialismo vasco preocupaba la derrota en las primeras elecciones autonómicas. La Ejecutiva del PSOE tuvo en cuenta tanto los resultados de Euskadi como los de Cataluña –en este caso más inesperados y traumáticos–, y así se observaba en su informe de gestión presentado al Comité Federal el 28 de febrero de 1981, en el que la cuestión autonómica cobró una importancia especial. Se afirmaba que a principios de 1980: «la Organización empieza a hacer un esfuerzo de recuperación que se pone de manifiesto en la fuerte movilización andaluza aunque no tenga los resultados apetecidos en el País Vasco y suframos un serio revés en Cataluña»<sup>841</sup>. Se resaltaba por tanto el

---

<sup>840</sup> Para evitar trasladar la imagen de partido centralista tenían que empezar por el propio socialismo vasco, por ejemplo, corrigiendo la actitud que su propia militancia tenía respecto a los símbolos, demostrando una revalorización de la pluralidad, pero también el cálculo electoral y la resignación ante la generalización de unos símbolos que no eran los propios: «Se impone una tarea de concienciación en el Partido que rompa con los tabúes y los complejos en algunos aspectos (euskara, ikurriña, aberri eguna) y contribuya a la fusión de las sensibilidades culturales existentes. Téngase en cuenta que el proceso educativo fuertemente apoyado por el PNV, va a contribuir sustancialmente a la extensión del euskara en todas la áreas, contribuyendo a la homogeneización de sensibilidades. Al contrario que hoy, el conocimiento del euskara va a tender a generalizarse y a sentirse como normal. El PSE debería contribuir internamente a ese proceso, que es garantía de normalización del País y condición para la ampliación electoral del Partido, a través de un cambio de imagen que responda a la evolución del País», PSE (PSOE): “El PSE (PSOE) ante...”, pp. 9-11.

<sup>841</sup> Recogido en PSOE: “Memoria. Informe de gestión I. 29 Congreso”, Madrid, 1981, pp. 10-12.

éxito que había supuesto para su credibilidad autonómica apostar de manera firme por Andalucía, pero se miraba de reojo a Cataluña y al País Vasco, territorios que aparecían tras las elecciones como el reflejo del problema autonómico de España. De esta forma, citando un informe de mayo de 1980, señalaban:

Así los debates de la Comisión Ejecutiva, a raíz de los resultados del 28 de febrero, de las elecciones vascas y catalanas, y sus negativos resultados en los dos últimos casos, nos han colocado ante reflexiones auto-críticas en un doble plano:

- 1. Existe una crisis de Estado producida por la transformación del Estado autoritario y centralista, en democrático y de las Autonomías, que distancia a la sociedad de las instituciones.**
- 2. El esfuerzo del Partido por impulsar la democratización y las Autonomías no ha evitado nuestro descenso, en Cataluña y Euskadi.**

La Comisión Ejecutiva de acuerdo con las Federaciones de Nacionalidad y Región, ha participado intensamente en las tres campañas, respetando los contenidos básicos de las mismas y sus orientaciones como corresponde al proceso federalizador del Partido. No obstante, los resultados negativos de las dos últimas han sido objeto de un estudio pormenorizado y han servido de esqueleto para plantearnos, de nuevo y con los datos de la realidad, la situación general. (...) [s.o.]<sup>842</sup>.

Se concluía además que la crisis del proceso autonómico suponía un factor decisivo en la crisis del Estado para la que el Gobierno no tenía solución y que requería de una respuesta del PSOE que fuera más allá de la crítica al mismo «ganándoles la mano en algunos terrenos –estrategia económica, o referéndum de Andalucía–»<sup>843</sup>.

Esta respuesta articulaba, por un lado la defensa de los derechos autonómicos, cuya bandera se sentían legitimados a enarbolar gracias a su comportamiento ante la cuestión andaluza; y por otro, la prevención ante el nacionalismo, sobre todo tras las derrotas electorales de las autonómicas catalanas y vascas. Como mencionan César Alonso de los Ríos y Carlos Elordi, en el PSOE comenzaron a hablar sobre «los peligros de la fragmentación de la estructura política española», y el propio Felipe González llegaría a alertar sobre la posibilidad de que a partir de las elecciones de 1983

---

<sup>842</sup> *Ibid.*, pp. 11-12.

<sup>843</sup> *Ibid.*

fuera difícil obtener mayorías a causa del auge nacionalista<sup>844</sup>. Por un lado, en su estrategia de enfrentamiento con UCD, Andalucía les era tremendamente útil, pero por otro, empezaban a desarrollar de forma más nítida una estrategia que conducía hacia la armonización, manteniendo lo que consideraban era una política de Estado y que a larga dificultaría o imposibilitaría el derecho a la libertad de elección de vía en el resto de territorios; y que afectaría también a las políticas autonómicas en el País Vasco y Cataluña<sup>845</sup>. Como ha señalado Joan B. Culla:

el triunfo de *Convergència i Unió* en las urnas catalanas constituyó una sorpresa cargada de repercusiones internas, pero también de efectos sobre el escenario político español. Por un lado crecía la alarma estatalista ante la «atomización» y la «centrifugación» del poder. (...) Por otra parte, los socialistas, que, de haber ganado la Generalitat, la habrían mimado como ejemplo de solvencia política y como pieza clave de un asalto periférico a la Moncloa, reaccionaron a la derrota con cierto síndrome de pretendientes despechados y, en todo caso, fijaron su nueva prioridad en la conquista directa del poder central, lo cual los obligaba a cambiar de óptica y de discurso: de paladines del autonomismo, a celosos defensores de las prerrogativas del Estado<sup>846</sup>.

Aunque la defensa de las prerrogativas del Estado, como se ha venido demostrando, no surgía a partir de aquellas derrotas electorales, sí encontrarían gracias a ellas más motivos para anteponer la unidad estatal a otras cuestiones. De esta manera, en esta fase se agudizarían las tensiones entre una actitud proclive a los derechos de las nacionalidades y regiones con la que tener más elementos con los que oponerse al Gobierno; y otra que entendía que racionalizar el proceso autonómico era necesario y que para ello debían llegar a un acuerdo con UCD. La complejidad del espíritu que guiaba su acción política en aquel contexto es visible, por ejemplo, a través del informe de la Secretaría Federal de Política Autonómica presentado ante el XXIX Congreso, en

---

<sup>844</sup> Estos autores añadían: «el resentimiento antinacionalista empezó a cobrar fuerza. Los sectores nacionalistas del PS de Euskadi y del PS Catalán perdieron protagonismo», en César ALONSO DE LOS RÍOS y Carlos ELORDI: *El desafío...*, p. 38.

<sup>845</sup> Según afirma Gillespie, los desalentadores resultados en las elecciones vascas y catalanas provocaron que la influencia nacionalista disminuyera en el partido, al acusar de la derrota al abstencionismo más que a «un trasvase de votos socialistas a los partidos nacionalistas» por una hipotética «falta de “nacionalismo”» Richard GILLESPIE: *Historia del Partido Socialista...*, p. 413. Por su parte, Alejandro Quiroga coincide en que los resultados electorales de las autonómicas de 1980 –junto al acoso de la violencia terrorista–, fueron decisivos para que el PSE-PSOE pasara a actitudes críticas con el nacionalismo vasco, imponiéndose el ala más izquierdista del partido a la de corte vasquista, en Alejandro Quiroga: “Amistades peligrosas...”, p. 119; o Alejandro Quiroga: “Coyunturas críticas...”, p. 35.

<sup>846</sup> Joan B. CULLA: “Una piedra en el zapato. El nacionalismo catalán en el escenario político español (1976-1998)”, en Xavier BRU y Javier TUSELL: *España-Catalunya: un diálogo con futuro*, Barcelona, Planeta, 1998, pp. 104-105.

el que se hacía un recorrido de su gestión desde su creación, y en el que se refirieron a su voluntad de entendimiento y su política de Estado en diversas ocasiones, mencionando que la actitud de UCD y la imposición del frenazo autonómico les obligó a «adoptar una actitud de enfrentamiento que se basa no obstante en propugnar el acuerdo, la negociación, el respeto a la Constitución y a la voluntad popular»<sup>847</sup>. Cómo se fue resolviendo aquella aparente contradicción hasta que se impuso la armonización será objeto de análisis en las siguientes páginas.

## **1. Un equilibrio inestable**

Un ejemplo del talante de «partido de Estado», preocupado por la marcha del proceso autonómico, se daría con la campaña divulgativa y formativa sobre la democracia, dirigida principalmente a los militantes socialistas, y que encajaba perfectamente con las lógicas de la subsidiariedad<sup>848</sup>. La Secretaría Federal de Formación se había marcado tres grandes objetivos, el primero de los cuales tenía que ver con la crisis autonómica. Querían conducir a la sociedad a la conquista de la plena ciudadanía política, y para ello había que fijar un modelo de Estado de las autonomías que estableciera el contenido de las vías y los ritmos. Así se conseguía devolver el poder a las comunidades, sobre todo si como decían se acompañaba este proceso por un fortalecimiento de los ayuntamientos –para contribuir a cimentar el Estado–, y se democratizaban los aparatos del Estado<sup>849</sup>. Nada que tuviera que preocupar a quienes velaban por la unidad o la gobernabilidad de España.

Dentro de esta campaña tuvieron lugar varias iniciativas, entre ellas el lanzamiento de unas carpetas formativas como la que sigue: «La democracia: Un proceso en marcha». Acorde con lo dicho, la «crisis de la estructura del Estado» era tratada en estos folletos y documentos, incidiendo en la necesidad de respetar la personalidad y el derecho al autogobierno de los pueblos, como base de la democratización que requería pasar de un Estado centralista a otro autonómico. Pero la mayor atención se centraba en desmentir que el proceso autonómico fuera, como algunos creían, «una gran amenaza para la democracia» y «para la continuidad de España como nación», la realidad, decían, era muy distinta, ya que no sólo no suponía

---

<sup>847</sup> PSOE: «Memoria. Informe de gestión I...», p. 246.

<sup>848</sup> Otras muestras de tal actitud pueden observarse en la reunión y acuerdos del Comité Federal del PSOE los días 21 y 22 de junio de 1980, en *El Socialista*, 159 (del 24 de junio al 30 de junio de 1980); y PSOE: Resolución Política del Comité Federal, AHUV, Fons Alfons Cucó, 021/010.

<sup>849</sup> *El Socialista*, 148 (17 de febrero de 1980).

una amenaza en estos términos, sino que formaba parte fundamental del proceso democratizador y lo perfeccionaba al contribuir a aumentar la participación, y al situar el poder más cerca del pueblo<sup>850</sup>.

El peso de los factores más puramente identitarios desaparecía en los documentos más divulgativos del PSOE, en los que querían dar una imagen de partido que ofrecía soluciones a esa «crisis de la estructura del Estado», que compartía protagonismo en plano de igualdad con la crisis política y económica. Los socialistas prometían planificación con un esquema del modelo y del calendario, además de enfatizar las cuestiones relacionadas una vez más con la subsidiariedad: «Frente al centralismo acercar el gobierno al pueblo», sin escribir sin embargo una sola palabra sobre los derechos de las nacionalidades y regiones que estaban siendo cuestionados en esta fase por una nueva estrategia del Gobierno<sup>851</sup>.

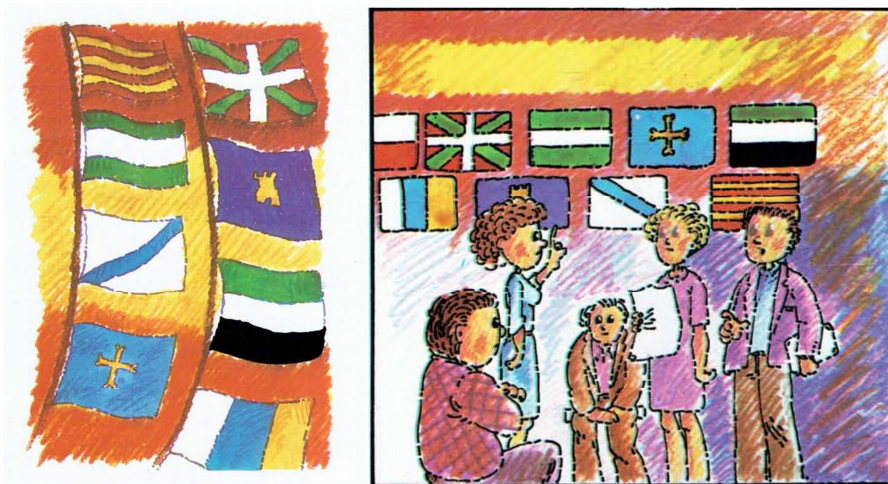
Además, reforzaban la idea de una España unida gracias a la libertad y solidaridad de sus nacionalidades y regiones con unas imágenes clarificadoras al respecto. De nuevo utilizando las banderas como potentes símbolos identitarios, en este caso a través de las autonómicas sobre el fondo de una bandera española que las engloba a todas. Una imagen que casaba a la perfección con las conclusiones de uno de los panfletos, que enunciaban que uno de los dos puntos fundamentales en los que se apoyaban las autonomías era el siguiente: «Mantener la unidad de España como nación y la necesaria solidaridad que permite ir disminuyendo progresivamente los desequilibrios económicos y culturales»<sup>852</sup>.

---

<sup>850</sup> PSOE: “La democracia: un proceso en marcha”, ABFPI, 75-G 1, p. 7.

<sup>851</sup> PSOE: “La democracia, un proceso en marcha”. Tríptico en “Carpeta de Formación. La democracia: un proceso en marcha”, AHUV, *Fons Alfons Cucó*, 021/006.

<sup>852</sup> PSOE: “La democracia: un proceso en marcha”. Panfleto en “Carpeta de Formación. La democracia: un proceso en marcha”, AHUV, *Fons Alfons Cucó*, 021/006. Por otro lado, José María Maravall, Secretario Federal de Formación, primaba de nuevo la igualdad social y económica entre territorios frente a cualquier otro aspecto como motor del desarrollo autonómico del Estado, y explicaba que este sería uno de los temas sobre los que se trabajaría en la Escuela de Verano de 1980, en *El Socialista*, 170 (del 10 al 16 de septiembre de 1980).



Imágenes 8 y 9; Ilustraciones Carpeta de Formación (Fuente: Arxiu Històric de la Universitat de València, *Fons Alfons Cucó*, 021/006.)

Se trataba de una actitud más tendente a la «armonización» que, por ejemplo, discutía entre la militancia los límites a la federalización del propio partido. En la Escuela de Verano de 1980, organizada por la Secretaría de Formación, Jerónimo Saavedra, Secretario del Partido Socialista de Canarias, defendía la necesidad de no perderse en demasiadas estrategias, al menos no en las cuestiones que pudieran llevar a caer en «contradicciones», al seguir tácticas diferentes en cada territorio según el interés de cada nacionalidad o región, algo que afectaba al Partido, pero también al Estado español. Por ello, aunque reconocía el valor de comprender los problemas que se planteaban en los distintos territorios de España y ofrecer para solventarlos soluciones adecuadas a cada caso, esto debía tener, según él:

un límite preciso en donde tiene que recuperar su función el propio Congreso Federal, el de establecer esos límites con el fin de que esos signos de identidad del partido como organización de clase no sufra mella alguna sino que por el contrario se fortalezca, y esos signos de identidad no sólo vienen requeridos en relación con la organización de la derecha con la organización de clase patronal o empresarial sino que también puede venir respecto a organizaciones independentistas que tienen otro modelo constitucional, otro modelo y otro objetivo social y que puede estar en contradicción con los objetivos del partido<sup>853</sup>.

<sup>853</sup> Discurso en el marco del debate «Las estrategias socialistas» de la Escuela de Verano de 1980, en Secretaría de Formación-PSOE: Transcripción del discurso de Jerónimo Saavedra (25 de noviembre de 1980), AFFLC, Fondo UGT. Comisión Ejecutiva Confederal, 003105-002.

En estas palabras se ponía de manifiesto la prevención o incluso el rechazo al nacionalismo no estatal. Una actitud que por otra parte no era patrimonio exclusivo de las estructuras estatales, afectando también a las regionales, incluso en el PSE-PSOE o en el PSC-PSOE estas disputas adquirieron una fuerte virulencia; y puede observarse cómo se manifestaron también estas inquietudes en boca de Saavedra, representante de uno de los territorios que en aquellos momentos se estaban viendo más perjudicados por la «racionalización» autonómica, el canario<sup>854</sup>. De hecho, en la problemática sobre la vía de acceso que mantenía el bloqueo del proceso canario, la opción más pragmática seguía ganando enteros. Ya se ha visto como a nivel interno los representantes del socialismo canario no negaban las ventajas de reconducir la autonomía por la vía del artículo 143 desde principios de 1980, y a mediados de 1980 los partidarios de tal opción comenzaban a imponerse claramente. Como manifestara el propio Saavedra, la vía rápida y de mayores competencias era vista por el sector que encabezaba éste como:

un riesgo, así lo pensábamos nosotros, el llevar un referéndum sobre el tema de vías del Estatuto, en el que los del NO al 151 pudieran sumarse tanto los independentistas como los que querían la fórmula del 143, y por consiguiente que hubiese un rechazo y que este rechazo de la vía del proceso autonómico podría tener unas lecturas internacionales muy peligrosas para Canarias. Estas fueron las razones que nos llevaron a algunos a plantear en el seno de la Ejecutiva Regional la necesidad de pasar a defender el 143. En una reunión del Comité Regional, yo defendí lo del 143, se sometió a votación y perdí. Entonces dimití y convocamos congreso extraordinario, (...). Eso fue en mayo de 1980, con el objetivo único de modificar la resolución anterior<sup>855</sup>.

En el Congreso Extraordinario del Partido Socialista de Canarias celebrado a finales de mayo, ganó la opción del dimitido Secretario General, que fue reelegido con el 63% de los votos. Uno de los puntos decisivos del debate estaba centrado, como se ha mencionado, en la política autonómica, y aunque los socialistas mantuvieron la decisión de no participar en la Junta de Canarias limitándose sólo a asistir a los plenos del ente preautonómico, la postura de Saavedra consiguió una importante victoria<sup>856</sup>. Según

---

<sup>854</sup> La polémica por las vías alcanzó al seno del PSC-PSOE, y Jerónimo Saavedra, según su biografía, lideraba un grupo de dirigentes socialistas que apostaban por la vía del artículo 143, en José N. MARTÍN: *El compromiso constante. Apuntes para una biografía*, Las Palmas de Gran Canaria, Partido Socialista Canario-PSOE, 1987, p. 73.

<sup>855</sup> José N. MARTÍN: *El compromiso...*, p. 73.

<sup>856</sup> *El País*, 3 de junio de 1980; En junio de 1980 no había presencia socialista en los entes preautonómicos –por haberse retirado de los mismos– de Galicia, País Valenciano, Aragón y Canarias, aunque, como parecía estar evidenciándose ya entonces, el caso más complejo (restando a Andalucía de la

narraba el diario *ABC*, el congreso había supuesto «una vía de escape para la Ejecutiva regional, cercada por un Comité regional discrepante que, normalmente, ha sustentado tesis distintas». Al parecer, los enfrentamientos habían sido frecuentes desde el 9 de mayo de 1979 al no aceptarse la propuesta de la dirección de entrar en la Comisión Permanente de la Junta de Canarias. Y aunque se reafirmaron en esta decisión, el margen de maniobra para la negociación se vio sustancialmente ampliado, como se cuenta en esta noticia:

La «línea dura», partidaria de la intransigencia total respecto al artículo 151 (o 151 o nada) fue desplazada por quienes consideran que se impone el desbloqueo de la situación autonómica, y que si el 151 efectivamente está cerrado, hay que negociar un estatuto «del mayor nivel»<sup>857</sup>.

La posición autonómica del socialismo, a grandes rasgos, no estaba presentando unas directrices incompatibles con la voluntad racionalizadora de UCD, excepto en el tema andaluz, que a pesar de todo tampoco colisionaba con este modelo unitario, aunque no uniformizador, como ya se ha ido viendo y como seguían manifestando<sup>858</sup>. Lo que sí les ofrecía Andalucía era la posibilidad de presentar otra batalla, sobre la que la victoria estaba prácticamente asegurada, frente al Gobierno. Manteniendo una estrategia de distanciamiento con la política de consenso, se esforzaban por evitar las posibles coincidencias. Su estrategia de alternativa de gobierno requería de declaraciones como las de Felipe González, afirmando que, «Mientras yo siga siendo secretario general del PSOE, este partido no volverá a firmar pactos con UCD extramuros del poder ejecutivo»<sup>859</sup>. De puertas afuera no podían manifestar que desde hacía tiempo existía el convencimiento de que para el desbloqueo de los procesos autonómicos, de que para la solución de la definida como «crisis de Estado», era necesaria la negociación con UCD. Máxime cuando la victoria de los nacionalismos

---

ecuatoriano) sería el del País Valenciano, citado expresamente como ejemplo de situación conflictiva, al tener «UCD, una clara posición antiautonómica» en este territorio, en PSOE: “Documento base de trabajo –con carácter interno– sobre la situación en los entes preautonómicos a partir del acta de la reunión del 9 de abril de 1980” (13 de junio de 1980), ABFPI, 75-G 1, p. 2 y 5.

<sup>857</sup> *ABC*, 3 de junio de 1980.

<sup>858</sup> El «problema andaluz» se convertía en este discurso en un «problema de Estado» que ofrecía una alternativa a la imposición de la unidad: la unidad voluntaria. Así, se afirmaba: «Los socialistas, pensamos, en efecto, que estamos asistiendo a un nuevo enfrentamiento histórico entre quienes piensan que la unidad de España sólo puede ser garantizada mediante el uniformismo aniquilador de toda diferencia y quienes estimamos por el contrario, que España ha sido y va a seguir siendo una, gracias precisamente al esfuerzo de muchos pueblos distintos decididos a construir una Patria común», en *El Socialista*, 158 (del 17 al 23 de junio de 1980).

<sup>859</sup> Intervención realizada en la última sesión plenaria de la Escuela de Verano de 1980, en *El Socialista*, 170 (del 10 al 16 de septiembre de 1980).



vasco y catalán en marzo de 1980, les hacía temer por la «fragmentación» de España, haciendo que el PSOE –como determinaría Alfonso Guerra a posteriori– apareciera como «la única fuerza política cuya implantación homogénea en todo el Estado le permitía vertebrar, con una perspectiva de solidaridad nacional, el proceso de construcción del Estado democrático en su dimensión de Estado de las Autonomías»<sup>860</sup>.

De momento, congelando las conversaciones sobre el pacto, pero trabajando para el acuerdo en los territorios, como se ha visto en Canarias, durante ese mismo verano se siguió perfilando la política autonómica del partido en las terceras jornadas organizadas por la Secretaría de Política Autonómica. Celebradas entre los días 8, 9 y 10 de julio, se nutrieron de reflexiones e informes que fueron debatidos por bloques temáticos, organizándose a partir de ellos grupos de trabajo que nacerían de estas jornadas pero que deberían tener una mayor continuidad en el tiempo. Además, de aquellos debates surgió el documento «Esquema básico para la elaboración de un documento sobre las autonomías», que recogía presumiblemente los principales acuerdos y líneas de acción a seguir a partir de entonces y que parece estar inspirado fundamentalmente en los informes de Pedro Silva, «Las autonomías en la Constitución de 1978. Problemática que plantean» y «La vía socialista a la autonomía. La autonomía plena», además de en el documento «Modelo institucional del Estado de las Autonomías» elaborado a partir de una ponencia de Joan Prats<sup>861</sup>.

El «Esquema básico para la elaboración de un documento sobre las autonomías», documento que querían fuese divulgativo, establecía como punto de partida inmediato la Constitución de 1978, en cuyos límites se situaba la política autonómica socialista. Pero como decía el texto de Pedro Silva en el que se inspiraba este apartado, lo cierto era que «dichos límites no definen, por sí solos, esa política.

---

<sup>860</sup> Alfonso GUERRA: “La Transición democrática en España”, en *Sistema*, 68-69 (1985), pp. 11-12.

<sup>861</sup> Pese a que no serán detallados en las siguientes páginas, formaron también parte de aquellas jornadas los siguientes documentos: «Autonomías (estudio competencial, transferencias de servicios y principios constitucionales sobre autonomía)» de Virgilio Zapatero y «Competencias de las Comunidades Autónomas» de Tomás Quadra-Salcedo –miembro de la futura Comisión Enterría–, ambos ponentes, junto a Álvaro Gil-Robles, se ocuparían del grupo de trabajo «Competencias de las CC.AA y Política de Transferencias»; el texto «Aspectos económicos y financieros» de Carlos Solchaga, quien se encargaría, junto a Fernández Marugán, Joan Colom y Ernest Lluch del grupo de trabajo sobre el «Modelo de financiación»; los documentos «Regímenes transitorios» de María Izquierdo y «Análisis del modelo institucional transitorio propuesto por UCD» de Pedro Silva, quien se ocupó del trabajo a desarrollar sobre las «Críticas al modelo institucional transitorios propuesto por UC». Véase PSOE: “Documentación aportada a lo largo de las Jornadas de trabajo de los días 8, 9 y 10 de julio de 1980”, ABFPI, 75-E 4; y PSOE: “Grupos de trabajo que se constituyeron a partir de la reunión de los días 8, 9 y 10 de julio”, ABFPI, 75-E 4.

Quiere decirse que, dentro del respeto a la letra y el espíritu de la Constitución pueden desarrollarse muy distintas políticas autonómicas, todas ellas constitucionalmente legítimas y enraizadas, cada una de ellas, en distintas concepciones ideológicas»<sup>862</sup>. Esto implicaba, como indicaba el informe elaborado por Joan Prats, que se reconocía «un poder político verdadero y propio» a las instituciones autonómicas; que se asumía que constituirían un poder del Estado, participando del ejercicio de la soberanía, aunque no eran soberanas<sup>863</sup>. Pero que este reconocimiento derivaba de la «conveniencia política» de dar esta interpretación por buena, ya que podían existir otras igualmente válidas<sup>864</sup>.

Esta interpretación –según estableciendo estos análisis– partía del reconocimiento de la voluntad popular de las comunidades, que había desencadenado los procesos autonómicos y que por tanto había impedido hasta el momento una planificación controlada desde el Estado y las instituciones del mapa autonómico. Esta voluntad popular era también la que, según había sucedido hasta entonces, debía determinar el volumen de competencias que cada comunidad adquiriría. Pero era aquí donde el sistema se encontraba con un riesgo de enormes dimensiones que podría derivar en una «irreversible crisis del Estado» que construyera un «Estado asimétrico y permanentemente inacabado» que fuera totalmente disfuncional. Y es que, como aseveraba Pedro Silva:

El amplísimo respeto a esa voluntad constituye la mayor virtud –desde nuestra perspectiva de la concepción autonómica contenida en la Constitución, pero, al tiempo, comporta graves riesgos si esa libertad que se reconoce no es responsablemente ejercida. En efecto, constitucionalmente no puede impedirse que, en un horizonte situado a medio plazo, existan provincias de régimen común, comunidades con un reducido volumen de competencias y tal vez unas de estas con instituciones legislativas y otras sin ellas. Comunidades que hayan alcanzado el techo de las competencias

---

<sup>862</sup> Pedro SILVA: “Las autonomías en la Constitución de 1978. Problemática que plantean” (10 de julio de 1980), ABFPI, 75-E 4, p. 1.

<sup>863</sup> El documento de Prats había sido presentado a las II Jornadas sobre Autonomía y se estudiaba de nuevo en estas.

<sup>864</sup> En concreto afirmaba: «Esta interpretación puede no corresponderse con la interpretación “auténtica” de la Constitución, pero es la impuesta por la dinámica autonómica y la que mejor se acomoda a la batalla política a la vez en el frente estatal y en el autonómico. Por lo demás, es la única que puede competir a nivel ideológico con los “nacionalismos” de las nacionalidades», en Joan PRATS: “Modelo institucional del Estado de las Autonomías”, ABFPI, 75-E 4.

asumibles, distintos calendarios electorales y consiguiente proliferación de comicios, etc.»<sup>865</sup>.

Tal panorama de duplicidades y obstáculos, seguía Pedro Silva, no requería de voluntades dispares: «Bastará con que la incertidumbre en cuanto al inicio, el ritmo o el objetivo de los distintos procesos autonómicos se extienda durante un plazo prolongado, para que las disfunciones creadas en el Estado hagan muy difícil su gobierno»<sup>866</sup>.

Por todo ello, en el PSOE querían enunciar una respuesta que desarrollara el Estado Autonómico conjugando el respeto a la voluntad de las Comunidades Autónomas con unos ritmos homogéneos. Su modelo de desarrollo autonómico, a partir de ese respeto «a la letra y al espíritu de la Constitución» demandaba prudencia para evitar el fracaso o la destrucción del Estado, porque, como señalaba en otro documento Pedro Silva:

Lo que debe importar es el desenlace satisfactorio del proceso, y en ese proceso pone el Partido Socialista el acento a la hora de tratar el problema. Sólo a la ignorancia del significado histórico de la construcción del nuevo Estado de las Autonomías, y a la consiguiente ausencia de perspectiva, puede achacarse el que, hasta ahora, la polémica se haya desviado de los verdaderos problemas al prurito de los agravios comparativos o la carrera contrarreloj<sup>867</sup>.

La alusión al problema de las vías era directa, y aunque no resultaba una novedad y el propio Pedro Silva se había manifestado ya antes como partidario de olvidar la polémica y decantarse por convertir en plena la vía del artículo 143, esta declaración de intenciones cobró en estos momentos una importancia simbólica mayor ya que quedó plasmada en un documento oficial, el «Esquema básico para la elaboración de un documento sobre las autonomías». Con un apartado titulado como «La vía socialista: la autonomía plena» declaraban que el «modelo socialista del Estado de las autonomías pone el acento en la configuración autonómica al final de los distintos procesos, y no en los aspectos propiamente procedimentales», y a continuación se definían las que serían las bases del proceso armonizador que estaban planeando: la generalización, la homogeneidad, la igualdad y la sincronización, intentando compatibilizar todo lo anterior con «la voluntad autoconstituyente de las Comunidades,

---

<sup>865</sup> Pedro SILVA: “Las autonomías en...”, p.3.

<sup>866</sup> *Ibid.*, p. 4.

<sup>867</sup> Pedro SILVA: “La vía socialista a la autonomía. La autonomía plena” (10 de julio de 1980), ABFPI, 75-E 4, p. 1.

que los socialistas se proponen impulsar en las direcciones referidas»<sup>868</sup>. No era cuestión de negar la voluntad de estas comunidades, por tanto, pero ayudarla a «elegir» la opción más conveniente al parecer sí era una obligación del PSOE.

Además, se referían explícitamente al «problema de las dos vías», otorgándole un «carácter transitorio», en coherencia con la idea de no centrarse en los aspectos procedimentales, ya que estaban por la construcción de un Estado simétrico y homogéneo en el que la igualdad final quedaría asegurada. Por ello no tuvieron problemas en ignorar la vía del artículo 151, que quedaba negado al no ofrecerse ni tan siquiera como posibilidad, y pronunciarse por «la vía ordinaria – 143 – como régimen autonómico de transición» convirtiéndola en una vía plena gracias a una «interpretación extensiva del art. 148»<sup>869</sup>. Donde sí la mencionaban era en el documento de Pedro Silva, en el que no escondía la inconveniencia que suponía para los socialistas que con un sistema no homogéneo e igualitario, la vía del artículo 151 provocara que algunos territorios «adquirieran la ventaja –tal vez formal pero irreversible– de un peculiar sistema de negociación con las Cortes Generales»<sup>870</sup>.

Por otra parte, este modelo necesitaba para imponerse «del concurso de una amplia mayoría en el proceso autoconstituyente», con lo que veían la «negociación como factor imprescindible en el desbloqueo del inicio de los procesos autonómicos»<sup>871</sup>. Esto, aunque no lo expresaran abiertamente, significaba concertar las bases de los procesos autonómicos, ya fuera a nivel estatal o regional, con UCD como partido mayoritario<sup>872</sup>. Y para hacer posible el acuerdo creían que en los territorios en

---

<sup>868</sup> Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Esquema básico para la elaboración de un documento sobre las autonomías”, ABFPI, 75-E 4, pp. 4-5.

<sup>869</sup> *Ibid.*, p. 5.

<sup>870</sup> Pedro SILVA: “La vía socialista...”, pp. 11-12. Por otra parte, en otro documento realizado por la Secretaría de Política Autonómica a partir del informe de Joan Prats presentado ante las II Jornadas sobre Autonomías, se señalaba igualmente que «Todas las vías constitucionales son igualmente legítimas y eficaces para la consecución de los mismos techos de competencias y autogobierno. No cabe hablar de distintos tipos de autonomía para las nacionalidades o regiones, sino de un diferente ritmo en el logro de los techos antes mencionados». Además, introducían la posibilidad de enmendar en los siguientes Estatutos las deficiencias que presentaban el catalán y el vasco y el proyecto de Estatuto gallego, en Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Modelo institucional del Estado de las Autonomías” (7 de julio de 1980), ABFPI, 75-E 4, p. 3.

<sup>871</sup> Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Esquema básico...”, p. 5.

<sup>872</sup> Así se refería Pedro Silva a la obligación del PSOE y sus federaciones de trabajar por el consenso y olvidar la vía del 151 si era necesario: «Las autonomías deben cimentarse sobre amplias mayorías, única fórmula para garantizar la viabilidad y éxito de un proceso tan extraordinariamente conflictivo y transformador. De ahí que la ausencia de consentimiento político suficiente para optar por un procedimiento no deba llevar al mantenimiento de la propia posición a la espera de mejores tiempos, porque esos mejores tiempos llegan, inevitablemente, a los cinco años de vigencia de los Estatutos», en Pedro SILVA: “La vía socialista...”, p. 12.

los que se mantenía el bloqueo debían contribuir a «la desdramatización política del “conflicto de los procedimientos”» que era posiblemente el mayor obstáculo para la solución al problema, ya que al fin y al cabo la cuestión de las vías no era tan trascendental para el PSOE:

Hay que decir, en consecuencia, y no con afán de difuminar los conflictos, sino con el de asignarles su verdadera trascendencia y significado, que, desde nuestro acento en el final de los procesos, el procedimiento del artículo 143 es, simplemente, un régimen transitorio a la plena autonomía<sup>873</sup>.

En estas mismas jornadas, otro documento —en este caso en un plano más teórico y de debate sobre las ideas—, servía para fundamentar y explicar el porqué del modelo que se había escogido en el PSOE para el desarrollo del Estado de las Autonomías, que además ayudaba a marcar distancias con los «nacionalismos alternativos» en coherencia con la nueva fase inaugurada tras las elecciones autonómicas. Se trataba del texto de José María Triginer, «Socialismo y Autonomía», que introducía el tema sobre la compatibilidad de la «concepción internacionalista» y la «concepción nacional» —que no nacionalista—, una compatibilidad que era posible porque el socialismo era defensor de cualquier lucha contra la opresión. Aunque las referencias se hacían explícitas en relación a la dominación imperialista y colonialista, es posible sobreentender que Triginer defendía las reivindicaciones «nacionales» también en España, pero vinculadas a los principios de igualdad, libertad, solidaridad y democratización.

Una vez establecido este punto de partida, pasaba a justificar la búsqueda de la simetría intentando casar la igualdad con el derecho a la diferencia, a partir de una argumentación en sintonía con lo planteado en capítulos anteriores, por ejemplo para el caso andaluz, y en pro de unos derechos al autogobierno que tendrían como meta sobre todo la redistribución de recursos y el equilibrio socio-económico en el conjunto de España:

Con el advenimiento de la Democracia, el derecho a ser diferente se ha asociado al derecho a recibir el mismo tratamiento institucional. Esta ha sido la realidad que los

---

<sup>873</sup> Además, en este documento se apuesta por utilizar el artículo 150 como una segunda vía de asignación de competencias «No solamente por razones de equilibrio en la redistribución del poder, sino para homogeneizar al máximo los procesos por razones funcionales, los socialistas defendemos la utilización de este instrumento constitucional, que permitirá una mayor igualación y simetría entre los procesos y disminuirá incluso la transitoria diferencia en los ritmos de uno y otro procedimiento», en Pedro SILVA: “La vía socialista...”, pp. 10-11.

socialistas hemos favorecido, porque es la existencia de diferencias lo que precisamente justifica la proclamación de igualdad<sup>874</sup>.

A partir de aquí, Triginer se encargaba de desarrollar cómo esa reivindicación de autogobierno surgía de forma coherente de una reivindicación igualitaria basada en un sentimiento lógico de «agravio comparativo», y para el que la solidaridad era la única y mejor cura. Establecido esto, y buscando un espacio frente al nacionalismo conservador que controlaba las instituciones en Euskadi y Cataluña capitalizando la Autonomía, añadía:

Por esas consideraciones somos contrarios a limitar nuestra actuación a nivel de región o nacionalidad. Eso solo sirve para polarizar la insatisfacción provocada por el «agravio comparativo» sin que se pueda ofrecer alternativas, que en todo caso se encuentran tanto en el propio ámbito de la «comunidad» como fuera de él, a través de la práctica de una auténtica solidaridad.

(...) La derecha tradicional, que ha dado su apoyo político al sistema capitalista, pretende traducir las justas aspiraciones de un pueblo en una política interclasista para diluir y mitigar la lucha contra el capitalismo<sup>875</sup>.

Se trataba de un discurso que proliferaría en territorios como el País Vasco y Cataluña, donde el PSC-PSOE y el PSE-PSOE tratarían de rechazar el nacionalismo que se esforzarían por tachar de burgués, aliado con el Gobierno en contra de los intereses de la clase obrera<sup>876</sup>. De hecho, a pesar del tono del documento, María Izquierdo consideraba oportuno reforzar algunos de estos puntos, y así se observaba en un esquema que redactó a partir de la ponencia de Triginer y del debate que surgió a raíz de esta. El borrador estaba concebido como posible introducción para un libro sobre

---

<sup>874</sup> José María TRIGINER: “Socialismo y Autonomía”, ABFPI, 75-E 4, p. 3.

<sup>875</sup> El texto concluía sin embargo con una referencia a la plurinacionalidad de España, intentando no eliminar del todo de la propuesta socialista esta vertiente del problema, que en cualquier caso integraba de nuevo con la concepción de Estado que predominaba en aquellas jornadas: «Por consiguiente, los socialistas tenemos una concepción autonómica que parte de una concepción del Estado, de su realidad plurinacional, de las desigualdades territoriales y de las alternativas que reclama la globalidad del Estado compatible con un proyecto político para cada nacionalidad o región», en *Ibid.*, José María TRIGINER: “Socialismo...”, pp. 6-7.

<sup>876</sup> Como ha estudiado Eider Landaberea: «Con el Estatuto de Gernika aprobado ya no era tan necesaria la actuación conjunta con EAJ-PNV. La puesta en valor de objetivos políticos socialistas, de la izquierda y la crítica al nacionalismo formaron parte de la nueva estrategia del PSE-PSOE en la búsqueda de un espacio político propio y diferenciado; y, al igual que UCD fue rival a batir a nivel estatal, EAJ-PNV lo fue a nivel del País Vasco», en Eider LANDABEREA: *Los “nosotros...”*, p. 157. Por otra parte, en Euskadi, esta crítica al Gobierno autonómico –que también se producía en Cataluña–, se complicaba con la conflictividad vivida a raíz del terrorismo de ETA, A modo de ejemplo, véase “El PNV no quiere luchar contra ETA”, en *El Socialista*, 162 (del 6 al 21 de julio de 1980).

el Estado de las Autonomías y para ser enviado al grupo de trabajo que se formó a partir de aquellas Jornadas sobre «Socialismo y Autonomía», formado por Joaquín Arango y Joan Prats<sup>877</sup>. En línea con la política posterior, y advirtiendo que el programa autonómico del PSOE quería dar «una respuesta coherente y posibilista», se dedicaban gran parte de los esfuerzos en encontrar dos polos sobre los que centrar sus críticas, presentando su modelo de Estado como el más equilibrado y conveniente para la construcción de la democracia española. En primer lugar, María Izquierdo recordaba que la crítica a los partidos nacionalistas debía ser lo «más agria posible, indicando lo limitado e insolidario de muchas de sus actuaciones» y caricaturizándolos como organizaciones que «sólo pretenden “arrancar” competencias». El otro foco de atención lo recibía el partido de Gobierno, al que acusaban por un lado de haber generalizado las autonomías en la etapa preautonómica con el café para todos<sup>878</sup>, y de no tener voluntad autonomista real. Por su parte, el planteamiento del PSOE tenía dos perspectivas, la primera la que implicaba la transformación democrática del Estado, acercando el poder al pueblo y corrigiendo los desequilibrios territoriales; y por otra la que suponía «un proyecto nacional o regional» para el que debían «liberarse de la acusación de encorsetamiento con los órganos centrales del Partido», subrayando que era un programa que se «distingue claramente de los proyectos de las burguesías nacionalistas, que da respuesta a la identidad cultural y características socioeconómicas de cada nac/reg.»<sup>879</sup>.

Es evidente que pese a mantener abierta una pugna que tenían intención de ganar respecto a la vía del artículo 151 y Andalucía, en líneas generales estaban trabajando por la consolidación del Estado a partir de una armonización y una ordenación territorial que asegurara la homogeneidad y la estabilidad, recelando cada vez más, por otra parte, de los nacionalismos, especialmente en Cataluña y el País Vasco. Como han defendido muchos autores y se ha señalado, a partir de las elecciones de marzo de 1980, la influencia de la sensibilidad más vasquista en el PSE perdió ascendencia –en línea con

---

<sup>877</sup> PSOE: “Grupos de trabajo...”

<sup>878</sup> En este mismo texto añadirían en la parte final la posibilidad de hacer «autocrítica de la etapa preautonómica, pero aprovechando para cargar el peso de la responsabilidad a los gobiernos de Suárez que nunca supieron asimilar el fenómeno autonómico», en María IZQUIERDO: Esquema sobre el Estado de las Autonomías (26 de julio de 1980), ABFPI, 75-E 4, p. 4. La crítica a esa generalización inicial se fue haciendo común sobre todo a partir de 1980 hasta los pactos de 1981, cuando remitió en gran medida. A pesar de esto nunca dejaron de defender tampoco que el modelo que deseaban no era un modelo asimétrico con algunas nacionalidades con autogobierno político y el resto sometidas a una mera descentralización administrativa, sino un modelo plenamente igualitario.

<sup>879</sup> *Ibid.*, pp. 1-5.

lo que venía sucediendo desde la aprobación del Estatuto o incluso desde la misma campaña de referéndum—, y lo mismo sucedió con la que el nacionalismo catalán había ejercido en el PSOE hasta la inesperada derrota de las autonómicas, pero veamos qué pasó en el seno del PSC-PSOE.

El PSC-PSOE se encontraba, desde la unificación, fragmentado entre los dos grandes bloques que se habían fusionado para dar origen al partido<sup>880</sup>. Esta división, que se vio reforzada tras los resultados electorales, culminó definitivamente en el II Congreso celebrado los días 4, 5 y 6 de julio de 1980<sup>881</sup>. Como señalara la Secretaría Federal de Organización del PSOE, en aquellos momentos se dio una situación que podría calificarse de «guerra civil» en el seno del partido, abandonando uno de los sectores el Congreso<sup>882</sup>. El enfrentamiento se produjo fundamentalmente entre los sectores llamados «unitarista» y «obrerista», aunque un tercer bloque estaba formado por los «críticos» que dieron soporte a los primeros. Los «unitaristas», liderados por Raimon Obiols, aglutinaban a los antiguos PSC-(C) y PSC-(R), y querían reforzar la

---

<sup>880</sup> Tras el éxito de la coalición «Socialistes de Catalunya», formada por el Partit dels Socialistes de Catalunya (Congrés) y la Federació catalana del PSOE, en las elecciones del 15 de junio de 1977, ambos partidos iniciaron un proceso de convergencia al que con posterioridad se uniría en una posición mas desventajosa el Partit dels Socialistes de Catalunya (Reagrupament). La Federación socialista entendió que la unificación debía realizarse a partir de la integración del PSC-C, estos por su parte, siempre tuvieron claro que esta debía dar lugar a un partido nuevo y soberano en Cataluña. Ante el bloqueo de las negociaciones, la Ejecutiva Federal del PSOE dejó clara su convicción sobre la necesidad de favorecer la convergencia, que era ya irreversible. Como consecuencia, el PSC-PSOE se constituyó en julio de 1978 como Partido federado y soberano en el ámbito catalán, aunque siempre de acuerdo con el programa aprobado por los socialistas de todo el Estado. Esto supuso, además, la disolución previa de los tres grupos que darían origen al nuevo partido, lo que disgustó enormemente a amplios sectores de la Federación socialista, un problema que se resolvería sólo en apariencia y resurgiría en el II Congreso de julio de 1980. Como consecuencia de lo anterior, se penalizó a la Ejecutiva que pactó el proceso y no fue aprobada su gestión, por lo que Josep M. Triguier no formó parte de la nueva dirección ejecutiva del PSC-PSOE, sustituido por Carlos Cigarrán quien ocupó el cargo de Secretario de Organización. Del PSC-C, Joan Reventós fue nombrado primer secretario y Eduardo Martín Toval y Raimon Obiols obtuvieron también un papel protagonista, sobre todo el primero. Véase, José Luis MARTÍN RAMOS: “Los primeros pasos del Partit del Socialistes de Catalunya. Del Partit Socialista de Catalunya al PSC (PSC-PSOE)”, en Abdón MATEOS (et. al.): *Transición y democracia. Los socialistas en España y Portugal*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2015, pp. 47-62; Gabriel COLOMÉ: *El Partit dels socialistes de Catalunya. Estructura, funcionament i electorat (1978-1984)*, Barcelona, Edicions 62, 1989, pp. 21-33; ÍD.: “El Partit dels Socialistes de Catalunya”, *Papers*, 33 (1990), pp. 75-102; o Joan FUSTER SOBREPÈRE: “El 15-J i els socialistes de Catalunya. Una historia que cal explicar”, en Joan FUSTER SOBREPÈRE (coord.): *Els socialistes de Catalunya i les eleccions del 15/juny/1977*, Barcelona, Fundació Rafael Campalans, 2007, pp. 13-21.

<sup>881</sup> Como indica Gabriel Colomé, se produjo entonces el primer gran antagonismo del PSC-PSOE, que tras la derrota electoral se había sumido en una profunda depresión. Pese a todo, esta no era la única causa, y a lo anterior podían sumarse los conflictos en la confección de la listas electorales entre el partido y la UGT, además de los desacuerdos por la pervivencia de la cuotas de representación pactadas para cada partido en el momento de la fusión, que el sector de Raimon Obiols quería eliminar —motivo por el cual ya había dimitido de la Ejecutiva en 1979—, en Gabriel COLOMÉ: “El Partit del socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)”, en *L’Avenç*, 228 (1998), p. 27.

<sup>882</sup> PSOE: “Secretaría Federal de Organización...”, p. 58



unidad del partido, acabando con la división entre los viejos sectores; además de intensificar la vertiente catalanista del partido, motivo por el que creían que se habían perdido las elecciones<sup>883</sup>. Por su parte, los «obreristas», encabezados por Carlos Cigarrán, procedían fundamentalmente de la antigua Federación socialista catalana, y entendían que el socialismo no era nacionalista y reclamaban que el partido volviera a ser una federación del PSOE como el resto.

El Congreso discurrió en un ambiente conflictivo y tenso desde el principio<sup>884</sup>, ya desde la votación de la composición de la mesa, que indicaba que los «unitaristas» tenían la mayoría. Como explica Enric Company, los «obreristas», que no lo esperaban, lo encajaron mal y abandonaron la sala para reunirse en otra durante todo el congreso, en un intento de que el PSOE decidiera dar marcha atrás en el proceso de unificación y volviera a la situación anterior de la fusión, reconociéndoles de nuevo como única federación socialista del PSOE en Cataluña<sup>885</sup>. Ni esto, ni otras reivindicaciones que querían imponer, como la dimisión de la mesa del congreso<sup>886</sup>, fueron atendidas, quedando marginados del curso del mismo como de la nueva Ejecutiva Nacional, que no incluiría ningún nombre de este sector, rompiéndose así, como ha dicho Gabriel Colomé, con el «equilibrio inestable» que habían heredado en el PSC desde su unificación. La unidad irreversible fue defendida por el Secretario General, que a pesar

---

<sup>883</sup> Obiols afirmaba: «Hay que continuar luchando por sacar adelante el socialismo en Cataluña como única esperanza de reconstrucción nacional y volver a recuperar el espacio político perdido en las últimas elecciones», *El Socialista*, 161 (8-14 de julio de 1980).

<sup>884</sup> Así lo describía la crónica del portavoz del PSC-PSOE, *L'Opinió Socialista*: «Les llargues hores d'espera que van passar-se els delegats, els grupets pels passadissos, el cansament manifestat en el son de molts delegats pels sillons del Palau on els rostres urellosos i cansats reflexant nits sense dormir, les llargues i ininterrompudes negociacions a totes bandes, serien els elements ambientals que, d'una manera progressiva i creixent, emmarcaren el desenvolupament del II Congrés del Partit del Socialistes», en *L'Opinió Socialista*, 37 (julio-agosto 1980).

<sup>885</sup> Enric COMPANYY: «Vints anys i quatre crisis, en *L'Avenç*, 228 (1998), p. 39. Así puede leerse en la crónica de *L'Opinió Socialista*: «La representació legitimada estava formada bàsicament per militants identificats amb la denominada correntia "unitària". A rel d'aquesta decisió un elevat nombre de delegats de la sala, tots ells identificats amb l'anomenada correntia "obrerista" s'aixecaren massivament i abandonaren el plenari, al qual ja no tornarien en tot el Congrés. Es produïren uns moments especialment tensos», en *L'Opinió Socialista*, 37...; Alejandro Quiroga indica que los obreristas, que eran el 35% de los delegados, abandonaron la sesión plenaria al grito de «PSOE, PSOE», y que los catalanistas, con el 65% respondieron gritando «Unión, Unión», en Alejandro Quiroga: «Coyunturas críticas...» p. 33.

<sup>886</sup> Así se narra en *L'Opinió Socialista* «dos representants dels delegats que havien abandonat el plenari i que des d'aleshores es trobaven reunits a la sala 6 del Palau, prengueren la paraula per exposar les seves condicions per tal de reincorporar-se a les sessions, condicions que passaven per la dimissió de la mesa del congrés i la reiniciació de la discussió de la gestió; la sessió plenària va continuar sense que cap delegat, considerant aquelles propostes, fes cap proposta formal sobre el tema. Seria aquella l'única vegada que els delegats tancats a la sala 6 farien una proposta al ple per reconsiderar la seva postura», en *L'Opinió Socialista*, 37...

de esta afirmación reconoció algunos errores y problemas en el seno del PSC<sup>887</sup>, pero si algo frenó el éxito de la intentona de los «obreristas» fue la actuación de la dirección del PSOE, en nombre de la cual actuó Carmen García Bloise, asegurando a este grupo que el Partido federal no reconocería otro partido socialista en Cataluña que el que saliera de aquel congreso<sup>888</sup>, algo que fue visible en las palabras que dirigió al mismo, como recogía la crónica de *L'Opinió Socialista*, en el *Especial Congrés*:

Carmen Garcia Bloise, en nom de l'Executiva Federal del PSOE s'adreçà en breus paraules al Congrés, saludant-lo en nom de «vuestra ejecutiva federal» i mostrant-se preocupada per la conflictivitat viscuda al Congrés. Les seues paraules foren un clam a la unitat afirmant que tots el socialistes de Catalunya havien d'estar «en este partido socialista»<sup>889</sup>.

De este modo, la crisis se saldó de forma positiva para el sector catalanista, a pesar de que esta no era la tendencia que se estaba imponiendo en el Partido, más acorde a los principios que expondría precisamente Triginer –del sector que provenía de la antigua Federación socialista catalana– en la ponencia comentada, en la que María Izquierdo incluso echaba de menos una crítica más ácida hacia el nacionalismo. Este era otro de los aspectos que habían distanciado a «unitaristas» y «obreristas», la actitud que debían adoptar frente a CiU, que tenía mucho que ver con cuál iba a ser el posicionamiento del PSC respecto al catalanismo. Los «obreristas» eran totalmente contrarios al pacto con el partido de Pujol, lo que condicionó la respuesta negativa de Reventós a la invitación del nuevo President de la Generalitat a formar parte del Gobierno, ante el temor de una división irremediable en el socialismo catalán<sup>890</sup>. Para

---

<sup>887</sup> Reventós declaraba: «ni el resultat electoral al Parlament, ni les dificultats en la coordinació entre partit i sindicat, ni un procés unitari inacabat, i un partit a mig fer, poden desvirtuar aquest fet cabdal: la unitat irreversible del socialistes de Catalunya», en *L'Opinió Socialista*, 37...

<sup>888</sup> Gabriel Colomé atribuye a Alfonso Guerra esta decisión, véase Gabriel COLOMÉ: “El Partit dels Socialistes Catalans (PSC-PSOE) hasta 1984”, ponencia presentada en el congreso *La reconstrucción del PSOE en la transición: la federalización del partido*, Fundación Pablo Iglesias-UNED, Madrid (21 de abril de 2016). Recuperado de internet (<https://vimeo.com/176566872>); mientras que para Alejandro Quiroga fue Felipe González quien se mostró decidido a evitar cualquier tipo de cisma en el PSC, en Alejandro Quiroga: “Coyunturas críticas...” p. 34.

<sup>889</sup> *L'Opinió Socialista*, 37...

<sup>890</sup> Así se extrae del testimonio del propio Reventós «Em penso que nosaltres socialistes, ja unificats, ja tots en una sola organització vam mostrar una immaduresa política a l'hora de decidir la política que volíem fer. Vam optar, per majoria del partit acabat de crear, per fer un front d'esquerres, i això ens va deixar sense marge de maniobra, l'endemà mateix de les eleccions, per acceptar la proposta de Pujol ja elegit president ens va fer de governar junts. He dit moltes vegades que aquell acord inicial va ser bastant inevitable, repeteixo, per la manca de maduresa del partit, perquè encara la cosa era molt recent», y añade poco después: «era partidari d'acceptar la proposta de Pujol, (...) però vaig tenir molt clar que si forçàvem la marxa de la decisió dintre del partit i acceptàvem la proposta de Jordi Pujol, se'ns trencava el partit», en conferencia transcrita en Joan REVENTÓS: “Joan Reventós”, en Rafael ARACIL y Antoni SEGURA

los «unionistas», sin embargo, se debían remarcar las diferencias con el nacionalismo conservador, pero enfatizando la existencia de un proyecto nacional, aunque propio de los trabajadores<sup>891</sup>, sin oponerse sistemáticamente al nuevo gobierno pero sin aparecer como cómplices del mismo. Así se establecía en la *Declaració Política* surgida de este congreso:

ha d'ésser un objectiu fonamental dels socialistes el manteniment diàfan de la contraposició entre la nostra alternativa i la que tractarà d'impulsar el nacionalisme de dreta. Per això, la política actual dels socialistes no pot ésser altra que la d'oposició clara, ferma i responsable.

Aunque señalando al mismo tiempo que:

els socialistes exercitarem aquesta tasca d'oposició, de pressió i d'impuls democràtic, conscients que la Generalitat estatutària ha de conquerir encara del govern de Madrid els instruments fonamentals d'autogovern (...), i que això implicarà uns determinats nivells d'acords i de solidaritats amb les forces polítiques catalanes que, des de plantejaments diferents, poden coincidir en una voluntat comú d'assentar unes bases operatives per l'autogovern.

Y concluyendo por tanto lo siguiente:

Però aquesta tasca, d'impuls i de control no serà de corresponsabilització en el govern, ni tampoc, òbviament, obstruccionista. Des de la nostra responsabilitat, en allò que coincideixi amb l'Executiu i en allò que el contradigui, impulsarem una política enèrgica al servei de la més ràpida instauració de les bases reals de l'autogovern del nostre poble<sup>892</sup>.

---

(ed.): *Memòria de la Transició a Espanya i a Catalunya*, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona-Centre d'Estudis Històrics Internacionals, 2000, p. 310. José Antonio González Casanova confirmaba este punto de vista, explicando a su vez que aquella oferta dividió al PSC, pero que la campaña de la derecha nacionalista había sido tan dura contra los socialistas, y que el apoyo de la patronal y de la burguesía ex franquista a CiU había sido tan descarado, que «una posible respuesta afirmativa habría tensado la aún frágil unidad socialista. El sector obrerista de origen foráneo vería como una traición de clase la cesión, por simple ambición de poder, del sector catalanista pequeñoburgués», en José Antonio González CASANOVA: *Memoria de un socialista indignado*, Barcelona, RBA, 2015, p.290.

<sup>891</sup> Joan Reventós, en su discurso de presentación de la gestión de la Comisión Ejecutiva, enunciaba que en el Parlamento de Cataluña las discrepancias con CiU debían centrarse «en que tenim un projecte nacional diferent» basado en «el poble treballador, partint de les arrels històriques de Catalunya i apuntant al futur basat en la realitat present», en *L'Opinió Socialista*, 37...

<sup>892</sup> PSC-PSOE: “Declaració Política”, en *El projecte nacional dels treballadors. II Congrés Socialista*, (Barcelona, 4-6 de julio de 1980), Arxiu del Partit del Socialistes de Catalunya (APSC), 9.2.56, pp. 54, 55 y 57.

La estrategia era la de hacer una oposición de izquierdas pero catalanista, que por tanto entendía el nacionalismo desde un prisma distinto al que podía tener CiU, pero que desde este punto de vista era más coherente con los intereses de los catalanes, también de los nacionalistas, pero no de los nacionalistas burgueses, preocupados en mantener sus privilegios de clase<sup>893</sup>. Insistían en hacer declaraciones que ofrecían titulares en los que eran los socialistas los realmente preocupados por alcanzar mayores competencias y transferencias<sup>894</sup>, criticando la «alianza» entre UCD i CiU, de la que decían no se estaban obteniendo recompensas para Cataluña sino para la clase que ambos partidos representaban<sup>895</sup>.

Nos encontramos ante una formulación del nacionalismo alternativa a la opción conservadora que buscaba diferenciarse de esta desde el plano de clase, pero que reafirmaba su proyecto de reconstrucción nacional socialista y catalanista<sup>896</sup>. Esto convertía al proyecto en excesivamente radical para los sectores más españolistas del

---

<sup>893</sup> En otro apartado de la declaración política incidían de nuevo en estos aspectos señalando que: «L’afirmació del nostre projecte i de la nostra política ha d’anar orientada, així mateix, a combatre i vèncer la mitificació del nacionalisme burgès, que amb la seva manipulació de la voluntat d’afirmació nacional popular, tractant de posar-la al servei dels interessos de classe de la burgesia, pot produir greus conseqüències en la nostra realitat nacional», en PSC-PSOE: “Declaració Política”..., p. 59.

<sup>894</sup> Aunque como ha señalado Borja de Riquer, en realidad se estaba produciendo una política de transferencias rápidas que era posible a causa de que el gobierno Suárez necesitaba los votos de CIU en las Cortes», en Borja DE RIQUER: “La configuración del sistema autonómico. El caso de Catalunya”, en Javier TUSELL y Álvaro SOTO (eds.): *Historia de la Transición (1975-1986)*, Madrid, Alianza Editorial, 1996, p. 487.

<sup>895</sup> Reventós criticaba el apoyo de Pujol en la Moción de confianza a Suárez «què és el que han pactat per donar aquesta confiança?», «El que ens preocupa és que hi hagi acords que puguem hipotecar la reconstrucció nacional de Catalunya», en *L’Opinió Socialista*, 39 (1ª quincena de octubre de 1980). La prensa de los socialistas catalanes, durante aquellos meses hasta el golpe de Estado del 23-F, estuvo llena de titulares como «Els “no-sucursalistes” no han volgut guanyar des de Catalunya»; «Un atemptat contra l’escola catalana», en *L’Opinió Socialista*, 40 (2ª quincena de octubre de 1980). «UCD y CiU: Zancadillas al paro y a las autonomías», en *L’Opinió Socialista*, 44 (2ª quincena de diciembre de 1980). «Pujol retalla l’Estatut negociant a “la baixa” les transferències», en *L’Opinió Socialista*, 46 (2ª quincena de gener de 1981).

<sup>896</sup> Convencidos de la necesidad de representar esta opción política, este discurso fue transmitido también en otros ámbitos para generar una mayor difusión, como el de la prensa escrita. En este caso, tenemos un ejemplo a través del artículo de opinión del Secretari de la Mesa del Parlament de Catalunya, Felip Lorda, escribiendo en contra del nacionalismo representado por CiU, que él considera «El nacionalisme lleig», centrado en la defensa de los intereses de la clase burguesa, a diferencia de la actitud de los socialistas catalanes: «En oposició a aquestes professions de fe patriòtic-burguesa, nosaltres, els socialistes, que primer som socialistes i després nacionalistes –com va dir en certa ocasió el company Reventós– hi situem la reconstrucció nacional de Catalunya inspirada en la utopia socialista, hegemonitzada, per tant, per la classe treballadora, al servei del reconeixement equitatiu i de l’afirmació de les identitats, individual i col·lectives, dels sers humans; amb un esperit eminentment solidari, decididament compromesos en el canvi de les estructures socio-econòmiques en el sentit d’assolir el màxim grau d’igualtat; orientats cap a la descentralització, la desconcentració, l’aproximació del poder al poble, la creació d’una nova cultura de tots i per a tots, cap a la profundització progressiva, en suma de la democràcia. Aquest és el decàleg d’un nacionalisme molt més autèntic i lliure que el d’aquells que, subjectes al poder econòmic i a la conservació de privilegis, en fan un simple instrument de la defensa de llurs interessos privats o de grup», en *L’Opinió Socialista*, 43 (1ª quincena de diciembre de 1980).

PSC que habían quedado en minoría, que a pesar de todo aceptarían el tono de las declaraciones políticas que surgieron del congreso<sup>897</sup>; pero también para la Ejecutiva Federal del PSOE, que pese a otorgarles su apoyo<sup>898</sup>, recelaban de unos pronunciamientos que desde luego no eran acordes con la línea oficial del partido, más similar a los de los «derrotados» en el II Congreso. La Secretaría de Organización, manifestaba en noviembre de 1980 la preocupación del partido por la situación interna del PSC-PSOE, pero también por la contradicción entre los postulados salidos del congreso federal y el catalán:

Después de la elección de la nueva CEN no parece que se haya solucionado totalmente la situación, si bien es cierto que hay intentos por parte de algunos compañeros de superar la crisis interna.

En cuanto a las resoluciones aprobadas en el Congreso, existen sustanciales diferencias con las aprobadas en el último Congreso Federal, fundamentalmente en las resoluciones sobre Estatutos<sup>899</sup>, Política y Sindical<sup>900</sup>.

Esta situación sería reconducida por la Secretaría Federal, y con el concurso de militantes del PSC, en la segunda crisis de 1981, cuestión que será abordada más adelante. Lo que se observaba de momento era la adopción de unas resoluciones con un alto contenido catalanista que llegaban incluso a afirmar el derecho de autodeterminación:

No hi ha socialisme sense plenitud de les llibertats nacionals, sense alliberament nacional; no hi ha socialisme si no hi ha superació de totes les formes d'opressió nacional.

Això exigeix en el cas de l'Estat espanyol el reconeixement del dret a l'autodeterminació de tots els pobles i nacionalitats dins la perspectiva d'un Estat Federal<sup>901</sup>.

---

<sup>897</sup> Carlos Cigarrán declaraba una vez se había clausurado el congreso: «El Congreso ha sido válidamente constituido y sus debates han estado presididos por la responsabilidad, aunque los resultados de las ponencias no son los que nosotros hubiésemos propuesto», en *El Socialista*, 161...

<sup>898</sup> En el futuro, el mismo Felipe González buscaría personalmente fórmulas para integrar a la corriente procedente de la antigua federación catalana del PSOE, en *El País*, 20 de septiembre de 1980.

<sup>899</sup> El Partit dels Socialistes de Catalunya se definía en sus Estatutos como «una organización política de clase, de masas, nacional y democrática» que se proponía como objetivos «la consecución de una sociedad sin clases, socialista y autogestionaria en la cual desaparezca cualquier signo de explotación y opresión de clase o nacional, y la reivindicación de la personalidad nacional de Catalunya», en PSC-PSOE: «Estatutos», en *El proyecto nacional de los trabajadores. II Congreso Socialista*, (Barcelona, 4-6 de julio de 1980), Arxiu del Partit del Socialistes de Catalunya (APSC), 9.2.56/01, p. 7.

<sup>900</sup> PSOE: «Secretaría Federal de Organización...», p. 58

Una autodeterminación que en cualquier caso se veía limitada a la perspectiva del Estado Federal, lo mismo que sucedió en el XXVIII Congreso, cuando como se ha defendido, los socialistas catalanes quisieron mantener el término de manera meramente simbólica<sup>902</sup>. El argumento era similar al que tradicionalmente había expresado la izquierda estatal al razonar la defensa de tal derecho. Aunque consideraban que era necesario luchar contra la opresión nacional, se definían ante todo como socialistas<sup>903</sup>, y creían que sólo en el marco estatal podían alcanzar su objetivo prioritario: «Davant la Catalunya explotada i oprimida que la burgesia i l'Estat pretenen mantenir, els socialistes lluitem per una Catalunya lliure, sense classes, en la qual hagi desaparegut qualsevol signe d'opressió o explotació. Naturalment, sols en un marc global de transició al socialisme a tota Espanya, podem complir els nostres objectius<sup>904</sup>.

Pero al mismo tiempo, cambiaban importantes matices, enfatizando que el espacio de lucha básico para los catalanes era el nacional, aunque ello no les impedía mantener muy presente la referencia española defendiendo la solidaridad territorial que esto implicaba:

La nostra és una estratègia nacional, adaptada a les peculiaritats de la lluita de classes a Catalunya, que té en compte, constantment, tots els condicionaments nacionals d'ordre econòmic, social, polític i cultural; i que, a més, parteix de la necessària solidaritat amb altres pobles i nacionalitats d'Espanya<sup>905</sup>.

Una solidaridad con otros pueblos y regiones que los catalanes estaban obligados a recordar al tener un porcentaje de población inmigrante especialmente representativo, cuyo electorado además, se había abstenido de forma acusada en los comicios del 20 de marzo de 1980, y que había repercutido muy negativamente en los resultados del PSC-PSOE<sup>906</sup>, lo que hacía que tuvieran en mente estas cuestiones cuando defendían el derecho de autodeterminación:

---

<sup>901</sup> en PSC-PSOE: "Declaració Política"..., p. 37.

<sup>902</sup> Alejandro Quiroga manifiesta: «nos encontramos aquí ante una autodeterminación un tanto limitada, o para ser exactos, ante una autodeterminación entendida como autogobierno», en "Coyunturas críticas...", p. 3.

<sup>903</sup> «Amb la unitat socialista els treballadors de Catalunya donàvem un pas decisiu pel conqueriment de la nostra pròpia unitat com a classe, per damunt de possibles diferències culturals, d'origen o de qualsevol altra mena», en PSC-PSOE: "Declaració Política"..., p. 7.

<sup>904</sup> *Ibid.*, p. 33.

<sup>905</sup> *Ibid.*, pp. 43-44.

<sup>906</sup> Sobre estas explicaban cuáles habían sido las posibles causas, que achacaban sobre todo a una estrategia poco decidida, a los problemas internos del partido o a los que tenían que ver con la relación

Una qüestió fonamental és la del lligam entre la lluita per la llibertat nacional i l'existència d'un fenomen d'immigració massiva a Catalunya de treballadors d'altres nacionalitats i regions de l'Estat espanyol, la majoria de parla castellana. (...) La lluita que el moviment obrer i popular porta a terme per les llibertats nacionals ha de considerar aquest fenomen d'una gran importància i ha de desenvolupar uns plantejaments que facin totalment impossible l'escissió en el sí de les classes populars i del proletariat per raons lingüístiques i de consciència nacional»

(...)

Tots junts formem un sol poble. Tots sofrim junts la mateixa sort de ciutadans d'una nació oprimida. I construirem una Catalunya socialista que serà lliure i solidària: ja que la manca de qualsevol d'aquestes tres caracteritzacions anul·laria automàticament les altres dues (...). Ja avui els socialistes de Catalunya som solidaris en la lluita amb els socialistes de tot l'Estat per l'articulació orgànica amb el Partit Federal.

A partir d'aquest plantejament, els socialistes que defensem el dret de l'autodeterminació en la perspectiva d'un Estat Federal desenvoluparem la nostra lluita per la alliberació nacional<sup>907</sup>.

---

entre la UGT y el PSC-PSOE, que en general les habían restado votos tanto entre el electorado preocupado por la cuestión nacional como por aquel al que fundamentalmente le importaban los problemas de clase, con una mención especial al votante del exiliado andaluz que habría escogido la opción del PSA: «Les eleccions al Parlament de Catalunya, amb uns resultats negatius per a nosaltres, signifiquen un toc d'atenció de la màxima importància» (...) La pèrdua de vots (via abstenció, ERC i PSA) ha estat conseqüència electoral d'aquesta manca d'esperit ofensiu, en el pla de l'organització, l'acció i la iniciativa política. En resum, pot dir-se que hem perdut credibilitat en el terreny de classe i en el terreny nacional i això, no pas com a conseqüència d'un projecte erroni, sinó com a conseqüència d'una aplicació feble i vacil·lant d'aquest projecte», en *Ibid.*, pp. 52-53. Goldie Shabad ha hecho recaer en la inmigración y su desinterés por la política nacional catalana gran parte del fracaso electoral socialista en los comicios autonómicos, aduciendo que entre 1979 y 1982: «el campo nacionalista no logró demasiado éxito en la comunidad inmigrante (...) los catalanes de primera generación y los nacidos fuera de la región propendían a oscilar entre apoyar a los partidos españoles (particularmente a los socialistas) en las elecciones nacionales y a abstenerse en las regionales. El 33 por cien de los votantes inmigrantes del PSC en 1979 se abstuvo en 1980 (...); y el 43 por cien de los votantes del PSC-PSOE en 1982 dijo haberse abstenido en 1980», Goldie SHABAD: "Las elecciones de 1982 y las autonomías", en Juan José LINZ, José R. MONTERO: Crisis y cambio, electores y partidos en la España de los ochenta, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1986, pp. 571-572. Andrew Dowling sin embargo, aunque reconoce que los que más sufrieron la abstención fueron los socialistas, no cree que haya una correlación directa con la inmigración, «ja que el PSUC no s'hi va veure gaire afectat, sinó que va mantenir una base electoral molt fidel», Andrew DOWLING: La reconstrucció nacional de Catalunya, 1939-2012, Barcelona, Psado & Presente, 2013, p. 236. Aunque en relación a lo anterior convendría no perder de vista que los votantes inmigrantes del PSUC, al menos en las elecciones de 1977, como ha demostrado Carlota Solé, se sentían —a diferencia de los del PSC-PSOE— mucho más solidarizados con la cuestión catalana, lo que podría impulsar una mayor movilización en las elecciones autonómicas, Carlota SOLÉ: *La integración socio-cultural de los inmigrantes en Cataluña*, Madrid, Fundación Juan March, 1981, pp. 29-30.

<sup>907</sup> *Ibid.*, pp. 38-39.

Otro matiz que diferenciaba este programa político del que presentaba el PSOE era su concepción del federalismo. Como se ha visto, los socialistas a nivel estatal se referían a él, casi desde el inicio de la Transición, como una aspiración para el futuro. Esto se había acentuado enormemente desde la promulgación de la Constitución, pero en el PSC-PSOE, aunque sin reclamar esta forma de Estado para un futuro inmediato, sí la demandaban a medio plazo, con una fuerza inusual para el conjunto del socialismo:

El socialisme es construeix a partir d'una realitat nacional concreta, en el nostre cas la realitat nacional catalana. (...) La nostra alternativa, en aquest sentit, exigeix el necessari aprofundiment de l'autonomia, a partir de l'actual Constitució i de l'Estatut; però la perspectiva a mig termini que ens plantejem va molt més enllà, en una perspectiva federalista. Una vegada assolits els objectius autonòmics fixats per l'actual etapa, els socialistes propugnarem la constitució de la Generalitat como a Estat federal amb les altres nacionalitats i regions d'Espanya, en el marc d'una república federal.<sup>908</sup>

## **2. A la espera de Andalucía**

Tenemos hasta entonces un PSOE, que a pesar de ser heterogéneo como demostraba la situación del PSC-PSOE, proyectaba a grandes rasgos un Estado en el que se imponía la racionalización del proceso autonómico, para lo que sabía que el pacto con UCD era necesario, como también lo sabía este partido, que inauguraba en septiembre una nueva etapa con la remodelación del Gobierno y la Moción de confianza. Paradójicamente, uno de los mayores responsables del bloqueo autonómico y del distanciamiento que en esta materia se había producido entre el Gobierno y el primer partido de la oposición, Rodolfo Martín Villa, iba a ser el encargado de reconducir las aguas como nuevo Ministro de Administración territorial, con Manuel Broseta como Secretario de Estado para las Autonomías.

El primer gran hito del nuevo gabinete fue el de enfrentarse a la Moción de confianza, presentada el 16 de septiembre por el Presidente del Gobierno para obtener una mayor estabilidad en su gestión, algo que resultaba necesario en un momento en que Adolfo Suárez se encontraba cuestionado, fuera y dentro de su partido<sup>909</sup>. Le preocupaban fundamentalmente dos temas: la crisis económica y la configuración del Estado de las Autonomías. De nuevo, igual que había sucedido durante la Moción de

---

<sup>908</sup> *Ibid.*, p. 44.

<sup>909</sup> Ganaron la Moción, con 180 diputados de UCD, el PSA y Minoría Catalana; y 165 en contra del PSOE, PCE, PNV y Coalición Democrática.



censura, el grueso del debate sobre autonomías fue dedicado al caso andaluz, en concreto sobre cómo desbloquear la situación para solucionar el resultado negativo de Almería. En el debate se hizo evidente el pacto entre Suárez y Rojas Marcos para dar salida a esta autonomía sin tener que modificar la ley sobre las Modalidades de Referéndum a través del artículo 144, evitando así la victoria simbólica del PSOE en esta región. El PSA votó a favor de tal moción, interpretando un guión que algunos ridiculizaron como «la escena del balcón», una actuación entre el Presidente del Gobierno y el líder del Partido andalucista que denotaba la existencia de un acuerdo previo<sup>910</sup>. En un artículo de opinión titulado «Los costes de la confianza», Gregorio Peces Barba dedicaba una buena parte de su disertación a este tema, demostrando la postura inamovible del partido en esta cuestión, que ya había dejado clara, por otra parte, Felipe González en el debate. Peces Barba argumentaba lo siguiente:

Por fin, hay un tema, además de otros que ignoremos por secretos<sup>911</sup>, que supone un coste muy elevado para la democracia española y para la construcción del Estado de las autonomías. Me refiero al extraño pacto para conducir la autonomía andaluza por la vía del artículo 144 entre UCD y el grupo parlamentario del señor Rojas Marcos.

Este hecho es grave, (...) afirmar que eso es una solución para Andalucía es engañarla y llevarla a la vía del 143, lo que es grave porque contradice la voluntad claramente expresada del pueblo andaluz. (...) Todo esto sucede porque UCD no quiere reconocer su error y modificar la Ley de Referéndum, repitiendo la consulta de Almería, que es la

---

<sup>910</sup> Carlos Rosado, nombrado Secretario General de la UCD en Andalucía el 2 de julio de 1980, narra cómo le comunicó Adolfo Suárez este pacto, junto a otros interesados, en una reunión en casa de Pérez Miyares el 14 de septiembre. A aquella reunió, según cuenta, acudieron él mismo, Soledad Becerril, Jaime García Añoveros, Landelino Lavilla y Rodolfo Martín Villa. Como indica «Este último nos hace una dramática descripción de la situación andaluza y reconoce como cierto el riesgo de radicalización advertido por el Presidente Escuredo. Reconoce que la vía del 143 está muerta y que la fórmula del 144 constituye una simple cobertura formal para no admitir de forma palmaria que el Partido Socialista y otros pudieran aparecer como los artífices del triunfo de la vía del 151, (...). Nos describe las conversaciones mantenidas con Rojas Marcos en las que éste reconoce que el triunfo socialista les perjudicaba de manera notable y ponía en peligro la consolidación de la opción nacionalista que ellos representaban. Nos informa de que está a punto de cerrarse un pacto con el PSA por el que pedían importantes cesiones políticas y cuya contrapartida era el apoyo de los nacionalistas a la moción de confianza de Suárez. Paseando Martín Villa (...), fue elaborando las preguntas que Rojas Marcos debía hacerle en el Parlamento a Suárez a cuya respuesta positiva de éste, el PSA anunciaría el voto favorable a la moción», en Carlos ROSADO: «La UCD...», pp. 186-187.

<sup>911</sup> Aquí podría estar haciendo una referencia velada, una vez más, a los pactos con CiU, que también apoyó la Moción de confianza. De hecho, en la crónica de *El Socialista* sobre esta se expresaban estas inquietudes cuando hacían referencia que «al pueblo español no se la han explicado los pactos Suárez-PSA y Suárez-CiU. Su carácter y su coste», en *El Socialista*, 172 (del 24 al 30 de septiembre de 1979).

vía más sencilla, más clara y más constitucional, y encuentra un inexplicable partenaire en el grupo del señor Rojas Marcos<sup>912</sup>.

En cuanto al debate, el Secretario General del Partido Socialista, negaba la posibilidad de alcanzar las mismas competencias por la vía del 144 y la del 151<sup>913</sup>, a pesar de que como se está comprobando, la igualdad competencial al final del proceso era la opción preferida por los socialistas, independientemente de la vía elegida. Para legitimar la necesidad de que Andalucía accediese a la autonomía por el artículo 151, González hacía referencia a la «soberanía parcial», no «en el sentido independentista posible del término, que en esa tentación no vamos a caer; soberanía del pueblo andaluz y respeto para él»<sup>914</sup>. Otro punto con un tratamiento preferente fue el que atendía a las consideraciones sobre la autonomía gallega, con visos de pronta solución, y el reconocimiento del parlamentario socialista a la rectificación de UCD, que podía llevar a buen puerto las negociaciones entre las fuerzas políticas gallegas<sup>915</sup>.

Por otra parte, González hacía otra crítica a la inexistencia de políticas claras para el resto de los procesos bloqueados<sup>916</sup>: «Se ha hablado de dos casos autonómicos (no se ha hablado de otros que también habría que haber tocado)», y añadía que la solución del artículo 144 violentaba la Constitución, a diferencia de lo que sucedía con la modificación de la Ley de Modalidades de Referéndum. En este punto, se quejaba de que el problema andaluz se tratara de forma independiente en lugar de a partir de una estrategia general que sirviera para el resto de procesos bloqueados, ya que el artículo

---

<sup>912</sup> *Ibid.* Titulares como el de *ABC Sevilla*, «Los votos andaluces, decisivos para la victoria de Suárez», demostraban el protagonismo que adquirió el PSA en esta Moción, en *ABC Sevilla*, 19 de septiembre de 1980. Otros como «Alejandro Judas-Marcos», evidenciaban además la rivalidad entre PSOE y PSA por esta cuestión, en *El Socialista*, 172...

<sup>913</sup> «Ahora se dice: “Por la vía del 144 se puede llegar a las mismas competencias y a las mismas instituciones, con los mismos procedimientos del 151”. Y todo el mundo sabe que eso no es verdad: todo el mundo lo sabe», en *Diario de sesiones del Congreso de los Diputados*, nº 111, 18 de septiembre de 1980, p. 7186.

<sup>914</sup> Y añadía: «Soberanía parcial para decidir su propio destino estatutario; no digo soberanía. Y esa soberanía dice que quiere el artículo 151. Que me perdonen, no cabe interpretación, dice que quiere el 151», en *Ibid.*

<sup>915</sup> «En el caso gallego debo reconocer, y no me duelen prendas, que se ha hecho una rectificación política que puede tener importancia; que puede tener importancia, digo; no digo que va a tener importancia», en *Ibid.*, p. 7185. En un sentido similar se expresaba el Secretario General del Partido Socialista de Galicia, Francisco Vázquez, que manifestó a *El País*, «su satisfacción por la forma en que el presidente del Gobierno aludió a la situación del Estatuto de Autonomía para Galicia», en *El País*, 17 de septiembre de 1980.

<sup>916</sup> Una crítica a la que se dio más importancia en la prensa del partido de la que tuvo en espacio y en fuerza real en el discurso de González, véanse los artículos dedicados a hacer las crónicas del debate, en *El Socialista*, 172...

144 podría querer ser aplicado en otros territorios, algo que podría tener consecuencias inesperadas:

¿Por qué introducir aquí un elemento nuevo, difícil de apreciar que -¿por qué no?- nuestros compañeros y amigos de Aragón pudieran reclamar para su proceso de autonomía, también bloqueado? ¿Por qué no hablar del bloqueo de la autonomía del País Valenciano? Estamos abriendo una nueva fuga que no sabemos a dónde va a conducirnos. ¿Cómo estamos tratando el problema autonómico? ¿En serie? Hay que tratarlos en serio partiendo de estos dos principios: primero: respeto a la voluntad popular; segundo, respeto a la Constitución<sup>917</sup>.

Podría pensarse a partir de estas palabras que lo que se estaba proponiendo era una solución que pudiera aplicarse a Andalucía y al resto de los territorios del Estado, respetando la Constitución y la soberanía de todas las nacionalidades y regiones; una solución que partía de la modificación de la Ley de Modalidades de Referéndum, lo que haría viable que en los lugares en los que el proceso estaba bloqueado se pudiera avanzar por la vía del 151. Pero conciliar aquellos principios con la imposición de una solución planificada que armonizara las bases para la construcción del conjunto del Estado de las Autonomías, como también estaba demandando, no era tarea fácil. Y además, como sabemos, en realidad no estaban apostando por permitir la vía del 151 en casi ningún territorio más que en el andaluz, y quizá todavía en el del País Valenciano. Así que es mucho más probable que aquellas palabras formaran parte de un plan para modificar aquella ley pensando sólo en salvar la situación andaluza y que circunstancialmente, especularan con la posibilidad de reservarse esta opción para aplicarla en algún otro caso aislado donde no consiguieran lograr el objetivo que ya se habían marcado sin complejos en julio: el de impulsar en cada comunidad la voluntad de concurrir a la autonomía por el 143 como medio de alcanzar la homogeneidad y la igualdad competencial<sup>918</sup>.

---

<sup>917</sup> *Diario de sesiones del Congreso de los Diputados*, nº 111..., pp. 7185-7186.

<sup>918</sup> Como se ha visto, desde hacía meses se planteaba a nivel interno la conveniencia de dejar a un lado la problemática de las vías, y exceptuando el País Valenciano, en todos los casos de bloqueo se había sugerido de forma explícita que la importancia no debía recaer en este punto. El caso de Canarias, es paradigmático en este sentido, aunque las posiciones de las negociaciones fueran fluctuando, se mantenían abiertas durante este período y no dependían de la vía de acceso. Por ejemplo, el informe de la Secretaría Federal de Organización de noviembre de 1980 que hacía balance de un año de gestión, se refería a este tema en los siguientes términos: «La retirada del Partido de la Junta Preautonómica de Canarias ha sido positivo ya que se había llegado a un punto donde podrían surgir graves enfrentamientos

Como posteriormente ha defendido Luis Fajardo Spinola, aunque aparentemente en aquel debate las posturas entre UCD y PSOE pudieran aparecer como muy alejadas, sobre todo por la contienda que mantenían por Andalucía, la realidad era que «ya tenían elaboradas sus posiciones, altamente coincidentes»<sup>919</sup>. A estas alturas, nos encontramos ante un Felipe que, como narraban en el diario *ABC*, elaboró un discurso «alegre en la forma y moderado en el fondo. Felipe, por decirlo en una palabra estuvo en plan socialdemócrata, como si de un Fernández Ordóñez se tratara»<sup>920</sup>. Las posturas entre ambos partidos respecto al tema autonómico, que era visto como una cuestión de Estado, eran cada vez más coincidentes, y no sólo en los debates internos. De hecho, en documentos elaborados por el Partido Socialista para analizar la política autonómica de UCD presentada en la moción de confianza, se ofrecía un titular repetido como un mantra con el que se descalificaba la acción del Gobierno: «DES-CONFIANZA»<sup>921</sup>, pero no se exhibía un programa con el que este no pudiera pactar, insistiendo de nuevo en la voluntad de los socialistas desde hacía meses en elaborar un programa que contemplara «LA TOTALIDAD DEL MAPA AUTONÓMICO», que en el fondo no podía suponer más que una racionalización, también en las vías, con contadas excepciones<sup>922</sup>. Este tipo de escenificaciones acentuando las diferencias y buscando el enfrentamiento cuando las posiciones estaban cada vez más cerca, seguramente se debían a la necesidad de los socialistas de rentabilizar su estrategia de oposición y posiblemente también, para situarse en una posición ventajosa en las negociaciones que debían resolver los procesos de Galicia y fundamentalmente de Andalucía<sup>923</sup>.

---

con la UCD, lo cual llevaría a un deterioro de la política autonómica. Hoy parece ser que los motivos que obligaron al abandono han desaparecido y se ve la posibilidad de que el partido vuelva a estar presente en la Junta Pre-autonómica», en PSOE: «Secretaría Federal de Organización...», p.33. Incluso en los momentos en que las negociaciones sufrían sus momentos más bajos, cuando los socialistas declaraban que habían fracasado, la vía no era el obstáculo, así se observaba en las declaraciones de Saavedra publicadas en *El País* el 21 de septiembre: «Sobre la adopción del artículo 144 de la Constitución para que Canarias acceda a la autonomía, el secretario general socialista dijo que admitía esa posibilidad, aunque agregó que tendría que ser UCD la que pidiera al Gobierno que el contenido y desarrollo del Estatuto pasara por esa vía», y se añadía que había manifestado que «lo más importante es el contenido del Estatuto, ya que el tema de la vía del mismo podrá ser tratado en debates posteriores», en *El País*, 21 de septiembre de 1980.

<sup>919</sup> Luis FAJARDO: ¿*Hacia otro modelo...*, p. 104.

<sup>920</sup> *ABC Sevilla*, 19 de septiembre de 1980.

<sup>921</sup> Se negaba la credibilidad de este, sobre todo al incorporar como Ministro de Administración Territorial a Martín Villa, responsable del frenazo autonómico en enero de 1980, conocido también como el «martinvillazo».

<sup>922</sup> Secretaría de Política Autonómica-PSOE: «Informes Secretaría ante voto de confianza 16/9/1980», ABFPI, 75-G 3.

<sup>923</sup> Este «mantra» de la «desconfianza» ante el cambio de gabinete y sobre la política autonómica del Gobierno se puede encontrar también en su órgano de prensa, mientras se estaban produciendo los acercamientos, véase por ejemplo *El Socialista*, 171 (del 17 al 23 de septiembre de 1980).

Existían mimbres suficientes para un pacto, que Martín Villa se encargó de propiciar desde septiembre. El nuevo gabinete buscaba un acuerdo para igualar los niveles de autonomía de todas las comunidades, como se manifestó en el Pleno del Senado cuando el nuevo Ministro de Administración Territorial afirmó, apenas un par de semanas después de su nombramiento, que quería dotar a todas las comunidades de los máximos techos de competencias fuera cual fuese el procedimiento por el que accedieran a la autonomía, reconociendo además las equivocaciones que todos los partidos, pero sobre todo el Gobierno, habían cometido, haciendo una apelación al consenso de todas las fuerzas políticas<sup>924</sup>. Como ha indicado Martín Villa en sus memorias:

Nada más incorporarme a la Administración Territorial ya habíamos hecho los primeros intentos de pactos autonómicos. El presidente Suárez y yo mantuvimos conversaciones con AP y PCE en las que afloró un acuerdo general. La actitud del PSOE no difería mucho de la nuestra, pero lo cierto es que los socialistas se encontraban entonces absolutamente focalizados sobre el problema autonómico de Andalucía<sup>925</sup>.

Aunque el clima no fuera de total conciliación, pues como venimos defendiendo, el PSOE necesitaba seguir presionando con la cuestión de Andalucía, Felipe González contestó afirmativamente a la propuesta del Gobierno de iniciar conversaciones para encontrar soluciones al problema autonómico y particularmente al andaluz. Como informara *El País*, la carta de respuesta exigía que las conversaciones se basaran «en el

---

<sup>924</sup> Las declaraciones que se recogían en *El País*, bien podrían estar realizadas por el Partido Socialista: «El Gobierno desea la igualdad de todas las comunidades autónomas, sean cuales sean las vías de acceso a la autonomía, e incluso está dispuesto a transferir competencias a los entes autónomos, buscando la funcionalidad. El techo competencial será el mismo para todos, salvando las excepciones causadas por las diferencias de lengua, y ello no sólo por un afán de igualdad, sino porque la gobernabilidad del Estado sólo será posible mediante la homogeneidad de las instituciones y servicios. (...) El proceso autonómico debe generalizarse y estamos dispuestos a que así sea. La situación de interinidad debe terminar en el más breve plazo posible, y por eso estamos dispuestos a que todo culmine lo más tarde a principios de 1983. Se han magnificado las diferencias entre las vías del 151 y el 143, pero más importantes que esto son las instituciones y las competencias. Respecto a las primeras, tengo que decir que no hay diferencias entre ellas, ya que el 151 obliga a que haya gobierno autónomo, asamblea y tribunal superior de justicia, y el 143 no lo prohíbe. El Gobierno entiende que en general debe haber gobierno y asamblea legislativa para todas las comunidades, mientras el tribunal dependerá de las características de cada región, si bien no se pondrán especiales dificultades. (...) En cuanto a competencias, el 143 señala unas, y el 151, otras, pero la Constitución permite transferir competencias propias del 151 a las autonomías elaboradas por el 143, aun sin esperar los cinco años que señala la Constitución. (...) El procedimiento entiendo que es lo menos importante, pero si todas las comunidades optaran por la vía del 151, hasta 1983 saldríamos a una consulta popular cada veinte días, aproximadamente. ¿Alguien con responsabilidad puede pedir esto? Esta fue la razón de UCD para optar por la vía del 143, aunque tal vez no nos explicamos bien, y también pensábamos en la necesidad de evitar negociaciones unilaterales con cada comunidad, que habrían impedido la homogeneidad pretendida», en *El país*, 24 de septiembre de 1980.

<sup>925</sup> Rodolfo MARTÍN VILLA: *Al servicio...*, p. 193.

principio repetidamente expuesto por el PSOE: respecto a la voluntad de cada comunidad y a la Constitución y exigencia de que la solución en cada caso concreto sea protagonizada por el ente autónomo y se respete la voluntad popular expresada en cada región»<sup>926</sup>. Aunque una vez más, debemos recordar que el PSOE se estaba esforzando decididamente por no hacer de la vía de acceso, excepto en Andalucía, *casus belli*. El caso gallego, por su parte, estaba en vías de enmendarse, y tan sólo dos días después de este anuncio, se firmaba entre el PSOE, UCD, PCE, CD, PCG y PG, el llamado «Pacto del Hostal», por el que Galicia tendría una autonomía comparable a la de Cataluña<sup>927</sup>, y a partir del cual, como indica Emilio Attard, se convocaría una Comisión Constitucional para el día 29 de octubre, «fecha en que, como estaba previsto, unánimemente, sin debatir, se votaron las modificaciones acordadas de consuno», permitiéndose así que UCD rectificara «transcurrido casi un año de duro desgaste, con pérdida de nuestro crédito político»<sup>928</sup>. El referéndum fue convocado para el 21 de diciembre de 1980<sup>929</sup>.

En los días previos a la reunión entre González y Suárez, programada para el 1 de octubre de 1980, se fue resolviendo la situación gallega; se fue reforzando la opción elegida por los socialistas por la vía del 151 para Andalucía; y excepto en el País Valenciano, se fue evidenciando la intención de los socialistas de reconducir la «voluntad popular» del resto de territorios bloqueados por la 143, sin renunciar por ello a la autonomía plena, pese a que siguieran enviando mensajes contradictorios que se publicaban, por ejemplo, en la prensa de su partido<sup>930</sup>. Esto es especialmente visible a través del documento elaborado por la Secretaría de Política Autonómica del 30 de septiembre: «Estado de los diferentes procesos de acceso a la autonomía». Sobre Galicia se informaba de que habían «concluido las negociaciones sobre la modificación del

---

<sup>926</sup> *El País*, 27 de septiembre de 1980.

<sup>927</sup> Como se indica en el libro de Pere Anguera, José Luis de la Granja y Justo Beramendi: «La situación se mantuvo bloqueada hasta el verano de 1980 en que Suárez comprendió que el ensayo había fracasado: por unas razones u otras, la mayoría de las fuerzas políticas y sociales gallegas no aceptaban su opción. Empecinarse en ella implicaba perder cada día más apoyos y que los ganasen otros, sobre todo ahora que Alianza Popular se apuntaba a una autonomía de primera para Galicia. Una vez que UCD dio su brazo a torcer, el acuerdo fue fácil», en José Luis DE LA GRANJA, Justo BERAMENDI y Pere ANGUERA: *La España de los nacionalismos...*, pp. 241-242.

<sup>928</sup> Emilio ATTARD: *Vida y muerte...*, p. 99.

<sup>929</sup> La movilización tras todos los obstáculos que se pusieron a la autonomía gallega fue enormemente baja, sólo votó un 26, 12% del censo electoral. Entre los que acudieron a la cita, un 71,06% lo hizo afirmativamente, en *El Socialista*, 185 (24 al 30 de diciembre de 1980).

<sup>930</sup> María Izquierdo concedió una entrevista a *El Socialista* un día después de la invitación de Suárez a González para conversar sobre el tema autonómico. Cuando hubo de referirse a la posición del partido ante los procesos del País Valenciano, Canarias, Aragón y Baleares, defendió que «los socialistas siguen manteniendo sus posiciones de defensa al artículo ciento cincuenta y uno», en *El Socialista*, 173 (del 1 al 7 de octubre de 1980).

Estatuto»; y sobre Andalucía se reafirmaban en que la solución «que propugnamos los socialistas consiste en la nueva presentación de la proposición de ley de la citada L.O. de Referéndum»<sup>931</sup>. En cuanto a Canarias, se explicaba que en los últimos intentos de negociación a lo largo del mes de septiembre no parecía existir posibilidad de convergencia, pero la causa no era en ningún caso la vía, sino que el mayor escollo se encontraba en el sistema electoral:

La UCD (...) ha convocado nuevamente dicha Asamblea para el próximo 10 de octubre en un intento de lograr el apoyo socialista (y, secundariamente, de las demás fuerzas políticas autonomistas) al Proyecto de Estatuto antes de elevarlo a las Cortes Generales para su tramitación como L.O.

Los socialistas, de no cambiarse la fórmula electoral del actual texto (se acepta el que se tramite el P. Estatuto por la vía 143) acudirían el día 10 para votar no (...).

(Por otra parte, la UCD ha dado de plazo hasta el 15 de octubre para que los socialistas se incorporen a la Junta de Canarias, incorporación que –se logre o no el acuerdo sobre el Estatuto– es bastante posible) [s.o.]<sup>932</sup>.

En Aragón, por su parte, la vía del 143 también se mantenía abierta por los socialistas, si se daban garantías de que en el plazo de cinco años se accedería a los mismos techos que por la del 151, y si se aseguraba que habría desde el inicio una Asamblea Legislativa elegida con criterios de proporcionalidad corregida y un Consejo de Gobierno. Una vez más, la discusión se encontraba en el tipo de autonomía y no en

---

<sup>931</sup> Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Estado de los diferentes procesos de acceso a la autonomía” (30 de septiembre de 1980), ABFPI, 75-B 9, pp. 1 y 4.

<sup>932</sup> *Ibid.*, p. 5. Ni siquiera en la prensa se planteaba la cuestión de la 151, y en todo caso, los socialistas hacían referencias a «no descartar» la del 144, en *El País*, 30 de septiembre de 1980. Después de esto, una reunión entre UCD, PSOE y PCE provocó que el pleno anunciado para el día 10 fuera desconvocado, como informaba *El País*, a raíz de un nuevo giro en las conversaciones que permitieron que tras la inesperada reunión se entrara en «una fase de desbloqueo». El motivo de esta prórroga, contaban, residía en la confianza de que el PSOE entrara pronto en la Junta de Canarias. En la reunión, como detallaba el periódico, había prevalecido la idea de considerar al Estatuto canario como un problema de Estado, «por lo que se haría necesario estudiar un procedimiento especial para que el mismo se iguale al nivel de los estatutos vasco y catalán mediante una vía específica que permita su encaje constitucional. Este laberinto jurídico se ha planteado al haber declarado cerrada la vía del artículo 151 el Ministerio de Administración Territorial y estar en el deseo de las fuerzas políticas canarias la consecución de las máximas competencias autonómicas», y añadían que el Estatuto debería ser afrontado con un criterio de excepcionalidad, cuestión con la que los socialistas estaban de acuerdo, en *El País*, 5 de octubre de 1980. Por otra parte, según Victorino López, a lo largo de 1980 la UCD se decantó por el 143 pero con una Ley Orgánica en paralelo para alcanzar el más alto nivel competencial, en Victorino LÓPEZ: *La cuestión territorial en la historia del socialismo español: debate teórico y estrategias políticas (1879-2011)*, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2011. pp. 206-207.

«los procedimientos»<sup>933</sup>. Para Baleares, donde no se había emprendido el proceso de iniciativa autonómica, la Federación Socialista Balear, se negaba a comenzar hasta que no se obtuvieran «las debidas garantías de obtener un Estatuto con un techo competencial y un sistema electoral aceptable, siendo así se aceptaría adherirse a la vía 143»<sup>934</sup>.

El caso del País Valenciano era diferente, ya que a pesar de encontrarse en la misma situación legal que Canarias, en este territorio la posibilidad de renunciar al 151 no había sido enunciada de forma explícita, ni siquiera en aquellas reuniones internas de la Secretaría de Política Autonómica, en las que esto había sucedido con los demás territorios bloqueados. Esto no significa que la Ejecutiva Federal hubiera decidido mantenerse inflexible en las posiciones previas al bloqueo, más bien parece que no existía un criterio definido. Ejemplo de esto es el documento que venimos comentando, en el que se enunciaban las posibilidades que todavía seguían abiertas para defender la vía de las máximas competencias en el menor tiempo posible, pero en el que no se aclaraba en ningún punto cuál era la posición a la que se acogía del partido:

El proceso está detenido al considerar UCD que no se han obtenido los mínimos constitucionales por ambas vías de acceso a la autonomía. La diferencia de la situación anteriormente descrita en Aragón es que antes de publicarse la L.O de Referéndum (...) ya se habían superado las tres cuartas partes de los Ayuntamientos y la mayoría del censo electoral de los que se habían pronunciado por la autonomía en cada provincia. (...)

Existe un dictamen emitido por la Facultad de Derecho de Valencia, en el sentido de que con los Ayuntamientos que explicitaron su pronunciamiento por la vía 151 y con los que no indicaron la vía autonómica en dicho pronunciamiento, se han cumplido los mínimos previstos en la Constitución para seguir por la vía 151, y al ser la L.O. de Referéndum posterior al cumplimiento de estos mínimos, no puede aplicarse retroactivamente y por tanto se debe celebrar el referéndum de iniciativa autonómica, al igual que se hizo en Andalucía.

---

<sup>933</sup> Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Estado de los diferentes...”, p. 6. UCD había prometido recientemente, como se explicaba en *El País*, «las tres instituciones básicas para la estructuración de una autonomía plena: Asamblea legislativa, Consejo de Gobierno y Tribunal Superior de Justicia» y que «las competencias que reciba la comunidad autónoma aragonesa podrán alcanzar el mismo nivel que las que obtengan otras nacionalidades o regiones», en *El País*, 27 de septiembre de 1980. Además, *El País* informaba de que el 23 de abril, el Secretario General de los socialistas aragoneses, Santiago Marraco, había admitido a este periódico que negociarían una vía que respetase el mismo techo constitucional que la del 151, en *El País*, 26 de octubre de 1980.

<sup>934</sup> Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Estado de los diferentes...”, p. 17.



(...)

Actualmente la UCD dice estar en disposición de iniciar de nuevo las negociaciones para llegar a un acuerdo<sup>935</sup>.

Se trataba de una descripción de los hechos y de las posiciones de otros grupos e instituciones, ni una palabra de cuál era la opción defendida por el PSOE o el PSPV-PSOE, seguramente a la espera de una redefinición a partir de la marcha de los acontecimientos<sup>936</sup>. Y de momento, esta marcha tenía que ver sobre todo con Andalucía, que centró las conversaciones de la reunión del 1 de octubre, en las que no se llegó a acuerdos concretos aunque Felipe González declaró que el Gobierno aceptaba «el fondo y la forma» del artículo 151 para este territorio<sup>937</sup>. Parecía claro que hasta que esta cuestión no quedara resuelta, por mucho que el PSOE defendiera que debía buscarse una solución conjunta, el resto de territorios quedaban en *stand by*<sup>938</sup>.

Aunque puede que de aquella reunión sí se extrajeran conclusiones para la estrategia respecto al conjunto del Estado, que tenían que ver, no con el contenido de su política autonómica, pues el documento interno que surgió a raíz de esta no ofrecía novedad alguna<sup>939</sup>, sino más bien con la puesta en escena a la hora de transmitir al

---

<sup>935</sup> Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Estado de los diferentes...”, p. 7.

<sup>936</sup> De momento, oficialmente no existían negociaciones con UCD en esta nacionalidad, y los centristas acababan de declarar —el 29 de septiembre— a través del Presidente del Consell Preautonòmic, Enrique Monsonís, que tras una reunión con Martín Villa se había clarificado en qué vía constitucional se encontraba el País Valenciano, y que esta era *de facto* la del 143, sin que este hecho fuera negado por los socialistas que parecían asumirlo sin resistencia, véase *El País*, 16 de septiembre de 1980; *El País*, 30 de septiembre de 1980; y *El Socialista*, 174 (del 8 al 14 de octubre de 1980).

<sup>937</sup> A ella acudieron por UCD Rodolfo Martín Rodolfo Martín Villa, Rafael Arias-Salgado, Félix Pérez Miyares, Rafael Calvo y Juan Manuel Reol; por los socialistas estuvieron presentes María Izquierdo, José Rodríguez de la Borbolla, Txiki Benegas, José María Obiols y Francisco López del Real, en *El País*, 2 de octubre de 1980; *El Socialista*, 174...

<sup>938</sup> Como confirma Luis Fajardo, pese a que comenzó a hablarse del resto de comunidades, las «conversaciones estaban principalmente dirigidas a desbloquear la situación andaluza», en Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo...*, p. 104. Martín Villa se arrepentiría a posteriori de no haber negociado el sistema en su conjunto, pues de esa manera creía que podrían haberse adelantado unos meses los pactos de julio de 1981: «Creo que me equivoqué entonces, a finales de 1980, en mi planteamiento con los socialistas. Si se hubiera ofrecido al PSOE una solución al problema andaluz, como se hizo, pero no aisladamente sino encuadrada en el conjunto de la problemática autonómica, hubiéramos podido adelantar unos meses los pactos autonómicos», en Rodolfo MARTÍN VILLA: *Al servicio...*, p. 193.

<sup>939</sup> El documento «Esquema de posiciones básicas en materia de política autonómica», compartía sus principios con muchos documentos anteriores y era de hecho una versión modificada de algunos de ellos. En él, volvían a repetir que las diferentes vías y ritmos autonómicos en ningún caso podían generar desigualdades ni diferencias en el modelo de Estado resultante; insistían en evitar las referencias explícitas a la vía 143 o 151 para hablar mejor de la «vía de la autonomía plena» a la que se accedía desde ambas; y se hacía hincapié en que las Comunidades Autónomas resultantes tendrían en todos los casos una Asamblea Legislativa, un Consejo de Gobierno, y una Tribunal Superior de Justicia. Véase, Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Esquema de posiciones básicas en materia de política autonómica” (Madrid, 6 de octubre de 1980), ABFPI, 75-B 9.

público cuál era la voluntad autonómica del que quería convertirse en el futuro Presidente de Gobierno. O al menos así sucedió en su conferencia del 7 de octubre de 1980 en el Club Siglo XXI, «Crisis y futuro de España». La presión que la posición del PSOE estaba ejerciendo en el proceso andaluz cubría varios frentes estratégicos (representar el rol de partido de oposición, jugar la baza de partido con sensibilidades autonómicas y beneficiarse electoralmente de una apuesta que se había demostrado ganadora), pero mientras este plano se mantenía muy vivo, González supo dar un vuelco a su imagen llevándose el aplauso de los medios conservadores, y seguramente las simpatías de aquellos sectores de la sociedad a los que quería convencer para ganar la mayoría. Y para hacerlo ni siquiera tenía que cambiar la política que se venía defendiendo, sólo las maneras, haciendo en realidad que coincidieran más el fondo y la forma; algo que, como él sabía, se evidenciaría cuando, tras solucionar el problema andaluz, se abordara con UCD una solución conjunta para el Estado de las Autonomías.

En esta conferencia, en consonancia con aquella actitud ya referida, que tiene que ver con una prevención ante la fragmentación de la estructura política española causada por el auge de los nacionalismos catalán y vasco, al parecer Felipe González, habría advertido sobre los peligros de que una proliferación de partidos nacionalistas y regionales pudiera «llevar a este país a una democracia ingobernable» y a romper la unidad de España<sup>940</sup>. Un miedo que estaba muy presente, según fuentes de *El País*, en la dirección socialista, preocupada por que la potenciación de partidos regionales y la pérdida de fuerza de los de ámbito estatal, quebrantaran la estructura política y con ello amenazarán las posibilidades electorales del PSOE al acabar con un sistema bipartidista que, como habían calculado, les facilitaba la alternancia en el poder<sup>941</sup>.

---

<sup>940</sup> Esto era lo que se celebraba al menos en uno de los dos artículos de opinión del diario *ABC* dedicados a aquella conferencia: que por fin, el líder más responsable del PSOE, hubiera subrayado la unidad de España como valedor de la Constitución de 1978, planteando públicamente «sus inquietudes, quizá sus recelos, ante ciertos desbordamientos autonomistas, reiterando limpias afirmaciones de unidad nacional, de unidad de España», en *ABC Madrid*, 11 de octubre de 1980. En el segundo, Emilio Romero, elogiaba también su nueva actitud, afirmando: «Este líder socialista joven, una vez que se ha quitado el pelo de la dehesa de la clandestinidad, y ha asumido su responsabilidad de dirigir la oposición en el Parlamento, (...), se ha convertido en el dirigente más moderado y realista». Y decía satisfecho: «Por primera vez oía a un político, con la responsabilidad actual de Felipe González, que sin el auge y prestigio de los “partidos nacionales” el Estado autonómico es imposible, y España sería ingobernable», en *ABC Madrid*, 14 de octubre de 1980. Esta interpretación era quizá excesiva para el público al que estaba destinada la publicación *El Socialista*, por lo que la versión que se dio en este periódico sobre aquella conferencia, en nada se parecía a la ofrecida por *ABC*, véase *El Socialista*, 175 (del 15 al 21 de octubre de 1980).

<sup>941</sup> *El País*, 12 de octubre de 1980.

Finalmente, poco más de tres semanas después del primer encuentro entre Suárez y González, plagadas de reproches y tiras y aflojas sobre la cuestión andaluza, el episodio se resolvía con la victoria del 151, cerrándose una fase del proceso autonómico que a mi parecer suponía otro impasse en la política autonómica del PSOE. A partir de entonces, un Partido Socialista fortalecido tenía el camino de la racionalización más despejado, aunque no del todo, pero algunos flecos no habían quedado resueltos todavía<sup>942</sup>.

### 3. Sin obstáculos para el pacto

Como recuerda el testimonio de Luis Fajardo, a partir del compromiso para modificar la Ley Orgánica de Referéndum: «el proceso estatutario andaluz discurrió con predominio de acuerdos en casi todo. Y es que esta fase final del proceso político de debate sobre el Estatuto andaluz coincidió con el comienzo de las conversaciones y estudios previos a la formalización de los Acuerdos Autonómicos»<sup>943</sup>. Una formalización que trasladaba el foco de interés hacia el País Valenciano, Canarias, Aragón y en menor medida Baleares<sup>944</sup>, con un cambio significativo frente a la etapa anterior: la solución no se planteaba individualmente sino en el marco de una planificación que armonizara el conjunto del Estado<sup>945</sup>.

Aunque el PSOE no se pronunciaba sin ambages por la reconducción por la vía del 143, a estas alturas existen pocas dudas de que esta era su voluntad final, y con las matizaciones que quieran establecerse sobre las diferencias existentes entre la reconducción que quería imponer UCD y la que querían llevar a cabo en el seno del

---

<sup>942</sup> Los acuerdos, firmados el 23 de octubre, consistían en una proposición de ley para modificar la Ley de Modalidades de Referéndum (sólo en el articulado que afectaba al caso andaluz); y otra para sustituir en Almería la iniciativa autonómica, permitiendo que se incorporara a la Comunidad Autónoma sin la necesidad de repetirse la votación. Véase, *El País*, 24 de octubre de 1980; *El Socialista*, 177 (del 29 de octubre al 4 de noviembre de 1980).

<sup>943</sup> Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo...*, p. 93.

<sup>944</sup> Este cambio es notable en el conjunto de la prensa española, pero sin embargo, en *El Socialista* no se ve sustituida la influencia andaluza. Esa «crisis de Estado» que suponía el problema autonómico aún no resuelto, deja de ser un tema preferente durante un tiempo, y las menciones al tema autonómico no son comunes, mencionándose sobre todo para enfatizar los éxitos socialistas en el tema andaluz o para informar de los avances gallegos. Posiblemente, la indefinición o la inclinación por las posturas menos populares en los territorios en disputa, favorecía este vacío en la prensa oficial del partido.

<sup>945</sup> *El País* se refería muy pronto a esta cuestión cuando señalaba sólo dos días después de celebrar la noticia andaluza: «La solución de los procesos autonómicos del País Valenciano, Aragón y Canarias constituye un nuevo desafío de imaginación política y prudencia jurídica para el partido del Gobierno y los demás grupos parlamentarios, apenas superado el gran escollo de Andalucía. Estos tres procesos constituyen, desde un enfoque distinto al andaluz, otros tantos casos especiales sobre los que debe extremarse la actuación del Gobierno y de los partidos para evitar que culminen en una verdadera chapuza legal», en *El País*, 16 de octubre de 1980.

PSOE, las diferencias a finales de 1980 no eran tantas<sup>946</sup>. Esto estaba presente en otro de sus documentos internos, el «especial responsables» sobre el Estado de las Autonomías,<sup>947</sup> en el que enunciaban las bases de su política autonómica<sup>948</sup>:

La política autonómica de los socialistas en esta etapa de desarrollo constitucional se enmarca en el claro objetivo de la construcción del Estado de las Autonomías sobre la base de un modelo de Estado de autonomía generalizada y solidaria en la que todas las Comunidades accedan a una autonomía política, no meramente administrativa, y puedan alcanzar los mismos niveles de autogobierno solidariamente y sin privilegios<sup>949</sup>.

En este documento, por otra parte, retomaban las posiciones más explícitas sobre la libertad de elección de las vías, en base a condiciones sociales, históricas o económicas, al nivel de conciencia autonómica, la presión política, la capacidad de gestión, etc.; aunque reafirmaban que las diferencias se darían únicamente en los ritmos<sup>950</sup>. Esta podría ser una lógica consecuencia del éxito que habían obtenido unas semanas atrás con esta misma proclama en Andalucía, y también con el hecho de que todavía se mantuviese la incógnita de qué iba a pasar con los territorios bloqueados, que en algún caso, como parecía suceder en el País Valenciano, seguían presionando para obtener una solución similar a la andaluza. De todos modos, en este mismo texto, reconocían que existía un «posible horizonte de acuerdos» para solucionar el bloqueo del País Valenciano, Canarias y Aragón, nacionalidades que, como decían, no cumplían

---

<sup>946</sup> Como ha analizado Mario Pedro Díaz, el discurso socialista en el Congreso durante la primera legislatura democrática, y especialmente el de Felipe González, mostraba coincidencias con el de UCD en temas fundamentales como la cuestión autonómica, en Mario Pedro DÍAZ: *Análisis del discurso político: una aplicación metodológica*, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1989, p. 363.

<sup>947</sup> Luis Fajardo Spinola, se refiere a este documento indicando que incluía las grandes líneas perfiladas por Felipe González en la Moción de censura y que concretaba «fórmulas y soluciones sobre casi todas las cuestiones que más tarde incluirían los Acuerdos Autonómicos del año siguiente, y con un tratamiento similar», dejando patente que los planteamientos de los acuerdos se habían forjado mucho antes, al menos durante 1980, en Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo...*, p. 104.

<sup>948</sup> Las diferencias con la política de UCD a las que me he referido, son claras cuando explican su contrariedad ante el bloqueo que provocó UCD en enero de 1980. En el PSOE, se mostraban propicios a la racionalización, pero no de la manera en la que el Gobierno había querido imponerla a principios de año: «el famoso giro autonómico de Enero de 1980 (...) que se presenta como una racionalización del proceso autonómico pero que en realidad supone su paralización y bloqueo», en Secretaría de Política Autonómica-PSOE: «Especial responsables. El Estado de las Autonomías» (Noviembre de 1980), AHUV, *Fons Alfons Cucó*, 029, p. 9.

<sup>949</sup> Además, entre los criterios básicos en los que decían fundamentar su programa autonómico, no se mencionaban expresamente los derechos identitarios, históricos o culturales, pero sí los aspectos relacionados con el principio de la subsidiariedad que se habían demostrado hegemónicos durante el período postconstitucional: «La vinculación entre la necesaria reforma de la Administración, en un sentido de mayor modernidad, eficacia y libertad y el proceso histórico de la transformación del Estado centralista y autoritario en Estado democrático y de las autonomías», en Secretaría de Política Autonómica-PSOE: «Especial responsables...», pp. 1-2.

<sup>950</sup> *Ibid.*, p. 9.

los requisitos de ninguna de las dos vías, una interpretación que no era asumida por aquellos que creían que la aplicación retroactiva de la Ley de Modalidades de Referéndum no invalidaba los pronunciamientos positivos de Canarias y el País Valenciano<sup>951</sup>. Entre quienes se posicionaban a favor de esta interpretación, se encontraba el grupo parlamentario comunista, que el 9 de octubre había presentado una proposición de ley precisamente para modificar la Ley de diversas Modalidades de Referéndum<sup>952</sup>. Esta proposición, indicaba que la aplicación retroactiva de dicha ley «no sería en tal caso aplicable a Canarias y País Valenciano» ya que habían concluido afirmativamente sus procesos de iniciativa autonómica por la vía del 151, el 25 de octubre de 1979. Y por tanto, la obligatoriedad de hacer constar explícitamente la vía «en modo alguno debe ser aplicable a las iniciativas producidas con anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada ley». En consecuencia, solicitaban la modificación de la Disposición transitoria segunda, con la siguiente especificación:

Las iniciativas que, por el contrario, se hubieran producido y acreditado ante el Gobierno con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, se considerarán por éste planteamiento eficaces para el ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 151 de la Constitución, si en los acuerdos a que se refiere el artículo 8,1 se hiciera así constar, en forma expresa o análoga<sup>953</sup>.

Esta iniciativa comunista estuvo presente en los debates en el seno del PSOE, pero no se supo o quiso responder a la misma –ni a otras–, al menos durante los meses de octubre, noviembre y buena parte de diciembre, en los que planeaba la posibilidad del pacto con UCD. Tampoco tuvo ninguna resonancia, por lo menos pública, el hecho de que el Partit Nacionalista del País Valencià de Francisco de P. Burguera (ex diputado de UCD), presentara ante el Pleno del Consell un escrito jurídico exigiendo la celebración del referéndum y un acuerdo que salvara la autonomía valenciana igual que se había hecho con la andaluza. Esta iniciativa, como se contaba en *El País*:

no ha merecido especial eco en el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE). Según su portavoz de Prensa, «cada partido debe hacer lo que crea conveniente, pero no concedemos importancia a la actuación de un grupúsculo». Otras fuentes señalaron que

---

<sup>951</sup> *Ibid.*, p. 15.

<sup>952</sup> El 9 de octubre era la fecha fijada en el País Valenciano para que venciese el plazo del procedimiento constitucional de la vía del 143, proceso en el que según el Ministro Martín Villa, se encontraba inmerso este territorio.

<sup>953</sup> BOCG: *Proposiciones de ley*, nº 111-I, 30 de octubre de 1980, p. 420.

los efectos legales del recurso tendrían efectos a muy largo plazo y, desde un punto de vista político, lo consideraron inviable en las actuales circunstancias.

«Jurídicamente tienen razón» afirmaron, «pero plantear ahora en el País Valenciano el litigio de las vías constitucionales queda desfasado. No hay ningún político valenciano que pueda pensar que UCD va a convocar un referéndum o a repetir con nosotros la vía andaluza»<sup>954</sup>.

La información periodística continuaba aclarando que esta postura socialista tenía lógica «en el marco de las actuales conversaciones de los partidos parlamentarios para llegar a un acuerdo sobre el futuro autonómico del País Valenciano. Estas conversaciones podrían concluir en un principio de acuerdo en muy breve plazo sobre condiciones socialistas para volver al Consejo»<sup>955</sup>. A finales de octubre y principios de noviembre, el País Valenciano, territorio en el que la duda fue más acusada durante más tiempo, comenzó a verse arrastrado con más fuerza por esa voluntad homogeneizadora, aunque, la decisión aún no estaba tomada<sup>956</sup>. Esto explicaba que el Secretario General del PSPV-PSOE, desautorizara un manifiesto conjunto que debía haber estado firmado por el PSPV-PSOE, el PCPV y el PNPV para ser publicado el 9 de octubre de 1980. Escrito por Francisco de Paula Burguera y Alfons Cucó, según una nota manuscrita del mismo, estos partidos se pronunciaban a favor de la vía del 151, como la única que podría igualar la autonomía del País Valenciano a las de Euskadi y Cataluña; y trataba el polémico tema de la lengua, de la enseñanza y del catalanismo refiriéndose a que:

nosaltres, socialistes, comunistes i nacionalistes del País Valencià no podem admetre que eixa normalització de l'ensenyament de la nostra llengua, compartida amb altres pobles germans, vullga ser presentada con un acte de suposat imperialisme. Volem fer palés al nostre poble que quan els socialistes, comunistes o nacionalistes de Catalunya expressen unitat lingüística no estan intentant cap ingerència política en els assumptes interns del País Valencià –cosa que ni ells pretenen ni nosaltres acceptaríem– sino compartint amb nosaltres la preocupació per eixe patrimoni cultural que ens es comú<sup>957</sup>.

---

<sup>954</sup> *El País*, 26 de octubre de 1980.

<sup>955</sup> *Ibid.*

<sup>956</sup> *El País* recogía el 26 de octubre la siguiente declaración de Attard: «me consta que hay relaciones de verdad a muy alto nivel para llegar a un acuerdo consensuado. Tengo fe que terminarán bien», en *El País*, 26 de octubre de 1980.

<sup>957</sup> PSPV-PSOE, PCPV y PNPV: Manifiesto por el Día Nacional del País Valenciano (València, 9 de octubre de 1980), AHUV, 073/04.

Posiblemente, influyera en la negativa de Joan Lerma la perspectiva de los primeros encuentros tanteando el terreno para las negociaciones que no tardaron en llegar, y desde luego la voluntad firme de la cúpula del Partido de alejar el fantasma del catalanismo y no polemizar en este sentido, que se remontaba a finales de diciembre de 1979. A pesar de ello, Cucó apuntaba que aquello provocó la primera gran crisis dentro de la Ejecutiva y le obligó a presentar la dimisión, que no fue aceptada, aunque la fractura entre ambos políticos, según escribió, fue palpable a partir de aquel momento. Para este político, aquella pudo ser la oportunidad perdida para decantarse por un frente progresista y valencianista en lugar de por el acuerdo con UCD:

Pràcticament al mateix temps s'iniciaven les primeres negociacions amb la UCD sobre el tema autonòmic el resultat del qual és ben conegut. Cal dir que l'actitud del PCPV fou sempre d'anar «a remolque» el que em confirma que el podríem haver integrat en un possible i –crec– desitjable «entesa progressista i valencianista». Això, és clar, prescindint dels inevitables i totpoderosos dictats estatals. Amb el fracàs d'aquesta possibilitat s'enceta una nova etapa a la nostra història autonòmica<sup>958</sup>.

Este testimonio, escrito a posteriori, podría reflejar la heterogeneidad del Partido y confirmar la improvisación que se vivía respecto a aquellos temas. Cucó había participado de la salida del Consell en diciembre, que ya inauguraba una etapa en la que los dictados en temas autonómicos comenzaban a priorizar la estrategia estatal, pese a que con esta aún por definir, algunos de aquellos grupos podrían mantener la idea de que la cuestión nacional valenciana no quedaría relegada, como se fue evidenciando conforme avanzaba el tiempo<sup>959</sup>.

Explicando también lo anterior, desde la perspectiva estatal, a principios de noviembre se estaba produciendo un acercamiento originado a raíz del llamamiento del Ministro de Administración Territorial a elaborar unos pactos en materia autonómica, especialmente con el PSOE, acogiendo la idea de Felipe González de desarrollar el título VIII de la Constitución por medio de una ley orgánica que tuviese en cuenta el

---

<sup>958</sup> *Ibid.*

<sup>959</sup> Serían los desacuerdos internos los que motivaron un comunicado a los miembros de la Ejecutiva del PSPV-PSOE desde la Secretaría de Prensa y Propaganda para recordar que el único portavoz sobre temas autonómicos era Joan Lerma. Comunicación que se realizaba debido «al deterioro de la imagen, que se está produciendo, del partido por diversas informaciones que aparecen en los distintos medios, al ser realizadas por diversos miembros de la Comisión Ejecutiva, me veo en la obligación de recordar lo anteriormente indicado», en Secretaría de Prensa y Propaganda del PSPV-PSOE «Comunicado de la Comisión Ejecutiva (Alicante, 6 de noviembre de 1980), AHUV, 073/004.

conjunto del Estado y no a partir de una negociación individual con cada territorio<sup>960</sup>. El Partido Socialista, «recogió el guante», como recuerda Luis Fajardo, que además considera que muchas de las propuestas habían sido expuestas antes en términos similares por el propio PSOE<sup>961</sup>. La realidad es que en el PSOE habían concluido el 10 de octubre en una reunión entre Felipe González, María Izquierdo y los Secretarios Generales de las nacionalidades, que debían evitar la estrategia de Martín Villa de «desbloquear los procesos por negociaciones puntuales en cada Comunidad. Nuestra estrategia debe dirigirse a la consecución de un pacto global que beneficie a todas las Comunidades»<sup>962</sup>, y entonces predecía lo que a principios de noviembre se hacía realidad: «La UCD se está aproximando en gran medida a nuestras posiciones, tanto a nivel estatal como en el ámbito de cada Comunidad. Necesitan más un pacto autonómico que nosotros; tenemos que aprovechar esta circunstancia»<sup>963</sup>.

Por otra parte, en las conclusiones de la reunión del 10 de octubre –escritas desde la perspectiva de un mes más tarde<sup>964</sup>– los Secretarios Generales del País Valenciano, Canarias y Aragón aceptaban que el pacto autonómico global supusiera la reconducción de los tres territorios, pero a cambio demandaban que se les reconociera algún elemento diferenciador respecto al resto, algo que curiosamente acabaría sucediendo con Canarias y País Valenciano:

Se puso de manifiesto el deseo de que si llegaba un hipotético pacto autonómico global, en él se reflejase una especial consideración hacia estas tres Comunidades (País Valenciano, Canarias y Aragón) por el hecho de haber demostrado una especial voluntad autonomista. Esta consideración habría de ser recogida en la celebración de un referéndum de ratificación del Estatuto, mayores competencias o algún otro elemento

---

<sup>960</sup> *El País*, 6 de noviembre de 1980. Previamente a este anuncio oficial, Martín Villa y el Secretario de Estado para las Autonomías ya habían expresado esta voluntad. El último, destacado político valenciano, había anunciado que una vez superados los escollos surgidos en Andalucía y Galicia, había que «generalizar el proceso autonómico, que debe ser homogéneo y desde una base de igualdad, para que cada uno alcance las competencias e instituciones que desee», en *El País*, 2 de noviembre de 1980.

<sup>961</sup> Fajardo opina que de alguna manera podrían «considerarse estas propuestas como un adelanto del modelo de armonización de la LOAPA», en Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo...*, p. 106.

<sup>962</sup> Se explicaba por otra parte, que las conversaciones-negociaciones estaban entonces avanzadas, y que en general, como ya se había ido viendo a excepción del caso valenciano, los temas de mayor discrepancias eran los que tenían que ver con el sistema electoral y las Asambleas Legislativas Provisionales.

<sup>963</sup> Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Notas previas a la reunión del día 12-11-80 sobre los procesos autonómicos del País Valenciano, Canarias y Aragón” (Madrid, 11 de noviembre de 1980), ABFPI, 82-C 1, p. 1.

<sup>964</sup> Este documento fue en realidad elaborado el 11 de noviembre para preparar la reunión prevista para un día después en la que trataron los procesos autonómicos del País Valenciano, Canarias y Aragón, aunque para ello sintetizaban en uno de los apartados la mencionada reunión del 10 de octubre.



diferenciador respecto a las Comunidades que habrían optado unánimemente por la vía 143»<sup>965</sup>.

Como se viene defendiendo, no existían grandes incompatibilidades con una propuesta del Gobierno que entre otras cosas pretendía reconducir todas las iniciativas autonómicas por el artículo 143, aplicando el artículo 150,2 de la Constitución para homogeneizar los distintos Estatutos «a fin de que el techo de competencias pueda llegar, en todos ellos, al que correspondería al artículo 151 de la Constitución (es decir, el máximo posible), siempre que así lo deseen las comunidades respectivas. Se trata, pues, de desbordar el nivel de competencias que normalmente correspondería a estatutos iniciados por la vía del 143»<sup>966</sup>.

Como se ha adelantado, el día 12 de noviembre se celebró la primera de distintas reuniones entre la Ejecutiva Federal, representada por María Izquierdo y Alfonso Guerra, y los comités regionales del PSOE en Aragón, P. Valenciano, Canarias y Baleares, en las que tomar en consideración la propuesta del Gobierno y ver cómo podrían desbloquearse los procesos de cada territorio a partir de una estrategia global. En ellas, se trataron cuestiones electorales; se habló de los peligros de convocar referendos de ratificación de los Estatutos por la posible abstención; de cómo desbloquear aquellos procesos sin generar más agravios comparativos con otras regiones; de la aplicación del artículo 150. 2; o de si era preferible evitar una «posible imagen negativa de “un acuerdo autonómico desde Madrid”», intentando «lograr algún tipo de negociación paralela: Madrid-Comunidad»<sup>967</sup>. Según informaba *El País*, se había llegado a la siguiente conclusión:

aceptar el hecho de que no se han alcanzado pronunciamientos suficientes para ninguna de las dos vías y que es necesario promover un procedimiento especial para estas cuatro comunidades, punto que provoca reticencias en los socialistas valencianos, más partidarios de modificar la ley de Referendos para lograr el acceso por el 151.

---

<sup>965</sup> A esto se añadía la sugerencia «por parte de algún compañero» de que la autonomía andaluza fuera desbloqueada de forma paralela a las otras tres, cosa que no sucedió, pues la voluntad de elaborar un pacto global siempre había excluido a Andalucía, en *Ibid.*, p. 2.

<sup>966</sup> *El País*, 6 de noviembre de 1980. Según Benito Sanz, a finales de 1980 la Ejecutiva Federal comenzó a plantear la solución de asumir en Canarias, Aragón, Baleares y País Valenciano «la vía del 143, simultaneándola con una ley orgánica según el artículo 150.2 de la Constitución», en Benito SANZ y Josep Maria FELIP: *La construcción política de la Comunitat Valenciana*, València, Alfons el Magnànim, 2006.

<sup>967</sup> Notas sobre la reunión del 18 de noviembre, ABFPI, 82-C 1.

La solución que se propone está a mitad de camino entre ambos artículos. Se quieren pedir las competencias del 143 y solicitar, simultáneamente a la aprobación del Estatuto, algunas de las que prevé el artículo 150 mediante ley orgánica, hecho que debe ir ya reflejado en el proyecto de Estatuto. En este sentido irían también incluidas otras ampliaciones, como existencia de una ratificación popular del Estatuto –o, al menos, de los ayuntamientos– y la inclusión de la asamblea de parlamentarios en los trabajos de elaboración, requisito que sólo establece el 151<sup>968</sup>.

El acuerdo parecía incluir a todos los territorios, aunque las reticencias valencianas todavía colearon en los siguientes debates socialistas<sup>969</sup>, seguramente también porque estaba presentada una proposición de ley por parte de los comunistas para conseguir una solución por la vía del artículo 151 en Canarias y el País Valenciano que provocaría cierta incomodidad en los sectores socialistas, máxime cuando, como sucedía en el PSPV-PSOE, existían sectores que dentro del partido no aceptaban la reconducción por el 143<sup>970</sup>.

Este clima se plasmó en la «Propuesta para el desbloqueo de los procesos autonómicos del País Valenciano, Canarias, Aragón y Baleares» que elaboraron en el PSOE para abordar este problema con una visión completa. Para ello habían tenido en cuenta el «Proyecto de Ley Orgánica para hacer posible la igualdad y homogeneidad de las facultades y competencias de las Comunidades Autónomas» que en diciembre el Gobierno había entregado a las distintas organizaciones políticas con representación parlamentaria, además de una propuesta de negociación de UCD. El primer documento se trataba de un instrumento legal para homogeneizar las competencias de todas las Comunidades Autónomas (tanto las del 151, como las del 143 o el 144) utilizando el procedimiento de transferencias previsto en el artículo 150.2<sup>971</sup>. La propuesta de UCD, por su parte, trataba preferentemente los asuntos en los que existían más desacuerdos, cuestiones electorales o composición de las futuras Asambleas regionales<sup>972</sup>, y como

---

<sup>968</sup> *El País*, 27 de noviembre de 1981.

<sup>969</sup> Mientras que las negociaciones ya estaban avanzadas en otros territorios, en el País Valenciano comenzaron oficialmente a raíz del ofrecimiento de noviembre, como se confirma en una reunión interna de la Secretaría de Política Autonómica en la que se hacía balance de los diferentes procesos, en Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Información sobre la situación del proceso autonómico en cada comunidad”, ABFPI, 75-E 2.

<sup>970</sup> De hecho, la existencia de esta iniciativa fue tratada con preocupación en las reuniones del 12 y del 18 de noviembre, en Notas sobre la reunión...

<sup>971</sup> Ministerio de Administración Territorial-Secretaría de Estado para las Comunidades Autónomas: “Proyecto de Ley Orgánica para hacer posible la igualdad y homogeneidad de las facultades y competencias de las Comunidades Autónomas”, ABFPI, 74-G 3.

<sup>972</sup> UCD: “Relación de temas que deben ser objeto de análisis conjunto”, ABFPI, 74-G 3.

indica Luis Fajardo «daba singular y especial tratamiento a los de Canarias, País Valenciano, Aragón y Baleares» y «resultaba prácticamente idéntica a la que luego se integraría en los Acuerdos Autonómicos»<sup>973</sup>. Así decía aquella propuesta:

La elaboración de los Estatutos de los territorios que no han cumplido los requisitos del art. 151.1 de la Constitución, deberá realizarse en forma negociada, resaltando en su proceso de elaboración la intervención de la Asamblea de parlamentarios de la región, pasando, después a la aprobación de la Asamblea prevista en el artículo 146 de la Constitución<sup>974</sup>.

Como ya he referido, a partir de estas consideraciones, en el PSOE realizaron una propuesta de desbloqueo para cada uno de los territorios mencionados, además de unos anexos sobre el cálculo de repartición de escaños en los parlamentos regionales<sup>975</sup>, un tema que preocupaba entonces más que el de las vías, que sólo quedaba en suspenso para el caso valenciano. De hecho, el proyecto de desbloqueo para este territorio era planteado a partir de dos hipótesis. La primera, la «Modificación de la Ley Orgánica de Referéndum» para acabar con su retroactividad, y que decían ser una posibilidad sólo para el País Valenciano:

En cualquiera de los casos, esta modificación no tiene efectos más que sobre el proceso autonómico valenciano, puesto que es el único sobre el que concurre esta circunstancia jurídica de tener completado el proceso antes de la aprobación de la Ley (es dudoso si el de Canarias tiene acreditado el proceso, no así el de Aragón)<sup>976</sup>.

Aunque establecida como posibilidad, esta no parecía ser sin embargo la opción más plausible o deseada, pues no le dedicaban más atención, algo que sí hacían con la opción B, «Considerar que los pronunciamientos del 151 son válidos para el 143», vista como la «vía negociada», que en este caso sí era desarrollada más allá de su enunciación, y en la que, como puntos más negativos a considerar se señalaba que se trataba de una opción que posicionaba a UCD como líder del proceso, pese a que era el PSPV-PSOE el partido mayoritario; y que el PCPV había manifestado públicamente su desacuerdo, habiendo presentado la proposición de ley para modificar la Ley de

---

<sup>973</sup> Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo...*, p. 107.

<sup>974</sup> UCD: «Relación de temas...», p. 2.

<sup>975</sup> Se trataba de los cálculos realizados en cada parlamento a partir de los supuestos de representatividad en relación 1/2 y 1/3. PSOE: «Anexos: Cálculo de repartición de escaños en los parlamentos regionales» (Madrid, diciembre de 1980), ABFPI, 74-G 3.

<sup>976</sup> PSOE: «Propuesta de desbloqueo del proceso autonómico del País Valenciano» (Madrid, 17 de diciembre de 1980), ABFPI, 74-G 3.

Referéndum. En cuanto a su desarrollo, se perfilaban cuestiones como las del sistema electoral; sobre la composición y funcionamiento de la Asamblea Legislativa y la Presidencia; la tramitación del Estatuto; y su contenido. Sobre los dos últimos puntos, hay que señalar que en la tramitación coincidían a grandes rasgos con los planteamientos propuestos por UCD<sup>977</sup>; y en cuanto a los contenidos, se referían a la igualdad de competencias respecto a los Estatutos del 151, y se insistía en la necesidad de llegar a un acuerdo sobre la denominación, la lengua y la bandera<sup>978</sup>.

El resto de proyectos daba por terminada la batalla de las vías<sup>979</sup>, ignorando tan siquiera su referencia, a excepción del caso Canario, con el que sorprendentemente se habían desmarcado negando que tuviera acreditado el proceso. Aunque la realidad era que allí hacía tiempo que la polémica de las vías había dejado de ser un tema capital para los socialistas canarios<sup>980</sup>, y así se demostraba en su proyecto de desbloqueo cuando se referían a ello:

Superada la dialéctica 143/151 en favor de otra centrada en el contenido del Estatuto, la fórmula de desbloqueo está relativamente conseguida, siempre que se admita como complemento de la vía 143 una Ley Orgánica que amplíe las competencias de aquel mediante el art- 150.2, y previamente se consiga un acuerdo en el contenido<sup>981</sup>.

Pero este clima de consenso sufrió un traspie desde finales de diciembre hasta el intento del golpe de Estado el 23 de febrero, lo que en ningún caso significó que la negociación hubiera quedado agotada. Como recuerda Luis Fajardo en aquel momento

---

<sup>977</sup> «La Asamblea redactora será formalmente la de Parlamentarios y Diputados provinciales (art. 146), aunque en la realidad el Estatuto responderá a un acuerdo previo. La Comisión Constitucional tendrá presencia de los Diputados valencianos a través de sus respectivos partidos. No se haría referéndum de ratificación pero sí una consulta a los Ayuntamientos», en *Ibid.*

<sup>978</sup> Avanzaban que en la lengua existía una posible redacción con acuerdo.

<sup>979</sup> En el resto de los aspectos tratados (cuestiones electorales, Asamblea legislativa, ratificación de los Estatutos, competencias, etc.), el modelo del proyecto canario, aragonés y balear respondía a los mismos criterios explicados para el caso valenciano, véase PSOE: “Propuesta de desbloqueo del proceso autonómico Canario” (Madrid, 17 de diciembre de 1980), ABFPI, 74-G 3; PSOE: “Propuesta de desbloqueo del proceso autonómico aragonés” (Madrid, 17 de diciembre de 1980), ABFPI, 74-G 3; PSOE: “Propuesta de desbloqueo del proceso autonómico del País Valenciano” (Madrid, 17 de diciembre de 1980), ABFPI, 74-G 3; PSOE: “Propuesta de desbloqueo del proceso autonómico balear” (Madrid, 17 de diciembre de 1980), ABFPI, 74-G 3.

<sup>980</sup> Tanto en Canarias como en Aragón, se había desplazado el interés de las negociaciones a cuestiones como el sistema electoral, papel de las diputaciones, etc. A finales de noviembre y hasta mediados de diciembre, las negociaciones avanzaron tremendamente. En Canarias, por ejemplo, se había llegado al acuerdo de presentar el Estatuto antes de Navidad, véase *El País*, 27 de noviembre de 1980; o *El País*, 6 de diciembre de 1980.

<sup>981</sup> Por otra parte, se contemplaba la problemática sobre la inclusión del término nacionalidad, que defendían los socialistas, aunque advirtiendo que no harían «de este tema bandera esencial», en PSOE: “Propuesta de desbloqueo del proceso autonómico Canario...”

no se llegó a cerrar la negociación con el Gobierno: «No llegó a haber, en aquellas fechas cargadas de confusión, sobre todo por la dimisión del Presidente del Gobierno, una fijación de posición clara del PSOE en relación con este anuncio de iniciativa legislativa; sólo recordamos la negativa de María Izquierdo a negociar con el Gobierno este proyecto de Ley, remitiéndose a fijar posición en la tramitación parlamentaria»<sup>982</sup>.

Es muy probable que a estas fechas corresponda un documento sobre la estrategia a seguir por el PSOE respecto a si convenía o no cerrar un acuerdo con UCD, ya que en el mismo todavía no se hacían referencias al golpe de Estado y la cuestión andaluza había pasado a un segundo plano, siendo los territorios de Aragón, País Valenciano, Canarias y Baleares, los que más les preocupaban. En él, establecían dos hipótesis, la del acuerdo UCD-PSOE, y la de una «nueva mayoría». En cuanto a la primera, veían la posibilidad de extenderlo a otras fuerzas políticas, preferentemente las nacionalistas, aunque consideraban que este sería un objetivo difícil porque podría darse «una contraposición de intereses en las bases del acuerdo». Pese a ello veían las bondades de sumar a los nacionalistas porque mitigaba la imagen negativa y de desgaste que podrían sufrir los socialistas de darse un acuerdo exclusivamente bilateral. Los aspectos positivos eran variados: ejercían una «política de Estado»; se pasaba de un modelo centralista a otro descentralizado con garantía para el sistema, atajando «los peligros de desviaciones centrífugas» y también las reacciones «centralizadoras»; o se impedía la frustración que todo el proceso estaba generando. Entre los negativos, además de las repercusiones que podía tener para su imagen, les preocupaba las que tendría para el partido de Gobierno, que se vería reforzado con el pacto. En cuanto a la segunda hipótesis, pasaba por boicotear cualquier posibilidad de acuerdo entre UCD y los nacionalismos e intentar favorecer la ruptura del Partido centrista. Parece que esta opción despertaba menos entusiasmo, ya que se veía claramente más incierta y se resaltan poco los aspectos positivos, surgiendo sin embargo muchos recelos, como el bloqueo de nuevo en los territorios que venimos mencionando; el peligro de una reacción nacionalista a la frustración de los procesos autonómicos; la posibilidad de que esto empujara a UCD a una alianza con los nacionalismo vasco y catalán; o el «peligro de conducir la autonomía a una mera descentralización administrativa» según la cual el «Estado resultante sería muy semejante al Estado Integral, con privilegios para vascos y

---

<sup>982</sup> Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo...*, p. 107.

catalanes, y los consiguientes sentimientos de agravio comparativo en el resto de comunidades»<sup>983</sup>.

El documento anterior nos da una idea de las dudas socialistas sobre las bondades del pacto, pero también demuestra que aunque pudieran existir recelos, estaban más dispuestos a favorecerlo que a impedirlo, aunque la negociación sufriera de altibajos. En este sentido, puede que en diciembre el acuerdo pasara por sus horas más bajas desde septiembre, aunque esto no significaba que se hubiera descartado. Entonces, a los problemas que suponía la negociación del desbloqueo en el País Valenciano, se sumaron otros surgidos en Canarias. Al parecer, la UCD no había aceptado una enmienda socialista al texto autonómico sobre la neutralidad militar, lo que había desembocado en una crisis entre los dos partidos del archipiélago, y en la vuelta al bloqueo de su proceso autonómico<sup>984</sup>. En esta situación, un PSOE que se sabía fuerte, y que había expresado ya que UCD necesitaba más el pacto que ellos, por lo que debían sacar provecho de esta circunstancia, empezó a tensar la cuerda con declaraciones públicas sobre el posible boicot a la ley orgánica propuesta por UCD. Así se recogía en *El País*:

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) podría boicotear en el Congreso la aprobación de un proyecto de ley estudiado en el Consejo de Ministros del pasado lunes, por el que UCD pretende que las competencias autonómicas por la vía del artículo 143 se igualen a las que garantiza el artículo 151. El PSOE no ha ocultado que su voto favorable a dicha ley está condicionado a un proceso «razonable» de desbloqueo de las autonomías en Aragón, País Valenciano y Canarias<sup>985</sup>.

Pero detrás de esta reacción no estaba sólo la cuestión de la neutralidad canaria o los problemas de sobra conocidos de antemano respecto al País Valenciano, sino que tenía mucho que ver la estrategia de tensión a la que los socialistas querían someter a UCD. El acuerdo autonómico que estaba dispuesto a firmar Martín Villa había dejado excluida la posibilidad, que sí se barajaba en medios socialistas, de un acuerdo de Gobierno<sup>986</sup>. El propio Felipe González había declarado a principios de noviembre, según el periodista Bonifacio de la Cuadra, que sólo en el marco de una operación política global, con participación del PSOE en las responsabilidades de Gobierno,

---

<sup>983</sup> “Formulación de la estrategia a decidir”, ABFPI, 82-C 1.

<sup>984</sup> *El País*, 27 de diciembre de 1980; *El País*, 31 de diciembre de 1980; *El País*, 10 de enero de 1980.

<sup>985</sup> *El País*, 27 de diciembre de 1980.

<sup>986</sup> Así lo había confirmado el Ministro de UCD, véase *El País*, 6 de noviembre de 1980.

concebía un acuerdo sobre la ley electoral y el desarrollo autonómico «que permita a los partidos de ámbito estatal hacer el Estado federal o el autonómico, pero desde una concepción nacional y española que impida situaciones como las protagonizadas hasta ahora por el Gobierno al dar dinero *al enemigo de su enemigo*»<sup>987</sup>, en una clara alusión a los partidos nacionalistas –como el PSA o CiU– sobre los que este político llevaba un tiempo advirtiendo. Felipe González y su partido ejercían un papel de responsabilidad respecto al Estado, y a pesar de que el Gobierno de coalición no se llegó a plantear, fueron propicios a llegar a acuerdos. Pero a finales de año ya empezaba a ser muy evidente que el Gobierno no podría aguantar mucho más el desgaste, con un Presidente cuestionado incluso entre las filas de su propio partido, y el PSOE trató de rentabilizar esta situación.

No nos encontramos, por tanto, ante una ruptura de las negociaciones, sino frente a uno de los impasses propios de este tipo de conversaciones –igual que había sucedido en las semanas previas a los acuerdos sobre Andalucía–; con el añadido de una crisis de Gobierno que el PSOE quería aprovechar en su favor, y que llegaría a su cénit el 29 de enero de 1981 con la dimisión de Suárez<sup>988</sup>. Así, mientras parecían resurgir las diferencias que imposibilitaban un acuerdo de Estado en materia autonómica entre los dos partidos mayoritarios, el PSOE seguía elaborando documentos internos –como «Proyecto de acción para 1981»<sup>989</sup> y «Programa autonómico: Esquema de prioridades»<sup>990</sup>–, que desarrollaban las mismas premisas que lo habían hecho perfectamente viable semanas antes.

En aquel momento, también se paralizaron las negociaciones entre el PSPV-PSOE y la UCD valenciana. Sobre cómo habían transcurrido estas se dio cuenta entonces en un informe de la Secretaría General del PSPV-PSOE, firmado por Joan Lerma, que se refería a los objetivos que habían marcado la gestión de la Ejecutiva durante aquel período. Se explicitaba de entrada que de los cuatro puntos a tratar, era el

---

<sup>987</sup> *El País*, 5 de noviembre de 1981.

<sup>988</sup> En este sentido, Jordi Solé Tura afirma que «la crisis de UCD y la política de alternativa que practicaba el PSOE y que excluía todo acuerdo con aquella impedían la necesaria negociación e imposibilitaban un pacto global sobre las autonomías», en Jordi SOLÉ TURA: *Nacionalidades y nacionalismos...*, p. 123.

<sup>989</sup> Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Proyecto de acción para 1981” (Madrid, 7 de enero de 1981), ABFPI, 74-G 3.

<sup>990</sup> Se hacía especial hincapié en la necesidad de construir un sistema simétrico que debía superar los problemas de los diferentes ritmos y formas de acceso a la autonomía a través de una «ordenación homogénea y sincrónica de los traspasos de competencias», en Secretaría de Política Autonómica: “Programa autonómico: Esquema de prioridades” (enero de 1981), AHUV, Fons Alfons Cucó, 029, p. 3.

que tenía que ver con el «problema autonómicos en su dimensión real», el que más había centrado su atención, entre otras cosas porque no atendía únicamente al País Valenciano, sino que era «un componente fundamental de la estabilidad de la democracia en España». Sobre los contactos con UCD, reconocían desde la Ejecutiva que aquel partido había modificado sustancialmente sus posiciones iniciales, en los temas simbólicos, que fueron tratados, aunque no se consideraron decisivos para aquella etapa<sup>991</sup>. Los centristas habían admitido la doble denominación de País Valenciano y Reino de Valencia; la fórmula de compromiso en la que no se hablaba de legua valenciana sino del valenciano; y aunque sin renunciar a la franja azul para la bandera, aceptando alguna aportación socialista como símbolo diferenciador. No parece que vieran estos como los temas más peliagudos, con lo que, aunque no se reconociera públicamente, los socialistas también estaban dispuestos a ceder en este terreno. Por otra parte, donde más se congratulaban los socialistas del cambio de criterio de UCD era en el tema de la representación electoral, que siempre había sido decisiva para los acuerdos, ya que los centristas reconocían la necesidad de la proporcionalidad. En cuanto a la vía, los centristas se mantenían firmes en su voluntad de acceder por la del 143, tema sobre el que los socialistas valencianos tenían dudas importantes, sobre todo por la imagen que esto ofrecía y por el control en la elaboración del Estatuto que otorgaba al partido de Gobierno el procedimiento de la 143, que era sin embargo minoritario en el País Valenciano. Y concluían con esta reflexión preguntándose cómo podrían explicar su salida del Consell de un año antes si ahora aceptaban aquellas condiciones y volvían al Consell, demostrando una vez más que aquella salida del Consell, había servido sobre todo para ofrecer una cabeza de turco que calmara una tensión que los socialistas veían como insostenible:

tiene una importancia quizá relativa en cuanto a la actuación, pero una gran importancia en cuanto a la imagen. La vuelta al Consell, desbloqueando la autonomía por el art. 143, y aceptando la Presidencia de UCD, significaría dar la razón a UCD: sobre los motivos de nuestra salida al tiempo que demostrar a la opinión pública que habíamos perdido un año de tiempo, porque en estas condiciones pudimos haber pactado hace un año. ¿Por

---

<sup>991</sup> Jaime Millás anunciaba a principios de noviembre que el consenso era posible, ya que durante los últimos meses se habría logrado el acuerdo en torno a numerosos aspectos, aunque todavía no se habían dirimidos cuestiones relacionadas con la simbología y la lengua, que esperaban dejarse para más adelante, en *El País*, 5 de noviembre de 1980. Acorde a esta voluntad de aparcas aquellos temas conflictivos – iniciada desde la salida del Consell– Lerma declaraba ante los medios a principios de octubre los socialistas «habían realizado un gran esfuerzo por colocar en un segundo plano cuestiones polémicas como las de la bandera», en *El Socialista*, 173 (del 1 al 7 de octubre de 1979).



qué se puede mantener ahora una posición más firme que hace un año en las negociaciones? Esto ha sido sin lugar a dudas el reflejo de una política deliberada de la Comisión Ejecutiva y que quizá no ha sido suficientemente explicada en la Organización, puesto que en algunas Comarcas no ha sido asumida con convicción. La política de la desescalada en los temas manipulables sobre la identidad del País Valenciano, era un requisito imprescindible en la sociedad valenciana, que estaba cayendo en enfrentamientos de gran violencia. (...) Estos enfrentamientos que respondían a una reacción de la derecha valenciana frente a la pérdida de poder, tenían un relativo éxito en tanto en cuanto se amparaban tras planteamientos ficticios sobre la identidad valenciana. (...) El éxito de la operación, radicaba claramente en que la izquierda y especialmente los socialistas, cayésemos en la trampa de ese enfrentamiento al que no conducía UCD. La situación hoy, después de un año de no aceptar la confrontación en este terreno, arroja un saldo que es claramente favorable a los planteamientos socialistas, si bien no ha concluido ni mucho menos<sup>992</sup>.

Por otra parte, en este documento se encuentra una confesión de gran valía, que explica por qué el PSPV-PSOE no se pronunciaba respecto a las proposiciones de ley que otros partidos valencianos estaban presentando o demandando con respecto a la modificación de la ley de referéndum. La clave estaba en que eran plenamente conscientes de que sólo la Federación valenciana mantenía todavía su intención de mantenerse por la vía del artículo 151 en el PSOE, y que si la Ejecutiva Federal se declinaba por aceptar una oferta de UCD que ofreciera a la vía del artículo 143 las mismas competencias que la del 151 –nada improbable por otra parte– tendrían que renunciar a esta cuestión, sobre la que presionaban los sectores nacionalistas del partido:

De cualquier forma, el peligro más inmediato con el que el PSPV-PSOE se tendrá que enfrentar a la hora de mantener una posición de firmeza en sus posiciones sobre la autonomía, se presentará sin duda en el momento en el que el Gobierno decida que va a hacer con el proyecto de Ley Orgánica de desarrollo de las autonomías según el cual, aunque la vía de receso de la autonomía sea la del art. 143, vía a la que remite las situaciones como la actual del País Valenciano, se podrán asumir las competencias del art. 151. El peligro es evidente porque probablemente, y salvo la situación de Canarias, que ya estaba pactada y que se rompió por una discusión relativa a la OTAN ya en el contenido del Estatuto, las demás situaciones preautonómicas van a quedar ya solucionadas, quedando el País Valenciano como única comunidad que no ha aceptado

---

<sup>992</sup> Joan LERMA: “Informe de la Secretaría General”, ABFPI, 79-D 3, pp. 1-6.

esa ley. Si el PSOE federal acepta esa Ley, nuestra situación se hará difícil de explicar, y va a ser necesario un gran esfuerzo de divulgación de nuestras posiciones<sup>993</sup>.

Es por tanto durante este giro de los acontecimientos, que hacía que el acuerdo entre UCD y PSOE se pusiera en duda, cuando el problema de las vías iba a reaparecer de la mano del País Valenciano<sup>994</sup>. Debieron pensar que ya que no estaban teniendo fácil reconducir allí la «voluntad popular» por la vía del 143; podrían sacar partido de ello, tomando de nuevo de rehén el desarrollo del Estado autonómico, y utilizarlo en beneficio de esa estrategia frente a UCD<sup>995</sup>. Esto les permitía proclamarse otra vez como defensores de los derechos de las nacionalidades, suavizando tensiones en el seno del PSPV-PSOE, y haciendo frente al PCE en este terreno, que tenía presentada desde octubre una proposición de ley en favor del 151 en Canarias y el País Valenciano. No hay que olvidar tampoco, que en aquellos momentos la dirección del Partido tenía intención de trabajar por incrementar el espacio electoral también a costa de la crisis del PCE<sup>996</sup>. Todo ello contribuye a explicar que Joan Lerma, Secretario General del PSPV-PSOE, anunciara a finales de enero la presentación por parte del grupo parlamentario socialista de un proyecto de modificación de la Ley de Modalidades de Referéndum, «con el único objetivo de desbloquear el proceso autonómico del País Valenciano»<sup>997</sup>, extremo confirmado posteriormente por María Izquierdo<sup>998</sup>.

La proposición de ley, presentada a principios de febrero planteaba en su exposición de motivos la existencia de una laguna normativa que debía ser solucionada para aquellos procesos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley y sobre los que no debería aplicarse la obligatoriedad de referirse de forma expresa al artículo 151. Así pues, se demandaba la adición de una nueva Disposición 3ª que decía:

---

<sup>993</sup> *Ibid.*, pp. 5-6.

<sup>994</sup> En enero insistían de nuevo en que la polémica de las vías había quedado reducida a este territorio, en Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Proyecto de acción...; Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Programa autonómico...”, p. 2.

<sup>995</sup> En este sentido Josep M. Vallés afirmaba: «El PSOE parecía dispuesto a convertir la política autonómica en instrumento de desgaste del gobierno de UCD», Josep M. VALLÉS: “La política autonómica...”, p. 374.

<sup>996</sup> *El País*, 17 de enero de 1981.

<sup>997</sup> *El País*, 24 de enero de 1980. Se dio luz verde a aquella estrategia en una reunión entre Joan Lerma, Felipe González y María Izquierdo a mediados de enero, en Notas manuscritas (17 de enero de 1979), ABFPI, 79-D 3.

<sup>998</sup> La Secretaria de Política Autonómica aclaró que la autonomía de Canarias estaba pendiente de la interpretación del presidente del Congreso de los Diputados acerca de la vía elegida por esa comunidad, en *El País*, 27 de enero de 1980.

En el caso de que los acuerdos a que se refiere el apartado 1 del artículo 8º, se hubieran adoptado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, cumpliendo los requisitos señalados en el apartado 1 del artículo 151 de la Constitución, se procederá inmediatamente de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 8.º de esta ley<sup>999</sup>.

Acorde con este cambio de estrategia el PSOE pasó a considerar en un documento fechado a 16 de febrero, como anticonstitucional la vulneración de la libre opción de vías que suponía la ley orgánica propuesta en diciembre por el Gobierno y con la que hasta el momento se habían mostrado de acuerdo<sup>1000</sup>. Pero claro, a mediados de febrero no estaban ya por un pacto de Estado para las Autonomías con el Gobierno de UCD, no porque no estuvieran de acuerdo con éste en lo fundamental sobre el modelo de Estado, sino porque creían que a ese Gobierno le quedaba muy poco de vida y no tenían intención de alargarla:

Si no cometemos graves errores en el futuro inmediato, ante el país se ha abierto una mayor fuerza y con más confianza que nunca hasta ahora, la posibilidad de que los Socialistas puedan ser el núcleo fundamental de un Gobierno capaz de estabilizar la democracia y de hacer avanzar el proceso.

(...)

Dentro de breves días, se presentará una nueva investidura. (...) en la propia UCD no se cree que el nuevo Gobierno tenga las menores posibilidades de prolongar su vida hasta el final de la legislatura. Esto nos encara con una nueva crisis en un plazo muy limitado de tiempo. La salida de la misma pretenden que sea de elecciones anticipadas y nosotros tendremos que asumir la responsabilidad y oponernos a las mismas con una fórmula alternativa o de afrontarlas si ello no es posible o conveniente<sup>1001</sup>.

---

<sup>999</sup> BOCG: *Proposiciones de ley*, nº 125-I, 24 de febrero de 1981, pp. 453-454. Esta era la opción que Manuel Martínez Sospedra, de la Facultad de Derecho de la Universidad de València, había propuesto al PSPV-PSOE en el caso de que quisieran que la modificación sólo afectara al territorio del País Valenciano y quizá a Canarias, en Manuel MARTÍNEZ SOSPEDRA: “Desbloqueo del proceso autonómico del País Valenciano. Proposición de ley para la modificación de la LOMR. PSOE (PV)”, ABFPI, 75-A 8.

<sup>1000</sup> Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Principales gestiones de los Ministros de Administración Territorial por orden cronológico desde 1977” (Madrid, 16 de febrero de 1981), AHUV, Fons Alfons Cucó, 029.

<sup>1001</sup> Informe de gestión presentado al Comité Federal el 28 de febrero de 1981, aunque escrito antes del golpe de Estado, en PSOE: “Memoria. Informe de gestión I...”, p. 14.

#### 4. Un golpe frustrado y una nueva oportunidad para la armonización

A estas alturas no tiene sentido afirmar que los pactos autonómicos de julio de 1981 fueron producto del golpe de Estado<sup>1002</sup>, en todo caso el 23-F creó la oportunidad y las condiciones favorables para que culminara un acuerdo cuyos presupuestos básicos eran compartidos por los dos partidos mayoritarios desde 1980<sup>1003</sup>. Participamos plenamente, por tanto, del análisis de Luis Fajardo:

En resumen, tanto UCD como PSOE habían perfilado a lo largo de 1980 un modelo de desarrollo del Título VIII, y al menos las grandes líneas de salida para su implantación. Si comparamos los contenidos de la alternativa autonómica de cada uno de los dos grandes partidos habrá que destacar más sus similitudes y coincidencias que sus diferencias y discrepancias, en el camino hacia lo que terminaría integrado al año siguiente en los Acuerdos Autonómicos. Faltaba que se pusieran de acuerdo. Desde comienzos de la primavera de 1980 las direcciones de ambos partidos veían el pacto como inevitable. Lo harían a partir del acuerdo andaluz de octubre de aquel año. Así, el proceso hacia los Acuerdos Autonómicos estaba iniciado, incluso en su contenido, alcance y orientación antes del final del año 1980. No fue pues, el golpe de Estado de febrero de 1981, como muchos indican, lo que indujo a UCD y al PSOE a suscribirlos. La materia que sirvió de base a los Acuerdos estaba elaborada con antelación, en términos prácticamente idénticos a como finalmente sería recogida por éstos; y la disponibilidad a suscribirlos, con algunas reticencias del lado socialista, también había sido públicamente manifestada<sup>1004</sup>.

---

<sup>1002</sup> Entre los partidarios de esta interpretación: Antoni CASTELLS: “Cataluña y el Estado español en la perspectiva del Estado autonómico”, en Lluís ARMET (et alii): *Federalismo y Estado de las autonomías*, Barcelona, Planeta, 1988, pp. 171-172; Eugènia SALVADOR: “Crònica política”, en Lluís RECOLONS, Francesc CABANA, Eugènia SALVADOR y Salvador CARDÚS: *Catalunya 77/88*, Barcelona, Publicacions de la Fundació Jaume Bofill-La Magrana, 1989, p. 215; José Luis DE LA GRANJA, Justo BERAMENDI y Pere ANGUERA: *La España de los nacionalismos...*, p. 203; Enric COMPANYY y Francesc ARROYO: *Historia del socialismo...*, p. 77; Richard GILLESPIE: *Historia del Partido Socialista...*, pp. 371-372.; o José Antonio RUBIO: “Los nacionalismos vascos y catalanes ante la LOAPA: Ajustes y desajustes en los inicios del Estado de las Autonomías”, en *Historia Actual Online*, 5 (2004), p. 66.

<sup>1003</sup> En un sentido similar, Jordi Solé Tura: «El golpe de Estado del 23 de febrero demostró que aquel bloqueo era extremadamente peligroso, pues la incertidumbre y la incapacidad de hacer avanzar las cosas desconcertaban y desmovilizaban a la población y envalentonaban a los golpistas. En este sentido puede decirse que el 23 F fue como un detonante para salir de aquella estéril vía muerta». Jordi SOLÉ TURA: *Nacionalidades y nacionalismos...*, pp. 122-123.

<sup>1004</sup> Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo...*, p. 107.

Este punto era confirmado también por los líderes de los partidos firmantes, Leopoldo Calvo Sotelo<sup>1005</sup> y Felipe González, quien en una intervención en el Congreso para defender la LOAPA aseguraba lo siguiente: «Se ha dicho que la causa inmediata de la puesta en marcha de una dinámica de Pactos Autonómicos y de su derivación normativa, como es el caso de la LOAPA, está en el 23F. No se puede decir eso al Grupo Parlamentario y al Partido que represento, y no creo que sea legítimo decírselo a nadie»<sup>1006</sup>.

Aquel atentado a la democracia facilitó la firma de los pactos porque ambos partidos decidieron que aquello que ellos consideraban la crisis de la estructura del Estado era demasiado importante como para fingir diferencias de fondo que en realidad no existían; y porque en el caso particular del PSOE les ofrecía una coartada magnífica para abandonar definitivamente posiciones que hacía tiempo colisionaban con los intereses generales del partido y con los que ellos creían, eran los intereses generales de España. Entre los valores y principios que desde el inicio de la Transición había defendido el PSOE se habían terminado imponiendo los que querían construir una España unitaria, igualitaria y simétrica, y este era el momento de imponerla<sup>1007</sup>. Deseada por muchos desde hacía tiempo, pocas voces se alzarían en contra ahora. Y para ello los socialistas contaban –y esto no es una mera anécdota– con el beneplácito de un medio de incuestionable influencia entre los sectores progresistas, que ya durante las etapas

---

<sup>1005</sup> Aseguraba que aquella idea estaba presente en su discurso de investidura el 18 de febrero, negando por tanto que los pactos fueran producto del golpe, en Leopoldo CALVO SOTELO: *Memoria viva de la transición*, Barcelona, Plaza & Janés-Cambio 16, 1990, p. 38.

<sup>1006</sup> Además, confirmaba que su voluntad de acuerdos fue muy anterior a este momento: «muchos intervinientes han manifestado en esta tribuna que unos acuerdos autonómicos eran necesarios. Yo lo hice mucho antes de iniciarse estos acuerdos autonómicos, porque consideraba que, efectivamente, era un problema fundamentalmente de Estado que afectaba al desarrollo del conjunto de los pueblos de España y que exigía una política, lo más amplia posible, de acuerdo entre todas las fuerzas que integran la democracia española», en *Diario de sesiones del Congreso de los Diputados*, nº 251, 22 de junio de 1982, pp. 14543-14544.

<sup>1007</sup> Alfonso Guerra, en unas conversaciones con Miguel Fernández-Braso, recordaba aquellos momentos decisivos, y los explicaba demostrando cómo entonces, aunque muchos reconocían la existencia de identidades diferenciadas, habían decidido decantarse por la homogeneidad, la igualdad para todos, la gobernabilidad y la unidad de España. Según recogía Miguel Fernández-Braso: «Además de la tradición histórica políticamente expresada que era la catalana, vasca y gallega –aunque esta última puntualiza que menos desarrollada–, Alfonso Guerra reconoce que «había otras expresiones que habían buscado, como la andaluza, su identidad propia, pero que no había visto reflejada en un instrumento político esa realidad. Sin embargo, pensando en un Estado moderno se llega a conclusión en los años finales del setenta de que es preferible extender la autonomía al resto del Estado. Eso se hace de dos maneras y ambas igualmente legítimas, de manera que no hay que ponerse una venda en los ojos y hay que reconocer que históricamente ha habido dos procesos: uno, conciencia regional que busca su instrumento político, y otro, instrumento político que ahora está conformando una conciencia regional. A partir de ahí lo imperdonable es que se quieran hacer discriminaciones de un lado o de otro». Miguel FERNÁNDEZ-BRASO: *Conversaciones con Alfonso Guerra*, Barcelona, Planeta, 1983, p. 149.

anteriores se había mostrado inclinado en su línea editorial a favorecer la racionalización, el diario *El País*. De hecho, para su director, Juan Luis Cebrián, este era un tema crucial en la consolidación de la democracia, como muestra en su libro *La España que bosteza*, publicado a finales de 1980:

Dar contenido a una unidad española no basada sobre el concepto de su majestad católica, respetuosa de las características y tradiciones de cada comunidad, integradora de las diferencias y no asoladora de las mismas debe ser la gran tarea intelectual de nuestro tiempo. (...) Pero si fracasan los intentos que parece ha emprendido el ejecutivo de solventar la cuestión cuanto antes, habrá motivos serios para preocuparse. La UCD se encuentra empeñada en la consecución de un nuevo pacto de la Moncloa sobre el tema autonómico. No es seguro que éste resulte el mejor camino y no lo será si se repite la historia de los anteriores acuerdos, que ya hemos comentado. Pero, en cualquier caso, tampoco es probable que el gobierno tenga otra oportunidad después de ésta de arrojar alguna luz con visos de definición sobre el tema. La resolución del asunto autonómico antes de las próximas elecciones generales es esencial, si no se quiere poner al régimen en serio peligro. La irresponsabilidad que toda la clase política ha demostrado en el tratamiento de este asunto debe dar paso a la racionalización del proceso. Racionalización predicada tanto por la UCD como el PSOE, sin que luego sus actos hayan resultado ni coherentes ni consecuentes con la prédica. Y esta racionalización debe hacerse dentro de un espíritu escrupulosamente constitucional, y no sometándose a los dictados del oportunismo<sup>1008</sup>.

Tras el 23-F el PSOE vistió el traje de la «responsabilidad de Estado», labrándose una imagen que había perseguido ávidamente desde 1979 y que ahora podía representar más que nunca. Alfonso Guerra declaró en 1985, que ante el abandonismo del Gobierno, el PSOE tuvo que anteponer «su patriotismo solidario en defensa del sistema a sus intereses de partido». Y la firma de los Acuerdos Autonómicos fue una de las consecuencias más visibles de esta situación, ya que según este político, la «revertebración de España» era una «de las piedras de toque de la consolidación definitiva del sistema»<sup>1009</sup>.

Antes de esto, los socialistas ofrecieron un Gobierno de coalición a Calvo Sotelo, bajo los presupuestos aprobados en su Resolución Política del Congreso

---

<sup>1008</sup> Juan Luis CEBRIÁN: *La España que bosteza. Apuntes para una historia crítica de la Transición*, Madrid, Taurus, 1980, pp. 61-62. En una entrevista publicada en *El Socialista* en enero se expresaba en términos similares, *El Socialista*, 186 (del 31 de diciembre de 1980 al 6 de enero de 1981).

<sup>1009</sup> Alfonso GUERRA: “La Transición democrática en España”, en *Sistema*, 68-69 (1985), p. 13.

Extraordinario<sup>1010</sup>. La situación excepcional había llegado, y por ello el Comité Federal aprobó una Resolución Política el 1 de marzo que consideraba que «ante el riesgo vivido por las instituciones democráticas, España necesita que se forme un Gobierno con amplia mayoría parlamentaria y extenso apoyo social, ya que sólo un Gobierno de estas características podrá culminar con firmeza el proyecto democrático previsto en la Constitución» que solucionara los principales problemas de España, entre los que se encontraba la «construcción solidaria de las Autonomías»<sup>1011</sup>. El ofrecimiento, pese a todo, no excluía otro tipo de acuerdo, como anunció el 25 de febrero Felipe González en un discurso previo a la investidura del nuevo Presidente:

No nos guía más que el afán de la responsabilidad, el saber que una gran parte de la opinión pública, y probablemente una gran parte de esta Cámara, en su propia conciencia cree que ha llegado el momento de hacer ese esfuerzo solidario y colectivo. (...) El PSOE está dispuesto a afrontar las responsabilidades de gobierno que sean menester y también está dispuesto a afrontar la responsabilidad de cooperar con el Gobierno, sea cual sea su composición, si la tarea es una tarea que se encamina con firmeza, con rigor<sup>1012</sup>.

La proposición de formar un Gobierno de coalición fue rechazada por Calvo Sotelo que temía la desestabilización que esto podría provocar en el interior de su propio partido, ya muy dividido<sup>1013</sup>, pero se apresuró a ofrecer a cambio una «política de concertación» que pronto involucró al Partido Socialista. Desde el principio estuvo claro que esto incluía como paso inmediato la negociación del sistema autonómico, por lo que en la reunión del Comité Federal del 28 de febrero y del 1 de marzo se estableció

---

<sup>1010</sup> «Tan sólo ante eventos de extrema gravedad para la perduración del sistema democrático, el Partido Socialista debería consentir el sacrificio de aportar su colaboración a una política de estricta defensa del marco democrático, en colaboración con las demás fuerzas democráticas. Pero el riesgo que para el Partido comportaría esta eventualidad es tan considerable que obliga a rechazarlo salvo en casos de estricta supervivencia del proceso constitucional y democrático», en PSOE: «Resolución Política del Congreso Extraordinario...», p. 11.

<sup>1011</sup> «Resolución política» publicada en PSOE: «Memoria. Informe de gestión II. 29 Congreso», Madrid, 1981, p. 59. En aquella reunión del Comité Federal los días 28 de febrero y 1 de marzo, se insistió en que «no hay que caer en el error de una colaboración fuera del Gobierno. El Partido tiene que hacer todos los esfuerzos posibles por entrar en el Gobierno», en «Reunión del 28 de febrero de 1981», publicada en PSOE: «Memoria. Informe de gestión II...», p. 24. En un sentido similar véase el comunicado conjunto de UGT, JJSS y PSOE, en *El Socialista*, 194 (del 25 de febrero al 3 de marzo de 1981).

<sup>1012</sup> *El Socialista*, 195 (del 4 al 10 de marzo de 1981). Así se señaló también en la reunión del día 28 de febrero: «El mandato del Congreso dice “colaboración” y ésta puede hacerse desde el Gobierno o desde fuera del Gobierno», en Jaime BLANCO (Secretario de Actas): «Acta del Comité Federal» (28 de febrero de 1981), AFFLC, Fondo PSOE. Partido Socialista Obrero Español, 004061-002, p. 3.

<sup>1013</sup> «Esa pregunta estaba ya planteada antes del 23 de febrero, y adquirió, como es lógico, mayor y distinta significación después del golpe. Antes y después me parecía muy arriesgado proponer, desde una UCD profundamente dividida, un Gobierno de colación con un Partido socialista visiblemente sólido y sin problemas internos», en Leopoldo CALVO SOTELO: *Memoria viva...*, p. 41.

la obligación de «clarificar, definitivamente, la postura del POSE ante el proceso autonómico, DESBLOQUEANDO Aragón, Canarias<sup>1014</sup>, Valencia»<sup>1015</sup>. Y para ello fue necesario, en primer lugar, abandonar la reivindicación de la vía del 151 para el País Valenciano. La consecuencia más inmediata de aquello fue el olvido de las proposiciones de ley para modificar la ley de referéndum que estaban presentadas ante el Congreso por PCE y PSOE. Mucho después del tiempo previsto para su debate, estas fueron retiradas, sin hacer ruido y sin siquiera ser debatidas<sup>1016</sup>. Y aunque oficialmente, el PSPV-PSOE mantenía el apoyo a la vía del artículo 151 y la proposición de ley para modificar la ley de referéndum, como se estableció en una resolución del Comité Nacional del 15 de marzo<sup>1017</sup>, el mismo día 16, en una conversación telefónica, Lerma confirmaba presumiblemente a María Izquierdo, que aunque no seguirían manteniendo públicamente la defensa de la 151, había hablado con Fernando Abril Martorell «para ver si se incluía la Proposición de modificación de L.O. de Referéndum en el Pleno de la semana que viene en que nosotros la defenderíamos y la votaríamos para perder», aunque no sucediera finalmente así y sencillamente la dejaran olvidada en un cajón durante unos meses<sup>1018</sup>.

Así pues, sería excesivo asegurar que ante la posibilidad de discurrir por esta vía y de mantener en el Estatuto los símbolos que hasta ese momento reconocían los socialistas como identificadores de la nacionalidad valenciana, no lo hubieran hecho. Si la defensa de estos postulados no hubiera sido rechazada por parte de la sociedad civil y por el partido de Gobierno, que ni en Madrid ni en el País Valenciano facilitaba la rebaja de las tensiones, quizá el panorama habría sido distinto. Pero el hecho era que los sectores del PSPV-PSOE que creían en el País Valenciano que hasta entonces había defendido el partido, eran más bien minoritarios e iban perdiendo adeptos conforme se

---

<sup>1014</sup> Los socialistas retornaron a la Junta en una muestra de buena voluntad, *El Socialista*, 198 (25 al 31 de marzo de 1981).

<sup>1015</sup> Comité Federal del PSOE: “Anexo nº1. Propuestas de acción política en relación con la oferta socialista”, AFFLC, Fondo PSOE. Partido Socialista Obrero Español, 004061-002.

<sup>1016</sup> La proposición comunista fue retirada el 17 de marzo de 1981 y la socialista 9 de septiembre de 1981, mucho más tarde de que la vía del 151 fuera descartada. Véase respectivamente BOCG: *Proposiciones de ley*, nº 111-I 1, 28 de marzo de 1980, p. 420/1; y BOCG: *Proposiciones de ley*, nº 125-I 1, 18 de septiembre de 1981, pp. 454/1. En una opinión que hacía balance de la actitud socialista sobre el proceso autonómico del País Valenciano, el ex dirigente José Luis Albiñana sentenciaba en este sentido: «en la duda de la incertidumbre, primaron más las decisiones accidentalistas, sobre las esenciales. Éstas, requerían grandes dosis de entereza y coraje, mientras que aquellas, con la complicidad de las cobardías, ganaban más voluntades», José Luis ALBIÑANA: “Sobre la preautonomía...”, p. 65.

<sup>1017</sup> Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE: Comunicado sobre la resolución del Comité Nacional (30 de marzo de 1981), AHUV, 073/004.

<sup>1018</sup> Nota manuscrita “Información sobre el País Valenciano” (16 de marzo de 1979), ABFPI, 75-A 4.



veía que tampoco la población estaba mayoritariamente por estas cuestiones. El blaverismo había hecho mella en muchos sectores y para aquellos para los que la autonomía era sobre todo una cuestión de ampliar las libertades y la democracia, de acercar más el poder al pueblo, de conseguir una mayor racionalización...pero no de afirmar una nación diferenciada a la española, la batalla empezaba a perder su sentido. Así, sectores como el que representaba Ximo Azagra, podrían suscribir sus palabras cuando afirma: «Incorporar la dreta al projecte autonòmic va esdevenir un objectiu prioritari. No en va l'Estatut Autonòmic era no tant una reivindicació identitaria en el nostre cas, com un element més d'avanç en l'eficàcia de la gestió i en la cohesió social a través d'una profunda reestructuració de l'Estat»<sup>1019</sup>.

De esta manera se fueron improvisando las nuevas directrices autonómicas en un partido que tuvo que hacer frente a sus propias contradicciones internas, a una Ejecutiva Federal que tampoco estaba por la labor, a una militancia y a unos votantes poco concienciados y a la necesidad de pacto con la UCD. Y poco a poco se fue aplicando el pragmatismo y la improvisación a la política autonómica, mostrando la ausencia real de un modelo nacional-cultural propio para el País Valenciano. Como señala en sus memorias el alcalde socialista Ricard Pérez Casado:

La izquierda se encogió, acaso porque no lo tuvo claro, o no quiso tenerlo, cuando el adversario en un principio estaba a la defensiva. Puede que de algún modo se sintiera aliviada de prescindir del inconveniente identitario, al menos del valenciano (...). Puede, eso sí, que respiraran con tranquilidad todos los padres putativos del retorno, desde Abril Martorell y Attard, hasta mi amigo Alfonso Guerra, y los por entonces obsecuentes García Miralles, Lerma y los demás<sup>1020</sup>.

Su voluntad de mayoría y su tradición ideológica les alejaba de un nacionalismo de herencia fusteriana que Lerma llegó a calificar meses después de la crisis del Consell, según el ex-presidente de esta institución, como «un nacionalismo de probeta, de Universidad, que no tenía arraigo popular»<sup>1021</sup>. No era, en cambio, el caso del grupo nacionalista que lideraba Cucó, grupo que sí comenzó a denunciar –aunque sin salirse

---

<sup>1019</sup> Joaquín AZAGRA y Joan ROMERO: *País complex: canvi social i polítiques públiques en la societat valenciana (1977-2006)*, Valencia, PUV, 2007, p.170.

<sup>1020</sup> Ricard PÉREZ CASADO: *Viaje de ida. Memorias políticas, 1977-2007*, Valencia, PUV, 2013, p. 191.

<sup>1021</sup> José Luis Albiñana, 15 de mayo...

del partido— el giro que se estaba produciendo en la Federación valenciana y que por supuesto estaba apoyado por el PSOE a nivel estatal. En cambio, participaron directamente en esta maniobra que supuso la salida del Consell, que implicaba las primeras cesiones ante una política cada vez más inclinada a un mayor centralismo. El porqué de esta implicación puede intuirse, ya sea en la rivalidad con el grupo de Albiñana, al competir por el mismo espacio político dentro de la formación y en la voluntad de mantener el poder y sobrevivir ante la deriva pragmática del socialismo español; o en la creencia de que el proceso autonómico necesitaba deshacerse del lastre y de la imagen de crispación, comenzando una política de consenso y de cesiones para avanzar en la construcción, sino del País Valenciano soñado, al menos del que permitieran construir las circunstancias. En abril de 1981 un Cucó que se intuía desencantado pero que se mantenía en el Partido escribía:

Utilitzant l'autonomia com arma estrictament electoral, potenciant al màxim un populisme feixistoide, s'ha negat al pacte cultural i a la creació d'un equilibri polític. Ha enfrontat la «valenciania» al «valencianisme», assumint la màxima responsabilitat del caos i la nit en el que el nostre poble es debat. No són òbviament, tampoc, els únics responsables: la debilitat acomodaticia i el maximalisme irresponsable són, també, factors que algun dia caldrà examinar amb equilibri i lucidesa. Però mai des de l'apatia sinó, sempre, des de l'esperança i la reivindicació<sup>1022</sup>.

En cuanto a las negociaciones entre UCD y PSOE, los primeros contactos se produjeron en marzo, cuando el Presidente del Gobierno se reunió con los principales partidos parlamentarios para tratar las cuestiones relativas al golpe, pero también el tema autonómico. Calvo Sotelo ha escrito en sus memorias que ya en aquellos días encontró una fuerte sintonía con el líder socialista:

Desde el primer momento encontré, sorprendentemente, en Felipe González, la misma preocupación que yo tenía y el apoyo que yo necesitaba (...). Creí ver claro en aquellas primeras conversaciones que sólo el PSOE —venido en este punto a la ética de la responsabilidad— era capaz de mantener, con UCD, una actitud de gobierno, acaso porque sospechaba que iba a gobernar pronto; y pude comprobar más tarde la que me atrevo a llamar dimisión de los restantes partidos en cuanto a la construcción de la

---

<sup>1022</sup> *Levante*, 11 de abril de 1981.

España de las Autonomías: era ciertamente más fácil, y quitaba menos votos, no ceder a nadie en el entusiasmo autonómico que pretender racionalizarlo<sup>1023</sup>.

La sensación en Felipe no sería la misma, de las primeras reuniones extraería la conclusión, que se mantuvo durante todo el proceso por parte del Partido, que el Gobierno no tenía iniciativa ni programa, y que aunque Calvo Sotelo veía en la autonomías un tema urgente al creer que era el problema que más «irritaba» a los militares, se desentendía en materia práctica reconociendo «entender poco» del tema, delegando por tanto este asunto en Martín Villa<sup>1024</sup>. El propio Calvo Sotelo reconocía después que tras el escándalo andaluz «nadie, ni en el Gobierno, ni en UCD, ni en la oposición tenían las ideas claras»<sup>1025</sup>. Pero este hecho fue visto en parte como una oportunidad, ya que, conscientes de que en aquel momento no podían realizar sólo una política de oposición, y aceptando que la única alternativa posible era la de la concertación, la «no oferta» les permitía al menos llevar la iniciativa, pese a que en realidad fuera una tarea que correspondía al Gobierno<sup>1026</sup>.

Mientras el Gobierno gestionaba la posibilidad de organizar un equipo de técnicos para que elaborara un primer informe, el aparato del PSOE asumió rápidamente su nuevo cometido y preparó una campaña extraordinaria «por la Libertad y la Constitución» para confirmar que en España no existía una vía alternativa a la democracia. Dentro de la misma elaboraría un documento sobre la situación política que fue divulgado durante el mes de abril. Abundaba en las cuestiones referidas a su papel como elemento estabilizador y responsable, y señalaba que el primero de los problemas que amenazaban la democracia española era «la herencia patológica en la estructura territorial del Estado y en las reivindicaciones nacionalistas»<sup>1027</sup>. Esgrimiendo la

---

<sup>1023</sup> Leopoldo CALVO SOTELO: *Memoria viva...*, p. 107.

<sup>1024</sup> Así se informa de las primeras reuniones entre Calvo Sotelo y Felipe en la reunión de la Secretaría de Política Autonómica del 31 de marzo de 1981, en Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Reunión entre la Secretaría Federal de Política Autonómica y senadores socialistas, el día 31 de marzo de 1981, para debatir el tema de la ley de armonización en las C.C.A.A.”, ABFPI, 75-E 2, p. 2.

<sup>1025</sup> Leopoldo CALVO SOTELO: *Memoria viva...*, p. 105.

<sup>1026</sup> Pese a todo, en la reunión se escucharon quejas de la falta de una política autonómica coherente y homogénea en el propio Partido Socialistas, expresadas por el representante canario, Alberto de Armas, en Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Reunión entre la Secretaría Federal...”, pp. 3-4.

<sup>1027</sup> Con una argumentación un tanto confusa, a continuación legitimaban y potenciaban la identidad nacional española, mientras que decían hacerlo –con un cuestionable razonamiento– para defender la identidad de las nacionalidades periféricas: «En España, la unidad estatal y nacional debe ser profundamente asimilada por la totalidad de la población y por la totalidad de las fuerzas políticas sociales. Esta asimilación de la unidad estatal y nacional, así como de sus elementos simbólicos, es necesaria para proteger y defender las identidades de las nacionalidades, fundamentalmente en la periferia, nacionalidades que, con frecuencia, tienen un importante historial de agravios. Deben superarse

necesidad de una política conjunta con el Estado para prevenir actitudes anticonstitucionales, defendían que había que «poner fin definitivamente a las tendencias centrífugas que se han manifestado en la política española. Ello es también necesario para que todos los ciudadanos españoles tengan clara conciencia del modelo de Estado Autonómico, modelo que tiene que significar un Estado tan firme y tan fuerte como pueda serlo un Estado centralista». Además, hablaban de un modelo que transfiriera todas las competencias, no en un plazo de 3 años, sino en un horizonte de 20 o 25, porque debía situarse el proceso en una concepción temporal razonable y «en una concepción firme del Estado final», añadiendo que:

la política autonómica tiene que realizarse sin atender a intereses sectarios o partidistas que puedan haber llevado incluso a financiar partidos regionales de claro significado centrifugador. En definitiva, el apoyo al Gobierno constitucional obliga a intentar llegar a acuerdos precisos y concretos para completar el proceso autonómico con un objetivo de Estado y no con un objetivo partidista<sup>1028</sup>.

Un concepto de Estado-nación –que además enlazaba con la tendencia de desconfianza hacia los «nacionalismos» que el socialismo había reforzado desde las elecciones autonómicas de marzo de 1980–, que a buen seguro decepcionó a buena parte del PSC-PSOE, que al menos en su línea oficial, se había pronunciado a lo largo del mes de marzo por una respuesta a las amenazas democráticas de signo muy distinto. Tanto en el Informe político de Joan Reventós al Consell Nacional, como en la Resolución del Consell Nacional «sobre la situació política del moment», ambos del 8 de marzo de 1981, se advertía contra la política regresiva que el Gobierno de Calvo Sotelo trataría de imponer a partir de los sucesos del 23 de febrero. Se referían a los peligros de «desnaturalización» de la autonomía catalana y a la necesidad de que las fuerzas catalanas se aliaran para evitarlo<sup>1029</sup>. Para ello apostaban como salvaguarda de

---

de una vez los endémicos conflictos entre centro y periferia, entre la Nación-Estado y las nacionalidades integradas en ella. Agravios y discriminaciones no han contribuido a la estabilidad de una democracia nueva y frágil», en Comisión Ejecutiva Federal del PSOE: “Los problemas de la democracia” (abril 1981), AHUV, Fons Alfons Cucó, 019/012, p. 4

<sup>1028</sup> *Ibid.*, p. 8

<sup>1029</sup> De hecho, Reventós avisaba de que no podía seguirse la misma estrategia que se había planteado en el congreso de julio de 1980: «Des del 20-M fins ara haviem vingut realitzant una acció difícil i complexa que comportava una política d'oposició i d'alternativa alhora que de coincidència institucional per la construcció de les institucions autonòmiques. L'objectiu era enfortir el Partit en la previsió d'unes eleccions generals anticipades. Avui les nostres responsabilitats prioritàries han passat a ésser unes altres degut a l'amenaça que pesa sobre la democràcia, sobre l'autonomia i sobre les institucions autonòmiques», en PSC-PSOE: “Informe polític del 1er Secretari Joan Reventós al Consell Nacional. 8 de març del 1981 – Resolució del Consell Nacional sobre la situació política del moment”, APSC, 9.1.27.

los derechos autonómicos, por el pacto entre PSOE y UCD, ya que los socialistas serían los garantes de estos e impedirían una política de cesión frente a la voluntad conservadora y a los designios del estamento militar. Las mismas preocupaciones eran expresadas en la publicación interna del Centre d'Estudis Socialistes vinculado al PSC-PSOE, en su número dedicado a «Reflexions entorn el cop» escrito por Joan Barril. Ante la ofensiva golpista hacia las autonomías, según mantenían, algunos partidos estatales habrían secundado de forma parcial este ataque, por ejemplo con la propuesta de ley de armonización que el Gobierno tenía que presentar al Congreso, viendo en las autonomías «la donzella idònia que caldrà sacrificar per apaivagar les ires del drac colpista». La solución, estaba una vez más, en el éxito de la oferta del PSOE: «Aquest doncs és un bon moment, malgrat la desigual correlació de forces, per que tant el govern Calvo Sotelo com per la seva banda el Partit Socialista portin a terme una política d'apropament i de informació mútua que permeti recuperar la iniciativa del poder civil constitucional a mig termini»<sup>1030</sup>.

Se hablaba también en esta publicación de la presentación de una ley de armonización que el Gobierno tenía que presentar de forma inminente ante el Senado. Se trataba de una solicitud ante las Cortes para que estas apreciaran la necesidad de tramitar una ley para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas sobre determinadas materias y principios, tales como la utilización de los concepto «nación» y «nacionalidad»; sobre la garantía del uso y la enseñanza de la lengua castellana en todo el territorio del Estado y de las lenguas propias en sus respectivas nacionalidades; o sobre cuestiones relacionadas con el uso de las banderas. Esta proposición del Gobierno fue aprobada en el Consejo de Ministros el 22 de diciembre de 1980, pero no fue debatida hasta el 31 de marzo de 1981<sup>1031</sup>. Pese a las impresiones negativas que esta posibilidad ejerció entre los partidos con sensibilidades identitarias alternativas a la española, el socialismo español lo aceptó en amplios

---

<sup>1030</sup> Unas páginas después añadían: «El cop d'Estat, en fi, ha donat al Partit Socialista la oportunitat definitiva de consagrar-se com la única força moral que pot mantenir la dignitat del país», en *Documentació mensual*, 3 (marzo de 1981).

<sup>1031</sup> Martín Villa, padre del proyecto lo explicaba así: «Se pretendía, entre otras cosas, que en la legislación de las comunidades autónomas los términos nación y nacional se aplicaran únicamente a la nación española; que en las comunidades que tienen lengua propia, ésta y el castellano coexistieran en pie de igualdad». Y sobre la fecha de su debate añadía: «Se pensó entonces, y sin ninguna razón, que este proyecto de ley de armonización, así como las sucesivas medidas que mi departamento había adoptado – muchas de ellas varios meses antes– con el fin de racionalizar el hasta entonces desordenado proceso autonómico, respondían, o eran consecuencia, del 23 de febrero. Nada menos cierto», en Rodolfo MARTÍN VILLA: *Al servicio...*, p. 192.

sectores de buen grado. Ya hemos visto cómo en el documento de abril el CEF del PSOE abogaba por asimilar la unidad estatal y nacional de España, «así como de sus elementos simbólicos», lo que si no era una alusión directa a esta ley, al menos evidenciaba sus simpatías hacia un proyecto de esta índole. Por otra parte, Félix Santos, columnista de *El Socialista* que comenzó a escribir asiduamente crónicas sobre el tema autonómico a en aquellos meses, celebraba el «indiscutible buen sentido» del Gobierno de Calvo Sotelo al hacer público «su propósito de acelerar el proyecto de Ley aprobado el 22 de diciembre pasado sobre el uso de la bandera nacional en lugar preferente en relación con las banderas de las comunidades territoriales, sobre el uso oficial del castellano en la comunicación entre las comunidades autónomas con el Estado y de las comunidades autónomas entre sí, y sobre el uso de los términos *nación*, *nacionalidad* y *nacional*»<sup>1032</sup>.

En el debate parlamentario, los socialistas catalanes, representados por Joan Prats, se abstuvieron como había expresado internamente el portavoz del grupo socialistas catalán, Andreu i Abelló, al tratarse de una ley peligrosa de difícil explicación al electorado catalán<sup>1033</sup>. Por su parte, los partidos de implantación nacional, incluyendo al PSOE y al PCE, votaron afirmativamente, reconociendo la existencia de condiciones para la presentación de la ley por parte del Gobierno, aunque socialistas y comunistas se reservaron su posición sobre el fondo hasta no conocer el contenido de la misma<sup>1034</sup>.

Las diferencias entre la dirección del PSC-PSOE y la del PSOE sólo acababan de comenzar, y conforme se fueron conociendo detalles sobre las condiciones del pacto

---

<sup>1032</sup> *El Socialista*, 196 (del 11 al 17 de marzo de 1981).

<sup>1033</sup> Este representante informó de esto en una reunión de la Secretaría política, indicando que Reventós y el coordinador de los grupos parlamentarios catalanes, Martín Toval, le habían dado instrucciones de abstenerse. En general, la actitud de los presentes era de precaución al no haber sido consultados por el Gobierno sobre esta materia, en Secretaría de Política autonómica-PSOE: “Información sobre la situación del proceso autonómico en cada comunidad”, ABFPI, 75-E 2. Véase el debate en *Diario de Sesiones del Senado*, nº 98, 31 de marzo de 1981.

<sup>1034</sup> Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo...*, p. 113. Aunque la iniciativa tuvo éxito, el proyecto no fue tramitado, pero el grupo socialista llegó a presentar en mayo una enmienda a la totalidad a la propuesta de UCD. En esta se puede observar cómo, por ejemplo, los socialistas proponían permitir sólo el uso de «nación» para la comunidad española; en cambio «nacional» podía ser utilizado también para definir los elementos identitarios de las «nacionalidades», siempre que a este concepto le acompañara «la alusión expresa a la nacionalidad en cuestión», en Grupo socialista del Congreso: Enmienda al Proyecto de Ley por el que se establecen los principios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas sobre determinadas materias (29 de mayo de 1981), ABFPI, 75-B 4.

UCD-PSOE muchos comenzaron a decepcionarse<sup>1035</sup>. Es posible que esto haya contribuido a fomentar la idea de que aquella amenaza a la joven democracia española no sólo ayudó a iniciar el clima de consenso, sino que además, condicionó los presupuestos del mismo. Jordi Solé Tura es tajante en este sentido, y con buen criterio defiende que los pactos no pueden explicarse sólo por la presión de los sectores involucionistas. Los dos partidos firmantes no se colocaron a la defensiva y cedieron sin más frente a las presiones de la derecha, para este autor, una explicación más satisfactoria tendría que ver con lo siguiente:

Lo que ocurría es que, después de la puesta en marcha de las cuatro primeras Comunidades Autónomas por la vía del artículo 151 de la Constitución se planteaba el problema de si las demás Comunidades debían seguir la misma vía o era mejor conducir las por la vía del artículo 143 y en plantear las soluciones estatutarias de una determinada manera. Concretamente, la UCD deseaba un proceso ordenado desde arriba para evitar nuevos conflictos que, como el de Andalucía, acabasen por desmembrarla. Por su parte, el PSOE quería consolidarse como alternativa dentro de un esquema bipartidista. En las Comunidades Autónomas que quedaban por constituir ambos partidos eran mayoritarios y de ahí que la coincidencia de sus intereses acabase convirtiéndose en un acuerdo sobre la manera de desbloquear el proceso y acabar de configurar el mapa autonómico.

Precisamente porque ambos partidos coincidían en un planteamiento bipartidista general, deseaban contar también con mecanismos que, en último término, les permitiesen controlar las posibles tensiones y tendencias centrífugas de las Comunidades Autónomas ya constituidas y en las que ni uno ni otro eran mayoritarios<sup>1036</sup>.

---

<sup>1035</sup> Como ha denunciado José Antonio González Casanova, fue en aquella etapa cuando según él: «Empecé a darme cuenta de que los dirigentes del PSOE no eran tan convencidos autonomistas como yo y que compartían con ucedistas y fraguistas una serie de tópicos sobre la unidad de España». Y aunque fue tras el 23-F cuando al parecer despertó a esta realidad, relaciona el cambio con la inesperada derrota en las elecciones catalanas a principios de 1980, ya que, creyendo que Cataluña sería la primera comunidad autónoma gobernada por los socialistas, la realidad provocó un cambio de estrategia: «Al verse alejados del Poder (...) en Cataluña, muchos pusieron su esperanza en el felipismo, mientras que Joan Reventós y sus seguidores más inmediatos perdían puntos ante la visión pragmática de la cúpula sevillana del PSOE», en José Antonio González CASANOVA: *Memoria de un socialista...*, p. 314.

<sup>1036</sup> Jordi SOLÉ TURA: *Nacionalidades y nacionalismos...*, pp. 123-126. Por su parte, César de los Ríos y Carlos Elordi, en un análisis que compartía las ideas básicas con el anterior, escribían: «Más adelante, y con el acicate del 23 de febrero por medio, una nueva reflexión sobre los “peligros de fragmentación”, un idéntico temor a los nacionalismos, motivarían el apoyo socialista a la LOAPA», en César ALONSO DE LOS RÍOS y Carlos ELORDI: *El desafío...*, p. 38.

Para los socialistas este esquema bipartidista estaba amenazado por los «nacionalismos», y ni el miedo a la fragmentación de la estructura política que ponía en peligro el éxito electoral por el que habían trabajado; ni, por supuesto, el temor a la fragmentación de la unidad española, eran nuevos tras el intento del golpe de Estado. Y este último es otro aspecto a tener en cuenta, sin el cual no se entendería, no ya la deriva de 1981, sino la trayectoria global del PSOE. De la misma manera que el componente sentimental e identitario se encuentra en los cimientos de cualquier proyecto político en un partido «nacionalista», o de sensibilidad catalanista –como sucede con el PSC–, no puede ser ignorado en los partidos «nacionales» como el Partido Socialista Obrero Español.

Este era pues, el clima en el que se iniciaron las negociaciones, que se concretaron a principios de abril en un documento que dejaba claro los términos de las mismas a partir de tres puntos fundamentales: 1) «establecer el modelo global del Estado de las Autonomías dentro del marco de la Constitución»; 2) «respeto a los procesos políticos en curso»; y 3) articular «la estructura administrativa que ha de resultar del sistema autonómico» y dictar «las disposiciones normativas que sobre competencias del Estado prevé el artículo 149 de la Constitución». Por último, acordaron nombrar una Comisión de Expertos, independientes designada de mutuo acuerdo y encabezada por Eduardo García de Enterría, para formular una propuesta con las soluciones pertinentes<sup>1037</sup>. En esta reunión se dejaron establecidos también algunos puntos esenciales, como el hecho de que a partir de aquel momento se reconducirían todos los Estatutos por la vía del 143; que todas las Comunidades Autónomas poseerían las mismas instituciones: Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno y Tribunal Superior de Justicia; o que en lo que respectaba a la cuestión competencial debía acordarse un criterio general y establecer «cierta homogeneidad» para evitar el agravio comparativo y encauzar la gobernabilidad<sup>1038</sup>. La Comisión, por su parte fue constituida el día 7 de abril<sup>1039</sup>, y aunque algunos autores han insistido en señalar la práctica

---

<sup>1037</sup> Nota de prensa conjunta de L. Calvo Sotelo y F. González el 3 de abril de 1981, ABFPI, 74-H 4.

<sup>1038</sup> Anexo adjunto a la nota de prensa con lo que parecen ser las bases mínimas para el acuerdo, en Anexo, ABFPI, 74-H 4. Felipe González aclararía que de momento aquel acuerdo no implicaba una solución, sino que implicaba sólo que se podía estar llegando a un consenso sobre la manera de resolver el problema, en *El País*, 4 de abril de 1981.

<sup>1039</sup> Los miembros designados fueron: Tomás Ramón Fernández, Luis Cosculluela, Francisco Sosa Wagner, Tomás Quadra Salcedo, Santiago Muñoz Machado, y Miguel Sánchez Morón, en Acuerdo del 7 de abril, en ABFPI, 74-H 4. Según cuenta Miguel Herrero de Miñón, el Presidente de esta Comisión, Eduardo García de Enterría, contaba desde hacía tiempo con una gran influencia no sólo en UCD sino



inexistencia de directrices recibidas<sup>1040</sup>, como demuestra el testimonio de Calvo Sotelo, quizá fueran escuetas pero sí hubo algunas, que tenían que ver con las preocupaciones ya mencionadas, y especialmente, con la generalización del hecho autonómico<sup>1041</sup>.

Desde entonces hasta la firma de los Acuerdos Autonómicos el 31 de julio de 1981, PSOE y UCD fueron los principales actores del que debía ser un pacto de Estado, al que invitaron al resto de fuerzas políticas una vez se habían llegado a los consensos básicos de forma bilateral. Hasta que se llegó a un acuerdo de principio en torno al Informe Enterría, los socialistas siguieron quejándose de que el Gobierno no tenía programa autonómico y de haber tenido que ir azuzando a UCD, que intentaba dilatar el proceso<sup>1042</sup>. Pero en todo este tiempo nunca se cuestionó la racionalización, la

---

también el PSOE, en Miguel HERRERO DE MIÑÓN: “La gestación del sistema autonómico español: claves del sistema constituyente”, *Revista Vasca de Administración Pública*, 36 (II) (1993), p. 35.

<sup>1040</sup> Fajardo Spinola aseguraba que: «el Informe de la Comisión de Expertos elaboró sus propuestas sin condicionamientos ni criterios directores», en Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo...*, p. 115; por su parte César Alonso y Carlos Elordi señalaban que la nota de encargo no contenía recomendaciones ni sugerencias más que dar una salida «racional» al proceso. Lo mismo han asegurado dos de los protagonistas, el Secretario de la Comisión Santiago Muñoz Machado y Tomás Ramón Fernández, para quien ni UCD ni PSOE «sabían bien qué querían. Quizá si les hubiéramos entregado un informe distinto, les habría parecido también bien», en César ALONSO DE LOS RÍOS y Carlos ELORDI: *El desafío...*, p. 149; y Santiago MUÑOZ: *Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo*, Barcelona, Crítica, 2012, pp. 41-42.

<sup>1041</sup> Una cuestión que quedó sin resolver con la Constitución y que necesitaba ser regulada según Calvo Sotelo: «No consta que los Padres Constituyentes hubieran creído que sólo iban a deducirse del Título VIII tres o cuatro Comunidades Autónomas, (...) pero aunque así hubiera sido, nadie ponía ya en duda a principios de 1981 la extensión del sistema a toda España; y esta convicción exigía una ordenación global del proceso, que no se entendió necesaria, o no fue posible, en 1978», en Leopoldo CALVO SOTELO: *Memoria viva...*, p. 109. Por otra parte, un día antes de nombrar la Comisión se establecieron por escrito algunos aspectos sobre la misma, su funcionamiento y su razón de ser. En este documento de 6 páginas, aunque se dejaba claro desde el principio que la Comisión actuaría con plena independencia y que las instrucciones que les dieran no debían ser demasiado estrictas, sí se hacía una sugerencia detallada de los temas a tratar, entre los que por ejemplo encontramos el establecimiento de criterios generales para un desarrollo ordenado del Título VIII, la delimitación del mapa autonómico y de los plazos para su ejecución; o el estudio de un «régimen especial para encajar en el sistema general a las dos autonomías ya en marcha (Cataluña y País Vasco), más a Galicia, con Estatuto ya aprobado, marcha que no se pretende detener, así como a las demás con procesos avanzados», en “Nota sobre trabajo de la Comisión de Expertos en el tema autonómico» (6 de abril de 1980), ABFPI, 74-H 4.

<sup>1042</sup> Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Reunión de Secretarios Generales y Ptes. Preautonómicos, con la Secretaría de Política Autonómica, el día 20-IV-81”, ABFPI, 75-E2. En un informe del CEF presentado ante el Comité Federal en junio de 1981, hacían el siguiente análisis de esta falta de iniciativa: «En los problemas autonómicos, el Gobierno teme a las iniciativas que pueda asumir y al coste político que estas puedan suponerle. Pero está claro que a quien corresponde asumirlas principalmente es a quien gobierna y no al Partido en la oposición. ¿Cómo se pueden alterar las reglas normales de juego de poder-oposición haciendo el Partido Socialista la oferta programática y tomando la iniciativa en cada uno de los problemas dejando al Gobierno la oportunidad de pronunciarse después?», en PSOE: “Memoria. Informe de gestión I...”, p. 17. Durante este tiempo el PSOE fue desarrollando un plan cronológico y estableciendo las prioridades para la concertación con el Gobierno. Se trataba de definir aquellos aspectos que no estaban todavía decididos sobre un modelo general que estaba claro desde finales de 1980. Véase Esquema de prioridades para una concertación en materia de política autonómica”, ABFPI, 74-H 4; “Prioridades de temas a tratar en una posible negociación”, ABFPI, 75-F 3; o Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Reunión de la Secretaría de Política Autonómica con los Senadores socialistas, el

generalización, la igualación y homogeneización que se iba a imponer desde el Estado, motivo por el cual ni CiU ni el PNV se sentaron a debatir<sup>1043</sup>, lo que les convirtió en los exponentes de la lucha por las libertades nacionales y las competencias amenazadas en sus respectivos territorios, dañando la imagen autonomista tanto del PSE-PSOE como especialmente del PSC-PSOE, que sí tenía una trayectoria reconocida en este sentido<sup>1044</sup>. Tanto en el PSOE como en UCD estaban decididos a imponer la simetría al Estado español, pero el coste de tal acción podía ser mayor para los primeros, y ellos lo sabían. Los análisis internos hablaban de que una parte de la opinión pública consideraba que el partido estaba manteniendo una postura de recorte», una imagen que querían reconducir, explicando que se trataba de sencillamente de una postura sensata para hacer avanzar a las autonomías<sup>1045</sup>. Para ello, exaltaron el valor de la política de concertación, del consenso, que dijeron no debía de haberse abandonado nunca; insistieron en la necesidad de salvar la democracia; y acentuaron un discurso según el cual eran los socialistas los encargados de arreglar el desastre autonómico de UCD, que tras generalizar las autonomías irresponsablemente con Clavero y la «tabla de quesos»

---

día 13-V-81”, ABFPI, 75-E 2. Como ha señalado Fajardo Spinola, a partir del Informe Enterría «se avanzó rápido en casi todo, con coincidencia expresamente manifestada de todos en prácticamente todas las propuestas de aquellos informes; dos fueron los grandes temas de disenso: la modificación del sistema electoral de las Diputaciones provinciales» y un tema de financiación, en Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo...*, p. 117.

<sup>1043</sup> Calvo Sotelo decía no entender por qué aquellos se negaron a negociar la racionalización del modelo y la futura LOAPA: «Pensaba yo entonces que una ordenación así tendría que ser grata a las Autonomías históricas vasca y catalana, a cuyos Estatutos no podría legalmente afectar: el hecho de que los demás se negociaran dentro de un marco común no haría sino destacar la singularidad de los primeros, fruto de una negociación exenta, y conduciría a una España Autonómica de dos velocidades, como catalanes y vascos deseaban (...) No supimos desarmar los recelos de vascos y catalanes, que fueron los más eficaces opositores de los Pactos Autonómicos –unos pactos, sin embargo, pensados para los demás». Aunque él mismo ofrecería otra visión que añadía un factor más sobre por qué no se dio un acuerdo que permitiera incluir a los nacionalistas vascos y catalanes: el hecho de que el PSOE recelara de una alianza entre UCD y los nacionalismos, especialmente con CiU, pacto por otra parte denunciado insistentemente desde el socialismo catalán y español: «En los últimos días de julio (...) intenté llevar a la mesa de negociación con el PSOE algunas propuestas *transaccionales* que me había enviado Roca: la posición de Guerra fue de cerrada negativa. Me sorprendió su rigidez: pensé que se temía un acercamiento electoral UCD/CiU», en Leopoldo CALVO SOTELO: *Memoria viva...*, pp. 109-116. En el mismo sentido Martín Villa relataba: «Hubiera sido posible una tramitación más flexible de la ley si la soberbia y prepotencia socialista, (...), no hubiera impedido un acuerdo en determinados aspectos con los nacionalistas», en Rodolfo MARTÍN VILLA: *Al servicio...*, p. 194.

<sup>1044</sup> Manuel Montero defiende que la LOAPA favoreció la radicalización política y las posturas victimistas del PNV que «pudo rasgarse las vestiduras ante las dudas, vacilaciones, o intentos racionalizadores del Gobierno», en Manuel MONTERO: “La transición y la autonomía vasca”, en Javier UGARTE: *La transición en el País Vasco y España*, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1998, p. 114; véase también Javier CORCUERA: “Los derechos históricos ¿Un instrumento para la desarticulación de la nación española?”, en Fernando MOLINA y José Antonio PÉREZ (eds.): *El peso de la identidad. Mitos y ritos de la historia vasca*, Madrid, Marcial Pons, 2015, p. 167. En cuanto a Cataluña, Borja de Riquer, mantiene que la situación de amenaza a la autonomía permitió que Pujol pasara a ser visto como el defensor a la misma, radicalizándose el nacionalismo y perjudicando profundamente la imagen del PSC-PSOE, en Borja DE RIQUER: “La configuración...”, p. 488.

<sup>1045</sup> Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Reunión de Secretarios Generales y Ptes...”

se había asustado frenando en seco el proceso y creando un problema aún mayor<sup>1046</sup>. Cuando todo esto no funcionó para neutralizar la campaña en contra de los Acuerdos y la futura LOAPA, que provenía sobre todo del nacionalismo catalán y vasco, pero también de los sectores progresistas, sobre todo del catalanismo, contraatacaron con una crítica feroz a los «nacionalismos insolidarios», cuestión en la que profundizaremos más adelante.

En junio de 1981 elaboraron un documento que materializaba la culminación del cambio de estrategia del Partido iniciado desde 1979. Ejerciendo de partido que profesaba su responsabilidad de Estado como ningún otro, incluyendo al Gobierno al que acusaban de no llegar a acuerdos en muchos problemas decisivos de la democracia y de ir a remolque de las iniciativas socialistas en aquellos temas donde sí se pactaba, el 15 de junio publicaron «El PSOE ante la situación política», formulado con la vocación de ser la guía del proyecto político del partido en aquella complicada coyuntura. Acorde con los nuevos tiempos describieron un Estado de las Autonomías fundamentado en la racionalización, la eficacia y la democratización, nada nuevo, pero esta vez con un énfasis especial. Mientras la nueva organización territorial se justificaba y se explicaba casi en exclusiva en estos términos, mientras hablaban «modernización», describían España paradójicamente como «la más joven de las democracias europeas pero una de sus más antiguas naciones». La «peculiar identidad» sería respetada pero sólo a partir de una «total integración en la unidad de España», y es que este era el principio básico a partir del cual debía entenderse su propuesta, la unidad y el poder del Estado central no podía ser puesto en entredicho. El poder de las Comunidades Autónomas emanaba del poder central, y aunque formaba parte del mismo, estaba supeditado a este, en una construcción que como reconocía la Constitución se había hecho de arriba hacia abajo. Por otra parte, para asegurar la gobernabilidad, no sólo bastaba con esto, sino que era necesario ordenar y armonizar el proceso creando un Estado igualitario que para el socialismo quería decir también simétrico:

El poder de las Comunidades Autónomas no puede partir del enfrentamiento y la competición con el poder del Estado del que forman parte (...).

El proyecto autonómico exige una política de Estado como proyecto global y como obra total. El Estado de las Autonomías ha de ser España en el conjunto de todas sus

---

<sup>1046</sup> *El Socialista*, 200 (del 8 al 14 de abril de 1981); *El Socialista*, 206 (del 20 al 26 de mayo de 1981); o *El Socialista*, 207 (del 27 de mayo al 2 de junio de 1981).

Comunidades Autónomas. El ejercicio autonómico considerado exclusivamente en algunas Comunidades, supondría fomentar el enfrentamiento entre los pueblos, promover estériles agravios comparativos y conformar una Administración netamente disfuncional<sup>1047</sup>.

Como han explicado diversos autores, la «modernización» pasó a convertirse en poco tiempo en un elemento definitorio del partido, en un habitual de su lenguaje político, que había pasado de presentarse como el principal agente de cambio social a representarse como el garante de la consolidación de la democracia<sup>1048</sup>. Un PSOE pactista y reformista que comenzó a mediados de 1981 a esbozar algunos rasgos de su posterior política de «pacto social por la modernización». Le ayudó a ello, como señala José Félix Tezanos, el hecho de que quedara convertido «*de facto* en una de las pocas fuerzas políticas capaces de vertebrar el Estado, pasando a asumir rápidamente una estrategia de asunción inmediata de las responsabilidades de gobierno, fraguando, de esta forma, una oferta política que tenía, a su vez, un componente partidario (los ideales de cambio del socialismo) y un componente nacional (vertebrar y modernizar el país)»<sup>1049</sup>, algo que en el contexto de los pactos autonómicos estaba empezando a quedar meridianamente claro. El documento de junio de 1981 ya empezaba a demostrar lo que Jaume Lorés concluía al analizar al Partido Socialista tras 1982: que tenían un plan «nacional» para España basado en uniformizar el conjunto del Estado, y esto era para este autor, un signo inequívoco de que el plan era además de «nacional», «nacionalista», ya que «el partido nacional se convierte en nacionalista cuando mezcla su proyecto democrático de modernización y de progreso con su proyecto uniformista respecto a los pueblos de España»<sup>1050</sup>.

Así, con esta doctrina establecida, mes y medio más tarde firmaban unos Acuerdos Autonómicos suscritos junto a UCD que racionalizaban el acceso a la autonomía por la vía del 143 estableciendo el nivel del artículo 148 aunque con la

---

<sup>1047</sup> PSOE: “El PSOE ante la situación política” (Madrid, 15 de junio de 1981), AHUV, Fons Alfons Cucó, 021/003.

<sup>1048</sup> Sergio Gálvez Biesca, defensor de esta teoría, mencionaba que el PSOE había hecho una lectura de la sociedad española según la cual esta «no aceptaba ni posiciones ideológicas radicalizadas ni planteamientos ambiguos en los aspectos claves de los que dependía el futuro del país», lo que explicaba la actitud del partido desde su Congreso Extraordinario, en Sergio GÁLVEZ: “Del socialismo a la modernización: los fundamentos de la «misión histórica» del PSOE en la Transición, en *Historia del Presente*, 8 (2006), pp. 203-112.

<sup>1049</sup> José Félix TEZANOS: “Continuidad y cambio en el socialismo español. El PSOE durante la transición democrática”, en *Sistema*, 68-69 (1985), pp. 33-34.

<sup>1050</sup> Jaume LORÉS: “Federalismo y unitarismo”, en Lluís ARMET (et alii): *Federalismo y Estado de las autonomías*, Barcelona, Planeta, 1988, p. 108.

posibilidad de ampliar las competencias con el tiempo para lograr la igualdad final entre territorios, difuminando de esta manera las diferencias que el sistema pudiera haber permitido inicialmente. Por su parte, concedieron al País Valenciano y a Canarias la posibilidad de alcanzar directamente las competencias de la vía del artículo 151 aunque sus Estatutos fueran tramitados por el 143, por medio de la aprobación de dos leyes Orgánicas de Transferencias (aplicando el art. 150.2): la LOTRAVA y la LOTRACA, aprobadas simultáneamente a sus Estatutos. Otro Estatuto que fue aprobado a través de una vía no prevista inicialmente fue el de Navarra, que gracias a la Disposición Adicional Primera de la Constitución aprobó su Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra<sup>1051</sup>.

Los principales actores de la negociación fueron los únicos que dieron luz verde a este propósito de uniformización y modernización del Estado, mientras que aquellos grupos que se habían sentado a debatir casi como convidados de piedra, PCE y AP<sup>1052</sup>, desestimaron suscribirlos horas antes de sellar el acuerdo. Solé Tura señaló en el debate parlamentario de 1982 sobre la LOAPA que aunque estuvieron de acuerdo tras los sucesos de Andalucía que era necesario acoger una fórmula general basada en un gran pacto de Estado, este no se dio en aquellos términos:

en vez de esto tuvimos un acuerdo, es cierto, pero un acuerdo en el que participaron sólo las dos fuerzas mayoritarias y en el que explícitamente quedaban excluidos los demás. Ciertamente que nuestro Grupo tuvo una cierta participación, muy «a posteriori» y casi a contrapelo, en ese acuerdo autonómico, pero no lo concluyó precisamente por esto, porque entendía que un acuerdo de esas características no se podía cerrar sin que todos los Partidos políticos significativos para la construcción de las autonomías estuviesen corresponsabilizados en el mismo<sup>1053</sup>.

---

<sup>1051</sup> Eliseo AJA: “Los principales periodos de desarrollo del Estado Autonómico”, en *Anuario jurídico de La Rioja*, 2 (1996), pp. 125.

<sup>1052</sup> Leopoldo Calvo Sotelo admitiría que fue decisión de UCD y del PSOE forjar un acuerdo bilateral una vez no consiguieron sumar a CiU y PNV: «Ciertamente, después del fracaso inicial con los nacionalismos no parecía necesario, ni aun conveniente, envolver el acuerdo Gobierno/PSOE en un ámbito aparentemente mayor: de ahí que la fase final de las negociaciones que darían lugar a los Pactos se celebrara en mi despacho entre González, Guerra, Martín Villa, Arias Salgado y yo. Nuestra negociación en ese círculo restringido estropeó técnicamente el texto que nos había propuesto la Comisión Enterría, y sobre todo el articulado de la LOAPA», Leopoldo CALVO SOTELLO: *Memoria viva...*, p. 115.

<sup>1053</sup> *Diario de sesiones del Congreso de los Diputados*, nº 250, 21 de junio de 1982, p. 14506. Y matiza al día siguiente en contestación a una intervención de Felipe González: «en la intervención del señor González se ha dicho que hubo fuerzas que participaron en los acuerdos autonómicos y se apearon de ellos por razones no explicadas. Yo tengo que decir que el Partido Comunista participó hasta cierto punto y se apeó, o fue apeado -aquí la activa o la pasiva tiene su importancia-, por varias razones, pero

El proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) nació desde el inicio cuestionado, presentado en octubre de 1981 y aprobado en julio de 1982, no zanjó en ningún caso la polémica, aunque sí sancionó un determinado modelo de Estado, a partir de una concepción compartida por PSOE y UCD. Veamos a continuación qué supuso la firma de aquellos pactos y de la LOAPA.

## 5. Aprobar la LOAPA y hacer frente al «nacionalismo insolidario»

Los Acuerdos Autonómicos y la LOAPA supusieron para muchos un error político que demostraba una intención de enrocar el poder central, evitando cualquier desarrollo constitucional que hubiera hecho peligrar el modelo de un Estado-Nación relativamente homogéneo y simétrico. Como recordaba Miguel Herrero de Miñón, se pactó un modelo que no era el que preveía la Constitución y en el que en lugar de consolidar los hechos diferenciales se aplicó una generalización «de acuerdo a las exigencias de simetría propia de los manuales de derecho administrativo»<sup>1054</sup>. Joan B. Culla señalaba que aquellos hechos evidenciaron «las grandes resistencias de las estructuras y cuerpos del Estado a una cesión real del poder político desde el centro a la periferia» y que ilustraron «los profundos recelos de la cultura política española ante los nacionalismos catalán o vasco»<sup>1055</sup>. El sistema que intentaban imponer tenía como uno

---

fundamentalmente por dos: en primer lugar, porque entendíamos que no se podían culminar unos acuerdos de este tipo –como ya he dicho anteriormente– sin la plena corresponsabilización de todas las fuerzas necesarias; en segundo lugar, porque no queríamos prestar nuestro voto a conclusiones que no nos gustaban y que iban a culminar, como culminaron, por ejemplo, en el proyecto de la LOAPA», *Diario de sesiones del Congreso de los Diputados*, nº 251..., p. 14548. Por su parte, Martín Villa explicaba así el abandono del PCE: «veían algunos problemas de orden formal en la LOAPA, y algunas dudas de constitucionalidad que unos juristas tan competentes como Alfonso Guerra y yo también advertimos, y que esa mezcla de soberbia e ingenuidad con que suelen actuar los técnicos acalló desde la competencia», Rodolfo MARTÍN VILLA: *Al servicio...*, p. 194. Por otra parte, María Izquierdo hacía balance de los Acuerdos en una reunión interna y describía así la actitud del PCE y de AP al respecto: «PCE: Dificultades en su aparición en las negociaciones, fundamentalmente por la coincidencia con su Congreso. AP: Estaban decididos a firmar los acuerdos, a última hora dudan», en Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Reunión de la Secretaría de Política Autonómica y Política Municipal, con Secretarios Generales, celebrada el día 11-9-81”, ABFPI, 75-E 2.

<sup>1054</sup> Miguel HERRERO DE MIÑÓN: *Memorias de estío...*, p. 241; y Miguel HERRERO DE MIÑÓN: “La gestación del sistema autonómico español: claves del sistema constituyente”, *Revista Vasca de Administración Pública*, 36 (II) (1993), pp. 29-30.

<sup>1055</sup> Joan B. CULLA: “Una piedra en...”, p. 104. En términos similares se expresaba Jordi Solé Tura, que no fue partidario de los pactos como representante del PSUC y que sentenció más tarde al referirse a esta cuestión, que el error del planteamiento no era tanto técnico como político porque: «Desde el punto de vista político era olvidar que en España todo estaba por empezar y todavía no se sabía con exactitud qué Comunidades Autónomas se iban a formar y qué contenido iban a tener. (...) En aquellas condiciones, querer situar el centro de gravedad en el Poder Central significaba reforzar el centralismo y disminuir la posible capacidad renovadora de las autonomías», en Jordi SOLÉ TURA: *Nacionalidades y nacionalismos...*, p. 126.

de sus principales objetivos impedir cualquier asimetría para diluir las aspiraciones de los «nacionalistas», sobre todo en Cataluña<sup>1056</sup>.

Aunque fuera negado tanto por UCD como por el PSOE, la LOAPA fue concebida para reforzar el poder central en detrimento del de las Autonomías al condicionar muchas de sus competencias a las directrices del Estado<sup>1057</sup>. De esta manera, como denunciaba Miquel Roca, la generalización y la igualdad se imponían no al alza, reconociendo a todos los territorios las más altas cotas de competencias posibles, sino a la baja, recortando los Estatutos de Sau y Gernika<sup>1058</sup>.

Ante esta perspectiva, como ya hemos adelantado, se desató una fuerte resistencia a los pactos y al proyecto legislativo en Euskadi y Cataluña, especialmente en este último territorio, donde la crítica no fue patrimonio exclusivo de los sectores autodenominados como nacionalistas, sino que en cualquier ámbito autonomista existió algún tipo de contestación<sup>1059</sup>. Anteriormente nos hemos referido a que en el propio PSC incomodaba la manera en que se estaban gestionando las negociaciones, aunque siempre defendieron la necesidad de las mismas y en los momentos más difíciles cerraron filas junto a la dirección del PSOE, si bien con autocrítica. Por ejemplo, a finales de mayo, con el pacto muy encarrilado, siguieron manteniendo la necesidad del mismo como el único medio de consolidar la democracia y la autonomía, criticando como obstáculo a este fin la alianza oportunista entre Convergència y los centristas que se centraba sólo en los intereses puntuales de cada partido. Partían de la idea de que para avanzar en la autonomía catalana se necesitaba democratizar y transformar por completo el Estado español, ya que la tarea de descentralización política no podía ser efectiva si no se realizaba a nivel global. Por todo ello, en la declaración del Consell Nacional del PSC-PSOE del 23 y 24 de mayo, ratificaban estos planteamientos que como decían, les habían valido el calificativo de sucursalistas injustamente, ya que

---

<sup>1056</sup> Véase Ferran ARCHILÉS: “Nacionalismos y culturas políticas en España (C. 1975-2012)”, en Manuel PÉREZ LEDESMA e Ismael SAZ (coords.): *Del Franquismo a la democracia, 1936-2013*, Madrid, Marcial Pons, 2015, p. 159.

<sup>1057</sup> En palabras de Luis Moreno: «Se quiso dar un “golpe de timón” a la construcción autonómica y eliminar las incertidumbres políticas de un proceso de descentralización complejo, prolijo e irregular», Luis MORENO: *La federalización de España*, Madrid, Siglo XXI, 1997, p. 80.

<sup>1058</sup> Citado en César ALONSO DE LOS RÍOS y Carlos ELORDI: *El desafío...*, p. 153.

<sup>1059</sup> Ángel DUARTE: “España desde Cataluña. Cepas de una apreciación de largo alcance”, en Antonio MORALES, Juan Pablo FUSI y Andrés DE BLAS (dirs.): *Historia de la nación y del nacionalismo*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013, pp. 967-970.

ahora se demostraba que esta era la única estrategia válida, y enunciaban cuál era su proyecto nacional:

El projecte nacional dels treballadors de Catalunya té una característica que el diferencia clarament del projecte de burgesia nacionalista: és un projecte nacional i, alhora, estatal. Els treballadors no reivindiquem solament l'autogovern de Catalunya, sinó que exigim alhora la transformació de l'Estat centralista i el reconeixement solidari i del dret a l'autogovern de les altres nacionalitats i regions espanyoles.

Un Estat espanyol centralista sols pot reconèixer l'autonomia de Catalunya forçat per exigències conjunturals. Tan aviat com se senti fort o amenaçat, acabarà amb aquesta autonomia precària. Per això no hi ha política autonòmica viable sense partits i polítiques d'Estat que es donguin per objectiu la transformació de l'Estat centralista i la construcció del govern de les nacionalitats.

Per això els socialistes de Catalunya, amb el PSOE, que és portador i garant d'una política de transformació de l'Estat centralista i autoritari en un Estat democràtic i de les autonomies, assenyalen que el futur de l'autogovern català està avui vinculat als problemes pendents del desenvolupament autonòmic de l'Estat<sup>1060</sup>.

Reafirmaban por tanto de manera oficial su total apoyo a los planteamientos del PSOE en las negociaciones con el gobierno de Madrid, pero a la vez surgían voces críticas como la de José Antonio González Casanova, cercano a Reventós y un destacado especialista del derecho al que tanto el PSOE como el PSC recurrían como asesor<sup>1061</sup>. En un artículo publicado en mayo en *El Socialista*, denunciaba la maniobra contra la autonomía catalana que estaba tratando de llevar a cabo UCD y lamentaba que el PSOE estuviera obligado a ser cómplice de aquello:

---

<sup>1060</sup> PSC-PSOE: "L'alternativa dels socialistes. Declaració del Consell Nacional. 23 i 24 de maig de 1981", APSC, 9.1.65/02. Para Joan B. Culla en este documento se intentaba teorizar sobre la pérdida de independencia progresiva que había experimentado el PSC frente al PSOE como una ampliación de perspectivas políticas y como reflejo de una decisión sobre su proyecto nacional que se diferenciaba del de la burguesía nacionalista con una visión de Estado que no dejaba por ello de ser nacionalmente catalana, en Joan B. CULLA: Joan B. CULLA: "L'Evolució ideològica dels partits", en Lluís RECOLONS, Francesc CABANA, Eugènia SALVADOR y Salvador CARDÚS: *Catalunya 77/88*, Barcelona, Publicacions de la Fundació Jaume Bofill-La Magrana, 1989, p. 246.

<sup>1061</sup> Como él mismo cuenta en sus memorias, Reventós le encargó la redacción de las enmiendas a la LOAPA, un proyecto que nunca le pareció buena idea, pues según afirma, cuando Felipe González le informó de los acuerdos a los que se estaban llegando con UCD en mayo respondió: «No es que yo esté en desacuerdo, es que me parece que es completamente contrario a la Constitución y muy mal la habremos hecho o el Tribunal Constitucional se cargará la ley. Pero tú eres el que manda y yo te respeto», en José Antonio González CASANOVA: *Memoria de un socialista...*, pp. 313-314.



Hoy, si prospera la franca involución en materia autonómica –es decir, democrática y progresista–que promueve el Gobierno, el modelo constitucional de Estado será dejado para mejor ocasión histórica. Lo lamentable no es tanto la eficacia golpista en este terreno como la magnífica excusa que ahora tiene UCD para desandar gran parte de lo que se vio obligada a andar por presión del PSOE desde los días constituyentes de 1978. Y que este último partido deba acompañarle en la desandadura no es para mí lo menos lamentable, sino lo más. Y no culpo a nadie, como no sea a la situación.

Como decía al principio, la inmensa mayoría de las fuerzas políticas catalanas –incluidas las socialistas–creen que nos hallamos en un mal momento para la autonomía estatutaria y constitucional de Cataluña. Pero eso no les preocupa tanto como la involución general<sup>1062</sup>.

Casanova se contrariaba ante la actitud de la derecha y la izquierda estatales a lo largo de la historia española, en la que habían demostrado serias dificultades para asumir los impulsos modernizadores y democratizadores catalanes como una oportunidad en lugar de verlos como una amenaza. Este socialista catalán, igual que hacía el PSC, se refería a la responsabilidad de Cataluña con el Estado, para reformar y descentralizar el sistema, y estaba de acuerdo con los postulados esgrimidos por su partido respecto a la necesidad de colaborar con España y construir entre todos un Estado fuerte en el que también lo fuesen sus autonomías, pero discrepaba en su apoyo a la reciente actitud del PSOE. Casanova quería que los socialistas españoles entendieran que las autonomías no debilitaban España, algo que creía que no llegaban a comprender:

Pero es que la izquierda progresista nunca se ha sentido del todo cordialmente fortalecida por la aportación de los partidos de izquierda catalanistas. Como tantas veces se ha dicho, la clase política de Madrid (tanto de derechas como de izquierdas) adopta una actitud “separadora” frente a Cataluña, (...). Hoy en día, pues, la clase política madrileña (que tiende a monopolizar de hecho la idea, el sentimiento y la realidad del Estado) vuelve a olvidarse, justo por tal razón, de que Cataluña es en primer lugar una parte del Estado español de trascendental importancia, (...). Sólo una lúcida visión de Estado permitiría entender y agradecer la decisiva aportación de Cataluña al proceso de democratización –¡y de construcción!–del Estado español<sup>1063</sup>.

---

<sup>1062</sup> *El Socialista*, 203 (del 29 de abril al 5 de mayo de 1981).

<sup>1063</sup> *Ibid.* En sus memorias recordaba cómo durante 1980 había publicado artículos con la intención de que el PSOE no creyera que las autonomías eran una solución pragmática al nacionalismo vasco-catalán, generalizándolas a las demás regiones para debilitar las ambiciones de singularidad de este: «Las comunidades autónomas del Título VIII de la Carta Magna de 1978 eran Estado. Mejor dicho, eran el

Asimismo, conforme comenzaron a conocerse oficialmente, primero el Informe Enterría, y después el pacto, el PSC-PSOE los apoyó en su conjunto aunque expresó reservas en ambos casos. En cuanto al Informe, declaraban observar errores técnicos que no invalidaban el documento por su valía como «punto de referencia» para atajar el problema de las Autonomías desde su raíz, el Estado. Juzgaban como positivo algunos supuestos como el que tenía que ver con el reconocimiento de dos tipos de autonomía, la de la vía del 143 y la del 151. Pero veían en la ley orgánica para desarrollar el título VIII un «elemento preocupante» que según aseveraban había sido «valorada con muchas reticencias tanto por los socialistas catalanes, como por parte de María Izquierdo, (...) o del propio Felipe González». El motivo de la desconfianza era que podría desarrollarse «de una manera excesivamente amplia asumiéndose en ella algunas competencias que hoy están contempladas en los estatutos de autonomía vigentes». A pesar de esto, concluían con un mensaje tranquilizador, asegurando que la autonomía estaba garantizada y que en todo caso la alarma estaba siendo causada por lecturas imprecisas del Informe:

La ordenación autonómica no debe comportar ninguna restricción ni rebaja de techos en los procesos autonómicos surgidos de la historia o de la voluntad popular. Análisis poco precisos de ésta, que no responde a una lectura seria del dictamen de los expertos, la han considerado un elemento más de la ofensiva antiautonómica. La afirmación se pierde por gratuita y poco fundamentada<sup>1064</sup>.

Con los pactos estos aspectos se vieron confirmados y el PSC-PSOE tuvo serias dificultades para defender en Cataluña los acuerdos, tanto internos como externos<sup>1065</sup>. Sobre todo a partir de julio se desató una campaña anti-concertación y anti-LOAPA que

---

Estado mismo» y relataba las dificultades que encontraba para hacer entender estas cuestiones entre la cúpula dirigente: «Recuerdo a un Alfonso Guerra objetante: “José Antonio, eso de la autonomía está bien para vosotros los catalanes, pero en Andalucía el problema no es ese, es el paro”», en José Antonio González CASANOVA: *Memoria de un socialista...*, p. 265.

<sup>1064</sup> *L'Opinió Socialista*, 55 (1ª quincena de junio de 1981).

<sup>1065</sup> No estuvieron de acuerdo con muchos de sus aspectos, y en reuniones de la Secretaría Autonómica, los representantes catalanes expusieron su disconformidad y plantearon sus preocupaciones sobre las repercusiones negativas que tendrían en las Comunidades Autónomas con Estatutos ya aprobados, en Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Reunión de la Secretaría de Política Autonómica y Política Municipal...; Raimon Obiols declaraba ya en noviembre en una entrevista: «S’ha volgut fer dir que els socialistes érem partidaris entusiastes de l’harmonització i la LOAPA i això és absurd. El que hem dit és que els acords de concertació autonòmica i els seus productes eren imprescindibles en una situació marcada per greus pressions contra el sistema democràtic espanyol. És sobre aquest context que afirmem una valoració positiva, però evidentment no una valoració acrítica. Hi ha aspectes millorables, cal parlar-ne amb altres forces parlamentàries i tractar d’arribar a uns resultats satisfactoris», en *L'Opinió Socialista*, 64 (2ª quincena de noviembre de 1981). Otra autora que ha señalado las fricciones internas en el PSC con motivo de la LOAPA ha sido Eugènia Salvador, en Eugènia SALVADOR: “Crònica política...”, p. 215.

desde el partido identificaron como anti-socialista y de la que se defendían acusando al nacionalismo conservador de dirigir una «ofensiva ideológica» para batir al socialismo mientras pactaba con el Gobierno de UCD, escondiendo así los verdaderos problemas de Cataluña<sup>1066</sup>. Joan Reventós se dirigía al «conjurats», CiU, ERC y PSUC, que habían desencadenado en Cataluña la fuerte campaña en contra de los Acuerdos y que llegaron a plantear el crear un «Front de Defensa de l'Autonomia» que finalmente no se materializó, rechazando entrar en este frente:

Per alguns, els pactes autonòmics apareixen com una mena d'agressió contra l'autonomia catalana.

Nosaltres –així ho hem fet constar públicament– fem una valoració més matisada i en definitiva de caràcter positiu, ja que en una conjuntura marcada molt fortament per la necessitat de defensar i consolidar la democràcia, aquests acords ens apareixien no solament com a convenients, sinó com a absolutament necessaris. D'altra banda no pensem que aquests acords no signifiquen «a priori» una limitació del nostre autogovern<sup>1067</sup>.

Un *a priori* que desaparecía en un artículo titulado «Autonomía i consolidació democràtica de l'Estat» escrito por Joan Prats en la misma revista, en el que este dirigente socialista catalán tranquilizaba sobre las condiciones del pacto y la imposibilidad de que el mismo afectara a la autonomía, ni *a priori* ni *a posteriori*:

2. Que l'homogeneïtzació dels processos autonòmics és una simple exigència tècnica que no suposa cap igualment ni atac a la nostra personalitat nacional, car es manté la distinció entre els nivells competencials del 151 i del 143.

(...)

4. Que la PLOAPA (...) ni vol políticament ni podria jurídicament modificar la Constitució ni l'Estatus; que és una simple norma d'interpretació i desenvolupament que ha de servir per estalviar-nos molts del conflictes que avui fan viure a precari les decisions de la Generalitat<sup>1068</sup>.

El PSC-PSOE, aunque con reservas y con problemas internos provocados por las fricciones que producía la política de armonización en la que se había embarcado la dirección estatal, se sumaba así a una campaña de defensa y contraataque que el PSOE

---

<sup>1066</sup> *L'Opinió Socialista*, 61 (1ª quincena de octubre de 1981).

<sup>1067</sup> *L'Opinió Socialista*, 59 (1ª quincena de septiembre de 1981).

<sup>1068</sup> *Ibid.*

también llevaría a cabo para defender la concertación. Desde acciones más comedidas hasta llegar a los ataques más viscerales con los «nacionalismos» que tachaban de «insolidarios», «centrífugos» y «separatistas». Como ya hemos avanzado, *El Socialista* fue una plataforma donde las actuaciones más conciliadoras, pero también las más agresivas, tuvieron cabida. Desde los inicios de las conversaciones se dio un lugar preferente a estos temas que acapararon varias de sus páginas, como sólo había sucedido en tiempos de las reivindicaciones en pro de los derechos de Andalucía que tan rentables les habían salido. Félix Santos se encargó durante varias semanas de realizar una especie de crónica cargada de juicios de valor destinados a convencer a los lectores del órgano de prensa del partido de las bondades de la concertación. Así, por ejemplo, intentaban desactivar los recelos de aquellos que podían empatizar con la causa vasca o catalana. Por un lado, como hacía el PSC-PSOE, negando la posibilidad de que la armonización afectara a estos territorios y deslegitimando los motivos de suspicacia: «Los dirigentes nacionalistas están con la mosca tras la oreja. Sin embargo, tanto el Gobierno como Felipe González han dado públicamente seguridades de que no se va a recortar ni a frenar el proceso autonómico»; y como hacían también los socialistas catalanes, desacreditaban a Pujol y sus intereses nacionales convirtiéndole en un líder interesado y partidista al que lo que le asustaba era en realidad perder los privilegios que su formación obtenía de los pactos con la derecha española: «Acostumbrado a sacar adelante sus pretensiones políticas con una cierta facilidad durante la “era Suárez”, para quien el apoyo de la minoría catalana fue fundamental, el honorable Pujol sin duda añora los tiempos idos». Tras esto aconsejaban a las dos fuerzas nacionalistas aceptar la invitación del PSOE y del Gobierno para sentarse a la mesa a debatir estas cuestiones, despejando sus dudas y las de la sociedad civil sobre aquellas cesiones, haciendo ver que eran los nacionalistas los que se marginaban del proceso:

las reticencias y temores de los dirigentes nacionalistas contagian su inquietud a la opinión pública catalana y vasca, lo que podría crear nuevas formas de desencanto y hostilidad. Tal vez estos riesgos se evitarían si, de manera clara y decidida, fueran asociados al proceso de “concertación autonómica” las fuerzas nacionalistas y las demás fuerzas políticas que estén dispuestas a ello. El PSOE y el propio Gobierno son partidarios de dicha participación, según recientes declaraciones de Felipe González y Martín Villa<sup>1069</sup>.

---

<sup>1069</sup> *El Socialista*, 201 (del 15 al 21 de abril de 1981).

Estaban en lo cierto y el desencanto y la hostilidad aumentaron conforme avanzaban los acuerdos y se confirmó «el giro autonómico» del que había hablado Félix Santos en su artículo. A partir de julio el clima se hizo difícilmente soportable para el PSOE, que empezó a demostrar su nerviosismo por ejemplo, a través de artículos histriónicos publicados en su portavoz mediático. Este es el caso de la columna de opinión de Félix Grande, que coincidiendo con el momento de los Acuerdos Autonómicos fue publicada a través de tres números de la revista. Titulada como «¿Autonomía o Antinomia?», el autor transmitía la idea de que tratar de ir demasiado lejos con el nacionalismo, que identificaba con el separatismo, era tan deplorable como el mantenimiento del centralismo, calificando estas actitudes como «imbéciles», «insolidarias» o «bárbaras», por poner algunos ejemplos. En cambio no dudaba en resaltar las bondades que un proyecto solidario, igualitario, democratizador y racionalizador podía ofrecer, siempre que en el respeto a la diversidad se tuviera muy claro que la unión hacía la fuerza: «autónomos pero juntos; orgullosos de nuestras diferencias, pero reunidos para defender cada uno incluso la diferencia de los otros; respetuosos con nuestra propia identidad y con la del vecino, y a la vez y por tanto solidarios». Sin esto claro, el Estado de las Autonomías, podría llegar a ser como el «monstruo de Frankenstein», como un «chichón moral» o como un «porrazo en la convivencia, que se caracteriza porque su lema reza así: “Maricón el último”». Consideraba insolidarios y antidemócratas a todos aquellos que no compartían esa visión de la unidad de España, los «políticos, funcionarios, cidcampeadores de la identidad, testaferros de los diversos y picapleitos de la diferencia» a aquellos que «toman la nacionalidad como un aperitivo previo a un festín de nación» y a la «progresía que, por esos caminos tal vez un día decida que (...) no habremos recobrado la verdadera personalidad si no volvemos decididamente a las cavernas». Creía pues que el éxito del Estado de las Autonomías estaba en edificar esa estructura «no para ser más “nuestros” sino para ser más demócratas»<sup>1070</sup>.

Ciertamente, se trata tan sólo de un artículo de opinión, pero aunque las formas no eran las más habituales, la interiorización del contenido estaba muy asumido en las estructuras del partido, que no había tenido ningún problema en firmar unos acuerdos que reforzaban el poder estatal en detrimento del autonómico. La propia María

---

<sup>1070</sup> *El Socialista*, 215 (22 al 28 de julio de 1981); *El Socialista*, 216 (29 de julio al 4 de agosto de 1981); *El Socialista*, 217 (5 al 11 de agosto de 1981).

Izquierdo lo dejaba patente en una reunión interna cuando hacía un balance positivo de los Acuerdos como «un reflejo exacto del programa alternativo planteado por el PSOE en el Voto de Censura al Gobierno Suárez», sobre todo al ordenar el mapa autonómico generalizando las «autonomías a un techo autonómico, según criterio defendido por el POSE desde la Constitución». Además, la Secretaria de Política Autonómica manifestaba expresamente que en los acuerdos se había mantenido una sintonía generalizada, a excepción de los temas de las elecciones y las diputaciones<sup>1071</sup>.

Un techo que había sido impuesto a las «nacionalidades históricas» a la baja, y que se amparaba en las necesidades de gobernabilidad y en la igualdad y solidaridad que definían al socialismo por encima de otros derechos como el derecho a la diferencia. Así lo defendía María Izquierdo en el documento «Puntualizaciones sobre la armonización del proceso autonómico» fechado el 1 de octubre de 1981, en el que criticaban la «oposición nacionalista a cualquier tipo de armonización autonómica» porque lo que estaban sustentando era «una negativa a la generalización de la autonomía política, en favor de un modelo de estado que diferenciase entre CC.AA de autonomía política, y otras, las demás, que contendrían un mera descentralización administrativa» en una clara actitud de insolidaridad. Algo a lo que se negaban en el PSOE, confundiendo la igualdad con el derecho a la diferencia, y sosteniendo por tanto la legitimidad del derecho de todos los territorios españoles a tener «el mismo derecho a la diferencia»:

el nuevo Estado de las Autonomías ha de saber salvaguardar por un lado, los derechos a las diferencias e identidades históricas de las distintas CC.AA., pero a la vez, y con el mismo rigor, ha de satisfacer la exigencia de que ninguna de ellas se sienta menos que las demás.

Tarea esta sin duda difícil pero posible si somos capaces de comprender los que significa esta armonía en la diferencia, esa garantía de que todos los pueblos, todas las CC.AA han de tener el mismo derecho a la diferencia.

(...)

---

<sup>1071</sup> Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Reunión de la Secretaría de Política Autonómica y Política Municipal...; la Secretaría del Política Autonómica confirma este punto en su Informe de Gestión ante el 29 Congreso, en PSOE: “Memoria. Informe de gestión I..., p. 247.

El proceso de transformación autonómica del Estado no puede hacerse al margen de la solidaridad, porque ese no sería nuestro proceso autonómico<sup>1072</sup>.

Además, la Secretaria de Política Autonómica desacreditaba las posiciones contrarias a la armonización, como actitudes que tenían como propósito hacer más arriesgado, conflictivo, y disfuncional el Estado de las Autonomías, y en definitiva menos viable:

En el fondo algunas posiciones contrarias a la necesidad de establecer unos principios de armonización late sin duda un falso autonomismo: Hagamos autonomía sí, pero sin orden ni concierto, sin criterios, sin previsiones normativas, espontánea y coyunturalmente, en definitiva hagamos de la autonomía confusión. Es ésta una forma de entender el desarrollo de los procesos autonómicos que solo beneficia a los enemigos de la autonomía y de la democracia, y a cuantos piensan que...a río revuelto, ganancia de pescadores...Creo que puede ser la mejor fórmula para que las autonomías y lo que ellas significan de garantía y ejercicio de la democracia no sean posibles<sup>1073</sup>.

Y en un ataque velado pero frontal a los nacionalismos que gobernaban en las nacionalidades históricas añadía posteriormente:

El nuevo estado democrático ha de ser un proyecto de convivencia firme y duradera. Su desarrollo armónico es incompatible con el juego oportunista y coyuntural; con la práctica viciada del autonomismo de rapiña donde lo único que cuenta es lograr tal o cual transferencia, independizando cada hecho del conjunto del desarrollo de la reforma democrática del Estado, y donde el propio Estado se convierte en campo de compra-venta de votos en función de intereses y necesidades del momento [s.o.]<sup>1074</sup>.

Estos serían los mismos criterios que regirían el XXIX Congreso, celebrado entre el 21 y el 24 de octubre, al mismo tiempo que se iniciaba la tramitación de la LOAPA. Fue un encuentro tranquilo, de hecho, demasiado tranquilo para muchos, que vieron esta calma como artificial. La unidad venía impuesta, forzada, sin posibilidad de diálogo y acuerdos, un consenso que como describía Gillespie, rayaba en lo ridículo, porque provenía de la prohibición de cualquier tipo de crítica<sup>1075</sup>. Querían un encuentro

---

<sup>1072</sup> María IZQUIERDO: "Puntualizaciones sobre la armonización del proceso autonómico" (Madrid, 1 de octubre de 1981), ABFP, 74-H 5, pp. 2-6.

<sup>1073</sup> *Ibid.*, pp. 4-5.

<sup>1074</sup> *Ibid.*, p. 7.

<sup>1075</sup> Richard GILLESPIE: *Historia del Partido Socialista...*, pp. 375-376. Diego Armario explicaba la excesiva tranquilidad del siguiente modo: «Dicen que hace unos meses, Felipe González le dijo a Alfonso Guerra: «Quiero un Congreso tranquilo», y lo ha tenido, aunque quizás alguien se haya pasado haciendo

sin sobresaltos, para ofrecer un mayor contraste con partidos como UCD y PCE, envueltos en las polémicas internas<sup>1076</sup>. Esto les permitía afianzar la imagen que se estaban labrando, de partido de Estado, de partido moderado, serio, con capacidad de gobierno. Las sesiones del Congreso se desarrollaron, como ha indicado José Félix Tezanos, tratando de reforzar la proyección de estas virtudes y elaborando «una cuidada estrategia orientada a perfilar un proyecto político capaz de lograr el apoyo de una amplia mayoría social por el cambio» ante la perspectiva de unas elecciones que llegarían tempranamente.<sup>1077</sup>

Por todo ello, la Resolución sobre «Autonomía» no se desviaba ni un ápice de la defensa de los principios establecidos por la Constitución de 1978 y de unos Acuerdos Autonómicos que lo encumbraban como partido que cumplía con sus responsabilidades institucionales, justificando la homogeneización como necesaria para el buen funcionamiento del sistema. El texto no hacía más que confirmar los planteamientos anteriores, pese a haber sido elaborada a partir del texto base enviado por la Federación del PSC del Vallés Occidental. Joan Prats, elegido miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE en aquel congreso, dijo estar satisfecho con la aportación de su partido a aquella resolución, que confirmaba lo que según este político había dicho siempre su partido:

nosaltres tenim una responsabilitat, la de la reconstrucció d'un Estat democràtic de les autonomies. Per això, a diferència de partits del «nacionalisme particularista», els socialistes de Catalunya hem afirmat per a Catalunya una política d'Estat i una política catalana. (...)

Llavors, la nostra aportació és la de fer entendre que la lluita de tots els socialistes i la transformació democràtica i autonòmica de l'Estat és bàsicament una lluita a nivell estatal i una altra a cadascun dels nivells de nacionalitat i regió<sup>1078</sup>.

La diferencia entre el «nacionalismo particularista» y la posición por la que abogaban los socialistas quedaba sentenciada en enunciados como el siguiente, que habían sido calcados de la propuesta enviada por el Vallés Occidental:

---

que el Congreso fuera una balsa de aceite», en Diego ARMARIO: *El triángulo. El PSOE durante la Transición*, València, Fernando Torres-Editor, 1981, p. 127. Véase Eduardo CHAMORRO: Felipe González. Un hombre a la espera, Barcelona, Planeta, 1980, p. 190.

<sup>1076</sup> Juan Antonio ANDRADE: *El PCE y el PSOE en...*, p. 385.

<sup>1077</sup> José Félix TEZANOS: “El PSOE en la democracia”, en José Félix TEZANOS (coord.): *PSOE 125: 125 años del Partido Socialista Obrero Español*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2002, pp. 138-140.

<sup>1078</sup> *L'Opinió Socialista*, 64...



La solidaridad no es un valor más del socialismo, sino el valor fundante del movimiento obrero y la matriz de la que emergen los demás valores. Por eso, los socialistas ponemos una fuerza especial en el desarrollo de las menciones constitucionales de la solidaridad, a las que la connivencia de fondo entre la derecha estatal y las derechas nacionalistas querría reducir a un mero nominalismo<sup>1079</sup>.

Pero el ataque al «nacionalismo» iba más allá a lo largo de la resolución, en unos términos poco habituales para el PSOE en este tipo de documentos, que desde la Transición habían hecho gala de respetar y defender los derechos de las nacionalidades y regiones. Aunque es cierto que el XXVIII Congreso ya había marcado las diferencias con los anteriores, haciendo incuestionable que la defensa de los grandes principios como la autodeterminación había quedado para siempre en el olvido, difuminando la línea que hasta entonces separaba el «programa mínimo» del «programa máximo»; el XXIX Congreso llegaba mucho más lejos, porque en su empeño por justificar la armonización, la gobernabilidad y la unidad de España, se mostraba como el mayor enemigo de aquellos que abogaban por la diferencia identitaria si no había igualdad en la diferencia. Estos argumentos no eran nuevos en el PSOE, el «nacionalismo» se había convertido en el enemigo de la campaña de contraataque frente a los movimientos anti-armonización, pero extraña el tono, especialmente en el medio en que se expresaban:

nuestra defensa de las autonomías ha tenido siempre también un sentido político del todo diferente al autonomismo de los nacionalismos particularistas burgueses o pequeño-burgueses. Estos han planteado la autonomía como una reivindicación particular frente al Estado Central sin pretender situar esta reivindicación en el contexto de una transformación general del Estado. Los nacionalismos burgueses y pequeño-burgueses han sido y son por ello particularistas, desestabilizadores e ilusorios. Son particularistas, porque apuntan a objetivos exclusivos de su nacionalidad renunciando a todo proyecto político para España (no obstante su constante verbalismo en contra). Son desestabilizadores porque se alimentan electoralmente de la tensión política permanente entre la nacionalidad y el poder central, tensión ésta que es como la atmósfera que necesitan para vivir y desarrollarse y que es perfectamente compatible con el entendimiento conservador de fondo con el poder central; de ahí su inclinación por la negociación bilateral y la ambigüedad de las normas de distribución de competencias; de ahí también su profunda animadversión hacia el federalismo. Son por último, ilusorios, pues ilusoria es la creencia en la posibilidad de una autonomía singular fuerte

---

<sup>1079</sup> PSOE: “Autonomías...”, p. 105.

sin que paralelamente a su construcción se transforme el Estado centralista y se desarrollen las demás autonomías; el espejismo de un oasis autonómico en el desierto del centralismo es un espejismo que acabará un día con toda autonomía.

Frente a estas concepciones, los socialistas hemos mantenido una visión más global, compleja y garantizadora de las autonomías. Globalizadora y más compleja porque hemos situado las autonomías como parte del proyecto político de transformación democrática del Estado y como medio de solución actual del problema de las nacionalidades. De ahí que hayamos defendido siempre la extensión de la autonomía política a todo el territorio español y que hayamos situado el proyecto socialista para cada nacionalidad dentro de la lógica de una misma política de transformación del Estado. De ahí por último que nuestra política resulte también más garantizadora de las autonomías, ya que éstas no viven sino a precario en ausencia de un proyecto decidido de transformación general del Estado.

A estas ideas responden las posiciones políticas de los socialistas mantenidas tanto en el periodo constituyente como en la actualidad<sup>1080</sup>.

Precisamente, recordando el período constituyente se situaban en una posición equidistante entre la derecha española y, otra vez, los nacionalismos burgueses que pactaban con aquella sin una visión de Estado como la que ofrecían desde el socialismo:

Se ha dicho, con razón, que en el Título VIII de la Constitución concurren tres tradiciones políticas diferentes 1) la liberal conservadora, utilizada por Alianza Popular y la mayoría de UCD, partidaria de un simple proceso de descentralización regional del Estado, combinado con el reconocimiento de la autonomía política para Cataluña y el País Vasco. 2) Los nacionalismos burgueses, de raíz tradicionalista, orientados al reconocimiento de su autogobierno particular sobre la base del pacto y hacia su desarrollo sobre la base de un proceso de negociación bilateral permanente. 3) La democrática y federalizante asumida por el socialismo español<sup>1081</sup>.

Hay que advertir sin embargo, que aunque por boca de Joan Prats, el PSC-PSOE declarara estar satisfecho con esta resolución, las dos últimas citas no corresponden a la proposición catalana, que no se excedía tanto en su ataque al nacionalismo conservador, y que por otra parte, mencionaba cuestiones interesantes que la resolución final no

---

<sup>1080</sup> *Ibid.*, p.107.

<sup>1081</sup> *Ibid.*, p.108.

recogía, y que evidenciaban una concepción de España, del Estado, y de las identidades diferenciadas muy distinta a la que se aprobaba en el XXIX Congreso:

Ciertamente, sería un craso error desconocer que el problema actual del Estado de las Autonomías desborda ampliamente el viejo problema de las nacionalidades históricas y ha devenido por ello más que nunca en un problema de Estado. Los resultados del referéndum andaluz del 22 de febrero de 1980, dieron al traste con todas las ilusiones en contrario. Ello no obstante, constituiría una ineptia política imperdonable el reducir la mención «nacionalidades y regiones» del artículo 2 de la Constitución, a un puro verbalismo privado de significación y alcance político. Antes al contrario, es preciso comprender que si el Estado de las autonomías ya no es el producto sólo de la cuestión de las nacionalidades, tal cuestión continúa teniendo, no obstante, una dimensión específica cuyo desconocimiento sólo puede acarrear al socialismo serios retrocesos.

Por supuesto que no se trata de pseudonacionalidades improvisadas más o menos oportunamente y al socaire de la confusión generalizada sobre estos problemas. La cuestión de las nacionalidades se plantea sólo allí donde la historia y la voluntad política de ella emanada, efectivamente la plantean. En otras palabras, no hay más problemas que el de nacionalidades históricas. Por supuesto también, que este reconocimiento excluye cualquier pretensión de privilegio competencial, financiero y jurídico. En este sentido, la igualdad, dentro del pluralismo necesario, entre las posibilidades de autogobierno reconocidas a Andalucía por su Estatuto y las reconocidas por los Estatutos de las nacionalidades históricas constituye la mejor garantía.

Lo que es preciso percibir es que el autogobierno no tiene el mismo significado político para las regiones que para las nacionalidades. En las primeras el autogobierno es algo estrictamente instrumental que sirve para abordar los problemas propios a través de un poder del que por su mayor proximidad a los ciudadanos se espera mayor eficacia y responsabilidad. El autogobierno de las regiones responde, pues, a objetivos de democratización y racionalización de las estructuras del Estado. Completamente diferente es, en cambio, el caso del autogobierno de las nacionalidades. En estas el autogobierno puede ser también una técnica de organización y democratización, pero es, antes que eso y que nada, una condición de existencia y desarrollo de una comunidad diferenciada. La nacionalidad renuncia a la pretensión de construir un Estado propio en la medida en que el Estado-nación común le permite su desarrollo diferenciado y

solidario, en la medida en que su lengua, su cultura y sus otros signos de identidad nacional son reconocidos y garantizados<sup>1082</sup>.

No puede extrañar que esta parte no tuviera cabida en la resolución final, pues a estas alturas, en el conjunto del socialismo español ya se había decidido que la simetría y la igualdad debían imponerse, incluso en el discurso. Estos socialistas catalanes no querían distintos derechos o competencias, pero sí el reconocimiento de la existencia de unas nacionalidades históricas que se diferenciaban de todas las demás regiones españolas, para las que la autonomía sólo respondía a los principios de la subsidiariedad. Pero en estos tres territorios diferenciados identitariamente por una cultura, una lengua y una historia distinta, la autonomía significaba mucho más que democratización o racionalidad, era el derecho a la diferencia, y con la nueva máxima del PSOE, en que todos los territorios tenían el «mismo derecho a la diferencia», esto era imposible. La pluralidad en el PSOE existía, y el PSC-PSOE siempre había sido un acicate para sensibilizar al conjunto del socialismo español de los temas identitarios, pero que no fueran un partido homogéneo no significa que no predominara la visión más uniformizadora que se consolidaba conforme el Partido se sabía responsable de implementar un modelo de Estado para España<sup>1083</sup>. Como ha estudiado Santos Juliá, con el XXIX Congreso se reforzó la exclusión de referencias a un modelo alternativo de sociedad que ya había dado comienzo en la década de los ochenta y «los socialistas estrenaron un nuevo lenguaje político cuyos conceptos claves no eran ya la clase obrera como sujeto histórico, el socialismo como nueva sociedad ni la república federal como forma de Estado, sino la modernización de la Administración Pública, la consolidación de la democracia y la redistribución de la riqueza»<sup>1084</sup>. Algo que el propio Joan Prats había justificado ante la evidencia de una resolución que contrastaba incluso con la de 1979, nada radical por otra parte:

La diferència, (...), entre el 28 i el 29 Congrés és la diferència entre un Congrés fonamentalment ideològic, com el passat, i un altre en el que el temes ideològics ja

---

<sup>1082</sup> PSOE: “Autonomías”, en *Memoria. Propositiones I. 29 Congreso del PSOE*, ABFPI, Fc 249, pp. 101-102.

<sup>1083</sup> La dualidad o contradicción que suponían estas dos tradiciones que convivían dentro del socialismo, aunque no en igualdad de condiciones, fue expresada en 1988 por Raimon Obiols de la siguiente manera: «El socialismo catalán y la izquierda catalana en general siempre han defendido el federalismo. Pero también es cierto que en el conjunto del socialismo español, junto con esta alma federalista, hay una alma centralista, fuertemente influida por el moralismo estatista y jacobino que tanto ha impregnado la cultura de la izquierda francesa», en Raimon OBIOLS: “El federalismo, una propuesta hacia el futuro”, en Lluís ARMET (et alii): *Federalismo y Estado de las autonomías*, Barcelona, Planeta, 1988, p. 192.

<sup>1084</sup> Santos JULIÁ: *Los socialistas en la política...*, p. 547.

están definits. La ponència de Política Autònica del 28 Congrés era una ponència més general, molt més de principis i de grans afirmacions (...). I en aquest 29 Congrés, el que hem tractat de fer és veure quins són els problemes de la construcció de l'Estat de les autonomies i quins són els eixos o línies directrius de les respostes dels socialistes<sup>1085</sup>.

Aunque si se recuerda bien, en el XXVIII Congreso no se quiso debatir más que aquello que entraba dentro de los límites constitucionales, teorizando si se quiere, pero sobre cómo construir el Estado de las Autonomías. Las diferencias se encuentran en realidad en la culminación de un proceso, desde un momento en el que se tenían claros los objetivos finales y las prioridades, pero todavía se dudaba de cuál iba a ser el camino que condujese a ellos; a otro en el que el horizonte final se impuso barriendo cualquier consideración previa que dificultaba su consecución. Y al PSC-PSOE le iba a pasar factura esta transición, no sólo por la tensión que esto provocaba entre el Partido Federal y el Federado, sino por los movimientos internos que esto produjo y que provocó otro estallido a finales de año.

Así las cosas, la situación durante el último tercio del año se había tornado agri dulce para los socialistas, que cada vez recogían mayores y mejores frutos de una política que había de encumbrarlos hacia el poder en poco menos de un año; pero al mismo tiempo, la concertación estaba resultando amarga en algunos de sus aspectos. El pacto autonómico estaba siendo costoso y les sometía a un desgaste continuo frente a una parte de la población, especialmente en Euskadi y Cataluña. Esta fase, en la que se enmarcaba la Resolución sobre Autonomía, era quizá la de una mayor crispación y había desembocado en una ofensiva hacia los «nacionalismos históricos», que juzgaban como el mayor factor de desestabilización para los acuerdos. En aquella etapa, de acuerdo con esta tendencia, decidieron que su estrategia pasaría por la no negociación de la LOAPA y la LOFCA<sup>1086</sup>, algo que acabó por ser insostenible en el PSC-PSOE, provocando a finales de año la segunda gran crisis interna en este partido tras el congreso de julio de 1980.

---

<sup>1085</sup> *L'Opinió Socialista*, 64...

<sup>1086</sup> Conocemos esta decisión a partir de una reunión de la Secretaría de Política Autonómica el 16 de noviembre de 1981, en la que se informa de esta directriz, en Secretaría de Política Autonómica-PSOE: "Reunión de la Comisión de seguimiento y política de transferencia en el Senado con la Secretaría Federal de Política Autonómica" (16 de noviembre de 1981), ABFPI, 75-E 2.

La punta del iceberg llegó a finales de año con la presentación de las enmiendas al proyecto de la LOAPA. El grupo socialista catalán había preparado unas y su portavoz, Ernest Lluch, tenía el mandato de presentarlas en el Congreso, pero según el testimonio de Casanova, se negó a hacerlo so pretexto de la amenaza de Guerra de romper el pacto federal entre el PSOE y el PSC si lo hacía. A raíz de esto, el consejo nacional del PSC-PSOE retiró la confianza a Ernest Lluch, que quedó destituido, y en solidaridad con este, dos miembros de la Ejecutiva dimitieron, Eduardo Martín Toval y Joan Prats<sup>1087</sup>. Como ha trabajado Enric Company, el PSC se encontró con la LOAPA ante la espada y la pared, defendiendo un proyecto que no suscribía y que ponía a prueba la solidez del pacto con el PSOE por un lado, y su propia cohesión interna, por otro. En cuando a lo primero, Company explica así la situación del PSC:

Però el 1981, enmig de l'ofensiva involucionista, es trobaren en minoria defensants el model constitucional davant d'un PSOE en el qual revivia una altra tradició, la jacobina. (...) La direcció del PSOE no solament ignorà els arguments polítics i constitucionals dels socialistes catalans i adoptà com a pròpia la política antiautonomista de García de Enterría, sinó que va fer més. Va trobar dirigents del PSC disposats a aplicar aquesta orientació, en contra de les directrius donades per la Comissió Executiva del partit català»<sup>1088</sup>.

Respecto a lo segundo, la división interna del PSC y las luchas de poder también intervinieron en el desenlace de los hechos. De hecho, no puede ignorarse que Ernest Lluch, que había formado parte de los «unitaristas», quería disputarle a Joan Reventós la Secretaría General del PSC en el III Congreso que debía celebrarse durante el próximo mes de mayo, y contaba para ello, desde hacía al menos un año, con el apoyo de la dirección estatal del PSOE<sup>1089</sup>. De hecho, los dimitidos Joan Prats y Eduardo Martín Toval formaron junto a Lluch la corriente «Nueva Mayoría», que tuvo apoyos

---

<sup>1087</sup> José Antonio González CASANOVA: *Memoria de un socialista...*, p. 314; Gabriel COLOMÉ: «El Partit del socialistes de Catalunya...», p. 28; o Javier PANIAGUA: *El socialismo. De la socialdemocracia al PSOE y viceversa*, Madrid, Cátedra, 2016, p. 168;

<sup>1088</sup> Enric COMPANY: «Vints anys...», p. 40. Casi veinte años después, Joan Reventós contaría que aquella crisis estuvo a punto de costar la unidad socialista. Preguntado por cómo valoraba con el tiempo la unificación con el PSOE, concluía que el balance general era positivo, aunque destacaba momentos duros como el de la LOAPA, que pusieron en peligro aquel proyecto: «Va haver-hi un moment que vam estar a punt de provocar el trencament, en el moment de la LOAPA. I el responsable que no es trenqués el PSC agermanat amb el PSOE i absorbit al PSOE català, vaig ser jo, perquè vaig pensar que, malgrat tot, era millor empassar-se la granota i el gripau de la LOAPA, que trencar el que havia costat tant d'aconseguir, que era la unitat de tot el socialisme a Catalunya», en Joan REVENTÓS: «Joan Reventós...», p. 314.

<sup>1089</sup> *El País*, 26 de octubre de 1980; *El País*, 22 de diciembre de 1981.

del antiguo sector procedente de PSOE como Triginer y que según Company «aspirava a ser en el PSC l'expressió més clara de les posicions defensades per la direcció del PSOE sota l'impuls de l'aleshores cada dia més poderós, i més jacobí, Alfonso Guerra»<sup>1090</sup>.

Esta jugada del PSOE en Cataluña repercutió en la credibilidad de los socialistas y dio más argumentos a los que denunciaban la excesiva supeditación del Partit dels Socialistes Catalans al Partido federal, favoreciendo la campaña anti-armonización en este territorio<sup>1091</sup>. A finales de año, la situación distaba de ser idílica para el PSOE, a estos conflictos y a la oposición del PCE y las fuerzas nacionalistas había que sumar las dificultades que conllevaba firmar aquellos pactos de Estado con un partido como UCD, desmembrado y con diferencias también a este respecto<sup>1092</sup>. La situación crispada provocaba que a finales de año el PSOE pensara en la posibilidad de una ruptura de los acuerdos que finalmente no llegó. No se trataba de una exploración para analizar si esta opción era o no conveniente, sino más bien una exposición de posibles estrategias para minimizar los daños si este hecho, no deseable, se hacía inevitable, tratando de encontrar qué opción sería menos lesiva para el PSOE, que no hallaba ninguna a través de la cual, llegados a este punto, pudieran salir airosos<sup>1093</sup>.

En cualquier caso, los socialistas eran conscientes de que ya no había marcha atrás, y estaban convencidos de que aquel era el camino correcto, a pesar de los problemas. Como recuerda Fajardo Spinola, la dureza de los ataques a la LOAPA hizo que entre enero y junio de 1982 se generaran algunos debates en las sesiones de la Comisión Ejecutiva Federal y que dudaran algunos líderes socialistas, pero a pesar de esto «permaneció, y hasta se afianzó, la línea a favor de la Ley en la dirección socialista,

---

<sup>1090</sup> Enric COMPANYY: "Vints anys...", p. 40. Sobre la influencia de Guerra en el PSC tratando de favorecer al sector «españolista», véase César ALONSO DE LOS RÍOS y Carlos ELORDI: *El desafío...*, p. 84. Alejandro Quiroga también se ha referido al sector de Lluch como los «obreristas», trasladando el esquema de la disputa durante el II Congreso, que volvería a darse, aunque con menos crudeza en su III Congreso, ya en 1982. A pesar de que los alineamientos cambiaron, sí hubo un enfrentamiento en aquellos términos, como detalla este autor, entre los partidarios de Lluch, que querían que el ataque al «nacionalismo burgués» de Pujol fuera el centro de su estrategia, y los unitarios, que se negaban a una agresión frontal al nacionalismo de Pujol, ya que creían que esto sería un regalo para el nacionalismo conservador pudiendo apropiarse de los términos nacionalismo catalán y catalanismo, en Alejandro Quiroga: "Coyunturas críticas...", p. 34.

<sup>1091</sup> Como ha indicado Eugènia Salvador, esto aún se vería más agravado tras la desaparición del grupo parlamentario de los socialistas catalanes en el Congreso poco después de las elecciones de 1982, en Eugènia SALVADOR: "Crònica política...", p. 216.

<sup>1092</sup> De la posición de una parte de la UCD enfrentada con el Gobierno por este tema informa María Izquierdo en una de las reuniones de la Secretaría de Política Autonómica, en Secretaría de Política Autonómica-PSOE: "Reunión de la Secretaría de Política Autonómica y Política Municipal...", p. 2

<sup>1093</sup> PSOE: "Es posible que se rompan los Acuerdos Autonómicos" (diciembre de 1981), ABFPI, 75-B 7.

encabezando esta posición el propio Felipe. (...) Al final, la dirección federal socialista se percató de que las objeciones de los nacionalistas catalanes y vascos no iban sólo contra la LOAPA, contra cualquier LOAPA, sino contra todos los Acuerdos Autonómicos, y en definitiva contra la generalización de la autonomía política para todas las regiones»<sup>1094</sup>.

Lo que generaron aquellas tensiones fue un replanteamiento sobre cómo contrarrestar la abierta oposición del PNV y CiU, que era la que más daño les estaba haciendo. Entre otras cosas, llegaron a la conclusión de la necesidad de hacer una campaña más activa en pro de la LOAPA de cara a su discusión parlamentaria, como se afirmaba en un informe elaborado por la Secretaría de Política Autonómica: «Es preciso un relanzamiento a todos los niveles de la necesidad que tiene el proceso autonómico de una ley orgánica de armonización, y en este sentido, sin duda beneficiaría la realización de una campaña de defensa de la LOAPA en los medios de comunicación»<sup>1095</sup>. Una campaña que sufriría un cambio anunciado en este informe: el tono del mensaje, que pasaría a enfatizar los aspectos positivos del proyecto<sup>1096</sup>, rebatiendo los argumentos en contra, pero evitando el tono crispado que había predominado el discurso socialista respecto al nacionalismo en el último tercio de 1981. Sugerían desde este informe, que para evitar que la LOAPA se sintiera como una ley contra las autonomías, en el debate parlamentario sería conveniente huir de cualquier actitud que pudiera interpretarse como de intransigencia, «agotar el diálogo parlamentario con CiU y PNV» y «aceptar algunas enmiendas que no impliquen un cambio de fondo de la ley». Este era otra diferencia más aparente que real, pues si a finales de 1981 se posicionaban en contra de negociar la ley, ahora sólo permitían «algunas modificaciones exclusivamente técnicas», ya que querían evitar alteraciones que pudieran vaciar de contenido la ley, haciéndola inoperante y eficaz, algo que no estaban dispuestos a tolerar, pues como aducían, en ese caso el PSOE «habría pagado un alto precio por la LOAPA inútilmente»<sup>1097</sup>.

---

<sup>1094</sup> Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo...*, p. 121.

<sup>1095</sup> Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Previsiones en torno a la discusión de la LOAPA” (Madrid, 4 de enero de 1982), AFFLC, Fondo PSOE. Partido Socialista Obrero Español, 004065-004, p. 3. Véase en este sentido el

<sup>1096</sup> Véanse en este sentido, Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “1981: Un año decisivo para las autonomías”, ABFPI, 75-B 7, que celebra que los Acuerdos fueran «el hecho más destacable del año y aún el acontecimiento más trascendental en la historia de la Administración territorial española»; o Secretaría de Política Autonómica-PSOE: “Acuerdos autonómicos”, ABFPI, 75-F 3, que se referían a los Acuerdos como los superadores del centralismo y las concepciones insolidarias.

<sup>1097</sup> Secretaría de Política Autonómica: “Previsiones en torno...”, pp. 4-6.



Se emplearon a fondo en aquella campaña mediática para crear un clima de opinión favorable o al menos no tan negativo que facilitara la tramitación del proyecto, aunque no lo consiguieron, sobre todo en Cataluña donde se sucedieron las manifestaciones multitudinarias durante 1982 en contra del mismo<sup>1098</sup>. La versión oficial que quería transmitirse era que la LOAPA debía ordenar un proceso inevitable pero también legítimo, como era la generalización autonómica. Sobre quién había provocado la generalización durante el período preautonómico y si esto había resultado positivo o negativo, el PSOE había defendido posturas encontradas. Pero tras la LOAPA se ceñirían a valorarlo como un acontecimiento surgido de la voluntad popular que tenía causas mucho más profundas de lo que algunos querían hacer parecer, y que rechazaba de manera masiva «cualquier modelo de Estado Autonómico que marcara insalvables distancias entre las autonomías históricas y las demás. Hasta el punto de que si algo se ha puesto de manifiesto en los procesos autonómicos es que el agravio comparativo funciona tanto o más que la memoria histórica»<sup>1099</sup>. Un recurso, el del agravio comparativo, que como hemos intentando demostrar fue alentado y reforzado por el discurso socialista, que en algunos momentos asimiló más la autonomía a esta cuestión que a cualquier otra, siendo Andalucía el ejemplo paradigmático. A diferencia del PSC-PSOE, el PSOE nunca había estado interesado en separar la autonomía más relacionada con los principios de la subsidiariedad de aquella que partía de reivindicaciones identitaria históricas, posiblemente porque encajaba mejor con su concepción nacional de España y con el modelo de sociedad igualitario y solidario que permitían además reforzar y justificar aquella unidad.

Se negaba el carácter puramente emulativo de la autonomía de los territorios no considerados como «históricos» y se esforzaban por hacer entender que la generalización no menguaba capacidad autonómica a ninguna nacionalidad, sino que en todo caso la enriquecía y fortalecía, al estar enraizada en un sistema más fuerte. En este punto atacaba a quienes mantenían posiciones contrarias a esta armonización, aunque en este caso con un tono menos agresivo y sin mencionar explícitamente al nacionalismo conservador:

---

<sup>1098</sup> Eugènia SALVADOR: “Crònica política...”, p. 215.

<sup>1099</sup> Artículo enviado por María Izquierdo a Juan Luis Cebrián, con la petición de que fuera publicado lo antes posible dado el gran interés de su partido en él, en María IZQUIERDO: “La LOAPA: Fondo y forma” (Madrid, 15 de mayo de 1982), ABFPI, 74-H 5, p. 2.

Lo que ya raya en lo insólito y quizá celtibérico es que se pierda el norte y no se acierte a ver quién es quién y qué intereses generales o particulares se están defendiendo realmente. Lo que resulta incongruente con el peso y contenido de la ley es que se juegue partidistamente con ella y se comercie su futuro en arreglos coyunturales según cómo caiga la semana parlamentaria en el irresoluto y aturdido partido del Gobierno<sup>1100</sup>.

La crítica velada a los acuerdos entre el nacionalismo conservador y el Gobierno reaparecía, dejando claro que el PSOE no estaba dispuesto a negociar la ley, pese a que en este mismo texto se criticaba un comportamiento victimista del PNV o CiU, ya que a pesar de las modificaciones del proyecto inicial que decían haber llevado a cabo de acuerdo con el resto de grupos, PCE, AP, PSC, PSE y de los propios PNV y CiU, no descendía ni un ápice la dureza de los ataques, algo que según María Izquierdo se entendía mal y que sólo buscaba ocultar las capacidades de gestión de los gobiernos autonómicos.

Aunque el PSOE acompañara la justificación de la LOAPA con muchos otros argumentos, que eran también reales, tenía una finalidad última, mantener la unidad de España, de su Estado y de su nación a salvo de posibles aspiraciones independentistas, y María Izquierdo no lo ocultaba en la conclusión de este artículo:

La LOAPA responde a una política de Estado proyectada firme y rigurosamente en los Acuerdos Autonómicos. Un Estado que es el Autonómico, único y solidario, progresista y democrático. Asegurar su firme construcción y su buen funcionamiento debe ser tarea que apoyen todos los demócratas. Es cierto que acaso pudiera levantarse también sin esta LOAPA pero enseguida se precisaría otra LOAPA que acabaría siendo esta LOAPA<sup>1101</sup>.

Que los Acuerdos Autonómicos y la LOAPA fueran garantes del Estado «único», pensaban los socialistas, era el motivo por el que se revelaban los enemigos de aquella unidad: «Lógicamente, la LOAPA no es buena para quién tiene una mentalidad

---

<sup>1100</sup> *Ibid.*, p. 4.

<sup>1101</sup> *Ibid.*, p. 7. Tampoco lo haría el Secretario General del PSOE, en su intervención en defensa de la LOAPA ante el Congreso el 22 de junio de 1981. Se refirió a la necesidad de una ley de armonización porque era el conjunto del pueblo español el que concedía el derecho a la autonomía y por tanto los Estatutos no podían partir de la negociación individual de cada Comunidad con el Estado, ya que la voluntad soberana remitía sólo al pueblo español en su conjunto: «Los Estatutos de Autonomía no son —y no lo son con evidencia para todos— el fruto de un pacto entre cada Comunidad y el Estado. Los Estatutos de Autonomía nacen de una Constitución, que a su vez expresa la voluntad soberana de un pueblo, del pueblo español», en », *Diario de sesiones del Congreso de los Diputados*, nº 251..., p. 14542.

independentista. Y tampoco lo es para quien la tiene centralista»<sup>1102</sup>. Como explicara Felipe González, la LOAPA venía a poner límite a la reivindicación infinita, lo que significaba, como han señalado César Alonso de los Ríos y Carlos Elordi, «dar vueltas en torno al separatismo sin nombrarlo»<sup>1103</sup>. En este sentido se ha pronunciado también Martín Villa, quien justificó la intervención en aras de la homogeneización y la racionalización para mantener a salvo la condición nacional española que estaba siendo amenazada por la legislación autonómica<sup>1104</sup>.

Fue en el ámbito catalán, en el que se centró sobre todo la campaña en favor de la LOAPA, aunque Euskadi fue el otro lugar escogido para desarrollar con fuerza aquella labor propagandista. Concretamente en Cataluña editaron unos libritos que se publicaron en castellano y catalán, titulados como «Todo aquello que queráis saber sobre la LOAPA...y que nunca os han dicho», con los que querían acabar con la campaña de «engaño», «desinformación» e «intoxicación» y «ayudar a que la opinión pública catalana pueda hacer sus juicios con seriedad y no en función de la gesticulación y el cálculo de la derecha, llamada nacionalista, que con muchos millones a su disposición ha orquestado una campaña destinada a crear confusión y división, entre los ciudadanos de Catalunya»<sup>1105</sup>. En general, el texto intentaba convencer a los lectores de que la LOAPA no afectaba negativamente a la autonomía catalana porque ni quería ni podía hacerlo legalmente, calificando los argumentos en contra de burdas mentiras. La justificación de la ley se centraba una vez más en la necesidad de una norma que ordenara el proceso haciéndolo viable, coherente, barato y estable, lo que reforzaba en última instancia el autogobierno catalán. Y negaban que el origen de esta necesidad se situara a partir del 23-F, sino que situaban en septiembre de 1980 el momento en el que el PSOE hizo una oferta al Gobierno para negociar sobre estos problemas<sup>1106</sup>. Aspectos similares fueron tratados en los documentos que elaboró el PSE-PSOE, aunque en este

---

<sup>1102</sup> PSOE: “Todo aquello que queráis saber sobre la LOAPA...y que nunca os han dicho”, ABFPI, Fba 207, p. 6.

<sup>1103</sup> César ALONSO DE LOS RÍOS y Carlos ELORDI: *El desafío...*, p. 155. Jaime Pastor también se ha referido a esta cuestión, señalando que a LOAPA ya reflejaba lo que el PSOE haría tras acceder al Gobierno: «poner un techo a las pretensiones de los nacionalismos periféricos», en Jaime PASTOR: “La izquierda de ámbito estatal. Entre el «patriotismo constitucional» español y el federalismo plurinacional”, en Carlos TAIBO (dir.): *Nacionalismo español. Esencias, memoria e instituciones*, Madrid, Los libros de la Catarata, 2007, p. 200.

<sup>1104</sup> Rodolfo MARTÍN VILLA: *Al servicio...*, pp. 190-191.

<sup>1105</sup> PSOE: “Todo aquello que queráis...”, pp. 1-2. Para la versión en catalán véase, PSOE: “Tot allò que volíeu saber sobre la LOHPA...i que no us han dit”, APSC, 8.5.43, 2993.

<sup>1106</sup> *Ibid.*, p. 4.

caso se incidió especialmente en los temas económicos y en la imposibilidad de que afectara al Concierto económico<sup>1107</sup>.

La oposición al proyecto de ley no fue sin embargo contrarrestada, y el PSOE y el Gobierno, firmes en su voluntad de no negociar más que algún aspecto técnico que no desvirtuara el contenido de la misma, rechazaron las enmiendas a la totalidad formuladas por comunistas y nacionalistas, que fueron debatidas entre los días 21 y 22 de junio de 1982. Pero ante la contestación de la LOAPA, conscientes de que la ley iba a ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, Felipe González propuso al Gobierno que esperase a aplicarla hasta que éste se hubiese pronunciado. El Ministro de Administración Territorial –que era desde diciembre Rafael Arias-Salgado–, agradeció esta iniciativa y anunció que el Gobierno plantearía la cuestión previa de constitucionalidad, para «tranquilizar a todos aquellos Grupos que piensan que esta ley es inconstitucional»<sup>1108</sup>.

La LOAPA fue declarada inconstitucional en agosto de 1983 por su carácter orgánico y armonizador, y porque no correspondía a esta ley ni al Parlamento interpretar la Constitución<sup>1109</sup>. Pero el espíritu de la misma y los Acuerdos Autonómicos racionalizaron a priori un modelo que estaba en construcción. El sistema autonómico, como manifestó Arias-Salgado, había quedado «ordenado en clave de unidad y no de separación», equilibrando el sistema entre «el uniformismo y la heterogeneidad»<sup>1110</sup>, y la decisión de aquello había sido tomada a mediados de 1981, dejando fijados unos criterios que fueron irreversibles después<sup>1111</sup>. Leopoldo Calvo Sotelo lo describió así: «La LOAPA, en suma, jurídicamente vulnerable y vulnerada, fue políticamente saludable, y contribuyó a la definición y a la salud de las España de las Autonomías, enferma de ambigüedad, de indefinición y de sacralización antes de la Ley, algo más sana desde entonces y definitivamente trazada»<sup>1112</sup>.

---

<sup>1107</sup> Véase PSE-PSOE: “Los socialistas, el Estatuto de Autonomía y la LOAPA”, AFFLC, Fondo Alberto Pérez García, 004007-005; o PSE-PSOE: “Acuerdos Autonómicos” (21 de septiembre de 1981), ABFPI, 75-B 7.

<sup>1108</sup> *Diario de sesiones del Congreso de los Diputados*, nº 251..., pp. 14545-14546.

<sup>1109</sup> Eliseo AJA: *El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales*, Madrid, Alianza, 1999, p. 65; Charles POWELL: *España en democracia, 1975-2000*, Barcelona, Plaza & Janés, 2001, p. 306.

<sup>1110</sup> *Diario de sesiones del Congreso de los Diputados*, nº 250..., p. 14490.

<sup>1111</sup> En el mismo sentido Juan Pablo FUSI: “El desarrollo autonómico”, en Javier TUSELL y Álvaro SOTO (eds.): *Historia de la Transición (1975-1986)*, Madrid, Alianza Editorial, 1996, p. 463.

<sup>1112</sup> Leopoldo CALVO SOTELO: *Memoria viva...*, pp. 118-119.

Quizá los socialistas tenían miedo de los costes electorales que esto pudiera suponerles, sobre todo en Cataluña y Euskadi, pero no se sintieron amenazados sobre los resultados que obtendrían en el conjunto de España. Habían podido comprobar que la LOAPA no había sido ningún obstáculo en las elecciones autonómicas de Andalucía celebradas en mayo de 1982, en las que consiguieron más del 52,7% de los votos<sup>1113</sup>, un triunfo que como ha contado Alfonso Guerra, despejó cualquier duda sobre sus posibilidades de gobernar España<sup>1114</sup>.

Por ello, la LOAPA no fue un tema a ocultar en la campaña para las elecciones del 28 de octubre de 1982, en las que se comprometían a terminar la construcción del Estado de las Autonomías según los términos impuestos por los Acuerdos, en el marco de una política de Estado que el PSOE había demostrado practicar sobre todo durante la última etapa de Gobierno de UCD en la que llevaron incluso la iniciativa para facilitar la gobernación y la estabilidad de las instituciones del país<sup>1115</sup>. Era una campaña que bajo el eslogan «Por el cambio», transmitía seriedad, conjugando ambos polos de forma exitosa como ha estudiado Juan Antonio Andrade<sup>1116</sup>.

Su victoria en el conjunto de España, alcanzó la mayoría absoluta doblando sus votantes respecto a 1979, no fue empañada ni siquiera por la desconfianza autonómica que se había generado en Cataluña y Euskadi, donde se demostró la existencia de comportamientos distintos en el electorado según el tipo de comicios. También en estos territorios mejoraron ostensiblemente sus resultados, logrando incluso en Cataluña una amplia victoria<sup>1117</sup>.

Tras las elecciones, el periódico *The New York Times*, definió a los dirigentes socialistas como «un grupo de jóvenes nacionalistas españoles», algo que no desagradó

---

<sup>1113</sup> El PSOE obtenía 66 escaños; AP 17 escaños; UCD se hundía con 15 escaños; igual que el PSA con 3 escaños; PCE 8 escaños, véase sobre los resultados andaluces José F. LORCA: *El proceso autonómico andaluz*, Madrid, Mezquita, 1983, p. 206; Antonio M. JAIME: *Elecciones y Poder Político en Andalucía, 1982-2004*, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2005, pp. 41-47; o Juan Antonio LACOMBA: “La realidad autonómica andaluza. Dinámica política en la Andalucía constitucional y autonómica (1978-2004)”, en *Anales de Historia Contemporánea*, 20 (2004), pp. 298-300.

<sup>1114</sup> Alfonso GUERRA: *Cuando el tiempo...*, p. 328.

<sup>1115</sup> Véase PSOE: “Por el cambio. Programa electoral”, ABFPI, Fc 226; PSOE: “Situación política y alternativa del PSOE”, APSC, 9.1.18, 78; PSC-PSOE: “Por el cambio. Manifiesto”, APSC, 9.1.10, 555.

<sup>1116</sup> Juan Antonio ANDRADE: *El PCE y el PSOE en...*, p. 386

<sup>1117</sup> *El País*, 29 de octubre de 1982; Gabriel COLOMÉ: *El Partit dels socialistes de Catalunya. Estructura...*, pp. 168-176; Borja DE Riquer: “La configuración...”, p. 487; Manuel MONTERO: “La transición...”, p. 114; o Francesc PALLARÈS: “Anàlisi electoral”, en Lluís RECOLONS, Francesc CABANA, Eugènia SALVADOR y Salvador CARDÚS: *Catalunya 77/88*, Barcelona, Publicacions de la Fundació Jaume Bofill-La Magrana, 1989, p. 229.

a Felipe González, quien en una entrevista con Juan Luis Cebrián reconoció que aquella descripción era correcta y afirmó: «Creo que es necesaria la recuperación del sentimiento nacional, de las señas de identidad del español»<sup>1118</sup>. Aquel titular, novedoso por la terminología, no respondía sin embargo a una nueva actitud que caracterizara al socialismo a partir de su responsabilidad ejecutiva<sup>1119</sup>, sino que más bien, en 1982 culminaba un largo proceso por el cual el PSOE se despojaba de muchos complejos y reconocía abiertamente su adscripción identitaria, que en líneas generales era la española. Posiblemente había ayudado a eliminar algunos reparos el hecho de que el discurso nacional que les había llevado al Gobierno se había articulado en clave española, como estas declaraciones de Felipe González aparecidas durante la campaña electoral:

yo creo que hay que empezar por decir algo que hoy será recibido mal, porque es un análisis a contracorriente y puede ser mal interpretado. La formación del Estado-Nación, en términos históricos, se realizó (...) sacrificando elementos diferenciales, en un proceso de centralización del poder y de las decisiones, de unificación nacional que ha tenido mucho de uniformización nacional. Esto analizado *in situ* podría haberse evitado, pero contemplando la historia se produjo así, aquí en España y en otros países. De toda etapa histórica ha de hacerse un balance. De lo bueno y de lo malo. A mí el balance de esta etapa me parece positivo. (...) y constato que España se hizo nación unida, sin duda con algunos traumas, pero con innegables ventajas que ningún ciudadano puede negar<sup>1120</sup>.

Quizá habían constatado que proclamar la unidad de España, que siempre había formado parte de su proyecto de Estado y de nación, no les hacía perder votos, ni siquiera en Cataluña, cuando del Gobierno del conjunto del Estado se trataba.

---

<sup>1118</sup> Citado en Abdón MATEOS y Giulia QUAGGIO: “Nación y Estado...”, p. 28.

<sup>1119</sup> Muchos autores han reconocido abiertamente a partir de 1982 ese carácter más «nacional», «patriótico», o «nacionalista». Por ejemplo, Abdón Mateos y Giulia Quaggio han defendido que «de 1982 en adelante, el PSOE intentó difundir (...) un seudodiscurso neopatriótico acerca de España como nuevo lenguaje aceptable para el nacionalismo español, tras el final del franquismo», en Abdón MATEOS y Giulia QUAGGIO: “Nación y Estado...”, p. 39. Véase también José Félix TEZANOS: “Continuidad y cambio...”, p. 33; o Jaume LORÉS: “Federalismo y unitarismo...”, pp. 107-108.

<sup>1120</sup> Se trataba de un libro escrito entre febrero-agosto 1982, aunque publicado durante la campaña electoral, en Felipe GONZÁLEZ: Un estilo..., pp. 108-109.

## CONCLUSION

Addressing the national question in Spain from the socialist perspective is not an easy task. There are many factors involved and each of them play an important role when analysing a problem which affects different concepts that, at the same time, are related, help build one another, and for which the Spanish Socialist Party (Partido Socialista Obrero Español (PSOE)) never had univocal answers. Both time and the circumstances, together with the perspective each issue was approached to, were giving different answers with small nuances. This makes impossible to have a solid view of what Spain was for the socialists in the period between the dictatorship and the democracy. On the other hand, the Party's sources have been studied to analyse the complexity of the socialists' answer, both public sources (congress statements, election propaganda, publications, etc., which gave different versions depending on why and when they were written) and inner ones, in order to contrast the image the Party wanted to show, although it wasn't homogeneous either. Having access to the internal discussions and all the work done to be debated by the head of the party and the autonomic policy office was very tremendously useful and clarifying, since these papers detail some aspects that were unclear and give a much more detailed vision of the tensions, doubts and interests that motivated every decision taken, and the different approaches that guided a policy on the national question that was never completely defined nor planned until 1981.

Since the beginning of the Transition, the period between the end of Franco's dictatorship and the beginning of the new democracy in Spain, we can find a duality that affects these problems above mentioned, since, although they represented a more radicalized option regarding the oppressed nationalities' rights and their self-determination and advocated for a federal state; they also defined Spain in a more conservative way. In 1976, on his conference *Línea política del PSOE* at *Escuela de Verano*, Felipe González' definition of Spain was ambiguous and had a complex of inferiority towards the dominant stance, also heterogeneous, of the Party regarding the national identity:

Hay una realidad histórica, política, socioeconómica, que se llama ESPAÑA. Que a algunos les puede gustar y a otros no, pero que el concepto está ahí, cristalizado, y que en realidad lo que no podemos hacer es dejar que ese

concepto lo utilicen las fuerzas reaccionarias y centralistas. Y un concepto que responde a algo, que no es una invención de hoy y ahora<sup>1121</sup>.

As the unquestionable reality of the nation was affirmed, PSOE's General Secretary asked the members of the party to recognise the nation they were represented by, since it no longer represented the reactionary values that owned it and monopolised it during the dictatorship years. Felipe González made a call to get back a speech on Spain made from the left, from a socialist politic culture that had no reason to renounce a community which represented the great part of his potential voters, members of the party and its ruling class.

PSOE's approaches regarding questions as what was Spain, its definition as a nation or as a State; whether it was imagined as a nation of nations or as a unique, only nation; what nation or nationality meant; whether they were pro self-determination and what self-determination even meant; what kind of State Spain would be: autonomic, federal or regional; how far they would go to defend people of Spain's national rights - or maybe just the autonomic rights-; whether they wanted a symmetric or an asymmetric state, were constantly changing from 1974 to 1982 and they were dependent of the circumstances, the strategy and the evolution de their ideology. Nevertheless, although some crucial changes were made, the essence of the main principles was kept inalterable, as many have tried to prove.

We have already referred to the common explanation of Party's opportunism on the so-called "national question", opportunism which would become evident in the renunciation of the guiding principles on this issue, especially regarding the constitutional debate and with their conformity with the State organization that finally was imposed. To deny this would be to not analyse the whole, but to accept that it was only one of the parts -and not the most important one- would simplify the historical explanation, which is much more complex. We must admit that PSOE had not a defined or homogeneous position regarding this issue, but we must also recognise that there was a common thread in proposals under construction, which responded to its ideological and political heritage and the influence the circumstances had. Those who have clung to its opportunism do so because they assumed the renunciation of the principles that would be formulated in the beginning of Transition. But what principles were these?

---

<sup>1121</sup> Felipe GONZÁLEZ: "Línea política...", pp. 42-43.



Those from *Congreso de Suresnes* in 1974 or those that we have been analysing through a longer period of time? There is no way to draw a line between a position and the other, since they all intermingled at the same time and among the members of the same party, producing in the long run an evolution that created different positions because of the strategy and the demands of the constitutional pact, but also and especially by the internal dynamics of PSOE, within which the ideas would be clarified and the principles to be defended hierarchized.

González' definition of Spain would be made at the same time as the principles adopted in the "maximum program" on the right to self-determination and pro-federalism were in force, principles which were otherwise being questioned in other areas. The duality between 1974 and 1978 was the general trend, and it represented the socialism conviction of defending a series of identity rights that had been denied by the dictatorship. A Marxist tradition that defended oppressed peoples' rights against the class enemy and was aware of the mobilizing potential of national demands in contemporary societies, they had no qualms about sympathising with "nationalist" demands. In addition, these ideas were accepted by the left in a context of solidarity with Basques and Catalans' demands, who were part of all the unitary organisms fighting to restore the democracy in Spain.

In this way, combining the previous tradition with another one according to which the Socialist Party was Spanish not only in its denomination, they defended a federal State and a right of self-determination that had to be understood a strengthener of the unit of Spain, that was State but also a nation, although the nation was found much more clearly in the «minimum program» than in the «maximum program». These rights granted freedom to the oppressed peoples, who would exercise this right according to this approach, in a responsible way, for the benefit of the oppressed class, the working class, for which fragmentation was not conceived - at least not within the limits of the frontier of the nation-state and the imagined community. The federal state that self-determination would build from a well-established basis, from a voluntary and non-forced union, would impose an interregional solidarity that would question any kind of inequality from the beginning, favouring the development of an egalitarian model where planning a symmetric model seemed more consistent. Nevertheless, they were also in favour of avoiding uniformity, so the doors were still open to some kind of asymmetry that in no way meant any kind of inequality.

In any case, soon those theoretical principles were discussed within the Party. It was very clear that self-determination could never mean independence, since they had never defended such a thing. Whether federalism could not be relegated by a federalizing or autonomous state, halfway between a federal and a regional state, was also debated. Self-government seemed to be the immediate objective to solve the national problem in Spain, which was of particular concern to Catalonia and the Basque Country, although Socialists were in solidarity with the aspirations of other peoples who expected to achieve rights that responded to their different identities, which, although less strongly, had also been expressed. These, moreover, did not involve any conflict of interests with the maximum of equality and solidarity that defined the Party, back then, above the idea of being different.

Thus, in the Constitution adopted in 1978, no major concessions or renunciation were made regarding the debate that was taking place within the Party. The State of Autonomies was a decentralized but united system, based on a foundational text sufficiently open for the generalization of the autonomy political and administrative organization throughout the state, always respecting the principle of equality. It also granted some freedom for the different peoples and nationalities to define the limits of their self-government in the elaboration of their Statutes of Autonomy. It cannot be said that it was a completely different structure from the one designed by the socialist project. A sufficient degree of autonomy was safeguarded and the values they wanted to represent, equality, solidarity and democratization were not sacrificed, and efficiency and rationalization were also favoured.

The period that started right after the Constitution was considered by several authors as a transition within the PSOE, when a more moderate strategy began to be imposed, which in the case of the national question, served as an opportunity to bring the «two souls» that had lived together within the party until then, the «maximum program» and the «minimum program». This does not mean that from then on the most radical proposals were abandoned to be more faithful to more moderate but also more ingrained principles. Right the opposite, from 1979, in addition to having constitutional limits that prevented any adventure outside of them, a difficult situation was imposed for «ideological coherence», the political practice. Of course, in this process the electioneering strategy also intervened, as they were willing to go from just an «alternative» to be in office.

The national problem was the main issue, which after the Constitution of 1978 happened to become the autonomic issue. Since then, self-determination has been forgotten, and federalism was defended only as an abstract principle for a remote future, but many other questions remained unsolved. The Socialists had no clear answer yet and they would take their time to elaborate it. PSOE had always defined the plural nation that was now a doctrine, and as happened before, before flexible principles, whose limits had always been strict - the unity of the nation based on plural, free and supportive coexistence of their nationalities and regions -, from then on, the circumstances would set the potential alternatives. All this was being improvised and this would also define its politics from that moment onwards.

The construction of the Autonomous State was going to be one of the major challenges for the young democracy and the stability of the system was at stake. UCD and PSOE, the two major parties in Spain, did not overlook this risk. In a great extent, the autonomic development would be dependent upon their actions. Immersed in a strong partisan competition, they also tried to exercise a «state responsibility» in this subject related both to the strategic interest of each party and the firm conviction of the need to maintain the unit and the stability of Spain during the decentralization stage. On the other hand, although they agreed on the previous precept, they disagreed on the autonomic model. The socialists were convinced to decentralize not only the administration but also the politics; and it had to be based, at least theoretically, on the respect for the autonomous will of each territory. And we say theoretically because this question kept socialism undecided since then until July, 1981, when they finished the autonomic map definitively in an imposition from above that did not take into account the popular will through the pact with the centrists, the *Acuerdos Autonómicos*.

Early autonomous generalization supporters, which ensured equality and solidarity, they quickly feared the negative effects this might entail for Spain's stability, functionality and unity, and soon began to make calls to stay calm, trying to avoid a race for power that could not benefit anyone. They kept this position while making it compatible with another that saw the opportunity to rise with the flag of national or autonomous rights, encouraging them in all places where there were identity demands that had to be recognized, but also where they saw an opportunity for electoral success. But when autonomy was a real thing, the Socialists agreed with the centrists on the need to put in order the whole process. In this sense, PSOE believed that equality and

homogeneity when organizing the transition to autonomy should be guaranteed through a harmonization that also admitted plurality and wouldn't standardize, rationalizing access to autonomy step by step so the system would not collapse, without questioning at any time that the final horizon should be the same for all. In this context, talks with the centrists took place since late 1979, but the Government Party decided to continue on their own and in early 1980 - in a strategic action that ended up badly and greatly benefited PSOE- announced the autonomy of all the territories that were not the three historical nationalities with the article 143. Meanwhile, Galicia was imposed very serious obstacles to reach the same powers Euskadi and Catalonia had. Having resolved what had been considered as the real problems regarding the national question, after the approval of the Catalan and Basque Statutes, the Government tried to stop the rest of the processes fearing to endanger the system and unity of Spain.

Due to the centrist reaction, the Socialists were faced with an accomplished facts policy that in Andalusia made them defend the right to choose the path they would like to follow, although there were indeed internal tensions. The fear of an overflow was also shared by the socialists, who could not, however, embrace UCD's methods, which they did not share. The socialist attitude in Andalusia became a workhorse that proved to be very precious to minimize the centrist positions, whereas in territories like Canarias or the Valencian Country, equally legitimized to have access to the article 151, PSOE did not see it that clear. Always between the interests of the State and the general planning that they considered necessary to ensure stability, equality, solidarity, unity and functionality in Spain; among partisan interests and the conviction of -in some specific cases- allowing access to the *via rápida* without jeopardizing a homogeneous and egalitarian model that had to be by the arrival of the Autonomous State, socialist policies moved between ambiguity, improvisation and indecision, letting circumstances, individuals, and the performance of their direct competitors govern their autonomic policy.

Nevertheless, the need to plan a model of autonomous development from above, for which they knew they would need to be in office, made them to dialogue with UCD from late 1979 until 1981, although negotiations were interrupted in several occasions, by the current circumstances and the global strategy, not because of the irreconcilable divergences in autonomic matter. The culmination of this trajectory came with the signing of the Autonomous Agreements between UCD and PSOE in July 1981. This

pact, precursor of the eventual LOAPA, was intended to homogenize and harmonize an autonomous process that was feared to overflow the limits of the national, unitary and plural state, but these budgets were not new. It has been pointed out on several occasions that the coup that took place on the 23<sup>rd</sup> of February, 23-F, could have triggered that drift, but a more detailed study of the sources shows how PSOE preferred that *vía* long before 1981, although the coup offered both parties the chance to understand each other, both because of the dangers that were besetting democracy and, above all, because of the opportunity that the Socialists had at that time to «give up» promises made before and had long been a burden most of the party were eager to let go at no cost to their public image. In 1981, only the possibility of keeping being favourable to article 151's *vía* in the Valencian Country remained open, since in the rest of territories there was no reason to make *casus belli* from the procedure when the Autonomous State would not allow inequalities based on the right of being different.

Finally, the model they agreed upon allowed plurality but diluted any nationalist aspiration through a symmetrical system that used equality and solidarity to deny the right to difference. From the idea that the difference in rights was not admissible, more "locks" were imposed to safeguard the unity of Spain, balancing the autonomic rights of the territories to a point that lowered historical expectations and it gave autonomy never imagined before Transition. The justification of this system was very clear within PSOE. They would link that project to its most recent tradition regarding the national question in Spain, supporting on the other hand the thesis that we have been defending:

La solidaridad no es un valor más del socialismo, sino el valor fundante del movimiento obrero y la matriz de la que emergen los demás valores. Por eso, los socialistas ponemos una fuerza especial en el desarrollo de las menciones constitucionales de la solidaridad, a las que la connivencia de fondo entre la derecha estatal y las derechas nacionalistas querría reducir a un mero nominalismo<sup>1122</sup>.

The above quotation belongs to *Resoluciones sobre política territorial* from the XXIX Congreso held in October 1981, made in a context in which the party apparatus openly raised its defense of the Constitution and the agreements of July that same year, justifying the homogenization as necessary for the proper functioning of the system, since, after all, the citizens and peoples equality was guaranteed, whichever *vía* was

---

<sup>1122</sup> PSOE: "Autonomías...", p.105.

followed. Thus, no one will find the previous manifestation dissonant with such period, quite the opposite. Let us now try to think of it as if we had extracted it from a text prior 1978, could anyone deny that these principles were enunciated at that conjunction? It seems difficult to say that solidarity did not guide the approaches that were expressed on federalism or the rights of nationalities and regions since 1974. And the point is not that socialism was primarily a movement of class identity, the point is that it never questioned the territorial separation of the whole state or the nation that Spain was. As stated in the same text:

nuestra defensa de las autonomías ha tenido siempre también un sentido político del todo diferente al autonomismo de los nacionalismos particularistas burgueses o pequeño-burgueses. Estos han planteado la autonomía como una reivindicación particular frente al Estado Central sin pretender situar esta reivindicación en el contexto de una transformación general del Estado. Los nacionalismos burgueses y pequeño-burgueses han sido y son por ello particularistas, desestabilizadores e ilusorios. Son particularistas, porque apuntan a objetivos exclusivos de su nacionalidad renunciando a todo proyecto político para España<sup>1123</sup>.

The state models that were enunciated at the beginning of Transition imposed and defended in the end were not at all irreconcilable, as we tried to demonstrate, but there is another question to ask: were solidarity and equality to which they appealed more than the attempt to democratize and rationalize Spain? Were the unity of the peoples and regions of the state, the unity of the working class not hiding the will of a national unity? In the document *El PSOE ante la situación política*, presented by Felipe González to before the press in June 1981 as the Party's political project for that moment, right at the beginning, claims: «España, la más joven de las democracias europeas pero una de sus más antiguas naciones»<sup>1124</sup>. This statement, which in no case supposes an isolated fact, is an example of how PSOE thought of Spain and thought of Spain as a nation. Actually, they were building a concept of a nation opposed to the one that had been inherited from Francoism, a nation that identified them but did not fail to see itself as an indivisible whole. In that struggle against oppression and unifying centralism, they envisioned a federal state in which differentiated identities were respected, just as it would be in that autonomous state they helped to build. In it, they

---

<sup>1123</sup> *Ibid.*, p.107.

<sup>1124</sup> PSOE: “El PSOE ante la situación...”

tried to accommodate plurality, but perhaps never came to pretend anything more than that, surely never imagined it as a plurinational state.

Another question would be whether the fact of reproducing Spanish national identity through its discourse and its political practice would turn the Socialist Party into a Spanish nationalist party. Of course, his speech helped to build the nation, because despite not claiming to be a nationalist party at all, rather the opposite, he appealed to the Spanish nation as a base of legitimacy, as a subject of sovereignty of the people he intended to represent; because that's why he built an account of historical and cultural continuity of Spain, although without giving it a timeless condition either; because he referred to sovereignty as Spain's democratization basis; and because that state, that nation, was not conceived without any of the territories that had historically built it, for which independence was never a desirable or real option.

From this point of view, it would be plausible to label the Socialist Party as Spanish nationalist, if we take a definition of nationalism that does not necessarily imply the party's nationalist self-description or requires to be one of its most characteristic features. Another part is less necessary when the nation to which it appeals already has a state of its own. If we assume a concept like the banal nationalism of Michael Billig or the definition of nationalism given by Craig Calhoun, we could call PSOE a nationalist party, who never concealed a political project in which sovereignty was attributed to the Spanish nation, and to whom, consequently, corresponded the representation of the State. If banal nationalism is considered nationalism, even if it does not manifest itself consciously, why should we not consider a nationalist party participating in a shared national identity and carry it through its discourse, its program and ultimately in its political project? To some extent, this party was not aware they were building up the nation - or not totally - and this can hinder its analysis, as it happens with all banal nationalism, but it does not invalidate it. It is true that in this case, too, there are circumstances that exacerbate confusion, such as its ideological and historical tradition, in which factors such as internationalism and the way of understanding it in the sphere of International and Spanish communism come into play. Endogenous issues, such as the inheritance of Francoism itself; the solidarity generated towards non-state nationalisms, which in Spain had grown stronger thanks to the legitimacy offered to be one of the targets of the repressive state; the concrete political situation that was experienced with Transition; etc. But all this, although complex the

study of this phenomenon, cannot hide that there was a rhetoric and a nationalist project, although this was very different from the centralizing and chauvinist nationalism.

From PSOE they expressed solidarity with other nationalities' sentiments within the state and their recognized rights, but at the same time, a project of Spanish state and nation was built in which unity - although not uniformity -, solidarity and equality would eventually prevail any disruptive will. A nationalism that the Party contributes to trivialise and naturalize in society through, sometimes, more unconscious and internalized actions; and others, by means of direct interventions where the flag of their nation would wave, as graphically demonstrated in his electoral program for the 1979 elections. It is from this perspective from which Felipe González should be understood when in 1982 he proudly acknowledged Juan Luis Cebrián - in an interview for the newspaper *El País* - that he likes the description that The New York Times had made of the Socialists after the victory in the general elections, calling them "a group of young Spanish Nationalists", since he believed that it was «necesaria la recuperación del sentimiento nacional, de las señas de identidad del español»<sup>1125</sup>.

---

<sup>1125</sup> Mentioned in Abdón MATEOS y Giulia QUAGGIO: "Nación y Estado...", p. 28.



## BIBLIOGRAFÍA

Carmelo ADAGIO y Alfonso BOTTI: “L’identità divisa: nazione, nazionalità e regioni nella Spagna democrática (1975-2005)”, en Alfonso BOTTI (ed): *Le patrie spagnoli. Spagna democrática e questioni nazionali (1975-2005)*, Milán, Bruno Mondadori, 2007, pp 3-90.

Lluís AGUILÓ: *Els Avantprojectes d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana*, València, Corts Valencianes, 1992.

Lluís AGUILÓ: “Els entrebancs jurídics de la Transició valenciana”, *Afers*, 67, 2010, pp. 709-717.

Eliseo AJA: *El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales*, Madrid, Alianza, 1999.

Eliseo AJA: “Los principales periodos de desarrollo del Estado Autonómico”, en *Anuario jurídico de La Rioja*, 2 (1996), pp. 121-144.

José Luis ALBIÑANA: “Sobre la preautonomía”, en Vicente GARRIDO, Joaquín MARTÍN y Margarita SOLER: *El nacimiento del Estatuto valenciano*, València, Fundación Profesor Manuel Broseta, 2001, pp. 61-120.

Manuel ALCARAZ: *Cuestión nacional y autonomía valenciana*, Valencia, Instituto Juan Gil-Albert, 1985.

Manuel ALCARAZ: “Política e ideología en el proceso autonómico”, en Juan FERRANDO BADÍA: *El proceso autonómico valenciano*, València, Consell Valencià de Cultura, 1993, pp. 3-66.

Manuel ALCARAZ: “Construcción y decadencia del Estado Autonómico”, en Ferran ARCHILÉS e Ismael SAZ: *Naciones y Estado. La cuestión española*, València, PUV, 2014, pp. 51-85.

César ALONSO DE LOS RÍOS y Carlos ELORDI: *El desafío socialista*, Editorial Laia, Barcelona, 1982.

José ÁLVAREZ JUNCO: “Mitos de la nación en guerra”, en Santos JULIÁ (coord.): *República y Guerra Civil. Historia de España Menéndez Pidal vol. XL*, Madrid, Espasa Calpe, 2004, pp. 635-682.

Óscar ALZAGA: *La Constitución española de 1978 (comentario sistemático)*, Madrid, Ediciones del Foro, 1978.

Benedict ANDERSON: *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*, México, Fondo de Cultura Económica, 2006

Juan Antonio ANDRADE: El PCE y el PSOE en (la) transición. La evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político, Madrid, Siglo XXI, 2012.

Rafael ARACIL y Antoni SEGURA (ed.): *Memòria de la Transició a Espanya i a Catalunya*, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona-Centre d'Estudis Històrics Internacionals, 2000.

Antonio ARADILLAS: *El reto de las autonomías*, Barcelona, Plaza & Janés, 1987.

Xavier ARBÓS: “Cataluña, España y el nacionalismo como determinante”, en Lluís ARMET (et alii): *Federalismo y Estado de las autonomías*, Barcelona, Planeta, 1988, pp. 93-103.

Ferran ARCHILÉS: «"... o no serà": 20 anys de nacionalisme polític al País Valencià», *L'Avenç*, 214, 1996, pp. 26-31.

Ferran ARCHILÉS: “El «olvido» de España. Izquierda y nacionalismo español en la Transición democrática: el caso del PCE”, *Historia del Presente*, 14 (2009), pp.103-122.

Ferran ARCHILÉS: “L’inevitable desencís. Joan Fuster i la Transició democràtica (1976-1982)”, *Afers*, 67, 2010, pp. 565-593.

Ferran ARCHILÉS: *Una singularitat amarga. Joan Fuster i el relat de la identitat valenciana*, Catarroja, Afers, 2012.

Ferran ARCHILÉS y Marta GARCÍA CARRIÓN: “En la sombra del Estado. Esfera pública nacional y homogeneización cultural en la España de la Restauración”, *Historia Contemporánea*, 45 (2012), pp. 483-515.

Ferran ARCHILÉS: “Lenguajes de nación. Las “experiencias de nación” y los procesos de nacionalización: propuestas para un debate”, *Ayer*, 90, 2013, pp. 91-114.

Ferran ARCHILÉS: “Una improvisada pervivencia. La Constitución de 1978 y la idea de nación española”, en Ferran ARCHILÉS e Ismael SAZ: *Naciones y Estado. La cuestión española*, València, PUV, 2014, pp. 15-49.

Ferran ARCHILÉS: “Nacionalismos y culturas políticas en España (C. 1975-2012)”, en Manuel PÉREZ LEDESMA e Ismael SAZ (coords.): *Del Franquismo a la democracia, 1936-2013*, Madrid, Marcial Pons, 2015, pp. 141-174.

Ferran ARCHILÉS: “¿Atada y bien atada? La cuestión nacional y las culturas políticas españolas (197-1978)”, en Aurora BOSCH e Ismael SAZ (eds.): *Izquierdas y derechas antes el espejo. Culturas políticas en conflicto*, València, Tirant Humanidades, 2016, pp. 141-173.

Ferran ARCHILÉS: “75, modelo para (des)armar. Ideas de nación y modelos de Estado antes y después del 20-N”, en Ferran ARCHILÉS y Julián SANZ (eds.): *Cuarenta años y un día. Antes y después del 20-N*, València, PUV, 2017.

Claude ARLANC (*et alii*): *Regionalismo y Capitalismo*, Madrid, Akal, 1978.

Lluís ARMET (*et alii*): *Federalismo y Estado de las autonomías*, Barcelona, Planeta, 1988.

Rafa ARNAL: “Uns països sense política”, en Toni MOLLÀ (*et alii*): *Nosaltres exvalencians*, Barcelona, La esfera de los libros, 2005, pp. 138-167.

Xabier ARZALLUZ: *Así fue*, Madrid, Foca, 2005.

Francisco ASENSIO RUBIO: “El PSOE ante el hecho regional y autonómico”, *Universidad abierta: revista de estudios superiores a distancia*, 20 (1998), pp. 3-129.

Emilio ATTARD: *Vida y muerte de UCD*, Planeta, Barcelona, 1983.

Baltasar AYMERICH: “La transición al Federalismo” en Equipo Jaime Vera: *La alternativa socialista del PSOE. (Algunas contribuciones)*, Madrid, Cuadernos para el diálogo, 1977, pp. 41-68.

Joaquín AZAGRA y Joan ROMERO: *País complex: canvi social i polítiques públiques en la societat valenciana (1977-2006)*, Valencia, PUV, 2007.

Manuel AZCÁRATE: *La izquierda europea*, Madrid, Ediciones El País, 1986.

Sebastian BALFOUR y Alejandro QUIROGA: *España reinventada*, Ediciones península, Barcelona, 2007.

Miquel BARCELÓ: “Una nota sobre la cuestión nacional «española»”, en Miquel BARCELÓ: *Comunistas y/o nacionalistas*, Barcelona, Anagrama, 1977, pp. 155-166.

Fernando BARCIELA: *La otra historia del PSOE*, Madrid, Emiliano Escolar, 1981.

Enrique BARÓN: *FPS. Federación de Partidos Socialistas*, Barcelona, Avance, 1976.

Xacobe BASTIDA: “El nacionalismo constitucional español”, en Carlos FORCADELL, Pilar SALOMÓN e Ismael SAZ (eds.): *Discursos de España en el s. XX*, València, PUV, 2009, pp.255-281.

Xacobe BASTIDA: *La nación española y el nacionalismo constitucional*, Barcelona, Ariel, 1998.

Txiki BENEGAS: *Euskadi: sin la paz nada es posible. Conversaciones con Pedro Altaras*, Barcelona, Argos Vergara, 1984.

Stefan BERGER y Angel SMITH (eds.): *Nationalism, Labour and ethnicity 1870-1939*, Manchester, Manchester University Press, 1999.

Michael BILLIG: *Nacionalismo Banal*, Madrid, Capitán Swing, 2014

Roberto L. BLANCO: *Nacionalidades históricas y regiones sin Historia*, Madrid Alianza Editorial, 2005.

Francisco BOBILLO: *PSP. Partido Socialista Popular*, Barcelona, Avance, 1976.

Yvon BOURDET: “Proletariado universal y culturas nacionales”, en Miquel BARCELÓ: *Comunistas y/o nacionalistas*, Barcelona, Anagrama, 1977, pp. 117-153.

Francisco BUSTELO, Gregorio PECES-BARBA, Ciriaco DE VICENTE y Virgilio ZAPATERO: *PSOE. Partido Socialista Obrero Español*, Barcelona, Avance, 1976.

Craig CALHOUN: *Nacionalisme*, Valencia, Afers, 2008.

Leopoldo CALVO SOTELO: *Memoria viva de la transición*, Barcelona, Plaza & Janés-Cambio 16, 1990.

Miquel CAMINAL: “L’Estat autonòmic espanyol: entre la resistència nacionalista y l’horitzó federal” en Miquel CAMINAL y Ferran REQUEJO: *Federalisme i plurinacionalitat. Teoria i anàlisi de casos*, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Institut d’Estudis Autonòmics, 2009.

Salvador CANALS (et. al): *Atlas electoral de Catalunya: 1976/1980*, Barcelona, Fundació Jaume Bofill, 1981.

Judith CARBAJO: *El Partido Socialista Galego (PSG) y el discurso de los derechos del franquismo a la transición democrática*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2016.

Diego CARO CANCELA: La reconstrucción del PSOE en la Andalucía occidental: entre la memoria histórica y la renovación (1975-1982), en *Historia del presente*, 26 (2015), pp11-26.

Diego CARO CANCELA: *Cien años de socialismo en Andalucía (1885-1985)*, Cádiz, Quorum, 2013.

Hélène CARRÈRE: “Comunisme i nacionalisme”, *Quaderns d’alliberament*, 1 (1977), pp. 25-65.

Anselmo CARRETERO: *Las nacionalidades españolas*, San Sebastián, Hyspamérica Ediciones, 1977.

Anselmo CARRETERO: “Socialismo y federalismo en España”, en Lluís ARMET (et alii): *Federalismo y Estado de las autonomías*, Barcelona, Planeta, 1988, pp. 51-73.

Santiago CARRILLO: *Hacia el post-franquismo*, París, 1974.

Santiago CARRILLO y Dolores IBARRURI: *Hacia la libertad. Octavo Congreso del Partido Comunista de España*, París, Editions Sociales, 1972.

Santiago CARRILLO y Simón SÁNCHEZ MONTERO: *PCE*, Bilbao, Albia, 1977.

José Manuel CASTELLS: “El proceso estatutario vasco: de Estalla a Gernika”, en Mercedes ARBAIZA (ed.): *La cuestión vasca. Una mirada desde la historia*, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2000, pp. 120-138.

Antoni CASTELLS: “Cataluña y el Estado español en la perspectiva del Estado autonómico”, en Lluís ARMET (et alii): *Federalismo y Estado de las autonomías*, Barcelona, Planeta, 1988, pp. 167-183.

Carles CASTRO: *Relato electoral de España (1977-2007). Las claves de la alternativa en el poder durante tres décadas de monarquía parlamentaria*, Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2008.

Juan Luis CEBRIÁN: *La España que bosteza. Apuntes para una historia crítica de la Transición*, Madrid, Taurus, 1980.

Véase Eduardo CHAMORRO: *Felipe González. Un hombre a la espera*, Barcelona, Planeta, 1980.

Manuel CLAVERO: *Forjar Andalucía*, ARGANTONIO. Ediciones Andaluzas, 1980.

Manuel CLAVERO: *España, desde el centralismo a las autonomías*, Barcelona, Planeta, 1983.

Bartolomé CLAVERO: “Presencia política de la historia: Nacionalidades y Autonomías en la Constitución”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 36 (1980), pp. 37-52.

Gabriel COLOMÉ: *El Partit dels socialistes de Catalunya. Estructura, funcionament i electorat (1978-1984)*, Barcelona, Edicions 62, 1989.

Gabriel COLOMÉ: “El Partit dels Socialistes de Catalunya”, *Papers*, 33 (1990), pp. 75-102.

Gabriel COLOMÉ: “El Partit del socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)”, en *L’Avenç*, 228 (1998), pp. 26-30.

Josep Maria COLOMER: *Espanyolisme i catalanisme: la idea de nació en el pensament polític català (1939-1979)*, Barcelona, L’Avenç, 1984.

Joan COMORERA: *Socialisme i qüestió nacional*, Barcelona, Undarius, 1977.

Enric COMPANY y Francesc ARROYO: *Historia del socialismo español*, vol. 5, Barcelona, Conjunto Editorial, 1989.

Enric COMPANY: “Vints anys i quatre crisis, en *L’Avenç*, 228 (1998), pp. 38-44.

Comunitat Valenciana. Corts Valencianes: *Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana: procés d'elaboració i tramitació parlamentària*, Valencia, Corts Valencianes, 1992.

Javier CORCUERA: “Los derechos históricos ¿Un instrumento para la desarticulación de la nación española?, en Fernando MOLINA y José Antonio PÉREZ (eds.): *El peso de la identidad. Mitos y ritos de la historia vasca*, Madrid, Marcial Pons, 2015, pp. 159-180.

Javier CORCUERA: “El momento constituyente y la elaboración del Estatuto de Guernica (1975-1979)”, en Luis CASTELLS y Arturo CAJAL (eds.): *La autonomía vasca en la España contemporánea (1808-2008)*, pp. 321-343.

Juan COTARELO: “Valores y principios de la Constitución de 1978”, en Ramón COTARELO (coord.): *Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986)*, Madrid, CIS, 1992, pp. 163-197.

Rafael CRUZ: *En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936*, Madrid, Siglo XXI, 2006.

Xavier CUADRAT: “El PSOE i la qüestió nacional catalana (fins l’any 1923) (I)”, *L’Avenç* 5 (1977), pp. 58-66.

Xavier CUADRAT: “El PSOE i la qüestió nacional catalana (fins l’any 1923) (II)”, *L’Avenç* 6 (1977), pp. 56-63.

Alfons CUCÓ (et. al.): *Partit Socialista del País Valencià*, València, Eliseu Climent, 1977.

Alfons CUCÓ: *Roig i blau. La transició democràtica valenciana*, Valencia, Tàndem Edicions, 2002.

Joan B. CULLA: “L’Evolució ideològica dels partits”, en Lluís RECOLONS, Francesc CABANA, Eugènia SALVADOR y Salvador CARDÚS: *Catalunya 77/88*, Barcelona, Publicacions de la Fundació Jaume Bofill-La Magrana, 1989, pp. 243-258.

Horace B. DAVIS: *Nacionalismo y socialismo*, Barcelona, Ediciones Península, 1972.

Andrés DE BLAS: «El problema nacional-regional español en los programas del PSOE y PCE», *Revista de Estudios Políticos*, 4 (1978), pp.155-170.

Andrés DE BLAS: “El problema nacional-regional español en la transición”, en José Félix TEZANOS, Ramón COTARELO y Andrés DE BLAS (eds.): *La Transición democrática española*, Madrid, Sistema, 1989, pp.587-611.

Andrés DE BLAS: *Tradición republicana y nacionalismo español (1876/1930)*, Tecnos, Madrid, 1991.

Andrés DE BLAS: “El partido socialista y la cuestión nacional”, *Cuadernos republicanos*, 61 (2006), pp.165-168.

Andrés DE BLAS: “Cuestión nacional, transición política y Estado de las Autonomías, en Antonio MORALES, Juan Pablo FUSI y Andrés DE BLAS (dirs.): *Historia de la nación y del nacionalismo*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013, pp. 934-947.

Juan DE DIOS (ed.): *Crónica de un sueño: 1973-1983, memoria de la transición democrática*, Málaga, C&T, 2005.

Jorge DE ESTEBAN y Luis LÓPEZ GUERRA: *Los partidos políticos en la España actual*, Barcelona, Planeta, 1982.

Jorge DE HOYOS: *La utopía del regreso. Proyectos de Estado y sueños de nación en el exilio republicano en México*, México-Santander, Colegio de México-Universidad de Cantabria, 2012.



Juan José DE LA FUENTE: *La "invención" del socialismo. Radicalismo y renovación en el PSOE durante la dictadura y la transición a la democracia (1956-1982)*, Gijón, Trea, 2017.

José Luis DE LA GRANJA, Justo BERAMENDI y Pere ANGUERA: *La España de los nacionalismos y las autonomías*, Madrid, Síntesis, 2001.

Amando DE MIGUEL: “Los intelectuales castellanos y la cuestión catalana”, *Papers: Revista de Sociología*, 12 (1979), pp. 115-138.

Borja DE RIQUER: “La configuración del sistema autonómico. El caso de Catalunya”, en Javier TUSELL y Álvaro SOTO (eds.): *Historia de la Transición (1975-1986)*, Madrid, Alianza Editorial, 1996, pp. 465-492.

Jorge DEL PALACIO: “¿Nación o nación de naciones? El PSOE y la cuestión nacional, 1975-2011”, en *Cuadernos de pensamiento político FAES*, 35 (2012), pp. 39-54.

Mario Pedro DÍAZ: *Análisis del discurso político: una aplicación metodológica*, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1989.

Andrew DOWLING: *La reconstrucció nacional de Catalunya, 1939-2012*, Barcelona, Psado & Presente, 2013.

Ángel DUARTE: “España desde Cataluña. Cepas de una apreciación de largo alcance”, en Antonio MORALES, Juan Pablo FUSI y Andrés DE BLAS (dirs.): *Historia de la nación y del nacionalismo*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013, pp. 951-972.

Tim EDENSOR: “Reconsiderant les temporalitats nacionals”, en Ferran ARCHILÉS (ed.): *La persistència de la nació*, Catarroja, Afers, 2015.

Thomas ERIKSEN: “Formal and Informal Nationalism”, *Ethnic and Racial Studies*, 16, 1 (1993), pp. 1-25.

Tasio ERKIZIA: “El PSOE ante el problema nacional vasco”, en Tasio ERKIZIA, Martín GARITANO, Esteban BAIGORRI (et. al): *Euskadi, la renuncia del PSOE*, Bilbao, Txalaparta, 1988.

Amadeu FABREGAT: *Partits polítics al País Valencià.2*, València, Eliseu Climent, 1977.

Amadeu FABREGAT: *Converse extraparlamentàries*, València, Eliseu Climent, 1978.

Luis FAJARDO: *¿Hacia otro modelo de Estado? Los socialistas y el Estado autonómico*, Navarra, Aranzadi, 2009.

Josep Maria FELIP: “La relación política de Manuel Broseta con la Presidencia socialista del Consell del País Valencià: otoño de 1978-invierno de 1979”, en Bruno BROSETA: *Manuel Broseta Pont. Imágenes de una vida*, València, Diputación Provincial, 2003, pp. 239-244.

Miguel FERNÁNDEZ-BRASO: *Conversaciones con Alfonso Guerra*, Barcelona, Planeta, 1983.

Juan FERRANDO BADÍA: “Las Comunidades autónomas y las preautonómicas en España”, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 40 (1981), pp. 73-144.

Vicent FLOR: “El «capgirament». La irrupció del blaverisme”, *Afers*, 67, 2010, pp. 683-708.

Vicent FLOR: *Noves glòries a Espanya. Anticatalanisme i identitat valenciana*, Catarroja, Afers, 2011.

Fernando FLORES: *Constitución Española de 1978*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1999, p. 59.

Carlos FORCADELL: “Los socialistas y la nación”, en Carlos FORCADELL, Pilar SALOMÓN e Ismael SAZ (eds.): *Discursos de España en el s. XX*, Universidad de Valencia, Valencia, 2009, pp.15-34.

Carlos FUERTES: “La nación vivida. Balance y propuestas para una historia social de la identidad española bajo el Franquismo”, en Ismael SAZ y Ferran ARCHILÉS (eds.): *La nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea*, Valencia, PUV, 2011, pp. 279-300.

Juan Pablo FUSI: *El País Vasco. Pluralismo y nacionalidad*, Madrid, Alianza Editorial, 1984.

Juan Pablo FUSI: “El desarrollo autonómico”, en Javier TUSELL y Álvaro SOTO (eds.): *Historia de la Transición (1975-1986)*, Madrid, Alianza Editorial, 1996, pp. 444-464.

Juan Pablo FUSI: “La cuestión vasca en el siglo XX”, en Mercedes ARBAIZA (ed.): *La cuestión vasca. Una mirada desde la historia*, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2000, pp. 107-117.

Joan FUSTER SOBREPÈRE: “El 15-J i els socialistes de Catalunya. Una història que cal explicar”, en Joan FUSTER SOBREPÈRE (coord.): *Els socialistes de Catalunya i les eleccions del 15/juny/1977*, Barcelona, Fundació Rafael Campalans, 2007, pp. 13-21.

Soledad GALLEGU-DÍAZ y Bonifacio DE LA CUADRA: *Crónica secreta de la Constitución*, Madrid, Tecnos, 1989.

Sergio Gálvez Biesca; “Del socialismo a la modernización: los fundamentos de la «misión histórica» del PSOE en la Transición”, *Historia del Presente*, 8 (2006), pp. 199-218.

Carlos GARAIKOTXEA: *Euskadi: la transición inacabada*, Barcelona, Planeta, 2002.

Marta GARCÍA CARRIÓN: “Cultura nacional y nacionalismo español”, en Carlos FORCADELL y Manuel SUÁREZ CORTINA: *La Restauración y la República: 1874-1936*, vol. III, pp. 169-200.

Vicente GARRIDO: “Consideraciones jurídico-políticas del proceso autonómico valenciano”, en Juan FERRANDO BADÍA: *El proceso autonómico valenciano*, València, Consell Valencià de Cultura, 1993, pp. 69-227.

Patricia GASCÓ: “Els discursos identitaris a la UCD-València (1977-1982)”, *Afers*, 67, 2010, pp. 641-663.

Ernest GELLNER: *Nacionalisme, Cararroja, València*, 1998.

Andrea GENIOLA: “El hilo enredado de las nacionalidades. Las Españas de Anselmo Carretero entre el exilio y la Transición”, en Ángeles BARRIO (coord.): *Nuevos horizontes del Pasado*, Santander, Universidad de Cantabria, 2011.

Emilio GENTILE: *La Grande Italia. Il mito della nazione nel XX secolo*, Roma-Bari, Laterza, 2009,

Richard GILLESPIE: *Historia del Partido Socialista Obrero Español*, Madrid, Alianza Universal, 1991.

Miguel Ángel GIMÉNEZ: *Un Parlamento en transición. Las Cortes Constituyentes (1977-1979)*, Ediciones UAM, 2014.

Luis GÓMEZ LLORENTE: *Aproximación a la historia del socialismo español*, Madrid, Cuadernos para el diálogo, 1976, pp. 346 y ss.

José Antonio GONZÁLEZ CASANOVA: *¿Qué son los Estatutos de Autonomía?*, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1977.

José Antonio GONZÁLEZ CASANOVA: *Federalismo y autonomía. Cataluña y el Estado español (1868-1938)*, Barcelona, Curial, 1979.

José Antonio GONZÁLEZ CASANOVA: “El Estado de las Comunidades Autónomas”, *Sistema: Revista de ciencias sociales*, 38-39 (1980), pp. 219-238.

José Antonio GONZÁLEZ CASANOVA: *El cambio inacabable (1975-1985)*, Barcelona, Anthropos, 1986.

José Antonio GONZÁLEZ CASANOVA: “Federalismo”, en Jordi AMAT (ed.): *Els “Coloquios Cataluña-Castilla” (1964-1971). Debat sobre el model territorial de l’Espanya democràtica*, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2010, pp. 69-89.

José Antonio GONZÁLEZ CASANOVA: *Memoria de un socialista indignado*, Barcelona, RBA, 2015.

Mariano GONZÁLEZ CLAVERO: *El proceso autonómico de Castilla y León*, 2 vol., Valladolid, Fundación Villalar, 2004.

Felipe GONZÁLEZ: “Línea política del PSOE”, en Felipe GONZÁLEZ (*et alii*): *Socialismo es Libertad. Escuela de Verano del PSOE*, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1976, pp. 21-58.

Felipe GONZÁLEZ y Alfonso GUERRA: *Partido Socialista Obrero Español*, Bilbao, Albia, 1977.

Felipe GONZÁLEZ y Alfonso GUERRA: *Socialismo es Libertad y Notas para una biografía*, Barcelona, Galba Edicions, 1978.

Felipe GONZÁLEZ: *España y su futuro*, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1978.

Felipe GONZÁLEZ: *Un estilo ético. Conversaciones con Víctor Márquez Reviriego*, Barcelona, Argos Vergara, 1982.

Emilio GRANDÍO: “El lustro que marcó el camino: el PSOE en Galicia (1974-1978)”, *Historia del Presente*, 26 (2015), pp. 59-76.

Alfonso GUERRA: *XXVII Congreso PSOE*, Barcelona, Avance, 1977.

Alfonso GUERRA: “La Transición democrática en España”, en *Sistema*, 68-69 (1985), pp. 5-18.

Alfonso GUERRA: *Cuando el tiempo nos alcanza (1940-1982)*, Madrid, Espasa, 2004.

Daniel GUERRA SESMA: *Socialismo español y federalismo (1873-1976)*, Oviedo, Fundación José Barreiro-KRK, 2013.

Jürgen HABERMAS: *Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría de discurso*, Madrid, Trotta, 1998.

George H. HAUPT, Michael LOWY y Claudie WEILL: *Los marxistas y la cuestión nacional: la historia del problema y el problema de la historia*, Barcelona, Fontamara, 1982.

Miguel HERRERO DE MIÑÓN: “La gestación del sistema autonómico español: claves del sistema constituyente”, *Revista Vasca de Administración Pública*, 36 (II) (1993), pp. 29-43.

Miguel HERRERO DE MINÓN: *Memorias de estío*, Madrid, Temas de hoy, 1993.

Eric HOBSEBAWM: “Traditions massificadores: Europa 1780-1914”, en Eric HOBSEBAWM y Terence RANGER (eds.): *L’invent de la tradició*, Vic, Eumo, 1988, pp. 247-288.

Eric HOBSEBAWM: “Working-class internationalism”, en Frits VAN HOLTHOON y Marcel VAN DER LINDEN (eds.): *Internationalism in the labour movement 1830-1940*, Leiden, Bill Archive, 1988, pp. 3-16.

Eric HOBSEBAWM: *Naciones y nacionalismo desde 1870*, Crítica, Barcelona, 2004.

Dolores IBARRURI: *España, Estado Multinacional*, París, Editions Sociales, 1971.

Dolores IBARRURI y Santiago CARRILLO (et. al.): *La propuesta comunista*, Laia, Barcelona, 1977.

Antonio M. JAIME: *Elecciones y Poder Político en Andalucía, 1982-2004*, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2005

Santos JULIÁ: *Los socialistas en la política española, 1879-1982*, Madrid, Taurus, 1996.

Santos JULIÁ: “Cosas que de la transición se cuentan”, *Ayer*, 79 (2010), pp. 297-319.

Santos JULIÁ: “Nación, nacionalidades y regiones en la transición política a la democracia”, en Javier MORENO LUZÓN (ed.): *Izquierdas y nacionalismos en la España contemporánea*, Madrid, Pablo Iglesias, 2011, pp. 257-283.

Santos JULIÁ: “Nación, nacionalidades y regiones en la transición política a la democracia”, en Antonio MORALES, Juan Pablo FUSI y Andrés DE BLAS (dirs.): *Historia de la nación y del nacionalismo*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013, pp. 886-902.

Juan Antonio LACOMBA: “La realidad autonómica andaluza. Dinámica política en la Andalucía constitucional y autonómica (1978-2004)”, en *Anales de Historia Contemporánea*, 20 (2004), pp. 297-312.

Consuelo LAIZ: *La lucha final. Los partidos de la izquierda radical durante la transición española*, Madrid, Los libros de la Catarata, 1995.

Eider LANDABEREA: *Los “nosotros” en la Transición. Memoria e identidad en las cuatro principales culturas políticas del País Vasco (1975-1980)*, Madrid, Tecnos, 2016.

Marc LAZAR: *Le communisme, une passion française*, París, Perrin, 2005.

Rafael LEONISIO: “La autonomía como proyecto. Relación Euskadi-España en los congresos del Partido Socialista de Euskadi (1977-2009), en *Sancho el sabio: Revista de cultura e investigación vasca*, 36 (2013), pp. 141-168.

Enrique LINDE y Miguel HERRERO: “Comentario a la Ley Orgánica de Modalidades de Referéndum”, en *Revista del Departamento de Derecho Político*, 6 (Primavera 1980), pp. 83-105.

Enrique LINDE y Miguel HERRERO: “El Referéndum en la Constitución española de 1978”, en *Boletín informativo del Departamento de Derecho Político*, 3 (1979), pp.17-48.

Guillem LLOP y Joana TORMO: *Quan ens dèiem País. La preautonomía valenciana*, Barcelona, Editorial UOC, 2013.

Lourdes LÓPEZ: “Las elecciones de la transición”, en Ramón COTARELO (coord.): *Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986)*, Madrid, CIS, 1992, pp. 77-104.

Victorino LÓPEZ: *La cuestión territorial en la historia del socialismo español: debate teórico y estrategias políticas (1879-2011)*, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2011.

José Luis LÓPEZ ARANGUREN: “Naciones, Estados, nacionalismos, internacionalidad”, *Revista de Occidente*, 122-123 (1991), pp. 15-24.

Raúl LÓPEZ, María LOSADA y Carlos CARNICERO: *Rojo esperanza. Los socialistas vascos contra el franquismo*, Vitoria, Ikusager Ediciones, 2013.

José F. LORCA: *El proceso autonómico andaluz*, Madrid, Mezquita, 1983.

Jaume LORÉS: “Federalismo y unitarismo”, en Lluís ARMET (et alii): *Federalismo y Estado de las autonomías*, Barcelona, Planeta, 1988, pp. 105-110.

Jordi MARAGALL: “Aspectos emotivos del federalismo”, en Lluís ARMET (et alii): *Federalismo y Estado de las autonomías*, Barcelona, Planeta, 1988, pp. 73-80.

José María MARÍN: “La oposición del PSOE al tercer gobierno Suárez”, en Carme MOLINERO y Pere YSÀS: *Las izquierdas en tiempos de Transición*, València, PUV, 2016, pp. 87-114.

José Vicente MARQUÉS (et alii): *Clase obrera y cuestión nacional*, Madrid, Zero, 1978.

Joan MARTÍ: “Valencianistes socialistes i socialistes valencianistes. Els camins del PSPV”, *Afers*, 67, 2010, pp. 595-618.

Joan MARTÍ: *Socialistes d'un país imaginat. Una història del Partit Socialista del País Valencià (1974-1978)*, València, Institució Alfons el Magnànim, 2017.

Aurelio MARTÍ: *Discursos de nació i identitat nacional espanyola en la cultura política socialista: el Partido Socialista Obrero Español a la II República*, tesis doctoral, Universitat de València, 2015.

Vincent MARTIGNY: *Dire la France. Culture(s) et identités nationales 1981-1995*, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2016.

José Luis MARTÍN RAMOS: *Els orígens del Partit Socialista Unificat de Catalunya*, Barcelona, Ariel, 1977.

José Luis MARTÍN RAMOS: *Historia del socialismo español*, vol. 5, Barcelona, Conjunto Editorial, 1989.

José Luis MARTÍN RAMOS: “La dinamización del socialismo catalán” en Víctor ALBA (et. al.): *Andreu Nin i el socialismo*, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1998, pp.11-22.

José Luis MARTÍN RAMOS: *Rojos contra Franco. Historia del PSUC, 1939-1947*, Barcelona, Edhasa, 2002.



José Luis MARTÍN RAMOS: “Marxisme i qüestió nacional a Catalunya, de les formulacions doctrinals fins a la Guerra Civil”, en Joaquim ALBAREDA (et. al.): *Catalunya en la configuració política d'Espanya*, Reus, Centre de Lectura de Reus, 2005, pp. 189-202.

José Luis MARTÍN RAMOS: “La izquierda obrera y la cuestión nacional durante la dictadura”, en Ismael SAZ y Ferran ARCHILÉS (eds.): *La nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea*, Valencia, PUV, 2011, pp. 301-321.

José Luis MARTÍN RAMOS: “Los primeros pasos del Partit del Socialistes de Catalunya. Del Partit Socialista de Catalunya al PSC (PSC-PSOE)”, en Abdón MATEOS (et. al.): *Transición y democracia. Los socialistas en España y Portugal*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2015, pp. 47-62.

Rodolfo MARTÍN VILLA: *Al servicio del Estado*, Barcelona, Planeta, 1984.

José N. MARTÍN: *El compromiso constante. Apuntes para una biografía*, Las Palmas de Gran Canaria, Partido Socialista Canario-PSOE, 1987.

Montse MATEO: *La idea de España a finales del siglo XX: El nacionalismo español desde la transición*, Madrid, UNED, 2003, en <http://www.vientosur.info/documentos/cuestionnacional-montsemateo.pdf>.

Abdón MATEOS: “La Transición del PSOE durante los años setenta”, en Rafael QUIROSA-CHEYROUZE (coord.): *Historia de la Transición en España. Los inicios del proceso democratizador*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 285-299.

Abdón MATEOS y Giulia QUAGGIO: “Nación y Estado en el socialismo español hasta 1992”, en J. Daniel MOLINA: *La España del pueblo. La idea de España en el PSOE. Desde la Guerra Civil hasta 1992*, Madrid, Sílex, 2015, pp. 15-54.

Abdón MATEOS: *Historia y memoria democrática*, Madrid, Eneida, 2007.

Mónica MÉNDEZ: *La estrategia organizativa del Partido Socialista Obrero Español (1975-1996)*, Madrid, CIS-Siglo XXI, 2000.

Andrea MICCICHÈ: *Euskadi socialista. El PSE-PSOE y la Transición en el País Vasco (1976-1980)*, Madrid, Pablo Iglesias, 2009.

Fernando MILLÁN: *Del PSOE al PSPV. Anatomía de una escisión*, Valencia, Víctor Orensa, 1991.

Jaime MILLÁS: *Crónicas de la transición valenciana*, València, Institució Alfons el Magnànim, 2015.

J. Daniel MOLINA: *La España del pueblo. La idea de España en el PSOE. Desde la Guerra Civil hasta 1992*, Madrid, Sílex, 2015.

Carme MOLINERO: “La oposición al franquismo y la cuestión nacional”, en JAVIER MORENO LUZÓN (ed.): *Izquierdas y nacionalismos en la España contemporánea*, Madrid, Pablo Iglesias, 2011, pp. 235-256.

Carme MOLINERO y Pere Ysàs: *La cuestión catalana. Cataluña en la transición española*, Barcelona, Crítica, 2014.

Carme MOLINERO y Pere YSÀS: “El PCE y la democracia”, en Carme MOLINERO y Pere YSÀS: *Las izquierdas en tiempos de Transición*, València, PUV, 2016, pp. 115-137.

Manuel MONTERO: “La transición y la autonomía vasca”, en Javier UGARTE: *La transición en el País Vasco y España*, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1998, pp. 93-120.

Gregorio MORÁN: *Miseria y grandeza del PCE 1939-85*, Barcelona, Planeta, 1986.

Javier MORENO LUZÓN y Xosé Manoel NÚÑEZ SEIXAS (eds.): *Ser españoles. Imaginarios nacionalistas en el siglo XX*, Barcelona, RBA, 2013.

Luis MORENO: *La federalización de España*, Madrid, Siglo XXI, 1997.

George L. MOSSE: *La nacionalización de las masas: simbolismo político y movimientos de masas en Alemania desde las Guerras Napoleónicas al Tercer Reich*, Madrid, Marcial Pons, 2005.

Santiago MUÑOZ: *Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo*, Barcelona, Crítica, 2012.

Diego MURO: “Una larga transición: nacionalismo vasco y cambio político en Euskadi”, en Manuel ORTIZ (coord.): *Culturas políticas del nacionalismo español. Del franquismo a la transición*, Madrid, Catarata, 2009, pp. 133-152.

José NEVES: *Comunismo e nacionalismo em Portugal. Política, cultura e história no século XX*, Lisboa, Tinta-da-China, 2010.

Fernando NISTAL: *El papel del Partido Comunista de España en la Transición*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2015.

Xosé Manoel NÚÑEZ SEIXAS: “Proyectos federales de los nacionalismo subestatales en España, o el discreto encanto de la asimetría” en Manuel CHUST: *Federalismo y cuestión federal en España*, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2004, pp. 200-217.

Xosé Manoel NÚÑEZ SEIXAS: *¡Fuera el invasor! Nacionalismo y movilización en la Guerra Civil española (1936-39)*, Madrid, Marcial Pons, 2006.

Xosé Manoel NÚÑEZ SEIXAS: *Patriotas y demócratas. El discurso nacionalista español después de Franco*, Madrid, Los libros de la catarata, 2010.

Xosé Manoel NÚÑEZ SEIXAS: “Las izquierdas y la nación durante la guerra civil española (1936-1939)”, en Javier MORENO LUZÓN (ed.): *Izquierdas y nacionalismos en la España contemporánea*, Madrid, Pablo Iglesias, 2011, pp.203-233.

Raimon OBIOLS: “El federalismo, una propuesta hacia el futuro”, en Lluís ARMET (et alii): *Federalismo y Estado de las autonomías*, Barcelona, Planeta, 1988, pp. 191-200.

Fernando OLLERO: “El Congreso Extraordinario del PSOE (septiembre de 1979)”, en *Revista de Derecho Político*, 6 (1980), pp. 205-212.

Francesc PALLARÈS: “Anàlisi electoral”, en Lluís RECOLONS, Francesc CABANA, Eugènia SALVADOR y Salvador CARDÚS: *Catalunya 77/88*, Barcelona, Publicacions de la Fundació Jaume Bofill-La Magrana, 1989, pp. 229-242.

Javier PANIAGUA: *El socialismo. De la socialdemocracia al PSOE y viceversa*, Madrid, Cátedra, 2016.

Jaime PASTOR: “La izquierda de ámbito estatal. Entre el «patriotismo constitucional» español y el federalismo plurinacional”, en Carlos TAIBO (dir.): *Nacionalismo español. Esencias, memoria e instituciones*, Madrid, Los libros de la Catarata, 2007, pp. 193-212.

Jaime PASTOR: *Los nacionalismos, el Estado español y la izquierda*, Madrid, La oveja negra, 2012.

Patrick PASTURE y Johan VERBERCKMOES: “Working-Class Internationalism and the Appeal of National Identity: Historical Dilemmas and Current Debates in Western Europe”, en Patrick PASTURE y Johan VERBERCKMOES (eds): *Working-Class Internationalism and the Appeal of National Identity: Historical Debates and Current Perspectives*, Oxford, Berg, 1998.

PCE: *Manifiesto-Programa del Partido Comunista de España. II Conferencia Nacional del Partido Comunista de España*, París, Ebro, 1975.

PCE: *Partido Comunista de España. PCE*, Madrid, 1976.

PCE: *9º Congreso del PCE, del 19 al 23 de abril de 1978. Actas, debates y resoluciones*, Madrid, PCE, 1978.

Gregorio PECES-BARBA: “Los socialistas y la Constitución”, en Gregorio PECES-BARBA, Jordi SOLÉ TURA (et. al.): *La izquierda y la Constitución*, Barcelona, Taula de Canvi, 1978, pp. 5-18.

Gregorio PECES-BARBA: *La Constitución española de 1978. Un estudio de derecho y política*, Valencia, Fernando Torres, 1981.

Gregorio PECES-BARBA: *La elaboración de la Constitución de 1978*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988.

Gregorio PECES-BARBA: “La Constitución española de 1978: balance de sus 25 años”, *Revista electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de la Rioja-REDUR*, 2 (2004), pp. 1-12.

José Antonio PÉREZ: “La izquierda vasca en la complicada transición hacia la democracia”, en Carme MOLINERO y Pere YSÀS: *Las izquierdas en tiempos de Transición*, València, PUV, 2016, pp. 195-219.

Ricard PÉREZ CASADO: *Viaje de ida. Memorias políticas, 1977-2007*, Valencia, PUV, 2013.

José Antonio PÉREZ y Raúl LÓPEZ: «La memoria histórica del franquismo y la transición. Un eterno presente, en Fernando MOLINA y José Antonio PÉREZ (eds.): *El peso de la identidad. Mitos y ritos de la historia vasca*, Madrid, Marcial Pons, 2015, pp. 225-263.

Javier PÉREZ ROYO: “De la autonomía como excepción a la autonomía como norma: el Estatuto de Autonomía para Andalucía”, en Javier TORRES (*et alii*): *Veinte años después. Los Redactores del Estatuto reflexionan sobre la autonomía andaluza*, Sevilla, Parlamento de Andalucía. Servicio del Diario de Sesiones y Publicaciones no Periódicas, 2001, pp. 91-120.

Miguel Ángel PINO MENCHÉN: “Andalucía tuvo un sueño” en Javier TORRES (*et alii*): *Veinte años después. Los Redactores del Estatuto reflexionan sobre la autonomía andaluza*, Sevilla, Parlamento de Andalucía. Servicio del Diario de Sesiones y Publicaciones no Periódicas, 2001, pp. 121-136.

José Antonio PIQUERAS: *El federalismo. La libertad protegida. La convivencia pactada*, Cátedra, 2014.

Charles POWELL: *España en democracia, 1975-2000*, Barcelona, Plaza & Janés, 2001.

PSE-PSOE: *Programa de gobierno*, Vitoria, PSE-PSOE, 1980.

PSOE: *Este viejo y nuevo Partido*, Madrid, Pablo Iglesias, 1979.

PSP: *Por un socialismo responsable (El Partido Socialista Popular ante el futuro español)*, Madrid, Túcar, 1977.

Josep PUIGSECH: *Nosaltres, els comunistas catalans*, Vic, Eumo Editorial, 1999.

Alejandro QUIROGA: “Amistades peligrosas: la izquierda y los nacionalismos catalanes y vascos (1975-2008)”, *Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales*, 20 (2008), pp. 97-127.

Alejandro QUIROGA: “Traiciones, solidaridades y pactos. La izquierda y la idea de España durante la Transición”, en Manuel ORTIZ HERAS (coord.): *Culturas políticas del nacionalismo español: del franquismo a la transición*, Madrid, Los libros de la Catarata, 2009, pp. 73-100.

Alejandro QUIROGA: “Coyunturas críticas. La izquierda y la idea de España durante la Transición”, *Historia del presente*, 13 (2009), pp. 21-40.

Alejandro QUIROGA: “La nacionalización en España. Una propuesta teórica”, *Ayer*, 90 (2013), pp. 17-38.

Pamela RADCLIFF: “Si ocurrió en España, ¿por qué no en cualquier otra parte? Evaluación del «modelo» español de transición democrática”, *Pasajes de pensamiento contemporáneo*, 29 (2009), pp. 109-119.

Pedro J. RAMÍREZ: *Así se ganaron las elecciones*, Barcelona, Planeta, 1977.

Pedro J. RAMÍREZ: *Así se ganaron las elecciones. 1979*, Madrid, Prensa Española, 1979.

Ferran REQUEJO: *Federalisme, per a què? L'acomodació de la diversitat en democràcies plurinacionals*, Barcelona, 3 i 4, 1998.

Antonio RIVERA: «La transición en el País Vasco: un caso particular», en Javier UGARTE: *La transición en el País Vasco y España*, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1998, pp. 79-92.

Antonio RIVERA: Las limitaciones de una transición, en Mercedes ARBAIZA (ed.): *La cuestión vasca. Una mirada desde la historia*, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2000, pp. 173-184.

Antonio RIVERA: *Señas de identidad. Izquierda obrera y nación en el País Vasco, 1880-1923*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2003.

Antonio RIVERA: “El PSOE, la cuestión territorial y los nacionalistas”, en Javier MORENO LUZÓN (ed.): *Izquierdas y nacionalismos en la España contemporánea*, Madrid, Pablo Iglesias, 2011, pp. 119-140.

Miquel ROCA: *Una primera aproximación al debate constitucional*, en Gregorio PECES-BARBA, Jordi SOLÉ TURA (et. al.): *La izquierda y la Constitución*, Barcelona, Taula de Canvi, 1978, pp. 30-47.

José Manuel ROCA (ed.): *El proyecto radical. Auge y declive de la izquierda revolucionaria en España (1964-1992)*, Madrid, Los libros de la Catarata, 1993.

José RODRÍGUEZ DE LA BORBOLLA: “Estatuto de Andalucía: Reflexiones veinte años después” en Javier TORRES (et alii): *Veinte años después. Los Redactores del Estatuto reflexionan sobre la autonomía andaluza*, Sevilla, Parlamento de Andalucía. Servicio del Diario de Sesiones y Publicaciones no Periódicas, 2001, pp. 137-167.

Vega RODRÍGUEZ-FLORES: “Nació i classe. L’esquerra radical en la Transició valenciana”, *Afers*, 67, 2010, pp. 665-682.

Vega RODRÍGUEZ-FLORES: “PSOE, PCE e identidad nacional en la construcción democrática”, en Ismael SAZ y Ferran ARCHILÉS (eds.): *La nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea*, València, PUUV, 2011, pp.323-339.

Paloma ROMÁN: *El Partido Socialista Obrero Español en la transición española: organización e ideología*, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1987.

Carlos ROSADO: “La UCD y el proceso autonómico andaluz”, en Javier TORRES (et alii): *Veinte años después. Los Redactores del Estatuto reflexionan sobre la autonomía andaluza*, Sevilla, Parlamento de Andalucía. Servicio del Diario de Sesiones y Publicaciones no Periódicas, 2001, pp. 169-205.

José Antonio RUBIO: “Los nacionalismos vascos y catalanes ante la LOAPA: Ajustes y desajustes en los inicios del Estado de las Autonomías”, en *Historia Actual Online*, 5 (2004), pp. 65-80.

Fermí RUBIRALTA: *El nuevo nacionalismo radical. Los casos gallego, catalán y vasco (1959-1973)*, Donostia, Tercera Prensa, 1997.

Fermí RUBIRALTA: *Orígens i desenvolupament del PSAN (1969-1974)*, Barcelona, La Magrana, 1988.

Agustín RUIZ ROBLEDO: *La formación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en sus documentos*, Parlamento de Andalucía, 2003.

Agustín RUIZ ROBLEDO: *La Comunidad Autónoma de Andalucía*, Sevilla, Parlamento de Andalucía, 1988.

Manuel RUIZ ROMERO: *La conquista del Estatuto de Autonomía para Andalucía (1977-1982)*, Sevilla, Instituto Andaluz de Administración Pública, 2005, p. 163.

Manuel RUIZ ROMERO: “La singularidad del caso andaluz o su aportación al Estado de las Autonomías», en *Actes del Congrés la transició de la dictadura franquista a la democràcia: Barcelona, 20, 21 i 22 d'octubre de 2005*, Barcelona, UAB-Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica, 2005, pp. 185-193.

Manuel RUIZ ROMERO: “La «armonización» del Estatuto andaluz en Cortes: Entre el Proyecto de los Parlamentarios andaluces y la LOAPA”, en *Revista de las Cortes Generales*, 63, (2004), pp. 91-138.

Alberto SABIO ALUTÉN: «Las culturas políticas socialista y comunista ante la ruptura pactada: acción colectiva, consenso y desencanto en la transición española, 1975-1979», en Manuel PÉREZ LEDESMA e Ismael Saz (coords.): *Del franquismo a la democracia. 1936-2013*, vol. IV, Madrid, Marcial Pons y Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2015.

Fernando SAINZ: *Constitución española. Trabajos parlamentarios. V. II, Cortes Generales*, Madrid, 1980.

Pilar SALOMÓN: *Republicanismo e identidad nacional española: La república como ideal salvífico de la nación*, en Carlos FORCADELL, Pilar SALOMÓN e Ismael SAZ (eds.): *Discursos de España en el s. XX*, Universidad de Valencia, Valencia, 2009, pp. 35-64.



Eugènia SALVADOR: “Crònica política”, en Lluís RECOLONS, Francesc CABANA, Eugènia SALVADOR y Salvador CARDÚS: *Catalunya 77/88*, Barcelona, Publicacions de la Fundació Jaume Bofill-La Magrana, 1989, pp. 207-227.

David SÁNCHEZ CORNEJO: “De la república federal de las nacionalidades que integran el estado español a la idea de España como nación de naciones: el discurso del PSOE sobre la cuestión nacional entre el congreso de Suresnes y la Constitución de 1978”, en Carlos NAVAJAS y Diego ITURRIAGA (eds.): *Crisis, dictaduras, democracia: I Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo*, Logroño, Universidad de la Rioja, 2008, pp. 363-373.

David SÁNCHEZ CORNEJO: “La Unión de Centro Democrático y la idea de España: la problemática reelaboración de un discurso nacionalista para un contexto democrático”, *Historia del presente*, 13 (2009), pp. 7-20.

Jesús SÁNCHEZ RODRÍGUEZ: *Teoría y práctica democrática en el PCE (1956-1982)*, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 2004.

Álvaro SANTAMARINA: *Enrique Múgica. Perfil humano y político*, Madrid, Cambio 16, 1977.

José María de los SANTOS: *Andalucía en la Transición (1976-1982)*, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2002.

Benito SANZ: *Los socialistas en el País Valenciano (1939-1978)*, València, Institució Alfons el Magnànim, 1988

Benito SANZ y Josep Maria FELIP: *Política y políticos valencianos 1975-2000. Del tardofranquismo al Estatuto. 1975-1985, v.I*, València, Gules, 2002.

Benito SANZ y Josep Maria FELIP: *La construcción política de la Comunitat Valenciana*, València, Alfons el Magnànim, 2006.

Jesús SANZ: *La cara secreta de la política valenciana. De la predemocràcia al estatuto de Benicassim*, Fernando Torres-Editor, Valencia, 1982.

Ismael SAZ: “Y la sociedad marcó el camino. O sobre el triunfo de la democracia en España”, en Ismael SAZ: *Las caras del franquismo*, Granada, Comares, 2013, pp. 169-185.

Ismael SAZ: “No sólo élites. La lucha por la democracia en España”, en Ferran ARCHILÉS y Julián SANZ (eds.): *Cuarenta años y un día. Antes y después del 20-N*, València, PUV, 2017.

Modesto SEARA: *El socialismo en España*, México, Escuela Nacional de Estudios Profesionales-Universidad Nacional Autónoma de México, 1980.

Isidro SEPÚLVEDA: “La eclosión nacionalista: regionalismos, nacionalidades y autonomías”, en Javier TUSELL y Álvaro SOTO (eds.): *Historia de la Transición (1975-1986)*, Madrid, Alianza Editorial, 1996, pp. 409-443.

Carlos SERRANO y Rubén RAMOS: *El aragonesismo en la Transición. II. Regionalismo y nacionalismo en el Aragón preautonómico (1978-1983)*, Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses-Fundación Gaspar Torrente, 2003.

Goldie SHABAD: “Las elecciones de 1982 y las autonomías”, en Juan José LINZ, José R. MONTERO: *Crisis y cambio, electores y partidos en la España de los ochenta*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1986, pp. 525-585.

Donald SHARE: «Two Transitions. Democratization and the Evolution of the Spanish Socialist Left», *West European Politics*, 8 (1985).

Jaume SOBREQUÉS y Sebastià RIERA: *L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Bases documentals per a l'estudi del procés política d'elaboració de l'Estatut d'Autonomia de 1979*, 4 vol., Barcelona, Edicions 62, 1982.

Josep PUIGSECH: *Nosaltres, els comunistas catalans*, Vic, Eumo Editorial, 1999.

Angel SMITH: “Spaniards, Catalans and Basques: Labour and the challenge of nationalism in Spain”, en Stefan BERGER y Angel SMITH (eds.): *Nationalism, Labour and ethnicity 1870-1939*, Manchester, Manchester University Press, 1999, pp. 64-92.

Juan José SOLOZÁBAL: “Nación, nacionalidades y autonomías en la Constitución de 1978. Algunos problemas de la Organización territorial del Estado”, *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 10 (1980), pp. 257-281.

Juan José SOLOZÁBAL: “Las naciones de España”, en Antonio MORALES, Juan Pablo FUSI y Andrés DE BLAS (dirs.): *Historia de la nación y del nacionalismo*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013, pp. 921-933.

Jordi SOLÉ TURA: *Los comunistas y la Constitución*, Madrid, Forma ediciones, 1978.

Jordi SOLÉ TURA: “La Constitución y la lucha por el socialismo”, en Gregorio PECES-BARBA, Jordi SOLÉ TURA (et. al.): *La izquierda y la Constitución*, Barcelona, Taula de Canvi, 1978, pp. 19-29.

Jordi SOLÉ TURA: *Nacionalidades y nacionalismos en España. Autonomías, federalismo, autodeterminación*, Madrid, Alianza Editorial, 1985.

Jordi SOLÉ TURA: “Una lectura autonomista y federal del modelo de Estado constitucional, en Lluís ARMET (et alii): *Federalismo y Estado de las autonomías*, Barcelona, Planeta, 1988, pp. 121-140.

Jordi SOLÉ TURA: “Anselmo Carretero y el nuevo federalismo”, en Anselmo CARRETERO: *Los pueblos de España*, Barcelona, Editorial Hacer, 1992, pp. 7-13.

Carlota SOLÉ: *La integración socio-cultural de los inmigrantes en Cataluña*, Madrid, Fundación Juan March, 1981.

Carlota SOLÉ: *Catalunya: Societat receptora d'immigrants. Anàlisi comparativa de dues enquestes, 1978 i 1983*, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1988.

Josep Maria SOLÉ (et. al.): *La transició a Catalunya (1975-1984)*, vol. 1, Barcelona, Edicions 62, 2008.

Virginia TAMAYO: *Génesis del Estatuto de Gernika*, Bilbao, Instituto Vasco de la Administración Pública, 1991.

José Félix TEZANOS: *Sociología del socialismo español*, Madrid, Tecnos, 1983.

José Félix TEZANOS: “Continuidad y cambio en el socialismo español. El PSOE durante la transición democrática”, en *Sistema*, 68-69 (1985), pp. 19-60.

José Félix TEZANOS: “El PSOE en la democracia”, en José Félix TEZANOS (coord.): *PSOE 125: 125 años del Partido Socialista Obrero Español*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2002, pp. 126-159.

Gumersindo TRUJILLO: “El Estado y las comunidades autónomas ante la exigencia constitucional del voto igual”, *Revista Española de Derecho Constitucional*, 2 (1981), pp. 9-45.

Javier TUSELL: “El entierro del centralismo”, en Santos JULIÁ: *Memoria de la Transición*, Madrid, Taurus, 1996, p. 432.

Carlos TUYA: *Aspectos fundamentales de la revolución española. (La vía al socialismo en un país desarrollado)*, Madrid, Partido Comunista de los Trabajadores, 1978.

Josep M. VALLÉS: “La política autonómica como política de reforma institucional”, en Ramón COTARELO: *Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986)*, pp. 365-387.

Federico VÁZQUEZ: “L’Estatut de Sau”, en Josep Maria SOLÉ (et. al.): *La transició a Catalunya (1975-1984)*, vol. 1, Barcelona, Edicions 62, 2008.

Equipo Jaime Vera: *La alternativa socialista del PSOE. (Algunas contribuciones)*, Madrid, Cuadernos para el diálogo, 1977.

L. VICARIO: “La cuestión nacional en el discurso ideológico del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)”, en Alfonso PÉREZ-AGOTE (ed.): *Sociología del nacionalismo español*, Vitoria, Gobierno Vasco, 1989, pp.313-317.

José VILAS: “La organización territorial del Estado”, en Ramón COTARELO (coord.): *Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986)*, Madrid, CIS, 1992, pp. 219-239.

VV.AA.: “Las nacionalidades y regiones del Estado español”, en Felipe González (et alii): *Socialismo es Libertad. Escuela de Verano del PSOE*, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1976, pp. 239-312.

Richard WEIGHT: *Patriots: National Identity in Britain 1940-2000*, London, Macmillan, 2002.

Pere YSÀS: “El proceso hacia el Estado de las autonomías” en Javier UGARTE: *La transición en el País Vasco y España*, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1998, pp. 59-76.

Pere YSÀS: “Construcción democrática y construcción nacional en Cataluña” en Ismael SAZ y Ferran ARCHILÉS (eds.): *La nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea*, València, PUV, 2011, pp. 341-360.

Pere YSÀS: “La Transición española. Luces y sombras”, *Ayer*, 79 (2010), pp. 31-57.